



INSTITUTA
DE LA
JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS
EXMAS. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA
CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EN SUS SENTENCIAS POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR
J. J. HALL
(ABOGADO)

COMPRENDE LOS TOMOS 4, 5, 6, 7 Y 8 DE LA 2ª SERIE
DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL; 1, 2, 3 Y 4 DE LA 2ª SERIE DE LA
JURISPRUDENCIA COMERCIAL Y CRIMINAL.

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE ORDEN	30.141
UBICACIÓN	15

BUENOS AIRES

FÉLIX LAJOUANE, EDITOR

51 — PERÚ — 51



Damos á la publicidad el tercer tomo de la INSTITUTA DE LA JURISPRUDENCIA establecida por las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal, y con esto cumplimos la obligación contraída de no dejar nuestra tarea incompleta: la obra continuará publicándose á medida que se conozcan los fallos y tenemos la satisfacción que con ello llenamos una necesidad sentida en nuestro foro.

Bien cierto es que el autor poco ó nada aporta de su propia cosecha, pero también es cierto que ahorra trabajo y tiempo á los que necesitan consultar la jurisprudencia de nuestros Tribunales, lo que constituye suficiente título para la obra.

En este volumen van estudiados los tomos 4, 5, 6, 7 y 8 de la 2ª Serie de la Jurisprudencia Civil; 1, 2, 3 y 4 de la 2ª Serie de la Jurisprudencia Comercial y Criminal. En los tres tomos de la INSTITUTA publicados hasta la fecha, van comprendidos 27 tomos de los fallos.







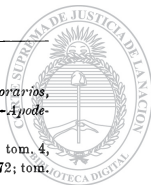
1a. Abandono—De objetos robados, contra la voluntad del reo, no implica cambiar el delito perpetrado, en tentativa del mismo—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 83, Ser. 2º.

1b. Abogado—El de un heredero, carece de acción ejecutiva contra el cesionario de los derechos de su patrocinado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 334, Ser. 2º.

Abogado—Véase: *Cesionario*, núm. 1—*Honorarios*, núm.

1a—Se trata de un robo cometido en una joyería cuyo dueño notó la ausencia de una alhaja; se llamó al vigilante y antes de que éste llegara el ladrón la devolvió. Esta devolución no puede cambiar la naturaleza del delito, pues el acto no lo ejecutaba por vía de arrepentimiento, sino que tuvo por objeto evitar que el vigilante que se mandó llamar encontrara el objeto robado en su poder. El robo ya estaba consumado desde que el delincuente se apoderó del objeto y lo ocultó con el ánimo de apropiárselo, sin que haya sido necesario que se retirase del lugar del robo.

1b—Es principio general, que los honorarios deben pagarse por quien los solicita ó por quien con ellos es beneficiado. La cuestión es saber si en el caso de una cesión de acciones hay subrogación en los derechos del deudor, es decir, si la deuda pasa á cargo del cesionario; esto solo puede decidirse en juicio ordinario. Por otra parte, el art. 65 del apéndice al Cód. de Proc., solo acuerda la acción ejecutiva á favor del abogado y contra su cliente. Para el juicio ejecutivo no hay relación de derechos entre el abogado y el cesionario del cliente; esas relaciones son para éste una *res inter alios acta*. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Abogado*, núm. 5 y nota, que con poca variación resuelve el mismo punto: tom. 2º, verb. *Honorarios*, núms. 14 y 16 con sus notas.



ABO—ACC

mero 3—*Regulación*, núm. 2—*Prescripción de honorarios*, núm. 1—*Inscripciones*, núm. 1—*Matrícula*, núm. 1—*Apoderado especial*, núm. 1.

Abogados—Inscriptos en la matrícula—Jur. Civ., tom. 4, págs. 33, 243, 466 y 489; tom. 5, págs. 136, 323 y 472; tom. 8, págs. 335, 398 y 505, Sec. 2ª.

Absolución—Véase: *Costas*, núm. 9—*Juez*, núm. 4—*Consulta*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 6, 7 y 8.

Absolvente—Véase: *Posiciones*, núm. 11.

1a. **Abuso de confianza**—Cuando concurre esta circunstancia en el delito de hurto, debe ser considerado como circunstancia agravante de éste—Jur. Crim., tom. 2, pág. 13, Ser. 2ª.

Accidente imprevisto—Véase: *Contrato*, núm. 8.

Accidentes—Véase: *Empresas de tramways*, núm. 1.

1b. **Acción**—La de mensura y deslinde, solo compete á los que tengan derechos reales sobre el bien objeto de la acción—Jur. Civ., tom. 4, pág. 566, Sec. 2ª.

2. **Acción**—Por cobro de alquileres, solo es ejecutiva mientras locatario y locador conservan su respectivo carácter; si el locador transfiere la propiedad, enerva su acción aun por los

1a—Art. 84, inc. 6, Cód. Pen. vigente.

1b—La mensura según el art. 2384 del Cód. Civ., es un acto posesorio. El art. 2749 consagra el principio establecido en el sumario, cuyo complemento es el art. 610 del Cód. de Proc. que exige la presentación de títulos auténticos que acrediten el dominio.

2—El cobro de alquileres no se encuentra comprendido entre los títulos que por sí solos traen aparejada ejecución. por el contrario el art. 466 dice que es necesario preparar la vía ejecutiva *pidiendo* que el demandado *manifieste preciamente si es locatario* y en caso afirmativo que exhiba el último recibo. De aquí resulta que la acción ejecutiva la acuerda la ley contra el que es inquilino *actual* y no contra el que lo ha sido, doctrina que está de acuerdo con el caso resuelto por esta misma Cámara, como puede verse en el tom. 5, pág. 450, Ser. 1ª; Inst., tom. 1ª, verb. *alquileres*, núm. 162 y nota.

ACO

alquileres anteriores á la transferencia—Jur. Civ., tom. 4, pág. 52, Sec. 2ª.

3. Acción—No determinando la ley, la que debe entablar el demandado por jactancia, cualquiera que sea la iniciada, satisface la disposición del Cód.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 459, Ser. 2ª.

4. Acción—El Juzgado no puede rechazar de oficio una acción en que aparecen claramente designados el demandante, el demandado y el objeto del litigio—Jur. Com., tom. 4, pág. 9, Ser. 2ª.

5. Acción—Contra un ausente que tiene apoderado, debe sustanciarse con intervención de éste—Jur. Com., tom. 1, pág. 64, Ser. 2ª.

6. Acción—La instaurada para hacer efectiva la garantía estipulada en un contrato, no basta para fundar un embargo preventivo—Jur. Com., tom. 1, pág. 576, Ser. 2ª.

7. Acción—Sobre cumplimiento de un contrato de compraventa fechado en esta capital, corresponde su conocimiento

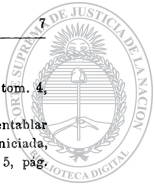
3—Sin embargo, el art. 428 del Cód. de Proc., dice que la acción á instaurarse es la *que surge de los hechos espuestos*.

4—Como igualmente su causa, arts. 71 y 75 del Código de Proc. Debe tenerse en cuenta que en materia comercial predomina la doctrina de la ley 10, tit. 17, lib. 4. R. C., la que establece que debe procederse á verdad sabida y buena fe guardada.

5—De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 15 y 77 del Cód. de Procedimientos.

6—En el caso presente no se acompañó el instrumento de la fianza y solo se propuso acreditar su existencia, circunstancia que hacía improcedente la aplicación del art. 443, inc. 2 del Cód. de Proc. Es necesario además distinguir si la fianza es simple ó solidaria, pues en el primer caso para que el embargo preventivo fuese procedente sería necesario comprobar la escusión hecha en los bienes del deudor principal.

7—Siempre que el contrato de compraventa conste de instrumento privado, pues si se tratara de una escritura pública sería juez competente el del lugar donde la cosa esté situada, porque se trataría de la entrega de un cuerpo cierto, art. 1410, Cód. Civ. Pero en el caso



ACC

to á esta jurisdicción, aun cuando el inmueble se encuentre situado fuera de ella—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 2ª.

8. Acción—Las diligencias de prueba, aun ordenadas de conformidad de partes y con consentimiento del Juzgado, no bastan para cambiar la acción deducida—Jur. Civ., tom. 8, pág. 546, Ser. 2ª.

Acción—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 1—*Comprador en remate*, núm. 2—*Mandato especial*, núm. 1—*Notificación*, núm. 1—*Venta*, núm. 3—*Sentencia*, núm. 1—*Actos jurídicos*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 5, 9 y 13—*Embargo preventivo*, núm. 8—*Información supletoria*, núms. 2 y 3—*Interdicto de retener*, núm. 4—*Titulos de propiedad*, núm. 1—*Insania*, núm. 1—*Excepción*, núm. 10—*Nulidad*, núms. 10 y 23—*Reconsideración*, núm. 1—*Simulación*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 1—*Interdicto*, núm. 1—*Hechos*, núm. 2—*Divorcio*, núms. 1, 2 y 3—*Poder*, núm. 2—*Documentos*, núm. 13—*Posecion judicial*, núm. 1—*Defecto legal*, núm. 3—*Derechos hereditarios*, núm. 2—*Juez de lo Civil*, núm. 1—*Tenencia de los hijos*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 1—*Disolución de sociedad*, núm. 2—*Revocación*, núm. 1—*Costas*, núms. 2, 4

del sumario se trata de la obligación personal de escriturar que entraña el contrato de compraventa de inmuebles cuando se celebra por escritura privada en cuyo caso es aplicable el art. 4, inc. 4º del Cód. de Proc., concordante con el art. 10º del Cód. Civil. Véase verb. *Juez competente* y su nota.

8—El cuasi-contrato de litiscontestación no solo vincula á las partes litigantes sino que obliga al Juez de la causa á dictar su sentencia de acuerdo con la demanda y contestación. Si el Juez ordena la producción de una medida de prueba solicitada de común acuerdo de partes, es simplemente porque no tiene facultad para pronunciarse sobre la procedencia ó improcedencia de esa prueba sino al dictar sentencia. Las partes tienen la más amplia libertad para solicitar las pruebas conducentes á sus derechos y el Juez debe ordenar su producción debiendo tomarlas en consideración ó desecharlas al pronunciar sentencia; si lo hace antes prejuzga y queda inhabilitado para seguir conociendo en el juicio.



ACO

y 18—*Competencia*, núm. 12—*Excepción de falta de personería*, núm. 9—*Excepciones dilatorias*, núm. 3—*Lauda*, núm. 3—*Rebeldía*, núm. 9—*Reivindicación*, núm. 8—*Rendición de cuentas*, núm. 7—*Embargo preventivo*, núm. 18—*Falta de personería*, núms. 7 y 8.

Acción criminal—Véase: *Sustracción*, núm. 1.

1. Acción de daños y perjuicios—Fundada en la tardanza de la reconstrucción de una pared medianera, es impropio si ellos no se justifican independientemente de la causa—Jur. Civ., tom. 4, pág. 279, Sec. 2ª.

2. Acción de daños y perjuicios—En esta, la prueba debe rendirse conjuntamente sobre el derecho á cobrarlos y el monto de los causados—Jur. Civ., tom. 4, pág. 586, Ser. 2ª.

3. Acción de daños y perjuicios—Para que sea procedente esta acción por la mora del comprador en recibir los objetos, el vendedor debe justificar que por su parte se encontraba en aptitud de cumplir el contrato—Jur. Com., tom. 2, pág. 320, Ser. 2ª.

1—En el caso ocurrente la tardanza en la reconstrucción provino de la necesidad de dejar secar las paredes y por exigirlo así la mayor comodidad del propietario colindante. Si á pesar de esto hubo daño causado era necesario comprobarlo en forma.

2—Cuando la acción instaurada hubiese exigido el pago de los daños y perjuicios y determinado su monto. Si solo se demanda el pago de los daños sin determinar su monto, puede quedar éste para ser determinado en otro juicio—Art. 219, Cód. de Proc.—Véase Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 2 y 7; tom. 1ª, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 726 y 736. En contra núm. 717, del tom. 1ª, Inst.

3—En el presente caso se trata de un contrato de compraventa de cantidades de cosas no individualizadas, habiéndose estipulado lugar y plazo para su entrega—Art. 513, Cód. de Com.—Como la acción deducida se fundaba en la mora, y en las obligaciones reciprocas, uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple ni ofrece cumplir el contrato—Art. 500 del Cod. Civ.—resulta que toda la cuestión queda reducida á saber si ha habido de parte del actor ejecución completa de la obligación ó inexecución por parte del demandado.



ACC

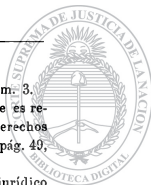
Acción de daños y perjuicios—Véase *Poder*, núm. 3.

1a. Acción de jactancia—Para que sea procedente es requisito esencial que la manifestación atribuyéndose derechos á bienes de otro no sea en juicio—Jur. Civ., tom. 4, pág. 49, Sec. 2ª.

1b. Acción de nulidad—Para pedir la de un acto jurídico contrario á las leyes, no se prescribe por el tiempo ordinario que rige para las acciones personales—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 2ª.

1a—El art. 425 del Cód. de Proc., requiere como condición, que la jactancia se produzca fuera de juicio. Sin embargo se ha resuelto que esta acción procede cuando ha habido protesta y ésta ha sido notificada *judicialmente*. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Jactancia*, núm. 4 y nota.

1b—Zacharic comentando el Cód. Francés dice en el tom. 3, párrafo 584: «En principio toda nulidad se prescribe en diez años, á menos que la ley fije un término más corto» y en la nota 6ª agrega: «La prescripción de diez años está fundada sobre una presunción de ratificación». De donde se sigue que las nulidades que no son susceptibles de ser cubiertas por ratificación escapan á la prescripción particular de que aquí se trata. El mismo autor más adelante agrega: «Tal es la nulidad fundada en los arts. 1596 y 1597.» El primero de estos artículos lo cita el Codificador en la nota al art. 1361 de nuestro Cód. Civil. Las disposiciones tanto de este artículo, en su inc. 6ª, como el 1442, contienen prohibiciones semejantes á las de los artículos citados por Zacharic. Aun suponiendo que la nulidad absoluta pueda subsanarse por el tiempo, las prescripciones de dos y diez años no le son aplicables. Porque si recurrimos á los arts. 4031 ó 4023 según cuyo último artículo la acción personal se prescribe á los diez años, tampoco estos serían aplicables, pues si para alegar la prescripción de diez años, nos apoyamos en el art. 1304 del Cód. Francés que dice: «en todos los casos en que la acción de nulidad ó rescisión de una convención no está limitada á un tiempo por una ley especial, esta acción dura diez años», pero siempre se encontrará uno con la decisión persistente de la Corte de Casación que dice: «El art. 1304, Cód. Civil no se aplica á los casos en que se trata de nulidades radicales y de orden público—Véase tom. 1ª, págs. 1451 y 1452, art. 1304—Nuestro Código habla, (art. 4023) de acción personal y deuda exigible, y en el caso de una acción de nulidad no hay ni principio de acción, ni mucho menos deuda exigible desde que el derecho desconoce de plano su existencia. Pa-



ACC

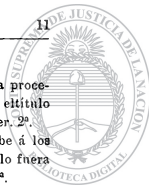
1. Acción de petición de herencia—Para que sea procedente es indispensable que el que la deduce acredite el título hereditario que invoca—Jur. Civ., tom. 4, pág. 35. Ser. 2ª.

2. Acción de petición de herencia—Se prescribe a los treinta años, siempre que el poseedor de los bienes lo fuere a nombre propio—Jur. Civ., tom. 4, pág. 340. Ser. 2ª.

rece, que nuestro Código ha querido establecer que la nulidad absoluta no es subsanable por el tiempo, ni aun por treinta años. Así se desprende de lo dispuesto, en el art. 1047 de nuestro Código, igual al 1683 del Chileno, citado en la nota de nuestro artículo. El artículo del Cód. de Chile contiene la agregación que le falta a nuestro de que esa nulidad absoluta es subsanable por el transcurso de treinta años.

1—Siempre que el demandado le desconozca este carácter, pues el título hereditario es la base de la acción.

2—Art. 4020, Cód. Civ.—La ley 7, tit. 14, Part. 6ª, que es la aplicable al caso por tratarse de una prescripción empezada antes de la vigencia del Cód., establece que el que posee una heredad ajena, habiendo sido instituido heredero prescribe la heredad por diez años entre presentes y veinte entre ausentes, «si aquel que dice que ha derecho en tales bienes non los demandase en juyzio». Más adelante agrega: «si aquel que ha derecho en la heredad no la demanda a los tenedores de ella fasta treinta años, sabiéndolo ó pudiéndolo fazer, decimos que pierde por su negligencia aquel derecho que en ella avia e ganaba por este tiempo el otro que la tenia.» En el caso presente se trataba de un heredero instituido por testamento, que entra en posesión de la herencia en virtud de mandato judicial poseyéndola a nombre propio y exclusivo durante treinta ó más años. Después de transcurrido este lapso de tiempo se deduce la acción de petición de herencia, es evidente que la prescripción se ha operado en virtud de lo dispuesto en el art. 4020 del Cód. Civ., con cuya doctrina están de acuerdo los autores como Gutiérrez y Fernandez, tom. 3, pág. 93, Ed. de 1871; Morató, tom. 2, pág. 267, Ed. de 1868; Sala, tom. 5, pág. 127, núm. 8, Ed. de 1867; Voet, tom. 6, pág. 126, núm. 9. Otro sería el caso si la sucesión estuviese indivisa aunque poseída a nombre de uno solo de los herederos, ó si hecha la división de la herencia continuara de hecho el estado de indivisión aunque los bienes sucesorios estuviesen poseídos por un solo heredero durante treinta años, porque en este caso no sería éste el artículo aplicable sino el 4019, inc. 3ª, que la declara imprescriptible. Cuando el prescribiente no tiene buena fe ni justo título, se requiere treinta años para prescribir, según el Cód. Civ., con excepción de las acciones imprescriptibles determinadas en este



AOC

3. Acción de petición de herencia—Es improcedente si el fallecimiento tuvo lugar en el extranjero, mientras no se justifique previamente la existencia de bienes en la República—Jur. Civ., tom. 4, pág. 445. Ser. 2ª.

artículo. La ley 4, tit. 15, Lib. 4, R. C., dice: «Si alguno tuvo ó poseyó alguna heredad ó otra cosa á empeños ó encomienda, ó alogado ó forzada, no se puede defender por tiempo: que estos atales no son tenedores por sí, mas por aquellos de quien la cosa tienen.» La ley 5, del mismo título y libro, dice: «Si los herederos ó otros hombres tuvieren ó poseyesen alguna cosa de consuno que no sea partida entre ellos, *magüer que el uno de ellos sea tenedor de la cosa, no se pueda defender por tiempo*, que no dé su derecho á cada uno de los otros cuandoquier que se lo demandasen.» Por otra parte, los principios consagrados por la Ley 10, tit. 14, Part. 3ª, han pasado á nuestro Código, cuyo art. 2353 dice, que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión: *el que ha comenzado á poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario*. Consecuente con estos principios el art. 2354 dice: «Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad ni por el trascurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comenzó tal continúa siempre mientras no se cree un nuevo título de adquisición.» El codificador ilustra su doctrina con la nota puesta al pié de este artículo cuando dice: «Pothier. Posesión, núm. 33. Por ejemplo:—si la posesión ha comenzado por ser violenta, clandestina ó de mala fe, continúa con la misma calidad, no solo en la persona que empezó la posesión sino también en la de sus herederos y los herederos de sus herederos. La C. S. P. ha sentido jurisprudencia en esta materia y ha dicho: 1º que para adquirir el dominio por prescripción es indispensable que la posesión sea exclusiva, á nombre propio y á título de propietario; 2º que el poseedor pro-indiviso como lo es el coheredero ó condómino no puede prescribir los bienes de sus coherederos ó condóminos—Tom. 1º, pág. 321, Ser. 2º. No debe olvidarse que esta misma Cámara ha dicho en otro caso que «la acción de petición de herencia es imprescriptible mientras de hecho continúe la indivisión—Véase: Inst., tom. 2º, Verb. *Acción de petición de herencia*, núm. 1.

3—Los arts. 90 y 3284 del Cód. Civ., y 634 del Cód. de Proc., determinan de una manera clara y precisa la jurisdicción sobre las sucesiones. Pero como cada país se reserva el derecho exclusivo de legislar sobre los bienes raíces que se encuentran situados en su



ACC

4. Acción de petición de herencia—Si es general y el resultado de un contrato, la compra, por el que se pretende heredero, de alguno de los bienes que la forman, no importa una confusión entre sus derechos y los del detentador, ni por consiguiente una revocación tácita del mandato—Jur. Civ., tom. 4, pág. 340. Ser. 2ª.

5. Acción de petición de herencia—Hace procedente el embargo preventivo en la parte de bienes que pueda corresponder al demandante—Jur. Civ., tom. 5, pág. 310, Ser. 2ª.

Acción de petición de herencia—Véase : *Embargo preventivo*, núm. 1.

Acción en forma—Véase : *Acreedor hipotecario*, núm. 1.

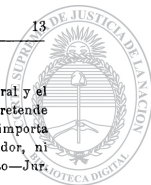
1. Acción ex-mandato—Para que sea procedente no basta justificar que fué conferido, se requiere la aceptación del

territorio, el nuestro lo establece del mismo modo en el art. 10 del Cód. Civ. Nuestro Cód. admite en principio y como regla general la unidad de las sucesiones, pero consagra la pluralidad en casos como el presente.

4—El art. 862 del Cód. Civ., dice que hay confusión cuando se reúne en una misma persona la calidad de deudor y acreedor, pero como los derechos reales son absolutos y no existe en ellos acreedor ni deudor porque no hay obligación que corresponda á derechos reales, resulta que en el caso del sumario no puede haber confusión. No debe, sin embargo, olvidarse que la confusión se admite en los derechos reales cuando cualquiera de los comprendidos en el dominio pleno se hubiese desmembrado y luego se reincorpora concurriendo ambos en la misma persona. El art. 2509 del Cód. Civ. confirma el sumario cuando dice que el que una vez ha adquirido la propiedad de una cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro.

5—La acción de petición de herencia es equiparada en sus efectos á la acción reivindicatoria y según el art. 447 del Cód. de Proc., el embargo preventivo procede en los casos en que esta acción es instaurada. A este respecto hay jurisprudencia constante y uniforme—Véase: Inst., tom. 1ª, verb. *Petición de herencia*, núm. 2018; tom. 2ª, mismo verb., núm. 1; *Embargo preventivo*, núms. 3 y 14.

1—De otro modo no habría causa para la obligación del mandatario. Según disposición de los arts. 308 y 310 del Cód. de Com., antiguo,





ACC

mandatario y la prueba de los actos ejecutados en tal carácter—Jur. Com., tom. 2, pág. 50, Ser. 2ª.

Acción indeterminada—Véase: *Venta*, núm. 1.

1a. Acción Pauliana—Para su rechazo, basta justificar que el deudor al hacer la trasferencia tenía bienes suficientes para el pago de sus deudas—Jur. Civ., tom. 6, pág. 160, Ser. 2ª.

1b. Acción reivindicatoria—El demandante no puede negar la posesión que el demandado alegue tener sobre el bien que se pretenda reivindicar—Jur. Civ., tom. 4, pág. 137, Ser. 2ª.

2. Acción reivindicatoria—Solo puede ser deducida ante el Juez del lugar en que se encuentre situado el inmueble que se pretenda reivindicar—Jur. Civ., tom. 4, pág. 12, Ser. 2ª.

3. Acción reivindicatoria—Es improcedente aun teniendo

el que conflere un mandato solo se responsabiliza por los actos ejecutados por el mandatario dentro de los términos del mandato. El art. 302 dice: el mandato no se perfecciona hasta la aceptación del mandatario. ¿A quién incumbe la prueba de que el mandato fué aceptado? Es evidente que al que lo afirma, como lo es de práctica constante en procedimiento.

1a—Porque en este caso dejaría de concurrir uno de los requisitos exigidos por el art. 962 del Cód. Civ. El deudor que prueba que en el acto de hacer la trasferencia tenía bienes suficientes para el pago de sus deudas, no se halla insolvente—inc. 1ª del art. citado.—Cuando la enagenación se ha hecho á título oneroso, debe tenerse presente lo preceptuado en los arts. 968 y 969 *ibid*.

1b—No puede negar la posesión actual del demandado porque su acción se basa precisamente en el hecho de esa posesión. - Art. 2738, Cód. Civ.—El actor no debe olvidar sin embargo de comprobar su posesión anterior de acuerdo con el precepto de la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

2—Se deducía, en el caso presente, la nulidad de una transacción y como consecuencia de ella la acción reivindicatoria. De modo que el fin de la demanda no era otra cosa sino obtener la entrega de la cosa materia de la acción. La reivindicación es una acción real según el art. 2757, la que debe deducirse ante el Juez que determina el sumario—Art. 4, Cód. de Proc.

3—La Ley ha previsto el caso de que un mismo propietario haya trasferido á dos personas el dominio de la misma cosa y ha estable-



ACC

do título cuando no se justifica haber tenido la posesión que se reconoce en favor del que presenta título posterior del mismo origen—Jur. Civ., tom. 7, pág. 267, Ser. 2ª.

4. Acción reivindicatoria—De bienes inmuebles, no procede la citación del demandado por edictos como persona incierta—Jur. Civ., tom. 7, pág. 167, Ser. 2ª.

Acción reivindicatoria—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 1—*Dominio*, núm. 1.

Acciones—Véase: *Juces*, núm. 1—*Denunciantes*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 12—*Sociedad*, núm. 6—*Poder especial*, núm. 3.

1. Acciones hereditarias—Su cesión importa ceder lo que corresponda en virtud de la cuenta particionaria y no lo que el cesionario conceptúe que pueda corresponder al cedente en la fecha del acto—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 2ª.

eido reglas fijas para resolver los conflictos que se produzcan. Los arts. 406, 408, 2791 y 3269 del Cód. Civ., resuelven la cuestión, como asimismo la Ley 51, tit. 5, Part. 5ª.

4—En la acción reivindicatoria no existe jamás persona incierta porque esta acción puede dirigirse contra el que posee a nombre de otro, quien puede exonerarse de la demanda declarando el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre posee—Art. 2782 del Cód. Civ.—La acción reivindicatoria procede *contra aquel que se encuentra en posesión* del inmueble.—Art. 2753, *ibid.*—Si nadie está en posesión de él, es otra la acción que corresponde deducir. Debe además tenerse presente que la prescripción del art. 80 del Cód. de Proc., es de aplicación restrictiva, por las dificultades que engendra la defensa de un ausente y porque no existiría la igualdad de la defensa que debe consultarse en todo litigio. La ley ha prescrito esta fórmula para los casos en que no es posible proseguir un juicio en otra forma, evitando así la paralización de los juicios. Pero cuando no existe esta imposibilidad de determinar el demandado el recurso extremo de la ley no debe aplicarse.

1—La acción hereditaria no es sino el derecho que cada heredero tiene de ser pagado de su porción en la herencia. Como esta porción es siempre indeterminada, pues está sujeta al resultado de la partición, de tal manera que su parte hereditaria solo es conocida cuando su hijuela está formada, resulta que la venta que un he-



ACC—ACE

1a. Acciones personales—Deducidas contra distintas personas importa una acción para cada una y en consecuencia deben ser demandadas separadamente—Jur. Civ., tom. 4, pág. 444. Ser. 2^a.

Acciones personales—Véase: *Acción de nulidad*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, núm. 3.—*Competencia*, núm. 9.—*Triunales de la Capital*, núm. 1.

Acciones populares—Véase: *Juramento*, núms. 2 y 3.

Acciones posesorias—Véase: *Herederos*, núm. 1.—*Juicio sucesorio*, núm. 1.

Acciones reales—Véase: *Derechos*, núm. 1.

Acciones reivindicatorias—Véase: *Mandato especial*, núm. 2.

Acciones subsidiarias—Véase: *Daños y perjuicios*, número 10.

Acceptación—Véase: *Desafío irregular*, núm. 1.

1b. Aceptante—Los derechos del que ha pagado sin te-

redero hace de su acción hereditaria es siempre indeterminada y lleva en sí implícita la cláusula de que la venta se hace de la parte que resulte corresponderle en la partición definitiva de la herencia. Además debe no olvidarse que los actos de enagenación de un heredero, en el estado de indivisión que importa un verdadero condominio, quedan subordinados al resultado de la partición;—art. 3123, Cód. Civ.—Así Massé y Vergé dicen, que el derecho de heredero no se convierte en propiedad real y efectiva sino por la partición, la que determina los bienes y la parte de ellos que corresponde a cada uno. De aquí resulta que la enagenación de una parte de la herencia solo se refiere a la parte que la cuenta particionaria le adjudique en la sucesión.

1a—Cada persona demandada puede emplear en su defensa medios y excepciones distintas las unas de las otras, siendo en consecuencia distintas las acciones.

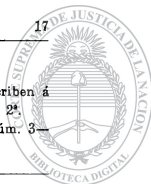
1b—Esta cuestión fué resuelta por unanimidad de votos, pero diferían en los fundamentos aducidos para llegar á este resultado común. La mayoría dijo: que la prescripción de cuatro años establecida por el art. 1003, inc. 2^a del Cód. de Com. antiguo, para las letras de cambio ú otros papeles endosables, es una excepción á la regla

ACE

ner provisión de fondos del girante solo se prescriben á los veinte años—Jur. Com., tom. 2, pág. 373, Ser. 2^a.

Aceptante—Véase: *Falsedad*, núm. 2—*Error*, núm. 3—*Prescripción*, núm. 12—*Reconocimiento*, núm. 3.

general sentada por el art. 1002 que fija el término de 20 años para la generalidad de las obligaciones comerciales, que tiene por fundamento la rapidez y celeridad con que actúa el comercio, donde nacen obligaciones cuyo origen en algunos casos es difícil constatar. Es regla de interpretación que los casos no determinados espresamente en una escepción caen bajo el principio general. El Cód. de Com., no establece en ninguna de sus disposiciones, cuál sea el tiempo requerido para la prescripción de la acción que compete al girante contra el aceptante para repetir contra éste el pago verificado, cuando no ha habido provisión de fondos, provisión que no se presume según disposición del art. 826 del Cód. En este concepto el caso de que trata el sumario debe regirse por el art. 1002, requiriéndose 20 años para operarse la prescripción, pues no está comprendido espresamente entre los casos de escepción enumerados en el art. 1003, inc. 2^a. Combinando este último con los arts. 813 y 1542, se deduce que la prescripción de cuatro años se refiere únicamente á las acciones directas que emanan de la letra, estimada como una orden de pago, á las acciones del tenedor ó tomador de la letra: pero no comprendido á las acciones del librador, porque las de éste no provienen propiamente de la letra de cambio, sino del pago que ha verificado, de la consumación del contrato de préstamo ó del uso de un crédito en descubierto. Esta inteligencia se manifiesta más claramente si se observa que los arts. 850, 851, 911 y 912, que hablando de las acciones que provienen de las letras, solo se refieren á las del tenedor. Debe además observarse que la interpretación en materia de prescripción debe ser siempre restrictiva; de donde resulta que desde que el art. 1003 estableciendo la primera escepción, no se refiere espresamente al librador es preciso convenir que la disposición general del art. 1002, que los autores están conformes en establecer, al interpretar el art. 189 del Cód. de Com. francés análogo al nuestro, no es aplicable á la prescripción especial de las letras de cambio, cuando el girante no se presenta como subrogado en los derechos del portador sino ejerciendo simplemente contra el aceptante, la acción de indemnización ó repetición, en cuyo caso la acción se prescribe por el tiempo necesario para la generalidad de las acciones, sucediendo lo mismo y con la misma distinción respecto del aceptante que ha pagado en descubierto.—Demangeat, *Lettre de Change*, pág. 561; Nougier, núm. 1606; Alauzet, núm. 1552; Bedarride, núm. 725; y Pothier, *Du contrat de change*, núm. 199. En



ACR

Acrecentamiento—Véase: Prueba, núm. 6.

resúmen, que el art. 1003 se refiere á las acciones ordinarias que nacen de la letra de cambio, á las acciones del tenedor, y no á las extraordinarias que nacen de una circunstancia accidental extraña á la letra, como es la acción del pagador sin provisión de fondos, ó del garante que la proveyó. Tal fué la argumentación aducida por la mayoría de la Cámara. La minoría sostuvo el mismo principio, pero fundada en que el art. 1003 no admite distinción alguna en cuanto á la prescripción en materia de letras de cambio cuando dice: «Las acciones provenientes de letras ú otros papeles endosables» etc. y es indudable que entre esas acciones figuran tan solo las acordadas al tomador, en favor de quien se crea la letra, como asimismo al tenedor á quien pasa por medio de endoso ó en virtud del pago verificado, como uno de los deudores solidarios. No es posible fundarse, para establecer el principio consagrado por el sumario, en la circunstancia de que cuando el aceptante repite del girante el pago hecho, esta acción no se prescribe á los cuatro años, sino á los veinte: esa acción no nace de la letra misma, es decir, que no es una consecuencia inmediata de esa operación, sino que reconoce otro origen cual es el pago verificado por el aceptante; ese pago no estingue las obligaciones á que la letra dió nacimiento, no, todos esos hechos nacen de ella y son su consecuencia. Así lo sostienen todos los autores modernos de derecho comercial. Waelbræck, en su tratado «De la lettre de change» dice: «Todas las acciones relativas á las letras se prescriben á los cinco años. La legislación ha querido fijar, pues, una *regla absoluta*: la generalidad de los términos empleados demuestra que *no ha querido hacer excepción alguna cualquiera que ella fuese,*» pág. 294. Namur se pronuncia en el mismo sentido, diciendo: «La prescripción de 5 años se aplica á todas las acciones relativas á las letras de cambio sin distinción alguna, porque el art. 82 es absoluto» tom. 1.º, pág. 480. Igual doctrina sostienen Dalloz, Verb. Effets de Commerce, tom. 20, pág. 258, núm. 810; Saceré, Diccionario Comercial, año 1884, pág. 577, núm. 19; Escriche, verb. Letra de cambio, pág. 1164; Tapia, Jurisprudencia mercantil, pág. 150; Martí Eixalá, Derecho Mercantil; Rogron, Cód. de Com., pág. 442. Ercole Vidari, Letra de cambio, pág. 635. Por otra parte, de lo sostenido por la mayoría, resultaría, que si es cierto que la acción del aceptante contra el girante no se funda en la letra sino en el contrato de mandato que media entre ambos, también lo es que las acciones al portador no nacen de la misma letra, sino del contrato ó acto jurídico que le dá nacimiento, llámese contrato de cambio ó cualquier otro. Y siendo esto así, resultaría que la prescripción de los 4 años no podría aplicarse en ningún caso, porque



ACR

1. Acreedor—Tiene derecho para iniciar la testamentaria de su deudor, y los herederos no pueden pedir la nulidad fundándose en su falta de intervención—Jur. Civ., tom. 4, pág. 96, Ser. 2ª.

2. Acreedor—El de un heredero solo puede embargar la parte indivisa que corresponde al deudor, pero no ejecutar un bien testamentario—Jur. Civ., tom. 4, pág. 464, Ser. 2ª.

los derechos del tenedor se fundarían en un contrato preexistente al giro ó endoso de la letra. No puede ser este el pensamiento del legislador, pues habría dictado una ley imposible de ser aplicada. La verdadera razón de exigirse la prescripción de 20 años en el caso del sumario, es que la especial establecida en el art. 1003, inc. 2ª, no se ha establecido para reglar los derechos entre girante y aceptante, los que como deudores solidarios quedan sujetos a la prescripción ordinaria. Esta resolución está de acuerdo con lo resuelto en otros casos. Véase: Inst., tom. 1ª, verb. *Aceptante*, núm. 62 y nota.

1.—Acreditado el fallecimiento y abierto el juicio testamentario se cita por edictos a los que se consideren con derecho ya sea como acreedores ó herederos, siempre con intervención del Ministerio de Menores: se le tiene por parte al que comparece acreditando su carácter hereditario en cuyo estado cesa la intervención del acreedor. llenándose estos requisitos no hay nulidad que pueda legalmente pedirse. Si no concurre el heredero al llamado de la autoridad judicial solo a él le es imputable la falta.

2.—El art. 478 del Cód. de Proc., autoriza a embargar aquellos bienes que él señale, siempre que el deudor esté en posesión de ellos. Si el heredero lo es en línea recta, entra en posesión de la herencia por ministerio de la ley desde el día del fallecimiento del causante, entra en posesión de la parte indivisa que le corresponde, por consiguiente solo puede embargarse esa parte indivisa. Si el heredero no lo es en línea recta tiene que pedir la posesión a los jueces y solo después de dada esta posesión será embargable, pero solo la parte indivisa. Esta disposición de la Ley de Proc. está de acuerdo con el art. 2677 del Cód. Civ. La Cámara se ha pronunciado en otra ocasión en este mismo sentido, como puede verse en el tom. 8, pág. 510, Ser. 1ª, Jur. Civ.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Embargo*, núm. 6. Debe asimismo no olvidarse que la misma Cámara ha dicho que «el embargo y tasación debe recaer sobre la parte indivisa del ejecutado, la tasación del todo es nula»—Inst., tom. 2, verb. *Embargo* núm. 6.





ACR

3. Acreedor—Que dirige sus acciones contra una sociedad, no está obligado á ocurrir al Juez de la testamentaria de uno de los socios—Jur. Civ., tom. 5, pág. 121, Ser. 2ª.

4. Acreedor—El revestir ese carácter respecto de una de las partes, no es tacha legal, siempre que la veracidad del testimonio resulte contraria á los intereses del declarante—Jur. Civ., tom. 5, pág. 104, Ser. 2ª.

5. Acreedor—Por alquileres, tiene derecho á oponerse á la extracción de fondos procedentes de las existencias del predio arrendado, mientras no se justifique el carácter privilegiado de los gastos que se pretende pagar con ellos—Jur. Com., tom. 3, pág. 130, Ser. 2ª.

6. Acreedor—Para ejecutar á uno de los deudores solidarios, no necesita comprobar la insolvencia de los anteriores

3—La disposición del art. 703 del Cód. de Proc., no es aplicable. El juicio testamentario representa el conjunto de los derechos del causante, pero los derechos de uno de los socios no son los derechos de la sociedad. Si la acción se dirige contra la sociedad, no puede para ello ocurrir al juicio sucesorio de uno de los socios porque la sociedad es persona legal distinta de la persona de sus socios.

4—La razón de ser de la tacha establecida por el inc. 5º del art. 207 del Cód. de Proc., es el interés que puede el testigo tener en beneficiar al litigante que lo presenta en caso de ser su deudor, y cuando es su acreedor, el interés que tiene de que su deudor mejore de condición para que le abone su crédito. Cuando un testigo declara en favor ó en contra de determinada parte litigante y por esta declaración él mismo se perjudica, la razón de la tacha establecida por la ley desaparece y su testimonio consiguientemente es válido. En igual sentido se ha pronunciado la Cámara en otra ocasión—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Testigo*, núm. 2600 y nota.

5—Siempre que haya concurso, pues solo en este estado se puede hacer valer un privilegio. El crédito por alquileres tiene un privilegio especial sobre los bienes que existan dentro del fundo arrendado—Art. 1698, Cód. de Com.—Esta prelación subsiste hasta tanto no se compruebe la existencia de otro crédito con mejor derecho.

6—Si el ejecutado no presenta bienes y su acreedor no los conoce, no puede sostenerse que la prueba de la insolvencia debe adelantarse en cumplimiento del art. 846 del Cód. de Com., sin au-

ACR

contra los cuales ha iniciado su acción, le basta la manifestación de éstos en el acto del mandamiento—Jur. Com., tom. 2, pág. 264, Ser. 2ª.

7. Acreedor—El que admite que se le adjudique el producto de un bien determinado, no tiene derecho á cobrar intereses posteriores á la fecha del convenio—Jur. Com., tom. 2º, pág. 62, Ser. 2ª.

Acreedor—Véase: *Gasto causídico*, núm. 1—*Pago*, núm. 2—*Deudor*, núm. 2—*Gastos de justicia*, núm. 1—*Intereses usurarios*, núm. 1—*Hipoteca tácita*, núm. 1.

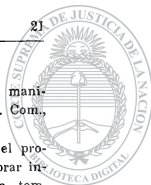
1. Acreedor hipotecario—No está obligado á deducir acción en forma, si existe oposición por parte de otros acreedores del deudor común—Jur. Com, tom. 1, pág. 364, Ser. 2ª.

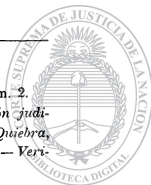
Acreedor prendario — Véase : *Verificación de créditos*, núm. 1.

torizar una conclusión inadmisibile, la de una expectativa indefinida por parte del acreedor. Luego lo regular es, que el nuevo demandado asuma en el juicio la posición que le corresponde de deudor solidario, con la facultad de acreditar que el primero no era insolvente, denunciando bienes con los cuales debe garantizarse la ejecución. De acuerdo con esta sentencia puede verse verb. *Acción*, núm. 3, tom. 2º, Inst.

7—Los intereses correspondientes al producido del bien, pues si ese bien no alcanza á cubrir todo el crédito, es evidente que los intereses del remanente corren siempre hasta su completo pago. En el caso presente se trataba de un concurso, en cuyo caso los intereses no corren sino para los créditos que estén garantidos con privilegio, hipoteca ó prenda—Art. 1543, Cód. de Com. ant.

1—Cuando un acreedor hipotecario se presenta en un concurso pidiendo el pago de su crédito por ser hipotecario, no está obligado á esperar las resultas del concurso para ser pagado de su crédito—Art. 1710, Cód. de Com. ant.—Conserva su acción ejecutiva y en este carácter no puede obligársele á deducir su acción en la forma prescrita por el art. 71 del Cód. de Proc., para los juicios ordinarios. El hecho de estar concursado el deudor no cambia la naturaleza ejecutiva del crédito hipotecario y por consiguiente la acción instaurada puede serlo en la forma prescrita para el juicio ejecutivo.





ACRE—ACT

Acreedor privilegiado—Véase: *Honorarios*, núm. 2.

Acreedores—Véase: *Honorarios*, núm. 6—*Posesión judicial*, núm. 1—*Fiador*, núm. 1—*Concurso*, núm. 3—*Quiebra*, núm. 8—*Sociedad*, núm. 6—*Dación en pago*, núm. 2—*Verificación*, núm. 2.

Acreedores personales—Véase: *Declaración*, núm. 2.

Acreedores privilegiados—Véase: *Prueba*, núm. 24.

Acto judicial—Véase: *Cesión de acciones litigiosas*, núm. 1.

Activo—Véase: *Cesación de pagos*, núms. 1 y 2.

Acto—Véase: *Partidas parroquiales*, núm. 2.

1a. Acto de comercio—La fabricación de ladrillos se conceptúa acto de comercio—Jur. Com., tom. 3, pág. 524, Ser. 2ª.

2. Acto de comercio—El conocimiento de los litigios que tienen por origen un acto de comercio, corresponde a la jurisdicción mercantil, aun cuando los que lo practican no se encuentren matriculados en el Tribunal de Comercio—Jur. Com., tom. 2º, pág. 577, Ser. 2ª.

Acto de comercio—Véase: *Quiebra*, núms. 1 y 6.

1b. Acto ilícito—Justificada la existencia del daño causado y la culpabilidad del autor del acto ilícito que lo produjo, su responsabilidad es ineludible—Jur. Civ., tom. 8, pág. 553, Ser. 2ª.

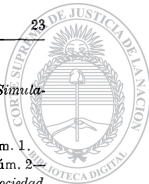
Acto ilícito—Véase: *Firma*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 11, 13 y 19—*Insania*, núm. 1—*Especulación ó agio*, núm. 1.

Acto irreverente—Véase: *Cura-párroco*, núm. 1.

1a—Se consideran actos de comercio las operaciones ejecutadas por las empresas de fábricas—Art. 7, inc. 4º, Cód. de Com.

2—Art. 6, Cód. de Com.—Véase: *Inst.*, tom. 1º, verb. *Jueces de Comercio*, núm. 1518, primera parte de la nota; verb. *Competencia*, núm. 419; y tom. 2º, verb. *Actos de comercio*, núm. 1.

1b—Arts. 1083, 1109, Cód. Civ.



ACT

Acto jurídico—Véase: *Formalidades*, núm. 2—*Simulación*, núm. 4.

Acto ilícito—Véase: *Revocación*, núm. 1.

Acto litigioso—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 1.

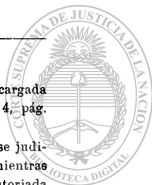
Actos—Véase: *Mandante*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 2—*Mandato*, núm. 4—*Rendición de cuentas*, núm. 6—*Sociedad*, núm. 5.

Actos civiles—Véase: *Inhabilitación*, núm. 1.

Actos de la mujer—Véase: *Ratificación tácita*, núm. 1.

1. Actos judiciales—Los llevados á cabo por un gobernador investido de facultades extraordinarias, son tan válidos

1—Se trata de saber si una venta judicial hecha por el tirano Juan Manuel de Rosas durante la vigencia de la ley de 1835 que le investió con la suma del poder, es nula. Iniciada una testamentaria y puesta en almoneda una finca por dos veces no pudo venderse; avocando Rosas el conocimiento del juicio sucesorio, procedió á su venta privada, por más de las dos terceras partes de la tasación. Esto sucedía en 1850: se dijo de nulidad de esa venta en 1869. La cuestión á resolver aquí es, de si pudo el Gobierno decretar la venta y si estaba facultado para ello. Ante todo debe tenerse bien presente que el Gobernador Rosas estaba investido con la suma del poder público. Esta suma de poder ó facultades extraordinarias, había concentrado en la persona de Rosas los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para resolver este juicio se citó por los Camaristas la discusión habida con motivo del antiguo pleito Anchorena-Pirán, en el que se debatió el alcance de estas facultades por los juristas y estadistas más eminentes de nuestro país, en cuya discusión se estableció, que en esas facultades extraordinarias estaba comprendido el ejercicio de los poderes constituidos por las leyes. Así Mármol decía: «En esa suma no podía haber más que aquellos que tenían los poderes públicos existentes en el Estado.» Frías espuso que: «Cuando la ley había fundado un poder que los reunía todos, en cuyas manos estaban confundidos, ese poder era superior á todos los otros aislados, y ese hombre, Gobernador, Juez y Legislador á un tiempo, estaba más arriba de la justicia ordinaria.» El Dr. Alsina sostuvo que: «Todo lo que el Poder Legislativo, el Judicial, ó el Ejecutivo podían hacer por las leyes del país, cada poder dentro de su órbita, lo podía hacer Rosas, pero sin salir de esa línea.» El Dr. Velez Sarsfield recordaba muchos decretos dados por Rosas quebrantando el



ACT

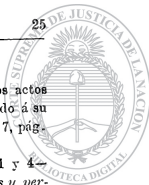
como si hubiesen sido ejecutados por la autoridad encargada de practicarlos en épocas normales—Jur. Civ., tom. 4, pág. 183, Ser. 2ª.

1. Actos jurídicos—Anulables, no pueden exigirse judicialmente las responsabilidades que surgen de ellos, mientras su nulidad no haya sido declarada por sentencia ejecutoriada—Jur. Civ., tom. 6, pág. 566, Ser. 2ª.

Actos personales—Véase: *Contrato*, núm. 11.

orden de los juicios y citaba algunos de ellos para hacer comprender la absoluta necesidad de no hacerlos renacer—Puede verse el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1858.—Debe por otra parte tenerse presente, que la condenación de Rosas en 1857, no fué por el ejercicio de esas facultades, sino por los abusos y excesos que cometió hasta contra las leyes de la naturaleza, cuando se dice: «Se declara a Juan Manuel Rosas reo de lesa patria por la tiranía sangrienta que ejerció sobre el pueblo durante todo el período de su dictadura, violando hasta las leyes de la naturaleza, y por haber hecho traición en muchos casos a la independencia de su patria, y sacrificado a su ambición, su libertad y sus glorias.» Definido en esta forma el alcance de las facultades ejercidas por Rosas, es evidente que residían en su poder las facultades judiciales. El procedimiento observado en la venta de este inmueble fué perfectamente legal para la época en que se realizó. El Juez de 1ª Instancia que procedió bajo la influencia de estas circunstancias y que había subastado por tres veces las propiedades sin éxito alguno, consideró que no pudiendo realizarla, debía comunicarlo al Gobierno para la resolución que conviniese. El Gobierno, dada la situación creada, aceptó la oferta que superaba, como se ha dicho, a las dos terceras partes de la tasación. En la época en que pasaron estos hechos como asimismo con posterioridad, hasta la promulgación del Código, era práctica en los Tribunales admitir ofertas análogas cuando la almoneda no surtía efecto. Si Rosas, que reunía la suma del poder, no extralimitó las atribuciones que correspondían al Poder Judicial, es evidente que celebró un acto ajustado en todo a la ley, y que ese acto no puede ser atacado de nulidad.

1—Los actos jurídicos anulables revisten caracteres legales cualesquier que sean los defectos de que adolezcan, y mientras revista este carácter, no corresponde indemnización ninguna de daños y perjuicios.



ACT—ACU

1a. Actos privados—Con relación al mandante, los actos privados de su mandatario tienen fecha cierta, siendo a su cargo la prueba de estar antedatados—Jur. Civ., tom. 7, pág. 91, Sér. 2ª.

Actor—Véase: *Excepción de defecto legal*, núms. 1 y 4—*Arraigo*, núm. 2—*Documentos*, núms. 7 y 13—*Daños y perjuicios*, núm. 19—*Falta de personería*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5—*Prueba plena*, núm. 1.

Actuario—Véase: *Escrito*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 6.

Acuerdo de voluntades—Véase: *Contrato verbal*, número 2.

Acuerdo previo—Véase: *Estafa*, núm. 3.

Acumulación de penas—Véase: *Delitos*, núm. 4.

Acusación—Véase: *Calumnia*, núms. 1, 2 y 3—*Rebeldía*, núms. 5 y 8—*Litispendencia*, núm. 3—*Prescripción*, núm. 11—*Derecho de acusar*, núm. 1.

1b. Acusado—Oído éste, en el juicio de calumnia por la prensa, el auto de prueba se refiere al fondo de la acusación—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 27, Sér. 2ª.

2. Acusado—En causa criminal, no está obligado a absolver posiciones—Jur. Crim., tom. 2, pág. 415, Sér. 2ª.

1a—Art. 1961, Cód. Civil.

1b—El acusado debe limitarse en su contestación a decir *si ó non* como lo manda la Ley 16, tit. 1º, Part. 7º; por consiguiente la apertura de la causa a prueba se refiere a la comprobación de los hechos imputados en la acusación sin que ella pueda estenderse a otros puntos.

2—El art. 18 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La absolución de posiciones bajo juramento, importa una confesión que puede perjudicar al que la hace, no puede por consiguiente obligársele a efectuarla. Aún dado el caso que este precepto constitucional no existiese, los Jueces del Crimen no pueden emplear medios coercitivos para provocar la confesión, pues no podría hacerse efectivo el apercibimiento de ley en

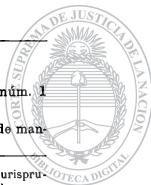
ACU

Acusado—Véase: *Injurado*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 1
—*Delitos*, núms. 4 y 8.

1. Acusador—Puede deducir la acción por medio de man-

caso que el absolvente se negase á contestar. Esta ha sido la jurisprudencia constante en nuestros Tribunales. Debe sin embargo observarse que si se piden las posiciones, el Juez no debe de oficio rechazar ese medio probatorio; pues solo está facultado á proceder así cuando el contrario se acoje al precepto constitucional. Puede verse, F. o. C. N., tom. 1°, pág. 350, Ser. 1°.

1—Esta cuestión ha sido materia de resoluciones contradictorias dictadas por la misma Cámara, y no se crea que ésta haya cambiado de modo de pensar porque hubiese habido cambio de los miembros que la componían, todo lo contrario, son los mismos Camaristas que han cambiado de modo de pensar: siendo de notarse que la doctrina establecida anteriormente es la correcta, siendo esta última la que no puede ser considerada como la expresión genuina de la ley. El fallo que sostiene el principio sentado en el presente sumario, se funda en lo siguiente: Que combinadas las dos leyes de Partida que rijan el caso, resulta que si bien no puede acusarse por medio de apoderado sobre crímenes ó delitos graves en que pudiese aplicarse pena de muerte, de efusión de sangre ó destierro perpetuo, en los demás casos como los de injuria y calumnia no es indispensable que la querrela se entable personalmente. Los criminalistas están de acuerdo con esta doctrina: así Gomez, después de establecer que no puede acusarse criminalmente por procurador, agrega «lo que sin embargo débese entender cuando sobre tal delito hubiese de imponerse pena corporal, pero sería contrario si se tratase de pena de destierro, de infamia ó pecuniaria: debiendo tenerse presente en este caso lo que dispone la Ley 14, tit. 5°, Part. 3°, que establece no se admita procurador en causa criminal en que pudiera imponerse destierro perpetuo, aunque bien podría admitirse si solo se tratase de destierro temporal ó pena pecuniaria.» Var. Res., tom. 3, cap. 1°, núm. 13.—Sostienen la misma doctrina: el Dr. Elizondo, *Práctica universal Forense*, tom. 1°, pág. 26; el Dr. Tápia, *Febrero Reformado*, tom. 8, lib. 3, tit. 4°, cap. 1°, núm. 5; Escriche, *Dic. de Leg. y Jur. verb. Acusación*. Y por último se dice que la Ley 6°, tit. 1°, Part. 7°, es una escepción á la Ley 12, tit. 5°, Part. 3°. Nosotros sostenemos que este fallo no consulta ni la letra ni el espíritu de la Ley. Con efecto, la Ley última citada al enumerar los casos en ella esceptuados no lo hace como limitándolos exclusivamente á ellos: esta enumeración no puede considerarse como hecha taxativamente, es meramente enunciativa. Esta ley dispone lo siguiente: «Pleyto y ha, en que pueden

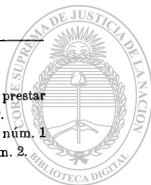


ACU

datario, en causa criminal que no merezca pena de muerte ó destierro perpetuo—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 588, Ser. 2º.

ser dados personeros ó otros en que non, onde dezimos, en toda demanda que faga vno contra otro, quien sea sobre cosa mueble ó raíz, que puede y ser dado personero, para demandarla en juyzio. Mas sobre pleyto sobre que pueda venir sentencia de muerte, perdimiento de miembro ó echamiento de tierra, non deve ser dado personero: *ante dezimos, que todo ome es tenuto de defenderse en tal pleyto como este por si mismo e non por personero.* Porque la justicia non se podria fazer derechamente en otro, si non en aquel que faze el yerro quando el fuere prouado, ó el acusador quando acusare á tuerto.» Esta ley prescribe el procedimiento á seguirse en los juicios civiles, en los que la representación es admitida, y en seguida enumera los tres casos, enunciados á guisa de ejemplos, en los juicios criminales en los que no la admite. Esta es la única interpretación correcta que puede darse á esta ley en combinación con lo establecido en la Part. 7ª que legisla para el procedimiento criminal. Tan es esta la interpretación que debe dárseles á estas disposiciones de las Partidas que uno de los Camaristas que resolvió la cuestión que nos ocupa al dar su voto en otro caso análogo al presente decia: «Si bien la Ley 12, tit. 5ª, Part. 3ª, menciona algunas causas criminales en que no debe admitirse personero, *lo hace á manera de ejemplo*, pues su disposición principal es que pueda darse personeros en los pleitos sobre cosas muebles ó raíz, sin legislar respecto de las causas criminales. La Part. 7ª que se refiere con especialidad á la materia criminal, establece terminantemente en la Ley 6ª, tit. 1ª, que tanto el acusador como el acusado deben presentarse por sí mismo en juicio, y por consiguiente si hubiese contradicción entre esas leyes, debe prevalecer la que tiene por objeto único y esencial reglamentar el procedimiento en los juicios criminales.» Véase causa CIX de la Jur. Crim., tom. 2º, pág. 24, Ser. 1º. Vamos á demostrar que no existe la contradicción que se atribuye entre las dos leyes que hemos citado admitiendo la interpretación por nosotros dada: todo lo contrario, si se les dá la interpretación de este sumario, se llega á la convicción de que las citadas leyes no se contradicen. Con efecto, preténdese que la Ley 12, tit. 5ª, art. 3ª, establece tres casos de excepción en el procedimiento criminal, en los que no se admite personero, siendo admitido en todos los demás casos. La Ley 6ª, tit. 1ª, Part. 7ª, establece que *en todo juicio criminal* debe, tanto el acusador como el acusado comparecer personalmente. Esta ley no limita su prescripción á los tres casos mencionados en la otra, sino que lo prohíbe en todo juicio criminal, de





ACU—AJD

2. Acusador—Por calumnia, no está obligado á prestar fianza de arraigo—Jur. Crim., tom. 4, pág. 48, Ser. 2ª.

Acusador—Véase: *Amenazas*, núm. 1—*Injurias*, núm. 1—*Reo*, núm. 2—*Calumnia*, núm. 3—*Juramento*, núm. 2.

Acumulación—Véase: *Estafa*, núms. 1 y 2.

Ad-corpus—Véase: *Comprador*, núm. 1.

1. Adhesión—A la apelación interpuesta por la otra parte, no puede ser tomada en consideración por el Superior—Jur. Civ., tom. 4, pág. 174, Ser. 2ª.

1. Adjudicación—De una parte de los bienes hereditarios á la hijuela de gastos, importa un título de propiedad sobre la fracción adjudicada, á favor del que justifique por instru-

donde se sigue que existe una patente contradicción entre ambas leyes, lo que no es admisible en las disposiciones de un mismo Código, como lo decía la Cámara. Ella, con su interpretación incorrecta, ha hecho que la ley incurra en contradicción, siendo así que es esto lo que se ha querido evitar á toda costa. Esta frecuente contradicción de la Cámara en la opinión que vierte en sus fallos es sumamente perjudicial para los litigantes, pues no les es posible saber si la Cámara resolverá hoy en contra de lo que resolvió ayer. Puede aducirse en pró de la tesis que venimos sosteniendo otros argumentos, los que ya han sido espuestos en el tom. 2º de la Inst., verb. *Acusación criminal*, núm. 1 y nota.

2º Eseriche, verb. *Arraigo y fianza de arraigo*. Según se desprende de lo que disponen las leyes españolas, el acusador debía prestar fianza de calumnia siempre que se proponía ejecutar la acción pública ó popular; es evidente que para tales casos la fianza se hacía indispensable á fin de evitar acusaciones calumniosas y mal inspiradas. Pero debe tenerse presente que las mismas leyes eximían de la fianza al acusador que se presentaba querrellando por agravios propios ó de su familia, «porque estos tales,» como dice la Ley 26, tit. 1º, Part. 7ª, «se mueven con derecha razón é con dolor á fazer estas acusaciones e non maliciosamente.»

1—Esta es la jurisprudencia de nuestros Tribunales fundada en la prescripción terminante de la ley, que ordena que la apelación se interponga ante el inferior, y para en caso de ser denegada la apelación existe el recurso de hecho para ante la Cámara. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Apelación*, núm. 3; y tom. 1º, mismo verb. núm. 181.

ADJ—ADM

mento público haber pagado los gastos—Jur. Civ., tom. 5, pág. 534, Ser. 2ª.

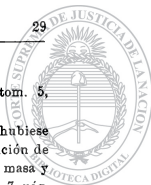
2. Adjudicación—Si la hecha á un heredero lo hubiese sido por cantidad determinada, el aumento ó disminución de que sea susceptible posteriormente, corresponde á la masa y debe repartirse entre los coherederos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 129, Ser. 2ª.

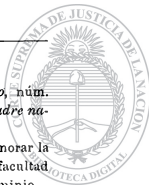
1. Administración—Si bien aquel que administra bienes de otro está obligado á rendir cuentas, debe el que las exige justificar el carácter con que se ejerció el cargo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 9, Ser. 2ª.

Administración—Véase: *Heredero*, núm. 5—*Socio comanditario*, núm. 2.

2—El aumento del crédito debe ser considerado como un bien no manifestado ó no tenido en cuenta al hacerse la manifestación. Se puede argumentar *à contrario sensu* diciendo, que si el crédito adjudicado resulta nulo puede el heredero adjudicatario reclamar de sus demás coherederos, de donde se deduce que habiendo exceso pueden también éstos reclamar sus beneficios. Cuando de la adjudicación no resulta claramente demostrado que la intención de las partes no ha sido adjudicar una porción igual á cada coheredero, debe suponerse que la igualdad ha sido la base de la adjudicación, de donde se infiere que el exceso debe repartirse entre los coherederos so pena de sacrificar la equidad, base del derecho, especialmente en este punto de la legislación civil. El argumento del art. 3506 que es la que establece la más perfecta igualdad entre los coparticipes rije también el presente caso. Véase art. 3508, *ibid*.

1—Es principio inconcuso claramente consagrado en nuestro derecho que el administrador de bienes ó negocios ajenos, ó en que otro tiene interés ó parte, está obligado á rendir cuenta de su administración según derecho—Castro, *Práctica Forense*. Si la administración se ha llevado á cabo en el carácter de gestor de negocios, las cuentas se deben rendir de acuerdo con lo ordenado en el art. 2888 del Cód. Civ., si como mandatario según lo dispuesto en el art. 1909, si como albacea de acuerdo con el art. 1870. La administración debe necesariamente ejercerse en una de estas formas, y corresponde probar, que ella se ejerció en un carácter determinado, al que tal afirma.





ADM—AGE

Administración de bienes—Véase: *Conocimiento*, núm. 1—*Litigio*, núm. 1—*Filiación natural*, núm. 3—*Madre natural*, núm. 3.

1a. Administrador—Reconocido el peligro en demorar la designación de un administrador, el Juez tiene la facultad de nombrarlo para administrar los bienes en condominio—Jur. Civ., tom. 4, pág. 593, Ser. 2ª.

2. Administrador—Nombrado por el Juzgado el del caudal testamentario, el nombramiento es irrevocable sin causa justificada, aun cuando hubiese recaído en uno de los herederos y por convenio de los demás—Jur. Civ., tom. 7, pág. 156, Ser. 2ª.

Administrador—Véase: *Gerente*, núm. 1—*Venta*, núm. 1—*Sueldos*, núm. 2.

Administrador legal—Véase: *Porción hereditaria*, número 1.

Administradores—Véase: *Mandato*, núm. 7.

Adulteración—Véase: *Agregación*, núm. 1.

1b. Adulterio—Debe ser penado con dos años de prisión si no concurren circunstancias atenuantes—Jur. Crim., tom. 3, pág. 590, Ser. 2ª.

Agente—Véase: *Firma*, núm. 3—*Lesiones leves*, núm. 1.

1c. Agente de Bolsa—El que paga por su mandante tiene derecho de repetición, bastándole como título la planilla de diferencias levantada por el contador de la Bolsa

1a—Arts. 1682 y 1684, Cód. Civ.

2—Parece que así se desprende del espíritu del art. 642 del Cód. de Proc.

1b—Art. 122 del Cód. Pen. vigente.

1c—En este caso el corredor está obligado por otro y tiene interés en cubrir la deuda y entonces se opera la subrogación legal de que nos hablan los arts. 379 y 381 del Cód. de Com. ant.—Esta resolución está en un todo de acuerdo con lo resuelto en el tom. 4, pág. 366, Ser. 2ª; Inst., tom. 2, verb. *Agente ó comisionista*, núm. 1.

AGE

para justificar la veracidad de las operaciones, sin que tenga obligación de manifestar el nombre de las personas con las que haya operado—Jur. Com., tom. 4, pág. 395, Ser. 2ª.

2. Agente de Bolsa.—No se encuentra comprendido en las disposiciones del Código de Comercio sobre corredores y comisionistas—Jur. Com., tomo 4, pág. 366, Ser. 2ª.

3. Agente de Bolsa.—No se encuentra comprendido en las disposiciones del Cód. de Com. sobre corredores y comisionistas—Jur. Com., tom. 4, pág. 395, Ser. 2ª.

Agente de Bolsa.—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 18 —*Operaciones de Bolsa*, núms. 1 y 2.

1a. Agente de la autoridad.—Las lesiones causadas por éste, deben ser castigadas con ocho meses de arresto—Jur. Crim., tom. 3, pág. 283, Ser. 2ª.

Agente Fiscal.—Véase: *Audiencia*, núm. 1—*Declaratoria* núm. 3—*Testamentaria*, núm. 3—*Defecto de procedimiento*, núm. 2.

1b. Agentes.—El proceder irregular de los agentes de la autoridad, como circunstancia atenuante, debe ser probado

2—Y por consiguiente las disposiciones que el Código establece respecto de ellos, no pueden hacerse extensivas a aquellos que han quedado excluidos de sus disposiciones. Siendo esto así y en la imposibilidad de aplicar a los corredores de Bolsa las disposiciones del Cód. de Com., y teniendo necesidad de resolver sobre el carácter y naturaleza de sus relaciones jurídicas, es evidente que se deben juzgar con arreglo a la naturaleza y carácter de los actos que ejecutan. Los corredores de Bolsa, no proceden como los corredores del Cód. Com. sino como comisionistas. Y si algunas veces contratan a nombre de sus comitentes lo hacen más bien como mandatarios. Esta resolución está de acuerdo con lo establecido en otros fallos—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Corredores de comercio*; puede verse además el sumario que sigue.

3—Véase: Nota precedente.

1a—Art. 84, inc. 11, Cód. Pen. vig.

1b—Toda atenuación alegada en la comisión de un delito, debe ser probada cuando su verosimilitud no puede establecerse.





AGI-AGRE

por el reo, si no resulta verosímil de las constancias del proceso—Jur. Crim., tom. 3, pág. 214, Ser. 2ª.

Agio—Véase: *Especulación ó agio*, núm. 1.

Agravación—Véase: *Delitos*, núm. 6.

Agravios—Véase: *Alimentos*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 8—*Embargo*, núm. 7—*Rendición de cuentas*, núm. 2.

1a. Agravio moral—Causado por la muerte de un miembro de la familia, debe ser indemnizado con relación á la suma de bienestar que éste le proporcionaba con su trabajo y corresponde á los Tribunales fijar equitativamente su monto—Jur. Civ., tom. 5, pág. 335, Ser. 2ª.

Agravio propio—Véase: *Reo*, núm. 2.

1b. Agregación—Con distinta letra del nombre á la orden de quien se estiende el pagaré, si existía el espacio en blanco, no importa una adulteración ni enerva su fuerza ejecutiva—Jur. Com., tom. 2, pág. 224, Ser. 2ª.

Agregación—Véase: *Expediente terminado*, núm. 1.

1c. Agresión—A un hermano del homicida, no puede es-

1a—Como igualmente la forma en que esta indemnización debe ser abonada—Art. 1081, Cód. Civ.

1b—Cuando se firma una letra sin designar la persona á cuyo favor se estiende el documento, se considera que es al portador. Hablo de letra, porque los pagarés á la orden están equiparados á ella, art. 916, Cód. de Com. antiguo. Si están al portador puede éste ejercer los mismos derechos que si hubiesen sido otorgados á su nombre individual, inc. 2ª del art. citado. Por otra parte el art. 776, inc. 4ª prevee el caso y establece terminantemente el derecho del portador de poner su nombre cuando éste se hallase en blanco. No puede pues ser considerado como adulteración un hecho expresamente autorizado por la ley. De aquí también la ninguna influencia que puede ejercer ese mismo hecho respecto de la fuerza ejecutiva del documento.

1c—Mientras no haya peligro inminente no se llenan las exigencias de la ley, pues siempre que no se comprueba una necesidad racional del medio de defensa empleado, éste no puede considerarse legal

AGR-ALE

cusar el crimen, mientras no resulte que hubo peligro inminente para la vida—Jur. Crim., tom. 3, pág. 318, Ser. 2ª.

Agresión—Véase: *Amenaza*, núms. 1 y 2—*Excepción de legítima defensa*, núms. 1 y 2—*Lesiones*, núm. 2.

1a. Afirmaciones—Las terminantemente asertivas de los peritos, forman plena prueba—Jur. Civ., tom. 6, pág. 66, Ser. 2ª.

1 Afirmaciones contradictorias—Del demandante, los jueces solo pueden considerar verídicas las primeramente consignadas—Jur. Civ., tom. 7, pág. 580, Ser. 2ª.

1b. Albacea—Este es personalmente responsable de los honorarios del contador que presenta á su nombre la rendición de cuentas, sin perjuicio del derecho de repetición contra la testamentaria—Jur. Civ., tom. 7, pág. 546, Ser. 2ª.

Alegato de bien probado—Véase: *Prescripción*, número 2.

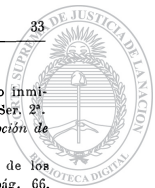
1c. Alegatos—El auto que declara decaído el derecho de presentarlos, es inapelable—Jur. Civ., tom. 6, pág. 483, Ser. 2ª.

y por el contrario puede esa defensa convertirse en ataque cuando excede sus justos límites.

1a.—Toda vez que los peritos tengan título de suficiencia, pues en caso contrario puede el Juez separarse de ese dictamen espresando los fundamentos que para ello tuviere, art. 178, Cód. de Proc. Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Peritos* núms. 1 y 6; *Prueba* núm. 10 y nota; *Informes periciales* núms. 1 y 2; tom. 1º verb. *Informes periciales* núm. 1429; *Peritos* núms. 1993 y 1994.

1b.—Presentada la cuenta bajo el nombre del albacea, se presume que éste solicitó los trabajos del contador, y es principio de derecho en materia de locación de servicios que el que solicita los trabajos es quien debe abonarlos. Esta acción directa que acuerda la ley no implica que el inmediato obligado, no tenga derecho á repetir lo pagado de aquel en cuyo beneficio se hizo el trabajo. Así en el caso ocurrente, el albacea según los casos, tendría ó no derecho á repetir lo pagado.

1c.—No decide un artículo ni causa gravamen irreparable.





ALE

Alegatos—Véase: *Posiciones*, núm. 12—*Diligencias de prueba*, núm. 11.

1a. Alevosía—Existe siempre que el ataque tenga lugar de improviso tomando á la víctima desprevenida, aun cuando se encuentre rodeada de numeroso séquito—Jur. Crim., tom. 4, pág. 66, Ser. 2ª.

2. Alevosía—Solo puede conceptuarse circunstancia agravante del homicidio y no constitutiva del asesinato—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 200, Ser. 2ª.

3. Alevosía—Existe siempre que se ataca á la víctima de improviso y con cautela tomándola indefensa, pero estas circunstancias no bastan para probar que existió premeditación—Jur. Crim., tom. 2, pág. 195, Ser. 2ª.

Alevosía—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 3—*Homicidio simple*, núm. 1—*Asesinato*, núm. 1—*Lesiones*, núm. 4.

1a—Art. 209, Cód. Pen. ant., y 84, inc. 2º del vigente. Véase: verb. *Alevosia*, núm. 3.

2—Según disposición de nuestro Código Penal anterior—art. 207—se requería la *premeditación* y la *alevosia* para que el homicidio fuese calificado de asesinato. El texto decía *premeditación ó alevosia*, pero se consideró que esta conjunción fué tan solo un error de imprenta debiendo ser en realidad la conjunción *y*—Véase á este respecto verb. *Homicidio*, núm. 1340 de la Inst., tom. 1º.—El Cód. Pen. vigente en su art. 84, inc. 2º, considera la *alevosia* como una circunstancia agravante del homicidio, y el art. 95 castiga «con la pena de muerte el homicidio cometido por precio ó con *alevosia*.» Puede consultarse con provecho sobre esto la obra del Dr. Rivarola «Exposición y Crítica del Cód. Pen.», núms. 162 y 166.

3—En el caso ocurrente el Dr. Barra dijo que «la tentativa de asesinato estaba determinada, puesto que concurrían los requisitos constitutivos de la *alevosia* y cuya circunstancia basta para caracterizar dicho crimen.» En esta parte el Dr. Barra se atenía á la letra de la ley, que establece que el asesinato es el homicidio cometido con *premeditación ó alevosia*; siendo así que los Tribunales le han dado siempre una interpretación más favorable al delincuente, estableciendo la necesidad de la concurrencia de los dos requisitos ó circunstancias, la *premeditación y la alevosia*. Véase á este respecto la nota precedente.

ALH—ALI

Alhajas—Véase: *Donación*, núm. 2.

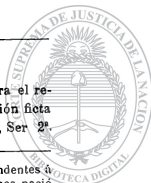
Alimentado—Véase: *Bienes*, núm. 1.

Alimentarios—Véase: *Bienes*, núm. 1.

1. Alimentos—Si bien los alimentos al hijo natural, en

1—No es indispensable que el reconocimiento resulte por confesión del demandado, basta que resulte comprobado en autos de una manera sumaria, el vínculo, para hacer procedente la prestación de alimentos: esta comprobación puede ser hecha por cualquier de los medios de prueba admitidos por la ley, como la testimonial. Según disposición de la Ley 7, tit. 19, Part. 4ª, no es necesaria una prueba plena para que el Juez decrete los alimentos, solo se requiere la comprobación de antecedentes suficientes que hagan verosímil la filiación ó parentesco. Esta ley establece que: «Si uno llamándose hijo de otro, demandase al mismo para que lo críe y provea lo necesario, y el demandado negase que tal fuese su hijo, el Juez brevemente, y sin guardar la forma de juicio que se debe guardar en los otros pleytos, averiguará la verdad por la fama del lugar, por juramento del que se tiene por hijo ó por otro medio de prueba, y resultando que es tal hijo el demandante, mandará al demandado que lo críe y provea, quedando sin embargo á salvo su derecho á los dos para probar que el dicho es ó no tal hijo.» Por otra parte el art. 375 del Cód. Civ. dispone que «el Juez desde el principio de la causa, ó en el curso de ella y según el mérito que arrojasen los hechos podrá decretar las prestaciones de alimentos para el actor.» No debe olvidarse que el art. 607 del Cód. de Proc., teniendo en cuenta la índole sumarisima de este juicio, ordena que no se admita discusión alguna sobre el derecho á percibir los alimentos, ni sobre su entidad, dejando á salvo todas estas cuestiones para ser ventiladas en juicio ordinario: de donde surge necesariamente, no solo el derecho del hijo natural de intentar la prestación de alimentos, sin subordinarla á la promoción previa de un juicio ordinario, sino lo que es más que la prueba del título no haya de ser concluyente, bastando que á manera de lo preceptuado para los embargos preventivos (art. 448) que resulten probados hechos que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado. Debemos por último recordar que esta cuestión ha sido ya luminosamente debatida en una causa que corre publicada en el tom. 5, pág. 432, Ser. 1ª de la Jur. Civ., donde la Cámara resolvió por mayoría de un voto que «los hijos naturales carecen de acción sumaria para exigir alimentos, mientras no hayan sido reconocidos ó declarados tales por Juez competente en juicio contradictorio.» En el caso que motivó esta resolución la justificación del





ALI

juicio sumario, no requieren el ordinario previo para el reconocimiento, requiere que éste resulte por confesión ficta ó espresa del demandado—Jur. Civ., tom. 4, pág. 116, Ser. 2ª.

título se limitó á una información sumaria de testigos tendientes á demostrar las relaciones amorosas y que de esas relaciones nació la hija natural para quien se pedía alimentos. Se dijo por la mayoría que esta comprobación no era suficiente para justificar el título, aún en la hipótesis que lo fuera para probar los hechos sobre que versaba, porque los hijos naturales que tienen derecho á pedir alimentos son los que han sido reconocidos tales por sus padres, ó declarados por Juez, cuando sus padres se han negado á reconocerlos. Se dice que una interpretación contraria á este principio sería peligrosísima dando lugar á abusos, pues nada sería más fácil que establecer las relaciones de filiación natural por medio de testigos en un juicio en que el pretendido padre no ha sido oído ni siquiera citado. Este peligro no existe cuando se trata de padres legítimos, pues en este caso el daño es puramente material y de fácil reparación. Estos son argumentos dignos de tenerse en cuenta cuando se trate de reformar nuestra legislación en ipatería de alimentos, pero no son admisibles actualmente en el estado y en la forma en que se ha legislado el procedimiento á observarse en el juicio de alimentos. Los que sostienen la teoría contraria á esta opinión aducen razones ilevantables, pues entorpecen la ley por la ley misma. Una sentencia en que se condena á prestar alimentos á un hijo natural y que reconoce por fundamento la comprobación de la existencia de las relaciones amorosas y que de esas relaciones resultó un hijo que pide alimentos, es una sentencia que reconoce por base la verdadera ley y la verdadera doctrina. La obligación que tienen los padres de alimentar á sus hijos naturales no dependen de la voluntad de ellos: ó sea de que quieran ó no reconocerlos por tales hijos, sino de la ley que les impone esa obligación por el hecho solo de haberles dado el ser, ó sea por la calidad de tales hijos; que es el título que éstos deben justificar por los medios probatorios que las leyes han puesto á su alcance, forma que está determinada por el art. 375 del Cód. Civ. y 603 del Cód. de Proc. Este último artículo resuelve netamente la cuestión cuando dice que la justificación del título, que en este caso es la filiación, *se puede hacer por sumaria información de testigos sin citación ni otra solemnidad.* Hay otro argumento más que puede aducirse en pró de esta última opinión, y es el fundamento mismo de la ley al instituir la facultad de pedir los alimentos provisorios: ella se funda en la necesidad de conservar la vida del que necesita ser alimentado; en que una pres-

ALI

2. Alimentos—Justificados los extremos que la ley requiere para exigir alimentos, la obligación de prestarlos es ineludible—Jur. Civ., tom. 4, pág. 317, Ser. 2ª.

3. Alimentos—Para su prestación á un hijo natural, no es necesaria la declaratoria previa de ese carácter hecha en juicio ordinario, basta la testimonial del sumario—Jur. Civ., tom. 6, pág. 331, Ser. 2ª.

4. Alimentos—El tutor del menor natural, es el único que tiene personería en el espediente para asegurar los alimentos del menor—Jur. Civ., tom. 7, pág. 339, Ser. 2ª.

5. Alimentos—La madre natural, puede por cuerda separada, ejecutar los alimentos decretados y no pagados antes

tación tardía puede acarrear la muerte al ser que tenía el derecho sagrado estatuido por la misma ley natural, de ser alimentado. Nosotros preguntamos ¿no milita la misma razón cuando se trata de los alimentos para los hijos naturales? ¿No son los hijos naturales tan susceptibles de morir de hambre como los legítimos? La ley no ha querido hacer distinciones cuando se trata de la conservación de la vida; para ella es tan preciosa la vida del hijo natural como la del hijo legítimo, y viene en su ayuda sin hacer distinciones odiosas.

2—Arts. 602 y 604, Cód. de Proc.

3—Se ve en este caso que la Cámara ha vuelto sobre sus pasos en la doctrina consagrada en el núm. 1, quedando consiguientemente sentada una doctrina opuesta á la anterior. Es de esperarse que la jurisprudencia quedará hecha en el sentido del presente sumario, pues en él se consulta la ley con recto criterio. El presente fallo se fundó en la Ley 7, tit. 19, Part. 4ª, en el art. 375 del Cód. Civil y 607 del Cód. de Proc., que ordenan no se admita discusión sobre el derecho á percibir los alimentos ni sobre su entidad, dejando cualquiera reclamación sobre esos puntos para ser ventilada en juicio sumario.

4—Si es que hay tutor nombrado, pues de lo contrario la madre tiene personería y solo desaparece ésta cuando se ha proveído al nombramiento de tutor; á éste le corresponde tomar las medidas tendentes á alimentar á su pupilo—Art. 412, Cód. Civ.

5—Este sumario no fué materia de resolución en la Cámara, pero el principio legal que consagra está en concordancia con la nota precedente.



ALI

del nombramiento del tutor—Jur. Civ., tom. 7, pág. 339, Ser. 2ª.

6. Alimentos—Justificados los extremos que la ley requiere, la sentencia que condena al pago debe confirmarse—Jur. Civ., tom. 7, pág. 569, Ser. 2ª.

7. Alimentos—No puede considerarse injusta la sentencia que condena á su pago, si están justificados los extremos exigidos por la ley—Jur. Civ., tom. 7, pág. 593, Ser. 2ª.

8. Alimentos—Consentida la sentencia que los fija en juicio sumario, solo puede modificarse en el ordinario: toda escepción que se oponga á la ejecución es improcedente—Jur. Civ., tom. 7, pág. 564, Ser. 2ª.

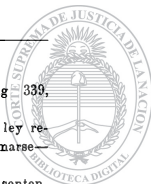
9. Alimentos—En el juicio de alimentos no puede darse

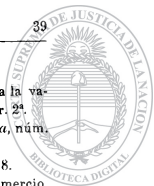
6—Art. 604, Cód. de Proc.

7—Arts. 602 y 604 del Cód. de Proc.

8—Se trata de la ejecución seguida en virtud de una sentencia en que se fija la cuota alimenticia. Iniciado el juicio ejecutivo, en la estación oportuna se opone la excepción de incompetencia. Esta es rechazada, porque tratándose de la ejecución de una sentencia, es Juez competente el que la dictó. Debe asimismo tenerse presente que la excepción de incompetencia no se encuentra comprendida entre las únicas declaradas admisibles por el art. 539 del Cód. de Proc. No solo esta excepción no es admisible al ejecutar los alimentos fijados, sino que no se admite excepción alguna, pues de lo contrario se admitiría una discusión que la ley ha querido dejar para el juicio ordinario—art. 607, Cód. de Proc.—El objeto del juicio de alimentos es por su naturaleza sumarísimo, y si se admitiera discusión en el juicio sumario se desnaturalizaría su carácter y la discusión en vez de trabarse en el juicio ordinario, se trabaría en el sumario. Por otra parte, las excepciones dilatorias son un medio para deferir la entrada al juicio, siendo así que aquí el demandado no debe entrar al juicio en el que no es parte: no siendo parte no puede oponer defensas que tiendan á dilatar su entrada. La ley ha querido que el alimentario no tenga intervención en el juicio sumario,—art. 605 del Cód. de Proc.—consecuente con la voluntad de la ley debe negársele el derecho de oponer excepciones.

9—Art. 607, Cód. de Proc. Véase la nota precedente en su última parte.





ALI—ALQ

audiencia al demandado, aun cuando éste desconozca la validez del matrimonio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 379, Ser. 2ª.

Alimentos—Véase: *Confesión*, núm. 1—*Competencia*, núm. 4—*Sentencia*, núms. 8 y 9—*Honorarios*, núm. 8.

Alimentos provisorios—Véase: *Sentencia*, núm. 8.

1. Alquiler—La falta de pago del de una casa de comercio, no implica la efectiva cesación de pagos á los efectos de fijar el día de la quiebra—Jur. Com., tom. 3, pág. 399, Ser. 2ª.

2. Alquiler—El de la casa, como deuda civil, no puede servir de base para fijar la efectiva cesación de pagos—Jur. Com., tom. 3, pág. 407, Ser. 2ª.

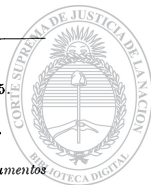
3. Alquileres—Su ejecución, cualquier que sea el monto, se conceptúa incidente del desalojo y corresponde á la jurisdicción que conoció en la rescisión del contrato—Jur. Civ., tom. 4, pág. 591, Ser. 2ª.

Alquileres—Véase: *Mora*, núm. 1—*Acción*, núm. 2—*Deuda impaga*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 5.

1—El art. 1511 del Cód. de Com. ant., establece que para ser considerado un comerciante en estado de quiebra, se requiere que se deje de pagar sin razón particular alguno ó algunos créditos *comerciales*: la obligación de pagar alquileres no es comercial. Esto por una parte, debiendo además tenerse presente que la Cámara estableció en el caso que nos ocupa, que la falta de pago de los alquileres no podía constituir el estado de insolvencia, porque se había explicado por los interesados las razones que tenían para no verificar ese pago, las que la Cámara consideró atendibles. Puede verse además el art. 1526.

2—Véase nota precedente.

3—Esto es solo exacto cuando se ha entablado demanda por rescisión y desalojo. Decretada la rescisión, ordenado el desalojo y condenada la parte á pagar el alquiler durante el término acordado para el desalojo, es evidente que el único Juez competente es el que dictó la sentencia, pues se trata tan solo del cumplimiento de la sentencia. Pero si una misma parte entabla juicio por separado de desalojo y cobro de alquileres, es evidente que la competencia se determinará por el importe de los alquileres sin tener en cuenta el juicio de desalojo.

**ALT—APE**

Alteraciones—Véase: *Instrumento privado*, núm. 5.

Aluvión—Véase: *Prueba*, núm. 6.

Alza y baja—Véase: *Especulación ó agio*, núm. 1.

Allegados—Véase: *Amenazas*, núm. 1.

Amanuense—Véase: *Testamento*, núm. 6—*Instrumentos públicos*, núm. 4.

1a. **Amenaza**—Esta no es suficiente para constituir la agresión que la ley requiere para justificar la legítima defensa, y solo puede calificarse como circunstancia atenuante—Jur. Crim., ton. 1. pág. 581, Ser. 2ª.

2. **Amenaza**—Para que el delito sea punible ante la ley, se requiere que la conminación sea contra el acusador ó su familia ó allegados—Jur. Crim., tom. 1, pág. 479, Ser. 2ª.

Amenazas—Véase: *Calumnia*, núm. 2.

Amigables componedores—Véase: *Prestación de servicios*, núm. 2—*Árbitros*, núm. 3.

Ampliación—Véase: *Inventario*, núm. 3.

Animal—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

Anotación—Véase: *Embargo*, núm. 5.

Antidatados—Véase: *Actos privados*, núm. 1.

1b. **Apelable**—La disposición del art. 505 del Cód. de Procedimientos, solo es aplicable al ejecutado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 2ª.

1a—La mera amenaza, dice Pacheco, en el tom. 1, pág. 150, de su obra, no es una ofensa real á la que debe oponerse una ofensa activa. La amenaza no es agresión.

2—Art. 296, Cód. Pen. ant., y 168 del vigente.

1b—El objeto del legislador al establecer la inapelabilidad de los autos que no estén determinados en el art. 505 del Cód. de Proc., ha sido el hacer que el acreedor sea pagado á la brevedad posible sin dilaciones ni demoras: pero si el mismo interesado en cuyo beneficio se ha establecido la restricción legal renuncia á ese beneficio, la razón de la inapelabilidad del auto desaparece.

APE

2. Apelable—El auto sobre tenencia de los hijos es apelable—Jur. Civ., tom. 8, pág. 485, Ser. 2ª.

Apelable—Véase: *Auto*, núm. 2—*Incompetencia*, núm. 1—*Comerciante*, núm. 3.

Apelables—Véase: *Autos*, núm. 1.

1a. Apelación—Es improcedente el recurso de apelación en el juicio ejecutivo, cuando el ejecutado no ha opuesto excepciones ó lo ha hecho fuera de término—Jur. Civ., tom. 8, pág. 346, Ser. 2ª.

Apelación—Véase: *Juicio*, núm. 3—*Juicio ejecutivo*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 5—*Nulidad*, núm. 5.

Apelante—Véase: *Sentencia*, núm. 4.

Apellido—Véase: *Error*, núm. 1.

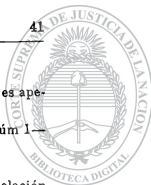
1b. Apéndice—Para nombrar la persona que debe practicar el de la cuenta particionaria, se requieren las mismas formalidades que la ley exige para ésta—Jur. Civ., tom. 4, pág. 596, Ser. 2ª.

Apercibimiento—Véase: *Auto*, núm. 1—*Oblación*, núm.

2—Una resolución semejante afecta no solo el interés de los hijos sino que al mismo tiempo resuelve los derechos de los padres. No hay duda pues que el auto causa gravamen irreparable, según él consulte más ó menos acertadamente los derechos de cuya protección se trata; en cuyo caso está regido por el art. 226 del Cód. de Proc.

1a—Si el citado de remate no opone excepción dentro del término del art. 485 del Cód. de Proc., la sentencia de remate no será apelable, según disposición del art. 501 del mismo. Las excepciones opuestas fuera de término se consideran como no opuestas, pues según el art. 485 citado, el término para oponerlas es perentorio. No debe olvidarse que la inapelabilidad de este auto solo se refiere al ejecutado y que por consiguiente si la sentencia de remate fuese no haciendo lugar á que la ejecución no se lleve adelante, esa sentencia sería apelable para el ejecutante—Véase: verb. *Apelación*, núm. 1, Inst.

1b—La cuenta particionaria y el apéndice son dos operaciones completamente distintas é independientes la una de la otra, y como tales las actuaciones llevadas á cabo para la primera terminan con ella. El art. 688 del Cód. de Proc. no hace distinción alguna al respecto.



APL—APO

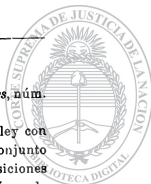
- 1—*Comprador*, núm. 9—*Incidentes*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 4—*Remate judicial*, núm. 1—*Título*, núm. 1.

1a. Aplicabilidad ó inaplicabilidad—La de una ley con relación á su benignidad, debe declararse según el conjunto de sus disposiciones, sin que puedan aplicarse disposiciones de una y otra que importaría la aplicación simultánea de ambas, inadmisibile en derecho—Jur. Crim., tom. 2, pág. 133, Ser. 2ª.

1b. Apoderado—O mandatario de una de las partes, no está obligado á declarar como testigo en el juicio que interviene—Jur. Civ., tom. 4, pág. 201, Ser. 2ª.

1a—La aplicación de ambas leyes no es inadmisibile en derecho de una manera absoluta. La resolución se funda en la opinión del Dr. Cortés, quien sostiene que: «Cuando el art. 48», que es el que rije el caso, «prescribe que se apliquen en los casos que indica la ley más benigna, habla de la ley en toda su integridad, es decir en el conjunto de las disposiciones que la constituyen: lo cual es enteramente diverso á prescribir que de las dos leyes penales á que se refiere, se tome en cada una de ellas la parte más benigna. El Cód. Penal, ya sea que se trate del antiguo ó del que rije, sin ningún género de duda, es una sola ley que ha sido sancionada de una sola vez para empezar á regir simultáneamente y en todas sus partes, que son los diversos artículos de que consta, los que no pueden considerarse distintas leyes penales » A esta argumentación que merece respeto por la autoridad del magistrado que la emite, yo contestaré con el Dr. Rivarola «que se ha entendido por algunos tribunales», como en el caso que nos ocupa, «que el art. 48 prescribe la aplicación de un Código ú otro en todas sus disposiciones referentes al caso en juicio, ó lo que es lo mismo, que no pueda tomarse de un Código las disposiciones favorables al procesado y desecharse las adversrs. Yo no acepto en absoluto esta opinión, si se trata de disposiciones perfectamente separables é independientes entre sí, no veo qué inconveniente puede haber en la aplicación de dos leyes ó disposiciones independientes entre sí.» Consideramos perfectamente aceptable esta última opinión que tiene en su apoyo autoridad de criminalistas notables como Garroud—Véanse: *Exposición y crítica del Código Penal* por el Dr. Rodolfo Rivarola, tom. 1ª, pág. 26, núms. 25, 26 y 27.

1b—El apoderado es parte en el juicio, como tal no puede ser testigo. Es parte porque puede ser llamado á absolver posiciones. El



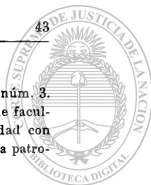
APO

Apoderado—Véase: *Acción*, núm. 5—*Calumnia*, núm. 3.

1. Apoderado especial—De un ausente, no tiene facultad para manifestar su conformidad ó disconformidad con los honorarios devengados por el abogado que lo ha patrocinado—Jur. Com., tom. 2, pág. 61, Ser. 2º.

El apoderado representa la persona del poderdante con quien se identifica. En este sentido el apoderado debe rendir la prueba que hace al derecho de su poderdante, velando por el éxito del juicio sin cometer traición, lo que no se podría evitar si estuviese obligado á comparecer como testigo. No es posible tampoco conciliar ambos roles, pues el apoderado necesariamente tiene que conocer los puntos vulnerables del litigio que sigue, cuyo conocimiento tiene su fuente en el mismo poderdante, quien le instruye de todos los antecedentes, y en este caso no le queda al apoderado sino uno de estos dos caminos: ó descubre los datos suministrados por el poderdante ó perjura. La ley no puede colocar á las personas en situaciones violentas como esta.

1—Porque esta manifestación importaría el reconocimiento de un crédito, siendo esto contrario á las prescripciones que rigen el mandato especial que debe limitarse á los autos para que ha sido dado, dice la Cámara. Pero nosotros no estamos conformes con esta resolución, pues el cobro de honorarios en este caso es un incidente del principal por más restringido que sea el mandato. Hay dos especies de mandato especial: la una para negocios ciertos hasta conducirlos á su fin, y la otra para un determinado acto aislado de un determinado negocio—última parte de la nota al art. 1879. Cód. Civ. El poder especial para un pleito está necesariamente comprendido en la primera especie de poderes especiales. En estos casos el mandatario tiene la facultad de entender en el pleito principal y en sus incidentes, pues en muchos casos los juicios no tendrían fin si no se solucionarían previamente esos incidentes. No se puede argumentar con el art. 1884 del Cód. Civ., porque en contra de su disposición está el art. 17 del Cód. de Proc., que establece el principio de que el poder conferido para un pleito determinado se entenderá también que comprende la facultad de intervenir en los incidentes de lo principal y ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela del litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiere facultad especial. La resolución establece que la excepción de este artículo está comprendida entre los casos para los cuales la ley exige un poder especial—Art. 1881, inc. 17, Cód. de Proc.—Pero á esto contestamos diciendo, que la manifestación de conformidad ó disconformidad con una



APRO—ARB

Aprobación judicial—Véase: *Papel sellado*, núm. 1.

Aproximación sexual—Véase: *Violación*, núm. 1.

Arbitraje—Véase: *Excepción de litispendencia*, núm. 6.

Arbitrio judicial—Véase: *Demanda*, núm. 6—*Juez* número 4.

Árbitro—Véase: *Recusación*, núm. 4—*Prejuzgamiento* núm. 1.

1. Arbitros—Cuando la demanda pide el pago de suma determinada, éstos solo pueden conocer y resolver con arreglo á ella, aun cuando esa suma sea el producto de una liquidación—Jur. Com., tom. 4, pág. 300, Ser. 2ª.

2. Arbitros—Aceptado el cargo por éstos, solo puede aceptarseles la renuncia, si se responsabilizan por los daños y perjuicios que se irrogaen á las partes—Jur. Com., tom. 1, pág. 219, Ser. 2ª.

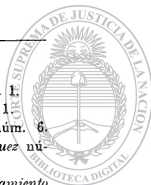
3. Arbitros—Justificada la prestación de servicios, el beneficiado por ellos debe abonar el precio, que en caso de no haberse estipulado, deberá fijarse por arbitros arbitradores amigables componedores—Jur. Civ., tom. 8, pág. 568, Ser. 2ª.

ncenta de honorarios no implica el reconocimiento de una deuda, pues esta manifestación aún hecha por el mismo patrocinado no lo obliga á su pago, porque puede al ser citado de remate oponer excepciones. Así lo tiene resuelto la misma Cámara, como puede verse en el tom. 5, pág. 481, Ser. 1ª de la Jur. Civ. De donde resulta que el apoderado tiene facultad legal para prestar su conformidad ó disconformidad con la cuenta de honorarios que se presenta.

1—Es regla de procedimiento, que la sentencia debe ajustarse á las acciones deducidas en juicio—Art. 216, Cód. de Proc.—Si la demanda se promueve al solo objeto de que el demandado pague cantidades determinadas de dinero, no puede otra cuestión ser materia de resolución, pues se violaría el art. 216 citado.

2—A no ser que se aduzca una causal atendible, pues desde el momento en que un árbitro acepta el cargo, puede ser compelido á que lo cumpla bajo pena de responder por los daños y perjuicios—Arts. 778 y 799, inc. 3ª, Cód. de Proc.

3—Art. 1627, Cód. Civ.



ARB—AREA

Arbitros—Véase: *Prestación de servicios*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 9.

1a. Arbitros-arbitradores—La existencia de fraude, error, dolo, simulación ú omisión culpable en la formación ó ejecución de contratos comerciales, debe ser declarada por arbitros-arbitradores—Jur. Com., tom. 3º, pág., 288, Ser. 2ª.

Arbitros arbitradores—Véase: *Precio*, núm. 1—*Cuestiones*, núm. 1—*Laudo*, núms. 2 y 3—*Socios*, núm. 1—*Contrato de sociedad*, núm. 1.

Archivo general—Véase: *Protocolos*, núm. 1.

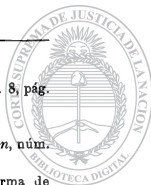
Area—Véase: *Comprador*, núm. 2—*Diferencia*, núm. 1.

1b. Area determinada—La venta por un precio total, de una área determinada, compuesta de distintas fracciones, cuya, estension se fija en las primeras, obliga al vendedor á entregar en la última la cantidad total vendida, si le fuere materialmente imposible la entrega de alguna de las

1a—Art. 208, Cód. de Com.

1b—El caso es el presente: el vendedor enagena siete leguas de campo que deben integrarse en tres fracciones: 1ª una, cuya superficie se compone de tres y media leguas cuadradas poco más ó ménos; 2ª Otra compuesta de una y media legua; y por último la 3ª se compondrá del terreno necesario hasta completar las siete leguas vendidas se tomaria de un campo determinado que tenia una estension considerable. Aquí no se puede decir que la venta se hubiese hecho en tres fracciones distintas y que se hubiera determinado la superficie de dos de ellas. La convención habla de una sola venta con una estension determinada compuesta de tres fracciones y solo determina la superficie de dos de ellas, que son la primera y la segunda, dejándose indeterminada la tercera. Es evidente que la intención tanto del vendidos como del comprador fué integrar con la tercera fracción la totalidad de las tres leguas vendidas y es con este objeto que se dejaba indeterminada la última fracción: si la venta se hizo de una área determinada y el total por un precio también determinado es evidente que si por cualquiera causa llegase á faltar cualquiera de las dos primeras fracciones, el área total se tiene que completar con el último lote. El vendedor en este caso recibe exactamente la misma cosa vendida—arts. 740 y 1426 del Cód. Civ.



**ARM—ARR**

fracciones de estension determinada—Jur. Civ., tom. 8, pág. 437, Ser. 2ª.

Arma—Véase: *Tentativa de homicidio*, núm. 1.

Armas—Véase: *Desacato*, núms. 1 y 2—*Provocación*, núm. 6—*Tentativa*, núm. 1.

1a. Arma de fuego—El hecho de disparar un arma de fuego debe ser penado con dos años de prisión—Jur. Crim., tom. 4, pág. 210, Ser. 2ª.

2. Arma de fuego—El hecho de dispararla intencionalmente, debe ser castigado con prisión de uno á tres años, con prescindencia del caso de que por ser leve la herida la pena aplicable fuese menor—Jur. Crim., tom. 3, pág. 74, Ser. 2ª.

3. Arma de fuego—Estando penado el hecho de dispararla contra otra persona, corresponde al reo la escepción de que el tiro fué al aire y sin intención criminal—Jur. Crim., tom. 2, pág. 427, Ser. 2ª.

Artificio—Véase: *Dolo*, núm. 1.

1b. Arraigo—Procede esta escepción siempre que el demandante reconozca tener su domicilio en otra jurisdicción—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

2. Arraigo—Esta escepción solo es procedente cuando el

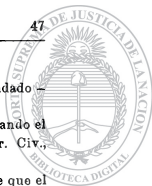
1a—Será penado con uno á tres años, dice el art. 99 del Cód. Pen. vigente.

2—Véase nota precedente.

3—En los delitos se presume el dolo, de donde resulta que es deber del acusado al menos demostrar la verosimilitud de las circunstancias en que trata de escusar ó atenuar esa responsabilidad impuesta por ministerio de la ley.

1b—El art. 85 del Cód. de Proc., así lo dispone. La ley no exige ningún otro requisito, por consiguiente no puede tener influencia alguna la circunstancia de que el actor sea de reconocida responsabilidad en su domicilio, ó que la cosa objeto de la demanda sea suficiente para garantizar las responsabilidades inherentes á ella.

2—Art. 85, Cód. de Proc.

**ARR**

actor no habita en la misma jurisdicción que el demandado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 368, Ser. 2ª.

3. Arraigo—Esta escepción solo es procedente cuando el demandante no tiene domicilio en la Capital—Jur. Civ., tom. 8, pág. 26, Ser. 2ª.

4. Arraigo—Esta escepción es procedente siempre que el demandado se encuentre domiciliado fuera de la jurisdicción del Juez que conoce en el litigio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 313, Ser. 2ª.

5. Arraigo—Esta escepción, es procedente siempre que el demandado reconoce tener su domicilio fuera de la jurisdicción del Juez del litigio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 384, Ser. 2ª.

6. Arraigo—La declaratoria de pobreza á favor del demandante permite dejar sin efecto el arraigo del juicio por fianza ó depósito, bastando la simple caución juratoria—Jur. Civ., tom. 8, pág. 321, Ser. 2ª.

Arraigo—Véase: *Acusador*, núm. 2.

1. Arrendamiento—Cuando la cosa materia del contrato

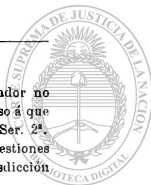
3—Art. 85 del Cód. de Proc.

4—Dada la naturaleza de esta escepción ella se determina por la falta de domicilio del actor en el lugar del juicio y no por el domicilio ulterior—Véase art. 85, Cod. de Proc.

5—Véase notas núms. 2 y 3.

6—Ante la disposición terminante del art. 601 del Cód. de Proc., desaparece la obligación de arraigar prescrita por el art. 85. Tampoco se puede oponer á esta interpretación la circunstancia de haber pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia en que se obliga á un litigante á arraigar, porque el art. 85 es una disposición de carácter general que se refiere á todos los litigantes, pero que sufre modificaciones en el tit. XIX del Cód. de Proc. Si á pesar de la declaratoria de pobreza se exigiese el arraigo del juicio, resultaría ilusorio el propósito de la ley que es proteger y amparar á los que no tienen los medios pecuniarios para seguir un litigio. En este estado no cabe otra fianza que la juratoria del art. 601 citado.

1—Es de presunción legal que las cosas deben arrendarse con el



ARR

por su forma es adaptable á diferentes usos, el locador no está obligado á ponerlo en condiciones de servir al uso á que la destine el locatario—Jur. Civ., tom. 5, pág. 517, Ser. 2^a.

2. Arrendamiento—El conocimiento de las cuestiones que se susciten sobre minas corresponde á la jurisdicción civil—Jur. Civ., tom. 5, pág. 124, Ser. 2^a.

3. Arrendamiento—El acreedor por esta causa, no está obligado á esperar las resultas del juicio de quiebra—Jur. Com., tom. 4, pág. 38, Ser. 2^a.

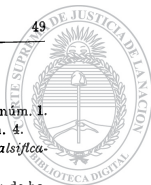
4. Arrendamiento—El Superior no puede alterar, disminuyendo el precio, el arrendamiento fijado por el Inferior, si la sentencia ha sido consentida por el locatario—Jur. Civ., tom. 8, pág. 160, Ser. 2^a.

fin de dedicarlas al uso para que sirven cosas semejantes y entonces no puede el locatario obligar al locador á poner la cosa en estado de servir para el destino que á él se le antoje—art. 1554, Cód. Civ.

2—No se trata en este caso de una empresa de fábrica que es lo que constituye acto de comercio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7, inc. 4, Cód. de Com. ant., iguni al art. 8 del vigente. Se trata del arrendamiento de un inmueble que no puede considerarse mercantil por su naturaleza misma. El Cód. de Minería en su art. 366 dice que las minas pueden ser objeto de arrendamiento como bienes raíces. Por otra parte, la jurisdicción comercial es de escepción, y debe regir para los casos especialmente determinados por él: el Cód. de Com. no tiene ninguna disposición que establezca la comercialidad de la explotación de minas. Además, para que el contrato de arrendamiento se considere mercantil, es necesario que tenga por objeto bienes muebles—art. 578, Cód. de Com. ant.

3—Cuando se trate de verificar el pago con el producido de las cosas afectadas al privilegio del locador.

4—En el caso ocurrente se había estipulado que «el desalojo se verificaría indefectiblemente un año después de celebrado y que si no lo verificaba quedaría sin efecto el convenio, pagando en vez del precio estipulado, el arrendamiento de costumbre.» El Juez fijó á su prudente arbitrio el arrendamiento, y la sentencia quedó consentida para el locatario, habiendo apelado el locador fundándose en la exiguidad del precio fijado al arrendamiento. Es evidente que el Superior no puede reducir ese arrendamiento porque aquel á quien su

**ARR—ASE**

Arrendamiento—Véase: *Juez*, núm. 2.

Arrendamientos—Véase: *Jurisdicción comercial*, núm. 1.

Arrendatario—Véase: *Contrato de locación*, núm. 4.

Arresto—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 10—*Falsificación*, núm. 6.

1a. Ascendientes—El cónyuge, para la declaratoria de herederos que debe hacerse á su favor, cuando hay gananciales, debe justificar el fallecimiento de los ascendientes del esposo muerto, no basta la prueba que resulta de su falta de presentación al llamamiento hecho por edictos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 124, Ser. 2ª.

1b. Asegurado—El que no puede dar las explicaciones y

elevado precio perjudicaba dejó consentir la sentencia. No debe olvidarse que la Cámara ha resuelto en otro caso, que el Juez no tiene facultad para fijar el monto del alquiler cuando no hay precio estipulado, sino que debe ser designado por peritos árbitros—Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Arrendamiento*, núm. 1 y su nota.

1a—El simple llamamiento por edictos á los que se consideran con derechos á los bienes quedados por fallecimiento de un cónyuge y el resultado negativo de esos edictos son una prueba *negativa* que puede considerarse suficiente cuando conste que no existen interesados á quienes se trata de preterir, pero si esas personas son de una existencia necesaria, pues el esposo no pudo existir sin padres, es evidente que el resultado negativo de los edictos no es una prueba suficiente de su fallecimiento. Es necesario una prueba cierta, positiva de ese fallecimiento, que reúna las condiciones exigidas por la ley, pues los padres son herederos forzosos de sus hijos en concurrencia con los cónyuges de estos—art. 3571, Cód. Civ.—y una declaratoria de herederos sin la constatación formal del fallecimiento importaría una verdadera preterición de herederos. Una vez hecha la declaratoria de herederos á favor del cónyuge, debe además éste pedir la posesión de la herencia—Art. 3412, *ibid.*

1b—El art. 644 del Cód. de Com. ant., dispone que toda póliza ó contrato de seguro debe contener todas las circunstancias cuyo conocimiento sea de interés real para el asegurador, así como *todas las demás estipulaciones hechas por las partes*. El art. 636 hace extensiva esta disposición á todos los seguros terrestres. De acuerdo con estas disposiciones, las compañías imponen al asegurado la obliga-



ASE

datos exigidos por el asegurador, no tiene derecho a la indemnización, siempre que esa obligación conste en la póliza.—Jur. Com., tom. 1, pág. 455, Ser. 2ª.

2. Asegurado—Siempre que se justifique que ha aumentado el valor de las pérdidas, se supone la existencia de fraude y procede la pérdida de toda indemnización—Jur. Com., tom. 1, pág. 455, Ser. 2ª.

1a. Asesinato—Justificadas la premeditación y la alevosía, el homicidio debe ser castigado como asesinato con la pena capital—Jur. Crim., tom. 4, pág. 565, Ser. 2ª.

Asesinato—Véase: *Alevosia*, núm. 2—*Homicidio*, núm. 5—*Esposa*, núm. 4.

1b. Asesor de Menores—En el conocimiento de los incidentes testamentarios debe entender el que intervenga en

ción de rendir, en caso de siniestro, las explicaciones y pruebas que razonablemente se le exijan, y establecen que no tendrá derecho a reclamo alguno mientras esos comprobantes no sean dados, pues según disposición del art. 209 del Cód. de Com., las convenciones legalmente celebradas son ley para las partes. Si las explicaciones pedidas por las compañías son razonables y equitativas, el asegurado no puede ni debe dejar de darlas.

2—El valor de los efectos asegurados establecido en la póliza no hace fe en caso de contestación, á no ser que haya sido fijado por peritos nombrados por las partes. El art. 931 del Cód. Civ., dice que acción dolosa es toda aserción de lo que es falso ó simulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia ó maquinación que se emplee con ese fin—Véase también Chardon, *Traité du Dol et de la Fraude*, tom. 1ª, núm. 4. Es doctrina siempre observada, en materia de seguros, la caducidad del contrato en estos casos. Y es por esto que los autores aconsejan la mayor exactitud posible al presentar el asegurado su estado estimativo—Véase De Lalande, *Contrat d'Assurance contre Incendie*, núm. 446.—La caducidad entonces es absoluta é indivisible, y alcanza al contrato de seguro en su conjunto, y no se limita á las mercaderías sobre que recae el fraude—Véase el mismo autor, núm. 500.

1a—Véase: verb. *Alevosia*, núm. 2, y nota relativa.

1b—Así lo exige la continencia de la causa: una causa se compone del principal y todos sus incidentes.

ASI—ATE

el expediente principal—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Ser. 2ª.

Asistencia—Véase: *Tribunal arbitral*, núm. 1—*Honorarios médicos*, núm. 1.

1a. Ataque—Aun suponiendo su existencia, la legítima defensa solo procede justificando que no existía medio lícito de evitarlo—Jur. Crim., tom. 1, pág. 267, Ser. 2ª.

2a. Ataque—Violento del injuriado, debe conceptuarse circunstancia atenuante al fijarse la pena—Jur. Crim., tom. 1, pág. 510, Ser. 2ª.

Ataque—Véase: *Legítima defensa*, núm. 1—*Religión autorizada*, núm. 1—*Delito*, núm. 3—*Escepción de legítima defensa*, núm. 3.

Ataque á la persona—Véase: *Paliza*, núm. 1.

Ataque directo—Véase: *Provocación*, núm. 7.

1b. Atentado á mano armada—Corresponde la pena de un año de prisión al delito de atentado á mano armada contra la autoridad—Jur. Crim., tom. 3, pág. 138, Ser. 2ª.

2b. Atentado á mano armada—Contra la autoridad, debe siempre ser penado—Jur. Crim., tom. 3, pág. 214, Ser. 2ª.

3. Atentado á mano armada—Hace procedente la escepción de legítima defensa, y no puede hacerse cargo al reo por la herida causada, aunque ella sea la causa determinante de la muerte—Jur. Crim., tom. 2, pág. 245, Ser. 2ª.

4. Atentado á mano armada—Contra la autoridad, debe ser penado con un año de prisión—Jur. Crim., tom. 1, pág. 25, Ser. 2ª.

1a—Arts. 152 y 154 del Cód. Pen. ant., y 81, inc. 8ª del vigente.

2a—Art. 83, inc. 7. Cód. Pen. vigente.

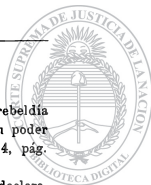
1b—Arts. 234 y 235 del Cód. Pen. vig., este último señala de uno á dos años de prisión.

2b—Como delito previsto por el Cód. Pen., art. 237, inc. 5ª del vigente.

3—Art. 152 del Cód. Pen. ant.

4—Arts. 374 y 375 del Cód. Pen. ant.



**ATE—AUS**

Atenuación—Véase: *Insignificancia*, núm. 1.

1. Atestación—La del Secretario al asentar la rebeldía acusada, no forma prueba de que no existiera en su poder el escrito contestando el traslado—Jur. Civ., tom. 4, pág. 85, Ser. 2ª.

1a. Audiencia—Del Agente fiscal, su falta en la declaración de herederos no la vicia de nulidad siempre que dicho funcionario haya sido notificado y consienta el auto—Jur. Civ., tom. 6, pág. 534, Ser. 2ª.

Audiencia—Véase: *Rebeldía*, núm. 6—*Embargo*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núm. 3.

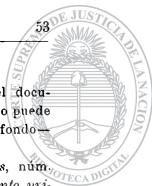
Aumento—Véase: *Vendedor*, núm. 1—*Adjudicación*, número 2.

Ausencia—Véase: *Instrumento privado*, núm. 3—*Nulidad*, núm. 19—*Posiciones*, núm. 3.

Ausente—Véase: *Acción*, núm. 5.

Ausentes—Véase: *Testamento*, núm. 1.

1a—La notificación ulterior sin hacer objeción alguna á la falta de notificación de las providencias anteriores y sin entablar recurso alguno importa consentirlas, sin que después pueda alegarse ningún fundamento legalmente atendible, pues el juicio pasa en autoridad de cosa juzgada no pudiéndose volver sobre él. Si al ser notificado el Agente Fiscal reclama de su falta de intervención anterior habría que reponerse el juicio al estado en que se hallaba cuando á él debió dársele intervención. La ley presume que al notificarse de la última providencia y no decir nada ni recurrir de la falta de notificación anterior se conforma con las resoluciones: pero es necesario que sea verosímil que la providencia haya sido vista por el interesado. Sin embargo es una cuestión que con frecuencia sucede en la práctica, que se notifican autos importantes por medio de notas de no haber comparecido á la oficina cuando el interesado ha estado efectivamente y se le ha informado no haber despacho, ya sea por desidia del empleado ó por descuido, en estos casos se hace necesario proceder con mucha cautela para evitar los abusos. Conviene que el Juez examine cuidadosamente si es verosímil que el interesado haya ó no tenido conocimiento de la providencia. El art. 40 del Cód. de Proc. rige el caso.



AUT

1a. Autenticidad—Discutida por las partes la del documento en que se funda la obligación, la sentencia solo puede recaer sobre su validez ó falsedad, pero no sobre su fondo—Jur. Civ., tom. 4, pág. 516, Ser. 2ª.

Autenticidad—Véase: *Informe*, núm. 1—*Cartas*, núm. 1—*Recibo*, núm. 1—*Borradores*, núm. 1—*Instrumento privado*, núm. 3—*Nulidad*, núm. 19—*Documentos*, núm. 16—*Peritos calígrafos*, núm. 1.

Autenticidad del mandato—Véase: *Documento privado*, núm. 1.

Auténtico—Véase: *Instrumento privado*, núm. 4.

1b. Auto—Aquel en que se da al comprador por desistido de la compra, es inapelable si se consintió el que fijó tal condición bajo apercibimiento—Jur. Civ., tom. 4, pág. 482, Ser. 2ª.

2. Auto—Que declara vencido el término fijado para la rendición de cuentas es apelable—Jur. Civ., tom. 5, pág. 441, Ser. 2ª.

Auto—Véase: *Alegatos*, núm. 1—*Inapelable*, núm. 1—*Apelable*, núms. 1 y 2—*Hijos*, núm. 2—*Titulos*, núm. 5—*Incompetencia*, núm. 1.

1c. Auto de prueba—Mientras no esté consentido no se

1a—La sentencia no puede recaer sobre su fondo, si es que la demanda no ha sido atacada en esta parte por el demandado, pues de lo contrario ella necesariamente tendría que resolver sobre él, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 216 del Cód. de Proc.

1b—Esta intimación importa fijar la responsabilidad del comprador, de acuerdo con lo establecido en la última parte del art. 522 del Cód. de Proc. En este caso no es procedente el recurso contra este auto, pues se reduce á hacer efectivo el apercibimiento decretando que ha quedado ejecutoriado y pasado en autoridad de cosa juzgada.

2—Trae gravamen irreparable, pues declarándose vencido el término acordado no podrá la parte rendir cuentas después.

1c—La Cámara fundó su resolución diciendo: Aunque las partes pueden pedir que la contraria absuelva posiciones después de con-

AUT

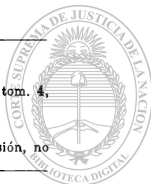
puede pedir la absolución de posiciones—Jur. Civ., tom. 4, pág. 87, Ser. 2°.

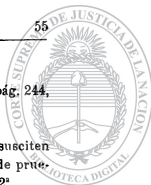
Auto de solvendo—Véase: *Documento*, núm. 1.

1. Auto judicial—Contra el que ordena la posesión, no

testada la demanda, art. 125, Cód. de Proc., debe esto entenderse, cuando la cuestión es de hecho, lo que no puede saberse hasta que quede ejecutoriado el auto que así lo resuelva, porque es sabido que en las cuestiones de puro derecho, no es admisible ninguno de los medios probatorios entre los cuales se encuentra el de confesión.—Estas razones no convencen en el sentido de que la resolución obedezca al precepto legal: son y serían perfectamente atendibles si se tratara de reformar la ley, pero deben rechazarse como interpretación correcta del principio establecido. La ley es clara y terminante cuando dice: «Después de contestada la demanda hasta la citación para sentencia, podrá cada parte pedir que la contraria absuelva posiciones.» Lo claro no debe interpretarse. No es razón bastante para desvirtuar el precepto legal, el alegar que puede una cuestión ser de puro derecho pues en este caso deben las posiciones quedar sin efecto como si no se hubiesen producido. Si la Cámara tuviese la facultad ilimitada de interpretar la ley á su arbitrio por más clara que ella sea, llegaría con sus distinciones de cada instante á hacer frustránea la intención del legislador. Esta resolución por otra parte está de acuerdo con lo resuelto por la Cámara en otro caso. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Término*, núm. 10 y nota. La jurisprudencia de la S. C. N. está en abierta oposición con la sustentada por la Cámara. Así en el tom. 1°, pág. 377, Ser. 2°, se ha resuelto que «estando contestada la demanda y la reconvencción en su caso, las partes pueden pedir que el contrario absuelva posiciones.» Allí sucedió que contestada la demanda negando los demandados algunos hechos, pidieron su rechazo, contrademandando al mismo tiempo; evacuado el traslado de la reconvencción y antes de abrirse el juicio á prueba pidió una de las partes que la otra absolviera posiciones: el Juez no hizo lugar á ello por no estar en estado: apelado el auto, fué revocado por la S. C. en la forma más arriba establecida. El Cód. de Proc. Español en su art. 579 dice terminantemente: «Desde que se reciba el pleito á prueba hasta la citación para sentencia, en primera instancia, todo litigante está obligado á declarar bajo juramento.» ¿Cómo es que habiendo la comisión encargada de las reformas al Cód. de Proc. que nos rige, tenido á la vista el Cód. Español, no siguió su precepto? ¿Cómo es que se apartó de él de una manera tan clara?

1.—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos constituida la Cámara en Tribunal de interlocutorias. El auto está de acuerdo con





AUT

procede el interdicto de retener—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 2ª.

Auto judicial—Véase: *Cesión*, núm. 2.

1a. Autos—Los recaídos en los incidentes que se susciten sobre pertinencia ó impertinencia de las diligencias de prueba, son apelables—Jur. Com., tom. 1, pág. 362, Ser. 2ª.

Autos—Véase: *Juicio*, núm. 3—*Juicio ejecutivo*, núm. 1—*Término*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 2.

Autos principales—Véase: *Prescripción de honorarios* núm. 2.

Autor—Véase: *Porción hereditaria*, núm. 1—*Editor*, número 1.

Autor principal—Véase: *Poseedor del robo*, núm. 1.

Autores—Véase: *Estafa*, núm. 3.

Autores principales—Véase: *Delito*, núm. 2.

la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1; y tom. 1, verb. *Interdicto de recobrar*, núm. 1479. Los interdictos no proceden contra los mandatos judiciales en que se pone en posesión á una parte, porque ó esta parte ha sido oída ó no. En el primer caso tiene los recursos que la ley le acuerda y si es vencido no queda á salvo más recurso que intentar la acción ordinaria correspondiente. En el segundo, como que el poseedor se defiende con su posesión desde que posee, porque posee y no puede ser privado de su derecho sin ser oído, se convierte el auto, en que se manda dar la posesión contra derecho, en mera citación y puede ocurrir al Juez que mandó dar la posesión. En el estado actual de nuestra legislación no proceden los interdictos ó acciones posesorias contra las resoluciones de los jueces. Según aparece de lo dispuesto en el art. 581, inc. 2º del Cód. de Proc., solo los particulares pueden ser sospechados de un despojo *violento ó clandestino*. Ni el Juez ni la parte que á él ocurre, pueden ser sospechados de un proceder *violento ó clandestino*, pues el primero es una autoridad que hace justicia de una manera pública, y el segundo usa de su derecho á recurrir al primero. Tampoco se puede pasar de un interdicto á otro, siempre que el segundo tenga por fundamentos los mismos hechos aducidos en el primero, pues ello importaría establecer un interdicto como recurso de otro que fué rechazado.

1a—Art. 226, Cód. de Proc.

AUT—AVI

Autoridad—Véase: *Matrimonio civil*, núm. 1—*Lesiones leves*, núm. 1.

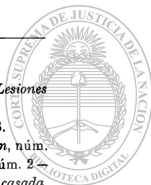
Autoridades judiciales—Véase: *Exhortos*, núm. 3.

Autorización especial—Véase: *Contrato de locación*, núm. 6—*Remate público*, núm. 1—*Comprador en remate*, núm. 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 7—*Mujer casada*, núm. 1.

1. Avisos—El hecho de mencionar en ellos los gravámenes que sin interés pesan sobre el bien vendido, implica la condición de que el comprador podrá continuarlos—Jur. Civ., tom. 4, pág. 408, Ser. 2ª.

Aviso á la autoridad—Véase: *Calumnia*, núm. 2.

1—Un aviso en tales condiciones no puede tener otro objeto ni otro efecto que el de hacer saber á los interesados esta ventaja con que cuentan y con la que pueden cargar si quieren. La práctica en los negocios es asimismo, que el comprador puede cargar con estos gravámenes que son un beneficio para él.





Bajas generales—Véase: *Transacción con terceros*, número 1.

Bala—Véase: *Lesiones corporales*, núms. 1 y 8.

Balance—Véase: *Cesación de pagos*, núm. 1.

Banco de la Provincia de Buenos Aires—Véase: *Privilegios fiscales*, núms. 1 y 2.

1a. Banco Hipotecario—Este establecimiento, en los bienes que trasfiere, solo representa al propietario y en consecuencia, no procede se le cite de evicción—Jur. Civ., tom. 8, pág. 496, Ser. 2ª.

Bancos libres—Véase: *Privilegios*, núm. 2.

Base—Véase: *Avisos*, núm. 1.

Base positiva—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 14.

Bases—Véase: *Condiciones*, núm. 1—*Borradores*, núm. 1—*Remate*, núm. 1—*Titulos*, núm. 4.

1b. Benignidad—La de las leyes dictada durante la condena, debe hacerse extensiva á los reos que no hayan terminado la pena, para los cuales no hace cosa juzgada la sentencia que los condenó con arreglo á una ley más severa—Jur. Crim., tom. 1, pág. 357, Ser. 2ª.

Benignidad—Véase: *Aplicabilidad ó inaplicabilidad*, número 1.

1a—Al otorgar la venta el Banco lo hace obligando al propietario, á la evicción y saneamiento. El Banco no puede ser citado de evicción sino el mandatario en cuyo nombre y representación otorga la venta.

1b—Art. 48, Cód. Pen.



BEO-BIE

Beodez—Véase: *Provocación*, núm. 6.

Bien comprado—Véase: *Comprador*, núms. 1 y 2.

Bien determinado—Véase: *Resolución*, núm. 2—*Gastos de justicia*, núm. 1.

Bien especial—Véase: *Concurso*, núm. 3.

Bien ganancial—Véase: *Cónyuge* núm. 2—*Ascendientes*, núm. 1.

Bien raíz—Véase: *Mandato especial*, núm. 1.

Bien testamentario—Véase: *Locación de servicios*, número 2.

1. Bienes—Su adquisición por parte del alimentado, hace cesar la obligación del alimentario en tanto cuanto aquéllos basten á llenar el objeto que la ley se propone, sin perjuicio de renacer la obligación al agotarse los fondos que la suspendieron temporalmente—Jur. Civ., tom. 5, pág. 71, Ser. 2ª

2. Bienes—Adquiridos durante la sociedad conyugal, se reputan gananciales siempre que en la escritura no se haga

1—El derecho para exigir alimentos está basado en la carencia absoluta de recursos—art. 370, Cód. Civ.—Si el alimentado adquiere bienes, por exiguos que ellos sean, deben ser aplicados en alimentos y vestidos. Las leyes de Partida, que han servido de fundamento á nuestro Código Civil en esta parte, escusan á los parientes de la obligación de prestar alimentos «quando el fijo oviesse de lo suyo, en que pudiese vivir, ó hubiesse tal menester, porque pudiesse guarescer, usando del sin mal estanco de sí»—Ley 6, tit. 16, Part. 4ª; Sala, tom. 1ª, pág. 49, enseña que la obligación de dar alimentos no depende de la mayor ó menor edad del que los deba dar ó recibir, sino solo de la necesidad de éste ó pobreza de aquél, en otros términos, que la obligación espira por haber salido de esa necesidad ó por poder salir dedicándose al trabajo. Igual doctrina sostienen Esteves Sagui, pág. 731; y Escribche verb. *Alimentos*. La ley misma prevee el caso en que las rentas del menor no alcanzasen para cubrir los gastos, y autoriza á emplear el capital—art. 427, Cód. Civ.—Si este capital se agota renace la obligación del alimentario. Cuando el alimentado es menor, el tutor no tiene derecho á pedir alimentos sino cuando el pupilo es indigente—art. 428 ibid.

2—Art. 1246, Cód. Civ.

BIE

constar explícitamente la propiedad y procedencia de los fondos con que fueron adquiridos—Jur. Civ., tom. 5, pág. 195, Ser. 2ª.

3. Bienes.—Perteneientes á menores deben ser vendidos en remate público—Jur. Civ., tom. 5, pág. 425, Ser. 2ª.

4. Bienes.—El padre en ejercicio de la patria potestad, puede hipotecar los de sus hijos, siempre que el producido sea para mejorar su valor aumentando la *renta*, debiendo el Juez intervenir en la inversión de los fondos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 2ª.

3—Así lo preceptúan los arts 136 y 441 del Cód. Civ., con la escepción establecida en el art. 442 del mismo, en que el Juez puede ó no según su criterio autorizar la venta privada.

4—El caso fué resuelto por mayoría de votos constituida la Cámara en Tribunal de interlocutorias, y fué el siguiente: Un padre se presentó pidiendo que se le autorizara á hipotecar algunos bienes del menor para con su producido proceder á edificar en terrenos de propiedad de éste. El Juez de 1ª Instancia no hizo lugar á lo solicitado fundándose en los arts. 287 y 291 del Cód. Civ., que establecen que los padres tienen la administración y usufructo de los bienes de sus hijos menores, y el aumento de la renta no vendría á beneficiar al menor sino al padre á quien correspondería el usufructo. La Cámara revocó el auto por mayoría, fundándose en que había verdadera conveniencia en que se llevara á efecto la operación por las condiciones ventajosas de la hipoteca y el precio subido que se pagaba por los alquileres de fincas. Que si bien es cierto que el padre tiene el usufructo y administración legal de los bienes no se deduce de aquí seguramente que con la medida solicitada hayn de beneficiarse él exclusivamente con la mayor renta que produzcan y con detrimento del interés de esos menores: que consideraciones de este orden no pueden hacerse valer en una legislación que concede á los padres los más amplios derechos en el gobierno y dirección de los hijos que están bajo su patria potestad. Esta resolución no debe tomarse como base para formar una jurisprudencia en este sentido, pues la resolución varía según las razones que militen en cada caso especial. En el presente pudo argumentarse en el sentido resuelto por la Cámara diciendo, que si bien el aumento de la renta beneficia al padre á quien corresponde el usufructo, también beneficia al hijo, pues los gastos de subsistencia y educación de los hijos son una carga del usufructo—art. 291, inc. 2ª—y en muchos casos puede la





BIE

Bienes—Véase: *Acción de jactancia*, núm. 1—*Administración*, núm. 1—*Herencia indivisa*, núm. 1—*Acción*, núm. 1—*Administrador*, núm. 1—*Compra*, núm. 1—*Esposa*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 2—*Jueces*, núm. 1—*Litigio*, núm. 1—*Madre natural*, núm. 1—*Derechos hereditarios*, núm. 2—*Testamento*, núm. 4—*Venta*, núm. 3—*Separación de bienes*, núms. 1 y 2—*Tutor*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 2—*Banco hipotecario*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 5—*Tutor especial*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 13—*Escuscelado*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 10—*Quiebra*, núm. 4—*Prenda*, núm. 1—*Acción Pauliana*, núm. 1—*Dación en pago*, núm. 1—*Socios solidarios*, núm. 1—*Fianza en afectivo*, núm. 1.

Bienes adjudicados—Véase: *Cuenta particionaria*, número 2.

Bienes de la esposa—Véase: *Porción hereditaria*, número 1.

Bienes de la sociedad conyugal—Véase: *Separación de bienes*, núm. 1.

Bienes del fiador—Véase: *Fianza en efectivo*, núm. 1.

1. Bienes de menores—Tratándose de la venta de estos bienes, queda librado al prudente arbitrio de los Tribunales fijar la forma y condiciones que conceptúen más conveniente á los intereses de aquéllos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 374, Ser. 2ª.

renta de los bienes que es el usufructo del padre no ser suficiente para educar al menor y en este caso el aumento de esa renta beneficiaría exclusivamente á éste.

1—La ley impone á los Jueces la obligación de velar por la persona y bienes de los menores sometidos á su jurisdicción; y dispone como regla general que sus bienes deben venderse en pública subasta—art. 441. Cód. Civ.—Sin embargo hay casos en que esa misma ley dispensa que la venta se efectúe en esa forma, y es cuando á su juicio la venta estrajudicial fuese más ventajosa por alguna razón particular—art. 442, *ibid.*



BIE—BIL

Bienes determinados—Véase: *Inhibición*, núm. 1—*Embargo*, núm. 7.

Bienes embargados—Véase: *Posesión*, núm. 14—*Tercerista*, núm. 1—*Costas*, núm. 6.

1a. Bienes hereditarios—Los herederos pueden tomar la posesión, dando fianza ó afectando por embargo el importe del impuesto del Consejo Nacional de Educación, sin que sea necesario su pago previo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 471, Ser. 2º.

Bienes hereditarios—Véase: *Adjudicación*, núm. 1—*Posesión*, núm. 13.

Bienes inmuebles—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 4—*Jurisdicción comercial*, núm. 2.

Bienes propios—Véase: *Esposa*, núm. 5.

Bienes raíces—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1—*Competencia*, núm. 9—*Jurisdicción comercial*, núm. 1.

Bienes testamentarios—Véase: *Acreedor*, núm. 2.

Bienes vendidos—Véase: *Avisos*, núm. 1.

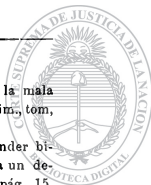
Billetes—Véase: *Deudor*, núm. 1—*Obligaciones á moneda nacional oro*, núm. 1.

Billetes de curso legal—Véase: *Moneda estipulada*, núm. 1—*Obligaciones á oro sellado*, núm. 1—*Pagaré*, núm. 2.

1b. Billetes falsos de Banco—La ley presume que el que

1a—La posesión de la herencia, prescrita por los arts. 3412 y 3413 del Cód. Civ., para los parientes colaterales y demás herederos allí determinados, no se halla subordinada á la condición de pago del impuesto, pues no hay ley que haga depender de este requisito el ejercicio del derecho que acuerda este artículo. Una interpretación contraria importaría poner á la herencia condiciones que la ley no autoriza, constituyendo derechos reales fuera de las condiciones establecidas por las leyes, y estableciendo embargos que no se ajustan á las prescripciones del Cód. de Proc. que preceptúa su limitación á la suma suficiente para garantir estrictamente el crédito reclamado, circunstancias que no se consultarían si no se sentara la doctrina del sumario.

1b—Art. 285, Cód. Pen. Sin embargo es necesario tener presente que



BIL—BOL

los tiene y espende, los ha adquirido de buena fe: la mala fe debe aparecer evidentemente justificada—Jur. Crim., tom. 4, pág. 15, Ser. 2ª.

2. Billetes falsos de Banco—El hecho de espender billetes falsos de Banco, sabiendo que lo son, importa un delito que debe ser penado — Jur. Crim., tom. 4, pág. 15, Ser. 2ª.

1a. Billetes de lotería—Deben ser inutilizados además de imponerse pena por su venta ó circulación—Jur. Crim. tom. 2, pág. 81, Ser. 2ª.

Boleta—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 3.

Boleto—Véase: *Trasferencias*, núm. 1.

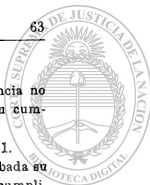
1b. Boleto de compraventa—Se conceptúa obligación de hacer, cuya falta de cumplimiento se resuelve en daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 5, pág. 176, Ser. 2ª.

las leyes sobre billetes de Banco han derogado de hecho las disposiciones del Cód. Pen. sobre esta materia. El art. 285 citado está legislado por el art. 61 de la Ley de 14 de Setiembre de 1863. El art. 30 de la ley de Bancos Garantidos declara que la falsificación de billetes de estos bancos caen bajo las disposiciones de la Ley de Setiembre del 63, citada. Para que haya falsificación de billetes bancarios es necesario que el Banco esté autorizado á emitir, de lo contrario no se comete este delito. Véase la obra del Dr. Rodolfo Rivarola, *Exposición y crítica del Código Penal*, tom. 3, pág. 243.

2—Art. 285, inc. 2º, Cód. Pen.

1a—Por la ley de 17 de Setiembre de 1885, quedó absolutamente prohibido el juego de lotería en la Capital, como asimismo la circulación ó expendio de billetes. La condenación de este juego trae aparejada consigo la inutilización de esos billetes.

1b—El art. 1184, inc. 1º, Cód. Civ., establece que deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública, los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles, en propiedad ó usufructo. El 1185 establece que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos en instrumento particular firmado por las partes, no quedan concluidos como tales, pero quedan concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. Y por último, el art. 1187, dice que en este caso la obligación

**BOL—BUR**

2. Boleto de compraventa.—Su simple trasferencia no basta á conferir personería al cesionario para exigir su cumplimiento al obligado.

Bolsa de Comercio.—Véase: *Precio oficial*, núm. 1.

1a. Borradores.—Los simples borradores, aun probada su autenticidad, no bastan para obligar en derecho al cumplimiento de las bases que contengan—Jur. Civ., tom. 7, pág. 216, Ser. 2ª.

Buena fe.—Véase: *Prescripción*, núm. 3 — *Prescripción treintenaria*, núm. 1—*Posesión*, núm. 9—*Condómino*, núm. 1—*Inmuebles*, núm. 1—*Billeto falso de Banco*, núm. 2.

Buque.—Véase: *Firma*, núm. 3.

1b. Burlas provocativas.—E injurias leves continuas y reiteradas, se conceptúan circunstancias atenuantes del homicidio simple, pues equivalen á las injurias ilícitas y graves que la ley define—Jur. Crim., tom. 1, pág. 578, Ser. 2ª.

será juzgada como *una obligación de hacer*, y la parte que resistiere á hacerlo, puede ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública, bajo pena de responder por los daños y perjuicios. Véase el fallo publicado en el tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª, Jur. Civ., que sienta la misma doctrina.

2—La Cámara fundó su resolución diciendo: que si bien el negocio había sido trasferido en virtud de la firma puesta al pié de la obligación, esa trasferencia no estaba hecha en la forma correspondiente para hacer mérito de la misma en juicio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 del Cód. de Proc. No alcanzamos á comprender los fundamentos de la Cámara; pues ó el actor se presentó en su carácter de cesionario exigiendo el cumplimiento del contrato, ó en virtud de esa cesión pedía á nombre del cedente su cumplimiento. En el primer caso, no puede aplicarse el art. 13 citado, pues el actor se presenta en virtud de un derecho propio adquirido por medio de la cesión, en cuyo caso no tiene porqué invocar derechos de un tercero: y en el segundo, su personería no estaría de acuerdo con el art. citado del Cód. de Proc.

1a—Art. 1012, Cód. Civ.

1b—Art. 197, Cód. Pen. antiguo.



Calificación comercial—Véase: *Fallid.*, núm. 3—*Quiebra*, núm. 3.

Calificación de la quiebra—Véase: *Dación en pago*, número 2.

1. Calumnia—El acusado que no justifica la imputación hecha contra el acusador, es pasible de la pena que la ley fulmina contra el calumniador—Jur. Crim., tom. 3, pág. 55, Ser. 2ª.

2. Calumnia—El dar aviso á la autoridad, de las amenazas de que se ha sido objeto, no importa la imputación del delito, ni en consecuencia hace procedente la acusación por calumnia—Jur. Crim., tom. 3, pág. 240, Ser. 2ª.

3. Calumnia—Al acusado por este delito le es permitido

1—El art. 177 del Cód. Pen. vigente define lo que se entiende por calumnia, y el 178 determina la pena.

2—Calumnia es la falsa imputación de un delito que tenga obligación de acusar el Ministerio Fiscal. En el caso práctico que se presenta, no hay imputación de un delito de esta naturaleza sino una simple precaución para evitar vías de hecho de parte de una persona determinada.

3—Este auto fué revocatorio del de 1ª Instancia y contrario á la vista dada por el Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés. Se fundó en que el juicio por calumnia es equiparado al juicio común ordinario, en el que no procede la prisión preventiva, y cuya tramitación depende exclusivamente de la voluntad de las partes, siendo secundario el

CAL

hacerse representar en el juicio—Jur. Crim., tom. 3, pág. 450. Ser. 2ª.

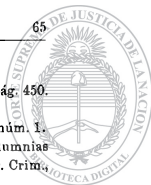
Calumnia.—Véase: *Acusador*, núm. 2—*Consulta*, núm. 1.

1. Calumnias ó injurias.—El demandado por calumnias ó injurias puede ausentarse sin arraigar el juicio—Jur. Crim., tom. 2, pág. 579, Ser. 2ª.

Calumnia.—Véase: *Delito*, núm. 9—*Injuria*, núm. 1—*Acusado*, núm. 1.

interés público, y que por consiguiente no existe inconveniente legal alguno en que el acusado se haga representar, y que las leyes que pudieran invocarse en contrario se refieren á casos determinados, como lo tiene declarado ya la Cámara en otros fallos, la que ha resuelto en sentido contrario otro caso sometido á su resolución.—Véase: *Inst.*, tom. 1ª, verb. *Juicio criminal*, núm. 1556; tom. 2ª, ver. *Acusado*, núm. 2.—En la nota al verb. *Acusación criminal*, 2ª tom. de la *Inst.*, se refuta á nuestro modo de ver victoriosamente la resolución del sumario. Los camaristas están en error y no demuestran conocer con exactitud la jurisprudencia de la Cámara á que pertenecen cuando dicen que es jurisprudencia por ella sentada lo que resuelve el sumario. Antes se cuestionaba sobre si el acusador podía constituir apoderado, siendo admitido sin discusión, de que el acusador tenía que intervenir personalmente; pero aquí la Cámara da por sentada una doctrina que jamás se sentó ni se admitió. Estas resoluciones contradictorias fundadas en una jurisprudencia que no existe, son las que traen el caos en nuestros Tribunales, de manera que cuando un litigante llama á las puertas de la justicia va convencido de la más completa incertidumbre respecto de la suerte final de su pleito, aunque su derecho sea claro y tenga á su favor una jurisprudencia constante.

1.—En el caso presente, no se resolvió si el demandado debía arraigar ó no el juicio para ausentarse. Se estableció tan solo que el demandado podía ausentarse del país sin que el actor pudiese pedir la prohibición de salir de él. Esto se funda en que el art. 14 de la Const. Nac. reconoce á todo habitante el derecho de entrar y salir del país sin más limitaciones que las que establezcan las leyes generales en casos especiales, y teniendo en cuenta que la privación ó limitación de este derecho importaría una restricción á la libertad individual. Las leyes de Proc., no contienen disposición alguna por la que al acusado por injurias ó calumnias le esté prohibido ausentarse del país.



CAL—CAM

Calumniador—Véase: *Delito*, núm. 9 — *Litispendencia*, núm. 3.

1a. Calle—O plaza en que se encuentre ubicada la propiedad, el cambio del nombre no es un defecto del título—Jur. Civ., tom. 5, pág. 302, Ser. 2ª.

Calles—Véase: *Comprador*, núm. 2.

Cámara—Véase: *Sentencia*, núm. 4.

Cámara civil—Véase: *Jurisdicción*, núm. 6—*Municipalidad*, núm. 3.

1b. Cámaras de apelaciones—En caso de consulta tiene la facultad de aumentar ó agravar la pena impuesta en primera instancia—Jur. Crim., tom. 2, pág. 465, Ser. 2ª.

2. Cámaras de apelaciones—Al regular los honorarios,

1a—Estos cambios son siempre hechos públicos emanados de autoridad competente.

1b—Hay que distinguir si la Cámara conoce en la consulta y revoca la sentencia del inferior de una manera exclusivamente oficiosa y si lo hace á petición fiscal. En este caso, se ha resuelto siempre que la Cámara está investida de la facultad que espresa el sumario. Los arts. 4 y 11, Cap. 3º, Sec. 4º del Reg. de Administración de Justicia de 1817, lo presuponen y así lo declaró también la Sup. Cort. de Just. Prov. con motivo de una consulta general que hicieron los Jueces del Crimen en 1875. Estas leyes están vigentes en la Capital Federal—Art. 318 de la Ley Orgánica de los Tribunales.—Abolió también la consulta en los casos de absolución del procesado—art. 328—lo que tuvo por objeto favorecer al reo. Por otra parte, tratándose de cuestiones que se siguen de oficio y en ausencia de la acción privada no podría negarse al Fiscal de las Cámaras la facultad de pedir la revocación de una sentencia que va en consulta y que no se ajusta á las prescripciones legales; y si el Fiscal tiene esta facultad es una consecuencia necesaria, que debe residir en la Cámara la facultad de resolver la petición admitiéndola ó rechazándola. Por disposición del art. 120, inc. 1º, corresponde al Fiscal de las Cámaras la facultad de continuar la intervención que los fiscales de 1ª Instancia han tenido ante el inferior. Sería ilógico suponer que el ejercicio de este derecho quedara subordinado á la opinión de un inferior gerárquico.

2—La Cámara como Tribunal de 2ª Instancia, no puede conocer sino en grado de apelación de toda providencia, de donde se sigue



CAM-CAP

se refiere solo á los de segunda instancia si no declara expresamente que comprende todos los del juicio—Jur. Com., tom. 2, pág. 403, Ser. 2ª.

3. Cámaras de Apelaciones—No pueden resolver en la expresión de agravios puntos que no hayan sido materia de discusión y resolución ante el inferior—Jur. Civ., tom. 6, pág. 531, Ser. 2ª.

Cámaras de Apelaciones—Véase: *Jurisdicción*, núm. 3—*Competencia*, núm. 10.

Camarista—Véase: *Recusación*, núm. 3.

Cambio—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 3.

Cantidad—Véase: *Inhibición*, núm. 4—*Documento*, núm. 1.

Cantidad determinada—Véase: *Adjudicación*, núm. 2—*Transacción*, núm. 4.

Cantidad disponible—Véase: *Cuentas*, núm. 4—*Rendición de cuentas*, núms. 4 y 5.

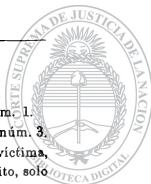
Cantidad líquida—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 3.

Capital—Véase: *Deudor*, núm. 2—*Cesación de pagos*, números 1 y 2—*Rescisión*, núm. 1—*Sociedades anónimas*, número 1.

que es necesario que los honorarios devengados en 1ª Instancia sean regulados por el mismo Juez. Así se desprende de lo dispuesto en el art. 65 del apéndice del Código de Proc.

3—El art. 71, inc. 3 del Cód. de Proc., preceptúa que el escrito de demanda debe designar la cosa demandada con toda exactitud; el art. 100, inc. 3ª, establece que el demandado debe observar en la contestación las formas prescriptas para la demanda. Estos dos escritos son los que constituyen el cuasi-contrato de litiscontestación del cual no puede apartarse la sentencia de 1ª Instancia ni la Cámara—Art. 267 *ibid.*—La Cámara no puede resolver un punto que no se ha discutido en primera instancia, porque no forma parte de la litiscontestación. No puede resolver tampoco una cuestión que no ha sido materia de resolución ante el inferior aunque estuviese comprendida en la discusión; porque en este caso la sentencia es nula y tendría que volver á 1ª Instancia para su resolución. La Cámara es un tribunal de apelación y solo puede resolver en grado de apelación cuestiones que han sido resueltas en 1ª Instancia.





CAP—CAS

Capital social—Véase: *Socios solidarios*, núm. 1.

Capitalización trimestral—Véase: *Intereses*, núm. 1.

Capitán—Véase: *Conocimientos*, núm. 1—*Forma*, núm. 3.

1 Carácter público—Por elevado que sea el de la víctima, no basta para calificar y penar especialmente un delito, solo debe conceptuarse como una circunstancia agravante—Jur. Crim., tom. 3º, pág. 66, Ser. 2ª.

Carga—Véase: *Pared divisoria*, núm. 1—*Medianería*, núm. 2.

Cargo—Véase: *Escrito*, núm. 1.

Carta de pago—Véase: *Fallido*, núm. 5.

1a. Cartas—Reconocidas como auténticas, constituyen el principio de prueba escrita que la ley exige para hacer procedente la testimonial en contratos cuyo valor excede de 200 pesos moneda nacional—Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 2ª.

Cartas—Véase: *Declaraciones*, núms. 10 y 12.

Casa de comercio—Véase: *Cesación de pagos*, núm. 3—*Mandato*, núm. 7—*Alquiler*, núm. 1.

Casa de familia—Véase: *Muebles*, núm. 1.

1b. Casamiento—El de la viuda, trae consigo la pérdida de la patria potestad sobre los hijos del primer matrimonio y hace necesario el nombramiento de tutor—Jur. Civ., tom. 4, pág. 121, Ser. 2ª.

Caso contencioso—Véase: *Demanda*, núm. 6.

1a—Es necesario que esas cartas hagan verosímiles los hechos alegados por las partes—Art. 1192, Cód. Civ.—Conviene no olvidar que la ley exige siempre este principio de prueba escrita para probar los contratos que excedan de 200 nacionales, pues ella no es necesaria cuando una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato—Art. 1191 *ibid. in fine*—Véase Inst., tom. 1, núm. 2216 y su nota: tom. 2, verb. Prueba testimonial, núms. 3 y 5 y sus notas.

1b—Arts. 308 y 377, Cód. Civ.

CAS—CES

1a. Caso fortuito ó de fuerza mayor—Reconocida su existencia por ambos litigantes, corresponde á la parte que pretenda crear responsabilidades, probar que la culpa de haberse ellos producido es de la otra parte—Jur. Com., tom. 1, pág. 393, Ser. 2ª.

Caso fortuito—Véase: *Perjuicios*, núm. 2 y 4—*Prueba*, núm. 11—*Laudó*, núm. 1—*Omisión culpable*, núm. 1.

Caución—Véase: *Prenda*, núm. 1.

Caución juratoria—Véase: *Declaratoria de pobreza*, núm. 1—*Arraigo*, núm. 6.

Caudal testamentario—Véase: *Administrador*, núm. 2.

Causa criminal—Véase: *Acusador*, núm. 2—*Acusado*, núm. 2—*Poder general*, núm. 1—*Prueba*, núm. 2—*Fianza*, núm. 3—*Juramento*, núm. 4—*Posiciones*, núm. 7.

Causa justificada—Véase: *Administrador*, núm. 2.

Causante—Véase: *Comprador*, núm. 7—*Fallecimiento*, núm. 2.

Cautela—Véase: *Alevosia*, núm. 3.

Cedente—Véase: *Cesionario*, núm. 1—*Documento privado*, núm. 4—*Escepciones*, núm. 6.

Cédula—Véase: *Término*, núm. 10.

Celos—Véase: *Irritación*, núm. 1.

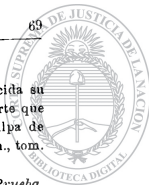
Cementerio—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

Cesación—Véase: *Mandato*, núm. 3.

1. Cesación de pagos—El exceso del pasivo sobre el ac-

1a—Establecida la presunción de inculpabilidad, corresponde destruir esa presunción legal por medio de una prueba contraria.

1—Si la pérdida del capital importara el estado de quiebra, resultaría que ese capital no sería posible emplearlo ni podría emprenderse ningún negocio ó industria, desconociendo de lleno el rol que desempeña el crédito en la actividad de las operaciones mercantiles. La insolvencia no es la cesación de pagos característica de la declaración de quiebra, según la expresión testual del art. 1511 del Cód. de Com.



CES

tivo, en el balance, importa una pérdida del capital y aun la insolvencia, pero no basta para retrotraer á esa fecha la efectiva cesación de pagos—Jur. Com., tom. 3, pág. 416, Ser. 2ª.

2. Cesación de pagos—La pérdida del capital y las renovaciones de documentos de crédito, no implican la efectiva cesación de pagos—Jur. Com., tom. 3, pág. 407, Ser. 2ª.

3. Cesación de pagos—La falta de pago del alquiler de una casa de comercio, no implica la efectiva cesación de pagos á los efectos de fijar el día de la quiebra—Jur. Com., tom. 3, pág. 399, Ser. 2ª.

4. Cesación de pagos—El auto que fija la fecha de la efectiva cesación de pagos en general en el concurso es inapelable—Jur. Com., tom. 3, pág. 455, Ser. 2ª.

Cesación de pagos—Véase: *Concurso*, núm. 1—*Deuda impaga*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 7—*Fecha*, núm. 1

Antig. Así Bedarride dice en el tom. 1ª, núm. 27: «La ley no se preocupa sino de un hecho; no pregunta si el comerciante es ó no solvente: solo pregunta si paga ó no sus obligaciones; si hay cesación hay quiebra, cualquiera que sea su causa. Cuando un acreedor quiere retrotraer los efectos de la quiebra, es necesario que pruebe que en esa época que él menciona dejó de pagársele.

2—La renovación de documentos se hace en virtud del crédito de obligado: la renovación es una operación de crédito y el empleo de este capital no puede tomarse en un sentido implícito de insolvencia, pues de lo contrario desaparecería del comercio este elemento económico, el más poderoso de los tiempos modernos.

3—Cuando esa falta de pago se explica por alguna razón especial. Además para que un comerciante sea declarado en estado de quiebra es necesario que el crédito sea comercial; y es sabido que el arrendamiento de bienes raíces es por lo general un acto civil.

4—Porque solo tiene carácter provisorio, según la inteligencia del art. 1532 del Cód. de Com., y de acuerdo con lo sostenido por Moreno en su Tratado de las Quiebras núm. 249: por consiguiente no trae gravamen irreparable, no siendo apelable según el art. 226 del Cód. de Proc.



CES

—*Alquiler*, núm. 2—*Sindico*, núm. 2—*Jurisdicción comercial*, núm. 2.

1a. Cesión—Aun cuando pueda resultar ilusoria, el deudor cedido no puede oponer como escepción la falta de personería del cesionario: debe aducirla como fundamento general al contestar la demanda—Jur. Civ., tom. 4, pág. 113, Ser. 2ª.

2. Cesión—La de un crédito litigioso, solo puede probarse por escritura pública ó por acta judicial—Jur. Com., tom. 3, pág. 530, Ser. 2ª.

3. Cesión—Hecha por escritura pública hace fe en juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 499, Ser. 2ª.

Cesión—Véase: *Venta*, núm. 1—*Acciones hereditarias*, número 1—*Derechos hereditarios*, núm. 2—*Documento privado*, núm. 4—*Pagaré*, núm. 1—*Venta*, núm. 3—*Contrato de cesión*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 18.

1b. Cesión de acciones litigiosas—Solo puede hacerse por escritura pública ó acta judicial—Jur. Civ., tom. 4, pág. 77, Ser. 2ª.

1c. Cesión de derechos—Dependientes de una liquidación, no da acción alguna al cesionario contra el deudor sin que previamente se practique y quede aprobada—Jur. Civ., tom. 5, pág. 91, Ser. 2ª.

1a—No puede oponer la falta de personería del cesionario sino en los casos en que este no tenga la capacidad de hecho para estar en juicio. La falta de derecho hace al fondo del asunto y no puede oponerse como defensa dilatoria sino como medio general de defensa al contestar la demanda.

2—Art. 1453, Cód. Civil.

1b—Art. 1455 del Cód. Civ. Cuando la cesión se hace en acta judicial debe serlo en el mismo expediente.

1c—Aqui se cedió lo que resultare de la liquidación. La trasferencia no confiere al cesionario sino los derechos que corresponden al cedente, y como no se trataba de la entrega del título en los términos del art. 1434 del Cód. Civ., resulta que las estipulaciones de la cesión rigen la convención y es ley para las partes—art. 1197 *ibid.*—Para conocer el monto de esa cesión es necesaria la liquidación previa.



CES—CIR

Cesión de derechos civiles—Véase: *Jueces de comercio*, núm. 1.

Cesión especial—Véase: *Protesto*, núm. 2.

1a. Cesionario—No tiene relación alguna de derecho con el abogado y procurador del cedente y por lo tanto no está obligado a manifestar su conformidad ó disconformidad con los honorarios por ellos devengados—Jur. Civ., tom. 4, pág. 93, Ser. 2ª.

2. Cesionario—En las relaciones de derecho entre deudor y acreedor, el cesionario no es el tercero á quien ampara la ley con privilegios especiales—Jur. Civ., tom. 8, pág. 174, Ser. 2ª.

Cesionario—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Venta*, núm. 1—*Cesión de derechos*, núm. 1—*Boleta*, núm. 2—*Abogado*, núm. 1—*Documento privado*, núm. 4—*Escepciones*, núm. 6.

Certificados—Véase: *Jueces*, núm. 2.

1b. Circunstancia agravante—El hecho de ser la víctima esposa del homicida, es un hecho constitutivo del delito y no

1a—El mandato solo produce relaciones jurídicas entre mandante y mandatario: estas relaciones son para el cesionario una *res inter alios acta*. Sinembargo, si el mismo cesionario hiciera la manifestación ordenada, esto no importaría el reconocimiento de éste, de la obligación de satisfacerlos. La Cámara ya ha resuelto en otro caso, que la manifestación de conformidad ó disconformidad con la cuenta presentada no quiere decir que el que la hace esté obligado á pagarla—Véase Jur. Civ., tom. 5, pág. 481, Ser. 1ª—Por el contrario, hecha la manifestación y practicada la regulación, se inicia el juicio ejecutivo y al ser citado de remate opone las escepciones y defensas que la parte cree procedentes. La intimación que se hace á una parte para que haga la manifestación nada tiene que ver con la obligación de abonarlos. Para resolver pues, si el cesionario está ó no obligado á pagar esos honorarios, debe esperarse á la citación de remate, procediéndose previamente á la regulación.

2—Porque el deudor cedido puede hacer valer contra el cesionario todas las escepciones que le competen contra el deudor cedente—art. 1474 del Cód. Civ.

1b—Art. 94 del Cód. Penal vigente.

CIR

puede calificarse de circunstancia agravante — Jur. Crim., tom. 3, pág. 541, Ser. 2ª.

Circunstancia agravante—Véase: *Alevosia*, núm. 2—*Delitos*, núms. 6 y 7—*Estafa*, núm. 2—*Fractura*, núm. 1—*Incendiarlo*, núm. 1—*Homicidio*, núms. 2, 4 y 5—*Irritación*, núm. 1—*Homicidio simple*, núms. 2 y 6—*Heridas*, núm. 2—*Hurto*, núms. 1 y 3—*Delito menor*, núm. 1—*Ley*, núm. 3—*Muerte*, núm. 2—*Abuso de confianza*, núm. 1—*Reincidencia*, núms. 1 y 2—*Provocación*, núm. 7—*Dolo*, núm. 2—*Delitos*, núm. 4—*Ebriedad*, núms. 4 y 5—*Ley vigente*, núm. 1—*Excepción de provocación*, núm. 1—*Lesiones leves*, núm. 1—*Desacato*, núm. 1—*Carácter público*, núm. 1—*Pena*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 2—*Falsificación*, número 1.

1. Circunstancias agravantes y atenuantes—Su existencia hace facultativa en el Juez la aplicación de la pena—Jur. Crim., tom. 2, pág. 493, Ser. 2ª.

1. Circunstancia atenuante—La exigencia de un derecho por parte de la víctima, no puede calificarse como provocación, ni tomarse en consideración como circunstancia atenuante—Jur. Crim., tom. 3, pág. 483, Ser. 2ª.

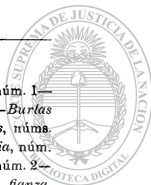
2. Circunstancia atenuante—El hecho de haberse recuperado la cantidad hurtada, no importa una circunstancia atenuante—Jur. Crim., tom. 3, pág. 506, Ser. 2ª.

3. Circunstancia atenuante—Que no resulte claramente del proceso debe ser probada por el reo—Jur. Crim., tom. 3, pág. 309, Ser. 2ª.

4. Circunstancia atenuante—Corresponde al reo justificar la del hecho que se le imputa—Jur. Crim., tom. 1, pág. 40, Ser. 2ª.

4—Toda acción criminal se presume legalmente cometida con voluntad criminal, á no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares de la causa—art. 13, Cód. Pen. anterior—Acto vo-





CIR—CIT

Circunstancias atenuantes—Véase: *Amenaza*, núm. 1—*Pena*, núm. 1—*Ataque*, núm. 2—*Furor*, núm. 1—*Burlas provocativas*, núm. 1—*Discusión*, núm. 1—*Lesiones*, núms. 5 y 7—*Ebriedad*, núms. 1, 2 y 8—*Ebriedad voluntaria*, núm. 7—*Homicidio simple*, núms. 1 y 2—*Término medio*, núm. 2—*Máximo de la pena*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 2—*Menor edad*, núm. 1—*Reincidencia*, núm. 2—*Provocación*, núm. 1—*Riña*, núm. 1—*Adulterio*, núm. 1—*Esposa*, núm. 4—*Agentes*, núm. 1—*Falsificación*, núm. 5—*Confesión*, núm. 3—*Homicidio*, núm. 3—*Delito menor*, núm. 1—*Censuras graves*, núm. 1—*Delitos*, núm. 4—*Prescripción*, núm. 1—*Derecho de acusar*, núm. 1—*Lesiones corporales*, núm. 6—*Provocación*, núm. 6.

1. Citación—La de evicción contra el vendedor, procede aun en el juicio de jactancia—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 2ª.

2. Citación—De evicción, es procedente solo contra el vendedor, en ningún caso contra el ejecutante que hizo necesaria la venta—Jur. Civ., tom. 5, pág. 297, Ser. 2ª.

3. Citación—Por edictos, solo procede cuando se ignora el domicilio de la persona que debe comparecer—Jur. Com., tom. 1, pág. 57, Ser. 2ª.

Citación—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 4—*Dili-*

untario, vale decir, acto libre, acto inteligente, acto intencional—Véase: Pacheco, El Cód. Pen., tom. 1ª, página 73—Para destruir la presunción legal es necesario producir la prueba pertinente, según disposición del art. 159 del mismo Código.

1—Tal juicio puede afectar derechos posesorios cuya integridad garante el vendedor al comprador por medio de la garantía de evicción.

2—El ejecutante no puede ser considerado como enagenante del inmueble, pues él ningún derecho trasmite: no es vendedor, no siendo aplicable el art. 2089 del Cód. Civ.

3—Art. 80 del Cód. de Proc.

CIV—CLÁ

gencias de prueba, núm. 8—*Documento*, núm. 3—*Edictos* núm. 3—*Posiciones*, núms. 4 y 6.

1a. **Civil**—Tienen este carácter las sociedades formadas para la construcción de una sección de ferrocarril—Jur. Civ., tom. 4, pág. 30, Ser. 2ª.

Clandestinamente—Véase: *Interdicto de recobrar*, número 5.

1b. **Clandestinidad**—Existe siempre que teniéndose la posesión á nombre de otro, se pretende, sin forma de juicio, cambiarla á nombre propio—Jur. Civ., tom. 4, pág. 535, Ser. 2ª.

Clandestinidad—Véase: *Posesión*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, núm. 3.

1c. **Cláusula**—De ser á cargo del locatario las obras necesarias, solo rije para las que surjen con posterioridad á la fecha del contrato, pero no respecto de las que deban efectuarse para habilitar la casa—Jur. Civ., tom. 5, pág. 324, Ser. 2ª.

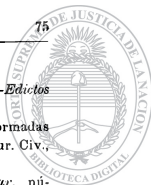
2. **Cláusula**—La de pagar parte del precio con una parte de las utilidades, importa una condición de la venta y no una obligación de hacer, de cuya falta de cumplimiento nazca el derecho de exigir ni el precio ni una indemnización de daños y perjuicios—Jur. Com., tom. 1, pág. 287, Ser. 2ª.

1a—Su objeto está regido por las leyes civiles—art. 1623, Cód. Civ. Las cuestiones que se originan respecto á su disolución y liquidación corresponden á la jurisdicción civil, según lo dispone el art. 60 de la Ley Org. de los Tribs. de la Capital.

1b—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 2369 del Cód. Civ.

1c—Así se desprende del contexto de los arts. 1514, 1518, 1519 y 1526 del Cód. Civ.

2—En la venta de una mina se estipuló que parte del precio se abonaría con utilidades de su explotación: la mina dió pérdidas. Es evidente que por este contrato ha querido ligarse el vendedor á la suerte del adquirente, aun cuando no se trataba de un contrato convencional, puesto que su validez no se hacia depender de la reali-



CLA—COM

3. Cláusula—La que condena al demandante á perpetuo silencio, carece de valor jurídico y no basta por sí sola para caracterizar la cosa juzgada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 2ª.

Cláusula—Véase: *Transacción*, núm. 1—*Municipalidad*, núm. 2—*Hechos*, núm. 4.

Coautora—Véase: *Concubina*, núm. 1.

Coautores—Véase: *Estafa*, núm. 3.

Coherederos—Véase: *Comprador*, núm. 7—*Herederos*, núms. 5, 6, 7, 8 y 11.

Comercial—Véase: *Contrato de cesión*, núm. 2.

1. Comerciantes—Su inscripción en la matrícula de comercio, prueba que el inscripto conserva su carácter mientras no haga constar su voluntad en contrario de un modo expreso—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

2. Comerciante—Para declarar la fecha en que ha cesado

zación de un hecho futuro ó incierto. No se puede argumentar diciendo que quedarían indefinidos los derechos del acreedor, pues los contratos de minas son por su naturaleza aleatorios. Las ordenanzas de minas facultan á los acreedores más privilegiados para explotarla por su cuenta hasta el reembolso total de lo que se les adeuda.

3—La cláusula de una sentencia imponiendo perpetuo silencio á la parte vencida, no tiene en la jurisprudencia valor alguno, salvo ciertas escepciones. Primero, porque si dicha cláusula va anexa á una resolución de las que pasan en autoridad de cosa juzgada, ningún resultado produciría, pues una vez ejecutoriada aquélla con ó sin dicha cláusula, no sería posible volver sobre la cuestión resuelta; y segundo, si por el contrario la sentencia fuese de las que no causan estado, la cláusula se tendría como inexistente, pues ella no podría desnaturalizar la resolución. Para que esta cláusula tuviese el mismo efecto jurídico que la cosa juzgada, sería necesario que tuviese todas las condiciones que la caracterizan.

2—Si se comprobara la existencia de deudas, no sería bastante ni siquiera para constatar el estado de insolvencia, pues esta no es suficiente para establecer la efectiva cesación de pagos, característica de la declaración de quiebra—Art. 1511, Cód. de Com. ant.—Bedarride en el tom. 1º, núm. 27, dice lo siguiente: «La ley no se preocupa sino de un hecho: no pregunta al comerciante si está ó no sol-



COM

en sus pagos, no basta justificar la existencia de deudas, es necesario comprobar evidentemente que fueron exigidas y no pagadas—Jur. Com., tom. 3, pág. 416, Ser. 2ª.

3. Comerciante—El auto que le ordena la presentación de sus libros, causa gravamen irreparable y es apelable—Jur. Com., tom. 1, pág. 13, Ser. 2ª.

Comerciante—Véase: *Libros de comercio*, núm. 2—*Alquiler*, núms. 1 y 2—*Comisionista*, núm. 1.

Comerciantes—Véase: *Compulsas*, núm. 3—*Moratorias*, núm. 1—*Prueba*, núm. 26—*Quiebra*, núms. 5 y 6—*Registro de Comercio*, núm. 1.

Comercio—Véase: *Martillero público*, núm. 1.

Comisario de Policía—Véase: *Reo*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 5.

Comisión—Véase: *Letrado*, núm. 1.

Comisión del delito—Véase: *Prescripción*, núm. 13.

1a. Comisión y gastos—Cuando no se realizan fondos para el pago de los martilleros, el que pidió su nombramiento es el único responsable—Jur. Com., tom. 2, pág. 108, Ser. 2ª.

1. Comisionista—El comerciante que como tal se encarga

vente; solo le pregunta si paga ó no sus obligaciones: si hay cesación, hay quiebra, cualquiera que sea su causa.»—Véase verb. *Quiebra* núm. 2261, tom. 1º, de la Inst. y *Cesación de pagos*, núms. 345 y 346, que están de acuerdo con el principio sentado en el sumario. El art. 1379 del Cód. de Com. vigente, consagra el mismo precepto legal.

3—Todo auto en que se ordena ó se deniega una medida probatoria causa agravio que no puede repararse al dictar sentencia definitiva. Véase Inst., tom. 2, verb. *Apelable*, núm. 10; y *Auto*, núm. 11.

1a—Las consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables á su autor—Art. 903, Cód. Civ.—También lo son las mediatas cuando las hubiese previsto ó haya podido preverlas—Art. 904, ibid.—Estos hechos voluntarios sin ser *contratos* son causas generadoras de obligaciones—art. 499.—Respecto al pago de los gastos es aplicable el art. 1949.

1—Ese comisionista ó mandatario está obligado, una vez aceptado el mandato, á cumplirlo en todas sus partes, bajo pena de responder



COM

de un mandato, no puede disponer de las mercaderías, debe exigir judicialmente que el mandante se reciba de ellas; si no lo hace es responsable de los daños y perjuicios que deberán ser fijados por árbitros—Jur. Com., tom. 3, pág. 573, Ser. 2ª.

2. Comisionista—Está obligado á rendir cuenta detallada y justificada con todos sus comprobantes de las operaciones que le encarga su comitente—Jur. Com., tom. 3, pág. 28, Ser. 2ª.

3. Comisionista—No es necesario para la existencia del mandato, que el encargado de cumplirlo haga de ello una profesión, pues el contrato se conceptúa existente aun cuando el comisionista lo acepte ocasionalmente—Jur. Com., tom. 3, pág. 573, Ser. 2ª.

Comisionistas—Véase: *Agente de Bolsa*, núm. 2.

Comitente—Véase: *Diferencias*, núm. 1—*Conforme*, núm. 2—*Comisionista*, núm. 2.

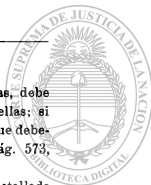
1. Compensación—Para que pueda existir en las injurias, es requisito indispensable que ellas sean individuales y de la misma categoría—Jur. Crim., tom. 1, pág. 510, Ser. 2ª.

por los daños y perjuicios—Arts. 303 y 334. Cód. de Com. antiguo, iguales á los arts. 238 y 242 del vigente—Como en el presente caso la ejecución de la obligación consistía en entregar ó dar mercaderías y como en este género de obligaciones el deudor es responsable de los perjuicios é intereses si no entrega la cosa estipulada en el lugar y tiempo convenidos y en defecto de este convenio en el que el Juez designe—art. 210 del Cód. de Com. ant. igual al 576 del Cód. Civil—resulta de aquí la exactitud del sumario.

2—Arts. 81 y 382 del Cód. de Com. ant. y 245, 277 del vigente.

3—No es necesario para la existencia de este contrato que el encargado haga profesión de comisionista. Así lo sienta entre otros autores Pardessus, como puede verse en el tomo 1, núm. 40 de su obra.

1—Para que el acusado quede exento de pena, decía el art. 315 del Cód. Penal anterior, igual en un todo al 186 del vigente, en su inc. 2ª, es necesario que haya mediado provocación y que sean verbales ó



COM

Compensación—Véase: *Locución de servicios*, núm. 1—*Vindicta pública*, núm. 1.

1. Competencia—La del Juzgado, para conocer en la demanda, solo puede resolverse con arreglo á lo que espresa el actor: las afirmaciones del demandado no deben tomarse en consideración—Jur. Civ., tom. 4, pág. 122, Ser. 2ª.

2. Competencia—A fin de establecerla, en litigios de valor indeterminado, debe ser fijada por la manifestación del demandante—Jur. Civ., tom. 4, pág. 82, Ser. 2ª.

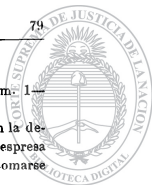
3. Competencia—En los juicios petitorios y posesorios se determina exclusivamente por la situación de los bienes reclamados, prescindiendo en absoluto del domicilio de las partes ó del lugar del contrato—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 2ª.

escritas leves. De modo que la compensación jamás puede admitirse como principio general en las injurias. La Cámara resolvió el caso en este sentido, no sentó el principio establecido en el sumario que peca de absoluto.

1—Cuando esas afirmaciones tienden á modificar el fondo de la demanda: mas no sucede lo propio cuando las observaciones hechas se refieren á la forma, y así la competencia del Juzgado por razón de la cantidad que se demanda se rige por lo que el actor espresa al entablar su acción, y no puede resolverse con arreglo á lo que confiese adeudar el ejecutado, como lo tiene resuelto la Cámara de lo Civil en un caso que corre publicado en el tomo 1, página 401, Ser. 1ª.

2—La demanda versaba sobre un número determinado de ovejas cuyo valor no alcanzaba á la competencia del Juzgado, pero como se demandó al mismo tiempo sus frutos y procreos, debían justipreciarse éstos bajo juramento, á fin de una vez agregada esta estimación al importe del capital, establecer la competencia, pues como lo dice el art. 14 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap., de 1886, «cuando la cosa demandada no sea una cantidad de dinero, el actor deberá manifestar su valor bajo juramento al entablar la demanda.» Igual cosa ha resuelto esta misma Cámara en otro caso—Véase verb. *Jurisdicción*, núm. 1.

3—Art. 4, Cód. de Proc.—Véase Inst., tomo 2º, verb. *Acción de jactancia*, núm. 1; y tom. 1º, verb. *Jueces de la Capital*, núm. 1525.



OOM

4. Competencia—Del Juez que debe conocer del juicio de alimentos, resulta de los hechos en que se funda la acción, y no del domicilio del demandado—Jur. Civ., tom. 5, pag. 66, Ser. 2ª.

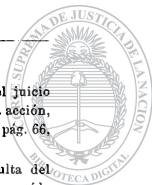
5. Competencia—En obligaciones personales, resulta del domicilio del demandado y no del hecho que dió origen á la obligación—Jur. Civ., tom. 5, pag. 313, Ser. 2ª.

6. Competencia—Aun cuando la parte desconozca la del Juzgado que lo emplaza, debe, mientras se resuelve la esce-

4—Este sumario está equivocado. En el caso presente se entabló juicio de alimentos después de admitida la demanda de divorcio ante el Tribunal Eclesiástico de aquí, hallándose presente el demandado, aunque de una manera accidental, al entablar la demanda de alimentos. Como los hechos que dieron ocasión á la demanda se habían producido en la Capital, siendo aquí donde fué admitida la demanda de divorcio, es evidente que el Juez competente para entender en el juicio de alimentos es el del mismo lugar, en virtud de lo dispuesto en el art. 4, inc. 4 del Cód. de Proc. Es evidente tambien que el sumario está equivocado, pues si en el caso ocurrente no se presenta la circunstancia de hallarse accidentalmente el demandado en el lugar de los hechos que dieron origen á la acción, habria tenido el actor que ocurrir al fuero del reo.

5—El actor cobraba honorarios por servicios profesionales prestados en su carácter de agente ó mandatario aconsejando y dirigiendo al demandado, redactando toda clase de documentos y demandas: esto lo hacia sin que hubiese mediado poder, ni convenio por escrito, pero en virtud de autorización verbal y expresa. Se dijo que el Juez era incompetente y que el interesado debiera ocurrir á los Jueces donde se habían devengado sus honorarios. A lo que se le contestó diciendo, que si en los servicios prestados hubiese habido, en vez de convenio ó mandato verbal, poder ó mandato escrito, seria procedente la regulacion previa de esos honorarios por el Juez ante quien se hubiese desempeñado el mandato, exigiendo su pago después por la via ejecutiva. Pero en este caso se trata de una obligación personal común, siendo aplicable el art. 4, inciso 4, del Cód. de Proc.

6 -A pesar de considerársele incompetente al Juez que emplaza á un litigante, es indudable que debe comparecer ante él y declinar de jurisdicción, cuando la incompetencia se aduce por la via declinato-



COM

ción, constituir domicilio legal ante él—Jur. Crim., tom. 2, pág. 530, Ser. 2ª.

7. Competencia.—Para entender en el cumplimiento de las prestaciones parciales de un contrato, corresponde á la Justicia de Paz, siempre que la parte que se exige, no sobrepase el límite de la competencia que la ley le señala—Jur. Civ., tom. 7, pág. 45, Ser. 2ª.

8. Competencia.—Las leyes de procedimientos son aplicables á las cuestiones de competencia, desde su promulgación, cualquiera que sea el estado en que se encuentren—Jur. Civ., tom. 7, pág. 7, Ser. 2ª.

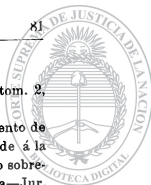
9. Competencia.—Tratándose de acciones personales, son competentes los Jueces de la Capital, si en ella tiene domicilio la parte demandada, aun cuando se trate de contratos sobre bienes raíces situados en otra jurisdicción—Jur. Civ., tom. 7, pág. 335, Ser. 2ª.

ría, manifestando las razones que le asisten para así proceder. Además de comparecer debe permanecer presente en el juicio hasta que la excepción sea definitivamente sustanciada, pues en caso de ausentarse sería tenido como desertor del juicio. Las notificaciones de las resoluciones que recaigan en el curso del juicio, deben ser hechas en el domicilio de las partes, salvo las que pueden ser hechas en virtud del precepto legal, por notas de no haber comparecido á la oficina á notificarse: debiendo dejársele cédula cuando fuere necesario, sería ello imposible si no tuviese domicilio constituido. Los arts. 10 y 11 del Cód. de Proc., en materia civil, son aplicables por analogía, al presente caso.

7—Para determinar la competencia es necesario atender única y exclusivamente al *petitum* de la demanda: si por la acción no se exige sino una suma, esa suma es la que establece la competencia del Juzgado con prescindencia de los demás antecedentes que la constituyen.

8—El principio de la no retronctividad de las leyes, no tiene aplicación en las de forma—Véase art. 811, Cód. de Proc.

9—Se trata de una demanda de escrituración: como el inmueble estaba situado fuera de la Capital, y el demandado tenía su domi-



COM

10. Competencia.—Las Cámaras de la Capital carecen de jurisdicción para resolver las cuestiones de competencia que se susciten entre un Juez de la Capital y uno de la Provincia—Jur. Civ., tom. 7, pág. 329, Ser. 2ª.

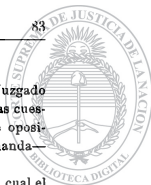
11. Competencia.—Entablada demanda de mayor cuantía, en juicio ordinario, la competencia es indiscutible, aún cuando se acompañen documentos ejecutables en otra jurisdicción—Jur. Civ., tom. 8, pág. 55, Ser. 2ª.

cilio aquí, se entabló la acción ante el Juez del domicilio del demandado. Se declinó de jurisdicción, diciendo que el inmueble estaba situado en la Provincia y que en los archivos de aquella jurisdicción se hallaban todos los documentos que tenían relación con el inmueble, y de acuerdo con la prescripción del art. 4, inc. 1º del Cód. de Proc., Concordante con el 1410 del Cód. Civ. A esto se contestó diciendo que según precepto del art. 1185 del Cód. Civil, la acción de escrituración es personalísima desde que se han obligado a reducir a escritura pública un contrato celebrado por escritura particular, y de acuerdo con el art. 4, inc. 4 del Cód. de Proc., así se resolvió por la Cámara. Debe no olvidarse que el art. 10) del Código Civil robustece la justicia de la resolución. Está de acuerdo con esta sentencia otro caso resuelto anteriormente por la Cámara, como puede verse en el verb. *Acción*, núm. 7 de tomo. En esta nota hemos dicho que otra cosa sería tratándose de la entrega del inmueble comprado por escritura pública, en cuyo caso sería competente el Juez del lugar en que la cosa esté situada. Hemos estudiado más detenidamente esta cuestión y nos hemos convencido del error de lo sostenido allí por nosotros. En un caso práctico que hemos tenido sobre entrega de un inmueble situado fuera de la Capital, la demanda se entabló ante el Juez del domicilio, que lo era el de la Capital. Opuesta la excepción de incompetencia fundada en la misma causal, se resolvió por el Juez Dr. Pizarro que, tratándose de la entrega de un inmueble, era Juez competente el del lugar en que la cosa está situada. Apelada la sentencia, fué revocada por los fundamentos que se podrán ver en la nota al verb. *Juez competente*, fundamentos todos aducidos por nosotros al evacuar el traslado de la excepción.

10—La Cámara de la Capital no es superior jerárquico común de ambos jueces y no existe una disposición que resuelva el caso.

11—Se demandaba el cobro de una cuenta en la que se incluía como comprobante un pagaré. No se ejecutaba el pagaré sino que se cobraba una cuenta por mayor suma que el importe de aquél.





COM

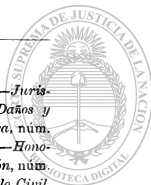
12. Competencia.—Consentido el auto en que el Juzgado se declara competente, no procede la resolución de las cuestiones que sobre competencia, como razón general de oposición, haya opuesto el demandado al contestar la demanda—Jur. Com., tom. 3, pág. 95, Ser. 2ª.

13. Competencia.—Comercial, la resolución por la cual el superior manda al inferior sostenerla, no importa en manera alguna un pronunciamiento sobre la jurisdicción que en definitiva deba conocer del asunto—Jur. Com., tom. 1, pág. 220, Ser. 2ª.

Competencia.—Véase: *Jueces de Comercio*, núm. 7—*Con-*

12—El art. 87 del Cód. de Proc. establece, que después de consentida la providencia, no podrá en adelante suscitarse ninguna cuestión al respecto, ni por las partes, ni de oficio por el Juzgado. El auto declarándose competente pasa en autoridad de cosa juzgada. A este respecto ya hay jurisprudencia—Véase: *Inst.*, tom. 2º, verb. *Competente*, núms. 1, 2 y 3; y tom. 1º, verb. *Competencia*, núm. 421.

13—Iniciada una cuestión ante la jurisdicción comercial, se inició la misma por el demandado ante la civil, desconociendo la competencia de aquél y deduciéndola por la vía inhibitoria. El Juez de lo civil se declara competente y exhorta al de comercio que se abstenga de continuar conociendo, y remita los autos; éste provee de conformidad ordenando la remisión. De esta providencia reclama la parte que inició su acción ante el Juez de Comercio, no se le hace lugar; apela, y la Cámara de lo Comercial le ordena que sostenga su jurisdicción declarándose al mismo tiempo en competencia con el Juez civil. Lo que correspondía hacer en este estado, al Juez de Comercio, una vez desaprobada su resolución de remitir los autos al Juez de lo Civil, era negarse y oponerse a la petición de ese Juez, formalizando así la competencia que aún no se había resuelto ni formado siquiera y que consiguientemente no pudo ser establecida por la Cámara. Encontrándose entonces en presencia de una verdadera contienda de competencia, debía darle curso y resolverla; pues lo primero que debe hacerse en todo juicio es resolver si la cuestión corresponde a su jurisdicción: era esto lo que correspondía hacer después de repuesta la causa al estado que tenía antes de ordenarse la remisión de los autos al Juez de lo Civil, debiendo imprimirsele la tramitación que correspondía. La Cámara, pues, no pudo resolver nada respecto a la cuestión de competencia, porque ésta no había sido sometida a su resolución.



COM

trato de cesión, núm. 2—*Contrato de sociedad*, núm. 1—*Jurisdicción comercial*, núms. 1 y 2—*Jueces*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 6—*Universalidad*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 2—*Jurisdicción*, núms. 1, 7 y 8—*Recusación*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 10—*Interdicto de retener*, núm. 3—*Acción*, núm. 7—*Resolución*, núm. 3—*Divorcio*, núm. 2—*Juez de lo Civil*, núm. 1—*Tenencia de los hijos*, núm. 1—*Demanda*, núm. 4—*Dependientes habilitados*, núm. 1—*Jueces del Crimen*, núms. 1 y 2.

Competentes—Véase: *Contratos*, núm. 5—*Jueces*, núm. 7—*Tribunales de la Capital*, núm. 2.

1a. Complicidad—Mientras no resulte prueba de ella, el que tiene en su poder los objetos robados solo puede ser castigado como encubridor—Jur. Crim., tom. 3, página 142, Ser. 2ª.

1b. Compra—La hecha por el mandatario, de bienes que

1a—Arts. 44 y 45 del Cód. Pen. de 1887, vigente.

1b—Es esta una de las cuestiones más difíciles que se pueden presentar en nuestros Tribunales, y no sería de extrañarse que cuando se presente otro caso análogo á éste fuese resuelto en sentido contrario al presente. La resolución se funda en la tendencia de la doctrina y de la legislación que precedió al Código Civil, en las terminantes disposiciones de éste, en la discusión habida en la Cámara de Senadores al discutir la doctrina relativa, en la fe de erratas y correcciones al Código y en los precedentes judiciales. En cuanto á la tendencia de la doctrina y legislación anterior al Cód. Civil, puede consultarse á Laserna y Montalvan, *Elein. de Der. Civ. y Penal de España*, 5ª Edición, tom. 2º, pág. 195 *in fine*; Acevedo, *Proyecto de Cód. Civ. para la Rep. Oriental del Uruguay*, art. 1673; Goyena, *Concordancias*, art. 1381; Ley 1ª, tit. 12, lib. 10, Nov. Rec. Las razones en que se fundan estas autoridades para resolver la cuestión son de orden público. Así Goyena, refiriéndose á aquellos á quienes alcanza la prohibición de la ley, dice que: «Por razón de sus oficios pueden conocer más á fondo el estado miserable del vendedor». La ley de Rec. citada, al consignar la prohibición de comprar cosa alguna de los bienes administrados, dice: «y si la comprase públican ó secretamente, pudiéndose comprar la cosa que así fué hecha, no vala; y sea desfecha, y torne el cuatro tanto de lo que valin lo que compró y

OOM

correspondan al mandante y cuya gestión le haya sido encomendada, es un acto nulo en sí mismo y la nulidad puede

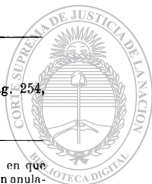
sea para nuestra Cámara». En el caso presente no se discute de si existe ó no nulidad, sino si ésta es absoluta ó relativa. Son aplicables al caso los arts. 1361, inc. 6, 1441 y 1442 del Cód. Civ. Además el tit. «De la nulidad de los actos jurídicos», arts. 1037 y siguientes del Código, trata en primer lugar de los actos nulos y en segundo de los anulables: á los primeros se refieren los arts. 1043 y 1044, y á los segundos el art. 1045. Este último no debe confundirse con los anteriores, pues sus diferencias son marcadas. Del contexto de los arts. 1043 y 1044, se desprende que ellos atacan directamente la existencia misma del acto, y es evidente que contra la prohibición de la ley, ó sin llenarse sus formas esenciales, no puede existir un acto público, pues lo contrario envolvería un contrasentido en el precepto legal. El art. 1361, inc. 6°, dice: «Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, á los *procuradores*».—Véase también los artículos 1441 y 1442.—El art. 1043 comprende este caso como lo indica la nota que lleva al pie, cuando dice: «como en los casos en que el tutor ó albacea se le priva adquirir los bienes que administra y muchos otros semejantes».—Véase Ley 1ª, tit. 12, lib. 1ª, Nov. Rec.—La disposición del art. 1044 también está comprendida en el caso presente, cuando establece que «son nulos los actos jurídicos en que los agentes hubiesen procedido con simulación ó fraude presumidos por la ley, ó cuando fuese prohibido el objeto principal del acto». La razón de estas prohibiciones se encuentra en que la ley ha considerado que la subsistencia de tales actos es incompatible con la moral jurídica y con las buenas costumbres. En estos contratos generalmente se trata una lucha entre la codicia de los unos y la situación precaria y apremiante de los otros, en la que con suma frecuencia triunfa la primera. La verdadera doctrina debemos buscarla en la «Discusión de la fe de erratas y correcciones al Código Civil propuesta por el Dr. Benjamin Paz y la Comisión de Legislación del Senado», que corre publicada en un tomo especial. En la pág. 399 de ese libro corre agregado, al antiguo artículo, el aditamento, *presumidos por la ley*. El Dr. Cortés al fundarlo, decía lo siguiente: El objeto de esta corrección, es poner en consonancia dos artículos del Código, que se encuentran en el mismo título, muy inmediatos, y que sin embargo aparecen en abierta oposición. Se trata de la nulidad de los actos jurídicos; y, por de contado, no es lo mismo en derecho, que un acto sea nulo *ipso jure* ó que sea anulable: son cosas muy diferentes. El uno es tenido por válido hasta tanto sea rescindido ó anulado y el otro es nulo de por sí, sin necesidad de que se intente acción para anularlo. Ahora, pues, siendo estas cosas sumamente diversas, tan



COM

y debe ser declarada de oficio—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 2ª.

pronto dice el Código en un artículo, que los actos jurídicos en que hubiera habido simulación ó fraude, son nulos como que son anulables. Al parecer, pues, hay una completa contradicción: pero la explicación de eso está, como puede verse en Freitas, que es de donde el Dr. Velez ha tomado su doctrina, en que solo son nulos los actos jurídicos cuando se ejecutan con simulación ó fraude *presumidos por la ley*—art. 1044—y anulables cuando el fraude ó la simulación no los presume el derecho, habiendo por esto necesidad de probarlo. Para suprimir esta antinomia, dejando clara la disposición de ambos artículos, la Comisión ha agregado á las palabras simulación ó fraude: «*presumidos por la ley*». En un caso de compra de una testamentaria por el abogado director de ella, se declaró por la antigua Cámara de Apelaciones de esta ciudad, cuando pertenecía á la Provincia, que la nulidad era absoluta, no simplemente relativa. Este fallo puede verse en el libro publicado por el Dr. Beláustegui, pág. 333. Rogron sostiene que la nulidad es relativa, pero que «es absoluta y de orden público en el sentido de que debe siempre ser pronunciada; así que los propietarios de los derechos cedidos lo demanden, sean cuales fueren las razones que invoquen los cesionarios para su defensa». Cita, sin embargo, una sentencia de las Cortes de Francia que han declarado que la prohibición contenida en el art. 1597 del Cód. Civ. Francés (semejante á los arts. 1361, inciso 6°, y 1442 del nuestro) constituye una nulidad absoluta y de orden público. Véase el Comentario al art. 1597 del Cód. Civ. Francés—De lo espuesto resulta, que se trata de una nulidad absoluta y manifiesta, de aquellas que pueden y deben ser declaradas de oficio aún sin petición de parte—Arts. 1038 y 1047 del Cód. Civ.—Es evidente que de este modo se favorece más á los vendedores ó cedentes; pero el propósito de la ley es menos evitar que éstos hagan un mal negocio, que impedir que el fraude haga camino, conspirando así á robustecer los contratos basados en la moral, en la justicia y en el orden público, lo que constituye el desideratum de toda ley. Si la parte no pide la declaración de la nulidad, su silencio no puede acallar el precepto legal que fundado en motivos poderosos ha determinado que esa nulidad sea declarada de oficio—Art. 1048, citado—Pero es necesario no olvidar que los jueces no pueden, aún cuando la nulidad sea manifiesta, declararla de oficio mientras las partes no sometan á su decisión cuestiones que tengan en él su origen, como lo tiene ya resuelto esta misma Cámara—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Nulidad*, número 25.



COM

2. Compra—La aceptación ó desistimiento puede ser hecho por el mandatario nombrado para gestionar la escrituración, sin necesidad de nuevo poder—Jur. Civ., tom. 5, pág. 271, Ser. 2°.

Compra—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 1—*Auto*, núm. 1—*Comprador*, núms. 1, 2 y 6—*Oblación*, número 2.

1. Comprador—Ad-corpus, no puede exigir la mensura del bien comprado, debe escriturar lo que exista por el precio fijado en la licitación—Jur. Civ., tom. 4, pág. 215, Ser. 2°.

2a. Comprador—Solo puede desistir de la compra por haber diferencia en el área, si ésta existe en el acto de la venta, pero no por las disminuciones que por apertura de calles deba sufrir el inmueble con posterioridad—Jur. Civ., tom. 4, pág. 458, Ser. 2°.

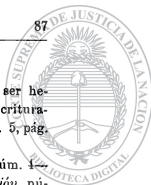
2bis. Comprador—En remate, para que su acción proceda contra el propietario, debe justificar plenamente la autorización en virtud de la cual el rematador procedió á la venta—Jur. Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 2°.

2—Esta manifestación es un detalle, una formalidad previa á la escrituración, siendo su personería bastante, según disposición del art. 17 del Cód. de Proc.

1—Se trata de una compraventa hecha por junto—arts. 1339 y 1344, inc. 5—en cuyo caso queda perfeccionado el contrato una vez convenido en el precio: lo único que está obligado á hacer el vendedor es á verificar la tradición de la cosa vendida. El comprador exigió que se mensurara el terreno antes de hacer la oblación del precio, en cuyo caso, aún suponiendo que la venta no hubiese sido ad-corpus, tampoco tendría derecho á exigir esa mensura, como lo tiene ya establecido la Cámara en otro caso—Véase: *Inst.*, tom. 2°, verb. *Mensura*, núm. 4.

2a—Cuando se pidió el desistimiento no se había abierto la calle aún, de manera que ni en el momento de celebrarse el contrato, ni al escriturarse, existía esa disminución. El hecho futuro no es de tomarse en consideración, pues es un hecho incierto que no está en la previsión humana el conocerlo.

2bis—La prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio.



COM

3. Comprador—En remate judicial, que vencidos tres días, no haya objetado los títulos, está obligado á la oblación del precio—Jur. Civ., tom. 5, pág. 452, Ser. 2ª.

4. Comprador—No puede darse por desistido al comprador, mientras no se encuentre vencido el término que se le fijó para la oblación bajo apercibimiento: los incidentes que se susciten suspenden el término—Jur. Civ., tom. 8, pág. 90, Ser. 2ª.

5. Comprador—Su conformidad con la escrituración ordenada judicialmente, previa exhibición de los títulos del vendedor, no importa la reapertura del juicio en que se ordenó, ni basta en consecuencia para darle por desistido—Jur. Civ., tom. 7, pág. 499, Ser. 2ª.

6. Comprador—Ejecutoriada la sentencia que impone al comprador el desistimiento de la compra ó la aceptación del título con los de que adolezca, no puede admitirse observación aún cuando el vendedor carezca de título sobre parte del terreno vendido—Jur. Civ., tom. 7, pág. 552, Ser. 2ª.

3—Una vez pedida la exhibición de los títulos y verificada ésta, el comprador tiene tres días perentorios para examinarlos. Si no opone dificultad, debe oblar el precio—Art. 521, Cód. de Proc.

4—Ordenada la oblación del precio de compra, la parte solicitó la exhibición de los títulos, á lo que se proveyó de conformidad. Antes de vencerse el término de tres días se suscitó un incidente; sustanciado y resuelto éste, se pidió se le diera por desistido al comprador, y no habiendo vencido el término de tres días por haber quedado en suspenso á causa del incidente promovido, no se hizo lugar á ello por la Cámara.

6—La Cámara resolvió que «el Juez *a quo* debe ordenar al comprador que haga la opción que determina el art. 522 del Cód. de Proc.» El inferior, en cumplimiento de la sentencia, ordenó que el comprador «optase por el desistimiento de la compra ó por la escrituración con los defectos de que adolezcan los títulos.» El comprador optó por la compra, pero solo del área que dieran los títulos, sin decir si aceptaba también los vicios de éstos y la mayor área que tenía el terreno en relación á ellos. Vencido el término señalado



COM

7. Comprador--De un inmueble testamentario, puede desistirse sin responsabilidad, siempre que los que se dicen herederos del causante se nieguen á justificar su carácter. El simple reconocimiento de otros coherederos, no es bastante para él. Jur. Civ., tom. 8, pág. 117, Ser. 2ª.

viene nuevamente haciendo observaciones, las que no le fueron admitidas como lo expresa el sumario.

7—En cuanto á la primera parte del sumario no hay duda alguna: mas no sucede lo propio en cuanto á la última. En esta parte la resolución es revocatoria de la de 1ª Instancia por la cual se estableció que el reconocimiento hecho personalmente por el coheredero es bastante como título hereditario: esto se funda en que el reconocimiento en este caso importa disminuir considerablemente la porción hereditaria del que lo efectúa: que el reconocimiento hecho por los coherederos los inhabilita á deducir gestión alguna para desconocer ese carácter hereditario. La Cámara no pensó del mismo modo en este caso, fundada en que la persona que hace el reconocimiento es la viuda de un cónyuge que había sido casada tres veces; con las dos primeras esposas tuvo sucesión, pero no así con la última: ésta reconoce el carácter hereditario de los hijos de los matrimonios anteriores, pero sin que hubiese otra constancia en autos, que constataran la filiación: este reconocimiento no puede tener igual fuerza que las mismas partidas, porque este acto como medio de comprobar el carácter hereditario, es un medio supletorio de prueba, á falta de partidas parroquiales—Art. 85, Cód. Civ.—Pero no debe olvidarse, que nuestros Tribunales han consagrado la práctica de aceptar como medio para comprobar el carácter hereditario, el reconocimiento personal de los demás coherederos. Más adelante agrega la Cámara: «Pero no debe olvidarse que la práctica consagra una excepción, y de este punto de vista no sería en manera alguna correcto aplicarla á todos los casos, sino á cada ocurrencia judicial, según fuesen las circunstancias de cada proceso testamentario y siempre que hicieran incontestables su legitimidad y procedencia.» En el caso presente no concurrían estas circunstancias: no se había comprobado la imposibilidad de obtener las partidas y solo se alegaba como causal «el deseo de evitar pérdida de tiempo y los gastos necesarios para la agregación de las partidas parroquiales», razones que están muy lejos de ser atendibles. La Cámara considera que no habría inconveniente en aceptar como título hereditario el reconocimiento, si él emanase de uno de los hijos legítimos del causante que hubiese comprobado en legal forma su título propio, pero no puede aceptarse cuando él procede de la tercer viuda del causante,



COM

8. Comprador—Cuando los defectos de los títulos son de fácil subsanación, el vendedor está obligado á llenar las exigencias del comprador que no quiere desistir del contrato—Jur. Civ., tom. 8, pág. 124, Ser. 2ª.

Comprador—Véase: *Contrato*, núm. 2—*Tercero*, núm. 1—*Remate*, núm. 1—*Título*, núms. 3 y 4—*Tradición*, núm. 1—*Auto*, núm. 1—*Avisos*, núm. 1—*Demanda*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 2—*Vicios*, núm. 1—*Vendedor*, núms. 1 y 2—*Intereses*, núm. 5—*Posesión*, núms. 3 y 9—*Títulos de propiedad*, núm. 2—*Contrato de locación*, núm. 5—*Oblación*, núms. 1 y 2—*Acción de daños y perjuicios*, núm. 3.

Comprador de frutos—Véase: *Consignatario*, núm. 1—*Contrato*, núm. 7.

1. Comprador en remate—No puede exigir la validez de la venta, mientras no justifique que en aquel acto se llenaron las condiciones impuestas por el martillero aunque fuesen verbales—Jur. Com., tom. 2, pág. 567, Ser. 2ª.

y mucho menos cuando éste ha dejado sucesión legítima que puede ser perjudicada con el reconocimiento de la viuda que puede aceptar como tales hijos á los que no lo son.

8—El art. 522 del Cód. de Proc. establece que si los títulos adoleciesen de vicios que no fuesen subsanables en breve tiempo, el comprador deberá optar entre el desistimiento de la compra, ó su realización con los defectos que contengan los títulos. De donde se deduce, á contrario sensu, que si fuesen subsanables en breve tiempo, no puede exigírsele que opte por algunos de los medios establecidos en la disyuntiva, sino que por el contrario, el comprador puede optar por la realización de la compra exigiendo la subsanación previa de los títulos. De acuerdo esta resolución con la que se registra en el tom. 1º, Inst., verb. *Remate judicial*, núms. 2363, 2364 y 2365.

1—Aquí fué demandado el martillero, quien espuso en su escrito de contestación, que en el acto del remate se establecieron condiciones para la venta que no se cumplieron, comprobando plenamente el demandado esta aseveración. Para que el comprador pudiese exigir el cumplimiento del contrato, debió justificar á su vez que esas condiciones fueron cumplidas. Esta justificación se puede hacer por cualquier medio de prueba admitido para probar los hechos, porque el remate es un contrato verbal.



COM

Compradores—Véase: *Condiciones*, núm. 2.

1a. Compraventa—Reconocida por el demandado la existencia del contrato verbal de compraventa, éste se encuentra obligado á cumplirlo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 409, Ser. 2ª.

Compraventa—Véase: *Contrato verbal*, núm. 1—*Transacciones*, núm. 1—*Boleto*, núm. 1—*Contrato*, núm. 6—*Cuenta particionaria*, núm. 3—*Firma del comprador*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 3.

Comprobante—Véase: *Comisionista*, núm. 2.

1b. Compromiso arbitral—Subsiste mientras en juicio especial no se declare su improcedencia ó nulidad—Jur. Com., tom. 3, pág. 124, Ser. 2ª

Compromiso arbitral—Véase: *Multa*, núm. 4.

1c. Compulsa—Es la simple confrontación de la cuenta con los libros—Jur. Com., tom. 4, pág. 48, Ser. 1ª.

2. Compulsa—La de los libros del demandado, cuando no se ha presentado cuenta corriente en la demanda, no forma prueba—Jur. Com., tom. 4, pág. 450, Ser. 2ª.

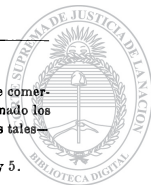
1a—Se trata de la compraventa de un inmueble, que según disposición del art. 1184, inc. 1º del Cód. Civil, debe ser hecha en escritura pública bajo pena de nulidad; pero los arts. 1185, 1187 y 1188 complementan el principio general sentado y resuelven la cuestión en el sentido del sumario.

1b—Los actos anulables se reputan válidos mientras su nulidad no haya sido declarada y solo se tienen por nulos desde el día de la sentencia que los anulase—Art. 1046, Cód. Civ.—Para declarar esta nulidad se requiere el juicio correspondiente seguido en forma legal. El art. 781 del Cód. de Proc., determina los casos en que el compromiso arbitral cesa.

1c—Esta compulsu no implica que el interesado no pueda impugnar por otros medios probatorios los asientos de los libros que no sean la expresión de la verdad en las operaciones.

2—Si la acción se funda en una cuenta corriente, debe ella ser la base de la acción, y consiguientemente acompañarse copia al instaurarla, como lo dispone el art. 72 del Cód. de Proc., sin que la ley permita su eficacia probatoria si es presentada con posterioridad.





COM—CON

3. Compulsa—La de los libros, en litigios entre comerciantes, es procedente aun cuando ellos no hayan llenado los requisitos que la ley establece para ser considerados tales—Jur. Com., tom. 2, pág. 573, Ser. 2ª.

Compulsa—Véase: *Libros de comercio*, núms. 1, 4 y 5.

Concesionarios—Véase: *Ferrocarril*, núm. 1.

1a. Concordato—Siempre que éste reúna los requisitos exigidos por la ley, debe ser aprobado—Jur. Com., tom. 2, pág. 451, Ser. 2ª.

Concordato—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 16—*Prueba*, núm. 24.

1b. Concubina—Debe considerarse coautora del delito llevado á cabo en confabulación con el querido, y no puede ampararse de la obediencia y el silencio á que la ley obliga á la esposa legítima respecto á los actos de su esposo—Jur. Crim., tom. 3, pág. 326, Ser. 2ª.

Concubina—Véase: *Confesión*, núm. 1.

Conculinato—Véase: *Confesión*, núm. 1.

1c. Concurso—No pudiendo ejercer más derechos de los

3—El comerciante que no llena todos los requisitos que la ley exige para ser considerado como tal, tiene todas las cargas del comerciante y no goza de sus beneficios. La exhibición de los libros no solo es un deber sino que es también una carga: en este último carácter, no puede un comerciante negarse á la compulsa de sus libros, so pretexto de que no se encuentra matriculado, por ejemplo.

1a—Requisitos establecidos en el art. 1620 y siguientes del Cód. de Com. antiguo.

1b—La razón que ha tenido la ley para imponer silencio á la esposa no existe respecto de una concubina, pues en este caso la ruptura de la unión concubinaría más bien sería un beneficio social que un mal. La sociedad está interesada en la conservación del vínculo matrimonial y lo está asimismo en la ruptura del amancebamiento que siempre trae á la sociedad un estado incierto y dudoso que conviene reprimir.

1c—Así lo enseña el Dr. Moreno en su Tratado sobre las quiebras, cuando dice: «Los acreedores no pueden ejercer más derechos sobre los bienes que el fallido mismo.» Debe consiguientemente cumplirse

CON

que tuviese el fallido, está obligado al cumplimiento de todo contrato que éste hubiese terminado antes de la efectiva cesación de pagos—Jur. Com., tom. 1, pág. 516, Ser. 2ª.

2. Concurso—Debe otorgar título de aquellas enagenaciones que hubiese estipulado el fallido y que constan de instrumentos públicos—Jur. Com., tom. 1, pág. 516, Ser. 2ª.

3. Concurso—En este juicio, solo pueden acumular intereses los acreedores que tengan afectado al pago de su crédito un bien especial y solo hasta la concurrencia de aquél—Jur. Com., tom. 2, pág. 62, Ser. 2ª.

Concurso—Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Síndico provisorio*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 14—*Socio comanditario*, núm. 1—*Declaración*, núm. 2—*Depositario*, núm. 1—*Documentos*, núm. 18—*Jurisdicción*, núm. 10—*Cesación de pagos*, núms. 3 y 4—*Dación en pago*, núm. 1—*Quiebra*, número 2.

Condenación en costas—Véase: *Incidente*, núm. 3—*Retroactividad*, núm. 1.

1. Condición—El plazo fijado por una sentencia ejecutoriada no puede ser modificado por hechos de las partes que retarden el cumplimiento de la condición desde la cual debía empezar á correr—Jur. Civ., tom. 6, pág. 574, Ser. 2ª.

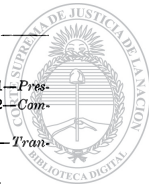
odo contrato celebrado por el fallido antes de la efectiva cesación de pagos, excepción hecha de aquellos actos celebrados con noticia de este estado, como lo dispone el art. 1541 del Cód. de Comercio anterior.

2—Siempre que la obligación reúna las condiciones establecidas en la nota precedente, porque como dice el Dr. Moreno en su citada obra, «no puede el concurso retener en el activo una cosa que legalmente se ha enagelado.»

3—Art. 1543 del Cód. de Com. ant., igual al 1414 del vigente.

4—No puede ser modificada por hechos de una de las partes sin el consentimiento de la otra, pues si ambas partes estuviesen de acuerdo en cualquiera modificación, no habría inconveniente alguno en que ese acuerdo de voluntades se hiciese efectivo, aunque con ello se modificase la sentencia ejecutoriada.





CON

Condición—Véase: *Obligación condicional*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 8—*Auto*, núm. 1—*Cláusula*, núm. 2—*Comprador*, núm. 1.

Condición impuesta—Véase: *Donación*, núm. 3—*Transacción*, núm. 4.

Condición social—Véase: *Indemnización*, núm. 3.

1a. Condición resolutoria—Al obligado que la invoca corresponde la prueba de su existencia—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 2ª.

1b. Condiciones—Las insertas en los avisos del remate

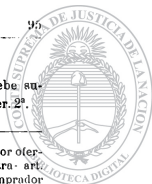
1a—De acuerdo con los principios que rigen los procedimientos: pues reconocida la existencia de un contrato, las modalidades que se invoquen son hechos nuevos que debe probarlos el que los aduce: éstos pueden considerarse como verdaderas defensas ó escepciones, en cuyo caso es aplicable la máxima *Reus in exceptione fit actor*. Bonnier sostiene igual doctrina cuando dice en el tom. 1º, pág. 30: «El que alega un hecho nuevo contrario á la posición que asumió el adversario, debe probar la verdad de este hecho.» Por otra parte, debe tenerse presente que la condición resolutoria no se presume en las obligaciones, son de escepción.

1b—Para nosotros esta es la doctrina correcta, pero no lo es para la Cámara. En el caso que motiva este sumario, la Cámara resolvió precisamente lo contrario de lo que allí se establece. El Juez de 1ª Instancia Dr. Basualdo dijo que no podía legitimamente darse al contrato celebrado condiciones estrañas á la autorización de que estaban investidos los martilleros y especialmente tendentes á variar los términos del boleto, suscrito despues del remate. Que aun en la hipótesis de que los martilleros hubiesen hecho antes del remate declaraciones sobre la venta, á que el acto judicial que lo ordenó no los autorizaba, siempre resultaría que el contrato no se terminó en esas condiciones, como resulta de los boletos: y en tal caso debe estarse á la constancia escrita, máxime cuando ella se encuentra ajustada á los términos de la autorización. La Cámara revocó esta sentencia diciendo: «Que la venta en público remate es un contrato eminentemente verbal; que esto resulta de las disposiciones combinadas del Cód. de Com., en lo que se relaciona con las ventas en remate, como lo tiene ya resuelto la misma Cámara en el tom. 4, pág. 340, Ser. 1º de sus Fallos.» Y si el contrato es verbal, ¿qué clase de prueba sino la testimonial puede ser ofrecida? Ahora bien, si nos encontramos en presencia de un contrato consensual que por su índole debe con-

CON

forman para los compradores las únicas bases á que debe subordinarse el contrato—Jur. Civ., tom. 4, pág. 408, Ser. 2ª.

cluirse verbalmente; si el consentimiento debe manifestarse por ofertas ó propuestas de una de las partes y aceptación de la otra: art. 1144, Cód. Civ.—y si se demuestra que la aceptación del comprador ha recaído sobre una oferta aparejada con todos los requisitos del contrato de compraventa en los términos antes espuestos, forzoso es convenir en que la testamentaria, en cuya representación obraba el martillero, ha vendido el inmueble bajo las condiciones que ha comprobado el comprador.» Esta argumentación de la Cámara bien parece el alegato ó defensa de un litigante que el estudio imparcial de un Tribunal que debe estudiar las cuestiones que vienen ante él á fin de dar su voto imparcial. Decir que porque el rematador haya manifestado verbalmente las consideraciones de la venta, está la testamentaria que lo ha comisionado, obligada á escriturar al comprador, es decir, lo que no corresponde. Y decir que de allí se saca la consecuencia *forzosa* de que la venta debe hacerse efectiva por la sucesión, es deducir una consecuencia, no *forzosa* sino *forzada*. Que el remate sea válido: que el rematador debe cumplir el contrato, perfectamente bien; pero que la sucesión quede obligada por un acto de su mandatario que se ha estralimitado en su mandato, no es ni siquiera aceptable. El comprador puede exigir del martillero el cumplimiento del contrato ó la indemnización de daños y perjuicios en caso omiso; pero la sucesión que le ha conferido una comisión al martillero y que esa comisión está demarcada por los avisos, esté obligada á respetar lo que el martillero hace fuera de las condiciones del mandato, no se comprende, pues, no hay ley que la obligue. Más adelante agrega la Cámara: «Cierto es que el art. 1931 del Cód. Civil, establece que cuando el mandatario contratase en nombre del mandante pasando los límites del mandato, y el mandante no ratificase el contrato, éste será nulo, pero ello es á condición de que, como el mismo artículo lo declara, que el contratante conozca los poderes dados por el mandante al mandatario». De aquí deduce la Cámara que si el contratante no conoce esos poderes, el contrato no es nulo. Esta consecuencia no es exacta sino en parte. El contrato no es nulo para el contratante respecto al mandatario, pero es nulo respecto del mandante en el sentido de que no puede el mandatario obligar á su mandante en virtud de una operación hecha á su nombre estralimitando las facultades conferidas. Los arts. 1161 y 1162 del Cód. Civil, corroboran esta tesis. El art. 1931 citado por la Cámara, es tomado del 2953 de Freitas, éste autor cita en este artículo el 2933 donde se dice que «la ejecución inexacta del mandato no obliga al mandante». ¿Cómo pues



CON

2. Condiciones—Imperativas, que obligan á ambos contratantes, priman sobre las facultativas en caso de ser contradictorias entre sí.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 176, Ser. 2ª.

Condiciones—Véase: *Título inhábil*, núm. 1—*Empedra*—

pretende la Cámara sentar el principio de que la ejecución inexacta del mandato obliga al mandatario, cuando el contratante no conocía los poderes conferidos al mandatario? ¿De dónde saca esta consecuencia forzosa? Adelantemos en el examen de las consideraciones de la Cámara: «Convenido que el rematador», dice este Tribunal, «no puede estralimitarse y que sus operaciones tengan el control de la justicia: pero no pudiendo los licitadores tener conocimiento de los detalles de los autos, no conociendo otros poderes que los que constan de los propios avisos de remate, encontrándose por lo tanto en el caso del art. 193; *in fine* del Cód. Civil, también debe aceptarse que cuando, como en el presente caso se trata de un detalle que el tercero no tenía motivos para creer que debiera ser materia de una facultad especial, creo que el comprador, que es un tercero en cuanto á los vendedores y el martillero, ha podido considerar que entraba en los límites del mandato la cláusula bajo la cual el mismo rematador confiesa haber vendido, y que precisamente en caso como el ocurrente entra en la prudente previsión con que el legislador ha favorecido á quien contrata con el mandatario que obra en los términos de la procuración». Francamente, causa sentimiento el ver que las leyes puedan ser materia de interpretaciones tan erradas: es sensible que la intención del legislador sea frustrada á causa de un criterio poco práctico. El argumento que se hace por la Cámara de que no pueden los licitadores tener conocimiento de los detalles de los autos, es inconsistente. Los licitadores pueden tener cuando quieran conocimiento de los autos yendo á la secretaría actuaria y examinándolos. Argumentar con el art. 193, última parte, que se refiere á *órdenes reserradas é instrucciones secretas* del mandante, es algo que no se explica, pues las instrucciones á los martilleros constan de los expedientes en que son nombrados, y los expedientes son *instrumentos públicos*. De lo espuesto resulta, pues comprobado lo que digo al principio de esta nota: el sumario consagra la doctrina correcta proclamada por el Juez de 1ª Instancia, mientras que la resolución de la Cámara es contraria al sumario. Por lo demás, el principio establecido en el sumario está de acuerdo con otras resoluciones de la Cámara como puede verse en la Inst., tom. 2, verb. *contrato de compraventa*, núm. 1.

2.—Lo que expresa el sumario es lo correcto en derecho pero no ha sido materia de resolución en la Cámara.



CON

dos, núm. 1—*Fuerza ejecutiva*, núm. 1—*Derechos eventuales*, núm. 1—*Insano*, núm. 1.

Condiciones geológicas—Véase: *Daños y Perjuicios*, núm. 10.

Condenaciones pecuniarias—Véase: *Esposa*, núm. 5.

Condominio—Consentida la cesación por medio de la cuenta particionaria, la sentencia que manda adjudicar á sus herederos, bienes determinados, no causa agravios á los condóminos, si no prefieren la licitación—Jur. Civ., tom. 5, pág. 230, Ser. 2ª.

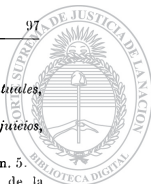
Condominio—Véase: *Administrador*, núm. 1—*Litigio*, núm. 1—*Medianería*, núm. 1—*Menores*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 10—*Transacción*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núm. 11.

1a. Condómino—Que promete vender el inmueble en condominio, es responsable al comprador de buena fe, de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento del contrato pueda causarle, pues ella le es imputable exclusivamente—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 2ª.

1b. Condóminos—La facultad conferida por el Juez á uno de éstos, para enajenar particularmente el inmueble, implica la de firmar la escritura de venta—Jur. Civ., tom. 5, pág. 364, Ser. 2ª.

1a—Aquí hay venta de cosa ajena ignorando el comprador esta circunstancia. «Las cosas ajenas no pueden venderse», dice el art. 1329 del Cód. Civ. El vendedor de cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al comprador las pérdidas é intereses, porque así lo establece el mismo artículo. Este caso está de acuerdo con el que corre anotado en la inst., tom. 2, verb. *Comprador*, núm. 9; *vendedor de cosas ajenas*, núms. 1 y 2. «El que vende cosas ajenas incurre en el delito de estelionato», dice el art. 1178 del Cód. Civ.

1b—No es absolutamente necesario que el Juez comisione al condómino para suscribir la escritura, desde que autorice para enajenar la propiedad particular. Aún en el otorgamiento de las escrituras públicas en caso de ejecución, la ley dispone en primer término que





CON

Condóminos—Véase: *Condominio*, núm. 1.

Conductor—Véase: *Homicidio*, núm. 1.

1a. Confabulación—La concubina debe considerarse coautora del delito llevado á cabo en confabulación con el querido: no puede ampararse de la obediencia y el silencio á que la ley ha obligado á la esposa legítima respecto de los actos del esposo—Jur. Crim., tomo 3, pág. 326, Ser. 2ª.

Confabulación—Véase: *Robo*, núm. 4—*Estafa*, núm. 3.

1b. Confesión—La del concubinato, es una presunción vehemente de paternidad de los hijos de la concubina que hayan nacido durante las relaciones, y á ellos debe circunscribirse la prestación de alimentos—Jur. Civ., tom. 4, pág. 166, Ser. 2ª.

la escritura la firme el ejecutado y en su defecto el Juez—art. 520 del Cód. de Proc., 2º aparte—Además, en el caso presente, la condómino era la madre de los otros condóminos, de quienes era legítima representante en virtud de la patria potestad que ejerce. No se puede argumentar diciendo que así como los martilleros encargados de vender un inmueble en remate público, no tienen facultad para firmar la escritura de venta, tampoco la persona encargada por el Juez para enajenar, puede sin autorización judicial firmar la escritura de enajenación. A esto se contesta, diciendo que el caso no es aplicable al presente, porque los martilleros son comisionados para cumplir un acto que por su oficio ejecutan verbalmente, y no desempeñan su comisión ni como condóminos en la cosa, ni como interesados en ella, siendo á éstos á quienes compete firmar la escritura—art. 520 citado.—Tampoco puede argumentarse con el art. 1881, inc. 1º del Cód. Civ., pues en el caso presente existe la autorización especial para enajenar, siendo así que este artículo no habla de autorización especial para firmar escrituras de enajenación.

1a—La ley habla de la esposa—y como se trata de una ley de excepción, no puede aplicarse sino á aquellos casos especialmente determinados. Toda ley de excepción debe interpretarse restrictivamente y jamás ampliarse—Véase verb. *Concubina*, núm. 1.

1b—Es una presunción vehemente, pero no bastaría por sí sola para autorizar la obligación de prestar alimentos, habría necesidad de la concurrencia de otras circunstancias precisas que determinaran y fijaran el criterio judicial.

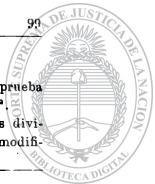
CON

2. Confesión—Del demandado, hace innecesaria la prueba por parte del actor—Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 2^a.

3. Confesión—La que producen las posiciones es divisible y toca al absolvente justificar los extremos que modifi-

2—La confesión es la prueba por excelencia, es la *probatio probatissima* de la ley 2, tit. 13, part. 3^a, que dice: «Grande es la fuerza que ha la conocencia, que faze la parte en juicio, estando su contendor delante. Ca por ella se puede librar la contienda, bien assi, como si lo que conocen fuese prouado por buenos testigos ó por verdaderas cartas. E porende el Judgador ante quien es fecha la conocencia, deue dar luego juyzio afinado por ello.»

3—En materia civil la confesión es divisible, según precepto de la Ley 4, tit. 13, Part. 3^a, que habla de «como la conocencia que es fecha en juyzio, deue valer» y continúa: «muchas cosas ha menester que aya en si, la conocencia que fuese fecha en juyzio para tener daño á aquel que la faze, e pro a su contendor, e son estas: Que sea de edad cumplida el que la faze... e que la faga contra si. Ca si el conociese cosa que es a su pro, non temia daño á su contendor, si lo non prouasse.» Igual doctrina sienta la ley 3, tit. 3, lib. 7 del Fuero Real. La ley 8, tit. 3, Part. 3^a dice: «Conocen a las vegadas los demandados, lo que los demandan en juyzio. Pero ponen luego defensiones ante si, que han pagado ó fecho aquello que los demandan, ó que los demandadores le fizieron pleyto, que nunca gelo demandassen. E porende dezimos, que en tales razones como estas, ó en otras semejantes dellas, que deue el judgador dar plazo al demandado á que preue la defensión que oviere puesto ante si.» Es evidente que según estas leyes, la confesion es divisible. Así en el caso que nos ocupa, el demandado confesó la existencia de la obligación, pero que ella había quedado sin efecto á causa de modificaciones que pretendió introducir la otra parte. La Cámara resolvió que era obligación de la parte comprobar la modalidad de la confesión, es decir, que debió comprobar que efectivamente el contrato quedó rescindido. Nos hemos detenido á estudiar el valor de la confesión en materia civil, porque el punto ha sido resuelto en sentido diverso en nuestros tribunales. Así podemos ver que la S.C. N. ha dicho en algunos casos que «La confesión calificada, es indivisible aún en materia civil ó comercial. Tom. 3, págs. 160 y 202, Ser. 1^a; tom. 2, págs. 120 y 204, Ser. 2^a; tom. 8, pág. 340, Ser. 2^a; tom. 10, pág. 14, Ser. 2^a» En otros casos ha dicho: «La confesion calificada no es indivisible cuando los hechos son distintos y ha mediado entre ellos largo intervalo.» Tom. 4, pág. 19, Ser. 1^a. Ha resuelto asimismo que «Para que se acepte la confesión en la parte favorable, es neces-





CON

que en la generalidad del hecho confesado—Jur. Civ., tom. 5, pág. 201, Ser. 2ª.

4. Confesión—Si bien la del deudor por medio de las posiciones, es la prueba escrita que la ley exige, esta confesión es indivisible y corresponde al acreedor justificar la falsedad de lo aseverado por el deudor como fundamento de la extinción de la deuda—Jur. Com., tom. 1, pág. 139, Ser. 2ª.

5. Confesión—Ante la presunción de dolo que la ley establece, la confesión del reo es divisible, y en consecuencia

rio demostrar la falsedad de la parte que no lo es.» Tom. 1, pág. 164, Ser. 2º. De lo espuesto resulta que la jurisprudencia sentada por la S. C. N. es la que establece la indivisibilidad de la confesión sin embargo de que admite algunas escepciones. La S. C. P. ha sentado la doctrina contraria estableciendo la divisibilidad de la confesión cuando ha dicho: «La confesión en lo civil es divisible, incumbiendo al confesante la prueba de lo que declare á su favor.» Tom. 7, pág. 329, Ser. 1º. La jurisprudencia sentada por la S. C. P. está de acuerdo con lo establecido en el sumario. Es pues evidente que la confesión es divisible en materia civil: así lo establece la ley y la aplicación correcta que de ella se ha hecho por la S. C. P. y por la Cámara de lo Civil.

4—El principio sentado en el sumario como tesis general es insubsistente y no espresa lo resuelto por la Cámara. Se trata de la acción instaurada por un acreedor que habiendo arreglado con su deudor fallido pretende establecer que el tanto por ciento que abonó en pago de la deuda fué bajo la condición de que el saldo le sería abonado cuando mejorase de fortuna. Llamado el demandado á absolver posiciones, confiesa la deuda pero alega su pago. Para comprobar la exactitud del pago, dice que los pagarés le fueron entregados cuando celebró el arreglo con sus acreedores: que convino con ellos en pagar el tanto por ciento sin ninguna obligación ulterior. El hecho de la entrega al deudor de los documentos de obligación está de acuerdo con lo espuesto por el actor. Es evidente que en este caso la confesión calificada es indivisible, porque esa modificación está corroborada y apoyada en una presunción legal de pago establecida por los arts. 877 y 878 del Cód. Civ. y 973 del Cód. de Com. ant. La entrega del documento original en que constaba la deuda, hace suponer su pago.

5—Por lo menos debe hacer verosímiles las circunstancias que constituyen la calificación de la confesión. En igual sentido se ha pronunciado la Cámara en otros casos, como puede verse en el tom. 1º

CON

debe probar las circunstancias atenuantes que no resulten justificadas por otros medios—Jur. Crim., tom. 3, pág. 209, Ser. 2ª.

6. Confesión—Cuando del proceso resulta verosímil la afirmación del reo, su confesión debe formar la base para la fijación de la pena—Jur. Crim., tom. 3, pág. 275, Ser. 2ª.

Confesión—Véase: *Deuda*, núm. 1—*Herederos*, núms. 9, 10 y 11—*Dolo*, núm. 2—*Reo*, núm. 1—*Testigos*, núm. 14—*Valor del robo*, núm. 1.

1a. Confesión ficta—La contestación evasiva del demandado, cuando no se trata de hechos propios, no puede equipararse á la confesión ficta—Jur. Civ., tom. 7, pág. 504, Ser. 2ª.

Confesión del reo—Véase: *Lesiones*, núm. 4.

1b. Confesión extrajudicial—En los litigios anteriores á

Inst., verb. *Confesión*, núm. 493. Sinembargo es necesario no olvidar que se ha resuelto por el mismo Tribunal en numerosos casos que la confesión del acusado, cuando no hay otra prueba y no está desvirtuada por presunciones ó indicios que le sean contrarios, es indivisible. Véase Inst., tom. 1ª, verb. *Confesión*, núms. 490, 494, 495; y tom. 2ª, verb. *Confesión*, núms. 1 y 3.

1a.—No es aplicable el art. 100, inc. 1ª, porque éste trata de hechos propios. Cuando se contesta de una manera que no sea categórica, sobre ciertos hechos que no son propios, la confesión ficta no procede. Aquí se trata de la contestación á una demanda deducida contra un heredero: éste no está obligado á reconocer ó negar categóricamente el hecho. La ley 3, tit. 10, part. 3ª, preceptuaba la contestación lisa y llana de sí ó nó, pero acordaba una escepción al heredero, quien podía contestar «non lo sabia ni lo creia que así fuese.» Ya la ley 1ª, tit. 6, lib. 2.ª F. R., habia dicho: «todo home que demandase á herederos de muerto ó á otro de fecho ajeno porque deba responder el demandado no sea tenido á responder de sí, ó de no, si no quisiera, mas abondale que diga que no lo se, si aquel por cuya voz, lo demandase no gelo dixo.» Además, el precepto del art. citado del Cód. de Proc. es potestativo, lo que implica dejar la estimación de una contestación al prudente arbitrio judicial.

1b.—Tratándose de casos ocurridos con anterioridad á la ley de 3 de Setiembre de 1884, que vino á corregir en esta parte el Cód. Civ.



CON

la ley de enmiendas al Código Civil, la prueba de la confesión estrajudicial de la maternidad bastaba para justificar la posesión de estado, sin que fuese necesario el reconocimiento expreso y continuado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 519, Ser. 2ª.

vigente, no es exacto que la única prueba de la filiación natural, aún después de muerto el padre, consistía en la posesión de estado. Por el contrario, la ley admitía como medios probatorios, todos aquellos que sirven para probar los hechos, siendo así que era suficiente la prueba de testigos mayores de toda escepcion, y aún las presunciones siempre que ellas fueren graves, precisas y concordantes. La necesidad de la prueba de la posesión de estado en las cuestiones de filiación natural fué un error nacido de la aplicación incorrecta del derecho francés que hacían nuestros tribunales. La legislación francesa adopta principios diametralmente opuestos á los que basan nuestro derecho civil—Véase Inst. tom. 2º, verb. *Filiación natural*, núm. 2 y su nota—Nuestro Código permite indagar libremente la paternidad, mientras que por el Cód. de Napoleón es absolutamente prohibido y no admite otra prueba que el reconocimiento expreso de los padres consignado en documento público. Algunos comentadores de la ley francesa, encabezados por Demolombe, convencidos del rigorismo de la legislación, han tratado de suavizarla, demostrando que la posesión de estado puede equipararse al reconocimiento, pues que no tiene menos eficacia y carece de los inconvenientes de la prueba directa de la filiación, viniendo en suma á no ser otra cosa que el reconocimiento tácito: y fundados en estos argumentos sostienen la admisibilidad de esta clase de prueba aún bajo el imperio de esa legislación exclusivamente restrictiva y que exige el reconocimiento expreso. Es evidente, que en nuestro sistema no puede aplicarse nada de lo que la ley francesa prescribe, pues ésta es completamente contraria á aquélla, la que admite toda clase de prueba, aún la de presunciones. Debe además no olvidarse, que los principios sentados por Demolombe y su escuela, sobre la admisibilidad de la posesión de estado como prueba de la filiación natural, tiende á hacer menos absoluta la prohibición de su indagación, aplicándose únicamente respecto del padre, con relación al cual existe la prohibición, pues por lo que hace á la madre hay libertad de indagación con tal de que exista un principio de prueba escrita, que nuestro Cód. no exige en manera alguna. Se ha dicho que se permite libremente la indagación de la maternidad porque ella es siempre cierta: y esto aún dado el caso que no exista ni reconocimiento, ni posesión de estado: porque aún en la ausencia de estas pruebas podría constatarse la filiación por medio de las personas que asistie-



CÓN

Confesión extrajudicial—Véase: *Mandato*, núm. 1.

Confesión ficta—Véase: *Alimentos*, núm. 1.

1a. Conforme—Del deudor puesto al pie del recibo, no basta para dar fuerza ejecutiva al documento—Jur. Civ., tom. 5, pág. 457, Ser. 2ª.

2. Conforme—Del comitente, con la operación del acreedor, puesto al pie del documento en que dá cuenta de ella, hace procedente el embargo preventivo—Jur. Com., tom. 1, pág. 15, Ser. 1ª.

Conformidad—Véase: *Cesionario*, núm. 1 — *Comprador*, núms. 5 y 6.

Confrontación—Véase: *Libros de comercio*, núm. 6.

1b. Conjueces—Que entran á formar parte del Tribunal por impedimento de los titulares, cesan en sus funciones, siempre que por motivos supervinientes desaparezcan las causas que motivaron la integración—Jur. Civ., tom. 6, pág. 470, Ser. 2ª.

Conminación—Véase: *Amenazas*, núm. 1.

1c. Conocimiento—El de las cuestiones que se susciten sobre administración de bienes cuyo valor exceda de dos mil pesos, corresponde á la jurisdicción de primera instancia—Jur. Civ., tom. 4, pág. 21, Ser. 2ª.

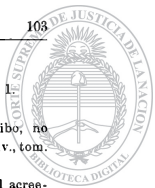
ran al parto, las que depondrían á ciencia cierta. De aquí resulta la exactitud del principio sentado por la Cámara en el presente caso, el que está en abierta oposición con otras sentencias dictadas por la misma.

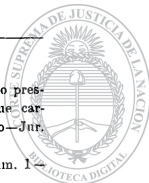
1a—Porque no está comprendido entre los documentos que según el art. 465 del Cód. de Proc. traen aparejada ejecución. Un recibo no es un reconocimiento de una obligación.

2—Está comprendido entre los documentos especificados en el art. 443, inc. 2ª del Cód. de Proc.

1b—Y si las partes lo solicitaren podrán informar nuevamente *in roce* si es que ya lo hubiesen hecho. Art. 264 del Cód. de Proc.

1c—Art. 11, inc. 1ª de la Ley Org. de los Trib. de Just. de la Capital de 1886.





CON

1a. Conocimientos—Si bien el Código de Comercio prescribe que deben ser firmados por el capitán del buque cargador, la falta de ese requisito no anula el instrumento—Jur. Com., tom. 1, pág. 471, Ser. 2ª.

Conocimientos especiales—Véase: *Dictamen*, núm. 1—*Trasferencia*, núm. 1—*Firma*, núm. 3.

Consejo Nacional de Educación—Véase: *Representante*, núm. 1—*Bienes hereditarios*, núm. 1.

1b. Consejo Nacional de Higiene—Las resoluciones dictadas por él, no hacen cosa juzgada ante los Tribunales ordinarios—Jur. Crim., tom. 2, pág. 98, Ser. 2ª.

1c. Consignación—El incidente que ella causa, no basta para hacer procedente la excepción de litispendencia opuesta á

1a—Si bien el art. 1194 del Cód. de Com. ant., establece que el conocimiento debe ser firmado por el capitán, no establece que su omisión sea una causal de nulidad, como tampoco prohíbe que su omisión pueda ser suplida por los agentes marítimos, como es la práctica observada según lo informó la Cámara de Comercio. Si se examina el art. 1210 del Cód. citado, se vé que á fin de que el conocimiento pueda traer aparejada ejecución contra el Capitán, es necesario que él lo suscriba, pero no establece en manera alguna que si el capitán reconociese ó se comprobara en forma la entrega de la carga no deba producir el conocimiento efectos legales. Mucho menos falta hace la firma del capitán cuando no se deducen acciones contra él como en el presente caso.

1b—La jurisdicción en materia criminal corresponde á los jueces llamados á ejercerla en virtud de la Ley Orgánica de los Tribunales, siendo ellos los únicos competentes para resolver sobre la existencia de los delitos, sus autores y las penas aplicables. La misma ley de 18 de Julio de 1887, sobre ejercicio de la medicina, establece que ha sido dictada sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pudieren incurrir los que infringiesen sus disposiciones. De donde resulta que las sentencias dictadas por el Consejo, no pueden considerarse como sentencias condenatorias—á los efectos del juicio criminal, ni que causen cosa juzgada.

1c—Para que esta excepción sea procedente se requiere que exista pleito pendiente sobre el mismo objeto, entre las mismas partes, de igual carácter y ante tribunal competente: faltando cualquiera de estos requisitos ella es improcedente. En el presente caso no se

CON

la demanda de rendición de cuenta—Jur. Com., tom. 2, pág. 90, Ser. 2ª.

Consignación—Véase: *Excepción de pago*, núm. 2—*Juicios*, núm. 2.

1a. Consignatario—El que fija al comprador de frutos, la clase, precio y época de la remisión, indicándole además las personas con quienes puede contratar, se convierte en mandante, y es responsable para con los vendedores, del importe de lo que haya recibido su mandatario—Jur. Com., tom. 1, pág. 281, Ser. 2ª.

1b. Consignatario de un buque—Tiene derecho para pedir la detención de las mercaderías en los depósitos de aduana mientras los propietarios no justifiquen el pago del flete—Jur. Com., tom. 4, pág. 436, Ser. 2ª.

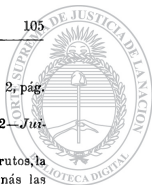
1c. Construcción—Pudiendo variar el término de la construcción de una pared por causas imputables á las partes los informes de peritos sobre el científicamente necesario, no forma prueba—Jur. Civ., tom. 4, pág. 279, Ser. 2ª.

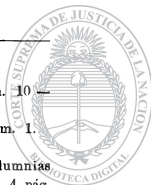
trata del mismo asunto, y no puede acojerse á la prescripción del art. 84. inc. 3º del Cód. de Proc. Véase: *Inst.*, tom. 1, verbi. *Excepción de litispendencia*, núm. 1064 y nota.

1a—De la correspondencia exhibida como prueba resultaba establecido que el consignatario hacía indicación hasta de la cantidad de frutos que debían adquirirse para ser remitidos. Se confesó además que esos frutos fueron recibidos por el consignatario, y su precio cobrado; siendo en este caso aplicable el art. 1196 del Cód. Civ.

1b—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 1115 del Cód. de Com., antiguo.

1c—En el caso práctico de la referencia no se dijo esto, sino que no debía tomarse en consideración el dictámen porque los peritos se habían expedido por separado y no dictaminaron sobre el hecho materia de la cuestión. La Cámara dijo que «la prueba pericial está indiciando sin duda en esta clase de negocios, pero es preciso que verse sobre los puntos sometidos á su juicio, que se produzca en forma y dé mérito á una resolución, lo que no sucede en este caso.» Se ve pues que el sumario expresa exactamente lo contrario de lo resuelto por la Cámara.





CON

Construcción—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 10 —
Obras, núm. 1.

Consul extranjero—Véase: *Matrimonio Civil*, núm. 1.

Consules argentinos—Véase: *Exhortos*, núm. 3.

1a. Consulta—En las causas entre partes, por calumnias ó injurias no procede la consulta—Jur. Crim., tom. 4, pág. 508, Ser. 2ª.

Consulta—Véase: *Cámara de Apelaciones*, núm. 1.

1b. Contador—La oposición al nombramiento, solo puede tener lugar en el juicio verbal que la ley prescribe, y si no fuese debidamente fundada debe desecharse nombrándose por mayoría—Jur. Civ., tom. 8, pág. 295, Ser. 1ª.

2. Contador—Solo puede el Juzgado nombrarlo de oficio cuando las partes no se han puesto de acuerdo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 447, Ser. 2ª.

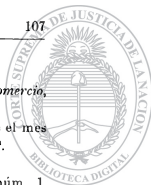
3. Contador—Aún cuando el contador que presenta la cuenta de administración sea empleado á sueldo del albacea, corresponde á éste la prueba de que ese trabajo estaba incluido en el sueldo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 546, Ser. 2ª.

1a—La consulta no procede en los delitos exclusivamente privados.

1b—Art. 668 del Cód. de Proc. La ley no establece ni preceptúa la obligación de fundar debidamente la oposición, ni mucho menos la facultad del Juzgado de desechar esa disconformidad en caso de que no se funde la misma oposición. El sumario va mas allá de lo resuelto por la Cámara: ella no estableció otra cosa sino que habiendo habido conformidad de partes en la designación del contador, no pudo el Juez nombrarlo de oficio.

2—Véase nota precedente.

3—El que presta algún servicio ó hace algún trabajo tiene derecho á ser remunerado: la remuneración fijada para una clase de trabajo no comprende sino lo especificado, y si hace algún otro trabajo extraordinario debe por ello ser remunerado. Este caso tiene su analogía con el resuelto por la Excm. Cámara de lo Comercial y que corre publicado en el tom. 1º de la Inst., verb. *Dependiente* núm. 824, en el que se resolvió que el dependiente de comercio para trabajos fijos y determinados, tiene derecho á que le sean remunerados los servicios de diverso carácter que presta á su principal.



CON

Contador—Véase: *Albacea*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 6—*Liquidaciones judiciales*, núm. 1.

Contadores—Inscripción en la matrícula durante el mes de Mayo de 1889—Jur. Civ., tom. 8, pág. 335, Ser. 2ª.

Contestación—Véase: *Rebeldía*, núms. 9 y 10.

Contestación evasiva—Véase: *Confesión ficta*, núm. 1.

Contra derecho—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 4.

1a. Contradicción—Siempre que exista entre el informe del médico de los Tribunales y el del hospital, las afirmaciones del último priman sobre las del primero—Jur. Crim., tom. 2º, pág. 499, Ser. 2ª.

Contradicciones—En que incurre el procesado. son presunciones vehementes de su culpabilidad—Jur. Crim., tom. 1, pág. 530, Ser. 2ª.

Contradicciones—Véase: *Posiciones*, núm. 3.

Contradocumento—Véase: *Simulación*, núm. 2.

Contraparte—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 8—*Testigos*, núm. 3.

Contratantes—Véase: *Condiciones*, núm. 2—*Hechos*, número 4.

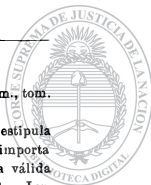
1b. Contrato—El que pretenda ejecutar un contrato en cuyo otorgamiento se ha infringido la ley de papel sellado, debe oblar la multa que corresponda á todas las partes, quedando á salvo su derecho para repetir contra los demás—Jur. Civ., tom. 4, pág. 217, Ser. 2ª.

2. Contrato—El vendedor declarado causante de la rescisión del contrato por mora en la entrega de mercaderías, no

1a—Porque el del hospital es el que asiste al enfermo y es el que observa más de cerca las lesiones inferidas, pudiendo así dar un informe más detenido y meditado.

1b—Así lo tiene resuelto en otro caso esta misma Cámara. Véase Inst., tom. 2, verb. *Sellos*, núm. 2.

2—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 1201 del Cód. Civ., concordante con el art. 246 del Cód. de Com. ant., igual al 216 del vigente.



CON

puede exigir el cumplimiento al comprador—Jur. Com., tom. 4, pág. 305.

3. Contrato—Si la entrega de parte del capital se estipula al contado, la aceptación de entregas parciales, no importa una modificación de la obligación, la que solo sería válida mediante escritura en forma igual á la del contrato—Jur. Com., tom. 4, pág. 428, Ser. 2ª.

4. Contrato—Aunque conformes las partes sobre los hechos que lo forman, debe recibirse á prueba, á fin de constatar quién faltó á su cumplimiento—Jur. Civ., tom. 5, pág. 446, Ser. 2ª.

5. Contrato—El Juez del lugar designado para su cumplimiento, es el competente para entender en las cuestiones que se susciten—Jur. Civ., tom. 5, pág. 128, Ser. 2ª.

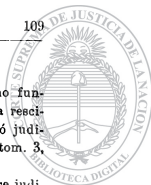
6. Contrato—Los litigios existentes sobre cumplimiento del de compraventa, no inhiben de la venta al inmueble que le dió origen—Jur. Civ., tom. 5, pág. 133, Ser. 2ª.

3—Art. 396 del Cód. de Com. anterior, igual al art. 295 del vigente. Véase un caso análogo que corre publicado en la Inst., tom. 2, verb. *Contrato*, núm. 16 y nota.

4—Se discutía aquí cuál de las partes había faltado á lo estipulado en el contrato, lo que debía establecerse por medio de la prueba correspondiente.

5—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 4, inc. último del Cód. de Proc.

7—El caso es el siguiente: Celebrado un contrato de compraventa de 10.000 pesos oro sellado al precio de 110 %, el comprador se presenta demandando la entrega de esa suma en oro sellado ofreciendo depositar el papel equivalente. El demandado contesta diciendo, que el contrato había quedado rescindido porque el actor no cumplió con su obligación el día del vencimiento en el que el demandado ofreció entregar el oro vendido no habiendo ofrecido entregar en cambio el comprador su equivalente en papel. Se rechazó la pretensión del demandado porque el derecho del vendedor no puede ser otro que el de pedir la disolución del contrato, derecho que no puede invocarse como medio general ni especial de defensa al contestar la demanda, sino que tiene que ser materia de una acción separada é independiente de toda demanda anteriormente iniciada por el com-



CON

7. Contrato—El vendedor no puede invocar como fundamento de su falta de cumplimiento del contrato la rescisión producida por la mora del comprador, si no exigió judicialmente que se declarase rescindido—Jur. Com., tom. 3, pág. 223, Ser. 2ª.

8. Contrato—El vendedor, mientras no se declare judi-

prador, pues conforme lo dispone el art. 535 del Cód. de Com. ant., eliminado por el vigente, en virtud de ser su disposición una repetición de lo dispuesto en la ley civil, el comprador debía asumir el rol de demandante porque de otra manera no se concibe que pueda ejercitarse la facultad de pedir la rescisión del contrato. Esta interpretación se robustece por lo establecido en el art. 246 del Cód. de Com. ant., igual al 216 del vigente, que al ocuparse de la condición resolutoria, como implícita en los contratos de comercio—en contraposición al derecho civil que no la supone sino que por el contrario no la admite—establece en su inc. 3ª que la rescisión debe reclamarse judicialmente, y según las circunstancias pueden los tribunales conceder un plazo al deudor para su cumplimiento. Si se diera otra interpretación a esta prescripción legal, sería autorizar a dejar establecido que la falta de cumplimiento de parte del autor rescinde el contrato *ipso jure*, lo que no puede ser porque tal resultado por causa de mora se opera tan solo cuando los efectos vendidos perecen ó se determinan por accidentes imprevistos—arts. 534, inc. 3ª, Cód. de Com. ant., igual al 467 del vigente.—De aquí resulta que el vendedor carece de derecho para poder alegar como demandado la resolución del contrato, porque la mora no produce ni dá ese resultado *ipso jure*. Para la decisión de los casos que en lo futuro se susciten conviene no olvidarse lo que decía la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados tratando de la condición resolutoria en los contratos comerciales: «Esta disposición del derecho mercantil contraria a la disposición análoga del derecho civil, está justificada por la teoría y la práctica de las operaciones comerciales. El que en un contrato bilateral ofrece una prestación en cambio de otra que se propone recibir, se determina a ofrecer la que entrega, precisamente por la prestación recíproca que se propone recibir. Desde que se falta, pues, al cumplimiento por una de las partes, desaparece la causa de la obligación de la otra, y queda, por consiguiente, sin razón de ser la que contrajo. Esta sanción se verifica inmediatamente a la falta de cumplimiento.»

8—Art. 534, inc. 2ª del Cód. de Com. ant., igual al 467 del vigente. Véase nota precedente.

CON

cialmente la rescisión del contrato, está obligado á la entrega de los objetos vendidos, siempre que estos no perezcan ó se deterioren por un accidente imprevisto—Jur. Com., tom. 3, pág. 223, Ser. 2ª.

9. Contrato—Si en él se designa moneda especial, para el pago, no es aplicable la disposición que acuerda fuerza cancelatoria al papel moneda—Jur. Com., tom. 1, pág. 293, Ser. 2ª.

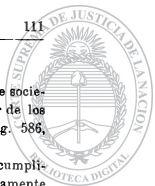
10. Contrato—El conocimiento del acreedor, del verdadero estado de los negocios del deudor, anula todo acto ó contrato que perjudique á los demás acreedores, aún cuando al llevarlo á cabo, el deudor no estuviese inhibido de disponer de sus bienes, ni declarado en quiebra—Jur. Com., tom. 1, pág. 338, Ser. 2ª.

11. Contrato—Cuando el cumplimiento se ha hecho imposible, por actos personales de uno de los contratantes, el autor de esos hechos no puede exigir á los demás el cumplimiento de lo estipulado—Jur. Com., tom. 1, pág. 382, Ser. 2ª.

9—Siempre que se pretenda atribuir al billete la fuerza cancelatoria por su valor escrito, pues de lo contrario, las obligaciones contraídas á oro sellado pueden cancelarse, según lo dispone la ley de 15 de Octubre de 1885, en la moneda especial estipulada ó en billetes de curso legal por su valor corriente en plaza—Art. 3º de la citada ley.—Así lo tiene declarado ya la Cámara en otros casos. Véase Inst., tom. 2, verb. *oro sellado*, núms. 1, 2 y 3; *curso forzoso*, núm. 1 y *moneda especial*, núm. 1.

10—El art. 735 del Cód. Civil establece, que el pago no extingue la obligación si es hecho por deudor insolvente en fraude de otros acreedores: y el art. 1044 concordante con aquél, declara nulos los actos jurídicos en que los agentes hubiesen procedido con simulación ó fraude presumidos por la ley. Es opinión general de los autores que el fraude se presume, cuando el deudor insolvente paga deudas que no son exigibles, ó si son vencidas las paga con bienes de mayor valor de lo que se debe.—Véase nota del Dr. Velez al art. 961 del Cód. Civ.—El fraude lo presume la ley en el deudor que hace enajenaciones perjudiciales á sus acreedores, por el hecho de su insolvencia y la complicidad del tercero en el fraude, y por el hecho de conocer su insolvencia al tratar con él—art. 960, *ibid*.





CON

12. Contrato—La presentación de un contrato de sociedad, no basta para decretar la inhibición particular de los que aparecen como socios—Jur. Com., tom. 1, pág. 586, Ser. 2ª.

13. Contrato—Solo son parte en el juicio sobre cumplimiento de un contrato, los que han intervenido directamente en su constitución—Jur. Civ., tom. 8, pág. 386, Ser. 2ª.

Contrato—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 4—*Alquileres*, núm. 1—*Condiciones*, núm. 1—*Menores*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 2 y 19—*Obras*, núm. 1—*Pago por consignación*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 2 y 16—*Instrumento privado*, núm. 2—*Locación de servicios*, núm. 2—*Comprador*, núm. 8 y 9—*Condominio*, núm. 1—*Locatario*, núm. 1—*Competencia*, núm. 7—*Mandante*, núm. 1—*Mandato*, núms. 3 y 6—*Acción de daños y perjuicios*, núm. 3—*Doble ejemplar*, núm. 1—*Especulación*, núm. 1—*Juego*, núm. 1—*Operaciones de bolsa*, núms. 1, 2 y 3—*Rescisión*, núm. 1—*Sociedad*, núms. 3 y 5—*Sociedades anónimas*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 3—*Acción*, núm. 6—*Concurso*, núms. 1 y 2—*Cuestiones*, núm. 1—*Hechos*, núm. 4—*Tribunal*, núm. 1—*Arrendamiento*, núms. 1 y 2—*Cartas*, núm. 1—*Cláusula*, núm. 1—*Competencia*, núm. 5—*Dolo*, núm. 1—*Locador*, núm. 1—*Vendedor*, núm. 1.

1. Contrato bilateral—La parte que demanda el cumplimiento de un contrato bilateral, debe justificar haber

12—Parece que podría ser aplicable el art. 443, inc. 3º del Cód. de Proc. Pero en el caso ocurrente no se produjo información alguna á fin de acreditar el cumplimiento del contrato por parte del actor. los hechos alegados reposaban en la sola afirmación del interesado, lo que no es bastante, pues las medidas preventivas deben decretarse con las justificaciones respectivas que cada caso especial exija.

13—«Los contratos no pueden oponerse á terceros» para quienes son *res inter alios acta*, «ni invocarse por ellos, sino en los casos de los arts. 1161 y 1162.» dice el art. 1199 del Cód. Civil.

1—Art. 1201, Cód. Civ.

CON

cumplido con las obligaciones que á él incumban ó que se encuentra en aptitud de cumplirlas—Jur. Com., tom. 4, pág. 55, Ser. 2ª.

2. Contrato bilateral—Cuando el documento, como contrato perfectamente bilateral, debía ser redactado en doble ejemplar, el deudor liberado que afirma la existencia de ese doble ejemplar, no necesita justificarla, la ley la supone mientras no exista prueba en contra.

3. Contrato bilateral—La falta de cumplimiento por haberse declarado su nulidad, solo concede derecho á la parte que haya hecho la prestación, á exigir la suma entregada—Jur. Civ., tom. 6, pág. 220, Ser. 2ª.

4. Contrato bilateral—Por instrumento privado, alegada su nulidad en virtud de no haberse firmado los ejemplares que prescribe la ley, al que pretende su cumplimiento corresponde la prueba de que existieron si no resulta del contexto del mismo contrato—Jur. Civ., tom. 6, pág. 220, Ser. 2ª.

Contrato bilateral—Véase: *Disposición*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 21.

2—Se trata de un juicio ejecutivo en el cual se opone la excepción de pago, fundado en un contrato bilateral que se acompaña. Se pide el rechazo de la excepción aduciendo como fundamento la circunstancia de que todo contrato bilateral debe ser redactado en tantos ejemplares como partes haya con un interés distinto. El hecho de haberse firmado uno ó mas ejemplares no puede ser materia de prueba en el juicio ejecutivo, porque la cuestión de nulidad ó validez del documento debe ser materia de un juicio ordinario y no puede sustanciarse ni juzgarse en el ejecutivo.

3—El art. 1030 del Cód. Civ. establece, que la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo ó igual estado en que se hallaban antes del acto anulado; y el 1032 dice: «La anulación del acto obliga á las partes á restituirse mutuamente lo que han recibido ó percibido en virtud ó por consecuencia del acto anulado.»

4—La existencia de doble ejemplar es un requisito exigido por la ley para la validez del contrato, de donde se deduce que el que afirma la validez es el que debe demostrar haberse cumplido las formalidades requeridas al efecto y que no aparezcan probadas por el documento mismo.





CON

1a. Contrato de cesión—Tratándose del cumplimiento de este contrato, es competente el Juez del domicilio de las partes y no el del lugar en que debe cumplirse el contrato cedido—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

2a. Contrato de cesión—De una concesión de ferrocarril ó de tramway, es comercial—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

1b. Contrato de comercio—La existencia de cartas sobre un contrato comercial, hace procedente la prueba testimonial—Jur. Com., tom. 3, pág. 42, Ser. 2ª.

1c. Contrato de compraventa—De cosas fungibles no individualizadas, obliga al vendedor á la entrega, debiendo procurárselas donde existan—Jur. Com., tom. 3, pág. 95, Ser. 2ª.

2b. Contrato de compraventa—Por documento privado, hecho por la muger casada, necesita para su validez la ratificación del esposo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

1a—No se trata de las obligaciones contraídas por el contratista, y que emanan del contrato: no se trata del cumplimiento del contrato cedido, sino del cumplimiento del contrato de cesión que genera las obligaciones entre cedente y cesionario. Aquí se trata del cumplimiento de una obligación personal contraída por el cedente, siendo aplicable el art. 4, inc. 3º del Cód. de Proc.

2a—Este contrato tiene por objeto la explotación de obras destinadas al uso del comercio en general y tienen su carácter comercial según lo dispone el art. 7, incs. 1 y 4 del anterior Cód. de Com., y art. 8, incs. 1, 2 y 5 del vigente. El inc. 2 de éste, establece especialmente la comercialidad del contrato de cesión que tiene por objeto bienes muebles, etc. La misma doctrina sienta el Dr. Obarrio, en el tom. 1º, pág. 65 de su obra «El Cód. de Com. comentado y concordado».

1b—Art. 193, Cód. de Com. ant., igual al 209 del vigente.

1c—Arts. 542 y 995 del Cód. de Com.

2b—Esta doctrina ha sido consagrada desde el origen del derecho. Así la ley 55 de Toro, reproducida en la Ley 2, tit. 3, lib. 5º, Rec. Cast., declaraba nula la venta de bienes raíces hecha por la muger casada sin la venia del marido: y siendo nula la venta, es nula también la escritura que constata ese acto jurídico declarado nulo por la ley. Estos principios han venido á incorporarse á nuestro Cód. Civ. en el art. 189.

CON

3. Contrato de compraventa—Por instrumento privado, cuando no puede llevarse á efecto en breve término por de-

3—Esta cuestión se resolvió por unanimidad, pero los Camaristas fundaron sus votos en consideraciones distintas. Así el Dr. Bazán fundó luminosamente el suyo refutando la opinión de los que creían que el art. 522 del Cód. de Proc. podía aplicarse en este caso, por analogía. Se trata de un contrato de compraventa cuyo boleto decía lo siguiente: «Para esto se concede al comprador el plazo de ocho días para la revisión de los títulos, y quedando éstos á su satisfacción, el de quince días para escriturar y abonar, todo á contar desde esa fecha.» Ante los términos claros de este boleto, es indudable que la obligación de escriturar dentro de los quince días fijados, está subordinada al acontecimiento futuro é incierto de que el comprador quedase satisfecho de los títulos de propiedad, para cuya revisión se le acordaba ocho días. Esta obligación, pues, contiene una condición suspensiva, porque habrá ó no obligación de escriturar en el plazo fijado si los títulos quedasen ó no á satisfacción del comprador una vez revisados también en el término fijado. No debe confundirse la obligación bajo condición suspensiva con la obligación á plazo cierto y determinado. De la primera trata el art. 545 del Cód. Civ. diciendo, que es la que debe existir según que un acontecimiento futuro é incierto suceda ó no: la segunda existe desde el momento que se contrae, sin que el plazo señalado para su cumplimiento influya en otro sentido que el de suspender su exigibilidad hasta que el venza, como lo establece el art. 569 del Cód. Civ. Es por esto que el Dr. Velez dice, en la nota puesta al pié de este artículo, que la dilación del plazo difiere de la condición suspensiva, en que el plazo no toca á la fuerza jurídica sino á la ejecución de la obligación. De lo espuesto resulta que no puede aplicarse por analogía el art. 522 del Cód. citado, porque no hay tal analogía en el caso que nos ocupa y el de un comprador en remate público de un bien raíz cuyos títulos adoleciesen de algún vicio que no es susceptible de subsanarse en breve tiempo. Y no hay analogía, porque el comprador en remate puede invocar en su favor la obligación de que se le escriture, que nace del contrato de venta que se ha celebrado con él, mientras que en el caso presente no puede el comprador invocar esa misma obligación por razón del boleto, desde que resulta no formada é inexistente por no haberse cumplido la condición suspensiva á que estaba subordinada su existencia. Y si el art. 522 acuerda al comprador en remate la facultad de optar por el desistimiento ó la compra, es porque el legislador así lo ha creído conveniente establecer teniendo facultad para así hacerlo, pues la Constitución le acuerda la facultad de crear la ley: no sucede lo propio con los jueces cuya



CON

fectos de los títulos, de difícil subsanación, los Tribunales pueden aplicar por analogía las disposiciones del art. 522 del Cód. de Proc.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 498, Ser. 2ª.

Contrato de compraventa.—Véase: *Acción*, núm. 7.—*Contrato*, núm. 6.

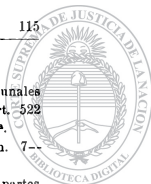
1a. Contrato de locación.—Estando de acuerdo las partes en que se declare judicialmente su rescisión, los Tribunales no deben reconocer privilegios que tengan por base ese contrato rescindido—Jur. Civ., tom. 5, pág. 109, Ser. 2ª.

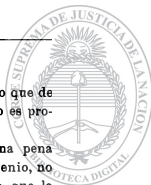
1b.—Contrato de locación.—Privado, no puede ser inscrito en el Registro de Propiedad, si el inmueble que le dió origen ha pasado, sin ese gravamen al dominio de un tercero—Jur. Civ., tom., 5, pág. 33, Ser. 2ª.

misión es aplicarla. No es de su resorte el *jus concedere* sino el *jus dicere*. El art. 217 del Cód. de Proc. establece, que la sentencia debe fundarse en el texto espreso de la ley y *à falta de éste*, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la *materia respectiva*. Si la materia respectiva que es en este caso el Cód. Civ., decide la cuestión ¿por qué se trata de aplicar otra ley cuando no es ello permitido? Solo en caso de que el Cod. Civ. no resolviese la cuestión y que hubiese similitud en ambos casos, podría aplicarse por analogía para una cuestión de fondo, la ley de forma.

1a.—Los privilegios que las leyes acuerdan fundadas en un contrato de locación, reconocen por base la existencia y subsistencia de ese contrato: si éste se rescinde, deja de existir legalmente, de allí la consecuencia.

1b.—El Registro de Propiedad fué instituido con el objeto, entre otros, de constatar los contratos de arrendamientos, dando de esta manera publicidad à los gravámenes que pesan sobre los inmuebles, evitando así perjuicios que podrían ocasionarse à los terceros que contratan sobre ellos. De aquí resulta, que después de la adquisición del inmueble por un tercero, no puede éste ser burlado ni molestado en el pleno goce de su derecho de propietario por medio de una inscripción posterior que viniera à dar vida legal à un gravamen de fecha anterior à esa adquisición. La Ley Org. de los Trib. de la Cap. es terminante al respecto. Así su art. 227 dice: «Inscrito en el Registro cualquier título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro de fecha anterior, por el cual se transmite à grave la propiedad del mismo inmueble.»





CON

2. Contrato de locación—Justificado el abandono que de la cosa ha hecho el locatario, la rescisión del contrato es procedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 2ª.

3. Contrato de locación—La estipulación de una pena determinada impuesta al locatario que faltare al convenio, no importa la renuncia tácita del derecho de rescindirlo que la ley acuerda al locador por falta de pago de dos períodos consecutivos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 2ª.

4. Contrato de locación—El vendedor del inmueble carece de personería para representar al arrendatario exigiendo del comprador el cumplimiento del contrato de arrendamiento no inscripto en el Registro de Propiedad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 510, Ser. 2ª.

2 —I art. 1562 del Cód. Civ., en su inc. 1º establece, que el locatario no conservará la cosa en buen estado si la abandonase sin dejar persona alguna que la cuide, aunque lo haga por motivos de una necesidad personal, mas no si lo hiciere por motivos derivados de la misma cosa ó del lugar en que ella se encuentra. El art. 1563 del mismo Cód., faculta al locador á pedir, en este caso la rescisión del contrato ó á que se hagan las reparaciones necesarias. Y el 1564 legisla especialmente el caso.

3—No hay razón para suponer la renuncia del derecho de pedir la rescisión, porque según disposición del art. 874 del Cód. Civ., la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzcan á probarla debe ser restrictiva.

4—Se trata de la venta de un inmueble sujeto á un contrato de locación celebrado por el vendedor. Es evidente que una vez desprendido del derecho de propiedad en virtud de la venta celebrada, ya ningún interés tiene en que el contrato de locación por él celebrado se cumpla ó no desde que el mismo interesado que es el locatario ninguna acción deduce. En todo caso, si el nuevo propietario pretendiera desconocer el derecho del arrendatario, sería necesario que éste le autorizara con poder bastante para que pudiera accionar contra aquél. Verificada la venta del inmueble no se concibe cuál puede ser el interés legítimo ó el derecho lesionado del vendedor, para demandar al comprador por el cumplimiento de un contrato de arrendamiento del cual no puede reportar ventaja ni provecho alguno, habiendo dejado de ser dueño de la finca, cuando el inquilino que es el verdaderamente interesado nada reclama.

CON

5. Contrato de locación—No inscripto en el Registro de Propiedad, carece de valor legal para el tercero comprador del inmueble—Jur. Civ., tom. 7, pág. 510, Ser. 2ª.

6. Contrato de locación—Justificada la existencia de un contrato de locación de servicios, el locatario no puede exigir del locador el pago de los daños y perjuicios sin justificar que la falta de cumplimiento es por culpa exclusiva del principal, ni aún los gastos verificados por su parte, mientras no pruebe que tenía autorización especial para llevarlos á cabo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 23, Ser. 2ª.

7. Contrato de locación—Es intrasferible sin la conformidad del propietario si existe en él espresamente reconocida esa facultad—Jur. Civ., tom. 8, pág. 37, Ser. 2ª.

Contrato de prenda—Véase: *Síndico*, núms. 1, 2 y 3.

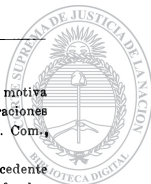
1. Contrato de sociedad—Si bien las cuestiones que se susciten entre socios deben ser decididas por árbitros-arbitradores, es de competencia exclusiva de los tribunales ordi-

5—Así lo dispone el art. 239 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap., de 1886. Véase el art. 1498 del Cód. Civ.

6—Arts. 519, 520 y 521 del Cód. Civ.

7—Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma.—Art. 1197, Cód. Civ.—En virtud de convenio expreso queda derogada la disposición del art. 1583 del Cód. Civ., quedando en pié la segunda parte que establece que puede cederse si no fuese prohibido por el contrato.

1—El art. 511 del Cód. de Com. anterior, establece que todas las cuestiones sociales que se susciten entre los socios durante la existencia de la sociedad, su liquidación ó partición, deben ser decididas por jueces arbitradores, háyase estipulado ó no así en el contrato de sociedad. Para resolver el alcance de esta disposición legal debemos recurrir á las fuentes de donde ha sido tomada. Este artículo tiene su origen en el 294 del Cód. Brasitero; 323 del Español, y 51 del Francés; y concuerda con los arts. 703, 748 y 749 del Cód. Port.; 279 Wurtemberg; 269 Per.; 414 del Chileno; 511 del Urug. y 511 del Par. Los comentadores del Cód. de Com. esp.—art. 323—dicen, entre otros, Gonzalez Huebra, en su tratado de



CON

narios, la decisión previa sobre si la operación que motiva el litigio, se encuentra comprendida entre las operaciones que forman el objeto del contrato de sociedad—Jur. Com., tom. 4, pág. 285, Ser. 2ª.

2. Contrato de sociedad—Su rescisión es procedente siempre que todos los socios la soliciten, aun cuando funden su petición en hechos completamente distintos—Jur. Com., tom. 4, pág. 428, Ser. 2ª.

3. Contrato de sociedad—Justificada la existencia de un contrato de sociedad y la utilidad reportada, cada uno de los

Derecho Mercantil, tom. 1, pág. 131, nota al inc. 3º, que la obligación de recurrir á los jueces árbitros, no abarca las cuestiones que puedan suscitarse entre las personas que se hayan comprometido á formar una sociedad, sino únicamente las que se promuevan después de estar legitimamente constituidas acerca de sus derechos sociales. Así pues, si la cuestión versase sobre la validez del mismo contrato de sociedad, correspondería á los tribunales ordinarios decidirla y no podría obligarse á nadie á someterla á juicio de árbitros contra su voluntad.—El Dr. Tejedor sostiene igual doctrina, en su Curso de Derecho Mercantil, tom. 2, pág. 86. Los comentadores franceses sostienen el mismo principio y la jurisprudencia de los tribunales ha sido siempre uniforme en ese sentido. Véase Dalloz verb. *arbitraje forzoso*. Siendo tan uniforme la interpretación dada á los artículos citados de los códigos francés y español, forzosamente debemos nosotros darle igual interpretación á nuestro Código, pues son en un todo iguales sus disposiciones. No puede en manera alguna sostenerse que los árbitros-arbitradores sean competentes para resolver cuestiones de puro derecho desde que esto es extraño á la naturaleza del juicio arbitral, pues ellos deben resolver con arreglo á su leal saber y entender, y no con arreglo á derecho, como lo preceptúa el art. 802 del Cód. de Proc., concordante con la Ley 23, tit. 46, Part. 3ª. El art. 511 del Cód. de Com. citado, concuerda con el 488 del vigente.

2.—El art. 422 del Cód. de Com. vigente, establece como causal de disolución total, la voluntad de todos los socios. No distingue las razones que se tenga en vista para manifestar esa voluntad.

3.—Arts. 511 y 1778 del Cód. Civ. En el juicio se comprobó que el socio debía tener igual participación en las utilidades, en cuyo caso existe entre los asociados una ley á la que deben subordinar sus actos.—Art. 1197 del Cód. citado.

CON

socios tiene derecho á la parte de utilidad que se haya fijado aún cuando por ignorancia haya recibido una suma menor—Jur. Com., tom. 3, pág. 511, Ser. 2ª.

4. Contrato de sociedad—No puede conceptuarse contrato de sociedad, el convenio para remunerar los servicios con una parte de las utilidades además del sueldo fijado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 23, Ser. 2ª.

Contrato de sociedad—Véase: *Registro de comercio*, núm. 1.—*Participación*, núm. 1.

1. Contrato verbal—Para declarar que existe contrato verbal de compraventa, en materia de comercio, es necesario que quede constatado el perfecto acuerdo sobre el objeto y el precio—Jur. Com., tomo. 3, pág. 42, Ser. 2ª.

2. Contrato verbal—No puede reconocerse judicialmente como existente un contrato verbal sobre el cual, según las partes, no llegó á existir acuerdo de voluntades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 216, Ser. 2ª.

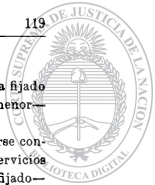
3. Contrato verbal—Reconocida por el demandado la existencia del contrato verbal de compraventa, se encuentra en la obligación de cumplirlo y los tribunales deben condenarlo á ello—Jur. Civ., tom. 8, pág. 409, Ser. 2ª.

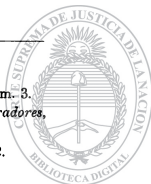
4—Véase Inst., tom. 1ª, verb. *Dependientes*, núm. 827.

1—Y que haya un principio de prueba por escrito tratándose de contratos que excedan de 200 pesos—Art. 193 del Cód. de Com. anterior igual al 209 del vigente.

2—Se trata de un contrato de compraventa para cuya existencia se requiere el concurso de voluntades sobre la cosa y el precio—Arts. 1323, Cód. Civil y 450, Cód. de Com.—«El concurso de voluntades exigido para la formación de los contratos, no existe sino á condición de que la aceptación corresponda exactamente á los términos de la oferta, sea en cuanto á la cosa que forma su objeto, sea en cuanto á la naturaleza de la convención que se trata de concluir, sea en fin en cuanto á las modalidades bajo las cuales la oferta pueda haber sido hecha ó aceptada.» Aubry y Rau, citado por el codificador.

3—Los contratos se prueban por confesión de parte, judicial o extrajudicial, dice el inc. 3º del art. 1190 del Cód. Civ.





CON

Contrato verbal—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 3.

Contratos comerciales—Véase: *Arbitros arbitradores*, núm. 1.

Consejo de higiene—Véase: *Honorarios*, núm. 12.

Construcción—Véase: *Locación*, núm. 1.

Constructores—Véase: *Regulación*, núm. 3.

Convenciones—Véase: *Estado civil*, núm. 1.

Convenio—Véase: *Acreeedor*, núm. 7—*Administrador*, núm. 2—*Contrato de sociedad*, núm. 4—*Locación de servicios*, núm. 1.—*Gasto causídico*, núm. 1—*Mensura*, núm. 3—*Medianería*, núm. 1.

1a. Convenio expreso—Siempre que no exista éste, los peritos pueden verificar separadamente las operaciones—Jur. Com., tom. 2, pág. 233, Ser. 2ª.

1b. Convención—No existiendo convenio expreso sobre el precio de una locación de servicios, debe ser fijado por peritos—Jur. Civ., tom. 4, pág. 60, Ser. 2ª.

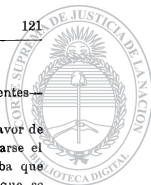
Convenio expreso—Véase: *Obligación*, núm. 1—*Dación en pago*, núm. 1.

1c. Cónyuge—La designación del que debe tener en su poder los hijos después del divorcio, aún hecha por el Juez,

1a—Aquí no se trata de una prueba pericial, la que según disposición del art. 172 del Cód. de Proc. deben los peritos practicarla unidos: se trata tan solo de una diligencia pericial que no es diligencia de prueba. Se trata de una tasación para cuya operación la ley no exige la concurrencia simultánea de los peritos—arts. 510 y 511 del Cód. de Proc.—La prueba de peritos es una especie de diligencia pericial que la ley exige se practique por los peritos unidos, pero que no se exige en las diligencias de tasaciones.

1b—Art. 1627, Cód. Civ.

1c—Las resoluciones que se dictan por un Juez, respecto á cuál de los padres debe tener en su poder á sus hijos, no pasan nunca en autoridad de cosa juzgada, porque son dictadas siempre en juicio breve y sumario ejerciendo los jueces prudencialmente los poderes de un buen padre de familia.



CON—COR

puede ser revocada ó modificada por hechos sobrevinientes—Jur. Civ., tom. 5, pág. 579, Ser. 2ª.

2. Cónyuge—Para la declaratoria de herederos á favor de éste, con relación á un bien ganancial, debe justificarse el fallecimiento de los ascendientes: no basta la prueba que resulta de la falta de presentación al llamamiento que se hace por edictos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 124 Ser. 2ª.

Cónyuges—Véase: *Hijos*, núm. 1—*Matrimonio civil*, número 1.

1a. Copia—La falta de presentación de la de documentos que se acompañan á la demanda, no puede fundar una excepción de defecto legal en el modo de proponerla—Jur. Com., tom. 2, pág. 443, Ser. 2ª.

Copia — Véase: *Instrumento público*, núm. 1—*Títulos* núms. 1 y 2—*Sentencia*, núm. 2.

1b. Corredor—Esta profesión es incompatible con la de martillero público—Jur. Com., tom. 2, pág. 219, Ser. 2ª.

Corredor—Véase: *Conforme*, núm. 2.

Corredores—Véase: *Agente de Bolsa*, núm. 2—*Diferencias*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 18.

1c. Corrupción de menores—Para que exista, basta que

2—Los ascendientes son personas de existencia cierta, necesaria y són herederos forzosos en concurrencia con el cónyuge supérstite: una declaratoria hecha á favor de éste sin comprobar el fallecimiento de los padres del causante podría importar una verdadera preterición de herederos.

1a—El art. 84, inc. 4 del Cód. de Proc., solo se refiere á los requisitos que debe revestir la demanda, enumerados en el art. 71, entre los cuales no se encuentra la falta de copia: la enumeración de este artículo es taxativa.

1b—Así resulta de las disposiciones conjuntas del Cód. de Com., pues á los corredores se les prohíbe contratar por cuenta propia, mientras que al martillero no.

1c—Art. 259 del Cód. Pen. ant. Este delito no puede disculparse por el hecho de comprobarse que la menor tuvo antes tratos carnales con otro hombre. Esta circunstancia solo debe tomarse en cuenta al tratarse del estupro.



COS

el autor facilite el ejercicio de la prostitución—Jur. Crim., tom. 1, pág. 157, Ser. 2ª.

Cosa agena—Véase: *Condómino*, núm. 1.

Cosa arrendada—Véase: *Locador*: núm. 1.

1. **Cosa juzgada**—Para que sea procedente esta excepción, es indispensable que el litigio sobre que se funda, se haya seguido entre las mismas personas, con igual objeto, y por idéntica causa—Jur. Civ., tcm. 5, pág. 588, Ser. 2ª.

2. **Cosa juzgada**—Esta excepción es improcedente cuando la sentencia ha resuelto una cuestión distinta, aunque sea entre las mismas personas y con idéntico origen—Jur. Com., tom. 4, pág. 55, Ser. 2ª.

3. **Cosa juzgada**—La cláusula que condena al demandante á perpetuo silencio, carece de valor jurídico y no basta por sí sola para caracterizar la cosa juzgada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 2ª.

4. **Cosa juzgada**—La sentencia que declara procedente

1—Así lo disponen las Leyes 19 y 20, tit. 22, Part. 3ª; Regla 32, tit. 34, Part. 7ª. Es necesario además que no haya apelación de la sentencia dictada. Eseriche, verb., *cosa juzgada*: Conde de la Cañada, Part. 1ª, Caps. 12 y 14. Goyena, tom. 4, pág. 121.

2—La cosa juzgada solo se opera cuando la nueva demanda que se inicia es sobre la misma cosa, por la misma causa, entre las mismas personas y sobre la misma calidad: como en el caso presente no concurren todos estos requisitos indispensables, resulta que la cosa juzgada no procede.

3—La cláusula de perpetuo silencio impuesto á un litigante en virtud de sentencia, ninguna importancia tiene en jurisprudencia, salvo ciertos casos de excepción. Ella es casi siempre inútil. Con efecto, si esa cláusula está contenida en una resolución que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ningún resultado produciría, pues una vez ejecutoriada la sentencia con ó sin dicha cláusula, no se podría volver sobre la cuestión resuelta: si por el contrario, la resolución á la que va adherida fuese de aquellas que no causan estado, sería incompatible con ella sin alcanzar á desnaturalizarla, no produciendo, consiguientemente, del propio modo resultado alguno.

4—Tal resolución solo importa un aplazamiento y conserva inte-

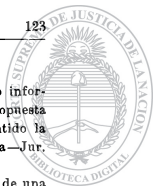
COS

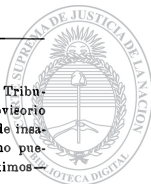
la escepción de falta de personería recaída en juicio informativo, no hace cosa juzgada, aún cuando haya sido opuesta y resuelta como perentoria, ni aun habiendo consentido la providencia que fijaba un término para justificarla—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 2ª.

5. Cosa juzgada.—La aprobación en el extranjero, de una información para justificar el matrimonio, sin citar á la parte residente en la República, no hace cosa juzgada ni tiene valor alguno ante los Tribunales—Jur. Civ., tom. 7, pág. 402, Ser. 2ª.

gro el derecho de los postulantes para deducir nueva acción una vez munidos de los recaudos exigidos para acreditar el carácter invocado. Bonnier, Tratado de las pruebas, tom. 2, pág. 402, núm. 862; Goyena, Concordancias, tom. 3, art. 1225, pág. 242.

5—Siempre que esa información sea objetada por la parte contra quien se presente, pues de lo contrario hace fe en juicio. La falta de citación ó audiencia de la parte afecta al derecho natural de defensa, que es la base indispensable de todo procedimiento: es por esto que se considera como forma esencial en el procedimiento, y su omisión produce nulidad absoluta é insanable en la sentencia. Sería necesario la citación de la parte residente en la República, porque admitir como suficiente una información producida en el extranjero sin la citación de la parte interesada, sería permitir la ejecución de una sentencia extranjera contra el texto espreso y terminante del art. 559, inc. 2º del Cód. de Proc., que prohíbe llevarse á ejecución tales sentencias. Por otra parte, el art. 979, inc. 10 del Cód. Civ., establece que son instrumentos públicos los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales y las copias sacadas de esos libros. Aquí se trata de una partida de matrimonio asentada en esos libros en virtud de una información sumaria producida al efecto, pero sin que el interesado hubiese sido citado ni oído: por consiguiente ese asiento es necesariamente nulo y sin ningún valor, porque su anotación se hizo sin llenar los requisitos exigidos por el art. 1011, como es la citación de los interesados. Si este artículo exige, para insertarse en un protocolo una escritura que es en sí misma fehaciente y que aparece revestida de todas las formas legales, la citación de la parte interesada, con cuanta más razón no debiera exigirse la citación para protocolar un documento producido en virtud de una simple información sumaria? No debe olvidarse que la misma Cámara tiene resuelto otro caso en el cual se dejó establecido, que





COS

6. Cosa juzgada—La confirmación hecha por los Tribunales superiores del nombramiento de curador provisorio de un insano, recaído en el juicio sobre declaratoria de insania, no hace cosa juzgada, ni importa declarar que no pueden ejercer la curatela definitiva los parientes próximos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 256, Ser. 2ª.

Cosa juzgada—Véase: *Herederos*, núm. 2—*Matrimonio*, núm. 1—*Benignidad*, núm. 1—*Moratorias*, núm. 1—*Escepción de falsedad*, núm. 1—*Consejo Nacional de Higiene*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 3—*Sentencia extranjera*, núm. 2—*Sentencia*, núm. 10—*Sentencias*, núm. 1—*Incapaz*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 15—*Testamento ológrafo*, núm. 3.

Cosa mueble—Véase: *Embargo*, núms. 5 y 8—*Embargo preventivo*, núm. 11.

Cosa vendida—Véase: *Vendedor*, núm. 3—*Condómino*, núm. 1.

Cosas fungibles—Véase: *Contrato de compraventa*, número 1.

Cosas muebles—Véase: *Reivindicación*, núm. 8.

1. Costas—Justificada la escepción opuesta por el demandado, la condenación en costas al demandante es ineludible—Jur. Com., tom. 4, pág. 335, Ser. 2ª.

2. Costas—Cuando el demandante no justifica su acción

las informaciones producidas ante otros jueces, carecen de valor jurídico para atribuir personería á título hereditario en los autos testamentarios. Véase: *Inst. tom., l.º verb. informaciones*, núm. 1421.

1—En el caso presente no se trataba de escepciones dilatorias ni perentorias; se trataba simplemente de escepciones opuestas al contestar la demanda como medio general de defensa. Como es de consiguiente, si esas escepciones ó defensas que se relacionan al fondo de la demanda destruyen sus fundamentos, la demanda debe ser rechazada con costas, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 221 del Cód. de Proc.

2—Art. 221 del Cód. de Proc. Debe no olvidarse que solo procede la condenación en costas cuando la parte contraria lo solicita.

COS

debe condenársele en las costas del juicio, absolviéndose al demandado—Jur. Com., tom. 4, pág. 450, Ser. 2ª.

3. Costas—La condenación en costas al vencido, es procedente, aun en cuestiones de puro derecho, siempre que el punto haya sido resuelto con anterioridad por los Tribunales—Jur. Com., tom. 4, pág. 458, Ser. 2ª.

4. Costas—Contra el demandante que no justifica su acción es ineludible la condenación en costas—Jur. Com., tom. 4, pág. 465, Ser. 2ª.

5. Costas—El rechazo de la ejecución hace ineludible la condenación en costas al ejecutante—Jur. Com., tom. 3, pág. 475, Ser. 2ª.

6. Costas—Cuando el tercerista no justifica la propiedad de los bienes embargados, debe ser condenado en todas las costas del juicio—Jur. Com., tom. 3, pág. 499, Ser. 2ª.

7. Costas—En caso de desistimiento de algunas de las

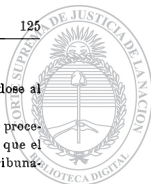
3—En el caso presente se trataba de una cuestión que habia sido resuelta de una manera constantemente uniforme por todos los tribunales tanto federales como provinciales, siendo en consecuencia perfectamente procedente la condenación en costas. Pero, nos parece que no sería de aplicarse el principio sentado en el sumario si el caso á resolverse lo hubiese sido ya con anterioridad pero no por unanimidad de votos, pues en estos casos no puede considerarse que haya habido ni temeridad ni malicia, por contar con la opinión imparcial de uno de los miembros del poder judicial. Véase verb. *Costas*, núm. 14 y su nota: en esta última sostenemos el principio sentado en el sumario presente. Puede verse además el tomo 2º de la Inst., verb. *Costas*, núm. 10, que también está de acuerdo con la teoría por nosotros sustentada.

4—Art. 221 del Cód. de Proc.

5—Art. 507 del Cód. de Proc.

6—No resolvió tal cosa la Cámara: simplemente confirmó con costas la sentencia de 1ª Instancia. El art. 221 del Cód. de Proc., es de aplicación en este caso, no lo es el art. 507, porque este trata del juicio ejecutivo, el juicio de terriería es ordinario.

7—Esas actuaciones que causan un desistimiento deben ser á cargo del que las produce por cuanto es una retractación parcial de la demanda: puede también considerarse como una petición desesti-





COS

pretensiones del ejecutante, son á cargo de éste, pero solo en esa parte—Jur. Com., tom. 1, pág. 134, Ser. 2ª.

8. Costas—Y honorarios, procedentes de la gestión del derecho para cobrar daños y perjuicios, no forman parte de éstos, si la sentencia no los declara á cargo del que debe la indemnización—Jur. Com., tom. 1, pág. 393, Ser. 2ª.

9. Costas—No procede la condenación en ellas, cuando el que se considere agraviado por la absolución no ha pedido en la estación oportuna, que ellas fueran á cargo de la contraparte—Jur. Civ., tom. 6, pág. 577, Ser. 2ª.

10. Costas—La exigencia del representante de una testataria de que se justifiquen los créditos contra ella, no supone temeridad ni malicia y en consecuencia no es pasible de condenación en ellas—Jur. Civ., tom. 6, pág. 230, Ser. 2ª.

mada, en cuyo caso el ejecutado queda exonerado de las costas relativas á ella, como lo dispone el art. 507 del Cód. de Proc.

8—Se trata de una sentencia dictada en un juicio arbitral en la que no se impuso el pago de las costas debiendo pagarse en el orden en que fueron causadas. No puede discutirse este punto en un juicio ordinario, porque hay cosa juzgada al respecto.

9—La sentencia no dice que deba pedirse la condenación en la estación oportuna del juicio: dice tan solo que no puede haber condenación en costas por no haberse solicitado en parte alguna del juicio. Es evidente que si la parte vencedora no pide la condenación en costas, el Juzgado no la puede decretar de oficio, porque sería sentenciar *ultra petito*. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto, en el cual se estableció que el actor que no justifique su acción solo debe ser condenado en las causadas con posterioridad á la petición del demandado, como puede verse en el tomo 2, pág. 214, Ser. 1ª de la Jur. Civ. Véase Inst., tom. 1ª, verb. *Costas*, núm. 628 y su nota. El art. 221 del Cód. de Proc. resuelve claramente la cuestión cuando dice que el vencido en juicio debe pagar las costas de la contraria, *si ésta lo pidiere*.

10—Los herederos ó sus mandatarios no están obligados á conocer las deudas de la sucesión, como no están ni siquiera obligados á reconocer la firma del causante; no puede por consiguiente existir, ni temeridad, ni malicia tratándose de hechos que no son personales. Por otra parte, es jurisprudencia establecida por la Cá-

COS

11. Costas—No procede la condenación cuando se hace el pago antes de librarse el mandamiento—Jur. Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 2ª.

12. Costas—No corresponde la condenación en ellas cuando el pago se hace antes de diligenciarse el mandamiento—Jur. Civ., tom. 6, pág. 421, Ser. 2ª.

13. Costas—La resolución de una cuestión de derecho, no permite suponer temeridad en el litigante y hace improcedente su condenación en ellas—Jur. Civ., tom. 6, pág. 127, Ser. 2ª.

14. Costas—Su imposición es improcedente en una cuestión de derecho—Jur. Com., tom. 2, pág. 108, Ser. 2ª.

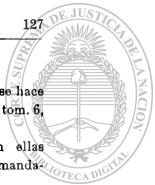
para que las costas no se imponen al litigante por el simple hecho de ser vencido en la contienda, sino por haber litigado á sabiendas, contra derecho, ó de una manera temeraria, como puede verse entre otras resoluciones las que corren publicadas en el tom. 1º, págs. 18 y 334; y 4, pág. 314, Ser. 1º, Jur. Civ. Ley 8, tit. 22, Part. 3ª.

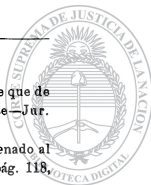
11—En el caso ocurreniente el Juez dijo que «no tratándose de un juicio ejecutivo, puesto que no se ha pedido ni librado mandamiento de ejecución y embargo y habiendo el deudor hecho la consignación de la deuda sin ser requerido para ello», se declara que las costas no son á su cargo. La Cámara confirmó este auto por sus fundamentos. Debemos hacer presente que aun dado el caso de que se tratara de un juicio ejecutivo, el deudor no estaría obligado á pagar las costas de la ejecución si pagase antes de librarse mandamiento, como lo tiene resuelto esta misma Cámara. Véase Inst., tom. 1º, verb. *Costas*, núm. 639; el caso que se cita en el mismo tomo, verb. *Costas*, consagra el mismo principio, fundado en el art. 483 del Cód. de Proc.

12—El art. 483 del Cód. de Proc. establece que, aun cuando pague el deudor dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento y aun en el acto de hacerse éste, serán de su cargo las costas; de aquí resulta deducido *a contrario sensu* el principio consagrado en el sumario.

13—Véase verb. *Costas*, núms. 3 y 14.

14—El fundamento que da la Cámara para este caso no puede ser más inconsistente: dice, que tratándose de una cuestión de derecho no es de imponerse las costas con arreglo á la doctrina del art. 221 del Cód. de Proc. Este artículo nada dice de las cuestiones de dere-





COS

15. Costas—La condenación es ineludible siempre que de autos resulte comprobada la temeridad del litigante—Jur. Civ., tom. 6, págs. 280 y 301, Ser. 2ª.

16. Costas—El litigante temerario debe ser condenado al pago de todas las del juicio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 118, Ser. 2ª.

17. Costas—Son á cargo del rebelde—Jur. Civ., tom. 6, pág. 367, Ser. 2ª.

18. Costas—Si el demandante no justifica los extremos en que funda su acción, corresponde su rechazo con expresa condenación en costas—Jur. Civ., tom. 7, pág. 61, Ser. 2ª.

19. Costas—La condenación en costas no procede, siempre que ambas partes han tenido á juicio del Juzgado razón derecha para litigar—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 2ª.

20. Costas—La condenación en costas no procede, cuando

cho ni de las de hecho y solo deja al criterio judicial la apreciación de cada caso para imponerlas ó no. Estamos de acuerdo en que tratándose de una cuestión ardua de difícil solución se exima de las costas, mas no así cuando la cuestión de derecho fuese de fácil solución ó cuando la jurisprudencia hubiese sido fijada ya en tal punto, pues en el primer caso toda idea de temeridad desaparece, mientras que en el segundo existe la presunción contraria.

15—Es jurisprudencia constante en nuestros tribunales. Véase Inst., tom. 1, verb. *Costas*, núms. 626 y 652. Hay temeridad ó malicia cuando el litigante no ha tenido justa causa para litigar ó razón probable para ello. Inst., tom. 2ª, verb. *Costos*, núms. 4 y 8.

16—Véase la nota precedente.

17—Art. 443, inc. 3ª, Cód. de Proc.

18—Parece que esta debiera ser la doctrina correcta y la que mejor interpreta el espíritu y la letra del art. 221 del Cód. de Proc. Sin embargo en la práctica es otro el criterio que guía á los tribunales, pues ellos exigen que haya temeridad ó malicia de parte del litigante.

19—Ello comprueba que no ha habido ni malicia ni temeridad de parte de ninguno de los litigantes.

20—Véase la nota 15.

COS—CRE

no existe ni temeridad ni malicia—Jur. Civ., tom. 8, pág. 56, Ser. 2ª.

21. Costas—Su imposición no procede, cuando la parte no lo ha pedido al iniciar ó contestar la demanda—Jur. Civ., tom. 8, pág. 465, Ser. 2ª.

Costas—Véase: *Padre natural*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 8—*Incidente*, núm. 2—*Indemnización*, núms. 1 y 2—*Esposa*, núm. 5—*Excepción de incompetencia*, núm. 4—*Jurisdicción*, núm. 4—*Plus petitio*, núm. 1—*Desalojo*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 7.

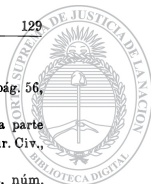
Crédito—Véase: *Concurso*, núm. 3—*Declaración*, núm. 2—*Cesación de pagos*, núm. 2—*Adjudicación*, núm. 2.

Crédito litigioso—Véase: *Cesión*, núm. 2.

1. Créditos—Contra una testamentaria en que los únicos interesados son menores, deben justificarse en forma, con escepción de aquellos gastos que son de premiosa necesidad, sobre los cuales el Juzgado debe aceptar el juramento del actor—Jur. Civ., tom. 8, pág. 478, Ser. 2ª.

21—El art. 221 del Cód. de Proc. establece como requisito para la imposición de las costas que la contraria lo pida. Véase el núm. 9 y su nota.

1—En el caso ocurrente, un acreedor se presentó repitiendo pagos que había hecho por cuenta del causante poco tiempo antes de su fallecimiento, y gastos funerarios. El tutor de los menores pidió que se declarara de legítimo abono el crédito, oponiéndose el Asesor y exigiendo su justificación previa; el Juez declaró de legítimo abono los créditos, fundado en el art. 443, inc. 2ª: la Cámara revocó el auto estableciendo la necesidad previa de su justificación. El fundamento aducido por el Juez es insubsistente, pues el artículo citado establece y presume la existencia de deuda legalmente comprobada, lo que no sucede en el presente caso. Por otra parte, el procedimiento del Juez daría por resultado el conferirse á sí mismo y al tutor la facultad de reconocer deudas del menor—contra el texto expreso del art. 1881, inc. 17, que exige poder especial para reconocer obligaciones anteriores al mandato; principio aplicable á los representantes necesarios—art. 1870, inc. 1ª.



CRE—CUE

Créditos—Véase: *Socios solidarios*, núm. 1—*Costas*, núm. 10—*Embargo preventivo*, núm. 7.

Créditos condicionales—Véase: *Prescripción*, núm. 8.

Crimen—Véase: *Agresión*, núm. 1.

1a. Crímenes—Si el culpable comete varios en el mismo acto, debe aplicársele la pena que corresponda al mayor.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 506, Ser. 2ª.

Cuenta—Véase: *Chancelación*, núm. 1—*Liquidación de sociedad*, núm. 2—*Escritura pública*, núm. 3.

Cuenta corriente—Véase: *Intereses*, núm. 4—*Compulsas*, núm. 2.

Cuenta de administración—Véase: *Contador*, núm. 3.

1b. Cuenta particionaria—Una vez aprobada, se conceptúa instrumento público, y si bien puede ser modificada por otra posterior, no puede declararse nula sino en los casos que la ley permite la de aquel.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 248, Ser. 2ª.

2. Cuenta particionaria—La aprobación judicial y la aceptación por los herederos, de los bienes adjudicados, importa su reconocimiento sobre los derechos que en ella se declaran.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 534, Ser. 2ª.

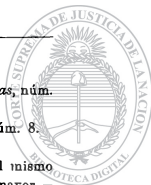
3. Cuenta particionaria—Las modificaciones cambiando

1a—Art. 177 del Cód. Pen. ant., en el cual se establece otro criterio para casos de delitos concurrentes.

1b—La aprobación judicial de una cuenta particionaria tiene la fuerza de una sentencia definitiva, no pudiendo ella ser variada ni modificada cuando ha sido consentida por las partes. Además la cuenta particionaria forma parte de los expedientes en los que son levantadas, y es sabido que los expedientes son instrumentos públicos.—Art. 579, inc. 4º del Cód. Civil.

2—Lo contrario importaría autorizar a una parte a volver sobre sus propios actos y voluntad judicialmente declarados.

3—En este caso no hubo sino cambio de haber hereditario porque a uno de los herederos a quien se adjudicó en pago un inmueble se le dió dinero en su reemplazo, dinero que era parte del haber hereditario.



CUE

la adjudicación de un inmueble por dinero efectivo, no importan una compraventa entre los herederos que han efectuado la operación.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 430, Ser. 2ª.

Cuenta particionaria—Véase: *Condominio*, núm. 1—*Acciones hereditarias*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 14.

Cuenta y orden—Véase: *Pago*, núm. 2.

Cuenta y riesgo—Véase: *Mina*, núm. 1.

1. Cuentas—El recibo otorgado por el mandante, de la cantidad disponible, importa para el depositario, la aprobación de cuentas hasta la fecha que él espresa. La prueba en contra corresponde al que exige la rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 2ª.

Cuentas—Véase: *Empedrado*, núm. 2—*Empedrados*, núms. 1 y 4—*Fuerza ejecutiva*, núm. 1.

Cuerpo médico—Véase: *Médico*, núm. 1—*Sociedad*, número 2.

Cuestión de derecho—Véase: *Costas*, núms. 3, 13 y 14.

1a. Cuestión de hecho—Para justificar que se trata de una cuestión de hecho, no puede producirse prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 317, Ser. 2ª.

Cuestión litigiosa—Véase: *Libros de comercio*, núm. 5.

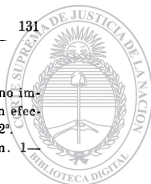
1b. Cuestiones—Todas las que se susciten sobre interpretación de un contrato de locación de servicios mercantil, deben ser resueltas por árbitros-arbitradores.—Jur. Com., tom. 1, pág. 54, Ser. 2ª.

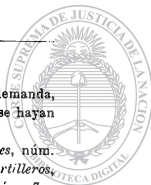
2. Cuestiones—Aún cuando el Juzgado, al resolver la pri-

1a—Si la cuestión es de hecho ó de derecho, resultará de los términos en que se haya trabado la litiscontestación. El art. 105 del Cód. de Proc., no prescribe este trámite; y es sabido que es principio establecido por los prácticos, que en procedimiento lo que no está permitido está prohibido.

1b—Art. 601 del Cód. de Com. ant. Véase: Jur. Com., tom. 6, págs. 211 y 506, Ser. 1ª.

2—Los demás que se hayan suscitado oportunamente; esto es, al





CUE—CUR

mera de las cuestiones resuelva el rechazo de la demanda, está obligado á estudiar y resolver las demás que se hayan suscitado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280, Ser. 2ª.

Cuestiones—Véase: *Prescripción*, núm. 9—*Jueces*, núm. 6—*Conocimiento*, núm. 1—*Regulación*, núm. 3—*Martilleros*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 13, 20 y 21—*Sociedad*, núm. 7—*Cuestiones*, núms. 11, 12 y 13—*Dependientes habilitados*, núm. 1—*Escepción de litispendencia*, núm. 6—*Pagaré*, núm. 4—*Socios*, núm. 1—*Contrato de sociedad*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 1—*Personería*, núm. 4—*Costas*, núm. 3—*Fuero local*, núm. 1.

Cuestiones propuestas—Véase: *Sentencia*, núm. 3.

Cuidadores—Véase: *Homicidio*, núm. 1.

Culpa—Véase: *Empresas de Tramways*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 1—*Riña*, núm. 1—*Ferrocarril*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 11, 19 y 20—*Contrato de locación*, núm. 6—*Perjuicios*, núms. 1, 3 y 4—*Ferrocarriles*, núm. 1.

Culpa y cargo—Véase: *Juez*, núm. 4.

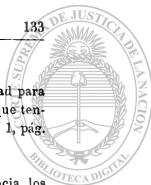
Culpabilidad—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1—*Ocultación de bienes*, núm. 1—*Daño*, núm. 2—*Acto ilícito*, núm. 1.

Culpable—Véase: *Fallido*, núm. 5—*Arbitros-arbitradores*, núm. 1—*Sustitución de personas*, núm. 1.

Cuotas—Véase: *Empedrado*, núm. 2—*Empedrados*, número 4.

Curia eclesiástica—Véase: *Informaciones*, núm. 2.

trabarse la litiscontestación: porque los suscitados en el curso del juicio, puede el Juez tomarlas ó no en consideración sin incurrir en nulidad.—Jur. Com., tom. 3, pág. 217, Ser. 1ª.—La cuestión resuelta en el sumario ha sido materia de resoluciones encontradas, al punto que podemos decir que reina un verdadero caos en materia tan delicada. Las Cámaras han resuelto contradictoriamente este punto. En el caso presente, se ha sentado el principio correcto. Pueden verse los siguientes fallos que están de acuerdo con el caso resuelto aquí: Inst., tom. 2, verb. *Jueces*, núm. 6, y *Nulidad*, núm. 36; en contra: Véase *Nulidad*, núm. 19; *Jueces*, núms. 3, 4 y 5. La nota



CUR

1a. Cura párroco—El de una iglesia, tiene facultad para reprimir por la fuerza pública todo acto irreverente que tenga lugar dentro de su jurisdicción.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 51, Ser. 2ª.

Cura párroco—Véase: *Informe*, núm. 2.

1b. Curador—Después de nombrado el de la herencia, los que se pretendan herederos carecen de personería para intervenir, mientras no sean reconocidos en tal carácter en juicio contradictorio con el curador.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 108, Ser. 2ª.

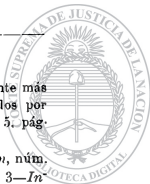
2. Curador—Para que el cargo de curador de una insana se pueda conceptuar legalmente desempeñado, basta que judicialmente le sea reconocido, sin que sea requisito esencial á su validez el reconocimiento médico y el discernimiento del cargo por Juez competente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 256, Ser. 2ª.

puesta al pié del verb. *Jueces*, núm. 6, tom. 2º, Inst., consagra nuestra opinión en la presente cuestión.

1a—Todo acto irreverente viola el precepto del art. 14 de la Constitución Nacional que garante á todos los habitantes de la Nación el libre ejercicio de su culto. Constituye asimismo una infracción del art. 443 del Cód. Pen., artículo que castigaba con pena corporal todo acto de irreverencia cometido en los lugares destinados al culto católico ó al de otra religión autorizada, de aquí surge el derecho que asiste al párroco para solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer respetar y cumplir el precepto constitucional, impidiendo la perpetración del delito previsto por el Cód. Penal, como asimismo para impedir cualquier desorden que se pretenda producir dentro del recinto del templo.

1b—El curador es el representante de la herencia y es el único que puede entender en toda cuestión que con esa herencia tiene relación.

2—El art. 398, inc. 14 del Cód. Civ., aplicable á la curatela en virtud de lo dispuesto en el art. 475, dice que no pueden ser tutores los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo tenía. El pariente que pretendía en el caso ocurrente, la curatela de la insana, no había sido nombrado judicialmente, pero había sido reconocido por los Jueces como tal curador en varios casos. Se aducía como argumento, que el reconocimiento judicial suplía el nombramiento



CUR

3. Curador—Los Jueces pueden nombrar al pariente más idóneo, siempre que no exista ninguno de los llamados por la ley para desempeñar la curatela.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 402, Ser. 2ª.

Curador—Véase: *Honorarios*, núm. 3—*Escusación*, núm. 1—*Personería*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 3—*Insano*, núm. 1—*Derechos eventuales*, núm. 1.

1. Curador de bienes—Es improcedente su nombramiento cuando existen herederos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 450, Ser. 2ª.

Curador especial—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 3.

Curador provisorio—Véase: *Juicio*, núm. 2—*Cosa juzgada*, núm. 6.

Curatela—Véase: *Hermanos legítimos*, núm. 1.

Curatela definitiva—Véase: *Parientes*, núm. 1.

sin que fuese necesario el discernimiento del cargo, porque lo que ha querido la ley es penar la incuria de los parientes, que viendo á los suyos abandonados por causa de minoridad, no llevan la denuncia á los Jueces para suplir su incapacidad por medio de una representación legal. Aquí no se trataba de un caso de abandono, ni de un incapaz que no estuviese representado: por el contrario tenía su representante, cuyos actos fueron siempre ejecutados con satisfacción de la justicia, prestando ésta siempre su aprobación á los actos que le fueron llevados ante ella para su control.

3.—Según disposición del art. 475 del Cód. Civ., las leyes que rigen la tutela de los menores son aplicables á la curatela de los incapaces. Según el art. 391, el Juez debe siempre preferir el pariente más idóneo al menos idóneo, no obstante el orden establecido en el art. 390. Si esto sucede en la tutela legítima ¿con cuánta más razón no debe aplicarse á la tutela dactiva?

1.—En este caso, curador de bienes equivale á curador de la herencia. Para que este nombramiento pueda ser hecho por el Juez, se requiere la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art. 688 del Cód. de Proc., según claramente se desprende de los términos del art. 689. Esta resolución está en un todo de acuerdo con lo resuelto en otros casos. Véase Inst., tom. 1, verb. *Curador de la herencia*, núm. 705; F. S. C. P. tom. 4, pág. 375, Ser. 2ª; Fallos de la Cámara 2ª de Apelaciones de la Prov. de Buenos Aires, recopilados por el Dr. G. Lozano, año 1888; arts. 3539 y 3540 del Cód. Civ.



1. Chancelación—El recibo por saldo, importa la chancelación de toda cuanta de fecha anterior, cualquiera que sea su origen.—Jur. Com., tom. 4, pág. 465, Ser. 2ª.

2. Chancelación—La de un pagaré, solo puede justificarse por recibo especial; la existencia en poder del deudor, de otros de fecha posterior, no justifica la novación de la obligación ni su pago.—Jur. Com., tom. 2, pág. 582, Ser. 2ª.

3. Chancelación—La entrega al deudor, del documento que comprueba la obligación, hace presumir la chancelación, salvo prueba en contrario que corresponde al acreedor.—Jur. Com., tom. 1, pág. 139, Ser. 2ª.

1—Véase: verb. *Saldo*, núm. 1.

2—La sentencia no estableció el principio sentado en la primera parte, es decir, que la prueba de haberse abonado un pagaré solo puede justificarse por recibo especial. Todo lo contrario, esa prueba puede establecerse por cualquiera de los medios generales de prueba admitidos por la ley. La misma sentencia que sirve de base al sumario decía lo siguiente: «Por la prueba producida no se ha justificado el pago del crédito reclamado. A este respecto se ha presentado solo la compulsa de los libros del acreedor, y algunos documentos; la primera lejos de demostrar el pago, acredita que el deudor adeudaba la obligación que servía de base a la ejecución; los pagarés por sí solos no acreditan la chancelación de los otros, ni establecen la novación que se pretende, pues no se hallan acompañados de ningún antecedente que lo demuestren, y por el contrario fué desconocida por el acreedor».

3—Art. 973, Cód. de Com. ant.

CHA

4. Chancelación—Un instrumento privado debidamente reconocido en juicio, hace plena fe de sus atestaciones, y en su consecuencia, una chancelación comprende todas las deudas de fecha anterior.

4—La primera parte del sumario tiene su fundamento en los artículos 1028 y 1029 del Cód. Civ. La Ley 119, tit. 18, Part. 3^a, dice así: «Si la parte contra quien aduzen tal carta como esta, la otorgare deve valer; bien assi como si fuesse fecha por mano del Escriuano publico».





1. Dación en pago—No existe cuando lo fuese por deudas de plazo no vencido en la fecha del acto.—Jur. Com., tom. 1, pág. 338, Ser. 2º.

2. Dación en pago—El convenio de los acreedores con el concursado, antes de la calificación de la quiebra, por el cual se levanta el auto que la declaró, recibiendo los bienes del concurso, importa dación en pago y solución de todas las deudas anteriores.—Jur. Com., tom. 3, pág. 475, Ser. 2º.

Damnificado—Véase: *Delito*, núm. 7.

1—Siempre que haya otros acreedores además del que reciba el pago en cuyo caso la deuda que se paga debe ser juzgada por la disposición del tit. del Pago, art. 1325, Cod. Civ. La circunstancia de ser de plazo vencido la obligación implica y demuestra que el acto es serio. Según el art. 735 del Cód. Civ., el pago no extingue la obligación si es hecho por un deudor insolvente en fraude de sus otros acreedores: el art. 1044, que le es correlativo, declara nulos los actos jurídicos en que los agentes hubiesen procedido con simulación ó fraude presumido por la ley. El fraude se presume según la generalidad de los autores, cuando el deudor insolvente paga deudas no vencidas, ó vencidas pero con bienes de mayor valor que lo debido, y el mismo Dr. Velez lo establece así en su nota al art. 961. El fraude lo presume la ley en el deudor que hace enagenaciones perjudiciales á sus acreedores, por el hecho de su insolvencia, y la complicidad del tercero en el fraude, lo presume por el hecho de conocer esta insolvencia, art. 969.

2.—Cuand o se recibe sumas ó cosas en pago de una deuda la obligación queda estinguida con todos sus accesorios.—Art. 779, Cód vil.



DAÑO

1a. Daño—El que resulta para el pasajero imposibilitándolo para todo trabajo é inutilizándolo moral y físicamente, debe ser indemnizado en atención á la suma de bienestar que su porvenir representaba, como asimismo al gasto que su imposibilidad causara á la familia, y corresponde á los Tribunales fijar equitativamente su monto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 2^a.

2. Daño—Justificada su existencia y la culpabilidad del autor del acto ilícito que lo produjo, su responsabilidad es ineludible.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 553, Ser. 2^a.

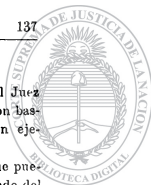
Daños é intereses—Véase: *Vendedor*, núm. 3.

1b. Daños y perjuicios—Aún cuando de autos no resulte

1a—Según el texto del art. 1069 del Cód. Civ., el daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fué privado el damnificado; y el art. 1083 establece que toda reparación del daño sea material ó moral, causado por un delito, debe resolverse en una indemnización pecuniaria, dejando el art. 1084 la fijación de su monto al prudente criterio del magistrado. Dalloz dice, que los Jueces son soberanos en la apreciación del daño causado, por ser una cuestión de hecho que entra en sus atribuciones. Véase: verb. *Responsabilité*. En estos casos la fijación del monto de los daños y perjuicios depende de un cúmulo de circunstancias y del conjunto de hechos que varían al infinito, como ser: la gravedad de las lesiones: si han exigido esmerada curación: el estado de salud presente y futuro de la víctima: si la cura es posible ó si quedará imposibilitado para toda la vida: si solo hay lesiones físicas ó si también las hay intelectuales: si los tratamientos médicos que exigirá la enfermedad serán costosos y dispendiosos: si ha sobrevenido deformidad: si queda inhabilitado para procurarse por si mismo su subsistencia: la posición social: sus esperanzas futuras posibles de realizarse: si hay una carrera más ó menos brillante inalograda. Igual doctrina se ha sentado en el tom. 8, pág. 553, Ser. 2^a.

2—Arts. 110 y 1113, Cód. Civ. Véase: Inst. tom. 1^a, verb. *Daños y Perjuicios*, núms. 727 y 736; y tom. 2 mismo verb., núms. 1, 5, y especialmente el 6.

1b—En una acción por daños y perjuicios se decretó inhibición contra una de las partes á fin de garantizar las ulterioridades del juicio siendo la inhibición por cantidad ilíquida. El inhibido pidió el levantamiento ofreciendo bienes á embargo de acuerdo con el art.



DAÑ

aproximadamente el monto de los que corresponde, el Juez debe apreciarlos para resolver si los bienes ofrecidos son bastantes para consentir el levantamiento de la inhibición ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 447, Ser. 2ª.

2. Daños y perjuicios—La indemnización, para que pueda fundar un embargo preventivo, debe ser el resultado del

461 del Cód. de Proc. En este caso es necesario que el Juez aprecie si es bastante garantía lo ofrecido á embargo; pero como esta apreciación no puede hacerse sino después de conocido el monto de los daños y perjuicios, éstos deben asimismo ser apreciados según el prudente criterio judicial y llamando á las partes á un juicio verbal á fin de oírlos é ilustrar su criterio. Hé aquí un caso de embargo preventivo que ha sido trabado por cantidad que no es líquida en contra de la jurisprudencia sentada por la Cámara, lo que demuestra la insubsistencia de los fundamentos aducidos por ella cuando establece que el embargo solo puede trabarse por cantidad líquida y que por consiguiente una obligación de hacer no puede dar lugar á un embargo preventivo. Cuando la obligación no contenga la cantidad líquida espresada, ella debe determinarse en la forma del presente sumario. De acuerdo con esta resolución. Véase: Inst., tom. 1°, verb. *Embargo preventivo*, núm. 986 y nota: en contra, Inst. tom. 2°, verb. *Obligación de hacer*, núm. 1 y *Embargo preventivo*, núm. 9.

2—Se entabla una demanda sobre escrituración de un inmueble, y se pide embargo preventivo sobre otro inmueble que no es materia del contrato. El Juez declara que el embargo no es procedente porque «en el caso presente se pide el embargo de dos manzanas de terreno cuya propiedad ó entrega no es ni materia del juicio, único caso en que pudo ordenarse el embargo directamente y sin espresarse en el mandamiento el valor ó suma á garantizarse con el embargo.» La Cámara confirma este auto por sus fundamentos. De modo que aquí ya se admite que puede librarse mandamiento por cantidad que sea ilíquida, cuando se trata «de la propiedad ó entrega de una cosa.» Nos ocurre preguntar ¿dónde van á parar los fundamentos aducidos por la Cámara y de que nos dá cuenta la Inst. en el tom. 2°, verb. *Obligación de hacer*? La jurisprudencia de la Cámara con relación á la procedencia de los embargos preventivos en estos casos debe reformarse; pero no tenemos esperanza de ello, sino cuando sus miembros cambien, porque es muy cómodo para ella, confirmar resoluciones «por sus fundamentos,» evitándose la molestia consiguiente que trae consigo el estudio de cualquier punto de derecho. Es esta la razón del apego que el Tribunal tiene á la rutina.



DAÑ

contrato ó de sentencia en que se fije cantidad determinada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 289, Ser. 2ª.

3. Daños y perjuicios—Justificada su existencia á causa de hechos imputables al demandado, procede el juramento estimatorio dentro de la suma que fije el Juzgado si el demandante no hubiese comprobado el monto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 2ª.

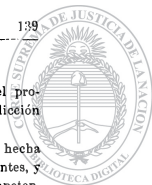
4. Daños y perjuicios—Para que esta acción pueda prosperar se requiere esencialmente que el acto sea contra derecho.—Jur. Com., tom. 4, pág. 436, Ser. 2ª.

5. Daños y perjuicios—El juramento estimatorio sobre éstos, no es pertinente mientras no exista prueba sobre ellos, aún cuando se haya reconocido su derecho á la indemnización.—Jur. Com., tom. 3, pág. 185, Ser. 2ª.

3—Y siempre que hubiese el actor hecho estimación de los daños y perjuicios al entablar la demanda—art. 220, Cód. de Proc.—pues, de lo contrario habria que reservarsele sus derechos para que en otro juicio fije su importancia—art. 219 —Véase: Inst., tom. 1, verb. *Daños y perjuicios* núm. 725; y tom. 2, mismo verb., núm. 2, que está en contra; y núms. 3, 6 y 17 que sientan principios que están en pugna con los anteriores. Reina una completa confusión en esta materia, consideramos sinembargo que el sumario que anotamos consulta los verdaderos principios que rijen la indemnización de daños y perjuicios. La ley es clara y no debiera dar lugar á resoluciones tan contradictorias como las dictadas hasta hoy por la Cámara.

4—El art. 1077 del Cód. Civ. establece, que todo delito hace nacer la obligación de reparar el daño que por él resultase á otra persona. A este efecto debe tenerse en cuenta el hecho en si mismo, pues para calificarlo de tal delito, no basta que el acto sea ilícito, sino que es necesario que haya sido ejecutado á sabiendas y con la intención de dañar á las personas ó á los derechos de otro, ó que sea el resultado de la libre determinación de parte del autor—art. 1076.—Según disposición del art. 1066, ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuese expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales, ó reglamentos de policía; esto es que sea contra derecho. En el tom. 2, pág. 292, Ser. 2ª de la Jur. Civil, se consagra el mismo principio.

5—Véase Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 5 y especialmente la nota al núm. 7 que trata el caso con precisión.



DAÑ

6. Daños y perjuicios—Esta acción procedente del protesto indebido de una letra de cambio, es de la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 3, pág. 286, Ser. 2ª.

7. Daños y perjuicios—Su estimación debe ser hecha por la jurisdicción en que se hayan declarado procedentes, y en consecuencia los Tribunales de comercio son incompetentes para fijar el monto de los declarados por Tribunales que ejercen jurisdicción exclusiva sobre los mercados de frutos del país.—Jur. Com., tom. 2, pág. 58, Ser. 2ª.

8. Daños y perjuicios—Las acciones subsidiarias deben sustanciarse con la principal en que se funden.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 452, Ser. 2ª.

9. Daños y perjuicios—Para que esta acción, fundada en un embargo indebido, pueda prosperar, es necesario que la

6—El acto del protesto es por su naturaleza mercantil. Los daños y perjuicios son una consecuencia de aquel acto, pues lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal: *Accesorium sequitur principale suum*.

7—Véase nota precedente. Debe además tenerse presente que el Juez de la sentencia, según principio recibido de procedimiento, es el competente para entender y conocer en las cuestiones relativas a su ejecución.

9—Es de precepto legal que cuando se obtiene un embargo contra derecho, la parte que lo obtuvo está obligada a la responsabilidad de los daños y perjuicios—art. 441 del Cód. de Proc.—pero esta disposición no implica la consagración de un derecho amplio y sin sujeción a condición ni requisito alguno: por el contrario, el art. 452 ordena que el embargo se haga contra el deudor a fin de que interponga el recurso que la ley le acuerda como medida de reparación. Si el embargo se confirma, no hay derecho a pedir indemnización alguna porque se consagra judicialmente el derecho a pedirlo, y tan solo en el caso de ser declarado improcedente puede establecerse la acción que de esa medida ilegalmente ejercitada nace. Si el embargo es procedente, el acto no puede ser enliefado de acto ilícito y por consiguiente no puede dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios—art. 1071, Cód. Civ.—Esta doctrina está de acuerdo con la establecida en otros casos. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios* núm. 20.



DAÑ

parte que la deduce, haciendo uso en tiempo oportuno de los recursos que acuerda la ley, haya conseguido su revocatoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 336, Ser. 2º.

10. Daños y perjuicios—El propietario que usando de un derecho propio ataca el del lindero, ocasionándole daños y perjuicios por hundimientos, debidos á las condiciones geológicas del suelo, está obligado al pago de los daños y perjuicios causados, por juramento estimatorio, si los peritos no pueden determinar fijamente su monto; y á permitir la construcción de las obras necesarias para la seguridad del edificio, y á no reincidir, recargando el suelo con pesos desproporcionados que puedan producir nuevos hundimientos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 549, Ser. 2º.

11. Daños y perjuicios—Es improcedente la acción fundada en un acto ilícito, si no se justifica la culpa ó negligencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 490, Ser. 2º.

12. Daños y perjuicios—Solo puede ser pasible de los causados por un animal aquel á quien se justifique ser su propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120, Ser. 2º.

13. Daños y perjuicios—Justificada científicamente la insania, no puede calificarse de ilícito el acto de colocar en una casa de sanidad al insano, y en consecuencia la acción de daños y perjuicios instaurada por éste debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 343, Ser. 2º.

10—De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 2513, 2514, 2619, 2620 y 2621 del Cód. Civ. y 220 del Cód. del Proc.

11—Arts. 1108 y 1109 del Cód. Civ.

12—El art. 1124 del Cód. Civ., responsabiliza al propietario de un animal doméstico ó feroz, por el daño que cause: es necesario comprobar el carácter de dueño del animal para responsabilizar á una persona. La regla establecida en el art. 1113, se refiere á hechos ilícitos ocasionados *por personas*, no siendo consiguientemente aplicable al caso presente.

13—La justificación científica equivale en este caso al dictámen pericial, que cuando es terminantemente asertivo hace prueba plena—

DAÑ

14. Daños y perjuicios—Siempre que exista una base positiva para justipreciar su monto, el juramento estimatorio es improcedente —Jur. Civ., tom. 7, pág. 102, Ser. 2ª.

15. Daños y perjuicios—Las utilidades cuya pérdida se incluya en una demanda de esta naturaleza, deben ser evidentemente justificadas, no basta suponerlas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 102, Ser. 2ª.

16. Daños y perjuicios—Por la mora en el cumplimiento de los contratos, cuando no existe en autos elementos suficientes para ser valorados deben ser fijados por peritos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 437, Ser. 2ª.

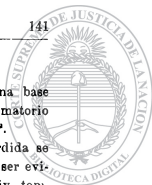
17. Daños y perjuicios—Que la falta de cumplimiento del contrato cause al comprador de buena fe, son exclusivamente á cargo del condómino que promete vender el bien en condominio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 4, Ser. 2ª.

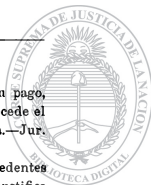
art. 178, Cód. de Proc.—Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuese espresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales ó reglamentos de Policía, y á ningún acto ilícito podrá aplicarse pena ó sanción del Cód. Civ. si no hubiese una disposición de la ley que la hubiese impuesto—art. 1066, Cód. Civ.—Todo lo contrario, la ley en vez de prohibir que una persona pida el reconocimiento de otra, lo ordena espresamente el art. 470. Si la declaratoria de incapacidad es pedida y ordenada en legal forma, el que la pidió ha cumplido con un deber, y es sabido que el ejercicio de un derecho propio ó el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto—art. 1070, Cód. Civ.

14—El art. 220 del Cód. de Proc., establece que la sentencia deferirá al juramento del actor la fijación del importe de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia estuviere legalmente constatada, *y no resultase justificado su importe.*

16—Arts. 508, 576 y 1423 del Cód. Civ. y 219, Cód. de Proc.

17—Se trata de la venta de un bien poseído en condominio, vendido como exclusivamente propio del enagenante ó ignorando el comprador la existencia del condominio. Si los condóminos no quieren enagenar su parte, el contrato no puede cumplirse porque versa sobre una obligación de vender una cosa ajena: el cumplimiento de la obligación se hace imposible por una causa imputable al vendedor y es responsable de los perjuicios que su inejecución cause al com-





DAÑ

18. Daños y perjuicios—Para que haya lugar a su pago, basta que se pruebe su existencia: sobre su monto procede el juramento estimatorio, si no existe justificación plena.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 160, Ser. 2ª.

19. Daños y perjuicios—La demanda por los procedentes de un acto ilícito debe ser rechazada si el actor no justifica plenamente la culpa del demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 267, Ser. 2ª.

20. Daños y perjuicios—La demanda por daños y perjuicios, es improcedente siempre que el actor no justifica que el acto cometido por el demandado es ilícito.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 350, Ser. 2ª.

21. Daños y perjuicios—Civiles, las empresas de tramways son responsables por los que causen sus empleados, aún

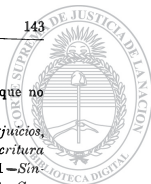
prador. Nada tienen que ver con esto los demás condóminos, pues, para ellos es una *res inter alios acta*. La Cámara, fundada en la ley, tiene resuelto que la venta que haga el condómino sin anuencia de los demás, es nula aún respecto de la parte que pudiese corresponderle. Véase: Inst., tom., 2, verb. *Condómino*, núm. 1; art. 1331, Cód. Civ.

18—En toda acción de daños y perjuicios concurren dos cuestiones, una de derecho y otra de hecho. Comprobado el derecho, debe establecerse en autos el hecho de que los daños y perjuicios efectivamente existieron. Si su monto exacto no se comprueba, es de aplicación el art. 220, Cód. de Proc.

19—Arts. 1108 y 1109, Cód. Civ. Véase: el núm. 11; Inst., tom. 1, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 727; tom. 2, mismo verbo, núms. 1, 5, 14 y 16.

20—Arts. 1066 y 1076 del Cód. Civ.

21—En cuanto a la primera parte, así lo dispone el art. 1113 del Cód. Civ.—Véase: Inst. tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 23 y 25 con sus notas. En cuanto a lo segundo, debemos hacer presente que el juicio criminal se siguió contra el autor directo del acto, mientras que la acción de daños y perjuicios se siguió contra la empresa también directamente responsable por la indemnización civil—art. 1122, Cód. Civ.—En este caso no hay cosa juzgada, porque no hay identidad de personas, y en su consecuencia la sentencia dictada en el juicio criminal ninguna influencia tiene sobre el juicio civil. Véase Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 3.



DAÑ—DEC

cuando los Tribunales del Crimen, hayan declarado que no existe delito.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 553, Ser. 2ª

Daños y perjuicios—Véase: *Acción de daños y perjuicios*, núms. 1, 2 y 3—*Empresas de Tramway*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 1—*Revocación*, núm. 1—*Boleto*, núm. 1—*Síndico provisorio*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 8—*Contrato de locación*, núm. 6—*Condominio*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 2—*Costas*, núm. 8—*Cláusula*, núm. 2.

Decisión espresa—Véase: *Nulidad*, núm. 4—*Sentencia*, núm. 11.

Decisión previa—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 7.

1. Declaración—La del damnificado por el robo, que no pretende ser parte ni tiene interés alguno, debe ser considerado como la de un testigo presencial.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 83, Ser. 2ª.

2. Declaración—De quiebra, de una sociedad en comandita, importa la de todos los socios solidarios que la forman, y los acreedores personales de éstos tienen derecho a cobrar al concurso el importe de sus respectivos créditos.—Jur. Com., tom. 2, pág. 224, Ser. 2ª.

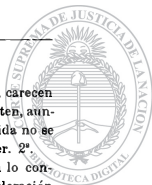
Declaración—Véase: *Filiación natural*, núms. 1 y 2—*Incapaz*, núm. 1—*Tacha*, núm. 1.

Declaración espresa—Véase: *Incidente*, núm. 1.

Declaración judicial—Véase: *Juicio*, núm. 2—*Parientes*, núm. 1.

1. Declaraciones—Hechas en los expedientes, debidamente aprobadas por el Juez de la causa, tienen igual valor que las escrituras públicas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 534, Ser. 2ª.

2—La declaración de quiebra lleva al concurso toda la masa de bienes del fallido; de modo que los acreedores particulares no tienen otro medio de cobrarse que presentándose al concurso, ni otros bienes con que hacerse pago de sus créditos que los del concurso.



DEC

2. Declaraciones—Prestadas en un expediente, carecen de valor legal en los que con posterioridad se susciten, aunque tengan igual objeto, si en la oportunidad debida no se pide su ratificación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 550, Ser. 2°.

3. Declaraciones—De testigos, que contradicen lo confesado por el actor, no deben ser tenidas en consideración al sentenciar.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 171, Ser. 2°.

4. Declaraciones—De testigos contradictorias entre sí, no forman prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 550, Ser. 2°.

5. Declaraciones—Las prestadas ante el Comisario de

2—En este caso las declaraciones existían antes de iniciarse el pleito, puesto que ya fueron prestadas en un expediente anterior en tramitación. El art. 68 del Cód. de Proc., establece que sólo puede tomarse declaración antes de iniciarse el pleito á los testigos de muy avanzada edad, ó que se hallen gravemente enfermos, ó próximos á ausentarse de la capital. Los testimonios de los que han declarado en otro expediente no se encuentran comprendidos en los casos de excepción. Por otra parte, los arts. 181 y siguientes del Cód. de Proc., establecen las formalidades requeridas por la ley para que las declaraciones sean válidas en juicio y el art. 302 establece terminantemente que las declaraciones en que no se hubiesen llenado esas prescripciones, no tendrán valor alguno. De aquí resulta que el sumario es exacto. Cuando se desea hacer valer el testimonio constante en otro expediente debe citársele al testigo en su domicilio á fin de que comparezca a retificarse en su declaración, sometiéndosele á las repreguntas de la parte contraria, con cuya citación debe ordenarse esa medida probatoria.

3—Es decir, los testigos que presentados por uno de los litigantes le contradicen, en lo que afirma. Carece de base la acción y no puede prosperar.

4—La ley 28, tit. 16, Part. 3°, que determina en que guisa deben ser preguntados los testigos, e como debe valer el testimonio que dixeran, establece testualmente lo siguiente: «Otrosi dezimos que deben ser preguntados del tiempo en que fue fecho aquello sobre que atestiguan, assi como del año, e del mes, e del día, e del lugar en que lo fizieron. *Ca si se desacordasse los testigos, diziendo el uno que fuera fecho en un lugar, e el otro en otra parte, non caldria su testimonio.* E por esta razon desechó Daniel Propheta á los testigos que aduxieron ante el contra Susana».

5—No solo hacen fe en los Tribunales los actos judiciales, sino

DEC

Policía, aunque no estén firmadas por el reo, forman prueba plena, siempre que por testigos pueda justificarse su veracidad.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 326, Ser. 2ª.

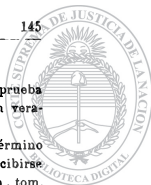
6. Declaraciones—En los juicios sumarios, el término para las declaraciones, no es fatal y éstas pueden recibirse aún después del señalado por el Juzgado.—Jur. Com., tom. 3, pág. 165, Ser. 2ª.

7. Declaraciones—De testigos que según el sumario no

también cualquier documento auténtico emanado de una autoridad que obra en la esfera de sus atribuciones, siendo innegable que la Policía tiene la misión legal que le compete para el esclarecimiento de los delitos, siendo ella encargada de practicar las primeras diligencias, hasta poner al reo á disposición de la autoridad competente, con los antecedentes que ha podido recoger, de los cuales no le es dado al Juez prescindir. Si bien es cierto que las declaraciones debieran ser firmadas por el declarante y testigos, cuando esta formalidad ha sido omitida puede ser llenada por medio de las personas que presenciaron la declaración y que testifiquen que efectivamente se prestó la declaración en los mismos términos que resulten del acta no firmada. Admitiendo, pues, que el informe del Comisario no sea auténtico, ni que valga para la convicción del delito lo mismo que un instrumento judicial, los testigos comprobarían siempre la confesión estrajudicial. Semejante prueba, pues, si bien por si misma no probaría el delito, lo justificaría siempre que hubiese perfecta conformidad entre ella y las declaraciones de los testigos.

6—En los juicios sumarios ni se dá ni debe darse gran importancia á las formas estrictas del procedimiento, procurándose ante todo la verdad en cualquiera forma que aparezca.

7—El fallo no dice esto. Solo establece que los testimonios carecen de valor probatorio: 1º Cuando de los antecedentes recogidos por la autoridad no resulte que los testigos que deponen en favor del reo se hallaban presentes; 2º Cuando al indicar los testigos del sumario las personas que se hallaban presentes en el acto de cometerse el hecho no mencionan á los testigos del plenario; 3º Cuando sus declaraciones están en oposición con las del sumario, de las que no hay motivo para sospechar, ya porque no aparezcan vinculados en manera alguna con los autores; ya porque generalmente comparecen á declarar en virtud de la obligación que pesa sobre todos de suministrar á la autoridad los antecedentes que se tienen de un crimen.



DEC

presenciaron el hecho, no forman prueba.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 5, Ser. 2ª.

8. Declaraciones—Las contradictorias de un testigo, no pueden en ningún caso tener fuerza probatoria, ni aun como simple presunción.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 161, Ser. 2ª.

9. Declaraciones—La escepción de la ley sobre declaraciones por medio de informes, solo es aplicable á los Directores del Establecimiento público, y no á los diversos jefes de las secciones en que se subdivide.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 427, Ser. 2ª.

10. Declaraciones—Las de testigos residentes en otra jurisdicción, solo pueden hacerse en el término extraordinario solicitado en la estación oportuna.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 427, Ser. 2ª.

11. Declaraciones—Las pedidas y ordenadas dentro del término y no diligenciadas por ocupaciones del Juzgado, deben ser prestadas aún después de vencido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 478, Ser. 2ª.

12. Declaraciones—Por cartas, aun ratificadas durante el término de prueba, carecen de fuerza probatoria.—Jur. Civ. tom. 8, pág. 400, Ser. 2ª.

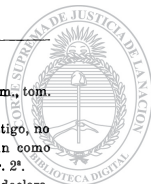
8—Cuando un testigo declara dos veces y la segunda declaración es contraria á la primera, ninguna de ellas puede valer, porque ese testigo es verdaderamente perjuro y falsario, pues necesariamente debió faltar á la verdad, ó bien la primera ó la segunda vez que declaró.—Ley 8, tit. 16, Part. 3; Escribhe, Dicionario de Leg. y Jur., verb. *Deposición*.

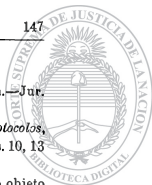
9—Art. 202 del Cód. de Proc.

10—Art. 114, inc. 1ª, Cód. de Proc.

11—Ultima parte del art. 118 del Cód. de Proc. A este respecto hay jurisprudencia uniforme fornada en nuestros Tribunales, como puede verse en numerosos casos.

12—Sineinbargo, si las personas que han hecho declaraciones por cartas son citadas como testigos y en esa citación se observan las prescripciones de los arts. 181 y siguientes del Cód. de Proc., siendo presentados como testigos, preguntados por las generales de la ley y ratificándose en el contenido de su declaración dada con anterior-





DEC

13. Declaraciones—Por carta, no forman prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 102, Ser. 2ª.

Declaraciones—Véase: *Dependiente*, núm. 3—*Protocolos*, núm. 1—*Juicio informativo*, núm. 1—*Testigos*, núms. 10, 13 y 14—*Esposiciones escritas*, núm. 1.

1. Declaratoria—De herederos, hecha con el solo objeto de justificar derechos posesorios para bonificar un título de propiedad, no está sujeta al impuesto de sellos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 274, Ser. 2ª.

2. Declaratoria—De herederos, la falta de intervención del Ministerio de Menores, anula la declaratoria de herederos, siempre que existan menores y aun cuando haya intervenido el Agente Fiscal.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 473, Ser. 2ª.

ridad por medio de una carta, tal declaración debe valer en juicio. Si la declaración por carta no tiene valor en juicio es porque no se observan las formas establecidas por la ley al efecto; pero si esa forma es observada, la razón de su ningún valor desaparece.

13—Véase Inst. tom. 1, verb. *Declaraciones*, núm. 756 y nota; tom. 2, verb. *Declaración por carta*, núms. 1 y 2 y sus notas. A este respecto hay jurisprudencia uniforme y constante.

1—El art. 31 de la Ley de Sellos establecía que «los Jueces no harán declaratoria de herederos, sin que previamente se pague ó se garanten los impuestos á que el mismo artículo se refiere.» Esos impuestos no son aplicables en el presente caso, pues ello importaría dar una interpretación demasiado extensiva á esa Ley que ordinariamente se aplica á los juicios sucesorios en que la declaratoria de herederos precede á las particiones que son gravadas con impuesto y cuyo pago se trata de asegurar; pero que no parece tener una interpretación ajustada cuando se trata de una sucesión en la que quizá hacia tiempo ya habia sido hecha la partición, y que no se hizo la declaratoria por no ser entonces indispensable, viniendo tan solo á ser necesaria después á propósito de un título de propiedad que se considera defectuoso y se trata de subsanar. Por consiguiente, no es justo que se obligue á pagar un impuesto, que no consta ni hay motivo para presumir que se adeude en realidad.

2—Esta es la jurisprudencia establecida, de acuerdo con numerosas resoluciones dictadas al respecto—Véase: Inst., tom. 1, verb. *Nulidad*, núms. 1830 y 1841; tom. 2, verb. *Intervención*, núms. 1 y 2; *Nulidad*, núm. 33; *Juicio*, núm. 2.

DEC-DEF

Declaratoria—Véase: *Heredero*, núm. 3—*Audiencia*, núm. 1—*Herencia*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 6—*Demencia*, núm. 1—*Herederos*, núms. 7, 8 y 11—*Título*, núm. 2.

1a. Declaratoria de pobreza—A favor del demandante, permite dejar sin efecto el arraigo del juicio por medio de fianza ó depósito, siendo bastante la simple caución juratoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 321, Ser. 2ª.

Declaratoria previa—Véase: *Alimentos*, núm. 3.

1b. Declinatoria—El que hubiese optado por ella no puede abandonarla y recurrir á la inhibitoria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 458, Ser. 2ª.

1c. Defecto legal—Si la demanda llena los requisitos de la ley, la escepción de defecto legal en el modo de proponerla es improcedente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 41, Ser. 2ª.

2. Defecto legal—Si la demanda llena los requisitos exigidos por la ley, la escepción de defecto legal en el modo de

1a—El objeto que se propone la ley—art. 84, Cód. de Proc.—al prescribir el arraigo del juicio, es asegurar las responsabilidades ó results del litigio para el caso de que exista condenación en costas ó perjuicios ocasionados por la demanda, lo que desaparece ante la disposición terminante del art. 601 del mismo Código. No puede sostenerse que hay cosa juzgada, porque los principios sobre que esta teoría descansa no son aplicables al presente caso. La ley que ordena el arraigo es una ley de carácter general para todos los litigantes, pero sufre las modificaciones establecidas por ella misma en el título XIX. La declaratoria de pobreza comprueba la imposibilidad de dar cumplimiento al auto que ordena el arraigo por encontrarse el Juez con una escepción establecida por la ley. Si á pesar de la declaratoria se exigiese el arraigo, los propósitos de la ley quedarían burlados. Una vez hecha la declaratoria, la única fianza exigida por la ley es la caución juratoria—art. 601 citado.

1b—Y viceversa, art. 412, Cód. de Proc.

1c—La escepción dilatoria que puede oponer el demandado según disposición del art. 84, inc. 4ª del Cód. de Proc., solo es admisible cuando el actor omite alguno de los requisitos establecidos en art. 71. Si este artículo es observado la escepción no procede.

2—Véase nota precedente.



DEF

proponerla es improcedente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 330, Ser. 2ª.

3. Defecto legal—Si el demandante espone el hecho pero no determina la acción que inicia ni aun el derecho que le ampara, la escepción de defecto legal es procedente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 384, Ser. 2ª.

4. Defecto legal—Cuando se acompaña documentos y de ellos surge el derecho que se invoca en la demanda, no hay obligación de citar la ley, y debe rechazarse la escepción de defecto legal en el modo de proponerla.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 386, Ser. 2ª.

Defecto legal—Véase: *Documentos*, nums. 4, 5 y 6.

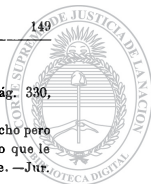
Defectos—Véase: *Derechos*, núm. 1—*Comprador*, núm. 8—*Titulos*, núms. 3, 4 y 7—*Titulos de propiedad*, núm. 2—*Titulo*, núms. 1 y 2.

1. Defectos de procedimiento—Que puedan anular el

3—El art. 71 del Cód. de Proc. prescribe la forma que debe observarse en la demanda: el inc. 5, exige que el derecho sea espuesto aunque suscitadamente, y el inc. 6, dice que debe contener la petición en términos claros y positivos. Es evidente que si no se cumple con estos requisitos, el art. 84 autoriza á exigir su cumplimiento antes de contestar la acción.

4—Decía el fallo «que la demanda llena los requisitos exigidos en el art. 71 del Cód. de Proc., porque aunque no menciona espresamente los fundamentos de derecho, esa mención no es indispensable, tratándose de un cobro fundado en documentos presentados en juicio.» Este sumario está en abierta contradicción con el testo del art. 71 citado, que establece que *en la demanda debe* esponerse suscitadamente el derecho. Los documentos que sirven de base á la demanda no son la demanda misma, y jamás en un documento puede espresarse el derecho de la parte. Los Tribunales y especialmente las Cámaras de la Capital pretenden estralimitar sus facultades constituyéndose á la vez en Poder Judicial y en Poder Legislativo, lo que es contrario á nuestro régimen político. Esta jurisprudencia sentada en el sumario será modificada á no dudarlo cuando el personal de la Cámara cambie, porque ella no obedece ni á la letra de la ley, ni á su espíritu.

1—No reclamada la nulidad en la instancia se renuncia de un modo



DEF

proceso, deben ser reclamados por el defensor en el mismo acto ó instancia en que tenga lugar.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 236, Ser. 2^a.

2. Defectos de procedimiento—La intervención del Agente Fiscal ó de cualquiera de los interesados sin observación, subsana cualquier defecto de procedimiento que por omisiones anteriores pudieron reclamarse.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 204, Ser. 2^a.

Defectos de procedimiento—Véase *Nulidad*, núm. 1.

Defensor—Véase: *Testamento*, núm. 1—*Instrumento privado*, núm. 3—*Defectos de procedimiento*, núm. 1.

1. Defensores de ausentes—No son parte en la espedi-

tácito á pedirla, y se pierde el derecho á reclamar más tarde de esas nulidades. Así lo preceptúa la Ley 10, tit. 17, lib. 4^o, R. C. al determinar, que tanto en los pleitos civiles como en los criminales, aun cuando falten algunas solemnidades que puedan considerarse sustanciales al orden de proceder en los juicios. «con tal de que sea hallada y probada la verdad del hecho por el proceso, los Jueces que conociesen en los pleitos, los resuelvan y juzguen según ella, sin que tales sentencias dejen de ser válidas por razón de las indicadas deficiencias del procedimiento, á menos que la parte interesada hubiera reclamado en tiempo oportuno la observancia de las formalidades omitidas».

2.—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase tom. 6, pág. 125, Ser. 1^o, Jur. Civ.; tom. 4, pág. 413, Ser. 1^o, Jur. Com.; tom. 4, pág. 103, Ser. 1^o, Jur. Civ.: Consideramos que tal no ha sido el espíritu de la ley: la letra no autoriza esta interpretación. El art. 240 del Cód. de Proc., exige que la nulidad sea reclamada en la misma *instancia*, no habla de notificación, ni de que el defecto quede subsanado por no reclamarse dentro de un término dado, sino que exige que sea deducido en la misma instancia. Esto es lo que corresponde resolver, porque en la práctica sería sumamente peligrosa la consagración de la doctrina del sumario. En el cúmulo de asuntos que tiene un abogado, no puede estar revisando constantemente las actuaciones á fin de no consentir nulidades. La ley ha hablado de instancia, y debemos dejar sentado que la parte tiene derecho á reclamar toda nulidad en cualquier estado del juicio siempre que sea en la misma instancia en que se ha producido.

1.—El art. 1008 del Cód. Civ. determina que la segunda copia de las escrituras á que se refiere el art. 1007, en su segunda parte, debe



DEF—DEFIL

ción de nuevos testimonios, aun cuando el vendedor ó sus herederos no se presenten al juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 409, Ser. 2ª.

Defensoría de Menores—Véase: *Jurisdicción*, núm. 2.

Deficiencias—Véase: *Remate judicial*, núm. 1—*Títulos*, núms. 1 y 2—*Títulos*, núms. 4 y 7.

Deformación—Véase: *Lesiones*, núm. 6.

Diformidad—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 10.

1a. Diformidad física—El entorpecimiento en el movimiento del miembro lesionado y la modificación en el timbre de la voz, no pueden calificarse de diformidad física.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 488, Ser. 2ª.

1. Delito—Siempre que éste se haya frustrado por causas ajenas á la voluntad del reo, se conceptúa que existe tentativa próxima.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 161, Ser. 2ª.

2. Delito—Resuelta su comisión de común acuerdo, los partícipes deben ser castigados como autores principales, sin necesidad de individualizar cuál fué el ejecutor principal.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 151, Ser. 2ª.

3. Delito—Se comete delito siempre que existe una trasgresión de la ley, independientemente de que la víctima resulte ser un tercero y no aquel contra quien se dirija el ataque.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 210, Ser. 2ª.

darse por los que han intervenido en ella, á efecto de comparar la exactitud de la copia con la matriz, siendo bastante la intervención del Oficial Público que el Juez designe, en cuyo caso el Defensor de Ausentes nada tiene que hacer. Esta ha sido la práctica constante de los Tribunales, ordenándose tan solo la publicación de edictos para comprobar la ausencia denunciada por los postulantes.

1a—No pueden calificarse de diformidad física *notable*, dice el fallo. El art. 119, inc. 3º del Cód. Pen. de 1887 actualmente vigente habla de que el ofendido quede *notablemente* deformado. ¿Qué diformidad debe considerarse como notable? Véase la obra de Rodolfo Rivarola sobre el Cód. Pen. arg., tom. 2, pág. 108, núm. 542.

2—Arts. 31, inc. 2; y 39, Cód. Pen. ant.

3—El hecho de herir á una persona que no es la designada, no





DEL

4. Delito—Para que éste exista, la ley supone la intención criminal: justificado que esta no existía porque el acusado pudo presumir que los objetos de que se apoderó eran de su propiedad, el hurto no existe.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 259, Ser. 2ª

5. Delito—Cuando existen circunstancias agravantes y atenuantes, el delito debe ser castigado con la pena que la ley fija cuando no existen circunstancias agravantes.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 121, Ser. 2ª.

6. Delito—La existencia de circunstancias agravantes y atenuantes del delito, deja librado al arbitrio del Juez la graduación de la pena, siempre que la que fija la ley sea divisible.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 433, Ser. 2ª.

7. Delito—La simple exposición del que se dice damnificado, no basta para dar por justificada la existencia del delito.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 377, Ser. 2ª.

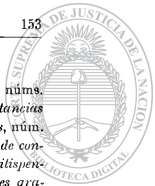
8. Delito—Si no resulta justificado en autos, debe absolverse al acusado.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 377, Ser. 2ª.

9. Delito—Si el que imputa el demandado por calumnia, no lo justifica, se hace pasible de la pena que la ley fulmina contra el calumniador.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 149, Ser. 2ª.

Delito—Véase: *Violación*, núms. 4 y 5—*Valor del robo*, núm. 1—*Daños y Perjuicios*, núm. 21—*Dolo*, núm. 2—*Reo*, núm. 1—*Calumnia*, núms. 1 y 3—*Concubina*, núm. 1—*Confabulación*, núm. 1—*Falsificación*, núms. 4 y 5—*Objetos ro-*

puede considerarse sino como cometido por culpa grave. Dicen Chauveau et Helie, no es el atentado contra una persona determinada lo que constituye el delito, sino el ataque llevado a cabo contra una persona: poco importa que la voluntad haya sido agena en la elección de la víctima: basta que sea el autor del hecho que ha producido esa víctima—Véase autor citado, tom. 4, núm. 1338.

4—Lo que caracteriza esencialmente al delito es el dolo, lo que lo constituye es la intención de defraudar: cuando se trata de la propiedad, el hurto consiste en sustraer lo ajeno con la intención de apropiárselo. De aquí resulta que no puede haber hurto de lo que se considera propio.



DEL

bados, núm. 1—*Tentativa de estafa*, núm. 1—*Estafa*, núms. 3 y 4—*Atentado á mano armada*, núm. 2—*Circunstancias atenuantes*, núms. 1, 2 y 3—*Circunstancias agravantes*, núm. 1—*Abandono*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 7—*Abuso de confianza*, núm. 1—*Excepción de provocación*, núm. 1—*Litispendencia*, núm. 3—*Imputabilidad*, núm. 1—*Presunciones graves*, núm. 3.

Delito consumado—Véase: *Tentativa próxima*, núm. 1—*Ley vigente*, núm. 1.

Delito frustrado—Véase: *Tentativa*, núm. 1.

Delito mayor—Véase: *Penas*, núm. 1.

1. **Delitos**—Tratándose de los castigados con presidio ó penitenciaria, la aplicación de la pena del primero se conceptúa el máximun que permite la ley.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 5, Ser. 2^a.

2. **Delitos**—En los castigados con prisión y multa, la jurisdicción del Juez debe fijarse por el importe de la última.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 389, Ser. 2^a.

3. **Delitos**—En los que la ley castiga con uno á tres años de prisión, la atenuación puede fijarse en la mitad, es decir, en año y medio.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 23, Ser. 2^a.

4. **Delitos**—Si bien la comisión de dos delitos permite la acumulación de las penas, si las que corresponden son de idéntica categoría, el delito menor solo puede considerarse circunstancia agravante del mayor.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 433, Ser. 2^a.

5. **Delitos**—En aquellos cuya pena es facultativa, debe aplicarse el término medio cuando no resulten circunstancias atenuantes ni agravantes.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 433 Ser. 2^a.

6. **Delitos**—La comisión de dos de la misma índole, solo

4—Arts. 85 y 195 Cód. Pen. de 1887.

6—Arts. 52, 185 y 191 del Cód. Pen. ant.



DEL—DEM

importa á los efectos de la penalidad, una agravación, cuando la ley deja al arbitrio del Juzgado la aplicación entre el máximo y el mínimun.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 104, Ser. 2ª.

7. Delitos—La comisión de dos distintos en un mismo acto, obliga á clasificar el menor como circunstancia agravante del mayor, y en consecuencia éste debe ser castigado con el máximo que la ley fija.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 200, Ser. 2ª.

Delitos—Véase: *Falsedad*, núm. 1—*Esposa*, núm. 5—*Billetes falsos de banco*, núm. 2—*Carácter público*, núm. 1—*Estafa*, núms. 1 y 2—*Escarcelación bajo fianza*, núms. 2, 6, 7 y 8—*Lesiones*, núm. 5—*Reincidencia*, núm. 2.

1. Demanda—Al que pretende la nulidad de la escritura de venta por incapacidad del vendedor, corresponde la prueba de que el comprador conocía el hecho en que funda la nulidad, y en consecuencia obra de mala fe.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 396, Ser. 2ª.

2. Demanda—Su aceptación por un Juez que no se encuentre en turno, no puede fundar una escepción de incompetencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 266, Ser. 2ª.

3. Demanda—La designación exacta del objeto es condi-

7—Art. 177, Cód. Pen. ant.

1—El *onus probandi* gravita siempre sobre el que afirma un hecho nuevo en juicio. Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

2—El turno ha sido establecido en beneficio exclusivo de los Jueces, consultando una distribución equitativa del trabajo, siendo por lo tanto facultativo en ellos el aceptarlo ó renunciarlo. En el caso presente mediaba otra circunstancia más para aceptarlo, la de que el juicio era una consecuencia de otro anterior, siendo este indispensable para la acertada resolución de aquél. Esta resolución está de acuerdo con otro caso que corre publicado en el tom. 2, pág. 170, Ser. 2ª, Jur. Civ. En contra de estas resoluciones está la que corre publicada en el tom. 2, pág. 482, Ser. 2ª, Jur. Civ., donde se estableció que el demandado ante un Juez que no es el del turno no está obligado á contestar la demanda, y se adujo como fundamento que no hay ley que lo obligue á ello.

3—Art. 71, inc. 3, Cód. de Proc.

DEM

ción esencial para que ella pueda prosperar.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 119, Ser. 2ª.

4. Demanda—No puede darse por contestada mientras no se resuelva la competencia del Juzgado.—Jur. Com., tom. 2, pág. 515, Ser. 2ª.

5. Demanda—La que no llena los requisitos exigidos por la ley debe ser rechazada de oficio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 40, Ser. 2ª.

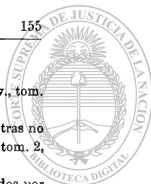
6. Demanda—Aun cuando no exista demanda en forma, siempre que las partes sometan la solución de su derecho al arbitrio judicial mediante los trámites del juicio ordinario, el Juez debe pronunciarse por ser caso contencioso y no administrativo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 79, Ser. 2ª.

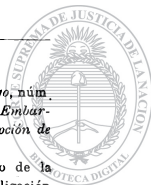
Demanda—Véase: *Mandato*, núm. 7—*Cesión*, núm. 1—*Copia*, núm. 1—*Competencia*, núms. 1, 2, 7, 9 y 11—*Documentos*, núms. 1, 2, 4, 5 y 6—*Evicción*, núms. 1 y 3—*Hechos*, núm. 1—*Escepciones*, núm. 5—*Madres*, núm. 1—*Fianza*, núm. 2—*Instrumento público*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núms. 2 y 4—*Notificaciones*, núm. 2—*Rebeldía*, núms. 2, 9, 10 y 11—*Testamentaria*, núm. 1—*Juicio*, núm. 2—*Cuestiones*, núm. 2—*Compulsa*, núm. 2—*Costas*, núm. 21—*Arbitros*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 19 y 20—*Defecto le-*

4—La demanda dada por contestada en rebeldía radicaría la causa ante el Juzgado, lo que no corresponde mientras su competencia no sea acatada por las partes ó en virtud de resolución judicial.

5—El art. 75 dice que el Juez *podrá* repeler de oficio la demanda, y haciendo uso de esa facultad el Juez la rechazó de oficio: el fallo no consagra como un *deber* del Juzgado sino como una *facultad*. Puede un Juez admitir una demanda defectuosa á fin de que la parte pida su rechazo hasta tanto se llenen los requisitos legales. En esto no falta el Juez á su deber, simplemente deja de hacer uso de una facultad que la ley le acuerda.

6. Si hay omisión de alguna formalidad prescrita por el procedimiento, ella implica una renuncia á esos trámites, renuncia que es admitida siempre que la formalidad que ha dejado de observarse no perjudique al orden publico.





DFM

gal, núms. 1, 2, 3 y 4—*Reivindicación*, núm. 6—*Pago*, núm. 3—*Término de prueba*, núm. 2—*Prueba*, núm. 25—*Embargo preventivo*, núm. 17—*Recusación*, núm. 5—*Escepción de pago*, núm. 3.

1. Demandado—Al que lo es por cumplimiento de la fianza, corresponde la prueba de la nulidad de la obligación principal.—Jur. Civ., tom. 4, pag. 287, Ser. 2°.

Demandado—Véase: *Tutor*, núm. 2—*Personería*, núm. 4—*Arraigo*, núm. 2—*Documentos*, núm. 8—*Poder*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 19 y 20—*Rebeldía*, núm. 2—*Compraventa*, núm. 1—*Ericción*, núm. 3—*Indemnización*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, núm. 5—*Mujer casada*, núm. 2—*Prueba plena*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 5—*Titulos*, núms. 6 y 8—*Acción*, núm. 4—*Costas*, núm. 3.

Demandante—Véase: *Prueba*, núm. 2—*Juicios*, núm. 2—*Acción*, núm. 4—*Documentos*, núms. 10 y 12—*Cláusula*, núm. 3—*Arraigo*, núms. 1, 3, 4, 5 y 6—*Costa juzgada*, núm. 3—*Costas*, núms. 1, 2, 4 y 18—*Declaratoria de pobreza*, núm. 1—*Defecto legal*, núm. 3—*Domicilio*, núm. 5—*Falta de personería*, núms. 1, 3, 4 y 5—*Mujer casada*, núm. 2—*Nulidad de procedimiento*, núm. 1.

1a. Demencia—La declaratoria judicial de demencia no puede tener efecto retroactivo, aun cuando se justifique que en determinadas épocas se manifestaron síntomas precursores de la enfermedad.—Jur. Civ., tom. 8, pag. 280, Ser. 2°.

Demora—Véase: *Prueba*, núm. 15.

Denuncia—Véase: *Denunciantes*, núm. 1—*Herencia vacante*, núm. 1—*Insania*, núm. 2.

1b. Denunciantes—De propiedades municipales, carecen

1a—Nuestro Código exige que el estado de demencia sea notorio y habitual. arts. 3615 y 3616 del Cód. Civ.

1b—Véase Inst., tom. 2, verb. *Denunciantes*, núms. 1 y 2, en cuyas notas está la razón de las resoluciones dictadas en numerosos casos

DEF

de personería para ejercer acciones contra el poseedor, mientras la Municipalidad no acepte la denuncia y les confiera poder en forma.—Jur. iv., tom. 6, pág. 546, Ser. 2ª.

De oficio—Véase: *Jueces*, núms. 3 y 4—*Mensura*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 3, 13 y 17—*Reivindicación*, núm. 2—*Demanda*, núm. 5—*Sentencia*, núm. 14—*Tribunal*, núm. 1—*Acción*, núm. 4.

Departamento deliberante—Véase: *Municipalidad*, número 3.

1a. Dependiente—La tacha de haber sido el testigo dependiente del que lo presenta, no es procedente si el carácter no subsiste al prestar declaración.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 66, Ser. 2ª.

2. Dependiente—El que participa de las utilidades, no puede conceptuarse socio industrial, y en consecuencia, carece de derecho para exigir la liquidación de la sociedad.—Jur. Com., tom. 1, pág. 315, Ser. 2ª.

Dependiente—Véase: *Participación*, núm. 1.

1b. Dependientes habilitados—No pueden ser obligados a intervenir en el juicio sobre liquidación de sociedad provocado por uno de los socios.—Jur. Com., tom. 1, pág. 58, Ser. 2ª.

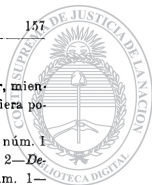
2. Dependientes habilitados—No pueden conceptuarse

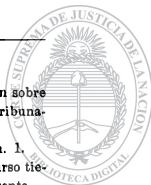
1a—La ley es terminante al respecto. El art. 206 dice: son tachas legales relativas... inc. 2ª: «ser el testigo al prestar declaración dependiente del que lo haya presentado». El que ha dejado de ser no es.

2—Arts. 362, 511 y 512 del Cód. de Com. Véase Inst., tom. 1, verb. *Dependientes*, núm. 827 y nota y verb. *Dependientes habilitados* núms. 1 y 2 de este tomo.

1b—En el caso ocurrente los habilitados habían declarado, con la conformidad de las partes, que no tenían que intervenir en el juicio, lo que importa una renuncia del derecho que pudo corresponder a la parte contraria. El sumario está equivocado. Si la renuncia del derecho no se hubiese operado, otra habrían sido la resolución. Véase Inst., tom. 1, verb. *Sociedad*, núm. 2183 y nota. En contra de esta véase verb. *Dependiente*, núm. 2 en este tomo.

2—El art. 462 del Cód. de Com. ant., establece que no tendrán re-





DEP

socios, y en consecuencia las cuestiones que se susciten sobre el monto de las utilidades son de competencia de los Tribunales ordinarios.—Jur. Com., tom. 2, pág. 314, Ser. 2ª.

Depositante—Véase: *Fianza de escarcelación*, núm. 1.

1. Depositario—El de las existencias de un concurso tiene privilegio sobre los fondos realizados por su venta.—Jur. Com., tom. 2, pág. 317, Ser. 2ª.

2. Depositario—Está obligado á rendir cuenta detallada de los fondos producidos por el depósito, y si no lo hiciera los Tribunales deben fijar equitativamente la suma dentro de la cual el que exige la rendición de cuentas debe prestar juramento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 2ª.

Depositario—Véase: *Rendición de cuentas*, núms. 4 y 5—*Terceria*, núm. 2.

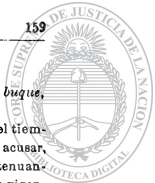
Depósito—Véase: *Posesión*, núm. 3—*Depositario*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núms. 4 y 5—*Arraigo*, núm. 6—*Declaratoria de pobreza*, núm. 1—*Giro*, núm. 1—*Terceria*, núm. 2.

6

presentación de socios, para efecto alguno del giro social, los dependientes de comercio á quienes por vía de remuneración de sus trabajos se les dé una parte en las ganancias. El art. 511 no es aplicable, porque la jurisdicción arbitral está reservada para las cuestiones entre socios, decía la Cámara en el caso presente. Consideramos que esta interpretación de la ley está equivocada y que la resolución contraria que se registra en el tom. 1 de la Inst., verb. *Sociedad*, núm. 2483, establece la verdadera doctrina. El art. 462 citado establece que no son socios á los efectos del giro social esta clase de dependientes: de donde se deduce que son socios á los demás efectos no exceptuados espresamente. Sin embargo parece que los autores españoles sostienen el principio sentado aquí por la Cámara. Nuestro artículo ha sido tomado al pié de la letra, del 269 del Cód. de Com. español de 1829; y Gomez de la Serna comentándolo dice lo siguiente: «Indiferente es que los servicios de los dependientes se recompensen con un salario, ó con una parte de ganancias, ó con una y otra cosa. Nada de esto les dá el carácter de socios.» En el Cód. de Comercio de 1885 se ha suprimido este artículo.

1—Art. 1697, Cód. de Com., y 3900, Cód. Civ.

2—Art. 220, Cód. de Proc.



DEP—DER

Depósito de aduana—Véase: *Consignación del buque*, núm. 1.

1a. Derecho de acusar—El trascurso de la mitad del tiempo que la ley exige para la prescripción del derecho de acusar, según el antiguo Código, se considera circunstancia atenuante, aun cuando la acusación tenga lugar después de la vigencia del actual.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 278, Ser. 2ª.

2. Derecho de acusar—Por el hecho en que se funda, solo puede resolverse al sentenciar; si se opone como excepción debe ser rechazada.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 147, Ser. 2ª.

Derecho de acusar—Véase: *Prescripción*, núm. 13.

Derecho de representación—Véase: *Herederos*, núms. 5 y 6—*Sobrinos-nietos*, núm. 1.

Derecho de retención—Véase: *Tenedor*, núm. 1.

Derecho propio—Véase: *Daños y Perjuicios*, núm. 10—*Juramento*, núm. 3.

Derecho reclamado—Véase: *Desistimiento*, núm. 1.

1. Derechos—Que dieron origen al otorgamiento de un título de propiedad, como derechos personales, no pueden en ningún caso fundar acciones reales, y en consecuencia el vicio que exista en la adquisición de esos derechos, no es un defecto del título á que ellos dieron origen.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 534, Ser. 2ª.

Derechos—Véase: *Abogado*, núm. 1—*Heredero*, núm. 6.

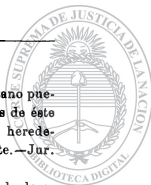
Derechos y acciones—Véase: *Embargo*, núm. 5.

Derechos civiles—Véase: *Partidas parroquiales*, núm. 1.

Derechos en expectativa—Véase: *Subrogación*, núm. 1.

1a—Art 83, inc. 9 del Cód. Pen. de 1887.

2—Una excepción que se opone diciendo de improcedencia de la acción, no puede sustanciarse previamente, sino al pronunciarse sobre la procedencia de la acción en definitiva. Las defensas ó excepciones que hacen al fondo, jamás son dilatorias y solo pueden ser resueltas con lo principal, á excepción de las espresamente excluidas por la ley.



DER

1a. Derechos eventuales—El curador de un insano puede enagenar á título oneroso los derechos eventuales de éste por el mismo precio y condiciones que lo hagan los herederos mayores, depositando judicialmente su importe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 2ª.

1b. Derechos hereditarios—El reconocimiento de derechos hereditarios por un heredero reconocido, no es válido respecto á terceros que pueden exigir la justificación del ca-

1a—Con autorización judicial se entiende. La venta pública de los bienes de los incapaces, es de principio general, pero hay casos especiales en que los jueces pueden autorizar la venta privada—arts. 442 y 443, inc. 5ª, Cód. Civ.—Debe por otra parte tenerse presente que aquí no se trata de bienes muebles ó inmuebles, sino de simples derechos eventuales.

1b—Se trata de la sucesión de un cónyuge casado en terceras nupcias: la última esposa es declarada heredera y ésta á su vez reconoce á los hijos del segundo y primer matrimonio. Se dice que este reconocimiento no basta en el caso presente; porque si bien es cierto que á falta de asientos públicos nuestro derecho admite para la comprobación del carácter hereditario, otros medios de prueba—art. 85, Cód. Civ.—á la vez que la práctica de nuestros Tribunales ha admitido también como suficiente á demostrar ese carácter, el reconocimiento personal de los demás herederos declarados ó reconocidos en juicio. Sin embargo, no debe olvidarse que esta práctica consagra una escepción y como tal no sería correcto aplicarlo de una manera constante, convirtiendo la escepción en regla general, sino que debe aplicarse á cada caso que se presente, teniendo en cuenta las circunstancias del juicio sucesorio y siempre que se hiciese incontestable su legitimidad ó procedencia. Parece que en el caso no procede el reconocimiento, pues la esposa es la tercera del causante y los hijos reconocidos son los habidos en el primero y segundo matrimonio, uno de cuyos hijos había fallecido dejando descendientes y hallándose ausentes del lugar del juicio, otros: no constaba tampoco la fecha ni el lugar donde se celebraron esas nupcias, ni la del nacimiento de los hijos. Es de advertirse que en el caso que nos ocupa no se dijo que hubiese habido dificultad alguna para obtener las partidas de bautismo ó defunción de los esposos y solo se alegó como causal el deseo de evitar gastos y pérdida de tiempo, causales insuficientes. Se esplican los reconocimientos hechos por los hijos legítimos del causante, después de haber por su parte comprobado su título con arreglo á derecho.

DER-DES

rácter en cuanto sea posible, con arreglo á la ley, á fin de deslindar los derechos que puedan afectar sus intereses.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 117, Ser. 2ª.

2. Derechos hereditarios—La facultad de vender todos los bienes de una herencia ó las acciones ó derechos hereditarios sin limitación alguna, antes ó después de haberla recibido, implica la facultad de cederla á título oneroso.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 456, Ser. 2ª.

Derechos personales—Véase: *Derechos*, núm. 1—*Fallido*, núm. 4.

1a. Derechos posesorios—La venta de los derechos posesorios de una testamentaria, puede ser autorizada por el Juzgado sin previa tasación y privadamente, aun cuando existan menores interesados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 171, Ser. 2ª.

Derechos posesorios—Véase: *Declaratoria*, núm. 1.

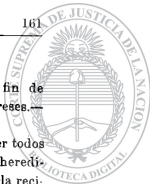
Derechos reales—Véase: *Acción*, núm. 1.

1b. Desacato—A la autoridad, con uso de armas y circunstancias atenuantes, debe ser penado con dos años de prisión; el desacato simple con uno.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 350, Ser. 2ª.

2—La venta de los bienes de una herencia ó de las acciones y derechos equivale á la cesión á título oneroso. El art. 1887 del Cód. Civ. resuelve el caso con toda precisión.

1a—Debe tenerse presente que se trata de bienes de menores que están bajo la patria potestad y no sometidos á tutela, en cuyo caso no es aplicable el art. 442 del Código Civil, sino el 297. Y aunque tal no fuese el caso, siempre debe tenerse en cuenta que la tasación previa no sería procedente ni quizá posible, porque no se trata de establecer el valor común ó intrínseco de la propiedad con arreglo al precio corriente é independientemente de toda otra circunstancia, sino de la avaluación de derechos posesorios de un inmueble sin título, cuyo valor aumentará ó disminuirá según sean mayores ó menores las dificultades que se presenten para la formación del título.

1b—Arts. 99 y 235, Cód. Pen. de 1887.





DES

2. Desacato—El hecho de sacar armas contra la autoridad, importa un desacato aun cuando por causas ajenas a la voluntad del reo no pueda hacer uso de ellas.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 204, Ser. 2ª.

Desacato—Véase: *Lesiones leves*, núm. 1.

1a. Desafío irregular—La aceptación de un desafío irregular hace improcedente la legítima defensa alegada por el reo.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 583, Ser. 2ª.

1b. Desalojo—Siempre que se solicite antes de vencido el término de la locación, aun cuando se declare procedente, no debe condenarse en costas al locatario cuya temeridad no resulte justificada de autos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 114, Ser. 2ª.

Desalojo—Véase: *Alquileres*, núm. 1.

1c. Desaparición—De documentos que formaban parte de un expediente, y que se tuvieron en vista al dictar resolu-

2—Arts. 234 y 235 del Cód. Pen. de 1887.

1a - No hay legítima defensa, pero hay provocación, en cuyo caso debe aplicarse la pena de tres años de prisión.—Art. 97 del Código Pen. de 1887.

1b—Se trata del caso siguiente: celebrado un contrato de locación por tiempo determinado, el locador solicitó el lanzamiento horas antes de vencerse el término de la locación. El desalojo se ordena y el demandado es condenado en las costas del juicio. Parece indudable que la imposición de las costas no procede, pues la demanda que fué instaurada con fecha 10 fué solucionada el 23 del mismo sin que fuese obstaculizada en lo mínimo por el demandado. Si bien es cierto, que cuando la locación es contratada por tiempo determinado, el locatario debe restituir la cosa acabada ese tiempo—Arts. 1604 y 1607, Cód. Civ.—Sin embargo no debe juzgarse como temerario el proceder de un locatario por el mero hecho de no entregar el mismo día la cosa locada, pues la misma ley adjetiva, previendo dificultades posibles, concede a los jueces la facultad para otorgar un nuevo plazo para el lanzamiento.—Art. 589, Cód. de Proc.

1c—La validez del acto no depende ni puede depender de que se conserven en los expedientes los documentos que han servido de base para dictarse.

DES-DET

ción, no altera la validez de ésta.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 534, Ser. 2ª.

Desconocimiento de paternidad—Véase: *Juicio*, núm. 1.

Descargo—Véase: *Recibo*, núm. 1.

Desfloración—Véase: *Violación*, núm. 1.

Desgloce—Véase: *Documentos*, núm. 9—*Testamento ológrafo*, núm. 4.

1. Desistimiento—De la acción, por haberse reconocido el derecho reclamado, no trae aparejada la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 401, Ser. 2ª.

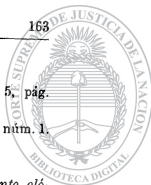
Desistimiento—Véase: *Auto*, núm. 1—*Comprador*, núms. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9—*Diferencia*, núm. 1—*Vicios*, núm. 1—*Incidentes*, núm. 1.

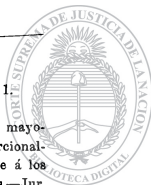
Deslinde—Véase: *Acción*, núm. 1.

Destierro perpetuo—Véase: *Acusador*, núm. 2.

Detalle—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 3.

1—Entablada una demanda sobre interdicto de obra nueva contra una persona, resultó que el demandado no era dueño de la obra. Reconociendo el actor su error, desiste de la acción instaurada: se dice por la Cámara que la imposición de las costas no procede, porque habiendo manifestado el actor que las causas de la acción habían desaparecido, no tenía el Juzgado sobre qué pronunciarse y debía archivar el expediente: que tal petición no importa su desistimiento voluntario de la acción, como que el actor no abandona su derecho sino que solo pone en conocimiento del Juzgado un hecho posterior á la iniciación del juicio, que dándole razón, hace innecesaria su prosecución por haber desaparecido la causa que lo motivó. Parece duro para la parte que ha sido molestada indebidamente tener que pagar las costas de una defensa á que se le ha obligado con toda temeridad, pues se le ha imputado un hecho que la misma parte que se lo imputó reconoce no ser exacto. Si el actor consideró que la persona era aquella y se equivocó en su designación pague las consecuencias de ese error, pero no se le obligue á una parte que se ha visto obligada á hacer gastos originados por ese error á pagarlos de su peculio. Si la Cámara sigue en este camino, concluirá por derogar por completo la disposición del art. 221 del Cód. de Proc., ó por lo menos hará de la excepción la regla general y viceversa.





DET—DEU

Detención—Véase: *Consignatario del buque*, núm. 1.

Detentador—Véase: *Dominio*, núm. 1.

1a. Deuda—Su reconocimiento por los herederos mayores, hace procedente el pago en la parte que proporcionalmente les corresponda, sin que su confesión obligue á los menores, mientras no sea justificada por otros medios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 288, Ser. 2ª.

Deuda—Véase: *Intereses*, núms. 2, 3 y 4.

Deuda civil—Véase: *Alquiler*, núms. 1 y 2.

1b. Deuda impaga—Para que pueda servir de base á la efectiva cesación de pagos, debe revestir carácter comercial: la deuda por alquileres no lo tiene.—Jur. Com., tom. 1, pág. 305, Ser. 2ª.

Deuda impaga—Véase: *Fecha*, núm. 1.

Deudas—Véase: *Acción Pauliana*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 10—*Comerciante*, núm. 2.

Deudas de terceros—Véase: *Pago*, núm. 2.

1c. Deudor—Que en juicio ejecutivo fuese condenado al

1a.—La simple conformidad de los herederos mayores en pagar un crédito adeudado por una sucesión en que hay menores interesados, no basta, porque esa confesión no puede perjudicar los derechos de menores, pues éstos constituyen, en el juicio, una personalidad distinta de la de sus coherederos, y sus intereses son diferentes. Sin embargo, la declaración ó confesión de los herederos mayores pueden constituir el principio de prueba exigido por la ley para hacer admisible la prueba testimonial cualquier que sea el valor de la deuda. Así lo tiene resuelto la Cámara: Véase Inst., tom. 2, verb. *Prueba testimonial*, núm. 3 y nota.

1b.—El art. 1511 del Cód. de Com. int., exige el carácter de comercialidad de la obligación.

1c.—La obligación fué contraída á moneda nacional oro, en cuyo caso debe ser solventada en la forma dispuesta en el texto expreso del art. 3º de la ley de 1885, que dispone que las obligaciones anteriores contraídas á moneda nacional oro pueden ser canceladas en billetes de curso legal por su valor escrito, exceptuando aquellas que hubiesen sido contraídas con designación de una moneda especial, ó sea con la expresión de oro sellado, las que pueden ser abo-

**DEU—DIF**

pago en oro ó su equivalente en billetes, tiene derecho de repetición en juicio ordinario.—Jur. Com., tom. 2, pág. 433, Ser. 2ª.

2. Deudor—Es responsable de los intereses hasta la fecha en que el acreedor pueda disponer del capital, aun cuando con anterioridad lo haya depositado en el Banco Nacional.—Jur. Com., tom. 2, pág. 216, Ser. 2ª.

Deudor—Véase: *Conforme*, núm. 1—*Juramento estimatorio*, núm. 1—*Obligación*, núm. 2—*Pagaré endosado*, núm. 1—*Pago*, núm. 2—*Fiador*, núms. 2, 3 y 3bis.

Deudor cedido—Véase: *Cesión*, núm. 1

Deudor común—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 1.

Deudor liberado—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 2—*Doble ejemplar*, núm. 1.

Deudores solidarios—Véase: *Acreedor*, núm. 6—*Ejecutante*, núm. 1.

Devolución—Véase: *Fiador*, núm. 2.

Días—Véase: *Términos judiciales*, núm. 2.

1a. Dictamen—De peritos, forma plena prueba sobre los hechos, siempre que se requieran conocimientos especiales.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 549, Ser. 2ª.

1b. Diferencia—Entre el área fijada en los títulos y la que realmente tenga el inmueble, concede al comprador el de-

nadas en billetes, pero por su valor corriente en plaza el día del vencimiento de la obligación. De aquí surge el derecho de repetición de un deudor que ha solventado en oro sellado una obligación que pudo cancelar en papel por su valor escrito.

1a—Siempre que tuviesen título y sus conclusiones fuesen terminantemente asertivas, tienen fuerza de prueba legal—art. 178, Cód. de Proc.—Véase: *Inst.*, tom. 1, verb. *Peritos*, núm. 1993; *Peritos competentes*, núm. 1997; *Prueba plena*, núm. 2246; tom. 2, verb. *Peritos*, núms. 1, 3 y 4; *Prueba*, núm. 10 y nota.

1b—Este sumario está completamente equivocando: tal cosa jamás resolvió la Cámara. Esta no hizo lugar á la objeción de los títulos cuya deficiencia se hacia consistir en que el área actual de un te-

DIF—DIL

recho de pedir la subsanación del error, pero no el desistimiento de la compra.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 555, Ser. 2ª.

1a. Diferencias—El corredor que las abona, tiene derecho á exigir de su comitente su reembolso—Jur. Com., tom. 4, pág. 342, Ser. 2ª.

Diferencias—Véase: *Título*, núm. 2—*Agente de Bolsa*, núm. 1—*Operaciones de bolsa*, núms. 1, 2 y 3.

Dilatoria—Véase: *Excepción de falta de personería*, núms. 1 y 2—*Falta de personería*, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6—*Prueba*, núm. 1.

Dilatorias—Véase: *Excepciones perentorias*, núm. 1.

Diligencia—Véase: *Omisión*, núm. 1.

Diligenciamiento—Véase: *Exhortos*, núms. 1 y 2.

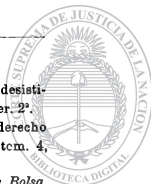
Diligencias—Véase: *Prueba*, núms. 9 y 10—*Notificación personal*, núm. 1—*Exhortos*, núm. 3.

1b. Diligencias de prueba—No practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no deben ser agregadas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 453, Ser. 2ª.

rreno vendido no coincidía con el área que le designaban los títulos, y no determinándose con claridad y precisión el área de un terreno, no se puede asegurar que él y no otro sea real y efectivamente el terreno. Esta objeción no se hizo al instaurar la demanda, y por consiguiente, no pudo ser materia de resolución. Si la objeción hubiese sido hecha en tiempo habría tenido que ser resuelta de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1343 del Cód. Civ., que dista mucho de ser lo que el sumario establece.

1a—Se trata de las diferencias ocasionadas por operaciones en metálico. La defensa consideró que esas operaciones constituyen contrato de juego. El art. 2061 del Cód. Civ. en que se fundó la defensa para denegar acción judicial por causa de juego, debe interpretarse por el art. 2055 por cuanto es éste el que define el contrato de juego. En las operaciones de bolsa no concurren esos requisitos como lo ha demostrado ya en otra ocasión esta misma Cámara. Véase Inst., tom. 2, verb. *Corredor de Bolsa*, núm. 1; donde se resolvió un caso exactamente igual al presente, fallo que sentó jurisprudencia.

1b—Según disposición del art. 118 del Cód. de Proc., las diligencias de prueba deben ser pedidas, {ordenadas y practicadas dentro del



DIL

2. Diligencias de prueba.—Corresponde á la parte urgir para que sean practicadas dentro del término.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 109, Ser. 2ª.

3. Diligencias de prueba.—Cuando de autos resulta la imposibilidad de practicar las diligencias antes del término, el Juzgado no debe ordenarlas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 597, Ser. 2ª.

4. Diligencias de prueba.—Las no practicadas dentro del término por incuria del que las pide, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 480, Ser. 2ª.

5. Diligencias de prueba.—Las providencias que las niegan causan gravamen irreparable y en consecuencia son apelables.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 427, Ser. 2ª.

6. Diligencias de prueba.—Pedidas y no practicadas antes del término por hechos no imputables á las partes, deben serlo aún después de vencido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 383, Ser. 2ª.

término: solo se admite una escepción, y es cuando no fueren *practicadas* dentro del término por omisión de las autoridades encargadas de diligenciarlas. Si por negligencia de la parte no se cumplen en la oportunidad debida, las pruebas no pueden ser agregadas. Todas las resoluciones están de acuerdo con ésta. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 690.

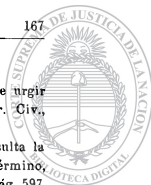
2—A los interesados corresponde urgir para que sean practicadas oportunamente, dice el art. 118 del Cód. de Proc.

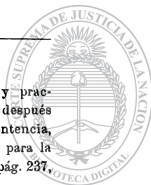
3—Si no es posible producir la prueba dentro del término, ya no puede ser agregada, porque el art. 118 del Cód. de Proc. exige que la prueba sea pedida, ordenada y *practicada* dentro del término. Si la prueba no puede ser agregada sería inútil ordenarla, siendo deber de los Jueces no ordenar diligencias inútiles.

4—Véase nota 1ª.

5—La jurisprudencia es constante á este respecto. Véase Inst., tom. 2, verb. *Apelable*, núm. 1; *Auto*, núm. 13.

6—El art. 118 del Cód. de Proc. así lo establece en su última parte cuando dice: «pero si no lo fuesen por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos.» Es jurisprudencia constante en nuestros Tribunales.





DIL

7. Diligencias de prueba.—Pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término, deben ser agregadas aún después de vencido, y tomadas en consideración en la sentencia, siempre que el Juzgado las conceptúe necesarias para la recta administración de justicia.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

8. Diligencias de prueba.—La notificación de la providencia en que se han ordenado diligencias de prueba en el extranjero, es bastante citación para la intervención de la

7—En el caso presente se alegó que la prueba se produjo sin citación de parte, lo que no era exacto, pero la Cámara dijo, que aún siéndolo, ella estaba autorizada a hacerla presentar para mejor proveer, porque su oficio dura hasta la sentencia y puede pedir para su acertada resolución cuanto prueba le sea legalmente permitida: aquí se trataba de prueba escrita resultante de instrumentos públicos. A este respecto hay ya jurisprudencia formada. Véase Inst., tom. 2, verb. *Documento*, núm. 1; *Prueba*, núms. 2225 y 2232, tom. 1ª. Parece que el fallo que corre en el tom. 2 de la Inst., verb. *Prueba*, núm. 26, estuviese en contra de lo espuesto, pero es que allí el Juez no tuvo en cuenta que podía hacer uso de la facultad conferida por la ley de tomar en consideración la prueba, con carácter de para mejor proveer.

8—Este sumario no se adapta en manera alguna á la resolución que corresponde. Se dijo que la falta de citación de la parte contraria para la producción de la prueba, alegada por esta parte era una causal que invalidaba la prueba producida. De autos resultó falsa tal afirmación, y por consiguiente, el argumento fallaba por su base. La parte alegaba que para que la prueba pueda producirse fuera del asiento del Juzgado, debe la contraparte ser citada dos veces; la primera ante el Juez exhortante al ordenar la prueba, y la segunda ante el exhortado al diligenciarla. Para que la citación ante este último fuese posible sería necesario que la parte constituyese domicilio legal á los efectos de la producción de la prueba, allí donde debe diligenciarse á los efectos de ese diligenciamiento, pues únicamente así sería posible esa citación. Si llenado este requisito la contraparte no fuese citada, la diligencia probatoria sería de ningún valor. Así opinó también la Cámara, según resulta del espíritu de su fallo cuando dice: «No consta en efecto la citación contraria para sacar la copia; pero esta observación que tendría fuerza, tratándose de persona extraña á los libros, carece de ella tratándose de los sucesores de la parte.»

DIL

contraparte sin que pueda alegarse nulidad por no haberle dado intervención los Tribunales exhortados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

9. Diligencias de prueba.—Pedidas y ordenadas dentro del término, deben ser practicadas aún después de vencido, si la demora no fuese imputable á la parte que las solicitó.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 468, Ser. 2ª.

10. Diligencias de prueba.—Si el retardo en la producción de las pedidas es imputable á la parte, no pueden llevarse á cabo después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 38, Ser. 2ª.

11. Diligencias de prueba.—La agregación de diligencias de prueba, después de presentados los alegatos, no basta para alegar nuevamente. — Jur. Civ., tom. 8, pág. 498, Ser. 2ª.

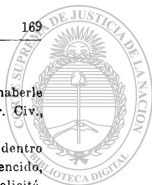
12. Diligencias de prueba.—Siempre que á juicio del tribunal la parte ha urgido las diligencias de prueba decre-

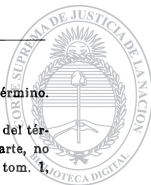
9—Art. 118, Cód. de Proc. *in fine*.

10—El art. 118 del Cód. de Proc. establece que las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y *practicadas* dentro del término, debiendo la parte urgir para que este precepto legal se cumpla. Si es omisa en su diligenciamiento, la culpa es suya tan solo y debe sufrir sus consecuencias.

11—El art. 213 del Cód. de Proc., solo autoriza á alegar una vez: «entregará los autos con el fin de que presenten las partes *un escrito* alegando sobre el mérito de la prueba producida.» Igual doctrina se desprende de lo ordenado en el art. 118 cuando dice que, si las pruebas no pudiesen producirse en el término prescripto por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, *podrán los interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos*. Si no lo exigen, pierden el derecho de alegar sobre su mérito una vez que hubiesen alegado sobre las ya producidas.

12—El Jnez de 1ª Instancia consideró que la parte no había urgido, como era de su deber, la producción de la prueba; apelado el auto, fué revocado por la Cámara, pues según su criterio la no producción de la prueba fué solo imputable á las autoridades encargadas de su diligenciamiento.





DIL

tadas, deben practicarse aún después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 484, Ser. 2ª.

13. Diligencias de prueba.—Que pedidas dentro del término, no hayan sido evacuadas por desidia de la parte, no pueden reiterarse después de vencido.—Jur. Com., tom. 1, pág. 18, Ser. 2ª.

14. Diligencias de prueba.—Solo al dictar sentencia los Jueces pueden pronunciarse sobre la procedencia ó improcedencia de las mismas.—Jur. Com., tom. 1, pág. 500, Ser. 2ª

15. Diligencias de prueba.—Las no practicadas dentro del término por desidia de la parte que las solicitó, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Com., tom. 3, pág. 284, Ser. 2ª.

Diligencias de prueba.—Véase: *Nulidad*, núm. 11—*Testigos*, núms. 4 y 5—*Acción deducida*, núm. 8—*Autos*, núm. 1—*Término extraordinario*, núm. 5—*Prueba*, núm. 10.

13— Véase núm. 10 y su nota.

14—Llegada esa oportunidad, si la prueba producida es improcedente por recaer sobre hechos que no han sido articulados por las partes en la litiscontestación, serán irremisiblemente rechazadas al dictar sentencia—art. 108, inc. 2ª, Cód. de Proc.—Esta ha sido la jurisprudencia constante de nuestros tribunales, como puede verse en el tom. 1, pág. 554, Ser. 1ª; tom. 2, págs. 510 y 534, Ser. 2ª; tom 1, pág. 380, Ser. 2ª; tom. 8, pág. 28, Ser. 2ª; tom. 9, pág. 234, Ser. 2ª; tom. 1, pág. 377, Ser. 4ª; tom. 6, pág. 394, Ser. 2ª; todos de la jurisprudencia Civ. Véase Inst., tom. 1ª, verb. *Prueba*, núm. 2220; *Improcedentes*, núm. 1381. A pesar de toda la jurisprudencia citada, la Cámara de lo Comercial y Criminal resolvió lo contrario en un juicio seguido por Ojeda con «El Nacional,» el caso fué resuelto por la Cámara constituida en tribunal de interlocutorias, formado por los Dres. Ortiz, Jofre y Bunge que no ha sido publicado hasta la fecha, quizás convencidos de lo enorme de la injusticia causada. Esa resolución es un lunar en nuestra jurisprudencia y mucho más si se tiene en cuenta que la prueba ofrecida era perfectamente pertinente. No se trataba de un caso en que la prueba era abiertamente impertinente en cuyo caso puede el Juez de oficio oponerse à su producción como lo tiene resuelto en un caso la Cámara de lo Civil. Véase verb. *Prueba*, núm. 10.

15—Véase el núm. 10.

DIL-DIS

Diligencias judiciales—Véase: *Exhortos*, núms. 1 y 2.

Dinero depositado—Véase: *Fianza de escarcelación*, núm. 1.

1a. Dinero efectivo—Siendo éste el primer bien sobre que puede recaer el embargo, su aceptación por el Juzgado sin la conformidad del acreedor, no puede fundar la nulidad del juicio. - Jur. Civ., tom. 6, pág. 345, Sér. 2ª.

Dinero efectivo—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 3—*Menores*, núms. 2 y 3.

Directores de establecimientos públicos—Véase: *Declaraciones*, núm. 9.

Discernimiento—Véase: *Curador*, núm. 2.

Disconformidad—Véase: *Honorarios*, núm. 9.

1b. Discusión—Entre el reo y la víctima desarmada, justifica que precedió una riña, pero no la provocación que admite la ley como circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 547, Ser. 2ª.

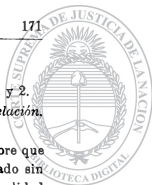
Discusión provocada—Véase: *Furor*, núm. 1.

Disminución—Véase: *Adjudicación*, núm. 2.

Disolución—Véase: *Fallecimiento*, núm. 1.

1a.—Se alegó por la parte recurrente haberse violado la regla establecida en el art. 478 del Cód. de Proc., por cuanto se trabó embargo en bienes ofrecidos por el deudor y aceptados por el ejecutante: pero resultó que según las constancias de autos, el ejecutado depositó, en época oportuna, á la orden del Juez de la ejecución y á las resultas del juicio, la cantidad reclamada ejecutivamente. Si se tiene en cuenta que el artículo citado, al enumerar los bienes sobre que puede recaer el embargo, empieza designando el dinero efectivo, no hay necesidad de recabar la conformidad del ejecutante y mucho menos si se considera que el orden establecido en el art. 478 lo ha sido en favor del acreedor, pero solo para el caso en que al diligenciarse el mandamiento no se haya verificado el depósito por el deudor.

1b.—Y en consecuencia debe calificarse de homicidio simple.





DIS

1a. Disolución de sociedad.—No libera á los socios de las obligaciones contraídas á favor de un tercero.—Jur. Com., tom. 2, pág. 310, Ser. 2ª.

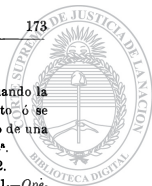
2. Disolución de sociedad.—Deducida esta acción, cualquier de los socios que pretenda deducir la misma, debe recurrir al Juez que entienda en la primera.—Jur. Com., tom. 2, pág. 312, Ser. 2ª.

1b. Disposición.—La que anula todo contrato bilateral constituido en instrumento privado del cual no se hubiesen formado tantos ejemplares cuantas hubieren sido las partes

1a.—Porque según lo dispone el art. 434, última parte del Cód. de Com. ant., en caso de disolución social por las causas expresadas en este artículo, la sociedad debe continuar al solo efecto de finalizar los negocios pendientes, procediéndose á la liquidación de los no finalizados. Las obligaciones contraídas por la sociedad á favor de un tercero son negocios pendientes que deben finalizarse á pesar de la disolución social.

2.—Hay litispendencia porque se trata de un juicio seguido entre las mismas personas, sobre la misma cosa y por la misma causa.

1b.—El art. 1021 del Cód. Civ. dispone, que los actos bajo forma privada que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales cuantas partes haya con un interés distinto: el 1023 establece que el defecto de redacción de diversos ejemplares en los contratos perfectamente bilaterales, *no anula las convenciones contenidas en ellos, si por otras pruebas se demuestra, que el acto fué concluido de una manera definitiva*: de aquí resulta que se puede afirmar que la falta de doble ejemplar no anula la convención. El art. 1021 citado no tiene más alcance que el dejar sentado, que el ejemplar único, en los actos sinalagmáticos no es prueba eficaz del acto celebrado, pero que esa falta de prueba puede ser suplida por otros medios que comprueben que el acto fué concluido de una manera definitiva, al sentar esta doctrina en el art. 1023, el codificador cita á Marcadé y Zachariæ. Veamos lo que dicen estos autores: Marcadé al estudiar el art. 1325 del Cód. Civ. francés, análogo al nuestro, dice: «La falta de mención de dobles ejemplares, ó de la redacción misma de estos dobles, no es hoy día más que una cuestión de prueba, fuera de la cual la convención será siempre válida, si ella se prueba de otra manera. Así, cuando la parte contra la cual se demanda la ejecución, se funda para re-



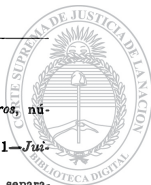
DIS

obligadas con un interés distinto, no es aplicable cuando la parte demandada confiese la existencia del contrato ó se justifique por otros medios que el acto fué concluido de una manera definitiva.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 293, Ser. 2ª.

Disposiciones concordantes—Véase: *Ley*, núm. 2.

Disposiciones prohibitivas—Véase: *Juego*, núm. 1.—*Opéraciones de bolsa*, núms. 1, 2 y 3.

chazarla, ó en que no se han mencionado los dobles ejemplares, ó en que no se han redactado dobles, ó redactado ningún escrito, pero reconociendo que la convención se ha celebrado, esta convención, así establecida por la misma confesión de la parte, producirá plenamente el efecto que de otro modo se le negaría.»—Tom. 5, com. al art. 1325, explicación del Cód. Nap. Zachariæ se expresa así: «Es necesario no confundir el acto mismo con lo que éste contiene. Así, aun cuando el acto ó actos redactados sobre una convención sinalagmática no tuvieran fuerza probatoria—refiriéndose siempre á la falta de doble ejemplar—no se seguiría de aquí necesariamente, que la misma convención deba ser considerada como no celebrada. El juramento, por ejemplo, en este caso puede ser deferido á la parte adversa para establecer la convención. Ella puede ser igualmente probada, ó por la confesión de la parte, ó por presunciones.»—Tom. 3º, párrafo 390, Derecho Civil. Massé y Vergé dicen sobre este punto lo siguiente: «Es cierto que aun cuando el escrito que contiene una convención sinalagmática sea nulo, ó más bien, desvirtuado de fuerza probatoria, cuando no ha sido hecho en tantos originales, cuantas partes hayan con un interés distinto, la convención no queda sin efecto, si ella puede ser probada legalmente de otra manera. El juramento puede ser deferido á la parte que rehusa reconocer la existencia de la convención á que se refiere el acto no hecho doble. Esa convención puede ser igualmente probada por la confesión de la parte. En fin, la prueba puede aun resultar de la correspondencia de los contratantes.» De aquí resulta, pues, que á pesar de que un documento carezca de fuerza probatoria por no haber sido redactado en doble ejemplar, la convención en él establecida subsistirá desde que se pruebe por cualquiera de los medios establecidos, que ella ha quedado definitivamente concluida, pues las partes se pusieron de acuerdo sobre una declaración de voluntad comun.—Art. 1137, Cód. Civ.—Y manifestaron recíprocamente su consentimiento—Art. 1140.—De acuerdo con esta resolución. Véase Inst., tom. 1º, verb. *Contrato bilateral*, núm. 543, y tom. 2º, verb. *Contrato bilateral*, núm. 1, parece estar en contra.



DIV

Divisible—Véase: *Dolo*, núm. 2.

División—Véase: *Escepciones*, núm. 2 — *Herederos*, número 2.

Divorcio—Véase: *Cónyuges*, núm. 1—*Hijos*, núm. 1—*Juicio sumario*, núm. 1—*Sentencia*, núms. 7, 8 y 9.

1. **Divorcio** — Iniciada la acción, procede la separación personal de los esposos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 443, Ser. 2.

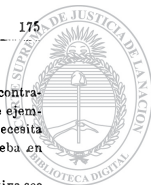
2. **Divorcio**—El Juez de lo Civil es el único competente para conocer de las cuestiones sobre tenencia de los hijos después de iniciada la acción de divorcio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 491, Ser. 2^a.

3. **Divorcio**—Deducida esta acción, el Juzgado puede fijar cuál de los esposos debe tener en su poder los hijos, sin que esto importe resolver cuál debe tenerlos después de decretada la disolución.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 2^a.

1—El divorcio se dedujo con posterioridad á la petición del marido en que solicitaba que la esposa fuese traída á su domicilio por la fuerza pública—Art. 187, Cód. Civ.—El Juez ordenó que volviera al domicilio conyugal bajo apercibimiento de ser llevada por la fuerza pública, pues no se había tampoco decretado la separación personal de los esposos. La Cámara revocó el auto, fundándose en que la acción de divorcio había sido ya deducida. Parece que esta doctrina está establecida en el art. 208 del Cód. Civ. La ley vigente autoriza á la mujer á pedir ser depositada en casa honesta.

2—Art. 202 del Cód. Civ., que fué reformado en esta parte por la ley del Matrimonio Civil; art. 73 de la ley núm. 2393 de 12 de Noviembre de 1888; art. 1388, inc. 2^a del proyecto de Freitas; 81, inc. 3^a, Proyecto de Goyena; art. 87 de la ley de Matrimonio Civil, de España; art. 267 del Cód. Civ. francés; Dalloz verb. *Séparation par corps et Divorce*, párrafo 1^o; de la Garde des Enfants, núm. 22; Laurent Principes de Droit Civil, tom. 2, pág. 295; Inst., tom. 1^o verb. *Hijos*, núm. 1327; tom. 2, verb. *Hijos*, núms. 1, 2 y 3; *Esposos*, núms. 1 y 2.

3—Porque la primera resolución tiene siempre un carácter breve y provisorio, y no causa instancia.



DOB

1a. Doble ejemplar—Cuando el documento, como contrato perfectamente bilateral, debía ser redactado en doble ejemplar, el deudor liberado que afirme su existencia, no necesita justificarla, la ley la supone mientras no exista prueba en contra.—Jur. Com., tom. 4º, pág. 548, Ser. 2ª.

1b. Documento—Cuando el que tenga fuerza ejecutiva sea por valor indeterminado, el Juzgado al dictar auto de solvendo, debe fijar la cantidad por la cual se librará mandamiento.—Jur. Com., tom. 1, pág. 236, Ser. 2ª.

2. Documento—La entrega al deudor del documento en que constaba la obligación, hace presumir su pago, salvo prueba en contrario que corresponde al acreedor.—Jur. Com., tom. 1, pág. 139, Ser. 2ª.

3. Documento—No puede darse por reconocido ni rechazado el documento en la segunda citación, siempre que el interesado hubiese concurrido á la primera.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 309, Ser. 2ª.

Documento—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 2—*Autenticidad*, núm. 1—*Doble ejemplar*, núm. 1—*Protesta*, núm. 1—*Falta de Personería*, núm. 8—*Juramento estimatorio*, núm. 1—*Conforme*, núm. 2—*Falsedad*, núms. 2 y 3—*Cesación de pagos*, núm. 2—*Escepciones dilatorias*, núm. 3.

Documento ejecutable—Véase: *Competencia*, núm. 1.

1a—Véase, verb. *Contrato bilateral*, núm. 2.

1b—Cuando cualquier antecedente de la causa modifica en parte el contenido de un documento que sirve de base á la ejecución, esa modificación no destruye la fuerza ejecutiva que le atribuye el art. 465, inc. 6º del Cód. de Proc.

2—Art. 973, Cód. de Com. ant.

3—Según se desprende del contexto de todo el art. 146 del Cód. de Proc., la sanción que este artículo establece en su segunda parte solo tiene lugar cuando aquel contra quien ella se aplica no ha comparecido ni en la primera ni segunda citación. Compareciendo á la primera no puede darse por reconocido el documento cuando no comparece á la segunda.



DOC

Documento ejecutivo—Véase: *Fiador*, núms. 2 y 3.

Documento falsificado—Véase: *Estafa*, núm. 4.

1a.—Documento privado—El tercer contratante con el mandatario instituido en documento privado, firmado á ruego, puede justificar la autenticidad del mandato por medio de prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 88, Ser. 2ª.

2. Documento privado—La prueba de las modificaciones sufridas por un documento privado después de firmado, corresponde al que alega la modificación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 506, Ser. 2ª.

3. Documento privado—Su reconocimiento importa el de las obligaciones en él contenidas.—Jur. Civ., tom. 8, página 506, Ser. 2ª.

4. Documento privado—Emanado del cedente, tiene fecha cierta contra el cesionario como si personalmente lo hubiese suscrito, aun cuando tenga fecha anterior á la cesión.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 174, Ser. 2ª.

Documento privado—Véase: *Donación*, núm. 1—*Juicio informativo*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 14—*Falsificación*, núm. 6—*Tentativa de estafa*, núm. 1.

1. Documentos—Los mencionados en la demanda, pueden ser presentados como prueba durante el término.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 205, Ser. 2ª.

1a—Nota puesta por el Cód. al art. 1876 de nuestro Cód. Civ. Concuerda con la doctrina allí sentada, el art. 1985 del Cód. francés comentado por Troplong en el núm. 145 del mandato.

2—La modificación sería un hecho nuevo aducido en juicio, cuyo prueba siempre incumbe al que lo invoca.

3—Arts. 1016, 1017, 1019 y 1028 del Cód. Civ.

4—Arts. 1469, 1474, 1476 y 1477, Cód. Civ.

1—El documento era una carta, la que se había mencionado como fundamento del derecho, pero tan solo de una manera indirecta. Los documentos que la ley obliga acompañar á la demanda son aquellos que fundan la acción instaurada, pero no aquellos que son meramente coadyuvantes.

DOC

2. Documentos—Los mencionados en la demanda y que no hacen al fondo de ella pueden agregarse durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 438, Ser. 2°.

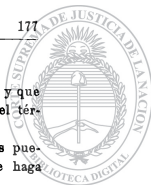
3. Documentos—Los acompañados á las posiciones pueden ser agregados, siempre que en el mismo acto no se haga oposición.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 438, Ser. 2°.

4. Documentos—La no presentación de aquellos en que

2—Esta resolución fué revocatoria de un auto de 1.ª Inst. en el que fueron rechazados los documentos porque se decía en el escrito de demanda que «existe en el poder de las personas que han contratado con el actor y demandado, y en los casos que las han proveído de artículos, constancias de pruebas más que suficientes». Al acompañar los documentos se presta juramento y se manifiesta que «ellos son las constancias probatorias á que se refiere la demanda». El Juez opinó que «la simple lectura de lo expuesto demuestra que no se han llenado las formalidades exigidas por el art. 72 del Cód. de Proc., pues si bien se insinúa en el escrito de demanda que existe constancias de pruebas más que suficientes, no se individualizan ni se expresa lo que de ellas resulta, ni se dice cómo se llaman, ni dónde están las personas en poder de las cuales se encuentran: no tiene medios el demandado para conocerlas á fin de hacer su defensa con sujeción á las prescripciones legales. Con el juramento prestado no se salva la omisión de no haberse acompañado con la demanda los documentos citados: el actor tenía conocimiento de ellos al entablar la acción y son de fecha anterior á ella, de lo que, con arreglo á los términos del art. 73, se desprende que no pueden admitirse». La Cámara dijo: «Que la parte demandada se pronunció en el acto de la absolución de posiciones sobre ellos, sin oponerse previamente á su presentación, y que dichos documentos no pertenecen propiamente á aquellos de que trata el art. 72». Es evidente que dos razones principales tuvo la Cámara para revocar el auto: 1° Que no se trataba de documentos en que se fundaba la demanda; 2° Que la parte no se opuso á su agregación al absolver posiciones, oportunidad en que le fueron presentados. Por otra parte el actor los mencionó en la demanda aunque de una manera vaga, pero esa vaguedad quedó subsanada con las dos circunstancias apuntadas, que son poderosas.

3—Inst., tom. 2, verb. *Absolución de posiciones*, núm. 1; *Documentos*, núm. 5; tom. 1°, verb. *Documentos*, núm. 904.

4—Véase Inst., tom. 1°, verb. *Defecto legal*, núms. 759, 760, 761



DOC

se funda la demanda, no puede autorizar la escepción de defecto legal en el modo de proponerla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 2ª.

5. Documentos—La falta de presentación de aquellos en que el actor funda su acción, no puede dar lugar á la escepción de defecto legal en ese modo de proponerla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 104, Ser. 2ª.

6. Documentos—La falta de presentación de aquellos que fundan la demanda del actor, no puede dar lugar á la escepción de defecto legal en el modo de proponerla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 106, Ser. 2ª.

7. Documentos—De todo documento público ó privado que presente el demandado al contestar la demanda, debe conferirse traslado al actor.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 404, Ser. 2ª.

8. Documentos—Los tendentes á justificar hechos negados por el demandado al contestar la demanda, pueden ser agregados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 482, Ser. 2ª.

9. Documentos—Acuerdo reformando el de 6 de Diciembre de 1887, sobre desglose de documentos de los expedientes archivados.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 487, Ser. 2ª.

y 762; *Documentos*, núm. 910; tom. 2º verb. *Acción*, núm. 5; *Cararantes*, tom. 2º, núm. 657, pág. 89.

5—Véase nota precedente.

6—Véase núm. 4 y nota.

7—El art. 102 del Cód. de Proc., no hace distinción alguna al ordenar que se dé traslado de todo documento presentado por el demandado, ya se trate de documento público ó privado. El traslado conferido en este caso solo se refiere á los documentos presentados.

8—Las disposiciones de los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc., no son aplicables en este caso.

9—El art. 4º de la mencionada ley mandó que se dejara copia de los documentos á desglosarse. El objeto que se propuso esa ley fué, que los expedientes quedaran debidamente instruidos para todo



DOC

10. Documentos—De los acompañados por el actor durante el término de prueba, no debe darse traslado al demandado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 435, Ser. 2ª.

11. Documentos—Los que prueben hechos alegados en la demanda, solo pueden admitirse durante la prueba con el juramento de ley.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 392, Ser. 2ª.

12. Documentos—El demandante puede, al contestar excepciones, acompañar documentos que justifiquen la improcedencia de éstas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 380, Ser. 2ª.

13. Documentos—El actor solo está obligado á presentar al iniciar la acción, los documentos en que funde su derecho, pero no aquellos que justifiquen un hecho, los cuales pueden ser presentados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 35, Ser. 2ª.

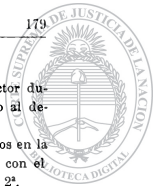
tiempo con los antecedentes que hayan servido de base para las decisiones judiciales. Dicho artículo quedó reformado así: «Si accediese á esta, mandará sacar testimonio autorizado por el Secretario, del documento ó actuación á desglosarse en todo ó en parte, según lo conceptúe necesario, ó estender certificado relacionado con transcripción de los puntos que considere esenciales ó en último caso poner nota en la forma de estilo sobre la diligencia del desglose.»

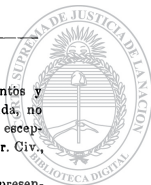
10—El traslado que establece el art. 102 del Cód. de Proc., solo se refiere á los documentos acompañados por el demandado al contestar la acción instaurada contra él. Es evidente que esta disposición no puede aplicarse á los documentos que no se encuentren en las condiciones establecidas por la ley.

11—Art. 73 del Cód. de Proc. El juramento debe versar sobre la circunstancia de que el que presenta los documentos no ha tenido conocimiento de ellos antes de entablada ó contestada la demanda.

12—Cuando se oponen excepciones, el demandante se convierte en demandado y entonces en la estación de prueba ó al evacuar el traslado de las excepciones, puede el que fué actor acumular toda la prueba conducente á destruir los hechos recién alegados por el escepccionante.

13—Los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc., únicamente se refieren á las escrituras ó documentos en que el actor funde su derecho. No estando comprendidos los *hechos*, esa disposición no puede aplicárseles.





DOC

14. Documentos—Cuando se acompañan documentos y de ellos surge el derecho que se invoca en la demanda, no hay obligación de citar la ley y debe rechazarse la excepción de defecto legal en el modo de proponerla.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 386, Ser. 2ª.

15. Documentos—No pueden ser agregados los presentados fuera del término probatorio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 53, Ser. 2ª.

16. Documentos—Los venidos del extranjero sin ser legalizados por los funcionarios argentinos residentes en el país de que proceden, carecen de valor legal, aún cuando el ministro acreditado ante el Gobierno de la República certifique sobre su autenticidad.—Jur. Com., tom. 1, pág. 368, Ser. 2ª.

17. Documentos—La exhibición de los que comprueben no haber sido pagada la letra á su presentación, hace procedente la reivindicación de la prenda.—Jur. Com., tom. 1, pág. 471, Ser. 2ª.

14—Esta resolución está en abierta oposición con la prescripción terminante del inc. 5º del art. 71 del Cód. de Proc.: allí se exige de una manera expresa, categórica y terminante, que la demanda deberá contener entre otros requisitos, el derecho espuesto sucintamente. La ley se hace para ser cumplida, el Juez no hace la ley sino que la aplica, y no tiene derecho á suprimirla con interpretaciones arbitrarias. Si por cualquiera causa un magistrado tuviese la facultad de hacer caso omiso de una ley, exigiendo ó no su cumplimiento según su capricho, ello implicaría arrogarse facultades legislativas. Haría la ley pero no la aplicaría, siendo esto último su misión.

15—Art. 118 Cód. de Proc. La prueba debe ser pedida, ordenada y producida dentro del término.

16—Por que esta no es la forma establecida para la legalización de los documentos otorgados en países extranjeros á fin de ser tenidos en el nuestro como auténticos.

17—La existencia del crédito es indispensable para que pueda tener lugar la constitución de la prenda por su carácter de obligación accesoria, conforme al art. 523 del Cód. Civ.

DOO—DOL

18. Documentos—Los que justifican obligación, agregados á un concurso terminado, no pueden ser devueltos al acreedor.—Jur. Com., tom. 2, pág. 234, Ser. 2ª.

Documentos—Véase: *Desaparición*, núm. 1—*Conforme*, núm. 1—*Multa*, núm. 1—*Protocolizado*, núm. 1—*Copia*, núm. 1—*Prueba*, núm. 25.

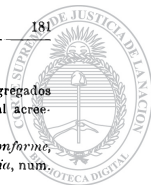
1a. Documentos públicos—La prueba de que los venidos del extranjero tienen ese carácter en el país de su otorgamiento, corresponde al que pida su protocolización.—Jur. Com., tom. 1, pág. 359, Ser. 2ª.

1b. Dolo—No puede declararse la existencia siempre que antes de consumarse el contrato, la parte que pretende la declaración, pudo tomar los antecedentes necesarios para conocer la existencia de engaño ó artificio.—Jur. Civ., tom. 5 pág. 517, Ser. 2ª.

18—Esta devolución no tendría objeto práctico; porque, ó ellos están cancelados ó no: si lo primero deben quedar en el expediente á fin de constatar las obligaciones sobre las cuales ha recaído el pago; si lo segundo, el interesado puede deducir las acciones que crea tener por razón de esos documentos sin que sea necesario acompañarlos á la demanda, desde que puede hacer mención de los expedientes ó solicitar los testimonios que se juzgue conveniente.

1a—Así lo establecen los arts. 12 y 13 del Cód. Civ. Si los documentos presentados tuviesen la forma de escrituras públicas según nuestras leyes, esa prueba no sería necesaria.

1b—Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso ó disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia ó maquinación que se emplee con ese fin. El dolo para que pueda ser causa de nulidad de un acto, debe reunirse entre otras condiciones, las siguientes: 1ª que haya sido grave; 2ª que haya sido la causa determinante de la acción. El dolo supone como elemento indispensable á su existencia, el empleo de manejos ó maniobras artificiosas, con la intención de sorprender ó engañar á otro; y solo cuando es grave, esto es, cuando ha dado causa ó motivo al contrato, puede generar acciones que afecten á su subsistencia ó validez. Sin duda que la buena fe debe presidir á las convenciones humanas, pero si en el fuero interno, como lo observa Pothier—tom.



DOL—DOM

2. Dolo—Ante la presunción de dolo que la ley fija para todo delito, la confesión del reo es divisible, siendo a su cargo la prueba de las circunstancias atenuantes que no resulten de autos ó aparezcan verosímiles.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 268, Ser. 2ª.

Dolo—Véase: *Arbitros-arbitradores*, núm. 1—*Confesión*, núms. 5 y 6.

1. Domicilio—El constituido se reputa subsistente mientras no se constituya otro.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 2ª.

2. Domicilio—Acuerdo ordenando la constitución de domicilio con arreglo á la nueva numeración.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 17, Ser. 2ª.

3. Domicilio—Siempre que el actor reconozca tenerlo en otra jurisdicción, procede la escepción de arraigo opuesta por el demandado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 300, Ser. 2ª.

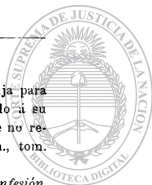
4. Domicilio—La designación de uno mismo en diversos

2ª, pág. 19—debe mirarse como contrario á ella todo lo que se aparta de la más exacta y escrupulosa sinceridad: en el fuero esterno no se atenderá al que se queje de esas ligeras faltas de buena fé, porque seria necesario rescindir un sinnúmero de contratos, y con ellos se multiplicarian los pleitos y se causaria un grave detrimento al comercio. Los que contratan, dice Chardon en su conocido tratado del dolo, tom. 1ª, pág. 16, deben comprender toda la importancia de una promesa verbal ó escrita, y antes de darla deben tomar todas las precauciones que exige su interés, y si no lo han hecho, la ley como lo ha asentado la Corte de Casación, no les debe ni protección ni gratitud. De otra manera, la mala fe se aprovecharia de esta facilidad para hacer rescindir las convenciones y rehusarse á la ejecución de las más legítimas. La ley 1ª, tit. 16, Part. 7ª, citada por el Codificador en su nota al art. 933 dice lo siguiente: «E la segunda manera de engaño, es cuando preguntan á algun ome sobre alguna cosa, e el callasse enganosamente, non queriendo responder, ó si responde, deje palabras encubiertas de manera que por ellas non se puede ome guardar del engaño.»

1—Art. 12 Cód. de Proc.

3—Art. 85 Cód. de Proc.

4—Un reconocimiento semejante hecho en escrituras públicas que



DOM

instrumentos públicos, hace improcedente la nulidad de una notificación hecha en él.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 149, Ser. 2ª.

5. Domicilio—El demandante que justifica tener su domicilio en la Capital no está obligado á comprobar que tiene bienes para responder á las resultas del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 26, Ser. 2ª.

6. Domicilio—Cuando una parte no lo ha constituido, las providencias deben notificarse en el domicilio que denuncie la contraria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 46, Ser. 2ª.

7. Domicilio—Corresponde al habitual del muerto, el juicio sucesorio, aún cuando el fallecimiento tenga lugar en la Capital.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 371, Ser. 2ª.

8. Domicilio—Cuando el fijado para el cumplimiento de la obligación lo ha sido en el interés exclusivo del acreedor, éste puede renunciar á ese beneficio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 71, Ser. 2ª.

Domicilio—Véase: *Excepción de arraigo*, núm. 1—*Mora*, núm. 1—*Citación*, núm. 3—*Prueba*, núm. 2—*Venta*, núm. 1—*Contrato de cesión*, núm. 1—*Competencia*, núms. 9, 3, 4 y 5

no han sido redargüidas de falsas, importa la prueba más perfecta que pueda desearse de su verdad, no siendo capaz de enervarla la testifical. Tampoco puede argumentarse diciendo que el domicilio declarado en esas escrituras públicas haya sido un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ellas, siempre que no se hubiese hecho tal especificación.

3—El art. 85 del Cód. de Proc., solo autoriza la excepción de arraigo contra el demandante que no tiene domicilio conocido en la Capital.

6—Los domicilios deben ser denunciados por la parte interesada en la prosecución del juicio y debe ser aceptada por los Jueces, porque lo contrario importaría su paralización.

7—Arts. 3284 del Cód. Civ. y 634 del Cód. de Proc. La habitación para que cause domicilio debe ser habitual y no accidental, art. 92, Cód. Civ.

8—Art. 748, Cód. Civ.





DOM—DON

—*Notificación*, núm. 3—*Posiciones*, núms. 6 y 8—*Sentencias*, núm. 1—*Robo*, núm. 2—*Arraigo*, núms. 1, 3, 4 y 5—*Edictos*, núm. 3—*Fallecimiento*, núm. 2—*Testigos*, núm. 10—*Violación*, núms. 3 y 2.

Domicilio legal—Véase: *Error*, núm. 3—*Excepción de incompetencia*, núm. 3—*Posiciones*, núm. 11.

1a. Dominio—Justificado este, la posesión debe pedirse deduciendo contra el detentador acción reivindicatoria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 284, Ser. 2ª.

Dominio—Véase: *Reivindicación*, núms. 2 y 3—*Trasmisión judicial*, núm. 1—*Venta onerosa*, núm. 1.

1b. Donación—Entre vivos, por instrumento privado, se considera por muerte del donante, como testamento ológrafo si llena las condiciones que la ley exige para este acto.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 307, Ser. 2ª.

2. Donación—De muebles ó alhajas, para su justificación

1a—El dominio es perpetuo—art. 2500, Cód. Civ.—Si solo tiene el título de propiedad y no tiene la posesión, ese título no le confiere sino el derecho á la posesión: derecho que no puede ejercitar cuando hay un tercero detentador de la cosa, si no demandando judicialmente—2168, *ibid*.

1b—En toda donación por causa de muerte lo único que se exige es que el documento llene las formas de un testamento: toda otra forma es impropia, superabundante ó inútil. La forma testamentaria rige la disposición de bienes para después de la muerte.

2—Tratándose de bienes muebles, el art. 1815 del Cód. Civ., no exige acto escrito, cuando determina, que una donación puede ser hecha por la sola entrega de la cosa al donatario. Concurriendo es un contrato de donación los requisitos exigidos en el art. 1816, el acto es perfectamente válido. La disposición del art. 1193 Cód. Civ., que establece que los contratos que exceden de 200 pesos deben hacerse por escritura y no pueden probarse por testigos, no es universal sino general, y en este carácter reconoce excepciones entre las cuales debe contarse la donación. Si la ley permite que la donación de cosas muebles pueda verificarse sin acto escrito, sin atender para nada al valor de la cosa donada, cuando se contesta en juicio la existencia de tal contrato, es natural y lógico suponer que puede ser comprobado por testigos ó por cualquiera de los otros medios de prueba.

DON

no se necesita un principio de prueba escrita, aún cuando sea de mayor valor, siempre que se pruebe que hubo tradición —Jur. Civ., tom. 5, pág. 104, Ser. 2°.

3. Donación—Por toda la vida, queda revocada por la muerte del donatario, y para decretar judicialmente la reversión, basta notificar el fallecimiento cuando es la única condición impuesta.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 383, Ser. 2°.

Donación—Véase: *Legados*, núms. 1 y 2.

Donante—Véase: *Donación*, núm. 1.

Dote—Véase: *Matrimonio*, núm. 1.

3—Art. 555 del Cód. Civ.





1. Ebriedad—Incompleta y voluntaria no es circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 25, Ser. 2ª.

2. Ebriedad—La completa y voluntaria, si bien no exime de pena, debe considerarse como circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 110, Ser. 2ª.

3. Ebriedad—Justificada la del reo, la ley supone que su razón estaba alterada, sin que se requiera prueba especial para justificar lo segundo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 142, Ser. 2ª.

4. Ebriedad—Se supone voluntaria y se admite como circunstancia atenuante: para que exima de pena, correspon-

1—El fallo no dice que la ebriedad voluntaria é incompleta no sea una circunstancia atenuante, solo establece que no es una causa que exima de pena, porque no reúne las condiciones requeridas por el art. 148, inc. 3º del Cód. Pen. de 1877.

2—Con arreglo al art. 81, inc. 1º del Cód. Pen. vig. de 1887, la beodez completa é involuntaria exime de pena, y de acuerdo con lo preceptuado en el art. 83, inc. 1º., la ebriedad en general constituye una circunstancia atenuante.

3—De acuerdo con la doctrina legal del art. 83 del Cód. Pen. de 1887.

4—Tratándose de una escepción, es á cargo del que la aduce el comprobar que ella reúne todos los caracteres requeridos por la ley.

**EBR—EDA**

diendo al reo justificar que ha sido involuntaria.—Jur. Crim. tom. 2, pág. 142, Ser. 2ª.

5. Ebriedad—Basta que se encuentre justificada para que se conceptúe circunstancia atenuante, sin que necesariamente deba probarse que el reo había perdido el conocimiento.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 37, Ser. 2ª.

6. Ebriedad—Si bien es circunstancia atenuante, mientras no se demuestra ser el resultado de una fuerza extraña, se conceptúa voluntaria del reo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 546, Ser. 2ª.

7. Ebriedad—Voluntaria, para que pueda ser considerada como circunstancia atenuante, se requiere que sea completa.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 357, Ser. 2ª.

8. Ebriedad—Completa aunque voluntaria, constituye una circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 200, Ser. 2ª.

1. Edad—La falta de designación de la de los testigos de

5—Véase núm. 3.

6—Véase el núm. 47, su nota.

7—La ebriedad según nuestro Código, excusa en un todo el delito; cuando ella es completa y voluntaria; y solo constituye una circunstancia atenuante cuando falta alguna de dichas condiciones: es decir, que no sea ni involuntaria ni completa; pero no faltando todas a la vez, porque a mas de no ser voluntaria no sea completa. Asi lo enseña también Escriche, en su Dic. de Leg. y Jur., verb. *Embriaguez*, cuando dice: «que la embriaguez voluntaria cuando es incompleta, no debe admitirse como disculpa del delito, ni de consiguiente, influir en la disminución de la pena.»

8—Véase el núm. 2.

1—En los testamentos por acto publico no basta decir que son mayores de edad los testigos; es indispensable que se espresé por el escribano la edad de una manera fija y determinada. La edad de una persona es el número de años que cuenta. La ley al establecer el requisito de la determinación de la edad de los testigos, ha tenido por objeto suministrar mayores datos para la identificación de las personas, como dato mas preciso.—Art. 3637, Cód. Civ. —A este respecto hay jurisprudencia uniforme en nuestros tribunales.

EDA—EDI

un testamento es causa de nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 47, Ser. 2ª.

Edad—Véase : *Homicidio simple*, núm. 1—*Testigo*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 4.

1. Edictos—En la acción reivindicatoria de bienes inmuebles, no procede la citación del demandado por edictos como persona incierta.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 167, Ser. 2ª

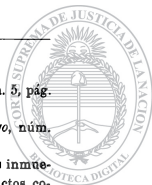
2. Edictos—La citación para que comparezcan los herederos, es improcedente cuando existe testamento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 127, Ser. 2ª.

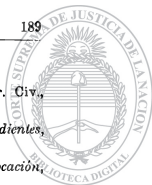
3. Edictos—Solo procede la citación en esta forma, cuan-

1—La ley que autoriza la citación por edictos debe interpretarse restrictivamente, pues la defensa de un ausente siempre engendra graves dificultades, y quebranta la igualdad de la defensa en juicio. La ley al establecer la citación por edictos ha tenido por objeto no dejar indefinidamente paralizado un juicio á causa de la imposibilidad de conocer su domicilio; de aquí resulta que ese procedimiento solo puede ser autorizado por el Juez cuando es indispensable para la prosecución de un litigio. El art. 80 del Cód. de Proc. que autoriza la medida legal de citación por edictos, no es aplicable á una demanda reivindicatoria, pues en esta clase de acciones jamás es incierta la persona contra quien debe deducirse la demanda, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Cód. Civil sobre esta materia. El art. 2758 acuerda la acción reivindicatoria al propietario que ha perdido la posesión á fin de reclamarla de aquel que se encuentra en posesión de ella, y el art. 2782 preceptúa que la acción puede dirigirse contra el que posee á nombre de otro, quien puede exonerarse de la demanda declarando el nombre y residencia de la persona á cuyo nombre posee.

2—Cuando existe, el art. 3413 del Cód. Civ. establece que los instituidos herederos por un testamento deben pedir á los jueces en posesión hereditaria, solo exige la exhibición del testamento, sin someter ese derecho á la publicación previa de edictos, y por el contrario ordena que toda contradicción sea juzgada sumariamente. La publicación de edictos, en caso de existir testamento, es improcedente, según precepto del art. 687 del Cód. de Proc., aplicado á *contrario sensu*, pues en el caso presente existe testamento.

3—El art. 80 del Cód. de Proc., establece que la citación por





EDI

do no se conoce el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 130, Ser. 2°.

4. Edictos—Véase: *Testamento*, núm. 3—*Ascendientes*, núm. 1—*Cónyuges*, núm. 2—*Citación*, núm. 3.

Edificio—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 10—*Locación*, núm. 1.

Educación común—Véase: *Legados*, núm. 1—*Impuestos*, núm. 1.

1. Editor—Al de una publicación acusada, no le basta dar

edictos solo puede tener lugar, respecto de personas inciertas ó cuyo domicilio se ignore.

1.—La libertad de la prensa como los demás derechos individuales declarados por la Constitución Nacional en su art. 14, es inherente á la naturaleza del hombre y consiguientemente preexistente á la Constitución misma: de aquí resulta que aun cuando ese derecho no haya sido reglamentado por las leyes complementarias no por eso queda suspendido, sino que por el contrario subsiste y está amparado por el Poder Judicial. Si la libertad de imprenta existe, no puede subsistir en estado de naturaleza, y no puede ejercitarse sin control alguno, so pretexto de que no hay una ley de imprenta que lo reglamente: porque semejante estado sería incompatible con el mismo sujeto del derecho como miembro de la sociedad. Admitida la institución de la prensa, sin leyes terminantes que la reglamenten y en presencia de un caso sometido á la decisión judicial, deben aplicarse los principios y doctrinas que la jurisprudencia ha incorporado á ella como base fundamental de su existencia. De otro modo la prensa no llenaría su alta misión social, dejaría de ocupar su rango en la escala de la civilización, degenerando en un pasquín, cuyos resultados por groseros que fuesen, no tendrían un freno y un correctivo al agraviado: no tendría cómo quejarse, ni contra quién dirigir su acción. La legislación de los pueblos civilizados ha aceptado y consagrado el principio de que la prensa periódica tenga su editor responsable, el que está obligado á declarar en virtud de requisición judicial, quien sea el autor del escrito acusado, aceptando su responsabilidad: esta responsabilidad no es una palabra vana, sino que es una garantía *sustancial* del juicio, y como tal impone al editor la necesidad de comprobar la existencia ó identidad de la persona á quien declara autora del escrito acusado. Esta doctrina tiene asimismo su confirmación en

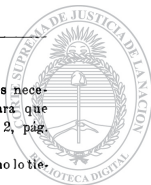
EFE

el nombre del autor para salvar su responsabilidad: es necesario lo presente ó ponga de su parte los medios para que éste comparezca personalmente.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 213, Ser. 2ª.

1. Efecto retroactivo—Si bien las leyes comunes no lo tie-

nuestros antecedentes legislativos, como puede verse en el Reg. Provisorio dictado en 1817, que declara crimen el abuso de la libertad de imprenta, y establece en su art. 1º, cap. 2º, vigente el decreto sobre la libertad de imprenta expedido en 26 de Octubre de 1811, cuyo art. 3º declara responsable de dicho abuso á los autores é impresores.

1.—Esta cuestión se suscitó con motivo de un pleito en el que el Banco de la Provincia quiso hacer valer sus privilegios en la ciudad de Buenos Aires, después de la federalización: fué resuelta en el sentido del sumario. El privilegio del Banco fué un derecho adquirido antes de la ley de federalización; y se sostuvo que como las leyes no tienen efecto retroactivo, ese privilegio adquirido con anterioridad no podía ser alterado por la ley posterior de Capital, y consiguientemente, que los derechos del Banco subsisten y deben declararse vigentes. En el caso presente el privilegio recién pretendió ejercitarse en el año 1883. Aun dado el caso de que los privilegios del Banco fuesen derechos ya adquiridos, ellos no podrían ejercitarse después de la ley de Capital. La ley de Capital fué una ley que nació de la Constitución, y como tal sus efectos y sus consecuencias no podían estar supeditados por otras leyes, que aunque tuviesen su origen también en la Constitución, no resisten la más mínima comparación en cuanto á importancia y trascendencia. La ley de federalización de Buenos Aires fué una ley de orden público, una ley de organización definitiva del país, ante la cual cualquiera otra ley tenía que ceder. Fué una ley de orden público por excelencia. Desde el momento en que esa ley fué dictada, la ciudad de Buenos Aires con el perimetro asignado, quedó fuera del imperio de las leyes especiales de la Provincia de la cual había formado parte integrante. Debe tenerse en cuenta que siendo los privilegios una condición ó derecho excepcional acordado por la ley á favor de una persona determinada, ellos no pueden resultar sino de una expresa disposición de dicha ley: disposición que no aparece consignada á favor del Banco de la Provincia, en ninguna ley, ni en la de 21 de Noviembre de 1880, por la cual fué la ciudad de Buenos Aires declarada capital de la República.



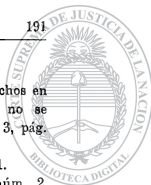
EFE

nen, las que afectan el orden público rigen los derechos en expectativa que hasta la fecha de su promulgación no se hayan hecho valer judicialmente.—Jur. Com., tom. 3, pág. 245, Ser. 2ª.

2. Efecto retroactivo—Véase: *Demencia*, núm. 1.

Efectos civiles—Véase: *Partidas parroquiales*, núm. 2.

ni en la de 16 de Noviembre de 1881, sobre organización de los Tribunales, ni en el pacto de 11 de Noviembre de 1859, ni en el art. 104 de la Constitución Nacional, ni en el Cód. Civ., que es al respecto la única ley vigente. El privilegio acordado por la Constitución á la Provincia de Buenos Aires para legislar sobre su Banco, es acordado á la Provincia no al Banco. Los privilegios invocados por el Banco de la Provincia, le han sido acordados por las leyes que la misma Provincia en su propio interés dictara para la fundación, fomento, conservación y desarrollo de ese establecimiento de crédito. Esas leyes, pues, por razón de su origen, no pueden en su imperio ir más allá de los límites del territorio para el cual fueron dictadas, puesto que la facultad de legislar inherente á la soberanía de las naciones, como en lo relativo á los Estados ó Provincias confederadas, implica su independencia propia y lo que es consiguiente los límites de sus respectivos territorios. En este concepto, es evidente que las leyes dictadas por las provincias solo son obligatorias dentro de su propio territorio y solo en cuanto no se opongan á la Constitución Nacional, de donde resulta que esos privilegios no pueden regir en la ciudad de Buenos Aires después de su federalización. De aquí resulta la retroactividad de la ley de federalización, pues altera el derecho ya adquirido por la provincia para legislar sobre su Banco, desapareciendo sus privilegios en el territorio en que se regían. Con mayor razón adquiere efecto retroactivo la ley de Capital, si se recuerda que ella tiene su origen en la misma Constitución. La ley, pues, es constitucional y por tener ese carácter queda incorporada á la Constitución, y como los privilegios invocados son repugnantes á la Constitución, ellos no pueden subsistir. El art. 5 del Cód. Civ., consagra la doctrina del sumario. Los privilegios que no nacen del contrato, como que están fundados en la naturaleza de la persona á quien se aplica por investidura de la ley de la provincia, no pueden ejercitarse en la Capital donde ha caducado la aplicación de la ley de cuya autoridad emana como de su fuente y á la que adhiere como una prerrogativa. Donde no tiene aplicación la ley de un privilegio no puede ejercitarse,





EFE—EJE

Efectos legales—Véase: *Notificación*, núm. 4.

Ejecución—Véase: *Juicio*, núm. 3—*Pago parcial*, núm. 2—*Escepción*, núm. 1—*Honorario*, núm. 5—*Escepción de falsedad*, núm. 1—*Escepción de compensación*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 6—*Multa*, núm. 3—*Escepción de inhabilidad de título*, núms. 5, 6 y 7.

1. **Ejecutado**—Transado el asunto, se adeudan los honorarios, gastos é intereses, salvo estipulación en contrario que conste en autos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 50, Ser. 2ª.

2. **Ejecutado**—Cuando no presenta bienes á embargo, el ejecutante puede pedir que informe el Registro de la Propiedad si existe alguno suscrito á nombre de aquél.—Jur. Com., tom. 1, pág. 181, Ser. 2ª.

Ejecutado—Véase: *Escepción*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 13.

1—Este sumario no debe tomarse como una resolución que pueda formar jurisprudencia, porque del fallo no resulta con claridad el derecho acordado á las partes, y estudiado éste en sus fundamentos, más bien podría decirse que él consagra un principio contrario al sumario. Y debe esto con más razón interpretarse en este último sentido cuando la Cámara se ha pronunciado en otro caso en forma contrario al sumario fundada en que lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal: transado el pleito termina el juicio y extingue la obligación principal, deben correr igual suerte las obligaciones que le son inherentes como intereses y costas, etc. Véase Inst., tom. 1, verb. *Chancelación*, núm. 359 y su nota.

2—La ley del juicio ejecutivo obliga al ejecutante á denunciar los bienes á embargo, cuando el ejecutado no los presenta. Si la ley le ha impuesto esa obligación, es lógico que implícitamente haya puesto en sus manos los medios para su cumplimiento: entre estos medios se encuentran la de solicitar el informe de que trata el sumario. Si este medio, como otros que puede ejercitar el ejecutante por vía de indagación le estuviese prohibido, sería ilusorio el derecho del acreedor para hacer que la obligación le sea cumplida. El axioma de derecho: *quod tibi non nocet et alteri prodest ad id est obligatus*, es de perfecta aplicación en el presente caso.

EJE-EMB

1a. Ejecutante—No puede percibir de cada deudor solidario una parte de la deuda, mientras no se justifique en autos la insolvencia de cada uno de ellos para el pago del total.—Jur. Com., tom. 2, pág. 410, Ser. 2ª.

Ejecutante—Véase: *Título inhábil*, núm. 1—*Acreeedor*, núm. 7—*Costas*, núm. 5—*Fianza*, núm. 4.

Ejecutor principal—Véase: *Delito*, núm. 2.

Ejemplares—Véase: *Disposición*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 4.

1b. Embargo—El juez al cual se pide un embargo por otro de igual clase, no puede juzgar de su procedencia ó improcedencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 456, Ser. 2ª.

2. Embargo—Depositado el importe del mandamiento procede el levantamiento del embargo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 458, Ser. 2ª.

3. Embargo—El juzgado no puede dejarlo sin efecto, sin audiencia de aquel á cuyo favor ha sido concedido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 465, Ser. 2ª.

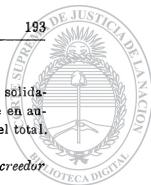
4. Embargo—Solo puede ordenarse el levantamiento

1a—El art. 846 del Cód. de Com. ant., establecía en su segunda parte, que el portador puede dirigir su acción contra quien mejor le convenga de los referidos libradores, endo-antes ó aceptantes: pero intentada contra uno de ellos no puede ejecutar contra los demás, sino en caso de insolvencia del demandado. Este art. está de acuerdo con el 911 del mismo Cód. El art. 846 ha sido reproducido al pié de la letra por el nuevo Cód. en su art. 639. ¿Cómo debe constar esta insolvencia? Véase Inst., tom. 2º, verb. *Ejecutante*, núm. 3, que está de acuerdo con otro caso que se registra en este tomo 3º de la Inst., verb. *Acreeedor*, núm. 6.

1b—Son hechos éstos que solo pueden apreciarse en el juicio que corresponda.

2—Depositado el importe del mandamiento deja de tener razón de ser el embargo trabado.

3—El juzgado jamás puede estar autorizado á proceder de oficio cuando el procedimiento perjudica á un tercero sin que éste sea oído en forma.



**EMB**

del de un inmueble depositando el valor á que él responde: la prescripción que haya liberado la deuda debe ser declarada en el juicio en que fué decretada.—Jur. Com., tom. 2, pág. 542, Ser. 2ª.

5. Embargo—Tratándose del de derechos y acciones sin valor determinado, es innecesaria la anotación en el Registro de Propiedad: basta la simple notificación á los interesados y la debida constancia en el expediente en que se discutan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 2ª.

6. Embargo—Si bien el que consigue un embargo indebido debe ser condenado á pagar los perjuicios ocasionados, la pena no puede comprender aquellos que el damnificado pudo evitar y de los cuales pueda conceptuarse el único culpable.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 102, Ser. 2ª.

7. Embargo—Ejecutoriado el auto que permite sustituir la inhibición por el embargo de bienes determinados, el auto en que el Juez acepta los que considera responder á este objeto no causa agravio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 2ª.

8. Embargo—Solo puede disponerse de fondos embargados previa audiencia del que solicitó el embargo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 170, Ser. 2ª.

Embargo—Véase: *Inhibición*, núm. 4—*Bienes hereditarios*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 9—*Dinero efectivo*,

5—Porque se trata de bienes abstractos, de acciones y derechos que no pueden ser aprehensibles, ni ponerse á cargo de depositario alguno, ni á disposición de otro Juzgado cuando ya está á cargo del que entiende en la causa.

6—El hecho que causa daño á la persona que lo sufre por una causa imputable á ella no impone responsabilidad alguna—art. 1111, Cód. Civ.

7—El segundo auto no es sino una consecuencia del primero: es su ejecución.

8. Véase el núm. 3 y su nota.

EMB

núm. 1—*Entrega*, núm. 1—*Ejecutado*, núm. 2—*Fallido*,
núm. 1—*Terceria*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 4.

1. **Embargo preventivo**—Procede, si se deduce acción de petición de herencia, equiparada á la acción reivindicatoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 461, Ser. 2ª.

2. **Embargo preventivo**—Fundado en un crédito por honorarios, es nulo sin previa declaración consentida de que la parte contra quien se ha dictado, es la obligada á su pago.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 115, Ser. 2ª.

3. **Embargo preventivo**—Solo procede por cantidad lí-

1—El embargo preventivo procede en la acción reivindicatoria, art. 447, Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Petición de herencia*, núm. 2018. El embargo preventivo debe limitarse á garantizar la parte alicuota del demandante, despues de hecha la manifestación de bienes. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Embargo preventivo* núm. 3.

2—La parte contra quien se decretó el embargo manifestó, antes de la regulación «que no estaba dispuesta en manera alguna á abonar ó reconocer gastos ni honorarios, ni derecho alguno, cuyo pago no le correspondiera», á lo que se proveyó que se tuviera presente, en cuyo caso es cuestión prejudicial ó previa que debe resolverse antes de la regulación y consiguientemente antes del embargo preventivo de si la parte contra quien se pide esa regulación está obligada al pago ó no de los honorarios, y pendiente ese requisito no pueden dictarse tales resoluciones sin incurrir en nulidad; esta es la doctrina de la Cámara como puede verse en otro caso resuelto, véase: Lopez D. Toribio, su testamentaria.—Estos son casos de escepción en los que los deudores no son ciertos, el derecho es dudoso; pero cuando un abogado ha patrocinado á su cliente y obtiene una regulación, queda autorizado á pedir un embargo preventivo porque ha obtenido una sentencia favorable. Los dos casos que quedan mencionados deben ser tomados como escepción á la regla general.

3—Esta ha sido la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase Inst., tom. 1º, verb. *Mandamiento de embargo preventivo*, núm. 1703; tom. 2º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 201. En la nota de este número hemos manifestado nuestra opinión en contra de la jurisprudencia sentada, la que no interpreta acertadamente ni la letra ni el espíritu de la ley. Véase asimismo el núm. 25 del mismo verb.



EMB

quida cuando se ejercitan acciones personales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 452, Ser. 2ª.

4. Embargo preventivo—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer no puede fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 422, Ser. 2ª.

5. Embargo preventivo—Es improcedente cuando se trata del cumplimiento de una obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 414, Ser. 2ª.

6. Embargo preventivo—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 397, Ser. 2ª.

7. Embargo preventivo—Un crédito por honorarios no puede fundarlo mientras no sean regulados y consentidos.—Jur. Civ. tom. 6, pág. 477, Ser. 2ª.

8. Embargo preventivo—No puede fundarse en una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 378, Ser. 2ª.

4—Véase nota precedente. Inst., verb. *Embargo preventivo*, núms. 19 y 22; *Obligación de hacer*, núms. 2 y 3, tom. 2º.

5—Véase nota precedente.

6—Véase el núm. 4 y su nota.

7—El postulante fundaba su petición en el inc. 2º del art. 434 del Cód. de Proc. La Cámara declaró que el embargo preventivo no era procedente porque no se había practicado aun la regulación de los honorarios. Este tribunal nunca dijo que era necesario que esos honorarios estuviesen consentidos. La razón de la resolución de la Cámara es evidente: El art. 448 del Cód. de Proc., establece en su última parte que: siempre que el que solicite un embargo preventivo hubiere obtenido una sentencia favorable, debe decretarse el embargo. Cuando se regulan los honorarios se dicta una sentencia favorable al que los ha devengado.

8—Parece que esta resolución está en contra del caso que se registra en el tomo 2º de la Inst., verb. *Obligación de hacer*, núm. 2, y está en contra asimismo de otro caso que corre publicado en el tom. 1º, verb. *Embargo preventivo*: sin embargo, hay diferencia por cuanto en estos casos citados se obtuvo sentencia favorable mientras que el sumario se refiere a una demanda instaurada.



EMB

9. Embargo preventivo—La acción de liquidación de sociedad no basta para fundarlo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 166, Ser. 2ª.

10. Embargo preventivo—Tratándose de una obligación de hacer, el embargo preventivo no procede.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 49, Ser. 2ª.

11. Embargo preventivo—De una cosa mueble, es procedente siempre que por escritura pública se justifique el condominio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 340, Ser. 2ª.

12. Embargo preventivo—Una obligación de hacer no basta para fundarla.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 396, Ser. 2ª.

13. Embargo preventivo—Solo puede decretarse sobre bienes situados en la República.—Jur. Com., tom. 1º, pág. 503, Ser. 2ª.

14. Embargo preventivo—Sobre el precio de mercaderías que se reconocen vendidas, es improcedente, cuando existe concurso.—Jur. Com., tom. 1, pág. 60, Ser. 2ª.

9—El caso no se encuentra en ninguno de los previstos por la ley y que hacen procedente un embargo preventivo.

10—Véase núms. 3 y 4 y sus notas.

11—Aquí se instauró acción reivindicatoria de la cosa, en cuyo caso el art. 477 del Cód. de Proc. autoriza la medida.

12—Véase el núm. 4 y su nota.

13—El embargo preventivo debe recaer sobre bienes situados en el país, pues de otro modo el mandato judicial que lo mandara trabar sería ilusorio en virtud del principio de la soberanía territorial extensivo a las personas y a las cosas.

14—En el caso presente no se pedía la entrega de las mercaderías, si no se pretendía un privilegio sobre el precio obtenido por su venta, en cuyo caso no era aplicable el art. 1670 del Cód. de Com. anterior, porque faltaba el requisito de identidad exigido por este artículo. Debe advertirse que tampoco es aplicable el art. 2762 del Cód. Civ., porque la acción reivindicatoria no puede ejercitarse sobre cosas fungibles ó dinero, y no siendo reivindicatoria la acción intentada, no procede el embargo preventivo autorizado por el art. 447 del Cód. de Proc.



EMB

15. Embargo preventivo—Solo es procedente justificándose previamente la propiedad y posesión del ejecutado.—Jur. Com., tom. 1º, pág. 31, Ser. 2ª.

16. Embargo preventivo—Es procedente, justificando el carácter de acreedor, aun cuando el deudor por un concordato hubiese cedido los derechos que se pretenda embargar.—Jur. Com., tom. 1º, pág. 499, Ser. 2ª.

17. Embargo preventivo—El incidente sobre revocatoria del embargo preventivo no interrumpe el término para contestar la demanda.—Jur. Com., tom. 4, pág. 30, Ser. 2ª.

18. Embargo preventivo—El que contrata con un Agente de Bolsa, carece de acción para pedir un embargo preventivo contra el mandante de aquel, mientras el corredor no le haga cesión en forma.—Jur. Com., tom. 4, pág. 479, Ser. 2ª.

19. Embargo preventivo—Si durante el término de prueba resulta de los libros del demandado un saldo á favor del demandante, el embargo preventivo es procedente por la suma que hubiese resultado.—Jur. Com., tom. 3, pág. 162, Ser. 2ª.

20. Embargo preventivo—El reconocimiento de la deu-

15—Art. 1549, inc. 4º y art. 1563, inc. 4º del Cód. de Com. Esta resolución fué dictada en un juicio de concurso.

16—Art. 443 del Cód. de Proc.

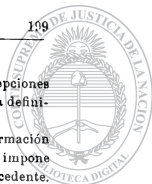
17—La oposición deducida con motivo de un embargo decretado no puede adquirir el carácter de una escepción dilatoria porque no hay razón atendible para ello, puesto que ese incidente puede hacerse correr por cuerda separada de acuerdo con el art. 406 del Cód. de Proc.

18—Art. 337, Cód. de Com. ant.

19—Art. 443, inc. 4º, Cód. de Proc.

20—El reconocimiento de una obligación basta para justificar el embargo preventivo. Si se aducen escepciones ó modalidades á la confesión, ellas no pueden ser tomadas en consideración por el Juzgado sino al dictar sentencia definitiva, como toda cuestión que hace





EMB

da por el demandado lo hace procedente; las excepciones solo puede resolverlas el Juzgado al dictar sentencia definitiva.—Jur. Com., tom. 3, pág. 467, Ser. 2ª.

21. Embargo preventivo—Justificado por información sumaria el cumplimiento de las obligaciones que impone un contrato bilateral, el embargo preventivo es procedente.—Jur. Com., tom. 3, pág. 539, Ser. 2ª.

22. Embargo preventivo—Para que sea procedente entre socios debe justificarse previamente la existencia de la sociedad.—Jur. Com., tom. 2, pág. 519, Ser. 2ª.

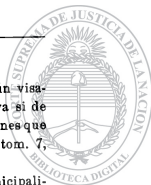
23. Embargo preventivo—Llenados los requisitos que la ley exige y decretado el embargo preventivo de la cosa mueble, su procedencia ó improcedencia solo puede resolverse por el resultado del juicio ordinario.—Jur. Com., tom. 2, pág. 522, Ser. 2ª.

Embargo preventivo—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 2 y 18—*Petición*, núm. 1—*Acción de petición de herencia*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núms. 1 y 2—*Obligación de hacer*, núm. 2—*Rebeldía*, núm. 7—*Simulación*, núm. 3—*Acción*, núm. 6—*Conforme*, núm. 2.

al fondo de la causa. Los embargos deben decretarse cuando concurren los requisitos exigidos por la ley sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades inherentes á esa medida cuando ella hubiese sido pedida sin derecho, lo que demuestra claramente que no puede anticiparse el conocimiento y resolución de las pruebas que deben fijar la posición respectiva de las partes de una manera definitiva.

21—Art. 443, inc. 3º, Cód. de Proc.

23—El embargo preventivo tiene siempre el carácter de provisional mientras dure el juicio en que ha sido dictado, y la procedencia ó improcedencia de la acción que le sirve de base no puede ser materia de discusión en el incidente sobre embargo preventivo, pues toda apreciación judicial á este respecto sería inoportuna y solo puede ser resuelta al dictar sentencia definitiva. Aquí no se trata de saber si el embargo preventivo es procedente ó no; solo se pretende que se declare la improcedencia del embargo preventivo fundado en la improcedencia de la acción instaurada.



EMP

1. Empedrados—Las cuentas por empedrados, aún visadas por la Municipalidad, carecen de fuerza ejecutiva si de las mismas no consta el cumplimiento de las condiciones que la ley exige para darles ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 321, Ser. 2ª.

2. Empedrados—Las cuentas visadas por la Municipalidad, solo tienen fuerza ejecutiva cuando se han llenado previamente los requisitos de la ley que ordena la fijación de cuotas y plazos para que el deudor verifique el pago.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 251, Ser. 2ª.

3. Empedrados—Las leyes sobre empedrados solo rigen para el antiguo municipio de la Capital; los propietarios de las secciones de Flores y Belgrano no están obligados a su pago.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 345, Ser. 2ª.

1—Véase los núms. siguientes.

2—Leyes de 26 de Octubre de 1881 y del 29 de Setiembre de 1882. Las cuotas y plazo establecidos en la ley para los pagos de los afirmados lo han sido en beneficio de los propietarios, y no pueden serles suprimidos por los empresarios ni por la Municipalidad.

3—El ejecutado opuso la excepción de inhabilidad del título con que se dedujo ejecución, y esta inhabilidad consistía, en que las propiedades á que el título se refería estaban situadas fuera del radio que comprendía el Municipio de la Capital en la época en que la ley que daba origen al título fué dictada. Es evidente que por esta razón esa ley no puede afectar á aquéllas. La ley tiene su imperio territorial limitado por la jurisdicción que compete á la autoridad que la dicta. La ley de 26 de Octubre de 1891 autorizó á la Corporación Municipal para hacer obligatorio el adoquinado en las calles comprendidas en un perímetro de la ciudad demarcado con toda precisión. Sus disposiciones solo pueden aplicarse y afectan únicamente á las fincas ubicadas dentro de ese perímetro. La ley de 1882 amplió la anterior de 1881 haciendo extensivas sus disposiciones á todas las calles de la Capital. Estas leyes fueron dictadas para que rijeran y surtieran sus efectos dentro de un radio claramente limitado al municipio de la ciudad, y solo en la extensión que ese municipio tenía cuando la ley fué promulgada. La ley no puede interpretarse en el sentido de haber sido dictada para proveer á necesidades futuras eventuales ó imprevistas de ampliaciones hechas al territorio

EMP—END

4. Empedrados—Los propietarios solo están obligados á abonar á las empresas constructoras el importe del empedrado cuando la Municipalidad haya fijado las cuotas y plazos en que deban verificarlo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 245, Ser. 2ª.

Emplazado—Véase: *Jactancia*, núm. 1.

Emplazamiento—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 4.

Empleado—Véase: *Contador*, núm. 3—*Perjuicios*, núm. 1.

Empleado público—Véase: *Falsificación*, núm. 4.

Empleados—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 21—*Ferrocarriles*, núm. 1—*Perjuicios*, núm. 3—*Ferrocarril*, núm. 2.

Empresas constructoras—Véase: *Empedrados*, núm. 4.

Empresas de Ferrocarriles—Véase: *Perjuicios*, núms. 1, 3 y 4—*Ferrocarriles*, núm. 1.

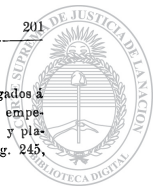
1. Empresas de tramways—No son responsables de los daños y perjuicios que resulten de accidentes imputables única y exclusivamente á culpa ó negligencia del pasajero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 2ª.

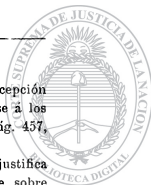
Encubridor—Véase: *Complicidad*, núm. 1.

Endosantes—Véase: *Pagaré endosado*, núm. 1.

federalizado. Si esas leyes se interpretaran de una manera distinta, resultaría que la Municipalidad, acogiéndose á sus beneficios y á las facilidades que ellas proporcionan, podría exigir el adoquinado de la totalidad del estenso territorio que actualmente comprende el municipio, dentro del cual existen zonas de consideración, rurales y agrícolas, cuyos propietarios se verían forzados á soportar esa carga onerosa, á no dudarlo si se atiende á la naturaleza de los terrenos. Debe por otra parte, no olvidarse que las leyes que imponen gravamen á los bienes deben interpretarse restrictivamente.

4—El art. 3 de la ley de 1882 que es idéntico al 4 de la de 1881, establece que el *cobro de las cuotas* se hará por las empresas constructoras, á cuyo efecto, tendrán carácter ejecutivo las cuentas visadas por la Municipalidad. Bajo esta base y previa fijación de las cuotas la ley autoriza el cobro ejecutivo del empedrado.



**END—ERR**

1a. Endoso en blanco—Hace improcedente toda excepción que sobre la personería del librador quisiera oponerse a los terceros tenedores de la letra.—Jur. Com., tom. 2, pág. 457, Ser. 2ª.

2a. Endoso en blanco—De un pagaré a la orden, justifica la propiedad y hace improcedente toda cuestión que sobre tenencia de buena fe oponga el deudor.—Jur. Com., tom. 2, pág. 105, Ser. 2ª.

Engaño—Véase: *Dolo*, núm. 1.

Enemistad—Véase: *Providencias*, núm. 1.

Enfermedad—Véase: *Demencia*, núm. 1.

Enfermo—Véase: *Médico*, núm. 1.

Enmiendas—Véase: *Confesión extrajudicial*, núm. 1—*Maternidad*, núm. 1.

Ensañamiento—Véase: *Homicidio*, núm. 5.

1. Entrega—La del dinero que al diligenciarse el mandamiento se hace constar que se dá á embargo, no importa el pago de la obligación. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 320, Ser. 2ª.

2b. Entrega—Al acreedor, de un establecimiento comercial, se conceptúa hecha en pago de deuda y no en administración hasta la extinción de ella.—Jur. Com., tom. 1, pág. 247, Ser. 2ª.

Entrega material—Véase: *Tradición*, núm. 1.

Entregas parciales—Véase: *Contrato*, núm. 3.

1. Error—El del apellido de la parte, no dá lugar á la acción de nulidad cuando el instrumento contiene indicaciones suficientes para individualizar la persona á que se refiere.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 97, Ser. 2ª.

1a—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 804 del Cód. de Com. ant., reproducido en el 627 del vigente.

2a—Véase nota precedente.

2b—De las constancias de autos resultó que el negocio había sido tregado en pago de deuda y no en administración.

ERR—ESC

2a. Error—En el número, siendo clara la ubicación, no es un defecto del título.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 2ª.

3. Error—En el nombre del aceptante de la letra, no invalida el protesto siempre que haya tenido lugar en el domicilio indicado por él, ni puede fundar una escepción de caducidad de la obligación.—Jur. Com., tom. 2, pág. 457, Ser. 2ª.

Error—Véase: *Diferencia*, núm. 1—*Nulidad de procedimiento*, núm. 1—*Arbitros-arbitradores*, núm. 1.

Errores—Véase: *Falsedad*, núm. 4.

1. Escarcelación bajo fianza—La ley de la Provincia, por ser de procedimientos rige en la Capital.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 174, Ser. 2ª.

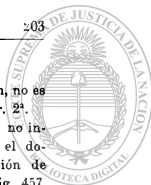
2b. Escarcelación bajo fianza—Para su procedencia, solo debe aplicarse el delito en abstracto, sin atender las circunstancias peculiares que puedan atenuar ó agravar la pena.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 5, Ser. 2ª.

2a—En una venta lo que se exige es que el título corresponda al terreno vendido. Si hay un error y ese error puede quedar descartado por las demás referencias del título acompañado, nunca puede constituir un defecto del título.

3—El error de que se trataba aquí era de una sola letra en el apellido del aceptante, lo que no puede perjudicar el protesto de la letra, ni darlo por hecho en forma ilegal, pues lo que la ley quiere—art. 464 del Cód. de Com. ant.—es que se vaya al domicilio del deudor á verificar el protesto, y que se trascriba el pagaré en él. Es evidente que si el protesto no se hace á la persona designada en la letra, no será válido; pero el solo error en una letra, no puede ni debe invalidar el protesto.

1—El art. 312 de la ley de Org. de los Trib. ant., y el 318 del vigente disponen que éstos se regirán por las leyes de Procedimientos que regían en la Provincia.

2b—Porque si para la escarcelación el Juez debe tener en cuenta las circunstancias atenuantes ó agravantes, tendría que juzgar de su mérito al resolver sobre la escarcelación, lo que importaría un prejujamiento con relación á la sentencia que en definitiva tuviera que dictar.





ESC

3. Escarcelación bajo fianza—Es procedente siempre que el delito, prescindiendo de las circunstancias que resulten del proceso, se encuentre al amparo de la ley de fianza.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 595, Ser. 2ª.

4. Escarcelación bajo fianza—El auto que la deniega en el sumario, no causa instancia.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 85, Ser. 2ª.

5. Escarcelación bajo fianza—Siendo un derecho del fallido la escarcelación, el Juzgado no puede denegarlo previa garantía á satisfacción.—Jur. Com., tom. 4, pág. 19, Ser. 2ª.

6. Escarcelación bajo fianza—Es procedente, siempre que el delito, sin tomar en consideración las circunstancias que lo rodean, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 281, Ser. 2ª.

7. Escarcelación bajo fianza—Es procedente siempre que el delito en abstracto deba ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 293, Ser. 2ª.

8. Escarcelación bajo fianza—Es improcedente en el delito de homicidio, aún cuando haya recaído sentencia absolutoria en primera instancia.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 483, Ser. 2ª.

3—Véase nota precedente.

4—De acuerdo con lo establecido en el art. 12 de la Ley de escarcelación bajo fianza.

5—La escarcelación procede de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1549 del Cód. de Com. A este efecto debe tomarse en consideración el hecho de la quiebra sin tenerse en cuenta las circunstancias agravantes ó atenuantes que lo rodean, pues lo contrario importaría un prejuzgamiento. Así lo tiene resuelto la Cámara en otro caso.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Fallido*, núm. 3.

6—Véase el núm. 2.

7—Arts. 3 y 11 de la Ley de Escarcelación—Véase el núm. 2.

8—Esta es la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Absolución*, núm. 15.

ESC

Escarcelación bajo fianza—Véase: *Victima*, núm. 1—*Robo*, núm. 3—*Sumario*, núm. 1.

1a. Encarcelado—Bajo fianza de tercero, puede disponer libremente de sus bienes.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 162, Ser. 2ª.

1b. Escepción—Cuando el ejecutado no justifica la opuesta, corresponde se lleve adelante la ejecución.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 2ª.

2a. Escepción—Que afecte al fondo del litigio, debe ser rechazado si se opone como dilatorio.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 285 y 291, Ser. 2ª.

Escepción—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Provocación*, núm. 2—*Escritura pública*, núm. 1—*Pago parcial*, núm. 1—*Reconocimiento*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 9—*Apelación*, núm. 1—*Endoso en blanco*, núm. 1—*Resolución*, núm. 3—*Escepción de defecto legal*, núm. 1—*Error*, núm. 3—*Alimentos*, núm. 8—*Objetos embargados*, núm. 1—*Asegurado*, núm. 1—*Arma de fuego*, núm. 3—*Competencia*, núm. 6—*Derecho de acusar*, núm. 2—*Costas*, núm. 1—*Juicio ordinario*, núm. 2.

1a. Escepción de arraigo—Es procedente siempre que el demandante confiese tener su domicilio en distinta jurisdicción.—Jur. Com., tom. 3, pág. 537, Ser. 2ª.

2b. Escepción de arraigo—Es improcedente en los jui-

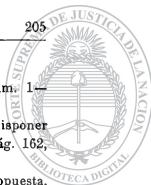
1a—Siempre que la escarcelación garantice los resultados del juicio.

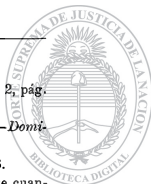
1b—De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 8. tit. 3, Part. 3a.

2a—Toda escepción dilatoria solo dilata la entrada del juicio hasta tanto se llene algún requisito exigido por la ley para que toda demanda pueda considerarse como deducida en forma. Si entra al fondo ya no es dilatoria y consiguientemente debe ser rechazada si se opone en este último carácter.

1a—Art. 85 del Cód. de Proc.

2b—Se trataba de esta escepción opuesta a un general de la Nación, por ejercer las funciones fuera del territorio de la capital: la Cámara no hizo lugar a ella, porque la fianza de arraigo tiene por objeto dejar a cubierto las responsabilidades en que pueda incurrir





ESC

cios criminales del fuero ordinario.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 517, Ser. 2ª

Excepción de arraigo—Véase: *Prueba*, núm. 2—*Domicilio*, núm. 3—*Arraigo*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5.

Excepción de caducidad—Véase: *Error*, núm. 3.

1a. Excepción de compensación—Es improcedente cuando se opone á la ejecución de una sentencia.—Jur. Com., tom. 2, pág. 340, Ser. 2ª.

1b. Excepción de cosa juzgada—Es improcedente siempre que sea distinto el objeto del juicio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 520, Ser. 2ª.

Excepción de cosa juzgada—Véase: *Cosa juzgada*, núms. 1 y 2.

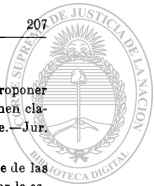
1c. Excepción de defecto legal—Opuesta por no expresar claramente en la demanda qué acción inicia el actor, el embargo preventivo es improcedente mientras no se resuelve la excepción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 120, Ser. 2ª.

el que proceda maliciosamente en virtud de querrela falsa ó calumniosa; y la Cámara consideró que estas responsabilidades encontrábanse suficientemente garantidas por el hecho de ser general de la Nación el acusador, con goce de un sueldo que corresponda á su grado. Por otra parte, el que acusa injuria propia, no es responsable por el resultado del juicio, á menos que llegase á demostrarse evidente malicia. No hay en alguna que autorice esta excepción en los juicios ordinarios del fuero común.

1a—No se encuentra enumerado entre los únicos declarados admisibles en este caso—art. 539 del Cód. de Proc.

1b—No reúne los requisitos exigidos para que haya cosa juzgada, que son identidad de cosa, de causa, de personas y de calidad—Véase: Inst., tom. 1, verb. *Cosa juzgada*, núm. 621; Leyes 19 y 20, tit. 22, Part. 3ª, Regla 32, tit. 34, Part. 7ª.

1c—El embargo preventivo se fundaba en el carácter de reivindicatoria de la acción instaurada—art. 447 Cód. de Proc. —la Cámara consideró que no podía decretarse ese embargo estando pendiente y en tela de juicio la naturaleza de dicha acción. Mientras esa articulación no se resuelva, no puede decretarse el embargo porque ello importaría un prejuzgamiento á cerca del carácter de la acción.



ESC

2. Excepción de defecto legal—En el modo de proponer la demanda, es procedente siempre que no se esponen claramente los hechos y el derecho que de ellos surge.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 309, Ser. 2ª.

3. Excepción de defecto legal—La falta de detalle de las mercaderías cuyo precio se demanda, no puede fundar la excepción de defecto legal en el modo de proponerla.—Jur. Com., tom. 3, pág. 157, Ser. 2ª.

4. Excepción de defecto legal—En el modo de proponer la demanda, procede siempre que el actor no determina el derecho que pretende fundar en los hechos relacionados.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 387, Ser. 2ª.

Excepción de defecto legal—Véase: *Documentos*, núms. 4, 5, 6 y 14—*Defecto legal*, núms. 1, 2, 3 y 4—*Copia*, núm. 1—*Escrito*, núm. 2.

2—Art. 71, Cód. de Proc.

3—Fué desechada esta excepción porque en la demanda claramente se determina el pago de una suma determinada procedente de mercaderías de que se decía acreedor. El art. 71 del Cód. de Proc., no autoriza en este caso la excepción.

4—El art. 71 del Cód. de Proc. preceptúa que los fundamentos de derecho deben ser espuestos sucintamente, ó sea con la mayor concisión posible, evitando repeticiones; vale decir, concisa, compendiada ó abreviadamente, pero sin omitir la cita de la ley ó artículo del Cód. en que se apoye la acción instaurada. Debe espresarse la ley sin insertar literalmente su disposición, como lo enseñan los prácticos. Véase: Malaver, *Curso de Proc.* Jua., pág. 325, núm. 533; Manresa y Reus, págs. 36 y 113, tom. 2. En este sumario vuelve la Cámara á sentar la verdadera y sana doctrina. Es de lamentar que este Tribunal no cuide más del cumplimiento de la ley. Hay casos en que se ha apartado del camino recto en esta materia—Véase: verb. *Defecto legal*, núm. 4 y nota, donde se encuentra una resolución que no debiera haberse publicado porque es un borrón para la jurisprudencia. Allí se sienta el menosprecio á la ley y se enseña á burlarla. Es bueno encarrilar la jurisprudencia.

ESO



1a. Excepción de falsedad—Es improcedente contra la ejecución de una sentencia que hace cosa juzgada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 429, Ser. 2ª.

Excepción de falsedad—Véase: *Multa*, núm. 2.—*Fiador*, núm. 2.—*Reconocimiento*, núm. 3.

1b. Excepción de falta de personería—Opuesta como dilatoria, debe ser rechazada si afecta al fondo de la acción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 23, Ser. 2ª.

2. Excepción de falta de personería—Fundada en la falta de acción del demandante, es improcedente opuesta como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 443, Ser. 2ª.

3. Excepción de falta de personería—Opuesta como

1a—El art. 539 del Cód. de Proc. establece todo lo contrario al precepto del sumario. Es indudable que este está equivocado. Se dijo de *falsedad de la ejecutoria* fundándose en la *nulidad del procedimiento*, lo que es un absurdo. La falsedad debe referirse a la ejecutoria misma, que lo es en este caso la sentencia que se trata de ejecutar, mientras que por medio de la excepción opuesta, lo que se pretendía en realidad, no era que la sentencia a ejecutarse es falsa, sino que todo lo obrado es nulo. El art. citado habla de *falsedad de la ejecutoria*, y solo incurriéndose en grave error, podría considerarse comprendida en ello la *nulidad*, pues tal interpretación no cabe dentro de la letra ni del espíritu del mencionado artículo.

1b—La excepción autorizada por el art. 84, inc. 2ª del Cód. de Proc., se refiere a la personería de los litigantes, sin herir en nada el fondo de la cuestión, mientras que la que se opuso afectaba directamente al fondo de la cuestión, destruyéndola, por cuanto se negaba al actor el derecho a entablar la demanda, defensa que solo puede considerarse como perentoria.

2—La excepción se fundaba en el desconocimiento del carácter de heredero que se atribuía al actor en la demanda, sin negársele su capacidad legal para estar en juicio. En este caso la excepción tiende a destruir la acción instaurada; no puede ser considerada ni opuesta como dilatoria—art. 84, Cód. de Proc.; Ley 9, tit. 3, Part. 3ª—Véase nota precedente.

3—Está de acuerdo con lo resuelto en otro caso. Véase Inst., tom. 2º, verb. *Padres*, núm. 1 y nota. Cuando los padres se presentan por sus hijos, ejercitan un derecho propio y fundado en el

ESC

dilatoria por no acompañar el instrumento que la justifique, es improcedente cuando se opone al padre representante legal de sus hijos menores.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 381, Ser. 2ª.

4. Excepción de falta de personería—Fundada en que el demandante solo cita los documentos en que funda su personería sin acompañarlos, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 412, Ser. 2ª.

5. Excepción de falta de personería—La sentencia que declara procedente esta excepción recaída en juicio informativo, no hace cosa juzgada aun cuando haya sido opuesta y resuelta como perentoria, ni aún habiendo consentido

art. 109 del Cód. Civ. La excepción dilatoria á que se refiere el inc. 2º del art. 84 del Cód. de Proc., solo es aplicable cuando la parte, ó bien no está en el pleno goce de sus derechos civiles, ó se presenta á nombre de terceros sin acompañar los documentos que acrediten el carácter que invoca como lo determina el art. 13 del mismo Cód. Si se aceptara como procedente, y como dilatoria que es, y comprobado que no es el padre el que deduce la acción, resultaría que la demanda fallaría por su base extinguiendo por completo la acción deducida, lo que no es procedente tratándose de excepciones dilatorias.

4—Art. 72 del Cód. de Proc.

5—No hace cosa juzgada, porque generalmente en los juicios sumarios las resoluciones judiciales no causan instancia, importando tan solo un aplazamiento y conservándose íntegros los derechos para deducirla con nuevos recaudos—Goyena, Concordancias, tom. 3º, art. 1225, pág. 242. Así debe resolverse también el caso, en que se rechaza una pretensión, mandando justificar el carácter hereditario dentro de un término más ó menos breve, y que vencido este no se justifica. Puede deducirse nuevamente la acción una vez llenado el requisito y salvado el defecto. Para conocer con exactitud si hay cosa juzgada, es preciso, dice el Sr. Lira, comparar la proposición establecida en la sentencia ejecutoria con lo que expresa la pretensión que el demandante actualmente deduce: si esta proposición no contradice la primera, se puede coexistir con ella; la cuestión propuesta no está decidida y no hay cosa juzgada. Si por el contrario la segunda proposición choca con la primera, si hay incompa-



ESC



la providencia que fijaba un término para justificarla.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 2ª.

6. Escepción de falta de personería.—Por carecer de derecho para deducir la acción, debe ser rechazada si se opone como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 9, Ser. 2ª.

7. Escepción de falta de personería.—La autorización del marido á la mujer para comparecer en juicio al solo objeto de oponer la escepción de falta de personalidad, no importa que pueda entrar al fondo de la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 537, Ser. 2ª.

8. Escepción de falta de personería.—Opuesta, aun cuando el mandante la asuma, ántes de la resolución, es pasible de las costas causadas.—Jur. Com., tom. 1, pág. 501, Ser. 2ª.

9. Escepción de falta de personería.—Solo procede como dilatoria, cuando se refiere á la forma; si hace al fondo de la cuestión debe oponerse al contestarla.—Jur. Com., tom. 3, pág. 306, Ser. 2ª.

Escepción de falta de personería.—Véase: *Interdicto*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 23—*Falta de personería*, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8—*Endoso en blanco*, núm. 1.

1. Escepción de incompetencia.—No debe conceptuarse dilatoria, cuando se funda en la falta de personería del de-

tilidad con ella, la cuestión nuevamente propuesta está decidida y hay cosa juzgada.

6—Véase el núm. 1.

7—Autorizada la esposa para articular de incontestación en una demanda, no puede decirse que queda autorizada para otra cosa, pues esa autorización restringida como está en la misma ley, debe interpretarse también restrictivamente, y en manera alguna puede ampliarse.

9—Véase los núms. 1 y 2.

1—Opuesta la escepción como dilatoria debe ser rechazada, porque la cuestión de si es el demandado responsable ó no, se refiere

EMB

mandado por depender del gobierno nacional, único responsable de sus actos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 453, Ser. 2ª.

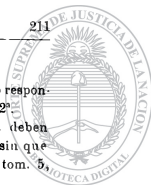
2. Excepción de incompetencia.—Al oponerla deben expresarse claramente las razones en que se funda, sin que puedan alegarse otras en 2ª Instancia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 128, Ser. 2ª.

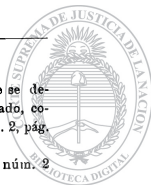
3. Excepción de incompetencia.—Fundado en el carácter de extranjero del ejecutado, es procedente aun cuando no se encuentre entre los enumerados por el Cód. de Com.—Jur. Com., tom. 2º, pág. 45, Ser. 2ª.

al fondo, es una razón general de oposición al derecho que invoca el actor personalmente contra el demandado, la que no puede ventilarse sino como principal. Comprobada la irresponsabilidad del demandado, la acción fallaría por su base, haciendo imposible su continuación: no es pues una excepción que dilata la entrada al juicio.

2—La excepción opuesta debe quedar definida en los términos aducidos en 1ª Instancia, pues en 2ª no sería posible la discusión sobre los nuevos argumentos ó hechos.

3—Esta sentencia fué revocatoria de la de primera instancia, habiéndose resuelto en esta que esta excepción no es precedente tratándose de papeles comerciales, por cuanto aquí se trataba del cobro de un pagaré concebido á la orden, equiparado á las letras de cambio por el art. 916 del Cód. de Com., siendo así que contra la acción ejecutiva de una letra de cambio, no procede dicha excepción por no estar enumerada entre las únicas declaradas admisibles en el art. 852, aplicable en el caso presente, art. 917 *ibid*—que si bien la excepción de incompetencia figura entre las enumeradas en el art. 483 del Cód. de Proc., como admisible en el juicio ejecutivo, su admisibilidad debe juzgarse por el Cód. de Com. en la parte que especialmente legisla sobre las letras de cambio, que por el hecho de nacer de una de fondo tiene prelación sobre la de forma. La Cámara revocó esta resolución fundándose en que, aun cuando debiera darse al artículo 813 del Cód. de Proc. la interpretación más absoluta, la excepción de incompetencia sería procedente, por que está autorizada por el art. 100 de la Constitución que en todo prevalece sobre las demás leyes. La procedencia de la excepción está autorizada por el art. 2 de la ley sobre jurisdicción y Comp. de los Tribs. Nacs., y en el inc. 2 del art. 111 de la Ley Org. de los Tribs. de la Cap.





ESC

4. Excepción de incompetencia.—Siempre que se declare procedente, aunque sea facultativa del ejecutado, corresponde la condenación en costas. —Jur. Com., tom. 2, pág. 45, Ser. 2ª.

Excepción de incompetencia.—Véase: *Demanda*, núm. 2.—*Juicio verbal*, núm. 1.—*Competencia*, núm. 6.

1. Excepción de inhabilidad de título.—Solo es procedente cuando se funda en defectos del título mismo capaces de suprimir su fuerza ejecutiva ó en no estar comprendido entre los que la ley considera como tales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 551, Ser. 2ª.

2. Excepción de inhabilidad de título.—Opuesta á una regulación judicial, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 546, Ser. 2ª.

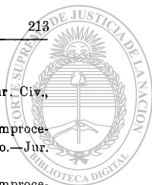
3. Excepción de inhabilidad de título.—Es improcedente cuando se opone á una boleta de impuestos municipales

4—La excepción se declaró procedente, sin imposición de costas: la parte vencedora pidió que se declarase que las costas eran á cargo del vencido y por una ampliación de la resolución así se declaró. Esta resolución está de acuerdo con lo preceptuado en el art. 507 del Cód. de Proc., pero está en contra de lo resuelto por esta misma Cámara. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Jurisdicción potestativa* n° 1: La S. C. P. ha dicho también que no puede ser condenado en las costas el litigante que ocurre á una jurisdicción competente en razón de la materia del juicio, aun cuando resulte que es incompetente por excepción personal del demandado, que no era conocida; tom. 5, pág. 103, Ser. 1ª.

1—Así lo ha establecido la jurisprudencia de los tribunales, la que debe ser modificada porque no consulta la verdadera doctrina establecida por nuestras leyes. Hemos refutado esta jurisprudencia, como puede verse en el tom. 2 de la Inst., verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4 y nota.

2—Siempre que la regulación esté ejecutoriada y consentida.

3—El art. 64 de la Ley Org. Municipal autoriza á hacer efectivo por vía de apremio judicial, el cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales, sirviendo de *título suficiente para la ejecu-*



ESC

debidamente espedida y con los recaudos de ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 557, Ser. 2ª.

4. Excepción de inhabilidad de título—Es impropia opuesta á la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 35, Ser. 2ª.

5. Excepción de inhabilidad de título—Es impropia cuando se opone á la ejecución de un pagaré equiparado por la ley á la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 355, Ser. 2ª.

6. Excepción de inhabilidad de título—Que es impropia en la ejecución del capital importe de un pagaré á la orden, lo es también cuando se ejecutan los intereses.—Jur. Com., tom. 3, pág. 219, Ser. 2ª.

7. Excepción de inhabilidad de título—Aunque admisible en el juicio ejecutivo, según el Cód. de Proc., no lo es en la ejecución de las letras de cambio por no estar incluida entre las enumeradas por el Cód. de Com. como únicas admisibles.—Jur. Com., tom. 3, pág. 355, Ser. 2ª.

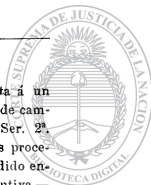
ción, la boleta respectiva con el visto bueno del Intendente Municipal.

4—El art. 852 del Cód. de Com. ant., no enumeraba esta excepción entre las únicas declaradas como admisibles en la ejecución de una letra de cambio. Esta disposición ha sido reproducida en el nuevo Cód., art. 676.

5—Por las razones espuestas en el número anterior. Esto es exacto tratándose de pagarés comerciales, mas no lo es con relación á pagarés ó documentos civiles con carácter ejecutivo. Sin embargo, la Cámara de lo Civil ha declarado que tampoco es procedente aun tratándose de obligaciones no comerciales; jurisprudencia que la hemos combatido nosotros constantemente, y que alguna vez hará camino, cuando la Cámara se preocupe debidamente de los altos intereses que la están confiados. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4, con su nota.

6—En virtud del aforismo de que lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal.

7—Véase el núm. 5.



ESC

8. Escepción de inhabilidad [de título]—Opuesta á un pagaré comercial equiparado por la ley á una letra de cambio, es improcedente.—Jur. Com., tom. 2, pág. 264, Ser. 2ª.

9. Escepción de inhabilidad de título—Solo es procedente cuando se funda en no encontrarse comprendido entre aquellos á los cuales la ley reconoce fuerza ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 525, Ser. 2ª.

Escepción de inhabilidad de título—Véase: *Inhabilidad de título*, núms. 1 y 2.

1a. Escepción de juego—El comitente que se limita á oponer la escepción de juego á la demanda del corredor sin desconocer su veracidad, debe abonar las diferencias sin que aquél esté obligado á justificar en autos el pago hecho á los terceros.—Jur. Com., tom. 4, pág. 342, Ser. 2ª.

Escepción de juego—Véase: *Jurisdicción*, núm. 9.

1b. Escepción de legítima defensa—Es procedente siempre que la agresión subsista y pueda repetirse el ataque que pone en peligro la vida.—Jur. Crim., tom. 1ª, pág. 190, Ser. 2ª.

2. Escepción de legítima defensa—Solo subsiste cuan-

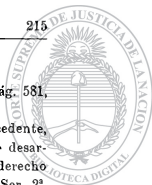
8—Véase el núm. 4 y su nota.

9—Esta resolución es acertada tratándose de letras de cambio ú otros papeles que le están equiparados, pero no sucede lo propio tratándose de una ejecución civil. Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4 y su nota.

1a—Es principio general admitido hoy, que las operaciones de bolsa producen acciones exigibles en juicio; siendo exigibles, y no negándose el pago hecho á tercero, resulta que el obligado debe satisfacer su obligación.

1b—Entre las reglas que se establecen para el uso de la legítima defensa y entre las escepciones que se refieren para que esta escepción sea admisible, está comprendida la de que al emplear el agredido la violencia, subsista todavía el peligro, persistiendo el ataque.—Art. 81, inc. 8, Cód. Pen.

2—Véase la nota precedente.



ESO

do el peligro es inminente.—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 581, Ser. 2ª.

3. Excepción de legítima defensa—Es improcedente, aun comprobado el ataque, si el provocado consigue desarmar al contrario, y con esa arma estralimitando su derecho ocasiona la muerte.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 357, Ser. 2ª.

4. Excepción de legítima defensa—Es improcedente si de antos resulta su inverosimilitud.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 417, Ser. 2ª.

Excepción de legítima defensa—Véase: *Prueba*, núms. 19, 20 y 21—*Atentado á mano armada*, núm. 3.

1. Excepción de litispendencia—Solo puede fundarse en la identidad entre uno y otro juicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 23, Ser. 2ª.

2. Excepción de litispendencia—Fundada en un juicio ordinario, es improcedente si se opone en el ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 320, Ser. 2ª.

3. Excepción de litispendencia—Es improcedente, si se funda en un litigio que tenga distinto objeto.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 425, Ser. 2ª.

4. Excepción de litispendencia—Solo procede cuando existe identidad de personas, causa y objeto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 2ª.

3—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Legítima defensa*, núm. 1616; y tom. 2, verb. *Excepción de legítima defensa*, núm. 1.

1—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Excepción de litispendencia*, núm. 1061, y tom. 2, verb. *Litispendencia*, núm. 1.

2—A este respecto la Cámara ha establecido una jurisprudencia uniforme.—Véase Inst., tom. 1º, verb. *Litispendencia*; y tom. 2, mismo verb., núms. 3, 4, 5 y 6.

3—Véase núm. 1.

4—Porque su objeto principal es cortar la concurrencia de dos sentencias contradictorias sobre una misma cosa. Art. 84, Cód. de Proced.

ESO

5. Excepción de litispendencia.—Fundada en el juicio ordinario, impugnando el pago por consignación, es procedente siempre que se ejecute la misma obligación.—Jur. Com., tom. 1, pág. 321, Ser. 2ª.

6. Excepción de litispendencia.—Es procedente siempre que las mismas cuestiones que se proponen en la demanda hayan sido sometidas á arbitraje.—Jur. Com., tom. 3, pág. 124, Ser. 2ª.

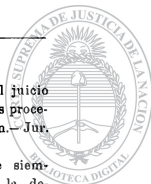
7. Excepción de litispendencia.—E inhabilidad de título, son improcedentes si se oponen á la ejecución de un pagaré, equiparado á una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 114, Ser. 2ª.

Excepción de litispendencia.—Véase: *Litispendencia*, núm. 2.

5—Porque resuelto en ordinario la cuestión, haría inútil el segundo juicio.

6—Esta excepción es procedente siempre que exista juicio pendiente entre las mismas personas y sobre las mismas cuestiones; esta excepción es procedente, sin que se pueda hacer distinción entre los juicios arbitrales y de jurisdicción ordinaria.

7—El pagaré concebido á la orden está equiparado á la letra de cambio.—Art. 916 del Cód. de Com. ant., igual al 740 del vigente.—Contra la acción ejecutiva de una letra de cambio solo se admiten las excepciones enumeradas en el art. 852 del Cód. ant. igual al art. 676 del vigente. Cualquiera otra excepción que no esté comprendida entre las enumeradas, sea de la naturaleza que fuese, no obstaría al progreso del juicio. No estando comprendidas entre las allí enumeradas las expresadas en el sumario, es claro que no serían procedentes. Pero ¿sucederá lo mismo en las ejecuciones que no tengan por origen los pagarés á la orden y las letras de cambio? La Cámara de lo Civil ha dicho que si contra la opinión de los prácticos y de la doctrina universalmente aceptada. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4, donde combatimos esta jurisprudencia que se pretende establecer aun para los papeles no comerciales, que no sean letras de cambio ú otros papeles que les estén equiparados por la ley. Si se trata de la ejecución de obligaciones civiles la excepción debe ser admitida.



ESC

1a. Excepción de nulidad—Fundada en la inhabilidad del título por tratarse de una obligación condicional, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 2ª.

Excepción de nulidad—De título. Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 9.

1b. Excepción de pago—Improbada, corresponde se lleve adelante la ejecución.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 501, Ser. 2ª.

2. Excepción de pago—La consignación al librarse el

1a—Se dijo de nulidad de un juicio fundado en que el juicio era nulo por cuanto la obligación por la que se inició ejecución, no era simple sino condicional, y porque habiendo sido cedido el crédito no había sido notificada la cesión al deudor. Esta excepción no está de acuerdo con lo preceptuado en el art. 489 del Cód. de Proc., que solo autoriza á decir de nulidad de la ejecución por violación de las formas que para ello se establecen. Cumpliéndose esa prescripción, la excepción de nulidad no procede. La nulidad de la ejecución no puede consistir sino en la nulidad del procedimiento de la misma ejecución. Las excepciones se refieren á los derechos que asisten al deudor para negar á los documentos la aparejada ejecución de que deben estar legalmente revestidos ó al derecho del acreedor, pero jamás al juicio que ha de seguirse posteriormente sino para el caso previsto por la ley, de violarse las formas mismas de la ejecución. ¿En qué estación del juicio debe y puede oponerse la excepción de nulidad de la ejecución? En cualquier estado en que se cause, ya sea antes como después de la citación de remate. Esta parte de la sentencia viene á resolver una cuestión debatida en los Tribunales. Se ha pretendido que solo puede decirse de nulidad de la ejecución en la misma estación que las demás excepciones, es decir, al ser citado de remate, lo que es un evidente error. Así en el caso presente la Cámara ha dicho «Si la nulidad hubiera de referirse al título mismo con que él se ejecuta, habría de interponerse en el mismo término de las demás excepciones, y entonces no se podría hacer por defectos ulteriores del procedimiento; cuando la violación de las formas de la ejecución pueden ser anteriores como posteriores.»

1—Si no se comprueba el pago de la suma que se cobra, la sentencia debe obligar al deudor á su pago.

2—De acuerdo con los arts. 725, 738 y 759 del Cód. Civ. El que designa una suma bajo la condición de que el acreedor no disponga de ella, no paga porque el pago supone que el acreedor puede disponer de lo que se le adeuda, siempre que no esté inhabilitado por una causa estraña al deudor.



ESC

mandamiento oponiéndose á la estracción no puede fundar la escepción de pago.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 525, Ser. 2ª.

Escepción de prescripción—Véase: *Derecho de acusar*, núm. 1.

1b. Escepción de prescripción treintenaria—Cuando se funda únicamente sobre escritura pública, la recepción á prueba es improcedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 584, Ser. 2ª.

1b. Escepción de provocación—Como circunstancia atenuante del delito, debe ser justificada por el reo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 538, Ser. 2ª.

Escepción dilatoria—Véase: *Escepción de falta de personería*, núms. 1 y 2—*Prescripción*, núms. 1 y 8—*Maternidad natural*, núm. 1—*Escepción de falta de personería*, núm. 9.

1c. Escepciones—El término para oponerlas es perentorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 414, Ser. 2ª.

2. Escepciones—Deben oponerse con arreglo á la división que fija la ley, sin que pueda oponerse y fundarse bajo un nombre, otra que tiene distinto significado en derecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 2ª.

3. Escepciones—El Juzgado no está obligado á resolver otras que no sean las determinadas como legítimas por la ley, y aún éstas en el caso de haberse opuesto precisándolas clara y determinadamente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 242, Ser. 2ª.

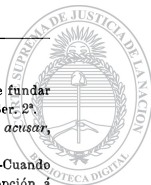
1a—En el caso presente no existían hechos controvertidos.

1b—Art. 159, Cód. Pen. ant.

1c—Se entiende que se trata de las escepciones dilatorias—arts. 83 y 46, inc. 1 del Cód. de Proc.

2—Este sumario no ha sido materia de resolución en la Cámara.

3—Los arts. 485 y 487 del Cód. de Proc., establecen que cuando el deudor se opone á la ejecución deduciendo escepciones, es de su deber determinarlas con precisión; al exigir esto la ley, ha tenido por objeto facilitar al ejecutante y al Juez á fin de que puedan apreciar si son ellas admisibles y si por consiguiente debe ó no dárseles la tramitación que corresponde según prescripción legal.



ESC

4. Escepciones—Solo puede oponerlas el demandado después de habérsele dado traslado de la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 112, Ser. 2ª.

5. Escepciones—La presentación de un escrito sin oponerlas, no interrumpe el término para contestar la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 61, Ser. 2ª.

6. Escepciones—El obligado puede oponer al cesionario todas las que tenga contra el cedente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 174, Ser. 2ª.

7. Escepciones—El reconocimiento de la deuda por el demandado, hace procedente el embargo preventivo, las escepciones solo puede resolverlas el Juzgado al dictar sentencia definitiva.—Jur. Com., tom. 3, pág. 467, Ser. 2ª.

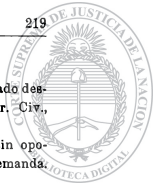
Escepciones—Véase: *Hechos*, núm. 1—*Término*, núm. 3—*Tribunal arbitral*, núm. 1—*Prueba*, núms. 8 y 25—*Rebel-día*, núm. 2—*Fiador*, núm. 3—*Juez exhortado*, núm. 1—*He-*

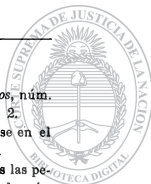
4—Cuando no se ha corrido traslado de la demanda, ni se ha emplazado al demandado para que comparezca á estar á derecho, no hay en realidad pleito pendiente: así lo dice la ley de Part. «Los emplazamientos son comienzo é raiz de todo pleito» Proenío, Ley 1, tit. 1, Part. 3ª. Por otra parte, según el art. 83 del Cód. de Proc., la estación para deducir las escepciones es dentro de nueve días á contar desde la citación. Si esta no ha sido hecha, la escepción no procede.

5—La ley no autoriza por regla general, la suspensión del término para contestar la demanda cuando no se oponen escepciones, pues hay casos en que es necesario dar cumplimiento á ciertas prescripciones de la ley de fondo, en cuyo caso debe suspenderse el término ó darse uno nuevo ó mayor. Así sucede cuando el demandado por una acción reivindicatoria pide que sea citado de evicción el vendedor. La práctica de los Tribunales así lo ha establecido: también la jurisprudencia lo ha resuelto del propio modo.

6—Art. 1474, Cód. Civ.

7—En cuanto á la primera parte—art. 443, inc. 2 del Cód. de Proc.—En cuanto á la segunda, es evidente que no puede resolverse sino en definitiva, después de recibidas las pruebas y tramitadas en forma las escepciones que se hubieren opuesto.





ESO

chos, núms. 2 y 3—*Documentos*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 9—*Jurisdicción*, núm. 3—*Término de prueba*, núm. 2.

1a. Excepciones dilatorias—Todas deben oponerse en el mismo escrito.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 122, Ser. 2ª.

2. Excepciones dilatorias—Opuestas y rechazadas las perentorias, solo pueden oponerse contestando la demanda, aún cuando sean de las que aceptadas impidan el ingreso al juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 417, Ser. 2ª.

3. Excepciones dilatorias—La no presentación de los documentos en que se funda la acción, no puede dar origen a estas excepciones.—Jur. Com., tom. 3, pág. 460, Ser. 2ª.

4. Excepciones dilatorias—No pueden resolverse como tales las que hagan al fondo del litigio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 156, Ser. 2ª.

5. Excepciones dilatorias—Deben oponerse conjuntamente en el mismo escrito.—Jur. Com., tom. 3, pág. 156, Ser. 2ª.

Excepciones dilatorias—Véase: *Prueba*, núm. 1—*Término extraordinario*, núm. 4.

1b. Excepciones perentorias—Que la ley permite antes

1a—Art. 86 del Cód. de Proc.

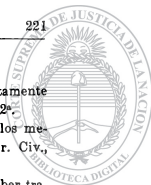
2—Véase: verb. *Excepciones Perentorias*, núm. 1 con su nota.

3—Esta es la jurisprudencia constantemente establecida en nuestros tribunales. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Excepciones dilatorias*, núms. 1075 y 1076; *Defecto legal*, núm. 761; *Documentos*, núms. 910 y 911.

4—Las que hacen al fondo de la cuestión son siempre perentorias, pues las dilatorias solo tienen el efecto de retardar la entrada al juicio. No hay excepción dilatoria admitida por la ley que haga al fondo de la causa.

5—El art. 86 del Cód. de Proc. dice: A un mismo tiempo y en *un mismo escrito*, alegará el demandado todas las excepciones dilatorias.

1b—Si bien el art. 95 del Cód. de Proc., autoriza al demandado para alegar en forma de artículo previo, antes de contestar la demanda, las excepciones perentorias que enumera, debe entender-



ESO

de contestar la demanda, deben ser opuestas conjuntamente con las dilatorias.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 417, Ser. 2ª.

Escribanos—Inscriptos en la matrícula durante los meses de Febrero, Abril, Mayo y Junio de 1888.—Jur. Civ., tom. 4, págs. 33, 243, 468 y 489, Ser. 2ª.

2. **Escribanos**—En cuya oficina se justifique haber tramitado un expediente, es responsable de su presentación mientras no exhiba recibo de descargo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 469, Ser. 2ª.

3. **Escribanos**—Inscriptos en la matrícula durante los meses de Agosto, Setiembre y Octubre de 1888; Abril, Mayo, Junio y Julio de 1889.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 136, 323 y 472; tom. 8, págs. 64, 335, 398 y 505.

Escribanos—Véase: *Instrumentos públicos*, núms. 2 y 4 —Inscripciones, núm. 1 —Testamento, núm. 6.

Escribanos de la Provincia—Véase: *Escrituras públicas*, núm. 4.

1. **Escrito**—Aun cuando éste no llene las exigencias de

se que solo puede usarse de ese derecho dentro de los nueve días que para las articulaciones de previo pronunciamiento acuerda el art. 83. El art. 96 dispone, que el procedimiento para la sustanciación de las excepciones perentorias que se oponen como dilatorias sea el mismo que para estas últimas se establece, y el art. 86 dice que á un tiempo y en un mismo escrito debe alegar el demandado todas las excepciones dilatorias, y que no haciéndolo así solo podrá usar de los que no alegue, contestando á la demanda. El Cód. de Proc. ha tratado de abreviar los juicios, y si ha acordado al demandado el derecho de alegar las excepciones perentorias de cosa juzgada, transacción y prescripción treintenaria, formando con ellas artículos de incontestación, ha sido porque la naturaleza de esas excepciones no atañe en realidad al fondo del pleito, y pueden por consiguiente oponerse conjuntamente con las dilatorias las que por su carácter impiden el ingreso al juicio.

1—Una diligencia de prueba fué pedida dentro del término hábil prescrito por la ley, pero el escrito contenía algunos claros, y el Juzgado ordenó que se llenaran los claros á fin de proveerse: cuan-



ESO

la ley por su forma, el cargo del actuario es válido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 328, Ser. 2ª.

2. **Escrito**—La forma imperfecta que pueda resultar entre el encabezamiento del escrito y la esposición de los hechos en el cuerpo del mismo, no puede fundar la escepción del defecto legal.—Jur. Com., tom 3, pág. 124, Ser. 2ª.

Escrito—Véase: *Mandato verbal*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 7 y 8—*Rebeldía*, núms. 1, 2 y 5—*Instrumentos públicos*, núm. 4—*Escepciones*, núm. 5—*Testamento*, núm. 6—*Escepciones dilatorias*, núm. 5.

Escritos—Véase: *Atestación*, núm. 1—*Incidente*, núm. 2.

Escritura de venta—Véase: *Nulidad*, núm. 2.

do se dió cumplimiento á este auto ya la prueba era estemporánea. El Juez de 1ª Inst. dijo: que la parte habia perdido el derecho á la produccion de la prueba solicitada, porque el art. 118 del Cód. de Proc. ordena, que la prueba sea pedida, ordenada y practicada dentro del término: que si no se podia dar cumplimiento á esta prescripción legal, era tan solo debido á una causa imputable al interesado por no haber llenado los claros de acuerdo con lo ordenado por el Juzgado. Este auto fué dictado por el Dr. Gimenez, actual Camarista, y revocado por la Cámara, fundándose en que si la parte hubiese tenido conocimiento de la exigencia del juzgado inmediatamente después de dictado el auto habria tenido tiempo de llenar los claros, quedando así en tiempo hábil la presentación de la prueba. De lo espuesto resulta que el sumario no es del todo exacto, pues si se presenta un escrito el último dia hábil para la *producción* de la prueba y ese escrito no reúne los requisitos legales, aunque estos se llenen al dia siguiente ya la prueba seria pedida estemporáneamente y de consiguiente fuera de las condiciones exigidas en el art. 118 citado. Resulta pues, que aun dado el caso de que se ponga cargo por el actuario á un escrito pidiendo una medida probatoria, si ese escrito es deficiente y esa deficiencia no puede llenarse dentro del término legal, el cargo puesto por el actuario no habilita la produccion de la prueba.

2—Tal circunstancia no implica otra cosa sino que se ha sufrido error al redactar el escrito, error que en manera alguna puede fundar una escepción de defecto legal, siempre que de su interpretación combinada pueda deducirse con claridad lo que se pide.



ESC

1a. Escritura pública.—La transferencia en esta forma de un boleto de compraventa de inmuebles, no debe abonar el sello exigido por la ley.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 25, Ser. 2ª.

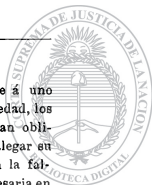
1b. Escritura pública.—El obligado á elevar á escritura pública, una venta concertada en instrumento privado y que no cumple la obligación, debe resarcir los daños y perjuicios que con su negativa irroga al otro contratante.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 293, Ser. 2ª.

2. Escritura pública.—La presentación, por el demandado, de una escritura pública, como prueba de la excepción, obliga á los tribunales á declarar su validez ó nulidad, aun cuando esta cuestión no hubiese sido deducida en la demanda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 2ª.

1a—Véase: Transferencias, núm. 1.

1b—Arts. 1185 y 1187, Cód. Civ.

2—El quasi-contrato de litiscontestación se forma por la demanda y la contestación, y en caso de reconvencción por el traslado de ésta evacuado por el actor. El art. 102 del Cód. de Proc., establece que tanto en caso de reconvencción como asimismo cuando al contestar la demanda se presentan documentos por el demandado, «se dará traslado al demandante». ¿Cuál es el objeto de este traslado? Oir al actor á cerca de esos documentos; y ¿se dirá que lo que el actor esponga á cerca de ellos, no puede ser tenido en cuenta por el Juez al sentenciar? Evidentemente que tal tesis no puede sostenerse: porque el traslado prescripto por el art. 102 citado, sería inoficioso y no tendría objeto práctico. La ley habría ordenado un trámite inútil, lo que no es posible ni lógico suponer. Así es que cuando de una demandada se conlleva traslado al demandado y éste presenta documentos que enervan la acción instaurada, el actor puede decir de nulidad ó falsedad de ese documento y la discusión que sobre esos puntos verse, aunque no hayan sido formulados ni en la demanda, ni en la contestación, y tan solo al evacuar el traslado que de ellos les fué conferido al actor. Estas cuestiones que se suscitan con motivo de documentos presentados, son accesorias del juicio principal y como tal deben ser resueltas conjuntamente con él.



ESC

3. Escritura pública—Adjudicado el inmueble á uno de los socios en la cuenta de liquidación de la sociedad, los herederos de los que hubiesen fallecido se encuentran obligados á otorgarle escritura pública sin que puedan alegar su falta de intervención en la liquidación social ni aun la falta de la escritura pública que la ley solo reputa necesaria en la transferencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

4. Escritura pública—Otorgada en esta Capital por escribano de la Provincia, aunque fechada en la ciudad de La Plata, son nulas y de ningún valor.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 57, Ser. 2ª.

Escritura pública—Véase: *Cesión de acciones litigiosas*, núm. 1—*Demanda*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 1—*Condomínios*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 17—*Término*, núm. 8—*Testigos*, núms. 6 y 7—*Trasmisión judicial*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 11—*Simulación*, núm. 2—*Institución de personas*, núm. 1—*Cesión*, núms. 2 y 3—*Pagaré*, núm. 1—*Venta de cosa ajena*, núm. 1—*Protocolizados*, núm. 1—*Contrato*, núm. 3—*Remate*, núm. 1—*Tercería de dominio*, núm. 1—*Título*, núm. 4—*Transferencia*, núm. 1.

Escrituras—Véase: *Firma del comprador*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 4—*Obligación*, núm. 3—*Personería*, núm. 1—*Protocolos*, núm. 1—*Simulación*, núm. 1.

Escrituras públicas—Véase: *Declaraciones*, núm. 1—*Vendedor*, núm. 2.

1. Escrituración—La negativa categórica, del demanda-

1.—El art. 980 del Cód. Civ., exige para que sea válido un instrumento público, que él se estienda en el territorio asignado al oficial público para el ejercicio de sus funciones. Faltando este requisito, la escritura es nula como instrumento público, art. 986, pero vale como documento privado, art. 987.

1.—La demanda se entabló pidiendo tan solo la escrituración forzada fundándola en los arts. 1185, 629 y 630 del Cód. Civ. Se evacuó el traslado diciendo que en el boleto acompañado por el actor

ESC

do por escrituración, al cumplimiento de la obligación, hace procedente el rechazo de la demanda, pues ésta no podría prosperar sino mediante la violencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 275, Ser. 2ª.

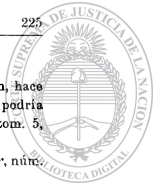
Escruturación—Véase: *Compra*, num. 2—*Vendedor*, núm. 1—*Comprador*, núms. 5 y 6—*Titulos*, núm. 6.

1. Escusación—El haber sido tutor ó curador de un menor, no es causal de escusación para entender en el espediente como Juez, salvo los casos en que exista opinión emitida.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 370, Ser. 2ª.

Especies metálicas—Véase: *Especulación*, núm. 1.

se estipuló como condición una cláusula penal de 2,000 pesos que pagaría aquel que faltase al cumplimiento del convenio, y que fundado el demandado en el derecho que le acuerda el mismo documento, prefería satisfacer la pena establecida. Dijo además que el art. 1185 citado por el actor se complementa con el art. 1187, que no impone la escrituración forzada sino la pena de resolver la obligación en el pago de pérdidas é intereses, y que como éstos estaban fijados de antemano, con pagar su monto quedaba completamente librado de toda obligación. Como el objeto único de la demanda era obtener el cumplimiento de la obligación de hacer consignada en el documento, y como el art. 1187 no concede al actor el derecho para obtener la ejecución forzada en caso de resistencia ó negativa del obligado, el art. 629 no es aplicable porque la ejecución forzada solo puede tener lugar cuando no fuese necesaria violencia contra la persona del deudor; siendo así que no puede negarse que tratándose de escriturar contra la voluntad del deudor sería necesaria esa violencia. Y aun dado el caso que fuese posible esa ejecución forzada, no procedería en este caso en que está sometido á una disposición especial de la ley, art. 1187, que limita el alcance del art. 629, y que debe aplicarse exclusivamente. El Juzgado no pudo pronunciarse en cuanto á los daños é intereses, por cuanto la demanda solo pedía la ejecución forzada. El Juez no podía resolver sino de acuerdo con las bases de la litiscontestación.

1.—El que ha sido tutor ó curador de un menor no queda impedido en absoluto para conocer como Juez en cualquier asunto que éste pueda tener más tarde, después que hubiese cesado su incapacidad, sino solamente en aquellos en que hubiese intervenido como tal tutor ó curador.



ESP

1. Especulación—Ó agio, á la alza y baja de los títulos de crédito ó especies metálicas, no es un acto ilícito, y en consecuencia los tribunales pueden obligar al cumplimiento

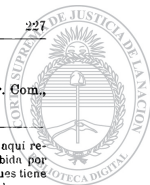
1—El acto celebrado, para obtener un beneficio, por medio de la compra y venta de géneros comerciales, es el tráfico en que estriba casi todo el comercio moderno. El derecho de *comerciar*, de ejercer toda industria lícita, es una de las garantías espresamente autorizadas por el art. 14 de la Const. Nac. En el estado actual del mundo mercantil, la libertad de comercio reposa por completo sobre esta libertad económica. Esta cláusula constitucional, vino á abolir nuestro derecho colonial, que según la espresión de Alberdi, era una compilación de prohibiciones de comprar y vender. La primera ley dictada en nuestro país consagró la comercialidad de la compra y venta de cosas muebles para *recenderlas ó alquilar su uso*, comprendiéndose entre ellos la moneda metálica, títulos de fondos públicos, acciones y papeles de créditos endosables.—Art. 515 Cód. de Com. ant. y 451 del vigente.—Aquel artículo derogó las antiguas leyes españolas que prohibían contratar á término sobre estas especies: y no podía ser de otra manera, pues la obligación á término no es sino una obligación al contado desventurada y favorecida por el crédito. Y es por esto que Courtois pregunta: si la compra-venta es generalmente buena al contado ¿qué es lo que impide que sea ella también buena á término? Lo que caracteriza el acto de comercio es la intención del sujeto que lo celebra, que desea procurarse un beneficio, y esta intención es la que genera la especulación. Es tan esencial la especulación, á la comercialidad del acto, que sin ese propósito deja de ser comercial.—Massé, núm. 1390; Aletauz, núm. 2912; Bedarride, De la jurisdicción comercial, núms. 201 y 202.—Alguien ha dicho, muy acertadamente, que la especulación es al comercio lo que la circulación de la sangre al cuerpo humano: prohibir la especulación es suprimir la vida. Si la especulación juega un rol tan importante en la economía comercial, hasta haber sido materia de una garantía especial consagrada por la Const., los tribunales no pueden declarar ilícitos los actos celebrados en ejercicio de este derecho, sin que una ley de escepción lo haya calificado así. Cuando altas conveniencias de orden público hacen necesaria una desviación del derecho común, la escepción se consagra de una manera espresa y terminante. El art. 19 de la Const. puede aplicarse aquí, cuando dice que nadie está obligado á hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe: una consecuencia de este principio, es el art. 1066 del Cód. Civ., como también el 1071, al establecer que el ejercicio de un derecho



ESP

de los contratos que versen sobre esos valores.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 2ª.

propio no puede constituir como ilícito ningún acto. De aquí resulta que no puede decirse que la especulación sea prohibida por nuestras leyes. En Francia es otra la doctrina sentada, pues tiene por base y causa el Cód. Pen., que en sus arts. 421 y 422, declara punibles las apuestas á la alza y baja de los fondos públicos. Esta doctrina no es aplicable entre nosotros que no tenemos tales prohibiciones, ni en la ley civil, ni en la mercantil—Marcadé, tom. 8, núms. 604 y 627 *in fine*. El juego está definido en el art. 2052 de nuestro Cód. Este contrato, uno de los nominados, cuando los jugadores no faltan á la fidelidad que deben guardarse recíprocamente, nada tiene de contrario á la equidad y al derecho natural, como lo demuestra Pothier, en su tratado del juego, núms. 50 y 51, doctrina que ha seguido nuestro Cód. El juego, cuando es de azar, si bien carece de acción eficaz en juicio, no por eso deja de producir sus efectos civiles como lo demuestran los arts. 515, inc. 5, 517, 518 y 2963 del Cód. Civ. Esta excepción de la ley, como toda excepción debe ser interpretada restrictivamente. Debe observarse, que si bien la especulación ó el agio es un contrato aleatorio, no por ello es necesariamente de juego. No todo contrato aleatorio es *juego*, una prueba de ello son los contratos de seguros sobre la vida, de riesgo marítimo, los de renta vitalicia. Si examinamos los arts. 2052 y 2060 del Cód. Civ., se ve que para que haya *juego* es necesario que haya una convención directa de jugar: la especulación es de indole diversa de la del juego: en el juego es necesario que se apueste una suma determinada, en la especulación la suma perdida ó ganada es una incógnita que más tarde la determinará la ley de la oferta y la demanda, no la voluntad de las partes: entre jugadores una de las partes pierde necesariamente en la opuesta, en la especulación puede ninguno de ellos no perder, como pueden perder ambos, como también pueden ganar los dos. Courtois, en su obra sobre operaciones de Bolsa, pág. 37, dice: «Hay además esta distinción fundamental entre el juego y la especulación. El juego no produce otros resultados que el de hacer pasar el dinero del bolsillo del uno al del otro. No hay para la sociedad, ni beneficio, ni pérdida. Pedro ha perdido. Pablo ha ganado. En la especulación pasa otra cosa. Ella es fecunda ó destructiva, como la industria y el comercio, según la habilidad de los contratantes.» La doctrina dominante en la materia es ésta, la que está sustentada por los escritores modernos. Esta es asimismo la jurisprudencia sentada por la Cámara en otros casos—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Corredor de Bolsa*, núm. 1.





ESP

Espediente—Véase: *Honorarios*, núm. 10—*Iguala*, núm. 1—*Personería*, núm. 1—*Recusación*, núm. 2—*Alimentos*, núm. 4—*Embargo*, núm. 5—*Incapaz*, núm. 1—*Menor*, núm. 1—*Notificación personal*, núm. 1—*Testamento ológrafo*, núm. 4—*Injuria*, núm. 1.

1a. Expediente terminado—No puede pedirse su agregación como parte de prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 405, Ser. 2ª.

Espedientes — Véase: *Juicios*, núm. 2—*Declaraciones*, núms. 1 y 2—*Desaparición*, núm. 1—*Escribano*, núm. 2—*Información*, núm. 4—*Términos*, núm. 10.

Espedientes archivados—Véase: *Documentos*, núm. 9.

Espendedor—Véase: *Billetes falsos de banco*, núms. 1 y 2.

Explicaciones—Véase: *Injuriado*, núm. 1.

1b. Esposa—Aunque se litiguen bienes de su propiedad,

1a. Toda prueba debe quedar permanentemente unida a los autos a fin de que las partes puedan imponerse, cuando quieran a cerca de los hechos alegados y probados. Un expediente agregado como prueba no puede permanecer agregado, sino que debe volver al archivo. Puede pedirse, sin embargo, por los jueces con carácter de para mejor proveer.

1b—Esta resolución se funda, en que si bien el art. 125 del Cód. de Proc., dispone que la confesión solo puede exigirse entre los que son parte en el juicio, no es posible desconocer que esa confesión puede afectar a la sociedad conyugal, siendo así que las posiciones solo pueden ponerse al que está en condiciones legales de concurrir al juicio y obligarse legalmente, mientras que la mujer casada es incapaz, según nuestras leyes, siendo su representante necesario el marido; de donde se deduce que no le es dado obligarse ni respecto de sus bienes sean propios o gananciales. Esta incapacidad no desaparece por el hecho de haberse otorgado poder con facultad de absolver posiciones, porque de ello, lo único que puede deducirse, es que el marido consintió en que a ese acto concurriese el mandatario, de ninguna manera la mujer. Esa facultad así autorizada por el marido no puede extenderse fuera de las cláusulas en que fué concedida. Esta resolución está de acuerdo con otro caso que se registra en el tom. 4, pág. 9, Ser. 1ª, Jur. Civ. Véase: *Inst.*, tom. 1, verb. *Esposa*, núm. 1147. La S. C. N. ha resuelto lo contrario. Véase tom. 2ª, pág. 315, Ser. 3ª.

ESP

no puede absolver posiciones sin la venia marital. El hecho de haber otorgado poder la esposa con la venia del marido, no modifica la regla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 6, Ser. 2ª.

2. Esposa.—No tiene personería para absolver posiciones sin la venia marital, aún cuando el litigio se siga contra ella.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 595, Ser. 2ª.

3. Esposa.—Que ha renunciado á la herencia del esposo no puede ser obligada á intervenir como heredera en la sucesión de aquél.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 487, Ser. 2ª.

4. Esposa.—El que matare á su esposa, debe ser penado con presidio por tiempo indeterminado, si por existir circunstancias atenuantes, no pudiese calificarse el hecho de asesinato.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 541, Ser. 2ª.

5. Esposa.—No es responsable con sus bienes propios, de

2—Véase nota precedente.

3—Siendo irrevocable la renuncia de la herencia hecha en escritura pública, produce el efecto de considerarse á la renunciante como si nunca hubiese sido heredera—arts. 3345, 3346 y 3351 del Cód. Civ.—Otro sería el caso si se le exigiera que tomara parte en la liquidación de la sociedad conyugal de su difunto esposo.

4—Arts. 83, inc. 6; y 94 inc. 2 del Cód. Pen.

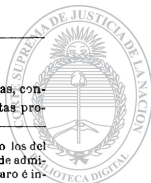
5—Para sostener la tesis contraria se dijo, que el art. 1263 del Cód. Civ., en que se declara que la dote de la mujer, ó sean los bienes que introduce al matrimonio, con los demás que despues adquiera, aunque sea por título propio, como herencia, legado ó donación, forman parte del capital social. Pero al invocarse este fundamento no se advierte que esa declaración solo se refiere á la administración que corresponde al marido, y que debe tener, en todo lo que la mujer no se haya reservado espresamente, y á los frutos que produzca el indico capital, compuesto de todos los bienes de ambos cónyuges que se han de reputar como gananciales comunes. Si bien es cierto que en cualquiera sociedad, su capital responde en todas sus partes á las deudas sociales, esto no sucede sin embargo en la sociedad conyugal, la cual es anómala y solamente en muy pocas cosas, que no se encuentran determinadas de otro modo, según las reglas de las demás sociedades comunes y puramente convencionales. A esto se contesta diciendo que es cierto que el Cód. Civ. en ninguna parte declara terminantemente, que los bienes que la mujer introduce al matrimonio,



ESP

las deudas contraídas por el esposo, ni aun de las multas, condenaciones pecuniarias, indemnizaciones civiles ó costas pro-

ó que adquiriera después á título lucrativo, no respondan como los del marido, á las deudas sociales adquiridas por él en carácter de administrador de la sociedad; pero esto se deduce de un modo claro é indudable, de muchas de sus disposiciones, entre las que se pueden mencionar las siguientes: El art. 1229 declara, con relación á los acreedores del marido, que la confesión del recibo de la dote, no les perjudicará, sino cuando esta constase de las convenciones matrimoniales ó se acreditase por escritura auténtica. Ahora bien ¿cómo podría perjudicar jamás, la confesión del recibo de la dote, á los acreedores, en la suposición de que, en defecto de gananciales y de bienes propios del marido, aquella debiese responder como parte de capital, á las deudas contraídas por el marido? Además, el art. 1251 declara, que la tasación de los bienes de la mujer, sean raíces ó muebles, y la entrega de ellos al marido, aunque se haga bajo valor determinado, no le priva del dominio de ellos, ni les hace pertenecer á la sociedad ó al marido. Luego cuando en otra parte se dice, que estos bienes son capital de la sociedad, no es en el sentido que adquiriendo esta su propiedad, pueda con ellos pagar sus deudas ó las contraídas por el marido como administrador. Por el art. 1254, sin distinción alguna de casos y sin averiguar cuál haya sido el resultado de la sociedad conyugal, es decir, si han habido ganancias, ó si se han sufrido pérdidas, se declara que el marido es deudor á la mujer del valor de todos sus bienes, que á la disolución de la sociedad, no se encuentren invertidos en fincas ó en fondos públicos, ó en fin, depositados en los bancos á su nombre; lo que demuestra claramente que la mujer como socia, no responde de las pérdidas que hubiese tenido la sociedad. Podría pretenderse que esa disposición rige solamente las relaciones de la esposa respecto de su marido, más no de los acreedores de éste, y consiguientemente de la sociedad conyugal; pero ello no es así, como lo demuestran de un modo terminante las disposiciones de los arts. 1258, 1259 y 1260. En efecto, en estos arts. se prevé el caso de concurso del marido ó de la sociedad conyugal; permitiéndose á la esposa retirar de él todos los bienes que le pertenezcan en propiedad; y acordándosele además contra el concurso una acción personal por lo que se le deba de la dote, en igualdad de condiciones á los demás acreedores. Es evidente, pues, que por más que los bienes de la mujer formen parte del capital en la sociedad conyugal, aquélla no responde con éstos á los acreedores sociales, desde que se le permite separarlos del concurso y figurar por los no existentes como acreedora personal; porque nada de esto podría



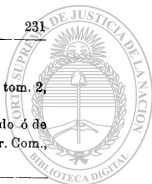
ESP

venientes de delitos cometidos por éste.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 596, Ser. 2ª.

6. Esposa.—Puede legalmente ser fiadora del marido ó de las sociedades mercantiles de que él forme parte.—Jur. Com., tom. 2, pág. 175, Ser. 2ª.

hacer, si como sucede en las demás sociedades, cada uno de los socios respondiese de las deudas comunes con toda la parte que tiene en el capital, y en lo que le correspondía del déficit, con todos sus bienes. En resumen, la esposa no responde con sus bienes propios, de las deudas contraídas por el marido durante la sociedad conyugal; en esto se diferencia de las demás sociedades convencionales y comunes. Es mucho menos responsable de esa manera por indemnizaciones, honorarios ó costas provenientes de delitos cometidos por el marido, lo cual procede también del mismo modo en toda sociedad, como por las reglas comunes: pues ésta no se obliga por delito de cualquiera de los socios. Mucho menos podría corresponderle esa obligación á la esposa en casos como este. Por otra parte, esta interpretación de nuestra ley civil, está de acuerdo con los principios generales del derecho y con la legislación que la precedió, así como con la de otros países. Con efecto, así lo resuelven en general las Leyes 32 y 18, tit. 2, lib. 17 del Digesto; y 13, tit. 10, Part. 5ª que hablando de la sociedad común, hacen responsable, no á ésta sino al socio autor del delito, por el daño que causó por su dolo ó culpa: *si ab maleficio suum dagnatus il ipsum tantum damnum sentire debere*, dice la ley romana. En particular respecto á la sociedad conyugal, lo teníamos también declarado espresamente en el derecho español, el cual establecía que «por el delito que el marido ó la mujer cometiese de cualquier calidad que sea, no pierde el uno por el delito del otro sus bienes, ni la mitad de las ganancias habidas durante el matrimonio.» Ley 10, tit. 4, lib. 10, Nov. Rec. y sus concordantes; Ley 10, tit. 9, lib. 5. R. C., donde se vé que ni aun con su parte de gananciales, y mucho menos con sus propios bienes, es obligada la mujer á satisfacer las responsabilidades pecuniarias que resulten del delito del marido. Goyena en sus concordancias trata este punto y lo resuelve más ó menos en el mismo sentido: tom. 3, pág. 336, art. 1331. Si se examina nuestro Cód. Pen., que hasta hace poco nos rigió, como puede verse en el lib. VII «de las personas civilmente responsables», ó bien el Cód. Civ., tit. VIII «De los actos ilícitos», se observa que en ninguno de ellos se responsabiliza á uno de los cónyuges por delito ó cuasi delito del otro.

6—Esta resolución está de acuerdo con lo resuelto en otro caso. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Esposa*, núm. 1146 y nota.





ESP—EST

Esposa—Véase: *Juicios*, núm. 1—*Terceros*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 8—*Comprador*, núm. 7—*Concubina*, núm. 1—*Irritacion*, núm. 1—*Muerte*, núms. 2 y 3—*Nulidad ó nulidez*, núm. 1—*Circunstancias agravantes*, núm. 1—*Confabulación*, núm. 1.

1a. Esposiciones escritas—Las presentadas por un testigo, no pueden ser consideradas declaraciones aun ratificadas y reconocidas bajo juramento.—Jur. Crim., tom. 2º, pág. 161, Ser. 2ª.

Esposo—Véase: *Sentencia*, núms. 7 y 9—*Porción hereditaria*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 2—*Mujer casada*, núms. 1 y 2—*Ratificación tácita*, núm. 1.

Esposos—Véase: *Nulidad*, núm. 3—*Juicios*, núm. 1—*Separación de bienes*, núms. 1 y 2—*Divorcio*, núms. 1 y 3—*Matrimonio*, núm. 1—*Notificación*, núm. 2.

1b. Estado civil—De la persona que comparece en juicio, no requiere justificación mientras no le sea terminantemente negado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 300, Ser. 2ª.

2. Estado civil—De las personas y el derecho á reclamarlo ó contestarlo en juicio, no puede ser objeto de convenciones ni se extingue por renuncia expresa ó tácita.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 550, Ser. 2ª.

1a—Este sumario no es exacto: la Cámara dijo que una declaración por carta que corría en autos no tenía ningún valor, porque la Ley 31, Tit. 16, Part. 3ª, establece que ninguno ha de mandar por escrito su testimonio al Juez; y la 27 del mismo tit. y part., dice que en pleito criminal debe el Juez por sí mismo tomar las declaraciones. De aquí resulta que siempre que llenen estos requisitos, el testimonio es válido.—Véase: *Inst.*, tom. 3, verb. *Declaraciones*, núm. 12.

1b—Basta la afirmación de su estado hecho por la parte, y solo estaría obligada á justificarlo si le fuese negado. Es constante la jurisprudencia de la Cámara en este sentido. Véase *Inst.*, tom. 2, Verb. *Estado de ciudad*, núm. 1; *Padres*, núm. 1.

2—art. 845, Cód. Civ.



EST

Estado civil—Véase: *Partidas parroquiales*, núm. 1.

Expresión de agravios—Véase: *Sentencia*, núm. 4—*Término*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 9.

1. Estafa—En los delitos de estafa la pena debe graduarse con arreglo al de mayor valor, sin que pueda acumularse las sucesivas.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 282, Ser. 2ª.

2. Estafa—Cuando concorra con el delito de falsificación, solo debe considerarse circunstancia agravante del delito mayor.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 508, Ser. 2ª.

3. Estafa—Los autores ó coautores de la estafa, deben ser castigados con igual pena, cuando el delito hubiera podido perpetrarse sin el acuerdo previo ó confabulación de todos—Jur. Crim., tom. 3, pág. 326, Ser. 2ª.

4. Estafa—El pago de una deuda con documentos falsificados, no puede ser calificado como estafa, el único delito penable en este caso es el de falsificación.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 171, Ser. 2ª.

Estatutos—Véase: *Sociedades anónimas*, núm. 1.

Extensión—Véase: *Medianería*, núm. 1.

Extensión determinada—Véase: *Area determinada*, núm. 1—*Venta*, núm. 4.

Estipulación—Véase: *Contrato de locación*, núm. 3.

Estracción—Véase: *Excepción de pago*, núm. 2—*Acreeedor*, núm. 1.

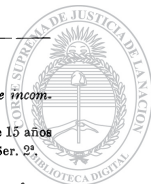
Estranjero—Véase: *Término extraordinario*, núm. 3—*Ma-*

1—Arts. 173 y 202, inc. 2, Cód. Pen, siempre que exceda del máximo legal la suma resultante de la acumulación de las penas.

2—Arts. 52, 87 y 278 del Cód. Pen.

3—Arts. 39 y 40 del Cód. Pen.

4—El pago de la deuda fué hecho á una persona con documentos, falsificando la firma de un tercero: la estafa no surtió efecto porque fueron rechazados de la circulación, unos por el mismo falsificador y otros fueron retenidos.

**EST—EVI**

trimonio, núm. 2—*Fuero local*, núm. 1—*Excepción de incompetencia*, núm. 3.

1a. Estupro—El de una menor que tenga más de 15 años no es pasible de pena—Jur. Crim., tom. 1, pág. 92, Ser. 2ª.

Estupro—Véase: *Virginidad*, núm. 1.

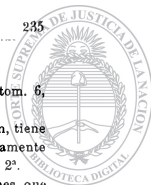
1b. Evicción—El citado de evicción, cualquier que fuese el estado del juicio, no puede retrotraerlo á la demanda, salvo su derecho por las omisiones del demandado, que puedan perjudicarlo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 451, Ser. 2ª.

2. Evicción—Solo el vendedor puede oponerse á la citación de evicción; el que demanda la nulidad de la transfe-

1a—Según el sistema de nuestro Cód. Pen. ant., que estaba en vigencia cuando se cometió el hecho, el delito merecía una pena; pero como al sentenciarse estaba en vigencia el nuevo Código y éste no lo castiga, el delincuente fué absuelto de acuerdo con lo preceptua do en el art. 18.

1b—La Ley 32, tit. 5, Part. 5, establece que «á l más tarde» la citación de evicción puede tener lugar «antes que sean abiertos los testigos, que fuesen aducidos sobre aquella cosa en juicio contra él». De ellas ni de sus correlativas como tampoco de las disposiciones del Cód. Civ., se desprende, que si el citado saliese á la defensa tenga derecho para hacer retroceder el estado en que la causa se encontrase. Por el contrario de ellos fluye, que debe recibirse er. el estado en que se halle la causa, pues pudiendo ser citado hasta antes de la publicación de pruebas, no se comprendería que el juicio se retrotraiga al estado de demanda: que una práctica contraria dañaría notablemente no solo el interés del actor que desea la terminación rápida de su demanda, sino que daña igualmente el interés público que no permite la duración indefinida de los pleitos. Por otra parte, la continuación del juicio en el estado en que o encuentre el citado en nada lo perjudica, pues su derecho queda á salvo por las omisiones que el adquirente citante hubiese cometido dejando de defenderse convenientemente.

2—El vendedor puede oponerse siempre que la citación no se haga en la estación oportuna del juicio. No hay ley que autorice al actor á oponerse á esa citación cualquier que fuese el estado del pleito.



EVI—EXH

rencia carece de personería al efecto.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 466, Ser. 2ª.

3a. Evicción—En la demanda sobre reivindicación, tiene derecho á intervenir el citado de evicción conjuntamente con el demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 395, Ser. 2ª.

4. Evicción—El Banco Hipotecario, en los bienes que transfiere, solo representa al propietario, y en consecuencia no procede se le cita de evicción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 496, Ser. 2ª.

Evicción—Véase: *Citación*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 10.

1. Exhortos—Trámites que deben guardar los jueces de la República para el diligenciamiento de sus exhortos en país extranjero.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 21, Ser. 2ª.

2. Exhortos—Formalidades que exigen las leyes inglesas para dar cumplimiento á diligencias judiciales pedidas por exhortos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 19, Ser. 2ª.

3b. Exhortos—Pidiendo diligencias, deben dirigirse á las autoridades judiciales del país y no á los cónsules argentinos acreditados ante el respectivo gobierno.—Jur. Com., tom. 3, pág. 301, Ser. 2ª.

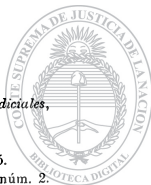
Exigencia de derecho—Véase: *Circunstancia atenuante*, núm. 1.

Exigencias de la ley—Véase: *Escrito*, núm. 1.

3a—En el caso presente el citado de evicción había fallado y solo concurrieron dos de sus herederos manifestando éstos que existiendo otros coherederos respondían por la parte proporcional. Solo en este caso es procedente la intervención del citante y citado de evicción.

4—Ese establecimiento al proceder á la venta de los bienes hipotecados, lo hace en representación del deudor hipotecario que es el dueño de la propiedad, y es sabido que éste es el único que puede ser citado de evicción.

3b—Se pidió que una parte absolviera posiciones, la que tenía su domicilio en el extranjero. Debe librarse exhorto en la forma determinada por los arts. 156 y 201 del Cód. de Proc.



Fabricación—Véase: *Acto de comercio*, núm. 1.

Facultades extraordinarias—Véase: *Actos judiciales*, núm. 1.

Facultades inherentes—Véase: *Suma*, núm. 1.

Facultades mentales—Véase: *Testamento*, núm. 5.

Facultades representativas—Véase: *Sentencia*, núm. 2.

1. Falsedad—De documento, alegado fuera de la estación oportuna, si bien el Juzgado no debe pronunciarse sobre ella en relación al derecho de las partes, está obligado á pasar los antecedentes al Juez del Crimen para la persecución del delito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 220, Ser. 2ª.

2. Falsedad—Esta escepción es improcedente, si no ha recibido los fondos el aceptante de la letra.—Jur. Com., tom. 1, pág. 35, Ser. 2ª.

1—Si bien el orden de proceder en los juicios no permite tomar en consideración un hecho alegado en defensa de una de las partes, el orden público exige que todo delito sea castigado, á cuyo efecto debe remitirse los antecedentes al Juez que corresponda á fin de que sea debidamente sustanciado.

2—El art. 852 del Cód. de Com. ant., no la enumera entre las escepciones que pueden oponerse á la ejecución de una letra de cambio —art. 676, Cód. de Com. vigente.—El art. 488 del Cód. de Proc. no es aplicable, porque esta ley rige tan solo cuando no hay oposición entre sus prescripciones y las del Cód. de Com.—art. 813, Cód. de Proc.

FAL

3. Falsedad—La parcial, no invalida el documento en que consta la obligación.—Jur. Com., tom. 1, pág. 134, Ser. 2ª.

4. Falsedad—La prueba de la falsedad ó de los errores, corresponde a la parte que los alega.—Jur. Com., tom. 4, pág. 48, Ser. 2ª.

5. Falsedad—La acción de falsedad de una obligación suscrita en nombre de una sociedad, es procedente siempre que esta no haya existido, y la prueba corresponde, en este caso, al que afirma la existencia de la sociedad y no al falsamente obligado.—Jur. Com., tom. 4, pág. 243, Ser. 2ª.

Falsedad—Véase: *Testamento ológrafo*, núm. 3—*Autenticidad*, núm. 1—*Partidas parroquiales*, núm. 1—*Firma*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 16—*Confesión*, núm. 4—*Reo*, núm. 1—*Firmas*, núm. 1.

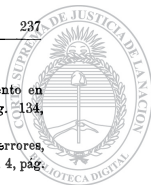
1. Falsificación—La estafa, cuando exista también falsificación, solo debe considerarse circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 508, Ser. 2ª.

3—Siendo la nulidad solo incidental, no invalida lo principal del acto jurídico—Arts. 934 y 1039, Cód. Civ.

4—Se trata de la falsedad contenida en los asientos de los libros de un comerciante, cuya compulsa se produjo como prueba. El contrario dijo que los asientos de los libros contenían partidas falsas: se declaró que podía esa parte comprobar la falsedad ó los errores que esos asientos tuvieran. Los libros de Comercio hacen fé en juicio como medio probatorio, pero sus asientos están sujetos al resultado de la prueba contraria, como toda prueba lo está.—Art. 63 del Cód. de Com. vig. igual al 76 del ant.

5—Es deber de toda persona á cuyo favor se estiende una obligación, averiguar si la razón social que aparece, suscribiéndola, existe ó nó, á fin de salvaguardar sus derechos —Art. 935, Cód. de Com. ant.—Es un principio de procedimiento, que al que alega ó afirma un hecho nuevo en juicio, le incumbe la prueba: de acuerdo con este principio, al que alega la existencia de la sociedad le corresponde la prueba de su existencia.

1—Los arts. 52, 87 y 278 rijen el caso y la pena que debe aplicarse.





FAL

2. Falsificación—Para que exista, basta poner el nombre de otro con intención de defraudar, sin que sea requisito esencial la imitación del carácter de letra.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 527, Ser. 2ª.

3. Falsificación—Justificada en juicio civil la existencia de la falsificación, procede la prisión preventiva del sindicado como culpable.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 525, Ser. 2ª.

4. Falsificación—Siendo la falsificación de la firma de un empleado, un delito penado por el Cód., debe ser castigado independientemente del perjuicio causado—Jur. Crim., tom. 3, pág. 428, Ser. 2ª.

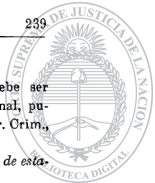
5. Falsificación—El hecho de no haber causado perjuicio alguno la falsificación de la firma de un empleado público, solo debe considerarse como una circunstancia atenuante—Jur. Crim., tom. 3, pág. 428, Ser. 2ª.

2—Juridicamente hablando, falsificar no solo importa imitar, sino también rehacer, adulterar, fingir letra, firmar ó rubricar. El delito de falsificación no depende de la mayor ó menor semejanza con la firma imitada ó fingida, ni depende de la habilidad ó torpeza de su autor.

3 - Existiendo presunciones á cerca del autor de un delito, corresponde su detención preventiva, pues como en todo delito la ley presume el dolo. Ningún valor puede tener la observación de que las circunstancias puedan venir á destruir aquella presunción. Así como cuando consta que una persona ha sido muerta, y existiendo datos sobre quién ha sido el autor de esa muerte, debe procederse inmediatamente á su detención, á pesar de que las circunstancias pueden venir más tarde á demostrar que no ha existido tal delito, porque el autor lo hubiese cometido en defensa propia. Es regla general que existiendo datos respecto de quién pueda ser el autor de un delito, debe procederse inmediatamente á su detención, sin que pueda obstar á esta medida la consideración de que más tarde pueda comprobarse la inculpabilidad al acusado.

4—De acuerdo con el Art. 277 del Cód. Pen. ant., pero debe considerarse como circunstancia atenuante cuando no se ha causado perjuicio—Art. 83, inc. 7 del mismo Cód.

5—Véase nota precedente.



FAL

6. Falsificación—La de documentos privados, debe ser castigada con seis meses de arresto y multa proporcional, pudiendo la primera sustituirse por otra pecuniaria—Jur. Crim., tom. 2, pág. 484, Ser. 2ª.

Falsificación—Véase: *Estafa*, núm. 4—*Tentativa de estafa*, núm. 1.

Falta de aceptación—Véase: *Letra de cambio*, núm. 1.

1. Falta de personería—Por carecer el demandante del derecho que invoca, es improcedente como escepción dilatoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 26, Ser. 2ª.

2. Falta de personería—No puede resolverse como dilatoria esta escepción, cuando ella se refiere al derecho del actor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 325, Ser. 2ª.

3. Falta de personería—Esta escepción, cuando se refiere al derecho del actor, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 330, Ser. 2ª.

4. Falta de personería—Esta escepción opuesta al actor por carecer del derecho que invoca, no puede ser resuelta como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 381, Ser. 2ª.

5. Falta de personería—Fundada en la carencia del derecho del actor para deducir la acción, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 384, Ser. 2ª.

6. Falta de personería—La escepción cuando hace al

6—Arts. 280 y 281 del Cód. Pen. vigente.

1—Porque esta causal ó razón de la escepción afecta al fondo de la causa y solo puede alegarse como razón general de oposición al contestar la demanda. Véase: verb. *Escepción de falta de personería*, núms. 1 y 2.

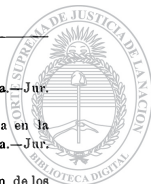
2—Toda escepción dilatoria se refiere a la forma: la falta de derecho del actor se refiere al fondo. Véase: verb. *Escepciones dilatorias*, núm. 4.

3—Véase nota precedente.

4—Véase el núm. 1 y su nota.

5—Véase el núm. 1.

6—Véase: núms. 1 y 2.

**FAL—FALL**

fondo de la acción, es improcedente como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 499, Ser. 2ª.

7. Falta de personería—Esta escepción fundada en la falta de acción, no puede resolverse como dilatoria.—Jur. Com., tom. 4, pág. 11, Ser. 2ª.

8. Falta de personería—La falta de presentación de los documentos en que se funda la acción, no puede fundar una escepción de falta de personería.—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

Falta de personería—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Escepción de falta de personería*, núms. 1, 2, 5, 6 y 8—*Escepción de incompetencia*, núm. 1.

Faltas de ortografía—Véase: *Testamento ológrafo*, número 5.

1. Fallecimiento—De uno de los socios, no produce la disolución de la sociedad, y los que con ella hubieren contratado no pueden desconocer su existencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 437, Ser. 2ª.

2. Fallecimiento—Aun cuando tenga lugar en la Capital, corresponde á los tribunales de la Provincia, el juicio sucesorio, si en ella tenía el causante su domicilio habitual.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 371, Ser. 2ª.

7—Véase el núm. 1 y su nota.

8—La falta de presentación de documentos, al entablar una demanda, tiene su sanción penal en el art. 73 del Cód. de Proc., única consecuencia jurídica que puede originar la omisión.

1—En el contrato se establecía que el fallecimiento de uno de los socios no disolvería la sociedad. El fallecimiento solo causa la disolución de la sociedad cuando ésta se compone de dos socios, pero si consta de mayor número, no—Art. 1758, Cód. Civ.

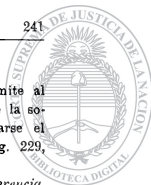
2—El art. 634 del Cód. de Proc., correlativo del 3284 del Cód. Civ., declara que es juez competente para conocer en el juicio de testamentaria, el del último domicilio del difunto. La circunstancia de fallecer accidentalmente una persona en un lugar determinado, no autoriza la competencia del Juez de ese lugar, porque la residencia debe ser habitual y no accidental—art. 92, Cód. Civ.

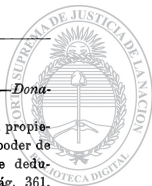
FALL

3. Fallecimiento—El de uno de los socios, permite al Juez de la sucesión, intervenir en la liquidación de la sociedad, pero no le confiere jurisdicción para avocarse el conocimiento del litigio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 229, Ser. 2^a.

Fallecimiento—Véase: *acción de petición de herencia*,

3—En las causas comerciales, se entiende, pues no sucede así en las civiles. El fallecimiento de uno de los socios cuyo nombre figura en la razón social puede producir la disolución de la sociedad—art. 423, inc. 7, Cód. de Com. vig.—Y el art. 423 del mismo, establece que muriendo algún socio que no tenga herederos presentes, el Juez no podrá intervenir en los bienes hereditarios que existiesen en la masa social, ni ingerirse en manera alguna en la administración, liquidación y partición de la sociedad, sino que se limitará á recaudar la cuota líquida que resultase pertenecer á dicha sucesión. Este caso fué juzgado con arreglo á las disposiciones del antiguo Cód., que son á este respecto iguales á las vigentes, con pequenísimas variaciones. El fallecimiento de un socio, puede producir la disolución de la sociedad, y aun atribuir al Juez de la sucesión el derecho de intervenir en la liquidación, inspeccionando y vigilando sus operaciones, ó bien autorizando la forma en que ellas deben practicarse, pero de ninguna manera podría cambiar el carácter de la sociedad, ni hacer que los actos no sean mercantiles. Cuando fallece algún sócio dejando un menor interesado, el Cód. Civ. establece, que el Juez dándose cuenta del estado del negocio, resolverá si ella debe continuar ó no. Establece asimismo que resuelta la continuación de ella, nombrará un tutor para que intervenga en la sociedad en representación del menor, continuando ella en su primitivo carácter, sin trasformarla en manera alguna en civil, único caso en que el conocimiento de la causa correspondería al Juez de lo Civil. En presencia de los arts. 491 y 508 del Cód. Civ., citados, el sumario resuelve lo preceptuado por la ley. Por otra parte, el conocimiento de las causas que corresponden á la jurisdicción mercantil, procede no solo por razón de las personas, sino asimismo por la naturaleza de la causa. La entidad jurídica que se forma en la constitución de las sociedades es distinta de la entidad de cada uno de sus miembros. Resulta que la entidad formada por la constitución de esa sociedad, no cambia de carácter por desaparecer uno de sus miembros, el que por otra parte viene á ser reemplazado por el representante legal nombrado judicialmente: de donde resulta, que esa sociedad no puede sustraerse de la jurisdicción mercantil.





FALL

núm. 3—*Cónyuges*, núm. 2—*Ascendientes*, núm. 1—*Donación*, núm. 3—*Instrumento privado*, núm. 3.

1. **Fallido**—Mientras no se justifique en autos la propiedad del fallido sobre muebles que se encuentren en poder de un tercero, no procede el embargo, debe previamente deducirse acción reivindicatoria.—Jur. Com., tom. 1, pág. 361, Ser. 2ª.

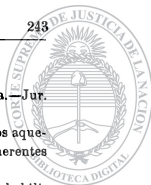
2. **Fallido**—Tiene derecho á recusar al Juzgado en el incidente sobre calificación de quiebra.—Jur. Com., tom. 1, pág. 56, Ser. 2ª.

3. **Fallido**—El fallido no obstante la calificación de la quiebra hecha por el Juez de Comercio, debe ser penado por las trasgresiones que el Cód. Pen. haya previsto, y con

1—En los bienes muebles, la posesión vale título. Para desconocer á un tercero poseedor de muebles su derecho de propiedad, es necesario demandarlo judicialmente, recién entonces puede aplicarse lo dispuesto en el art. 447 del Cód. de Proc., y pedirse un embargo preventivo.

2—El fallido no tiene intervención en los procedimientos del concurso, sino en los casos determinados por el Cód. de Com. Solo es parte el síndico, quien representa los intereses de aquél, por lo cual no puede ser considerado propiamente como parte. Solo viene á ser parte en el incidente sobre calificación de la quiebra, siéndole permitido usar de todos los recursos que la ley concede á los litigantes.

3—La calificación de la quiebra, hecha en el juicio comercial, no debe tomarse como antecedente para el juicio criminal, si no revisten el carácter de infracción ó delito del derecho Penal—arts. 1595 Cód. de Com., y 332 Cód. Pen. ant., y 1106 Cód. Civ.—los cuales establecen, que cualquiera que sea la sentencia en el juicio criminal, la anterior dada en el juicio comercial de calificación de la quiebra, conservará todos sus efectos. La hipótesis de los arts. citados es, que en el juicio criminal, el quebrado puede ser absuelto de la quiebra calificada de fraudulenta en el juicio comercial. El Juez de Comercio, no tiene jurisdicción criminal, y no puede decidir un punto extraño á su jurisdicción. La ley penal toma y analiza el delito *natural*, y el sujeto de este delito es la *persona natural* del hombre, porque el juzgamiento del delito es función privativa del Juez del Crimen. Así es que cuando el art. 328 del Cód. Pen. ant. imponía tres años de prisión al quebrado fraudulento, no quería decir que el Juzgado del



FALL

arreglo á sus disposiciones debe aplicarse la pena.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 382, Ser. 2ª.

4. Fallido—Puede constituir mandatario para todos aquellos actos que importen el ejercicio de derechos inherentes á su persona.—Jur. Com., tom. 2, pág. 593, Ser. 2ª.

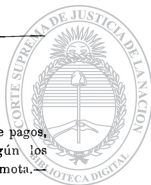
5. Fallido—Declarado culpable, y que pretenda rehabilitación, debe acompañar carta de pago de los acreedores, no le basta el cumplimiento de la pena impuesta.—Jur. Com., tom. 2, pág. 308, Ser. 2ª.

Fallido—Véase: *Inhibición general*, núm. 1—*Concurso*, núms. 1 y 2—*Juez comisario*, núm. 1—*Titulos de propiedad*, núm. 3—*Jurisdicción comercial*, núm. 2.

Crimen debía imponer mecánicamente esa pena, sino que á ella se aplicaba al quebrado que ante la ley penal ha sido tenido como responsable de actos fraudulentos. De lo contrario, el Juez del Crimen sería un mero ejecutor de las resoluciones del Juez de Comercio. Tanto más inadmisibile se nos presenta la teoria contraria, si tenemos en cuenta que por disposición terminante del art. 1593 del Cód. de Com., el auto de calificación de la quiebra es inapelable é inapelable también el auto mandando pasar los antecedentes de la quiebra fraudulenta al Juez del Crimen. La misma teoria sostiene Nypels, Cód. Pen. belga, tom. 3, lib. 2, tit. 9, sección 2ª, núm. 3; y Chauveau Adolphe. El sumario está de acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Calificación*, núms. 2 y 4; y *Quiebra*, núm. 2. Esta cuestión ha sido resuelta en el mismo sentido del sumario por el Cód. vig. en sus arts. 1541, 1542 y especialmente por el 1545 el que establece que los fallidos culpables ó fraudulentos y sus cómplices serán castigados con arreglo á las disposiciones del Cód. Pen.

4—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 1534 del Cód. de Com. ant. Entre esos derechos esencialmente personales, figura el de poder intervenir en el juicio de quiebra por sí ó por medio de apoderado, según se infiere de las disposiciones del Cód. y especialmente del art. 1566. Los arts. 326, inc. 4, 1523 y 1525, concordante el primero con los arts. 1963, inc. 4 y 1984 del Cód. Civ., no son aplicables porque aqui se trata tan solo del mandato conferido para ser representado en juicio.

5—Arts. 1721 y 1723 Cód. de Com.



FALL—FERR

Fallos—Véase: *Responsabilidad criminal*, núm. 1.

Familia—Véase: *Amenazas*, núm. 1.

1a. Fecha—Para fijar la de la efectiva cesación de pagos, debe resultar de una deuda impaga: no basta que según los libros el activo exceda al pasivo desde fecha más remota.—Jur. Com., tom. 1, pág. 305, Ser. 2ª.

Fecha—Véase: *Documento privado*, núm. 4—*Locatario*, núm. 1—*Términos*, núm. 10.

Fecha cierta—Véase: *Actos privados*, núm. 1.

Feria—Véase: *Términos judiciales*, núm. 2.

1b. Ferrocarril—El conocimiento de las cuestiones que se susciten entre los concesionarios de un ferrocarril, corresponde a la jurisdicción civil.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 599, Ser. 2ª.

2. Ferrocarril—Las empresas son responsables civilmente por los perjuicios que por culpa ó negligencia de sus empleados sobrevengan a los pasajeros.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 2ª.

Ferrocarril—Véase: *Civil*, núm. 1—*Contrato de cesión*, núm. 2.

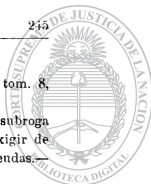
1c. Ferrocarriles—Las empresas son responsables civilmente de los perjuicios que sobrevengan a los pasajeros por

1a—Véase verb. *Cesación de pagos*, núm. 1. Esta es la jurisprudencia constante de la Cámara. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Cesación de pagos*, núm. 346.

1b—El contrato no tenía por objeto el establecimiento y explotación de una empresa de transportes, sino que tenía por objeto único la obtención de una concesión de ferrocarril, objeto que no puede estimarse comercial—art. 7 del Cód. de Com. ant. y 8 del vigente. Véase: verb. *Civil*. Igual doctrina se estableció en otro caso resuelto. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Contratos*, núm. 2.

2—Art. 1113 del Cód. Civ. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25; y tom. 3, misino verb. núm. 21.

1c—Véase verb. *Ferrocarril*, núm. 2 y su nota.



FIA

culpa ó negligencia de sus empleados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 2ª.

1a. Fiador—El que verifica el pago por el deudor subroga en todos sus derechos á los acreedores y puede exigir de aquél, los fondos desembolsados para pago de sus deudas.—Jur. Com., tom. 1, pág. 382, Ser. 2ª.

2. Fiador—Que ha entregado como fianza un documento ejecutivo, si bien no puede oponer la escepción de falsedad de título, puede en el juicio ordinario, justificar que la obligación del deudor no alcanzaba al importe de la fianza ejecutada, y obligar al acreedor á la devolución de la suma percibida de más y sus intereses.—Jur. Com., tom. 2, pág. 175, Ser. 2ª.

3. Fiador—Puede oponer las escepciones que la ley permite al deudor principal.—Jur. Com., tom. 2, pág. 114, Ser. 2ª.

4. Fiador—Que ha pagado por el deudor, puede exigir de éste lo pagado, sin más justificativo.—Jur. Com., tom. 2, pág. 224, Ser. 2ª.

Fiador—Véase: *Intereses usurarios*, núm. 1.

Fiadora del marido—Véase: *Esposa*, núm. 6.

1b. Fianza—Que autoriza la ley en el juicio ejecutivo, no es aplicable en el de cumplimiento de una sentencia recaída en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 130, Ser. 2ª.

1a—Según disposición del art. 611 del Cód. de Com. ant., el fiador ó fiadores responden solidariamente como el deudor principal; y el art. 614 del mismo, establece el principio del sumario. Véase asimismo el art. 616.

3—Art. 857 Cód. de Com. ant.

1b—Al autorizar los arts. 525 y 541 del Cód. de Proc., al ejecutado, para exigir del ejecutante fianza á las resultas del juicio ordinario que en tales casos puede promover el deudor, presupone que este juicio puede realmente iniciarse. En los juicios ordinarios no les sigue ningún otro juicio porque ellos quedan definitivamente resueltos por sentencias que pasan en autoridad de cosa juzgada. En los juicios ordinarios á que se refieren los arts. 504, 504, 523 y 541, una vez terminados no puede pretenderse su nueva iniciación.

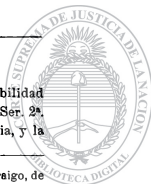
FIA

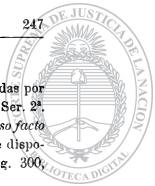
2. Fianza.—Su importe debe limitarse á la responsabilidad referente á la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 313, Ser. 2ª.

3. Fianza.—El juramento de no proceder con malicia, y la

2.—Se trata de la fianza que debe otorgarse en caso de arraigo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 85 del Cód. de Proc.

3.—Tal fué la resolución de la Cámara, fundada en la Ley 26, tit. 1, Part. 7, la que también es aplicable en lo que respecta al juramento. Fundábase asimismo la Cámara en la jurisprudencia establecida por ella en casos análogos. Hemos recorrido todos los fallos que sirven de precedentes á esta resolución, y no hemos encontrado en ellos un solo fundamento que pueda contrarrestar los aducidos por el Dr. Cortés. Cuando la Cámara se preocupe de los puntos jurídicos que envuelve esta cuestión y se dé cuenta exacta de ellos, se convencerá de la improcedencia de los fundamentos aducidos, dando la razón al Dr. Cortés. Sin embargo, por el momento, la jurisprudencia es la hecha en el sentido del sumario. Véase verb. *Juramento*, núms. 2, 3 y 4. El Dr. Cortés en una meditada y luminosa vista opinó, que el juramento era una condición *sine qua non* para la secuela de la querella. Alegaba entre otras numerosas razones las siguientes: La ley 14, tit. 1, Part. 7 dispone que el Juez, antes de comunicar al reo traslado de la acusación, debe *recibir juramento* del querellante, de que no se mueve calumniosamente á promover el juicio. Estando en vigencia esta ley el derecho que asiste á la parte es indubitable. «No puede decirse en manera alguna, que esta disposición no sea aplicable al que acusa injuria propia ó de los suyos; porque si bien es cierto, que el derecho favorece y protege á esta clase de acusadores, facilitando la satisfacción de las ofensas y la prosecución del juicio con disminuir la responsabilidad del querellante, el juramento de calumnia jamás dificultaría, ni embargaría el proceso, ni podría llevarse el favor de la ley al acusador por injuria propia, hasta eximirle de proceder con la debida sinceridad. Se supone, sin embargo, que la precitada ley 14, tit. 1, Part. 7, ha caído en desuso, y debe considerársela derogada por la costumbre, desde que no es práctica de mucho tiempo atrás, mandarse prestar al acusador el mencionado juramento de calumnia. Aunque en la actualidad, en virtud de la declaración general contenida en el art. 17 del Cód. Civ., las leyes no pueden ser derogadas, sino por otras disposiciones legales en contrario, y de ninguna suerte por el uso ó la costumbre, solamente podría ser que á la época en que se publicó ó empezó á regir el Cód. Civ., la disposición de que se trata, se encontrase ya en desuso; no siendo en ver-





FIA

fianza, no proceden en las causas criminales promovidas por los mismos interesados.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 273, Ser. 2ª.

4. **Fianza**.—La prestada por el ejecutante caduca *ipso facto* por el transcurso del término que fija la ley, y permite disponer de ella sin más trámite.—Jur. Com., tom. 3, pág. 300, Ser. 2ª.

Fianza.—Véase: *Arraigo*, núm. 6—*Demandado*, núm. 1—*Escarcelado*, núm. 1—*Pago parcial*, núm. 2—*Bienes hereditarios*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núms. 1 y 3—*Fiador*, núm. 2—*Juramento*, núms. 2 y 3—*Acusador*, núm. 2.

1. **Fianza de escarcelación**.—El dinero depositado por un tercero en ese carácter, no puede ser invertido en pago de

dad la mente del Cód. poner en vigencia por la indicada declaración todas las leyes y disposiciones que hubiesen caducado y tácitamente caído en desuso.» Cita la opinión de Elizondo, que consideraba debía suprimirse ese trámite.—Práctica universal forense, tom. 4, pág. 78, núms. 23 y 24.—Pero las leyes posteriormente dictadas, no estuvieron de acuerdo con esta opinión, y antes bien suponen la vigencia de las leyes que la establecieron. Así las leyes 2, tit. 16, lib. 11 de la Nov. Rec. y su concordante la 10, tit. 17, lib. 4, R. C., mencionan espresamente entre las formalidades que deben cumplirse, exigiéndola el interesado, el juramento bajo pena de nulidad. Véase además, Curia Filipica, Part. 3, párrafo 14, núm. 7; Tapia Edición de Madrid de 1846, tom. 8, pág. 3, núm. 2; Escriche, verb. *Juicio criminal*, núm. 171, pág. 1009; Goyena, Febrero Reformado, tom. 5, pág. 449; Dr. Lira, Prontuario de los Juicios, tom. 3, pág. 148. Esta es la opinión de los prácticos, con relación al juramento de no proceder con malicia. La Cámara dice que no procede, y para fundar su resolución cita una jurisprudencia en la que no se consultan los verdaderos principios que rigen el caso; por lo que no sería de extrañarse que esta jurisprudencia fuese reformada. El estudio detenido hecho por el Dr. Cortés como Fiscal, contrasta con lo inconsciente de la resolución anotada.

4.—Caduca al dejar pasar los treinta días acordados por el art. 526 del Cód. de Proc.

1.—El depósito que se hace como fianza carcelera no tiene por objeto costear la defensa del procesado. Si se le quiere dar otro destino es necesario el consentimiento del depositante que es una persona estraña al juicio.



FIA—FIL

los honorarios del defensor del reo sin el consentimiento del depositante.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 523, Ser. 2ª.

1a. Fianza en efectivo—Para sustituir esta fianza por la personal, debe recaer la sustitución en bienes del fiador, equivalentes al valor fijado; no basta justificar su responsabilidad.—Jur. Com., tom. 4, pág. 28, Ser. 2ª.

1b. Filiación legítima—Solo se prueba presentando la partida de matrimonio, ó justificando plenamente en juicio contencioso la fecha y lugar en que éste se verificó.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 35, Ser. 2ª.

Filiación legítima—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

1c. Filiación natural—El reconocimiento tácito de la paternidad imputada, y las demostraciones propias de un padre, así como el uso del nombre sin protesta, son bastantes para la declaración de la filiación natural sin que sea necesario el reconocimiento expreso.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 419, Ser. 2ª.

2. Filiación natural—Justificada la posesión de estado, la declaración de la filiación natural es ineludible.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 392, Ser. 2ª.

3. Filiación natural—Reconocida la filiación natural, de-

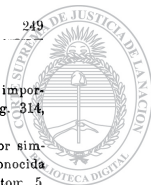
1a—Según la ley 10, tit. 29, Part. 7ª, la pena del fiador que no cumple su obligación de traer al reo, es pecuniaria, y no corporal; la efectividad de esa pena, según la ley 17, tit. 12, Part. 5ª, á que se obliga en la fianza el fiador, sería ilusoria no habiendo bienes de que disponer en el momento oportuno.

1b—El art. 263 del Cód. Civ., determina la forma en que puede probarse la filiación legítima: exige las partidas parroquiales, tanto del matrimonio como del nacimiento, ó la posesión constante del estado de tal hijo legítimo por medio de la correspondiente prueba supletoria, la que debe ser controlada por la parte contraria.

1c—Es la prueba exigida por el codificador en la nota puesta al pie del art. 325 del Cód. Civ., y que constituye la posesión de estado, en su más amplia acepción.

2—Art. 325, Cód. Civ.

3.—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 386 del Cód. Civ.



FIL—FIR

be cesar la intervención de la madre en todo lo que importa administración de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 314, Ser. 2ª.

4. Filiación natural—No puede ser declarada por simples presunciones, siempre que ella haya sido desconocida categóricamente por el pretendido padre.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 550, Ser. 2ª.

Filiación natural—Véase: *Padre natural*, núm. 1—*Sentencia extranjera*, núm. 1—*Posesión de estado*, núm. 1.

Finca—Véase: *Transacción con terceros*, núm. 1—*Posesión*, núm. 3—*Remate público*, núm. 1.

1. Firma—Declarada auténtica la de un instrumento privado, no puede discutirse el carácter de la obligación mientras no se justifique ser el resultado de un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 516, Ser. 2ª.

2. Firma—El reconocimiento judicial de la de un instrumento privado importa la de su contenido, y al que pretenda su falsedad corresponde la prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 531, Ser. 2ª.

3. Firma—La del agente encargado del fletamento, tiene el mismo valor en el conocimiento de la carga, que la del

1—El instrumento privado reconocido judicialmente por la parte á quien se opone, ó declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscrito y sus sucesores.—Arts. 1026 y 1028 del Cód. Civ.—Que la obligación tenga como origen una causa ilícita es cuestión de otro orden que en nada afectaría la autenticidad de la firma.

2—Arts. 1016 y 1017 del Cód. Civ.

3—Si bien el art. 1194 del Cód. de Com. ant., establece que el conocimiento debe ser firmado por el capitán del vapor, no declara que su omisión sea causa de nulidad, y tampoco prohíbe que pueda ella ser suplida por la de los agentes ó consignatarios de los vapores como es de práctica, según informe de la Cámara de Comercio, y según lo tiene resuelto la S. P. C. N. en el tom. 7, pág. 200, Ser. 2ª. No debe observarse que los recibos de mercaderías entregadas en las agencias y firmados por los agentes son perfectamente válidos



FIR

capitán del buque, mientras la acción no sea personal contra éste.—Jur. Com., tom. 1, pág. 471, Ser. 2ª.

Firma—Véase: *Instrumento privado*, núms. 2, 5 y 6—*Mandato*, núm. 7—*Reconocimiento*, núm. 3—*Falsificación*, núms. 3, 4 y 5—*Peritos calígrafos*, núm. 1.

Firma á ruego—Véase: *Documento privado*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 1.

1a. Firma del comprador—En las ventas anteriores al acuerdo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de 9 de Enero de 1866, la falta de la firma del comprador en las escrituras de compraventa no era causa de nulidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 143, Ser. 2ª.

1b. Firmas—Su ratificación, no es requisito esencial para

sin embargo de no llevar la firma del capitán.—El art. 1210 del Cód. de Com. citado, solo establece el requisito de la firma del capitán para que el conocimiento puede tener fuerza ejecutiva contra el capitán, pero en manera alguna establece, que si éste reconociese ó se acreditase la entrega de la carga, deje el conocimiento de producir efectos legales, y mucho menos cuando no se trata de una acción personal contra el capitán.

1a.—Antes era práctica general que el comprador no firmara la escritura de compraventa, hasta que se dictó esa acordada á causa de que no se exigía la firma del comprador sino en casos determinados.—Esa acordada ordenó que todo contrato bilateral, inclusive los referidos de compraventa, se hiciera en la correspondiente escritura, en presencia de los contratantes firmando éstos — Véase: F. S. C. P., tom. 3, pág. 299, Ser. 1ª.

1b.—El art. 838 del Cód. Civ., solo exige como condición para la validez de la transacción, su presentación al Juez de la causa, la que se opera con presentarla al secretario poniéndole el cargo correspondiente á esa presentación. La ley no exige para la validez de la transacción la ratificación de las firmas. Cuando ella se decreta por algunos jueces aferrados al formalismo antiguo, se tiene en cuenta tan solo la conveniencia de la autenticidad de las firmas. La Cámara dijo que el Juzgado ha podido evitar y prescindir de una providencia innecesaria. Esta resolución vendrá á poner término á una práctica antigua é inútil. Con efecto ¿qué objeto tiene un auto del Juzgado que puede ó no ser aceptado por las partes? Si se ra-

**FIR—FOR**

la aprobación de la transacción, mientras las partes no aleguen su falsedad.—Jur. Com., tom. 4, pág. 35, Ser. 2ª.

Firmantes—Véase: *Multa*, núm. 3.

Firmante—Véase: *Documento privado*, núm. 2—*Instrumento privado*, núms. 2 y 3—*Recibo*, núm. 2.

Fletamento—Véase: *Firma*, núm. 3.

Flete—Véase: *Consignatario del buque*, núm. 1.

Fisco—Véase: *Poseción*, núm. 12—*Poseción cuarentena-ria*, núm. 1.

Fondos—Véase: *Juicios*, núm. 1.

Fondos embargados—Véase: *Embargo*, núms. 7 y 8.

Forma—Véase: *Locador*, núm. 1—*Notificación*, núm. 4.

Forma imperfecta—Véase: *Escrito*, núm. 2.

1a. Formas—Las que la ley establece para los instrumentos públicos, no son obligatorias para los otorgados en el extranjero.—Jur. Com., tom. 2, pág. 310, Ser. 2ª.

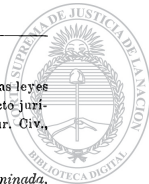
Formas—Véase: *Validez*, núm. 1.

1b. Formalidades—El cumplimiento de las que la ley exige para la validez del testamento, debe resultar del cuerpo mismo, sin que sea procedente la prueba testimonial para justificar que ellas fueron cumplidas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 577, Ser. 2ª.

tifican en las firmas la transacción es válida, si no se ratifican lo mismo. ¿A qué pues esa diligencia inútil? La tendencia es dejar sin efecto este trámite en cada uno de nuestros tribunales, así la S. C. P. ha dicho «La ratificación de los firmantes de una transacción es una mera formalidad en la práctica de los tribunales.» Tom. 4, pág. 135, Ser. 3ª. En los fallos de las Cámaras de Apelaciones de la Capital de Buenos Aires, recopilados por el Dr. Ponce, en el tom. 2, pág. 352, se dice: «La ratificación de las firmas que suscriben una transacción en juicio, es un simple trámite de práctica, y el Juez puede resolver prescindiendo de ella.»—La S. C. P. registra en el tom. 1, pág. 74, Ser. 2ª, una resolución igual.

1a—Art. 12, Cód. Civ.

1b—Art. 3627 del Cód. Civ.



FOR—FUE

2. Formalidades—El cumplimiento de las que las leyes prescriben como esenciales para la validez de un acto jurídico, deben resultar del cuerpo del instrumento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 47, Ser. 2ª.

Formalidades—Véase: *Exhortos*, núms. 1 y 2.

Fraciones—Véase: *Venta*, núm. 4—*Area determinada*, núm. 1.

1a. Fractura—Debe conceptuarse circunstancia agravante del delito, la del mueble que guarda el objeto robado.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 310, Ser. 2ª.

Fraude—Véase: *Arbitros-arbitradores*, núm. 1.

Frutos—Véase: *Juez*, núm. 2.

Frutos de la herencia—Véase: *Herederos*, núm. 2—*Herencia indivisa*, núm. 1.

1b. Fuero local—Corresponde á este fuero el conocimiento de las cuestiones entre un extranjero y una sociedad colectiva de la cual forma parte un extranjero.—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

Fuero personal—Véase: *Incompetencia*, núm. 2.

1c. Fuerza ejecutiva—Las cuentas por empedrados, aun visadas por la Municipalidad, carecen de fuerza ejecutiva, si de las mismas no consta el cumplimiento de las condiciones que la ley exige para darles ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 321, Ser. 2ª.

2—Véase nota precedente.

1a—Arts. 84, 190 y 196 del Cód. Pen. ant.

1b—Arts. 10 y 20 de la Ley Nacional sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales.

1c—Las cuentas visadas por la Municipalidad comprueban que los créditos son realmente efectivos, pero no comprueban su exigibilidad. La ley de 26 de Oct. de 1881 autoriza el cobro por la vía ejecutiva de las cuotas vencidas; solo éstas son exigibles ejecutivamente. Pero es de tenerse en cuenta que puede suceder que la totalidad de las cuotas estén vencidas, siendo exigible ejecutivamente el todo.

**FUE-FUR**

Fuerza ejecutiva—Véase: *Protesto*, núm. 1—*Documento*, núm. 1—*Escepción de litispendencia*, núm. 2—*Regulaciones*, núm. 1—*Conforme*, núm. 1—*Honorarios*, núms. 4 y 5—*Empedrados*, núm. 2—*Escepción de inhabilidad*, núm. 9—*Instrumentos públicos*, núm. 3—*Firma*, núm. 3—*Pagaré endosado*, núm. 1—*Agregación*, núm. 1—*Título inhábil*, núm. 1.

Fuerza extraña—Véase: *Ebriedad*, núms. 4 y 6.

Fuerza mayor—Véase: *Prueba*, núm. 11—*Caso fortuito*, núm. 1—*Laudo*, núm. 1—*Omisión culpable*, núm. 1.

Fuerza probatoria—Véase: *Declaraciones*, núms. 8 y 12—*Libros de comercio*, núm. 2.

Fuerza pública—Véase: *Cura-párroco*, núm. 1.

1a. Fuga—La del procesado, es presunción vehemente de su culpabilidad.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 20, Ser. 2ª.

Funcionarios—Véase: *Testigos*, núm. 8.

Funcionarios argentinos—Véase: *Documento*, núm. 16.

Fundamentos—Véase: *Nulidad*, núm. 8.

1b. Furor—El proveniente de una discusión provocada por el reo, no puede considerarse circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 199, Ser. 2ª.

Furor—Véase: *Provocación*, núm. 2.

1a—Esta es la jurisprudencia establecida.—Véase: *Inst.*, tom. 1, verb. *Fuga*, núm. 1251.

1b—El estado de furor no atenúa el delito sino cuando sucede sin culpa



Gananciales—Véase: *Bienes*, núm. 2.

Garantía—Véase: *Acción*, núm. 6—*Transferencia*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 5.

Garantía hipotecaria—Véase: *Jurisdicción comercial*, núm. 3.

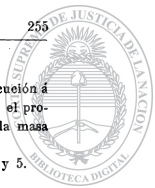
1a. Gasto causídico—Justificada su existencia, el pago corresponde al acreedor que por convenio debía abonarlo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 2ª.

1b. Gastos—Y honorarios, devengados por el mandatario antes de ser ejecutado el mandante, tiene privilegio en cuanto hayan favorecido al último, aumentando los bienes afectados por la ejecución de terceros que hubiese debido verificarlos en beneficio propio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 187, Ser. 2ª.

Gastos—Véase: *Ejecutado*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 5—*Padre natural*, núm. 1—*Adjudicación*, núm. 1—*Incidente*, núm. 1—*Tenedor*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 6—*Créditos*, núm. 1—*Juramento*, núm. 1.

1a—Las convenciones forman para las partes una regla a la cual debe someterse como a la ley misma.

1b—De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 3879, 3892 y 3900 del Cód. Civ.

**GAS—GIR**

1a.—Gastos de justicia.—Los causados por la ejecución á que se vé obligado un acreedor que admite en pago el producido de un bien determinado, no son á cargo de la masa común.—Jur. Com., tom. 2, pág. 62, Ser. 2ª.

Gastos de justicia.—Véase: *Honorarios*, núms. 2 y 5.

Gefes de sección.—Véase: *Declaraciones*, núm. 9.

1b. Gerente.—Ó administrador de una sociedad anónima, tiene representación esterna para los terceros, y con él deben entenderse las demandas contra la sociedad.—Jur. Com., tom. 1º, pág. 244, Ser. 2ª.

Girado.—Véase: *Letra de cambio*, núm. 1.

Girante.—Véase: *Aceptante*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 12.

1c. Giro.—Su entrega no importa el pago de la deuda, aun cuando el acreedor al aceptarlo gestione su cobro, ni aun después de verificado éste, siempre que claramente no se le haya entregado haciendo constar que fué en pago y no como depósito.—Jur. Com., tom. 1, pág. 252, Ser. 2ª.

1a—Siempre que no se hayan enusado en beneficio de la masa, en interés general—Arts. 3900 Cód. Civ., y 1797 Cód. de Com. ant.—En el presente caso hubo una transacción en la que nada se dijo respecto á las costas, debiendo interpretarse el acto de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 832 y 835 del Cód. Civ.

1b—El art. 405 del Cód. de Com. ant., establece que las sociedades anónimas pueden ser administradas por mandatarios, socios ó estrañeros, y el gerente de una sociedad es el administrador á que se refiere la ley.

1c—La remisión de un giro en *calidad* de pago, no es pagar, porque según los arts. 725 y 740 del Cód. de Com. ant., el pago es el *cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación*.—En las obligaciones de dar sumas de dinero, el objeto de la prestación es el numerario: es por esto que las obligaciones de esta especie, no pueden ser satisfechas contra la voluntad del acreedor en pagarés ó letras de cambio, aun cuando fuesen exigibles.—*Zachariæ* § 560, núm. 3.—Para entregar estos valores en pago es necesario que se haga constar espresamente la voluntad de las partes, pues de lo contrario se presume que solo cumplieron con su obligación, como simples tenedores del giro, de exigir el pago á su vencimiento.—Art. 839, Cód. de Com.

GRA

Grado—Véase: *Parientes*, núm. 2.

Grados sucesorios—Véase: *Herederos*, núms. 5 y 6—*Inmuebles*, núm. 1.

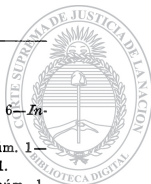
Gravamen—Véase: *Aviso*, núm. 1—*Resolución*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1b—*Resoluciones*, núm. 1.

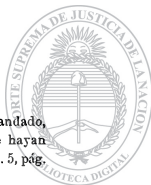
Gravamen irreparable—Véase: *Incompetencia*, núm. 1.

Gravámenes—Véase: *Avisos*, núm. 1.

Grave provocación—Véase: *Prueba*, núm. 20.

Guarismos—Véase: *Testamento olografo*, núm. 1.





Haber hereditario—Véase: *Heredero*, núm. 1.

1a. Hecho fundamental—Reconocido por el demandado, le corresponde la prueba de las modificaciones que hayan alterado el derecho del demandante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 2ª.

1b. Hechos—Reconocidos los afirmados en la demanda, al demandado corresponde probar las excepciones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 174, Ser. 2ª.

2. Hechos—Desconocida la verdad de aquellos en que se funda la acción, al demandante corresponde la prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 182, Ser. 2ª.

3. Hechos—Reconocida por el demandado la verdad de los espuestos en la demanda, le incumbe la prueba de las

1a—Se trata de una confesión calificada, siendo á cargo del confesante la prueba de la calificación, de acuerdo con la doctrina corriente y sentada por nuestros Tribunales. Véase: *Inst.*, tom. 3, verb. *Confesión*, núm. 3.

1b—Establecidos los hechos de la demanda, si el demandado alega nuevos hechos ó excepciones en su descargo á él le toca probarlos de acuerdo con el aforismo *reus in exceptione actor est.*—Ley 3, tit. 3, Part. 3; *Bonnier*, tom. 1, pág. 30. El que alega un hecho nuevo en juicio debe probarlo.

2—Ley 1, tit. 14, Part. 3.

3—En virtud de conocido aforismo *reus in excipiendo fit actor.*



HEC—HER

escepciones que alteren el derecho que de ellos surja en favor del actor.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 396, Ser. 2ª.

4a. Hechos—Los de los contratantes, posteriores al contrato, importan reglas fijas para la interpretación de sus cláusulas al tratarse de su cumplimiento.—Jur. Com., tom. 1, pág. 382, Ser. 2ª.

Hechos—Véase: *Prueba*, núm. 12.

Hechos casuales—Véase: *Perjuicios*, núms. 2, 3 y 4.

Hechos propios—Véase: *Confesión ficta*, núm. 1.

1. Heredero—Tiene personería para continuar todos aquellos litigios que puedan aumentar ó disminuir su haber hereditario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 200, Ser. 2ª.

2. Heredero—Representante de otros, está obligado á absolver posiciones conjuntamente con sus poderdantes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 450, Ser. 2ª.

3. Heredero—Solo puede pedir la venta de los bienes después de dictada la declaratoria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 82, Ser. 2ª.

4b. Herederos—La entrega de una suma bajo la respon-

4a—Está de acuerdo con otro caso resuelto. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Contratos*, núm. 589.

1—El heredero continúa la persona del difunto y adquiere todos los derechos eventuales que pueden corresponderle á éste. Art. 3417.

2—Está obligado por el carácter de heredero que él mismo tiene: él absuelve posiciones por sí mismo, y sus representados por sus derechos propios. Por otra parte, es principio sentado, que no pueden ser obligados, por regla general, representante y representado á absolver posiciones. La ley solo autoriza á poner posiciones á uno de ellos.

3—Mientras no se dicte la declaratoria de herederos, no tiene la sanción legal el reconocimiento de herederos, reconocimiento que le confiere el carácter de dueño de la herencia, y solo el propietario puede ejercer la facultad inherente al derecho de propiedad, cual es la de vender.

4b—Se trataba de un caso de suma urgencia y que no admitía dilación. Es esta una jurisprudencia que no puede ni debe subsistir. Si el

HER

sabilidad del heredero, no causa agravio á los demás cuya oposición puede sustanciarse después si conviene que la reintegre.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 407, Ser. 2^a.

5. Heredero—Tomada posesión de hecho, sin exigir el inventario previo, éste no puede hacer cargos al mandatario por no haberla solicitado al hacerse cargo de la administración.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 9, Ser. 2^a.

6. Heredero—El reconocimiento de este carácter hecho por los que judicialmente han acreditado sus derechos, basta para que el Juzgado lo declare tal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 169, Ser. 2^a.

7. Heredero—Único usufructuario, tiene derecho á percibir y administrar los fondos quedados por fallecimiento del causante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 418, Ser. 2^a.

8. Heredero—Que pretenda intervenir en la testamentaria, debe justificar previamente su carácter.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 270, Ser. 2^a.

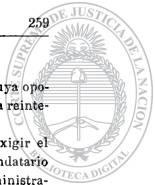
Heredero—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 1

heredero no tiene como devolver los fondos recibidos bajo su responsabilidad ¿quién los reintegra en caso que se ordene su devolución? Es jurisprudencia constante que ningún heredero puede pedir que se le adelante fondos á cuenta de su haber hereditario sin el consentimiento de sus demás coherederos: esto es lo correcto. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Heredero*, núm. 1300; tom. 2, *Herederos*, núm. 3.

6—¿Quién puede tener derecho para contestar este reconocimiento? Aquel que tenga interés en la herencia. Y si el que tiene interés es el que hace el reconocimiento nadie puede oponerse á ello, pues nadie queda afectado por el acto jurídico.

7—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 2906 del Cód. Civ.

8—¿En qué forma debe hacerse esta justificación? ¿Bastarán las partidas que se presenten ó será necesario una declaratoria en forma? Si el que interviene en la testamentaria ha sido declarado heredero, el pretendiente no podrá tomar intervención sino mediante la correspondiente declaratoria, pero si por el contrario aquél solo interviene en virtud de haber presentado sus partidas que justifican su carácter hereditario, basta que el que pretende intervenir lo justifique en la misma forma.





HER

—*Acreedor*, núms. 1 y 2—*Transacción con terceros*, núm. 2
—*Nulidad*, núm. 16—*Venta onerosa*, núm. 1—*Honorarios*,
núms. 4, 5 y 6—*Testamentaria*, núm. 1—*Abogado*, núm. 1—*Adjudicación*, núm. 2—*Madre natural*, núm. 3—*Filiación natural*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 3—*Liquidación de sociedad*, núm. 2—*Posesión judicial*, núm. 1.

1. Herederos—Cuyos derechos se fundan en un testamento otorgado en el extranjero, no pueden ejercer acciones posesorias sobre bienes situados en la República, sin pedir previamente la posesión á los jueces en cuya jurisdicción estén ubicados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 566, Ser. 2^a.

2. Herederos—Los reconocidos con posterioridad, tienen sobre los frutos de la herencia, los mismos derechos que los declarados con anterioridad, sin que pueda alegarse contra ellos la cosa juzgada de la primera resolución, ni aun la división debidamente aprobada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 204, Ser. 2^a.

1—Art. 3411 del Cód. Civ.

2—Se pretendía que la percepción de las rentas hecha por un heredero declarado tal con anterioridad importa el derecho para escluir al último de la participación en los frutos, para ello se fundan en los arts. 3423, 3427, 3429 y 3430 del Cód. Civ., los que no son aplicables, porque el heredero declarado tal después de otro, es porque le fué ocultada su existencia ó le fué denegado su carácter. Reconocido ó declarado heredero un interesado, el título de heredero, la posesión y el derecho á la percepción de los frutos ó ventas, tienen efecto retroactivo. Asi resulta de lo dispuesto en los arts. 2449, 3415 á 3419 del Cód. Civ. El sumario tiene principalmente su fundamento en los arts. 2691, 2695, 2701 y desde el 2707 al 2709. Si el coheredero no puede invocar en su favor la buena fe de la posesión al tiempo de la percepción de los frutos, no puede menos que hacer partícipes á sus coherederos en esos frutos que deben ser incluidos en la masa de bienes—arts. 2356, 2358, 3428 y 589 al 591.—Con el fallecimiento del causante quedan los bienes en estado de indivisión y la posesión es pro-indivisa, los frutos y rentas participan del mismo carácter y pertenecen á todos los coherederos que han entrado en la partición.

HER

3. Herederos—Legítimos, que entran en posesión de la herencia por ministerio de la ley desde el fallecimiento del causante, no necesitan posesión judicial de los bienes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 364, Ser. 2ª.

4. Herederos—Tienen derecho á poseer la parte que les corresponda de aquellos bienes que admiten cómoda división en especie, mientras no se practique la liquidación definitiva.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 406, Ser. 2ª.

5. Herederos—Los del tercer grado—sobrinos nietos—carecen de derecho para concurrir á la herencia con los del segundo—sobrinos—ni aún por derecho de representación por no existir el primer grado—hermanos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 93, Ser. 2ª.

6. Herederos—El derecho de representación es inherente á los herederos del segundo—sobrinos—los demás grados son escludidos en todos los casos por los más próximos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 93, Ser. 2ª.

7. Herederos—Para justificar el título hereditario, basta

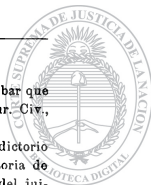
3—Arts. 3410 y 3411 del Cód. Civ.

4—Siempre que no haya un administrador nombrado—art. 3451 del Cód. Civ.

5—Véase: Inst., tom. 1, verb. *Linea colateral*, núm. 1664 y su nota.

6—Nuestro Código ha limitado el derecho de representación á los hijos de los hermanos, sin que pueda ese derecho ir mas allá. Véase nota precedente.

7—No hay ley, ni acordada alguna de los Tribunales Superiores de la Prov. de B. Aires, ni de las Cámaras de Apelaciones de esta Capital, que exijan para que una persona sea declarada heredera única de otra la comprobación de que sea la única realmente existente. Para comprobar que un heredero es *único* sería necesario hasta cierto modo comprobar una *negativa*. Si diez testigos declaran que conocen á esa persona como único heredero y al declarar ésto declaran la verdad de lo que saben: veinte testigos pueden declarar que conocen otros herederos más, y también declararían la verdad de lo que saben. De aquí resulta que esa prueba negativa que surge de las declaraciones fidedignas de diez testigos,



HER

la declaratoria judicial, sin que sea obligatorio probar que no existen otros herederos que los declarados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 138, Ser. 2ª.

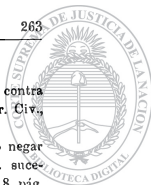
8. Herederos—Siempre que exista juicio contradictorio sobre derecho excluyente á la herencia, la declaratoria de herederos debe suspenderse hasta la terminación del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 327, Ser. 2ª.

9. Herederos—No están obligados á reconocer ó negar

ningún derecho agregaría á su carácter de *único* heredero, pues á pesar de esas declaraciones, otro heredero que se considerase tal podría obtener su declaratoria á pesar de ese carácter de *único* con que se le invistió en virtud de las declaraciones de los testigos que depusieron sobre un hecho negativo. La declaración de *único* heredero tampoco implica la negación de otros, los que conservan sus derechos por el término que la ley tolera la falta de ejercicio de este derecho. Debe no olvidarse, que los jueces al dictar las declaratorias de heredero lo hacen siempre con carácter de *encuanto ha lugar por derecho* salvando el de las personas que en lo futuro puedan comprobar su carácter hereditario. Una persona declarada *única heredera* puede hasta no ser tal heredera: puede ser privada de ese carácter por otro que tenga mejor derecho, en un juicio contencioso, pues la declaratoria de heredero no causa cosa juzgada por dictarse siempre ella en juicio informativo en el que generalmente no hay discusión. Así es que mientras no haya una persona que ataque la declaratoria de heredero ella lleva en sí la presunción de verdad con que la ley cubre los actos judiciales que son instrumentos públicos: tiene á su favor la presunción *juris tantum*.

8—El juicio voluntario de testamentaria se convierte, en la parte relativa á este incidente en contencioso, quedando la declaratoria de herederos subordinada al resultado final del litigio.

9—Tal resolución no fué materia de acuerdo en la Cámara, ni el Juez de 1ª Instancia la adujo como argumento. Los herederos demandados eran menores de edad y su representante dijo, que en la casa mortuoria no había encontrado papeles, ni apuntes que se refiriesen al crédito reclamado, no pudiendo declararse de legítimo abono. A pesar de esta contestación evasiva, en la que no se negaban los hechos espuestos en la demanda, fué ésta rechazada por falta de prueba.



HER

directamente los hechos en que se funde la demanda contra la sucesión, les basta manifestar su ignorancia.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 336, Ser. 2ª.

10. Herederos—No están obligados á confesar ó negar los hechos en que se funda una demanda contra la sucesión, les basta pedir su justificación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 400, Ser. 2ª.

11. Herederos—El reconocimiento de los coherederos, hace procedente la declaratoria de herederos, sin más justificación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 483, Ser. 2ª.

Herederos—Véase: *Bienes hereditarios*, núm. 1—*Curador de bienes*, núm. 1—*Acreedor*, núms. 1 y 2—*Instrumento privado*, núm. 3—*Curador*, núm. 1—*Herencia indivisa*, núm. 1—*Testamento*, núm. 1—*Honorarios*, núms. 4, 5 y 6—*Cuenta particionaria*, núms. 2 y 3—*Muerte*, núm. 1—*Declaratoria*, núm. 1—*Defensores de ausentes*, núm. 1—*Resolución*, núm. 2—*Transacciones*, núm. 3—*Ascendientes*, núm. 1—*Comprador*, núm. 7—*Cónyuges*, núm. 2—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Esposa*, núm. 3—*Inmuebles*, núm. 1—*Legados*, núm. 2—*Testamento*, núm. 4—*Condominio*, núm. 1.

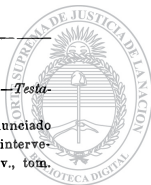
Herederos mayores—Véase: *Derechos eventuales*, núm. 1—*Insano*, núm. 1.

1. Herencia—Todos los que se consideren con derecho á ella, son parte en el juicio, aun antes de justificarlo, el Juez no puede hacer la declaratoria de herederos á favor de otros sin darles audiencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 461, Ser. 2ª.

Herencia—Véase: *Curador*, núm. 1—*Acción de petición de herencia*, núm. 1—*Herederos*, núms. 3, 5 y 8—*Transacciones*, núm. 3—*Matrimonio*, núm. 1—*Derechos hereditarios*,

10—El art. 100 del Cód. Civ., no ha derogado el principio establecido en la Ley 1ª, tit. 6, Lib. 2, F. R.; y 3ª, tit. 10, Part. 3ª.

11—Es jurisprudencia constante de nuestros Tribunales. Véase: verb. *Heredero*, núm. 6.



HER

núm. 2—*Legados*, núm. 2—*Sobrinos-nietos*, núm. 1—*Testamento*, núm. 4—*Venta*, núm. 3.

1a. Herencia del esposo—La esposa que ha renunciado á la herencia del esposo, no puede ser obligada á intervenir como heredera en la sucesión de aquél.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 487, Ser. 2ª.

1b. Herencia indivisa—Los frutos de ella deben dividirse proporcionalmente entre los herederos, sin que el poseedor de los bienes pueda alegar contra los demás la posesión de hecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 204, Ser. 2ª.

1c. Herencia vacante—El reconocimiento de que la denuncia de una herencia se hace por cuenta de un tercero, es siempre válido, aun cuando se haya variado la autoridad ante la cual debía hacerse.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 631, Ser. 2ª.

1d. Herida—La inferida después de la riña, tomando á la víctima desprevenida, por haber aquella terminado, debe castigarse como lesión y no como asesinato.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 339, Ser. 2ª.

1e. Heridas—Causa eficiente y no ocasional de la muerte,

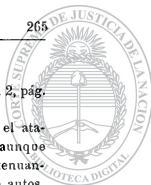
1a—Véase: verb. *Esposa*, núm. 3.

1b—Art. 2691, Cód. Civ.

1c—Esta circunstancia sería un mero accidente de la denuncia que en nada afectaría á lo principal.

1d—El herido curó antes de un mes; y el heridor se hallaba ebrio en el acto de cometer el delito, en cuyo caso corresponde se le aplique la pena de cuatro meses de arresto, de acuerdo con lo establecido en los arts. 52, 49 y 83, inc. 1ª; y 120 inc. 2ª del Cód. Pen. vig.

1e—El nuevo Cód. Pen. modificó la legislación anterior relativa á esta materia, la que estaba consignada en el art. 205. Por el nuevo Cód. si las heridas no son causas ocasionales de la muerte puede su autor ser considerado como homicida. El art. 91 del nuevo Cód. establece tres años de prisión para el que dispara armas de fuego cause ó no heridas.



HER-HIJ

solo deben castigarse como lesiones.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 27, Ser. 2ª.

2. Heridas—Las causadas después de terminado el ataque, no pueden esceptuarse de legítima defensa, aunque respecto á ellas deban aceptarse las circunstancias atenuantes de provocación, y aunque resulten justificadas de autos.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 245, Ser. 2ª.

Heridas—Véase: *Ataque á mano armada*, núm. 3—*Informe médico legal*, núm. 1—*Vindicta pública*, núm. 1—*Voluntad criminal*, núm. 1.

Heridas graves—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 4.

1a. Hermanos legítimos—Los del insano, aun cuando no se encuentren especialmente designados por la ley, tienen preferente derecho para ejercer la curatela.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 256, Ser. 2ª.

Hermanos—Véase: *Herederos*, núms. 5 y 6—*Insania*, núm. 2—*Sobrinos-nietos*, núm. 1.

Hijo legítimo—Véase: *Poseción de estado*, núm. 1.

1b. Hijo natural—Para que se declare que existe posesión

2—La escepción de legítima defensa es considerada tal, mientras ella no exceda al ataque: allí donde termina el ataque, termina también la legítima defensa. En cuanto á la circunstancia atenuante por haber mediado provocación, ella subsiste porque es independiente de los demás antecedentes de la causa.

1a—El art. 475 del Cód. Civil establece, que las leyes que rigen la tutela son aplicables á la curatela de los incapaces. Si bien los arts. 476, 477, 478, 479 y 480, no confieren la curatela de los hermanos al hermano, el art. 390 confiere la tutela del hermano al hermano, á falta de otros allí enumerados. Y como este artículo es aplicable á la curatela, resulta la exactitud del sumario.

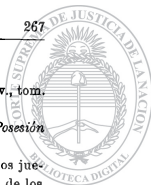
1b—¿En qué consiste la posesión de estado de un hijo natural? Ante todo debemos tener presente, que el Cód. Francés prohíbe la indagación de la paternidad natural con escepción del caso de raptó. Pero Demolombe, uno de los caracterizados espositores del Cód. Napoleón, sentó el principio de que esa disposición ó prohibición no tenía aplicación cuando el hijo podía invocar la posesión de es-

HIJ

de estado de un hijo natural, no se requiere los extremos

tado, porque en este caso la prueba no recae sobre el hecho misterioso de la generación sino sobre el reconocimiento hecho por el padre. La doctrina sostenida por tan notable jurisconsulto hizo escuela en Francia y se vieron en la necesidad de referirse en un todo á las disposiciones relativas á la filiación legítima establecidas por el nuevo Código. No sería lógico sin embargo, la aplicación de los principios que rigen para la filiación legítima á la filiación natural. El hijo legítimo viene al mundo en brazos de sus padres, su nacimiento es motivo de fiestas, el padre lo anuncia á todos sus amigos: el público lo ve formarse y crecer al lado de sus padres, formando parte de la familia como fruto de una unión pública que constituye el matrimonio. Con el hijo natural sucede lo contrario, es el fruto de un delito social, condenado públicamente: su nacimiento se oculta para salvar de la vergüenza á la madre: crece en la oscuridad, sin que el padre se atreva á presentarlo á sus vecinos; puede decirse crece sin familia y sin hogar: es rarísimo el padre natural que se jacta ostensiblemente de su paternidad, y mientras éste cumple con su deber ocultamente, aquí lo hace á la faz de todo el mundo. El hijo legítimo puede atestiguar su posesión de estado con gran número de personas, mientras que las que conocen el estado del hijo natural son muy pocas. Bajo el imperio de la restringida legislación francesa, decía Demolombe en el tom. 5º, § 490, lo siguiente: «El art. 321 dispone que la posesión de estado se establece por una reunión suficiente de hechos que indiquen la relación de filiación y de parentesco entre un individuo y la familia á la cual pretende pertenecer, y los principales de esos hechos son, que haya sido reconocido como tal por la familia.... Pero ¿quién no vé que esta definición general no tiene nada de imperativo ni de absoluto? Mas los diferentes caracteres que él enuncia no deben concurrir todos necesariamente: ello es siempre una cuestión de hecho. Bonnier opina del mismo modo cuando dice: que los principales hechos que constituyen la posesión de estado son tres: *nomen, tractatus, fama*. Pero no se exigen la reunión de todos estos elementos, y solo se reducen á una cuestión de apreciación: ¿es ó no constante que el reclamante era considerado como de los padres que él se atribuye? tom. 1, § 305. El Dr. Bazan al fundar su voto en otro caso análogo al presente, decía: «Nuestro Cód. Civ. no establece cuáles son los hechos que constituyen la posesión de estado. El Dr. Velez en la nota al art. 325 cita únicamente un caso de posesión de estado, el más notorio, expresando las circunstancias que debe reunir la posesión de estado á fin de que ella tenga la misma fuerza probatoria





HIJ

que la ley exige para la filiación legítima.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 419, Ser. 2ª.

Hijo natural—Véase: *Alimentos*, núm. 1 y 3—*Posesión de estado*, núm. 1.

1. **Hijos**—La disposición de la ley que concede á los jueces la facultad de designar después del divorcio cuál de los padres debe tenerlos en su poder, hace inútil toda transacción que sobre este punto hayan celebrado los cónyuges.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 579, Ser. 2ª.

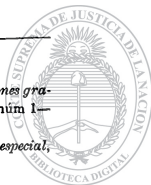
2. **Hijos**—El auto sobre tenencia de los hijos es apelable.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 485, Ser. 2ª.

Hijos—Véase: *Casamiento*, núm. 1—*Confesión*, núm. 1—

y quizá más que la de una escritura pública, pero no ha querido establecer la doctrina de que tan solo con la reunión de todos esos hechos puede establecerse la prueba de la posesión de estado, la que no es propiamente una prueba determinada sino una *presunción legal* de reconocimiento ó confesión de paternidad, que puede ser expresa, tácita ó presunta, según los casos. Así Carabantes, como Bonnier, tom. 1 § 305, dice: «La posesión de estado puede probarse haciendo constar que el hijo ha pasado y ha sido tenido como tal por sus padres, acreditando una reunión de circunstancias que concurren á demostrarla, tales como el uso constante del apellido del padre con anuencia de éste, y el trato que como tal hijo ha recibido del padre, de su familia y del público. De aquí resulta que para que exista la posesión de estado no es necesario que concurren los tres elementos de *nomen*, *tractatus*, *fama*, bastando la comprobación de los dos extremos siguientes: 1º Que el padre lo hubiese considerado como tal hijo: 2º Que el público lo hubiese tenido en el mismo concepto. Y tratándose de la filiación natural no puede exigirse una prueba tan amplia como la exigida para la filiación legítima porque ello sería hasta contrario á la naturaleza de las cosas.»

1—Solo el Juez puede resolver sobre este punto, teniendo en cuenta el interés y beneficio de los menores sin que el padre ni la madre pueda alegar preferente derecho—Art. 213, Cód. Civ.

2—Porque afecta el interés de los hijos y los derechos que la patria potestad consagra, no pudiendo menos que causar gravamen irreparable según que la resolución consulte más ó menos los derechos que debe proteger, estando en tal circunstancia sometido el caso á la disposición del art. 226 del Cód. de Proc.



HIJ—HIP

Madre, núm. 1—*Madre natural*, núm. 1—*Presunciones graves*, núm. 1—*Juicios sumarios*, núm. 1—*Cónyuges*, núm. 1—*Divorcio*, núms. 2 y 3.

Hijos naturales—Véase: *Tutor*, núm. 1—*Tutor especial*, núm. 1.

Hijuela de gastos—Véase: *Adjudicación*, núm. 1.

1a. Hipoteca—Para declararla extinguida debe darse intervención al acreedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 598, Ser. 2ª.

2. Hipoteca—No exonera al comprador de su obligación de oblar íntegro el precio del bien comprado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 90, Ser. 2ª.

Hipoteca—Véase: *Vénia marital*, núm. 1—*Bienes*, núm. 4.

1b. Hipoteca tácita—Siendo esta hipoteca un derecho en expectativa, el acreedor que invoca ese privilegio solo adquie-

1a.—La prescripción es una escepción que se opone al acreedor, y como tal debe éste ser oído á fin de que si tuviese alguna razón legal la haga valer, ó si tuviese que demostrar que esa prescripción había sido interrumpida en virtud de demanda ú otra causal.

2.—Adquirida una propiedad hipotecada, en remate, el comprador se opuso á la oblación del precio mientras no se levantara la hipoteca, fundándose en que la testamentaria estaba obligada á entregar el inmueble libre de todo gravamen. Se resolvió que el precio debía oblar no obstante la existencia del gravamen, pues el otorgamiento iba á hacerse inmediatamente en las condiciones exigidas: el comprador no corría ningún riesgo, pues tenía en garantía no solo la propiedad sino también el precio del que no podía disponerse mientras no se otorgara la escritura á su favor. En estos casos es práctica otorgarse la doble escritura simultáneamente: se levanta la hipoteca y acto continuo se otorga la escritura de enagenación.

1.—Se sostenía por el Banco de la Provincia de B. Aires que su privilegio es un derecho adquirido antes de la Ley de Capital y que como las leyes no tienen efecto retroactivo, ese privilegio subsiste y debe declararse á pesar de dicha ley. Se contesta diciendo que nundado el caso de que ese privilegio fuese un derecho adquirido antes de la Ley de Capital, después de ella no podía subsistir. Es cierto que las leyes comunes no alteran los derechos adquiridos, pero no sucede lo propio con las leyes de orden público, ni mucho menos con las leyes constitucionales. La Ley de Capital es una ley constitucio-



HOM

re ese derecho al invocarlo judicialmente, y no después de la fecha en que el deudor contrajo la obligación, ni aun después de aquella en que judicialmente exigió su cumplimiento.—Jur. Com., tom. 3, pág. 245, Ser. 2ª.

1. Homicidio—El conductor de un vehículo que involuntariamente comete este delito, debe ser absuelto, si la culpa ó negligencia es imputable á la víctima ó á sus cuidadores.—Jur. Crim., tomo 1, pág. 72, Ser. 2ª.

2. Homicidio—Sin circunstancias agravantes, debe ser penado con seis años de penitenciaria.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 267, Ser. 2ª.

3. Homicidio—Cuando este ha sido el resultado casual del acto, por no podersele imputar al reo la intención de llegar á ese extremo, debe ser castigado con el mínimum de la

nal y por su naturaleza quedó incorporada á la Constitución. El Banco no puede conservar sus privilegios después de esa ley, por que su subsistencia repugna á la Constitución. Luego, pues, esos privilegios no pueden ser aceptados por el hecho de que se originen con anterioridad á la ley, cuyo carácter y naturaleza los rechaza. Estos principios de derecho público han sido aplicados á las relaciones de derecho privado en el art. 5º del Cód. Civ. cuando establece que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. De aquí resulta que los individuos que tienen derechos adquiridos, no pueden hacerlos prevalecer después de la vigencia de la nueva ley de orden público que crea un nuevo orden de cosas. Las disposiciones generales sobre la aplicación de las leyes comunes y su retroactividad, no rigen en el presente caso, porque ellas no pueden invocarse contra la Constitución que es el fundamento de la nacionalidad argentina. El privilegio que no nace del contrato sino que está fundado en la naturaleza de la persona á quien se aplica por investidura de la ley de la Provincia, no puede ejercitarse en la Cap. donde ha caducado la aplicación de la ley de cuya autoridad emana como de su fuente, y á la que está adherida como una prerrogativa. Donde no tiene aplicación la ley de un privilegio, no puede ejercitarse.

1—Arts. 1109 y 1111, Cód. Civ.

2—Art. 159, Cód. Pen. ant.

3—Arts. 96, inc. 3º; y 83, inc. 2º, Cód. Pen. vigente.

HOM

pena, aun cuando no existan circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 371, Ser. 2ª.

4. Homicidio—Siempre que al castigarlo se aplique el antiguo código por ser más benigno, la embriaguez no puede considerarse circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 551, Ser. 2ª.

5. Homicidio—Con ensañamiento, debe ser castigado con quince años de presidio, si en virtud de existir una circunstancia atenuante, no puede ser calificado como asesinato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 276, Ser. 2ª.

6. Homicidio—Con provocación de parte de la víctima debe ser castigado con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 477, Ser. 2ª.

Homicidio—Véane: *Alevosía*, núm. 2—*Agresión*, núm. 1—*Circunstancia agravante*, núm. 1—*Ofensas graves*, núm. 1—*Riña*, núm. 1—*Provocación*, núms. 2 y 3—*Asesinato*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 8.

1. Homicidio simple—Sin circunstancias atenuantes, debe ser penado con tres años de prisión, si el autor no había cumplido 18 años.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 5, Ser. 2ª.

2. Homicidio simple—Sin circunstancias agravantes, de-

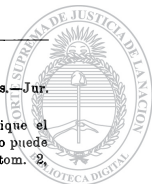
4—Cuando la muerte es la consecuencia de la herida, el delito debe calificarse de homicidio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 196 del Cód. Pen. ant. Tratándose de un homicidio no puede tenerse en cuenta la beodez, pues esta circunstancia solo se tenía en consideración por dicho Código en el caso de lesiones. Tal ha sido la jurisprudencia de la Cámara fundada en el art. 240 del mencionado Cód.

5—Arts. 94, 95 y 96, inc. 1ª, Cód. Pen. vigente.

6—Art. 97, Cód. Pen. vigente.

1—Arts. 68, 134, 137, 166, 171, 185, 187 y 196 del Cód. Pen.

2—Aquí concurría una circunstancia atenuante: y como al homicidio simple le corresponde 6 años de prisión, art. 296 Cód. Pen. ant., y teniendo en cuenta que el Cód. vigente es más benigno pues establece de 3 á 6 años,—Art. 96, inc. 3ª—concurriendo una circunstancia atenuante debe aplicarse cuatro años—Art. 52 del vigente.





HOM

be ser penado con cuatro años y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 110, Ser. 2ª.

3. Homicidio simple—Debe ser penado con 6 años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 40, Ser. 2ª.

4. Homicidio simple—Con circunstancias atenuantes y agravantes, debe ser castigado con seis años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 223, Ser. 2ª.

5. Homicidio simple—Con circunstancias atenuantes, debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 269, Ser. 2ª.

6. Homicidio simple—Sin circunstancias atenuantes ni agravantes, debe ser castigado con ocho años de presidio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 357, Ser. 2ª.

7. Homicidio simple—Cometido por un menor y con circunstancias atenuantes, permite la aplicación de un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 539, Ser. 2ª.

8. Homicidio simple—Cometido sin premeditación ni alevosía, pero también sin circunstancias atenuantes, debe ser castigado con seis años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 348, Ser. 2ª.

9. Homicidio simple—Cometido sin intención, debe ser

3—Art. 196 del Cód. Pen. ant.

4—Arts. 53 y 96, inc. 4º, Cód. Pen. vigente.

5—Arts. 52 y 96, inc. 3º, Cód. Pen.

6—Art. 96, inc. 2º, Cód. Pen. vig.

7—El art. 166 del Cód. Pen. ant., permite graduar la pena de uno á tres años de prisión. En el caso ocurrente existían las circunstancias atenuantes de ebriedad, minoridad y provocaciones graves.

8—Art. 196, Cód. Pen. ant.

9—El homicidio fué causado por una bala escapada de un revólver, mientras su dueño lo cargaba en medio de una rueda de amigos: esta circunstancia importaba por lo menos una operación muy peligrosa y una grande imprudencia, pues por poco que hubiese reflexionado, debió comprender que cometía una verdadera impru-

HOM—HON

penado siempre que exista imprudencia por parte del autor.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 77, Ser. 2ª.

Homicidio simple—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 9.

Honorabilidad—Véase: *Testigos*, núms. 4, 10 y 13.

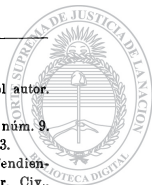
1. Honorarios—Los devengados por el tutor defendiendo su nombramiento no son á cargo del menor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 485, Ser. 2ª.

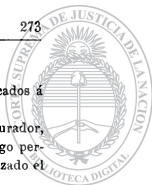
2. Honorarios—Los del Síndico, como gastos de justicia, son á cargo del acreedor privilegiado, siempre que el

dencia poniendo en peligro á las personas que lo rodeaban. La pena que corresponde en este caso es de ocho meses de prisión con suspensión de todo cargo y derecho político mientras se sufre la pena, de acuerdo con lo preceptuado en los arts 24 y 27, inc. 5º y 196 del Cód. Pen. ant.

1—Al defender su nombramiento aboga en su propio interés, y no es justo que los honorarios devengados en esta defensa sean á cargo de quien con ellos no beneficia. La Cámara no dá ningún fundamento para resolver la cuestión en este sentido. No debe aceptarse este sumario como principio general, distinguiendo siempre según los casos prácticos que se presenten á resolución. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Tutor*, núm. 2673.

2—La intervención del Síndico es necesaria en todo juicio en que el concurso sea parte, ella emana de la ley, y es no solo necesaria á la validez de los trámites sustanciales del juicio sino también á toda discusión. Sin la intervención del Síndico todo juicio es nulo y vicioso. Entre las funciones propias del Síndico se encuentra comprendida la de intervenir en todas las cuestiones pendientes contra el fallido y las que surjan después de la quiebra ó insolvencia, no pudiendo intentarse, ni continuarse acción ni ejecución alguna sin su intervención.—Arts. 1534 y 1535 del Cód. de Com., ant., y 727 del Cód. de Proc.—El Sindicato es un mandato público conlido por la autoridad judicial en nombre de la ley.—Moreno, tom. 2, pág. 211.—Y según Renouard, desempeñan un triple carácter: representan simultáneamente á los acreedores, al fallido y á la ley. Si un acreedor privilegiado no puede hacer efectivos sus derechos sin la intervención del Síndico, debe soportar los gastos que esa intervención necesariamente legal origine, porque el que quiere el fin acepta los medios, ó como dice la Regla 39, tit. 34, Part. 7ª, «naturalmente á aquel pertenece el daño á quien el provecho.» Podría asimismo apli-





HON

concurso careciera de otros bienes que los adjudicados á aquél.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 560, Ser. 2ª.

3. Honorarios—Devengados por el abogado del curador, defendiendo la validez del nombramiento, son á cargo personal de aquél, y no puede por ellos ser responsabilizado el incapaz.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 19, Ser. 2ª.

4. Honorarios—El mandatario de un heredero, solo tiene derecho á cobrar sus honorarios á la testamentaria por aquellos escritos de evidente interés común, los demás son de exclusiva cuenta del mandante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 291, Ser. 2ª.

5. Honorarios—Los devengados patrocinando á varios herederos, no son ejecutivos contra la testamentaria, sin previa declaración que responsabilice á la masa, aun cuando en la testamentaria exista una partida destinada al pago de los honorarios y gastos causídicos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 79, Ser. 2ª.

6. Honorarios—Todos los devengados gestionando los

carce por analogia el art. 528 del Cód. de Proc., porque si los gastos causados por el deudor para su defensa, tienen prelación, cuando ella haya sido hecha por un defensor nombrado de oficio, con mayor razón deben tenerlo, cuando ese nombramiento ó intervención tiene por objeto la defensa oficial de los bienes para que sean adjudicados al acreedor que por derecho corresponde.

3—Véase el núm. 1.

4—Es jurisprudencia constante en nuestros tribunales. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Honorarios*, núm. 1354; *Testamentaria*, núm. 2596. Tom. 2, verb. *Honorarios*, núms 5, 10, 20 y 22. *Regulación de honorarios*, núm. 1.

5—Porque no existe relaciones de derecho entre el abogado del heredero y la testamentaria á la que no ha prestado sus servicios profesionales. Si un heredero cree que los servicios prestados por el abogado que lo patrocinó, ha beneficiado á la masa, puede él repetir lo pagado á su abogado, pero éste no puede accionar contra la sucesión, porque no es cesionario de los derechos del heredero. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Honorarios*, núm. 1357.

HON

derechos de un heredero deben ser abonados por los acreedores á quienes haya beneficiado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 586, Ser. 2ª.

7. Honorarios—Los devengados en el juicio de alimentos, son á cargo del padre del menor.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 449, Ser. 2ª.

8. Honorarios—El término para la prescripción de los del abogado, en pleitos no terminados es de cinco años.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 561, Ser. 2ª.

9. Honorarios—La parte al manifestar su disconformidad sobre los honorarios, no enerva su derecho á oponer á su ejecución las escepciones que juzgue conducentes.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 364, Ser. 2ª.

10. Honorarios—El Juez que ha entendido en el expediente es el único competente para entender en el cobro de honorarios devengados en el mismo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 375, Ser. 2ª.

11. Honorarios—No puede exigirse judicialmente el pago de honorarios de ingenieros, maestros mayores, etc., sin justificar previamente haber abonado el impuesto de la patente que la ley les fija.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 53, Ser. 2ª.

12. Honorarios—Los tribunales no pueden conocer so-

7—Como lo es el pago de la cuota alimenticia.

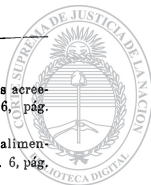
8—Art. 4002 del Cód. Civ.

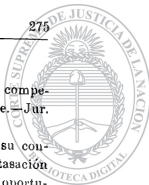
9—Porque esas actuaciones previas, no causan estado. Este caso está de acuerdo con el que se registra en el tom. 1º, Inst., verb. *Honorarios*, núm. 1356.

10—El juicio que inicie por cobro de honorarios, es una emergencia del juicio principal, y como incidente debe tramitarse ante el mismo Juez de lo principal.

11—Art. 43 de la ley de Patentes de 1893, reproducido en leyes posteriores.

12—Art. 10, inc. 4ª de la ley provincial de 26 de Julio de 1870. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Honorarios médicos*, núms. 1370 y 1371.





HON

bre el monto de los honorarios médicos, el único competente para su regulación es el Consejo de Higiene.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 504, Ser. 2ª.

13. Honorarios—El ejecutado debe manifestar su conformidad ó desconformidad con los honorarios de la tasación sin perjuicio de su derecho para resistir el pago en oportunidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 320, Ser. 2ª.

14. Honorarios—El Juez que ha entendido en el litigio es competente para entender y resolver en las cuestiones que se susciten sobre los honorarios devengados en él.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 425, Ser. 2ª.

15. Honorarios—Los devengados en defensa del ejecutado no tienen privilegio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 62, Ser. 2ª.

Honorarios—Véase: *Apoderado especial*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 2 y 7—*Letrado*, núm. 1—*Gastos*, núm. 1—*Padre natural*, núm. 1—*Tercería*, núm. 2—*Cesionario*, núm. 1—*Cámara*, núm. 2—*Prescripción de honora-*

13—Un juicio quedó terminado por medio de un arreglo celebrado entre el ejecutante y ejecutado, el que fué aprobado con posterioridad á la presentación de la tasación: el perito pide que se fije su comisión á fin de exigir en oportunidad el pago: el ejecutado dice que no debe hacer manifestación alguna porque el pago no es debido por él, á lo que la Cámara dice que debe hacer la manifestación sin perjuicio de que al exigirsele el pago oponga las escepciones que crea conducentes á su derecho.

14—Toda cuestión sobre cobro de honorarios, debe ser resuelta por el Juez de la causa, brevemente y sin forma de juicio.—Art. 65, apéndice al Cód. de Proc.—Véase el núm. 10 que está de acuerdo con esta resolución.

15—La Cámara dijo, que mientras los bienes ejecutados estuviesen embargados por terceros, los honorarios mencionados no pueden ser pagados con preferencia á los otros créditos pasivos del deudor, «mientras el derecho invocado no haga valer en la forma y oportunidad correspondientes.» ¿Cuál es esa forma y cuál esa oportunidad? La Cámara no lo dice. No debe olvidarse que hay casos en que los honorarios del abogado del ejecutado pueden tener prelación á los créditos del ejecutante.—Véase el núm. 2.



HON—HUR

rios, núms. 1 y 2—*Poder*, núm. 1—*Albacea*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 6—*Costas*, núm. 8—*Regulación de honorarios*, núms. 1 y 2—*Ejecutado*, núm. 1—*Incidente*, núm. 3—*Jurisdicción*, núm. 8—*Fianza de escarcelación*, núm. 1.

1a. Honorarios médicos—Corresponde al deudor que recibió la asistencia médica ó á su sucesión, justificar que ella fué solicitada á nombre de una sociedad de socorros mutuos y se prestó por orden y cuenta de ésta.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 2ª.

Hora señalada—Véase: *Justa causa*, núm. 1.

Hundimientos—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 10.

1b. Hurto—Sin circunstancias agravantes, de objetos cuyo valor no esceda de 100 pesos nacionales y no llega á 500, debe ser penado con un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 67, Ser. 2ª.

2. Hurto—Sin violencia, de objetos cuyo valor no alcance á 500 pesos debe ser penado con ocho meses de arresto.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 77, Ser. 2ª.

3. Hurto—Para que pueda calificarse el hurto como robo, es necesario que las circunstancias agravantes que requiere la ley, se encuentren claramente justificadas.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 114, Ser. 2ª.

Hurtos—Véase: *Delito*, núm. 4.

1a—Siempre que confiese que la asistencia fué prestada, aunque alegue que ella fué por cuenta de un tercero; pues como en materia civil la confesión es divisible, el confesante ó su sucesión está obligado á probar la calificación de la confesión.—Ley 3, tit. 3, lib. 7, F. R.; Ley 8, tit. 3, Part. 3ª; y 4, tit. 13, Part. 3ª.

1b—Arts. 321 y 322 del Cód. Pen.

2—El damnificado recobró los valores hurtados, en cuyo caso corresponde la pena establecida en el sumario de acuerdo con el art. 193, inc. 1ª del Cód. Pen. vigente.

3—De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 84, inc. 2ª y 193, inc. 1ª, Cód. Pen.



Idéntico origen—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

Identidad de personas—Véase: *Excepción de litispendencia*, núm. 4.

Iglesia—Véase: *Cura párroco*, núm. 1.

Ignorancia—Véase: *Herederos*, núms. 9 y 10.

1a. Iguala—El juicio sobre su cumplimiento debe ser deducido ante el Juez de la testamentaria y no ante el que conoce del espadiente que le dió origen.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 457, Ser. 2ª.

Ilícitas y graves—Véase: *Provocación*, núm. 3.

Ilícito—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 19 y 20.

Imitación—Véase: *Falsificación*, núm. 2.

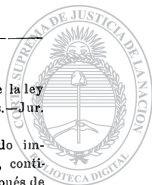
Imprescriptible—Véase: *Reivindicación*, núm. 10.

Imprudencia—Véase: *Homicidio simple*, núm. 9.

1b. Impuesto—E instituciones hechas á beneficio de los

1a -Aquí se trata de hacer efectivo un contrato de iguala celebrado con una persona que después falleció. Es evidente que la acción debe iniciarse ante el Juez de la testamentaria porque siendo universal este juicio atrae á sí á todos los demás. Art. 634, inc. 4, Cód. de Proc.

1b—El art. 44 de la ley de 8 de Julio de 1884 establece, que constituye parte del fondo permanente de escuelas, el diez por ciento de toda herencia ó legado entre estraños. Se dice que cuando se deja la herencia á los pobres y establecimientos de caridad, no se hace institución de heredero. Los pobres de que trataba el testamento



HIM

pobres, no se encuentran sujetos al impuesto con que la ley de educación común grava los legados entre extraños.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 362, Ser. 2ª.

2. Impuesto—La ley que exime del pago de todo impuesto, el capital invertido en una obra determinada, continúa vigente en toda transferencia que tenga lugar después de constituida y mientras no espire el plazo fijado en aquélla.—Jur. Com., tom. 2, pág. 528, Ser. 2ª.

Impuesto—Véase: *Representante*, núm. 1.—*Transferencias*, núm. 1.—*Bienes hereditarios*, núm. 1.—*Papel sellado*, núm. 1.

son los asilados en las casas de caridad y de misericordia y que los beneficiarios son los hospicios y casas de misericordia. La ley de educación, no puede hacer deducciones á estos legados, pues importaría exigirlos á los establecimientos de caridad, que son de utilidad común. Sea que se trate de los pobres en general, ó de los establecimientos de caridad, el impuesto no puede gravar á estas personas. La palabra extraños se ha empleado para designar aquellos que no son parientes: pero esta generalidad no ha tenido presente incluir á los pobres en su acepción, por varias razones: 1ª Porque los pobres han tenido siempre una posición especial de protección que atestiguan leyes antiguas y modernas. 2ª Porque teniendo los pobres una protección directa y especial de la ley, sería contradictorio que ella gravara con sus disposiciones especiales lo mismo que ella protege de una manera general y amplia, como son los alimentos necesarios de los pobres. 3ª Porque las leyes de impuesto son de interpretación restrictiva: así lo establece la sana doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales, y especialmente los de la Cámara. 4ª Porque si bien los pobres pueden ser extraños, no nos son indiferentes en ningún sentido, pues la desgracia los aproxima, y el progreso de la civilización tiende á hacerlos parientes de toda la familia humana. 5ª Porque el legislador lejos de querer gravar con impuestos á los pobres, dicta constantemente leyes protectoras de los desvalidos, favoreciéndolos con beneficios y exenciones, fundando instituciones numerosas para su amparo y haciéndoles objeto de su más imperiosa solicitud.

2.—No puede aplicarse la ley general de impuesto, porque es sabido que toda ley general cede ante una ley especial. Continúa vigente en toda transferencia, porque la extensión se relaciona al capital sin distinción de la persona que lo suministra.



IMP—INA

Impuesto—Véase: *Juicio ordinario*, núm. 1.

Impuestos municipales—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 3.

1. Imputabilidad—Para la de un delito de incontinencia, cuando el reo es menor de 14 años, el Juez debe resolver previamente sobre la capacidad ó malicia.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 275, Ser. 2ª.

Imputación—Véase: *Calumnia*, núm. 1.

Inacción—Véase: *Ratificación tácita*, núm. 1.

1a. Inapelable—El auto que manda ocurrir al Juez en turno es inapelable.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 318, Ser. 2ª.

2. Inapelable—No lo es el auto que ordena que dentro de tercero día se examinen los títulos de propiedad, cuando la exhibición deba hacerse en un juicio testamentario —Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 2ª.

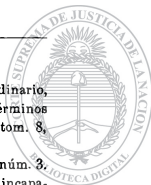
Inapelable — Véase: *Juicio Ejecutivo*, núm. 1.—*Auto*, núm. 1.—*Regulación de honorarios*, núms. 1 y 2.—*Resolución*, núm. 1.—*Títulos*, núm. 5.—*Incompetencia*, núm. 1.—*Cesación de pagos*, núm. 1.—*Lauda*, núm. 2.

1b. Inaplicable—La disposición del art. 521 del Cód. de

1a—Tal auto no trae gravamen irreparable, ni resuelve un artículo.

2—Ha sido práctica constante en nuestros tribunales, el aplicar á las ventas públicas de los bienes testamentarios, las disposiciones correlativas del juicio ejecutivo: pero esta aplicación no debe ir hasta aplicar todas las disposiciones del juicio ejecutivo. Así la inapelabilidad de ciertos autos, la ha establecido la ley, á fin de que el acreedor se haga pago á la brevedad posible de su crédito, disposición que no debe regir en los juicios de sucesiones, porque no existen en estos juicios las razones que ha tenido el legislador para limitar las apelaciones en el juicio ejecutivo. Además, se ha establecido que la inapelabilidad en las providencias, establecida por el art. 505 del Cód. de Proc., solo lo ha sido para el ejecutado: no habiendo ningún ejecutado en el juicio de testamentaria, la disposición del artículo no puede aplicarse.

1b—El artículo ordena que se pongan los títulos de manifiesto en la oficina por el término de tres días perentorios: esta disposición es apli-



INC

Proc. solo es aplicable por analogía en un juicio ordinario, pero sin que puedan declararse fatales aquellos términos que por la ley no tienen ese carácter.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 2ª

Incapacidad—Véase: *Menor*, núm. 2.—*Insania*, núm. 3.

1. Incapaz—El espediente sobre declaración de incapacidad en juicio informativo, no hace cosa juzgada para el caso de que el incapaz pretenda enervar sus efectos en juicio contradictorio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 343, Ser. 2ª.

Incapaz—Véase: *Honorarios*, núm. 3.

1a. Incendiario—Debe ser castigado con prescindencia absoluta del mayor ó menor perjuicio que haya causado, y que solo puede tomarse en consideración como circunstancia atenuante ó agravante.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 465, Ser. 2ª.

1b. Incidente—Todo el que verse sobre suspensión de tér-

cable al juicio ordinario de testamentaria, en cuanto á la exhibición de los títulos, pero no en cuanto á que el término de tres días que allí se asigna sea perentorio, porque los términos son de una naturaleza bien distinta en ámbos juicios: siendo así que las razones que se han tenido para abreviar los términos en el juicio ejecutivo no militan en el juicio testamentario.

1a—Es evidente que el concepto del sumario contiene un contrasentido jurídico. Con efecto, si el delito debe ser castigado con prescindencia del mayor ó menor perjuicio causado, ¿qué influencia puede tener en la aplicación de la pena cuando ésta debe ser aplicada con prescindencia de esa circunstancia? Aquí se ha querido decir, que el mayor ó menor daño causado por una tentativa de incendio, no puede desnaturalizar este delito al extremo de castigarlo como otro distinto: siempre será un incendio y el mayor ó menor daño solo influirá en la aplicación de la pena, agravándola ó haciéndola más benigna.

1b—Es jurisprudencia en nuestros tribunales. Sin embargo, y no obstante esta jurisprudencia, conocemos un caso resuelto últimamente, en el que se declaró que la petición de suspensión del término para alegar hasta que se absolvieran posiciones, no suspendía el término, porque no se hizo lugar á la suspensión del término. Lo correcto habria sido sustanciar la petición de suspensión del tér-

INC

mino, lo suspende de hecho y solo vuelve á correr mediante declaración espresa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 448, Ser. 2ª.

2. Incidente—Sustanciado, deben devolverse á las partes los escritos que sobre él presenten indebidamente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 281, Ser. 2ª.

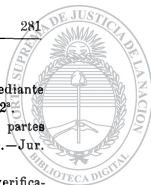
3. Incidente—El acreedor que lo forma para la verificación de su crédito, debe pagar todos los gastos y honorarios, aun cuando no se le imponga la condenación en costas.—Jur. Com., tom. 1, pág. 243, Ser. 2ª.

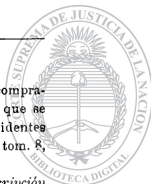
Incidente—Véase: *Alquileres*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, núm. 1.—*Justa causa*, núm. 1.—*Término*, núm. 6.—*Patria potestad*, núm. 1.—*Término de prueba*, núm. 2.—*Verificación de créditos*, núm. 2.

mino y si no se hacía lugar, empezar á correr el término á contar desde el auto que no se hacía lugar, pero la Cámara no lo creyó correcto. Véase el caso de Mabragaña con O'Connor. Allí se pidió que se suspendiera el término para alegar hasta que el contrario absolviera posiciones, la Cámara no hizo lugar á la suspensión del término é incontinentemente declaró desierto el recurso á petición de parte, porque durante la sustanciación del incidente había vencido el término para espresar agravios. Consideramos que esta resolución que citamos no modificará la jurisprudencia sentada en el sumario, porque tenemos entendido que la Cámara tuvo en cuenta razones personales para resolver así el punto con violación de los principios legales que rigen el caso. Desgraciadamente la condición de errar que nace y muere con el hombre hace que ciertos asuntos reciban una solución contraria al espíritu y á la letra de la ley.

2—Se mandó devolver un escrito presentado por un postulante á quien no se había dado audiencia, diciéndose en el auto que no era la estación oportuna para la presentación del escrito.

3—Es obligación de los acreedores del concurso presentar los documentos justificativos de sus créditos dentro del término establecido al efecto—art. 1443 Cód. de Com. vig.—Si no cumplen con este requisito, el art. 1458, establece, que su verificación se hará judicialmente á su costa. Esta imposición se hace y se opera por ministerio de la ley, y ella no depende de que se espresé ó no en la resolución que dá por reconocido el crédito.





INC

1a. Incidentes—No puede darse por desistido al comprador mientras no se encuentre vencido el término que se fijó para la oblación bajo apercibimiento. Los incidentes que se suscitan suspenden el término.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 90, Ser. 2ª.

Incidentes—Véase: *Universalidad*, núm. 1.—*Prescripción de honorarios*, núm. 2.—*Poder especial*, núm. 2.—*Autos*, núm. 1.

Incidentes testamentarios—Véase: *Asesor de menores*, núm. 1.

1b. Incompetencia—El auto que la declara por razón del turno, no causa gravamen ni es en consecuencia apelable.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 49, Ser. 2ª.

2. Incompetencia—La del Juzgado por razón de fuero personal, no puede ser declarado de oficio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 465, Ser. 2ª.

Incompetencia—Véase: *Jurisdicción*, núm. 6.—*Reivindicación*, núm. 8.

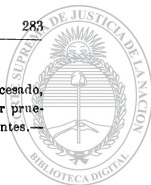
Incompetencia—Véase: *Jueces de Comercio*, núm. 1.—*Jurisdicción comercial*, núm. 1.

1. Incontinencia—En los delitos de esta clase, el informe

1a—No puede hacerse efectivo un apercibimiento decretado, mientras el término acordado no esté vencido.

1b—Cuando el Juez se declara, de oficio, incompetente por no estar de turno parece que es inapelable: pero ¿qué sucederá si se opone por la parte contraria la excepción de incompetencia fundada en la misma causa? El auto que resuelva la articulación es apelable: así lo ha resuelto implícitamente la Cámara cuando ha dicho que la incompetencia fundada en la alteración del turno es improcedente—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Incompetencia*, núm. 4; que está en contra de lo resuelto en otro caso—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Demanda*, núm. 1.

2—Porque siendo renunciable el fuero federal, mientras las partes no declinan la jurisdicción del fuero ordinario, el juez no puede de oficio invocarlo, pues en este caso la jurisdicción es potestativa de la parte, no del Juez.



INC—IND

médico no es elemento de prueba en contra del procesado, cuando el hecho que se le imputa no está acreditado por prueba directa ó presunciones graves, precisas y concordantes.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 563, Ser. 2ª.

Incontinencia—Véase: *Imputabilidad*, núm. 1.

Indagación—Véase: *Maternidad natural*, núm. 1.

1. Indemnización—La mayor suma en que la familia del causante fija el monto de los daños y perjuicios, no importa *plus petitio* y en consecuencia no exonera al demandado de las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 2ª.

2. Indemnización—La mayor suma en que el demandante por daños físicos, fije el monto de la indemnización, no importa *plus petitio* y en consecuencia, no es motivo para exonerar de las costas al demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 2ª.

3. Indemnización—El monto de ella debe ser fijado con arreglo á la condición social de la víctima.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 553, Ser. 2ª.

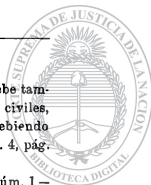
4. Indemnización—Civil, aplicándose la pena con arre-

1—Debe aplicarse el art. 221 del Cód. de Proc., porque no es el caso de la ley 14, tit. 2, Part. 3ª, pues cuando un heredero aprecia, al instaurar la acción, el monto de los daños y perjuicios puede hacerlo sin malicia, apreciando con un criterio distinto del que puede guiar al Juez, y al proceder así no puede haber ni temeridad ni malicia. Generalmente, se hace la estimación á fin de dejar establecida la competencia del Juzgado, pues esa estimación no puede tener otro alcance en presencia de lo dispuesto en el art. 1084 del Cód. Civ., que deja al prudente criterio de los jueces fijar el *monto de la indemnización* y el modo de satisfacerla: no es posible como dice Eseriche, que las leyes humanas prevean y comprendan todas las circunstancias de personas, tiempo, lugares y motivos que pueden concurrir en la apreciación de los hechos modificándolos.

2—Véase nota precedente.

3—Véase verb. *Daño*, núm. 1.

4—De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 68 y 137 del Cód. Pen. ant.



IND-INF

glo á las disposiciones del antiguo Código, el reo debe también ser condenado al pago de las indemnizaciones civiles, aun cuando el acusador no lo hubiese solicitado, debiendo justificarse el monto en otro juicio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 539, Ser. 2ª.

Indemnización—Véase: *Juez*, núm. 2—*Tenedor*, núm. 1—*Asegurado*, núms. 1 y 2—*Costas*, núm. 8—*Revocación*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 5.

Indemnizaciones civiles—Véase: *Esposa*, núm. 5.

Indivisible—Véase: *Confesión*, núm. 4.

1a. Infanticidio—Se reputa voluntario, siempre que la madre no tome precauciones necesarias para evitar la muerte del niño.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 557, Ser. 2ª.

1b. Información—Producida ante la autoridad eclesiástica, tendente á justificar un matrimonio, no puede en ningún caso producir efectos civiles.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 35, Ser. 2ª.

1a—La ley supone siempre toda acción criminal como hecha con voluntad criminal á no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares del caso. Si hay escepciones que eximan de pena, deben ser comprobadas plenamente, no bastando su mera invocación.

1b—A ello se opone el art. 263 del Cód. Civ. Los documentos emanados de la Curia no tienen valor probatorio por ser practicados ante Juez incompetente para actuar en la materia con el objeto que se trata, y mucho menos si se tiene en cuenta que la información se practicó bajo el concepto de que su resolución era dictada *sin abrazar ninguna otra declaración sobre derechos civiles que pudieran tener las partes*: esto es, que se daba un objeto puramente eclesiástico al acto. Debe asimismo no olvidarse que la ley 15, tit. 7, lib. 2, R. C., exigía la ratificación de los testigos que deponen en las informaciones *ad perpetuam*, luego que llegue la oportunidad del juicio ordinario, y la ley 14, tit. 8, lib. 2, F. R. manda que tales testigos declaren de nuevo. Es evidente que esas constancias de la información no pueden ser opuestas á terceras personas que no han intervenido en ella para quienes son *res inter alios acta*.

INF

2. Información—Producida ante la Curia Eclesiástica para justificar vínculos de familia, no prueba cuando se discute el mismo título ante la jurisdicción civil.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 77, Ser. 2ª.

3. Información—Justificada la información cuarentenaria, la prescripción se opera aun contra el Estado, cualquiera que sea la ley que la rija, y la información debe ser aprobada en cuanto á la parte poseída y á la cual se refiera el título extraviado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 18, Ser. 2ª.

4. Información—El Ministerio Fiscal no es parte en los expedientes sobre información supletoria de títulos: la representación de los intereses fiscales corresponde á la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 58, Ser. 2ª.

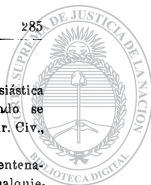
Información—Véase: *Partidas parroquiales*, núm. 1.—*Cosa juzgada*, núm. 5.—*Matrimonio*, núm. 2.—*Partidas parroquiales*, núm. 2.—*Poseción*, núm. 10.

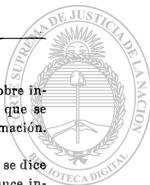
Información sumaria—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 21.

2—Tratándose del estado civil de las personas, los tribunales civiles son perfectamente competentes para conocer del mérito de informaciones producidas ante la Curia. Los Tribunales de la Prov. de B. Aires registran numerosos casos en que han ejercido el derecho de rever tales informaciones sin oposición alguna.

3—La posesión cuarentenaria confiere la propiedad de la cosa poseída aun contra el Fisco. Ley 7, tit 29, Part 3ª. Ley de 29 de Enero de 1867. Art. 4051, Cód Civ.

4—El agente fiscal no debe intervenir en asuntos puramente municipales, porque aunque en general le corresponde la defensa en juicio de los negocios que afectan al interés público, el art. 119 en su inc. 1ª exceptúa expresamente la defensa de aquellos intereses que estuvieren asignados á otras personas. Esto es lo que sucede con los bienes del Estado en el municipio de Buenos Aires, porque estando cedidos por el Estado á la Municipalidad el derecho que le correspondía sobre los bienes vacantes ó baldíos, situados dentro del municipio, corresponde á dicha corporación municipal, que tiene su defensor ó representante especial á quien incumbe velar por sus intereses.





INF

1. Información supletoria.—En los expedientes sobre información supletoria pueden intervenir todos los que se consideren con derecho al bien materia de la información.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 481, Ser. 2ª.

2. Información supletoria.—Si bien la parte que se dice propietaria de un bien sobre el cual un tercero produce información, puede intervenir en ella, carece de derecho para oponerse á que se lleve adelante mientras no deduzca acción en forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 395, Ser. 2ª.

3. Información supletoria.—La Municipalidad al oponerse á la aprobación de una información supletoria de títulos de propiedad, no está obligada á deducir acción por los derechos originarios que la ley le confiere.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 577, Ser. 2ª.

Informaciones.—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1.

Informativo.—Véase: *Demanda*, núm. 1.

1. Informe.—El de peritos calígrafos terminantemente

1—Véase: Inst., tom. 2º. verb. *Información*, núm. 4 y su nota.

2—No habiendo acción deducida, no hay propiamente juicio de oposición, no hay derecho que declarar. Una oposición que no reúna la forma de una acción, no puede detener el curso de otro juicio aunque este sea informativo. El que pretende derechos reales, debe intentar las acciones que de ese dominio nacen, debiendo deducirse en la forma ordinaria y con las formalidades de ley.

3—Formulada la oposición, si ella es fundada, la información no se aprobará, si no lo es, se aprobará. En ningún caso puede obligársele á la Municipalidad á deducir su oposición por medio de una demanda en forma, porque la Municipalidad como cualquiera otra persona *sui juris*, es libre de ejercitar sus derechos en juicio, cuando y en la forma que viere convenirle, salvo el caso de jactancia. La Municipalidad no dijo que los terrenos eran municipales sino que manifestó la existencia de otros expedientes donde otros interesados pretendían derechos á los mismos terrenos. No se atribuirá, pues, derechos de propiedad al inmueble y no procedía la demanda de jactancia.

1—Es doctrina constantemente establecida que el dictámen de los peritos, siempre que fuese terminantemente asertiva, hace prueba

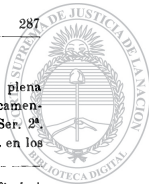
INF

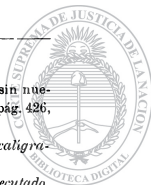
asertivo de la autenticidad de un documento, forma plena prueba, mientras el Juzgado no se pronuncie categóricamente en sentido contrario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 516, Ser. 2^a.

2. Informe—Del cura, sobre la falta de la partida en los

legal.—Art. 178, Cód. de Proc.; Leyes 118, y 119, tit. 18, Part. 3^a. Inst. tom. 1^a, verb. *Peritos*, núm. 1994; *Prueba plena*, núm. 2246; tomo 2^a, verb. *Peritos*, núms. 1 y 3 con sus notas, las que establecen los principios que rigen actualmente la prueba pericial. *Prueba*, núm. 10 donde se establece que su dictamen no liga el juicio del Juez: la nota esplica el alcance de esta resolución. *Informes periciales*, núms. 1 y 2. El sumario espresa el fundamento de un voto aceptado por la Cámara, en el que se adujo como argumento el principio allí establecido. Se dice que mientras el Juzgado no se pronuncie terminantemente contra el dictamen pericial, éste debe prevalecer. Esto no es exacto en el estado actual de la legislación de forma que nos rige. El dictamen de los peritos que tengan título y que sea terminantemente asertivo tiene fuerza de prueba legal, del cual no puede apartarse el Juez; éste queda ligado á la opinión de los peritos sin poderse apartar de ella. El art. 1033 del Cód. Civ., no puede servir de base á una doctrina contraria. 1^a Porque al dictarse aquella ley, eran otros los principios prácticos que regían la prueba caligráfica del cotejo de firmas. Las leyes 118 y 119, tit. 18, Part. 3^a, no declaran que el juicio de los peritos hace plena prueba, leyes que estaban en vigencia cuando se dictó el Cód. 2^a Porque esa ley ha sido derogada espresamente por el art. 178 del Cód. de Proc. vigente. 3^a Porque el art. 1033 del Cód. Civ., sólo ordena el cotejo y comparación de la firma cuando es negada, mas no puede fijar el alcance ó valor de la prueba porque esta es materia propia de la ley de forma. Un argumento decisivo en esta cuestión es la modificación introducida en el art. 150 de nuestro Cód., el que ha sido tomado del 609 de la ley esp. Nuestra ley dice: «El Juez hará por sí mismo el cotejo después de oír las observaciones de las partes, si estuviesen presentes, y el dictamen de los peritos». La ley esp. dice: «El Juez hará por sí mismo la comprobación después de oír á los peritos revisores, y apreciará el resultado de esta prueba conforme á las reglas de la sana crítica, sin tener que sujetarse al dictamen de aquéllos». Nuestro Cód. suprimió esta última parte. ¿Porqué? simplemente porque adoptó un sistema completamente opuesto, pues el art. 178 reviste á los dictámenes, de peritos titulados, con la fuerza de prueba legal.

2—Art. 85 del Cód. Civ.





INF—INH

libros parroquiales, hace procedente la información, sin nuevas pruebas de su no existencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 426, Ser. 2ª.

Informe—Véase: *Declaraciones*, núm. 9—*Peritos calígrafos*, núm. 1.

Informe del Reg. de la Propiedad—Véase: *Ejecutado*, núm. 2.

1. Informe médico—Forma plena prueba respecto á las heridas que sean causa necesaria de la muerte.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 477, Ser. 2ª.

Informe médico—Véase: *Incontinencia*, núm. 1—*Contradicción*, núm. 1.

Informes—Véase: *Construcción*, núm. 1.

Ingeniero—Véase: *Mensura*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 11.

Inhabilidad—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 1.

1a. Inhabilidad de título—La falta de plazo para el cumplimiento de la obligación, hace procedente esta escepción, mientras judicialmente no sea fijado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 342, Ser. 2ª.

2. Inhabilidad de título—Consentida la regulación, es improcedente esta escepción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 425, Ser. 2ª.

Inhabilidad de título—Véase: *Escepción de nulidad*, núm. 1—*Título inhábil*, núm. 1—*Escepción de inhabilidad*, núm. 9.

1b. Inhabilitación—Para ejercer actos de la vida civil,

1a—Dos condiciones exige el art. 465 en su inc. 3º: que la deuda sea líquida y exigible. Cuando la obligación no tiene plazo, el pago no puede exigirse hasta que el Juez no señale el término en que el deudor debe hacerlo.—Arts. 618 y 751, Cód. Civ.

2—Véase Inst., tom. 1º, verb. *Honorarios*, núm. 1355; tom. 2, verb. *Escepción de inhabilidad*, núm. 4.

1b—El sumario no expresa lo que el caso resuelve. Se trata de un poder otorgado en Francia: con él se presenta el apoderado aquí:

INH

dictada en Francia, mientras ella subsista, inhabilita al condenado para ejercerlos en la República.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 17, Ser. 2ª.

1. Inhibición—Ejecutoriado el auto que permite sustituir la inhibición por el embargo de bienes determinados, el auto en que el Juez acepta los que conceptúe responder á ese objeto, no causa agravio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 163, Ser. 2ª.

2. Inhibición—Es procedente la de enagenar los bienes de la sociedad conyugal, si iniciada la separación, existe peligro á juicio de los tribunales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 322, Ser. 2ª.

3. Inhibición—Su levantamiento solo puede ordenarse con intervención del acreedor que la hubiese solicitado.—Jur. Com., tom. 1, pág. 228, Ser. 2ª.

4. Inhibición—El recibo de la cantidad importe del in-

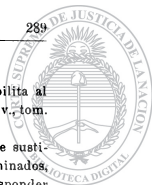
el demandado opone la escepción de falta de personería, fundado en la ineficacia del poder. Según disposición del art. 7 del Cód. Civ., la validez ó nulidad del poder debe juzgarse por las leyes de Francia, porque allí fué otorgado; ese poder no puede tener valor alguno desde que su otorgante se hallaba inhabilitado para ejercer actos de la vida, condición que debe considerarse subsistente con arreglo á lo dispuesto en el art. 2003 del Cód. Civ. francés.

1—Porque este auto es consecuencia del otro: es su cumplimiento.

2—Y aún antes de ella, dice el art. 1295 del Cód. Civ.

3—Debe ser citado el que solicitó el embargo. El art. 259 de la Ley Org. de los Tribs. establece, que «las anotaciones ó anotaciones preventivas no se cancelarán sino mediante escritura pública, en la cual manifieste su consentimiento la persona á cuyo favor se haya otorgado la primera, sus sucesores ó representantes legítimos, ó en virtud de providencia ejecutaria contra la cual no haya recurso alguno».

4—Porque un recibo no es una obligación de pagar una suma de dinero determinada, lo que hace inaplicable el art. 443 Cód. de Proc.; teniéndose en cuenta, por otra parte, que el documento en este caso no trae aparejada ejecución, arts. 464 y 465, *ibid.*—Además en el caso presente, no se había deducido demanda alguna ni hubo juicio trabado, no pudiendo hacerse aplicación del art. 448 del mismo Cód.





INH—INJ

mueble vendido por escritura pública y cuya tradición es imposible por no ser de propiedad del vendedor, no bastan para fundar una inhibición.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 464, Ser. 2ª.

5. Inhibición—Su levantamiento, no puede decretarse sin audiencia del que la solicitó.—Jur. Com., tom. 2, pág. 105, Ser. 2ª.

Inhibición—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 1 y 2—*Contrato*, núm. 12—*Prenda*, núm. 1.

1a. Inhibición general—Es procedente contra el concursado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 446, Ser. 2ª.

2. Inhibición general—Una obligación de hacer, no basta para fundar una inhibición general.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 459, Ser. 2ª.

Inhibitoria—Véase: *Declaratoria*, núm. 2—*Recusación*, núm. 3.

1b. Injuria—El hecho de tomar los datos de un expedien-

5 Véase el núm. 3.

1a—Según disposición del art. 1160 del Cód. Civ., el concursado no puede disponer de sus bienes. La inhibición es en este caso procedente á fin de asegurar los bienes de la masa, y para evitar que terceros de buena fe sean perjudicados con adquisiciones indebidas. El art. 461 del Cód. de Proc. no es aplicable, porque ese artículo rije las relaciones entre deudor y acreedor.

2—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara, y en contra de la opinión constante emitida por nosotros. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 3 y su nota. Parece imposible que la Cámara se deslinda de los argumentos con que se rebate esta doctrina, diciendo que la jurisprudencia lo tiene ya establecido. Debe rebatir los argumentos que se hacen en contra de este mal precedente.

1b—Lo que constituye en este caso el delito de injuria es la publicidad que imprime al hecho la información de la prensa. Debe además tenerse presente, que se trataba de un sumario, en cuyo caso debe la justicia evitar, por todos los medios á su alcance, que tome vuelo, esa corruptela que viene introduciéndose, comunicando al público constancias de sumarios que por su naturaleza deben permanecer ignorados del público hasta que la causa se eleve á plena-

INJ

te formado por la autoridad, no exime al que hace la publicación de la pena por la injuria que ellos puedan contener.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 154, Ser. 2ª.

1a. Injurias—Es improcedente la acción, siempre que se imputa un delito previsto y penado por el Cód. Penal: el acusador solo puede deducir la acción por calumnia.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 489, Ser. 2ª.

2. Injurias—Y amenazas á la autoridad, deben conceptuarse desacato, aun cuando se fije para su cumplimiento la terminación del mandato.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 53, Ser. 2ª.

Injurias—Véase: *Compensación*, núm. 1—*Consulta*, número 1.

Injurias graves y continuadas—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 8—*Jurisdicción correccional*, núm. 4—*Jueces del crimen*, núm. 1—*Provocación*, núm. 7.

Injurias ilícitas—Véase: *Burlas provocativas*, núm. 1—*Provocación*, núm. 1.

1b. Injurado—Si no se da por satisfecho con las explicaciones del acusado, debe continuar el juicio.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 172, Ser. 2ª.

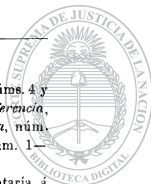
rio. El Dr. Rodolfo Rivarola al estudiar el art. 184 del Cód. Pen. vig. dice lo siguiente: «El que reproduce una ofensa la propaga, contribuye á su divulgación y agrava la lesión del derecho del ofendido, pudiendo causar en determinadas circunstancias un mal inmensamente mayor» Y cita un caso del Tribunal Supremo de España, donde se sustenta esta misma teoría —Tom. 2º, pág. 268, Esposición y crítica del Cód. Pen.

1a—De acuerdo con lo establecido en los arts. 177, 178 y 180, inc. 1º del Cód. Pen. vig.

2—Constituyen el delito de desacato de acuerdo con lo preceptuado en el art. 377 del Cód. Pen. ant. y 237 del vigente.

1b—Las explicaciones fueron contrarias á los hechos aseverados por el querellante, en cuyo caso no está en las facultades de los jueces dar por terminado un juicio con esas explicaciones que no satisfacen el honor ofendido.





INM—INS

Inmueble—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 4 y 5—*Acción*, núm. 2—*Poseción*, núms. 8, 9 y 10—*Diferencia*, núm. 1—*Mandato especial*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 3—*Liquidación de sociedad*, núm. 2—*Tradición*, núm. 1—*Embargo*, núm. 4.

1a. Inmuebles—Las ventas de los de la testamentaria, a título oneroso, practicadas por el poseedor en grado sucesible, son válidas respecto a los herederos, siempre que el comprador sea de buena fe.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 393, Ser. 2ª.

Inmuebles—Véase: *Condóminos*, núm. 1—*Vendedor*, números 1 y 2—*Acción*, núm. 7—*Inhibición*, núm. 4—*Municipalidad*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 3—*Comprador*, núm. 7—*Títulos*, núm. 4.

Insano—Véase: *Curador*, núm. 2.

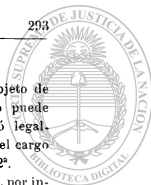
1b. Insania—Justificada científicamente, no puede calificarse de ilícito el acto de colocar en una casa de sanidad al insano, y en consecuencia la acción de daños y perjuicios instaurada por éste debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 343, Ser. 2ª.

2. Insania—Siendo un derecho y no un deber, la de-

1a—Art. 3430, Cód. Civ

1b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 13.

2—La ley ha querido penar la incuria de los parientes, que viendo a otro miembro de su familia en abandono por causa de incapacidad, no llevan la denuncia a los jueces para que se les provea de representante legal. Cuando no hay abandono, no existe la obligación impuesta por la ley.—Art. 398 del Cód. Civ.—Es conveniente y hasta humanitario en muchos casos, no imponer a los parientes el triste deber de promover un juicio sobre accidentes desgraciados, pues la ley, tratándose de la denuncia, que puede desaparecer bajo los cuidados y atenciones de familia, no ha hecho ni indispensable, ni necesaria su denuncia. En el mismo orden de ideas se ha pronunciado la Cámara en otro caso que corre publicado. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Insania*, núms. 1 y 2.



INS

nuncia de la insania de un pariente próximo, á objeto de nombrarle curador, el silencio de los hermanos, no puede traerles perjuicio alguno, siempre que de hecho ó legalmente y á satisfacción, se encuentre desempeñando el cargo la madre legítima.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 256, Ser. 2ª.

3. Insania.—Declarada la irresponsabilidad del reo, por insania, cesa la jurisdicción criminal, y depende para su libertad de la civil que declare haber cesado la incapacidad.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 297, Ser. 2ª.

Insania.—Véase: *Juicio*, núm. 2—*Cosa juzgada*, núm. 6—*Testamento ológrafo*, núms. 5 y 6.

1a. Insano.—El curador de un insano puede enagenar á título oneroso los derechos eventuales de éste, por el mismo precio y condiciones en que lo hagan los herederos capaces, depositando judicialmente el precio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 2ª.

Insano.—Véase: *Hermanos legítimos*, núm. 1—*Parientes*, núm. 1—*Personería*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 3—*Insania*, núm. 1.

1b. Inscripción.—Para pedir la de una sociedad extranjera, en la matrícula de comercio, se requiere estar especialmente facultado al efecto.—Jur. Com., tom. 1, pág. 226, Ser. 2ª.

3.—Un procesado por tentativa de homicidio fué declarado irresponsable por haber ejecutado el acto en estado de demencia, y pasado al manicomio en calidad de demente, no de preso. Un miembro de la familia del reo pidió la libertad de éste, á lo que no se hizo lugar porque esta cuestión como que afecta al estado civil de una persona, corresponde al juez ordinario de lo civil, el que en caso de creerlo conducente decretaría su libertad. El Juez del Crimen, ya nada tiene que hacer pues ha concluido su jurisdicción una vez que ha sido declarado en definitiva, el reo irresponsable legalmente.

1a.—Véase: verb. *Derechos eventuales*, núm. 1.

1b.—Los poderes que acreditaban la personería eran sumamente limitados.



INS

2. Inscripción—La de una sociedad, en la matrícula de martilleros, solo puede ser gravada por el sello que la ley determina, sin que deban acompañarse tantos cuantos sean los socios que la componen.—Jur. Com., tom. 2, pág. 222, Ser. 2ª.

Inscripción—Véase: *Moratorias*, núms. 1 y 2—*Comerciante*, núm. 1.—*Sociedades anónimas*, núm. 1.

1. Inscripciones—En la matrícula durante los meses de Diciembre de 1888; Enero, Febrero y Marzo de 1889.—Jur. Civ., tom. 7, págs. 19, 52, 174 y 342, Ser. 2ª;—durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 1889.—Jur. Civ., tom. 8, págs. 64, 335, 398 y 505, Ser. 2ª.

Inscripciones—Véase: *Matricula*, núm. 1.

1a. Insignificancia—La del valor de los objetos robados, solo permite como atenuación la aplicación del término medio de la pena.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 22, Ser. 2ª.

Insolvencia—Véase: *Acreedor*, núm. 1—*Ejecutante*, núm. 1—*Cesación de pagos*, núms. 1 y 2.

Instituciones—Véase: *Legados*, núm. 1—*Impuesto*, número 1.

Instrumento—Véase: *Error*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 4.

1b. Instrumento privado—Reconocido por ambos litigantes la existencia de un acto constante en instrumento

2—La asociación de martilleros constituye una personalidad jurídica, y consiguientemente debe abonar un solo sello porque la ley no ve en ella más que una sola persona.

1a—Se trataba de un robo insignificante, pero la pena no pudo bajarse del término medio porque á ello se oponen los arts. 52 y 191 del Cód. Pen. vig.

1b—Este sumario está completamente equivocado: la sentencia no resuelve tal cosa: el fué tan solo el fundamento de la opinión de la minoría de la Cámara que opinó que una sentencia no era nula, y que ella debía resolverse en ese sentido. La mayoría votó por la



INS

privado, el Juez no puede abstenerse de fallar sobre el fondo, fundándose en la no presentación en juicio, pues aun cuando existan herederos menores interesados, deben resolver sobre la parte que afecta á los mayores.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 307, Ser. 2ª.

2. Instrumento privado—Solo procede la protocolación de un instrumento privado, cuando se justifica plenamente la autenticidad de las firmas que lo suscriben.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

3. Instrumento privado—El defensor nombrado por fallecimiento ó ausencia del firmante de un documento privado, ó de sus herederos, tiene personería para pedir la nulidad del contrato que resultaría si se justificase la autenticidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

nulidad de la sentencia, circunstancia que la inhabilitaba para entrar á ocuparse del fondo de la cuestión. La Cámara declaró la nulidad y mandó pasar la causa á otro juez para que fallase, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 240 del Cód. de Proc.

2—Para que un documento simple pueda ser protocolado, debe ser reconocido por el otorgante ó por sus herederos con título comprobado. Si esos herederos no pueden ser habidos, las diligencias de autenticación deben ser practicadas con intervención de un curador del bien ó con un defensor de los herederos: este procedimiento está fundado en el hecho de que tratándose de convertir en un documento público un documento privado, que es lo que importa la protocolización, el art. 1026 del Cód. Civ. exige, ó el reconocimiento del mismo documento por el otorgante, ó la decisión judicial que la da por reconocido, y esta decisión debe tener lugar en juicio contradictorio. Esta es la doctrina imperante desde antes de la vigencia de nuestro Cód. como puede verse por la cita puesta al pie del art. 1026 citado. Así lo enseña entre otros autores, Marcadé al comentar el art. del Cód. Nap. análogo al nuestro.

3—El defensor representa á la persona defendida en todos sus derechos y acciones como si ella personalmente interviniera en el juicio, y si ella puede decir de nulidad del documento, es evidente que también lo puede el representante nombrado para defender sus intereses comprometidos.



INS

4. Instrumento privado—Declarado auténtico, en virtud de sentencia consentida, queda elevado á instrumento público, aún cuando la sentencia no lo declare espresamente.—Jur. Com., tom. 1, pág. 277, Ser. 2ª.

5. Instrumento privado—El reconocimiento de la firma de un instrumento privado, importa también el de su contenido y corresponde al firmante justificar las alteraciones ó agregaciones que alegue.—Jur. Com., tom. 4, pág. 548, Ser. 2ª.

6. Instrumento privado—Debidamente reconocido en juicio, hace plena fe de sus atestaciones, y en su consecuencia, una cancelación comprende todas las deudas de fecha anterior.—Jur. Com., tom. 4, pág. 548, Ser. 1ª.

Instrumento privado—Véase: *Disposiciones*, núm. 1—*Donación*, núm. 1—*Firma*, núms. 1 y 2—*Escritura pública*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 4—*Contrato de compra-venta*, núms. 2 y 3—*Mujer casada*, núm. 2.

1. Instrumento público—Individualizado en la demanda, puede agregarse copia de él durante el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 10, Ser. 2ª.

4—Queda elevado á instrumento público, art. 1026, Cód. Civ., aunque la sentencia no lo declare, porque tal declaración carecería de objeto positivo, puesto que la ley misma le da ese carácter. Basta por consiguiente la declaración del primer hecho, para que el derecho del interesado no pueda ser contestado jamás. Debe tenerse presente además, que en el caso presente no se pidió en la demanda que se hiciese tal declaratoria, no pudiendo consiguientemente haberla legalmente el Juez, porque ello importaría un pronunciamiento *ultra petitio*, que iría hasta anular la sentencia, porque el Juez no puede resolver, bajo pena de nulidad, más allá de lo pedido en la demanda.

5—Arts. 1028 y 1029, Cód. Civ., Ley 118, tit. 18, pág. 3ª.

6—En cuanto á la primera parte, véase el número precedente.

1—El art. 72 del Cód. de Proc. establece la obligación del actor de acompañar con la demanda las escrituras y documentos en que

INS

2a. Instrumento público—Al que alega la ineficacia del otorgado en el extranjero, corresponde la prueba de que en su expedición se han violado las leyes del país en que fué otorgado.—Jur. Com., tom. 2, pág. 310, Ser. 2º.

Instrumento público—Véase: *Formas*, núm. 1—*Mandato*, núm. 1—*Adjudicación*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 4—*Formalidades*, núm. 2—*Simulación*, núm. 3—*Matrimonio*, núm. 1—*Prescripción treintenaria*, núm. 1.

Instrumentos—Véase: *Conocimientos*, núm. 1.

1. Instrumentos públicos—Su nulidad debe juzgarse con arreglo á las leyes del país en que fueron otorgados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 17, Ser. 2º.

2b. Instrumentos públicos—El Escribano autorizante solo puede omitir la transcripción del instrumento á que hace referencia, cuando se encuentre transcrito en su registro.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 367, Ser. 2º.

Instrumentos públicos—Si bien los certificados expedidos por una oficina pública, son instrumentos públicos, carecen de fuerza ejecutiva, si de su contesto no resulta

funde su derecho, y si no los tiene en su poder debe mencionarlos con la individualidad posible.

2a—Los documentos públicos deben ser otorgados con arreglo á las leyes del país en que tienen origen,—art 12, Cód. Civ.—Los documentos públicos hacen plena fe en juicio mientras no sean impugnados, incumbiendo la prueba de su falsedad ó insubsistencia al que la afirma.

1—Art. 7 del Cód. Civ.

2b—Art. 1003 Cód. Civ.

3—Se trata del cobro ejecutivo de afirmados; iniciado el juicio con un certificado de la Municipalidad y debidamente visado, se le opuso la excepción de inhabilidad de título, fundándose en que no se estableció en el mismo documento que las cuotas habían vencido y que eran exigibles ejecutivamente, de acuerdo con la ley de la materia. La excepción fué declarada procedente. Véase: verb. *Empedrados*, núms. 1 y 2.





INS—INT

que son espeditos con arreglo á la ley.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 245, Ser. 2º.

4. Instrumentos públicos—El testamento debe ser hecho por el Escribano, pero su validez no depende de que éste lo haya escrito de su puño y letra, pudiendo serlo por amanuenses como los demás instrumentos públicos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 102, Ser. 2º.

Instrumentos públicos—Véase: *Concurso*, núm. 2—*Validez*, núm. 1.

Intención—Véase: *Tentativa de estafa*, núms. 1 y 2—*Violación*, núm. 3.

Intención criminal—Véase: *Armas de fuego*, núm. 3—*Delito*, núm. 4—*Lesiones*, núms. 4 y 6.

Intención de matar—Véase: *Voluntad criminal*, número 1.

1. Intención homicida—Siempre que de autos resulte

1—El art. 3654 del Cód. Civ. solo establece que el testamento por acto público debe ser hecho por ante Escribano Público: no exige que todo él esté escrito de su puño y letra. Al tratar de las escrituras públicas tampoco exige que el Escribano cumpla con este requisito. Cuando la ley ha facultado al testador para dictar sus disposiciones, como lo determina el art. 3656, no ha querido con esto dar á entender, que su intención ha sido modificar el procedimiento autorizado para extender las escrituras públicas en el protocolo: pues las palabras *dictar al Escribano*, no implica que éste debe escribir por sí mismo las disposiciones del testador: esto significa tan sólo que él puede enunciar de un modo directo en el mismo acto su última voluntad, y que el Escribano ante quien lo verifica debe hacer constar esas disposiciones por sí mismo ó valiéndose de otros, siempre en la forma acostumbrada para tales instrumentos. Que las manifestaciones de la voluntad del testador, estén escritas por él ó por otro bajo su dirección, las formas establecidas por la ley se llenan cumplidamente. El art. 3656, solo ha querido dejar establecidas las formas en que el testador puede manifestar su voluntad, ya sea en una forma escrita ó en una forma verbal.

1—De las declaraciones prestadas por los testigos en el proceso

INT

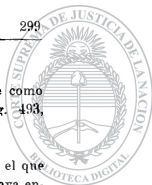
comprobada, las lesiones corporales deben castigarse como tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 493, Ser. 2ª.

Intendencia—Véase: *Resolución*, núm. 1.

1. Interdicto—Aun tratándose de un interdicto en el que oponiendo la escepción de la falta de personería se haya en-

resultó que no se trataba de simples lesiones corporales, sino que la intención que tuvo el delincuente, al cometer el acto, era homicida, debiendo calificarse el delito como tentativa de homicidio de acuerdo con lo preceptuado en el art. 96 del Cód. Pen.

1.—Se trata de un interdicto de recobrar intentado por el esposo, en virtud de que su esposa había enagenado un inmueble sin su autorización, habiendo tomado la compradora posesión de la casa de una manera clandestina. La demandada, que era casada, opuso la escepción de falta de personería, fundada en su estado de casada, entrando al mismo tiempo al fondo de la cuestión. El Juez, estudiando la escepción opuesta, la rechaza, fundado en que si bien es cierto que la ley prohíbe á la mujer casada, estar en juicio por sí ó por procurador, sin la venia del marido—Art. 188 del Cód. Civ.—esto no quiere decir que no pueda ser demandada: que en el presente caso la demandada habria celebrado un contrato bajo su solo nombre sin hacer mención de su estado de casada y sin invocar autorización alguna del marido, siendo la demanda procedente contra ella, sin perjuicio de que el esposo, en virtud de su carácter de representante legal asumiese la personería que la ley le acuerda: que no se había comprobado en manera alguna el estado de casada invocado por la escepcionante, siendo así que el esposo la había autorizado competentemente para intervenir en el juicio, según acta labrada en el comparendo verbal que se celebró, cumpliéndose así los requisitos exigidos por el art. citado del Cód. Civ. La Cámara revocó esta sentencia diciendo: que el boleto de compraventa fué otorgado en la forma ya expresada, pero esta circunstancia no impide el progreso de la escepción, porque la demandada había comprobado con un espediente agregado, y que fué invocado en el juicio verbal, su estado de casada: que tampoco se opone al progreso de la cuestión, la circunstancia de haber el esposo entrado al fondo del asunto, pues á ello le obligaba la naturaleza sumaria del interdicto. De todos modos, es necesario tener presente que lo único que estaba en tela de juicio era la observancia ó inobservancia de cier-



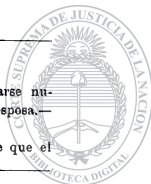
INT

trado al fondo, la sentencia que se dicte debe declararse nula, si la acción fuese dirigida solamente contra la esposa.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 537, Ser. 2ª.

1. Interdicto de despojo—Es procedente siempre que el

tas formalidades que tienen su origen y fundamento en disposiciones de orden público, como son las que rigen la incapacidad jurídica de la mujer casada. El art. 57, en su inc. 4º, establece que el marido es el representante de la mujer, y á su vez el art. 188, que es su concordante, establece que la mujer casada no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del marido. Para darnos exacta cuenta del objetivo que ha guiado al legislador cuando ha sentado este principio, debemos tener presente lo que dice García Goyena en su proyecto de Cód. El marido, dice, jefe y director de la familia, administrador de todos los bienes del matrimonio y responsable de ellos, es á quien compete demandarlos y defenderlos en juicio. Lo contrario sería una perturbación del orden doméstico en lo moral y civil, un contra-principio en buena legislación, fuera de que la contestación del pleito es considerada como un cuasi-contrato, y la mujer no puede obligarse por sí sola. La ley exceptúa espresamente los casos que ha creído convenientemente exceptuar —art. 191.—Y si la letra del art. 188 no fuera de suyo claro, está el art. 210 que disipa toda duda. La ley 11, tit. 1º, lib. 10, de la Nov. Rec. citada por el Codificador, dice así: «Nin estar en juicio haciendo ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido.» Los comentadores del art. 215 del Cód. Napoleón enseñan que para ser válidamente demandada la mujer, la citación debe entenderse con el marido. No se puede alegar diciendo, que el requisito de la ley estaba cumplido desde que el marido autorizó á la esposa para intervenir en el juicio, desde que esa autorización ha sido el solo efecto de articular de incontestación; como tampoco puede argumentarse con el hecho de haberse entrado á discutir el fondo de la cuestión, pues la naturaleza del juicio lo obligaba á proceder así, siendo sabido que los interdictos se sustentan en una sola audiencia presentando las excepciones, pruebas y defensas que hiciesen al derecho de las partes, quedando desde ese momento conclusa la causa para definitiva. La sentencia dictada en el caso del sumario es nula á condición de que la excepción de incontestación sea procedente, porque si no lo fuera el Juzgado queda habilitado para entrar á resolver el juicio.

1.—El art. 581 del Cód. de Proc., requiere para que proceda este interdicto, que el que lo intente ó su causante haya tenido la posesión de la cosa demandada, y que haya sido despojado de ella *con*



INT

propietario pierde la posesión clandestinamente aunque con violencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 535, Ser. 2ª.

1a. Interdicto de obra nueva—Es procedente siempre que se justifique la posesión y aun cuando el que lo deduzca no tenga título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 84, Ser. 2ª.

2a. Interdicto de obra nueva—Justificada la posesión y la turbación sufrida, el interdicto de obra nueva es procedente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 191, Ser. 2ª.

3a. Interdicto de obra nueva—Para que sea procedente, no basta justificar la propiedad, es necesario que esté acompañada de la posesión.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 546, Ser. 2ª.

1b. Interdicto de recobrar—Solo es procedente justificando la posesión anterior á todo acto litigioso.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 331, Ser. 2ª.

2b. Interdicto de recobrar—Para que proceda, es requisito indispensable justificar la posesión anterior.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 106, Ser. 2ª.

3. Interdicto de recobrar—Solo procede, justificando

violencia ó clandestinamente. Siempre que cualquiera de estas dos circunstancias concurran, procede el interdicto. La clandestinidad existe, según lo dispuesto en el art. 2369 del Cód. Civ., cuando los actos por los cuales se tomó ó se continuó en la posesión, fueron ocultos, ó se tomó en ausencia del poseedor. ó con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho á oponerse.

1a—En los interdictos no se discute jamás el *derecho* á la posesión, que es lo que confiere el título de propiedad, sino el *hecho* de la posesión. El que posee se defiende con su posesión contra aquél que tiene el derecho á poseer.—Arts. 2468, 2469, 2490, 2494, 2498 y 2500 del Cód. Civ., y 581, 583 y 585 del Cód. de Proc.

2a—Art. 583, Cód. de Proc.

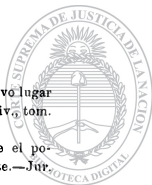
3a—Véase el sumario y nota precedentes.

1b—No habiendo posesión anterior al litigio, no puede haber despojo.

2b—Arts. 2493 y 2494, Cód. Civ., y 581, inc. 1ª, Cód. de Proc.

3b—Art. 581, Cód. de Proc.





INT

que el demandante tenía la posesión y su pérdida tuvo lugar por medio de violencia ó clandestinamente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 171, Ser. 2ª.

4. Interdicto de recobrar—Procede siempre que el poseedor pierda su posesión violenta ó clandestinamente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 385, Ser. 2ª.

5. Interdicto de recobrar—Reconocido judicialmente por el demandado haber tomado clandestinamente la posesión, el que entabla el interdicto no necesita probar que la tenía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 301, Ser. 2ª.

Interdicto de recobrar—Véase: *Posesión*, núm. 2.

1. Interdicto de retener—Rechazado éste, el desposeído solo puede entablar juicio ordinario, el sumario de recobrar es improcedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 2ª.

4—Art. 2494, Cód. Civ., y 581, Cód. de Proc.

5—Este sumario está equivocado: la Cámara declaró procedente el interdicto, fundada en que el actor había comprobado los extremos exigidos por el art. 581 del Cód. de Proc. para prosperar el interdicto, pues dejó establecido el despojo sufrido y la posesión que tenía del terreno materia de la acción. «Tanto *respecto à la posesión* como sobre el extremo de la violencia ejercitada por el demandado suministran pruebas bastantes los testimonios y declaraciones constantes en autos.» La ley exige siempre la comprobación de los dos extremos.

1—Porque cuando se elige una vía legal, no puede volverse à tomar la abandonada, pues sería no concluir jamás, é introducir la confusión y hasta la contradicción en ciertos casos. Si fuese posible instaurar todos los interdictos se desnaturalizaría su carácter esencialmente sumarisimo. En el caso presente la posesión fué dada por mandato judicial: el ocupante actual dedujo interdicto de retener, el que fué rechazado; entonces dedujo el de recobrar, que fué asimismo declarado improcedente por las razones más arriba apuntadas y por mayoría de votos. La minoría sostuvo la procedencia del interdicto de recobrar después de rechazado el de retener, fundada en que concurrían las condiciones exigidas por el art. 581 del Cód. de Proc.; es decir, que el que intenta la acción se halle en la posesión de la cosa demandada, y que haya sido despojada con violencia ó clandestinamente de esa posesión. Esta condición con-

INT

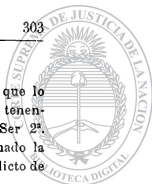
2. Interdicto de retener—Solo procede cuando el que lo deduce tiene la posesión civil, no basta la simple tenencia á nombre de otro.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 469, Ser 2ª.

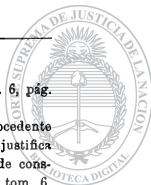
3. Interdicto de retener—El Juez que ha ordenado la posesión es el competente para entender en el interdicto de

curre en el caso presente, puesto que se arrebató la posesión en virtud de una orden espedita sin citación ni audiencia del actual poseedor, por un Juez, que sin más trámite le ha dado cumplimiento, lo que constituye un acto de violencia clasificando de despojo por la ley 2, tit. 13, Lib. 4, R. C., cuando dice: «Defendemos que ningún Alcalde, ni Juez, ni persona jurada no sean osados de despojar de su posesión á persona alguna, sin que primeramente sea llamado y oído y vencido por derecho.» A esto se contesta por la mayoría, que esa ley no está en vigencia porque el art. 22 del Cód. Civ. así lo establece. Se dice que en el estado actual de nuestra legislación no proceden los interdictos ó acciones posesorias contra las resoluciones de los jueces. Véase: verb. *Auto judicial*, núm. 1. De acuerdo con esta doctrina puede verse Ins., tom. 1º, verb. *Interdicto de recobrar*, núm. 147J y tom. 2, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1. En contra, Inst., tom. 2, verb. *Despojo*, núm. 4; *Interdicto de retener*, núm. 2.

2—Se dijo por la Cámara que comparando el inc. 1º del art. 574, que establece los requisitos del interdicto de retener, con el inc. 1º del art. 581, que trata de las condiciones que exige el interdicto de recuperar ó de despojo, se deduce que aquél solo puede deducirlo el que tiene la posesión civil, no la tenencia de la cosa demandada, pues dicha tenencia solo puede oponerse al despojante, para que nadie sea osado de hacerse justicia por su propia mano con detrimento de la misión confiada á los tribunales. Véase E. Reus, Ley de Enj. Civ. Esp., tom. 3, pág. 594. La diferencia capital que existe entre el interdicto de recobrar y el de retener, es que aquél se da á favor del poseedor ya sea á título propio ó ageno, como inquilino, mientras que este último se da tan solo al poseedor á título de dueño. Véase: Reus, pág. 593, que estudia detenidamente el caso.

2—La Cámara dijo que interdicto de retener iniciado en este caso, importaba un verdadero recurso contra la anterior resolución mandando poner en posesión, y de consiguiente debe deducirse ante el mismo Juez. Conviene no olvidar lo resuelto por la Cámara á este respecto. Véase: verb. *Auto judicial*, núm. 1.





INT

retener que inicie el desposeído.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 2ª.

4. Interdicto de retener—La posesión, es improcedente cuando el demandado, alegando la prescripción, justifica que la obra en que se funda, tenía más de un año de constituida cuando se dedujo el interdicto.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 358, Ser. 2ª.

Interdicto de retener—Véase: *Auto judicial*, núm. 1.

Interés—Véase: *Avisos*, núm. 1—*Obligación*, núm. 1.

1. Intereses—El pago á estilo de banco, importa la fijación del que éste cobra á sus deudores, pero no la capitalización trimestral.—Jur. Com., tom. 1, pág. 372, Ser. 2ª.

2. Intereses—Si en la transacción judicial no se estipula el pago de intereses, el acreedor carece de derecho para co-

4—El interdicto de obra nueva puede ser de retener ó de recuperar—585, Cód. de Proc.—según que el vecino haya sido turbado en su derecho ó despojado de su posesión. El art. 4038 del Cód. Civ. establece que se prescribe por un año la obligación de responder al turbado ó despojado en la posesión, sobre manutención ó reintegro.

1—Cuando se establece que los intereses deben ser abonados á estilo de Banco, se conceptúa que deben computarse con arreglo á lo que el Banco de la Nación Argentina cobra á sus deudores en las fechas correspondientes á las liquidaciones que se practiquen, de acuerdo con lo establecido en los arts. 565, 568, 569 y 570 del Cód. de Com., y 623 del Cód. Civ.—Véase: *Inst.*, tom. 2ª, verb. *Intereses*, núm. 1, 5 y 6.

2—La transacción es uno de los medios de poner término á los litigios, y una vez presentada al Juez de la causa, debe ser cumplida conforme á la voluntad de las partes, y su validez no está sujeta á la observancia de formalidades extrínsecas —Art. 817, Cód. Civ.—Presentada la transacción al Juez de la causa, ella debe cumplirse de acuerdo con las bases en ella contenidas. Si la obligación de pagar intereses no resulta de la transacción, es porque renuncia tácitamente el acreedor á ellos, pues la extinción de la deuda principal, que es el capital, lleva consigo la extinción de la accesorio que son los intereses. No puede argumentarse con el art. 523 del Cód. de Proc., porque este artículo presupone la terminación del juicio ejecutivo hasta llegar á la liquidación del capital, intereses y costas.

• INT

brar los devengados en una obligación ejecutiva.—Jur. Com., tom. 3, pág. 532, Ser. 2ª.

3. Intereses—El deudor que al contestar la demanda reconoce la deuda, pero no la deposita, adeuda los intereses hasta el día del pago.—Jur. Com., tom. 3, pág. 363, Ser. 2ª.

4. Intereses—Para que sea procedente el cobro de ellos, en la cuenta corriente, debe justificarse convenio espreso.—Jur. Com., tom. 3, pág. 363, Ser. 2ª.

5. Intereses—El comprador los adeuda desde la fecha en que se le ejecuta para que haga la oblación.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 476, Ser. 2º.

Intereses—Véase: *Fiador*, núm. 2—*Avisos*, núm. 1—*Obligación*, núms. 1 y 3—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6—*Payo*, núm. 1—*Ejecutado*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 16—*Acreeedor*, núm. 7—*Concurso*, núm. 3—*Deudor*, núm. 12—*Pagaré*, núm. 3.

Intereses fiscales—Véase: *Información*, núm. 4.

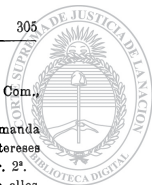
1. Intereses usurarios—Los estipulados entre acreedor

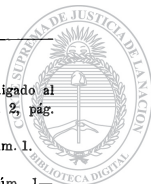
3—Uno de los efectos que produce la contestación á la demanda es el que el demandado se constituye en mora en cuanto á los frutos de la cosa materia del litigio, de modo que siendo vencido debe entregar los percibidos desde la contestación. Hay mora cuando no se paga lo adeudado, y los intereses se deben desde la demanda.—Arts. 508 y 622, Cód. Civ.

4—Arts. 203 y 208 del Cód. de Com. ant.—Por el Cód. de Com. vig., en la cuenta corriente bancaria se capitaliza el interés; y para que esto no suceda se requiere convención espresa en contrario.—Artículo 796.

5—Desde que se le intima que haga la oblación, el deudor se constituye en mora, y es una consecuencia de ella el art. 483 del Cód. de Proc., el que establece que aunque pague el deudor dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento, las costas causadas en el juicio son á cargo del deudor.

1—Siempre que el fiador no hubiese consentido en el tipo de ese interés. La estipulación no obliga al fiador, porque no interviene en ella: se para él una *res inter alios acta*.





INT—INV

y deudor, no obligan al fiador, que solo está obligado al pago de los corrientes en plaza.—Jur. Com., tom. 2, pág. 175, Ser. 2ª.

Interesados—Véase: *Sustitución de personas*, núm. 1.

Intervalo del derecho—Véase: *Rebeldía*, núm. 1.

Intervención—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 3—*Filiación natural*, núm. 3—*Liquidación de sociedad*, núm. 2—*Simulación*, núm. 2—*Sustitución de personas*, núm. 1.

Interrupción—Véase: *Término*, núm. 6.

Intimidación—Véase: *Reo*, núm. 1.

Intransferible—Véase: *Contratos de locación*, núm. 7.

Introduutores de lotería—Véase: *Jueces del Crimen*, núm. 2.

1. Inventario—Aceptado por el mandante, como verídico un inventario judicial y pedida su aprobación, no puede desconocerse posteriormente su veracidad, estando obligado á aceptarlo como base para la rendición de cuentas del mandatario.—Jur Civ., tom. 6, pág. 9, Ser. 2ª.

2. Inventario—De bienes, presentado por el viudo, el Juzgado debe aprobarlo, si los ministerios públicos prestasen su conformidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 486, Ser. 2ª.

3. Inventario—La parte que fuese debidamente representada en él no puede pedir su ampliación.—Jur. Com., tom. 4, pág. 498, Ser. 2ª.

Inventario previo—Véase: *Heredero*, núm. 5.

Inversión—Véase: *Venta*, núm. 2.

2—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 3514 del Cód. Civ., cuya nota explica el alcance. El caso se encontraba en las condiciones de este artículo

3—Si tuviese derecho una parte para pedir nuevo inventario resultaría que la operación no terminaría jamás porque se pediría cada día uno nuevo. Si hay omisiones en el practicado pueden ellas dar lugar á otras acciones, pero á su reiteración.



IRA—IRR

Ira—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 8.

Irresponsabilidad—Véase: *Insania*, núm. 3.

1. Irritación—La que se produce por los celos es circunstancia atenuante en los delitos cometidos contra la esposa —Jur. Crim., tom 3, pág. 118, Ser. 2ª.

1—Los celos son una pasión que agitando y excitando el ánimo, pueden producir arrebatos, haciendo que el dominado por ella no conserve toda la serenidad y fría reflexión para medir sus acciones. El art. 188 establece en su inc. 5ª, —Cód. Pen. ant. —como circunstancia atenuante de la criminalidad: «Cuando el agente ha obrado arrebatado por una pasión.» Pacheco comentando el art. 9 del Cód. Pen. español, que tiene analogía con el nuestro, se expresa así: «Desde la miseria ó la indigencia por una parte, hasta los celos, la ira, la cólera por la otra, todas las pasiones que nos agitan, caben y pueden entrar en este cuadro. La sociedad y la ley, no pueden penar de la misma suerte lo que es efecto de esas causas, de las que el hombre jamás completamente se exime. Advirtamos que no ha de ser una pasión cualquiera la que haya de producir ese efecto de la atenuación. La ley dice que ha de ser tan poderosa que naturalmente produzca arrebatos. La determinación de los casos corresponde á los Tribunales, y su procedencia. No se les puede dar reglas ningunas para ello; la ley fracasaría en tal propósito si lo intentara—tom. 1, pág. 207. —El art. 211 del Cód. Pen., no admite excusa alguna para el parricidio. Pero el 212, que trata entre otros casos, de la muerte dada al cónyuge, no excluye la admisión de circunstancias atenuantes.



1a. Jactancia—El emplazado por esta causa, debe deducir sus acciones contra el propietario, dentro del término señalado: las preparatorias contra terceros son ineficaces ante la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 44, Ser. 2°.

Jactancia—Véase: *Citación*, núm. 1—*Acción*, núm. 3.

1b. Judicialmente—Solo pueden notificarse las resolucio-

1a—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 428 del Cód. de Proc.

1b—Los Jueces han sido nombrados por la ley para hacer justicia declarando el derecho que corresponde á las personas con arreglo á las leyes. Según este principio inconcuso, no hay razón ni derecho para acudir á los jueces para que sirvan de órgano de aviso de ulteriores propósitos ó pretensiones que tengan la mira de realizar más tarde, pero que no se formulan desde luego recabando una resolución al respecto. La Cámara de lo Civil tiene resuelto en un caso que corre publicado en el tom. 8, pág. 468, Ser. 1°, que las notificaciones que se hacen por orden judicial son de las providencias, autos ó sentencias que se dicten en los juicios, no en los actos es trajudiciales de los particulares en los que no se deduce demanda alguna. Si se tratara de alguna diligencia preparatoria del juicio ordinario ó del juicio ejecutivo, podría autorizarse la notificación sin demanda previa, pero siempre ofreciendo deducirla en forma. Esta resolución recayó en una petición formulada con el objeto de que se hiciese una notificación á una parte á fin de interrumpir el término de la prescripción sin deducir demanda alguna al respecto. Esta medida no procede porque el art. 3986 del Cód. Civ., establece que la prescripción se interrumpe con la demanda. No deduciéndose ésta la petición no se encuentra en las condiciones exigidas por la ley.



JUD—JUE

nes que sustancien ó fallen una acción debidamente deducida en juicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 477, Ser. 2ª.

Judicialmente—Véase: *Contrato verbal*, núm. 2.

1. Jueces—Los de esta capital, en caso de iniciarse testamentaria, solo tienen jurisdicción sobre los bienes ubicados en la República: sobre los ubicados en el extranjero no pueden producir competencia: los interesados deben ocurrir al respectivo país á deducir sus acciones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 100, Ser. 2ª.

2. Jueces—No pueden ordenar la expedición de certificados generales, sino circunscribiéndola á los que el interesado debe determinar.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 8, Ser. 2ª.

3. Jueces—No pueden de oficio anular el procedimiento siempre que las partes que legalmente han intervenido, no se hayan opuesto en la oportunidad debida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 160, Ser. 2ª.

4. Jueces—Están facultados para obligar á las partes, de oficio, á deducir las peticiones pertinentes al estado de la causa á fin de no alterar los procedimientos que la ley señala.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 440, Ser. 2ª.

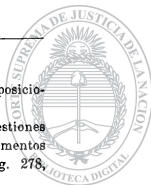
5. Jueces—Es facultativo de ellos, trasladarse á la casa

2—Porque hubo imposibilidad manifiesta en la expedición de certificados generales: pues el que debiera pedir los certificados carecía en absoluto de datos.

3—Las nulidades de procedimiento quedan subsanadas si no se reclaman en la misma instancia en que se produjeron.—Art. 240, Cód. de Proc.

4—Porque es deber de los Jueces evitar por todos los medios á su alcance que se produzcan nulidades, vigilando el orden del procedimiento á fin de que no resulte frustráneo, como lo decía la Cámara. Véase: Inst. tom. 2, verb. *Nulidades*, núm. 1.

5—Cuando el Juez encuentra motivo suficiente para ello, usa de una facultad que no le puede ser desconocida, y cuyo ejercicio no causa gravamen irreparable.



JUE

del litigante para que tenga lugar la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 8, Ser. 2ª.

6. Jueces—No están obligados á resolver las cuestiones que se susciten, mientras no existan en autos los elementos necesarios para el fallo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 2ª.

7. Jueces—De la capital, son competentes para nombrar tutor á los menores que residen en la capital, aun cuando los padres hayan fallecido fuera de ella.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 450, Ser. 2ª.

8. Jueces—Solo pueden dictar resolución con arreglo á lo alegado y probado por las partes.—Jur. Com., tom. 2, pág. 393, Ser. 2ª.

Jueces—Véase: *Herederos*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 1—*Providencias*, núm. 1—*Afirmaciones contradictorias*, núm. 1—*Competencia*, núms. 7, 9 y 10.

1. Jueces de Comercio—Son incompetentes para conocer de la nulidad de una cesión de derechos civiles.—Jur. Com., tom. 1, pág. 169, Ser. 2ª.

Jueces de Comercio—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 7

7—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Cámara en un caso análogo. Véase Inst., tom. 1º, veb. *Tribunales de la República*, núm. 2658.

8—Art. 216, Cód. de Proc.—Es doctrina constante en procedimiento, y la jurisprudencia lo ha consagrado, que el Juez para resolver, debe atenerse solamente á los hechos alegados y comprobados en el proceso, sin ir á buscar la verdad en otra parte, y sin poder invocar para establecerla, datos particulares que le asistan, porque como dice el aforismo romano, debe fallar *justa allegata et probata*, ó como dice la Ley Recopilada «seyendo hallado et probada la verdad del fecho *por el proceso*, los Jueces que conociesen de los pleitos, los determinen y juzguen». Leyes 1 y 10, tit. 17, lib. 4.

1—Desde que se traten cuestiones regidas por el Cód. Civ., el Juez natural y nato es el de esta jurisdicción, pues es el que está generalmente encargado de la aplicación é interpretación de la ley civil.



JUE

1a. Jueces del Crimen—Son los únicos competentes para entender en los juicios sobre injuria grave en que se pide el máximun de la pena.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 100, Ser. 2^a.

2a. Jueces del Crimen—Son los únicos competentes para conocer en las causas contra los introductores de loterías extranjeras.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 389, Ser. 2^a.

1b. Juego—Para que las disposiciones prohibitivas del juego sean aplicables á las operaciones de Bolsa, el que opone la escepción debe justificar plenamente que ese fué el contrato celebrado de común acuerdo entre las partes.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 2^a.

Juego—Véase: *Jurisdicción*, núm. 9 — *Operaciones de bolsa*, núm. 1 — *Escepción de juego*, núm. 1.

1c. Juez—Corresponde al de la testamentaria, la liquidación y partición de las sociedades civiles de que formara parte el causante.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 30, Ser. 2^a.

2b. Juez—Competente para entender en el juicio poseso-

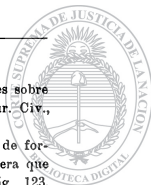
1a—La jurisdicción del Juez Correccional no alcanza á imponer como pena un año de prisión con más alguna multa, ó 500 pesos de multa con algunos días de prisión, solicitándose la aplicación de estas penas que constituyen el máximun determinado en el art. 182 del Cód. Pen. resulta la competencia del juez del Crimen.

2a—Si se tiene presente que el término medio de la multa que la Ley de 17 de Set. de 1885 impone á los que introducen billetes de lotería, excede á la pena pecuniaria que el art. 66 del Cód. Pen. tiene para conocer el Juzgado Correccional, y si además se observa que esta pena es conjunta á la disposición, resultará que el Juez competente para conocer es el de lo Criminal.

1b—Véase: Verb. *Jurisdicción*, núm. 9; y *Escepción de juego*, núm. 1.

1c—Corresponde á la jurisdicción civil las cuestiones que se originen respecto á la disolución y liquidación de una sociedad—art. 60 de la Ley org. de los Tribs. de la Cap.—El juicio de testamentaria en su carácter de universal atrae á sí á todos los demás.

2b—Se dijo que el Juez competente para entender en un juicio posesorio ó sobre cobro de arrendamientos es el del lugar en que la



JUE

rio, es el único que puede conocer en los incidentes sobre arrendamiento é indemnización por los frutos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 2ª.

3. Juez—Que entra á conocer en el litigio después de formado, puede ser recusado por las partes, cualquiera que sea el estado de la causa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 123, Ser. 2ª.

4a. Juez—Aun cuando no exista demanda en forma, siempre que las partes sometan la solución de su derecho al

cosa está situada. Se pretendió sacar de la jurisdicción de éste el conocimiento de un juicio posesorio, fundado en que la parte demandada era una sucesión, y que tratándose de un juicio universal que atrae á sí á todos los demás, correspondía deducir la acción posesoria, ante el Juez de la sucesión. Así se resolvió por el Juez de 1ª Instancia, resolución que fué revocada por la Cámara, teniendo en cuenta, que en los juicios petitorios como en los posesorios, la competencia del Juez es determinada exclusivamente por la situación del inmueble reclamado con prescindencia absoluta del domicilio de los litigantes y del lugar del contrato, y el Juez de lo principal debe entender también, incidentalmente sobre las prestaciones personales por frutos ó indemnización, aunque el juicio sucesorio sea universal. Arts. 634, Cód. de Proc., y 3284, Cód. Civ.—él solo comprende, además de las cuestiones entre los mismos coherederos y de las relativas á la ejecución de las disposiciones testamentarias: las acciones personales deducidas por terceros—inc 4, del art. 634 Cód. de Proc.—pero en manera alguna los posesorios ni los petitorios que tienen su competencia propia por razón de su ubicación.

3—Esta resolución se dictó por la Cámara revocando un auto de 1ª Inst. dictado por el Dr. Gimenez, actual camarista, quien sostuvo que el derecho acordado por el art. 336 del Cód. de Proc., solo puede usarse una vez en cada caso: por el actor, al entablar la demanda y por el demandado antes ó al tiempo de contestarla. Si se verifica por segunda vez se contraria esa disposición legal. Esto importa desconocer en absoluto el espíritu filosófico de la ley en materia de recusaciones, demostrando asimismo la falta de conocimiento de la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 2, Verb. *Recusación*, núm. 9 y nota. Inst., tom. 1, verb. *Juicios inferiores*, núm. 1527.

4a—Véase: *Demanda*, núm. 6.

JUE

arbitrio judicial mediante los trámites del juicio ordinario, el Juez debe pronunciarse, por ser caso contencioso y no informativo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 79, Ser. 2ª.

4b. Juez—Debe condenar ó absolver de culpa y cargo al reo: la simple absolución por falta de prueba, no procede.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 82, Ser. 2ª.

Juez—Véase: *Universalidad*, núm. 1—*Demanda*, núm. 2—*Bienes*, núm. 4—*Embargo*, núm. 1—*Escusación*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 10—*Recusación*, núm. 2.

1a. Juez comisario—La acción para exigir ante el Juez del Crimen, la aplicación de la pena al fallido, se prescribe á los dos años.—Jur. Com., tom. 1, pág. 164, Ser. 2ª.

1b. Juez competente—Para entender en una demanda

4b—La libertad de la defensa, la verdad de la prueba y la integridad del juicio, son garantías constitucionales, entre las cuales está comprendido el principio *non bis in idem*, y las reglas prescriptas por nuestras leyes, de que las sentencias definitivas después de un juicio seguido regularmente deben contener decisión expresa, condenando ó absolviendo al procesado. La condición esencial de toda condena penal debe contener la demostración completa del delito, y mientras ella no tenga este carácter, el acusado debe ser tenido por inocente. La prueba imperfecta que fundaba antiguamente la absolución de la instancia, no es admitida en nuestra legislación. El sumario está de acuerdo con la doctrina recibida en nuestros tribunales. Leyes 9, tit. 31; y 12, tit. 14, Part. 3ª. Mittermayer. De la prueba en materia criminal, part. 9. Lieber, La libertad civil, tom. 1, pág. 80. El nuevo Cód. de Proc. en materia criminal ha venido á solucionar esta cuestión, estableciendo el sobreesimiento parcial ó definitivo según los casos.

1a—Art. 89, inc. 3, Cód. Pen. vig.

1b—Ya sea que el contrato de compraventa conste de escritura pública ó privada, el Juez del domicilio del demandado será competente para entender en la demanda. Si se trata de una obligación que conste de escritura privada, la competencia se establece en virtud de ser personal la obligación, como lo tiene resuelto la jurisprudencia uniforme de los Tribs. Si se trata de la entrega de la cosa vendida en escritura pública, la competencia surge del carácter personal de la obligación. Para resolver esta cuestión, es decir, si es el Juez del domicilio del deudor ó si lo es el del lugar donde está situada



JUE

sobre cumplimiento de un contrato de compraventa fechado

la cosa el competente para entender en esta acción, se hace necesario averiguarsi el derecho ó la acción es una *acción real* ó una *acción personal*. Evidentemente que es una acción personal. Con efecto: ¿qué es lo que nuestra ley civil entiende por acción real? El art. 2756 del Cód. Civ. contesta esta pregunta diciendo: «Acción real es el medio de hacer declarar en juicio, la existencia, plenitud y libertad de los *derechos reales*, con el efecto accesorio cuando hubiese lugar de indemnización de daños y perjuicios». Y el art. 2757 establece que «las acciones reales que nacen del derecho de propiedad, son la acción *reivindicatoria*, la acción *negatoria* y la acción *confesoria*. La acción sobre entrega de un inmueble, es la acción sobre tradición del inmueble vendido en escritura pública ¿entre cuál de estas tres acciones puede ser colocada? Ninguna de ellas lo comprende, pues el art. 2503, al enumerar los derechos reales de una manera taxativa, dice: son derechos reales: 1° El dominio y el condominio, 2° El usufructo, etc. Quizá la acción podría incluirse entre los que nacen del dominio. Pero, yo pregunto, la acción que nace de la escrituración de un inmueble para que se haga la entrega, tiene su origen y fundamento en el dominio de la cosa? Evidentemente que no, pues para tener el dominio se necesita la escritura pública de enagenación seguida de la tradición, art. 2609, Cód. Civ. Pero en el caso presente el único acto jurídico que se relaciona con la transmisión del inmueble, lo constituye la escritura pública. Y esta escritura, como lo tenemos dicho, no confiere el dominio de los inmuebles: se requiere la tradición que es precisamente lo que se trata de obtener instaurando la acción en que se pide la entrega de la cosa vendida. Se trata de obtener el dominio, no se tiene el dominio: no hay derecho real, no hay acción real. De aquí resulta que se trata de una acción puramente personal, no siendo por consiguiente aplicable el inc. 1° del art. 4° del Cód. de Proc. Solo puede aplicarse el inc. 4°, porque «se trata de ejercitar acciones personales, en cuyo caso es Juez competente el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y á falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del demandado, ó del lugar del contrato, con tal de que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente». Tal es la conclusión lógica á que debe llegarse tratándose de una cuestión que se puede resolver de acuerdo con las disposiciones espresas y categóricas de nuestras leyes. Pero como puede argumentarse en otro sentido, vamos á encarar la cuestión bajo ese punto de vista á fin de refutar los argumentos que pueden formular contra la tésis que sostenemos. Se dice que



JUE

en esta Capital, lo es el de esta jurisdicción aún cuando el in-

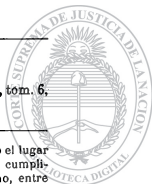
en principio general se puede sentar, que la competencia de las autoridades públicas para el conocimiento de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se determina por el lugar designado en el contrato para la ejecución de aquellas, y que cuando se trata de la entrega de una propiedad raíz, el lugar en que ella debe verificarse, no puede ser otro que allí donde la cosa se halle radicada, y que ese es forzosamente el lugar implícitamente establecido para su cumplimiento. A esto debemos contestar diciendo, que á falta de una *estipulación expresa* en que se designe el lugar para el cumplimiento de la obligación, no puede establecerse una implícita, que sería el lugar en que se halla el terreno materia de la obligación por varias razones: 1.ª Porque en defecto de convenio expreso, la ley ha establecido ya la forma en que debe radicarse el fuero de las partes contratantes, esto es, que la obligación sea exigible en el domicilio del deudor ó en el lugar donde fué contraída, siempre que el deudor se halle allí aunque sea accidentalmente; y 2.ª Porque no es admisible que la ley haya querido establecer en sus disposiciones sobre jurisdicción un perjuicio para las partes, alejando la justicia del domicilio del reo, siendo lo contrario el objetivo principal de las leyes al establecer la competencia y jurisdicción de los tribunales, que solo han exceptuado el caso en que se ejerciten *acciones reales*, siendo así que en este caso hay una ley superior á estas conveniencias personales, cual es la de que los bienes raíces estén siempre sometidos á la jurisdicción del magistrado que ejerce imperio sobre ellas de una manera inmediata. Se argumenta además en contra diciendo que el art. 4.º, inc. 1.º del Cód. de Proc. así lo dispone al determinar la competencia de los jueces para el conocimiento de las acciones reales sobre bienes inmuebles, porque por estas acciones siempre se pretende la entrega ó ejecución de una cosa cierta y determinada, y la entrega de los inmuebles no puede efectuarse sino en el lugar donde se hallen radicados. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, en que la acción que se deduce, aunque con el carácter de *personal*, tiene el mismo objeto que aquellas, esto es, la entrega de un bien raíz cierto y determinado, el único juez competente para entender en este juicio lo es el del territorio en que el inmueble está situado. A este argumento se contesta diciendo: que no es posible encontrar contradicción entre lo dispuesto en el art. 4.º del Cód. de Proc. y lo estatuido en el art. 747 del Cód. Civ., cuando dispone que «el pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación». Si no hubiese el lugar designado, y se tratase de un cuerpo cierto y determinado, deberá hacerse donde éste *existía*



JUE

mueble se encuentre situado fuera de ella.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 2º.

al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso el lugar del pago será el del domicilio del deudor al tiempo de su cumplimiento. No es posible encontrar contradicción, hemos dicho, entre estas dos prescripciones legales, porque esta última se refiere indudablemente á bienes muebles que son los únicos que pueden cambiar de lugar y no existir al tiempo de cumplirse la obligación en el mismo lugar que se contrajo ó se celebró el contrato. Debe no olvidarse, por otra parte, que el lugar del pago ó entrega no es la única razón determinante del fuero. La ley de fondo legisla para el primero, y la de forma para el segundo, determinando el fuero y la competencia de los jueces. Así puede la ley civil determinar un lugar para el cumplimiento, para el pago de la obligación, á falta de convenio expreso; y determinar el Código de Procedimientos que el deudor puede ser demandado ante el Juez del domicilio, en el lugar donde la obligación fué contraída ó en cualquier parte donde se encuentre si no tuviere domicilio fijo. No hay inconveniente alguno en que el deudor pueda ser demandado ante el Juez de su domicilio y una vez condenado por sentencia judicial á entregar el inmueble se ejecute la sentencia librando exhorto al Juez del lugar en que la cosa está situada para que se haga la tradición ó entrega de ella. La ley 13, tit. 11, Part. 5ª, viene á corroborar esta argumentación, cuando refiriéndose á la obligación de entregar un cuerpo cierto en lugar determinado, dispone: «Dezimos que si tanto tiempo foesse ya pasado, que ya pudiera ser ya ido á aquel lugar, á cumplirlo si quisiese develo el Juez del lugar apremiar que lo cumpla allí, maguer non sea fallado en aquel lugar que avia prometido de lo cumplir.» Este principio ha sido incorporado á nuestro Código Civil, art. 1216, cuando ha establecido que si el deudor tuviera su domicilio en la República y el contrato debiera cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá demandarlo ante los jueces de su domicilio ó antes los del lugar del cumplimiento del contrato. No debe por último, olvidarse que el estatuto personal es el que determina la competencia de los jueces en el ejercicio de las acciones judiciales: Que el Juez natural de una persona, es el de su domicilio, y que por escepción se establece que un Juez extraño al de su domicilio entienda en ciertos juicios: Que estos casos de escepción tienen un carácter taxativo, sin que ellos se puedan estender á otros distintos pero análogos. Que la ley de escepción es para las acciones reales y que ellas en ningún caso pueden ampliarse á las acciones personales. Consecuente con estos principios, la Exma. Cámara de lo Civil ha estable-



JUE

Juez competente—Véase: *Acción de petición de heredero*, núm. 3—*Prescripción*, núm. 4—*Curador*, núm. 2—*Pagaré*, núm. 4.

Juez de Provincia—Véase: *Competencia*, núms. 9 y 10—*Inapelable*, núm. 1—*Tutor*, núm. 3.

Juez del Crimen—Véase: *Falsedad*, núm. 1.

Juez del litigio—Véase: *Posiciones*, núm. 11.

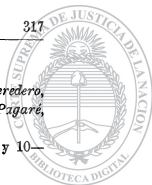
1a. Juez de lo Civil—Es el único competente para conocer de las cuestiones sobre tenencia de los hijos después de iniciada la acción de divorcio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 491, Ser. 2ª.

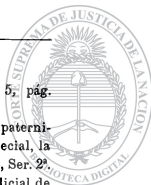
1b. Juez exhortado—Pidiéndosele una notificación debe circunscribirse á su cumplimiento, las escepciones deben ser

cido ya jurisprudencia al respecto diciendo: que «los jueces de la Capital son competentes para entender en el cumplimiento de contratos sobre bienes raíces situados fuera de su jurisdicción, mientras no se trate de acciones posesorias y los interesados tengan su domicilio en ella». Véase: Jur. Civ., tom. 5, pág. 583, Ser. 1ª. En el caso resuelto aquí, se trataba de uno exactamente igual al presente, pues se exigía la entrega de un campo situado en la Provincia de Buenos Aires y la Exma. Cámara fundada en que se trataba de una acción personal resolvió el incidente en sentido de su competencia, como puede verse, consultado el fallo allí publicado.

1a—Art. 73 de la ley de matrimonio de 1888, y art. 68 de la vigente. Desde que se trata de cuestiones regidas por el Código Civil, el Juez natural y nato es el Ordinario en lo Civil, encargado en general de la aplicación de dicho Código. Art. 205, Cód. Civ.; 1388, inc. 2º del Proyecto de Freitas; 81, inc. 3º del Proyecto de Goyena; 87 del Cód. Civ. español; Dalloz, Verb. *Separation de corps* y *Divorce* § 1º; De la garde des enfants, § 22; y Laurent, Principes de Droit. Civ., tomo 2, pág. 295. Esa facultad reside en el Juez aún antes de deducida la demanda de divorcio.

1b—Este caso no puede servir como precedente para los otros casos de carácter general que puedan presentarse. Aquí el procedimiento estaba marcado. Se trataba de un exhorto dirigido por las autoridades judiciales de la Asunción del Paraguay. Con este país tenemos tratado vigente, celebrado en 1880, en cuyo art. 5º se establece que las escepciones opuestas por la parte exhortada dehen admitirse y ser trasmitidas conjuntamente con el exhorto para ser





JUI

opuestas ante el Juez exhortante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 435, Ser. 2ª.

1. **Juicio**—El iniciado sobre desconocimiento de paternidad por el padre, debe sustanciarse con un tutor especial, la madre no debe intervenir.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 94, Ser. 2ª.

2. **Juicio**—En el que versa sobre declaración judicial de insanía, solo son parte, el curador provisorio que debe nombrar el Juzgado, y el Ministerio de menores.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 124, Ser. 2ª.

3. **Juicio**—En la ejecución de una sentencia solo son

juzgados con arreglo á derecho. Por otra parte, en el caso que nos ocupa, la competencia de los Tribunales Paraguayos estaba perfectamente establecida. Sin embargo, esta resolución fué adoptada en otro caso. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Juez exhortado*, núm. 1092. Este último caso trata de un exhorto dirigido por un Juez Argentino á otro de la misma clase, en cuyo caso consideramos que la resolución es acertada. Cuando se trata de diligenciar un exhorto procedente de país extranjero, debe discutirse ante el Juez exhortado la competencia del exhortante. Así se ha resuelto por esta misma Cámara, como puede verse en el tom. 2º de la Inst. verb. *Jurisdicción del Juez exhortante*, núm. 1. Escribiché opina que la jurisdicción puede ser discutida ante el Juez exhortado oponiéndose el interesado al diligenciamiento del exhorto. Véase verb. *Requisitoria*. Nuestro Código de Proc. no admite esta forma para discutir la competencia del Juez exhortante, porque la declaratoria de jurisdicción solo puede formularse de dos modos, ó por declinatoria que debe deducirse ante el Juez exhortante, ó por inhibitoria que debe formularse ante el que se le considera competente. Si dá la casualidad que el exhortante es considerado como competente, puede provocarse la vía inhibitoria, pero no en el mismo exhorto, el que debe ser diligenciado, sino en la forma que la ley prescribe.

1.—El representante del menor es su padre, pero si es éste el que demanda, resulta que hay oposición de intereses entre padre é hijo, en cuyo caso el Código ordena se le nombre tutor especial—art. 397, inc. 1º.—El padre representa á la menor si es legítima, y si es adulterina, carece de padre y madre ante la ley.

2.—Art. 147 del Cód. Civ. Así se desprende de este artículo y los siguientes del tit. X.

3.—El procedimiento para la ejecución de sentencias está establecido en el tit. XV del Cód. de Proc. Allí se prescribe que el embar-



JUI

apelables los autos expresamente declarados por la ley.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 456, Ser. 2ª.

Juicio—Véase: *Acción de jactancia*, núm. 1—*Clandestinidad*, núm. 1—*Judicialmente*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 3—*Recusación*, núm. 1—*Comprador*, núm. 5—*Alimentos*, núm. 9—*Apelación*, núm. 1—*Arraigo*, núms. 3, 4, 5 y 6—*Competencia*, núm. 11—*Contrato*, núm. 13—*Demanda*, núm. 6—*Escepción de falta de personería*, núm. 7—*Mujer casada*, núm. 2.

Juicio civil—Véase: *Falsificación*, núm. 3.

Juicio contradictorio—Véase: *Curador*, núm. 1—*Filiación legítima*, núm. 1—*Incapaz*, núm. 1.

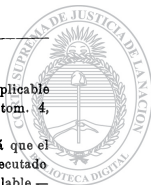
Juicio criminal—Véase: *Víctima*, núm. 1—*Falsificación*, núm. 3.

Juicio de mensura—Véase: *Mensura*, núms. 2 y 3.

1. Juicio ejecutivo—En él, solo son apelables los autos

go de bienes se practicará en la forma y orden prevenidos para el juicio ejecutivo,—art. 536.—Más adelante se establece, que de la sentencia de trance y remate habrá los mismos recursos y en la misma forma que para la sentencia de remate en el juicio ejecutivo,—art. 540.—El procedimiento posterior a la sentencia de remate es el mismo que el del juicio ejecutivo,—art. 541.—De aquí resulta que la forma establecida para el juicio ejecutivo es aplicable a la ejecución de sentencias, en todo lo relativo al embargo, citación de remate y cumplimiento de la sentencia de remate. Y en consecuencia todo auto que según las leyes del juicio ejecutivo sea apelable, desde la sentencia de remate, es apelable también en la ejecución de sentencias. En el juicio ejecutivo solo son apelables las sentencias expresamente declaradas tales,—art. 505.—¿Cuáles son estos autos? Los expresados en el tit. XIV del Cód. de Proc.

1—La Cámara solo dijo que el auto no era apelable con arreglo a lo dispuesto en el art. 505 del Cód. de Proc. No dijo que este artículo sea aplicable tanto al ejecutante como al ejecutado. Y es de suponerse que el sumario esté equivocado, tanto más cuanto que está en contra de la jurisprudencia sentada por los Tribs. de la Rep., como puede verse en el tom. 1º, Inst., verb. *Apelaciones*, núm. 183. La S. C. P. ha establecido jurisprudencia asimismo en este sentido.



JUI

espresamente declarados por la ley. Esta regla es aplicable tanto al ejecutante como al ejecutado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 92, Ser. 2ª.

2. Juicio ejecutivo—El auto que no hace lugar á que el registro de la propiedad informe acerca de si el ejecutado tiene algún inmueble inscrito á su nombre, es apelable.—Jur. Com., tom. 1, pág. 181, Ser. 2ª.

Juicio ejecutivo—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 7—*Fianza*, núm. 1—*Término*, núm. 7—*Deudor*, núm. 1—*Reconocimiento*, núm. 3—*Juicio ordinario*, núm. 2.

Juicio especial—Véase: *Compromiso arbitral*, núm. 1.

1a. Juicio informativo—En el que versa sobre información de un documento privado, no pueden hacerse declaraciones sobre prescripción adquisitiva para suplir un título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

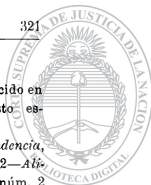
Juicio informativo—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 5—*Cosa juzgada*, núms. 4 y 5—*Incapaz*, núm. 1.

1b. Juicio ordinario—La recta interpretación de una ordenanza municipal para la percepción de los impuestos, solo puede declararse en el juicio ordinario que la ley permite al ejecutado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 557, Ser. 2ª.

2—Es apelable, decía la Cámara, porque trae gravamen irreparable. ¿En qué queda la inapelabilidad de los autos en el juicio ejecutivo establecido por el art. 505 del Cód. de Proc.? Esque esa inapelabilidad ha sido establecida por la ley tan solo para el ejecutado. Véase nota precedente.

1a—El juicio se inició pura y simplemente á los efectos de la protocolización ó demanda que se sustanció en juicio ordinario con un defensor. La prescripción no estuvo en tela de juicio, ni en la demanda, ni en la contestación. El Juez debe resolver las cuestiones que se formulan en el cuasi-contrato de litiscontestación, y si resuelve sobre puntos no discutidos la sentencia es nula en esa parte.

1b—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 500 del Cód. de Proc. Es cuestión agena á la naturaleza del juicio ejecutivo, cuya procedencia debe descansar en título manifiesto y ser contenida por una excepción del mismo carácter.



JUI

2. Juicio ordinario—El que permita la ley al vencido en juicio ejecutivo, es procedente aunque no haya opuesto excepción.—Jur. Com., tom. 4, pág. 243, Ser. 2ª.

Juicio ordinario—Véase: *Excepción de litispendencia*, núm. 2—*Interdicto de retener*, núm. 1—*Fiador*, núm. 2—*Alimentos*, núms. 3 y 8—*Mandatario*, núm. 3—*Deudor*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 23—*Fiador*, núm. 2.

Juicio posesorio—Véase: *Juez*, núm. 1.

1a. Juicio sucesorio—Aunque universal, no comprende las acciones posesorias ó petitorias que se inicien por ó contra una testamentaria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 2ª.

Juicio sucesorio—Véase: *Fallido*, núm. 2—*Jurisdicción*, núm. 5.

Juicio sumario—Véase: *Alimentos*, núm. 1—*Posesión*, núm. 11.

Juicio testamentario—Véase: *Universalidad*, núm. 1.

1b. Juicio verbal—Su pedido, no basta para fundar la excepción de falta de jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 112, Ser. 2ª.

2—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 500 del Cód. de Proc. que no reconoce limitación alguna á la cual esté subordinado el derecho, tanto del actor como del demandado. Debe además tenerse presente que hay excepciones y defensas que conviene oponerse en el juicio ordinario donde la defensa es más ampha y reposada que en el ejecutivo.

1a—Véase: verb. *Juez*, núm. 2.

1b—Entablada una demanda, se convocó á las partes á juicio verbal «sin perjuicio de proveer lo que corresponda.» y sin correr traslado de la demanda. No corriéndose traslado de la demanda, ni emplazándose á las partes á que concurran á estar á derecho, no hay en realidad pleito pendiente, pues como lo dicen las antiguas leyes «los emplazamientos son raíz e comienzo de todo pleito.»—Ley 1ª, tit. 1º, Part. 3ª.—La excepción de incompetencia debe oponerse dentro de nueve dias á contar desde la citación, la que como se ha visto no se efectuó, siendo en consecuencia estemporánea la excepción. Por otra parte, el auto llamando á juicio verbal,



JUI

Juicio verbal—Véase: *Contador*, núm. 1.

1a. Juicios—Entre esposos, los términos no corren para la esposa mientras el marido no cumpla la sentencia que le obliga á proveerla de fondos para litisexpensas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 220, Ser. 2ª.

2. Juicios—En los que versen sobre consignación en pago, el que impugna el hecho asume el carácter de demandante.—Jur. Com., tom. 2, pág. 387, Ser. 2ª.

Juicios—Véase: *Litispendencia*, núm. 1—*Jurisdicción correccional*, núm. 4.

Juicios criminales—Véase: *Excepción de arraigo*, núm. 2.

Juicios petitorios—Véase: *Competencia*, núm. 3.

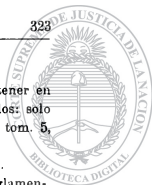
1. Juicios sumarios—Siendo simples informaciones, los

no es apelable, porque no trae gravamen irreparable, cuando no hay juicio trabado, á no ser que se trate de una diligencia preparatoria del juicio. Cuando el juicio verbal no está ordenado por la ley, la parte puede concurrir ó no, según su voluntad, sin que su desobediencia le acarree ningún perjuicio.—Véase: *Ins.*, tom. 2º, verb. *Acción*, núm. 7, que consagra el mismo principio del sumario.

1a—Mientras la esposa no tenga fondos para continuar el juicio, no puede obligársele á su continuación, porque sin recursos no se puede proseguir un juicio, y esa falta de recursos haría que la situación de la esposa fuese sumamente desventajosa. La ley y los jueces deben velar por la igualdad necesaria en todo juicio. Si la esposa carece de fondos, no puede defenderse como corresponde á su derecho.

2—El acto jurídico que importa la consignación, solo tiene por objeto salvar los derechos del que lo hace, sin que ello importe una demanda ni que implique para el deudor asumir el rol de actor. La impugnación de la consignación importa el verdadero acto de demanda, porque es el ejercicio del derecho que le acuerda el art 759 del Cód. Civ. La litiscontestación queda trabada cuando el que verifica la consignación evacua el traslado del escrito en que se hace la impugnación.

1—No tratándose propiamente de juicios contenciosos, las declaraciones de los testigos solo pueden considerarse como medios de información de los hechos sobre que declaran, que forman prueba



JUI—JUR

formados para la designación del esposo que debe tener en su poder los hijos, los testigos no pueden ser tachados: solo el Juez puede juzgar de su idoneidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 579, Ser. 2ª.

Juicios sumarios—Véase: *Declaraciones*, núm. 6.

1a. Jurado de apelación—Que establece la ley reglamentaria del ejercicio de la medicina, ha caducado desde la vigencia de la Ley Orgánica de los Tribunales.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 375, Ser. 2ª.

1b. Juramento—Los créditos contra una testamentaria en que los únicos interesados son menores, deben justificarse en forma, con escepción de aquellos gastos que sean de primera necesidad, sobre los cuales el Juzgado puede aceptar el juramento del acreedor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 478, Ser. 2ª.

2. Juramento—El del acusador, de no proceder de ma-

conjuntamente con las demás constancias de autos, cuya apreciación incumbe al Juez, con arreglo á los principios de la sana crítica. Por otra parte, las resoluciones judiciales que tienden á resolver sobre cuál de los esposos debe guardar los hijos, no hacen cosa juzgada, y pueden volverse sobre el mismo siempre que las partes creen tener razones fundadas que puedan modificar el criterio judicial.

1a—Esta ley no ha conservado la institución del jurado entre las autoridades que están llamadas á desempeñar la administración de Justicia en la capital, de consiguiente, la ley reglamentaria del ejercicio de la medicina en la parte que se refiere al jurado de apelación en las resoluciones adoptadas por el Consejo de Higiene. Que la institución del Jurado no existe en la Capital, es un hecho que ha sido establecido por la jurisprudencia constante de los Tribunales. Como tampoco existe la institución del jurado para los delitos de imprenta.—Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Jurado*, núm. 1.

1b—Véase: verb. *Créditos*, núm. 1.

2 Esta es la jurisprudencia sentada por los Tribs., la que ha quedado incorporada á nuestra legislación práctica. Esta doctrina es errónea y se funda en que al acusador por derecho propio no es aplicable la disposición general, pues como dice la Ley 26, tit. 1º, Part. 7ª: «Estos se mueven con derecha razón y con dolor, á fazer estas acusaciones, e non maliciosamente.» La propia razón milita y es aplicable á la fianza de calumnia, la que



JUR

licia solo puede exigirse cuando éste ejerce acciones populares.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 147, Ser. 2ª.

3. Juramento—El de no proceder con malicia, y la fianza, no deben exigirse al acusador por derecho propio, solo son procedentes cuando se presenta ejerciendo acciones populares.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 169, Ser. 2ª.

4. Juramento—El de no proceder con malicia, y la fianza, no proceden en las causas criminales provocadas por los mismos interesados.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 273, Ser. 2ª.

Juramento—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 3—*Exposiciones escritas*, núm. 1—*Tachas*, núm. 1.

Juramento de ley—Véase: *Documentos*, núm. 11—*Depositorio*, núm. 2.

1. Juramento estimatorio—Es impropio, siempre que por documento otorgado por el deudor se reconozca la verdad del precio demandado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 236, Ser. 2ª.

2. Juramento estimatorio—Para que haya lugar al cobro de daños y perjuicios, basta que se pruebe su existencia: sobre su monto, procede el juramento estimatorio, si no existiese justificación plena.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 160, Ser. 2ª.

solo es aplicable á las acciones populares. Esta jurisprudencia debe ser reformada en el sentido que sostenemos en el verb. *Fianza*, núm. 3. El Dr. Cortés tiene estudiada la cuestión á fondo y considera que la jurisprudencia sentada no obedece á los principios legales que rigen el caso.

3—Véase nota precedente.

4—Véase núms. 2 y 3.

1—El juramento estimatorio está autorizado por la ley tan solo para el caso en que no resultase justificado el importe del crédito que se reclama.—Art. 220, Cód. de Proc.

2—Art. 220, Cód. de Proc.—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 5; Inst., tom. 2, mismo verb. núm. 5 y especialmente el núm. 7 que trata el caso con precisión.



JUR

Juramento estimatorio—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 5, 10 y 14.

Juramentos—Véase: *Inscripciones*, núm. 1.

1. **Jurisdicción**—Tratándose de bienes raíces, ésta debe establecerse con arreglo al precio que la parte fija en el acto de iniciar el litigio, y no al que tenían según las escrituras.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 585, Ser. 2ª.

2. **Jurisdicción**—Se fija la de los Defensores de Menores en las parroquias de Flores y Belgrano.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 127, Ser. 2ª.

3. **Jurisdicción**—La Cámara carece de ella, para resolver excepciones sobre las cuales no se ha pronunciado el inferior: revocada la sentencia que declaraba una procedente debe remitirse los autos para que resuelva las demás.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 2ª.

4. **Jurisdicción**—Cuando es potestativa del excepcionante, la condenación en costas no es procedente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 442, Ser. 2ª.

1—El valor asignado á los bienes raíces en las escrituras de compraventa varía según la época del contrato. Y así como un terreno pudo tener un valor al adquirirse, puede ser otro al iniciarse el juicio. El valor de los litigios debe computarse en el momento de iniciarse; y nada tiene que ver un aumento ó disminución posterior, en cuanto á la competencia. De lo contrario los expedientes serían como el judío errante sin paradero fijo.

3—La Cámara solo conoce de los recursos interpuestos ante el inferior, en su carácter de Tribunal de apelación: si el inferior no resuelve una cuestión, no puede concederse recurso de lo no resuelto, y no habiendo recurso no puede ella conocer al respecto.—Arts. 61 y 80, inc. 1º de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. y 267, Cód. de Proc.—Esta es la jurisprudencia sentada por la Cámara.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Cámara*, núm. 5, y especialmente la nota del núm. 8; y verb. *Jueces*, núm. 6 con su nota que estudia el caso presente.

4—No hay temeridad ni malicia, porque la jurisdicción ordinaria es la regla y la federal la excepción de que puede hacer uso ó no el demandado, acogiéndose á una ú otra de las jurisdicciones en las deman-

JUR

5. Jurisdicción—En los juicios testamentarios, la jurisdicción es improrrogable.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 371, Ser. 2º.

6. Jurisdicción—Declarada por la Cámara de lo Civil la jurisdicción de la Justicia de Paz, ésta no puede declararse incompetente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 308, Ser. 2º.

7. Jurisdicción—La competencia se rige por la cantidad que la obligación espresa, sin que pueda alterarla el mayor ó menor valor que tenga, si se espresa que es á oro.—Jur. Com., tom. 1, pág. 163, Ser. 2º.

8. Jurisdicción—El Juzgado la tiene para regular honorarios devengados ante el Superior, siempre que se trate de todos los devengados en el expediente.—Jur. Com., tom. 1, pág. 243, Ser. 2º.

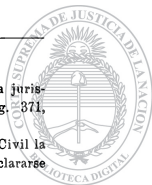
das que se promueven contra un extranjero. De acuerdo con esta resolución,—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Jurisdicción potestativa*, núm. 1; tom. 1º, verb. *Condenación en costas*, núm. 472 y su nota.

5—Fué opinión del Sr. Fiscal Dr. Cortés, que la jurisdicción, siendo territorial, es prorrogable, no solo á los diversos jueces de una Provincia sino á los jueces de otra diversa, y correlativamente lo es á los jueces ordinarios de la capital aunque no á los Federales, cuya jurisdicción es de sección común.

6—Las facultades que los arts. 82, 90, 102 y 321 de la Ley Org. de los Tribs. de la Cap. acuerdan, no están sujetas á revisión.

7—El art. 11 de la Ley Org. de los Tribs., no puede referirse á otra moneda que á la efectiva y sonante, porque en el país no hay otra moneda nacional que el disco de oro ó plata de peso, aleación y forma determinada que lleva estampado el sello de la Nación. La ley de curso legal no ha hecho del billete bancario una otra moneda nacional, sino que tan solo le ha dado fuerza cancelatoria en las obligaciones por su valor en plaza.

8—No carece de jurisdicción para regular los honorarios de las dos instancias, porque si bien del espíritu de la ley resulta, que cada Juez ó Tribunal hace la apreciación de los trabajos respectivos cuando media espresa condenación en costas, esto no se opone á que el inferior regule los honorarios de las dos instancias, porque ello se conforma á lo dispuesto en el art. 69 del Apéndice al Cód. de Proc. Se



JUR

9. Jurisdicción—Al que deduce la escepción de juego para declinar de jurisdicción, le corresponde la prueba.—

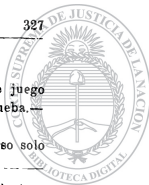
Jur. Com., tom. 4, pág. 34, Ser. 2ª.

10. Jurisdicción—Para fijarla en caso de concurso solo

ajusta esta resolución al principio de que la Cámara procede siempre en grado de apelación, que es el principio general.

9—Se trataba de una operación de bolsa, en cuyo caso la ley presume el acto como mercantil, y solo una vez justificado que se trata de juego, puede declararse corresponder a la jurisdicción civil. Al oponerse una escepción, el que la aduce se convierte en actor, en virtud del principio de que, el demandado, en la escepción, se hace actor: *reus in excipiendo fit actor*. Debe no olvidarse tampoco que la prueba incumbe al que aduce un hecho nuevo en juicio.

10—Esta resolución fué dictada por la Cámara constituida en Tribunal de interlocutorias y por mayoría de votos. Es una resolución donde se desconocen por completo los principios más elementales. Que el principio sentado en el sumario era el correcto decia la mayoría, y se fundaba que para establecer la jurisdicción de los Jueces de Paz en el juicio universal de concurso, es menester estimar el haber del fallido mediante las diligencias de inventario y tasación que deben practicarse en juicios de esa naturaleza para indagar si no excede de la suma de 2.000 \$, hasta cuya cantidad eran competentes los Jueces de Paz,—Art. 11, inc. 1º de la Ley Org.—porque debe entenderse que la palabra *monto* empleada en dicho inciso, es correlativa a la palabra *haber*. Que esta es la inteligencia que debe asignarse a la referida palabra, lo demuestra el art. 62 en su segunda parte, cuando dispone que los juicios de concurso comercial de acreedores pasen a los Jueces de Paz respectivos si de las diligencias resultase que su monto no exceda de 2.000 \$. Esta disposición demuestra que la ley, consultando las erogaciones siempre gravosas ante los Jueces de Comercio, por razón del mismo procedimiento, ha tenido presente el interés de los acreedores y del fallido para disponer que los Jueces de Paz deban conocer en los concursos cuando el haber no pase de al espresada suma. Atentas estas razones, el argumento que se hace, diciendo que en los juicios ordinarios cuando se demanda una suma superior, para nada se tiene en cuenta la manifestación que hace el demandado de no deber sino una suma inferior pues, la competencia en este caso se establece teniendo en cuenta la suma demandada por el actor. Estos fundamentos del voto de la mayoría fueron victoriosamente refutados en cada uno de sus puntos, por la minoría en la siguiente forma: La ley de organización de los Tribunales de



JUR

debe de atenderse al monto de los bienes del concursado y

Justicia de la Capital, solo ha concedido á la Justicia de Paz el conocimiento y decisión de asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestionado no exceda de dos mil pesos moneda nacional. Según resulta de todos sus artículos la jurisdicción de la Justicia de Paz en esos asuntos, está determinada por razón de la cantidad. Así lo prueba evidentemente el art. 321 de la ley orgánica y sus concordantes. La competencia en el caso presente no es por razón de la materia ni de las personas, ni del lugar, sino por razón de la cantidad. Cuando la jurisdicción es atribuida por razón de la cantidad se atiende para determinarla al valor de la demanda. Esta es la regla de derecho á que debe estarse. Caravantes dice: En primer lugar es regla, que siempre que se trata de la cantidad perteneciente á jurisdicción, se ha de atender á lo que se pide, á la cantidad que es objeto de la demanda y no á lo que se debe. *Quoties de quantitate ad jurisdictionem pertinenter semper quantum petatur quociendum est, nom quantum debeatur.*—Ley 19, t. 1º, Dig. de jurisdicción.—Esta disposición terminante ha sido adoptada por todos los autores como regla primera y principal sobre esta materia. Esta doctrina la trae Caravantes comentando los arts. 1133 y 1172 de la ley de enjuiciamiento civil de España, para decidir cuáles cuestiones sean objeto de los juicios de menor cuantía y cuáles del juicio ordinario, que es precisamente lo que se trata de decidir en este caso. Manresa y Reus, tom. 2º, pág. 13, trae la misma doctrina. Caravantes, Tratado histórico, crítico y filosófico de los procedimientos en materia civil, tom. 2º, pág. 421, núms. 176 y 177 y tom. 1º, pág. 295, núm. 417. La citada Ley Org. de los Tribs. ha modificado la jurisdicción de los Juzgados de Comercio, en cuanto acuerda á la Justicia de Paz por su art. 62, el conocimiento de concursos mercantiles, cuando su monto no excede de 2.000 \$ nacionales; pero esa ley ha dejado intactos los principios y reglas establecidos para saber en cuáles casos debe determinarse la competencia del Juez de Comercio ó del de Paz por razón de la cantidad litigada. Esta jurisdicción atribuida por el segundo período del art. 62 en materias de concursos comerciales, es una escepción al derecho común, como lo demuestra la primera parte del artículo que atribuye al Juez de Comercio todos los asuntos regidos por el Código y las leyes de comercio y como tal escepción debe aplicarse restrictivamente. El art. 62, según se desprende del contexto general de la ley, solo tiene el alcance de extender la jurisdicción de la Justicia de Paz á los concursos comerciales cuando su monto no exceda de dos mil pesos, pero no el de cambiar las reglas ordinarias de la competencia en materia civil ó

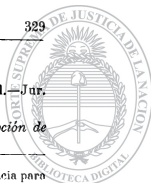


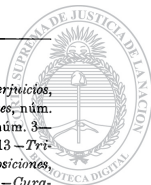
JUR

no á las deudas ó ejecuciones que existen contra él.—Jur. Com., tom. 2, pág. 586, Ser. 2ª.

Jurisdicción—Véase: *Alquileres*, núm. 1—*Excepción de*

comercial. Si, como se sostiene de contrario, en la competencia para fijar el monto del concurso, solo debe estarse al valor de los bienes del fallido, tendríamos que acreedores por medio millón de pesos ó más irían á discutir créditos de esa magnitud ante los Jueces de Paz, quienes decidirían definitivamente de su validez ó nulidad contra el espíritu dominante en la ley de organización de los Tribunales, que solo es acordarles competencia hasta la suma de 2.000 nacionales. Resultará así que este magistrado primario de la justicia, decidirá de litigios por medio millón de nacionales contra la naturaleza de la institución de la Justicia de Paz y la índole de sus funciones por el sólo hecho accidental de que el fallido tenga únicamente dos mil nacionales para responder á sus compromisos. ¿Puede suceder que no haya sino un acreedor y que su crédito valga medio millón de pesos nacionales, este acreedor iría á litigar su crédito desconocido por el fallido ante un Juez de Paz, quién decidiría de su validez ó nulidad? Cuando un acreedor común demanda á su deudor, la competencia según todas las reglas de derecho se decide por el valor de la demanda. Lo que dá nacimiento á la quiebra son las condiciones del fallido; de lo que se trata en la quiebra es garantizar el cumplimiento de esas obligaciones: la parte característica y prominente de este juicio es el monto de los créditos. ¿Porqué entonces prescindir de ellos para solo atender al haber del fallido cuando se trata de resolver una cuestión tan sustancial como la del Juez que ha de conocer en este juicio? Léase el Cód. de Com. y se verá que en los estados y resoluciones más trascendentes de este juicio se tiene en cuenta al acreedor ó á los créditos del concurso. Así, sea que se trate de la calificación de culpable ó fraudulenta, arts. 1515 y 1517; sea que se trate del concordado, art. 1614; sea que se trate de la rehabilitación, artículo 1721; ya sea que se trate de las moratorias, art. 1733, se atiende al débito de las obligaciones, y traer á consideración el activo para entregar acreedores y créditos por cuantiosos que sean á la decisión de la Justicia de Paz. En el Cód. Pen., al fijar penas al quebrado fraudulento se tiene también en cuenta el monto de los créditos no pagados como puede verse en los artículos 199 y 201. El concurso es la concurrencia de acreedores por créditos no pagados, luego cuando el art. 62 habla del monto del concurso, se refiere al valor litigado, al monto de las obligaciones no satisfechas según la doctrina espuesta y su sentido jurídico.





JUR

arraigo, núm. 1—*Conocimiento*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 7—*Herederos*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 24—*Jueces*, núm. 1—*Prueba*, núm. 2—*Pagaré*, núm. 4—*Domicilio*, núm. 3—*Delitos*, núm. 2—*Competencia*, núms. 7, 9, 10, 11 y 13—*Tribunales de la Capital*, núm. 2—*Protesto*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 8—*Tutor*, núm. 1—*Arraigo*, núms. 1, 4 y 5—*Cura-párroco*, núm. 1—*Reincidencia*, núm. 3—*Fallecimiento*, núm. 3—*Vales al portador*, núm. 1—*Acto de comercio*, núm. 2.

Jurisdicción arbitral—Véase: *Sociedad*, núm. 7.

Jurisdicción civil—Véase: *Ferrocarril*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 2—*Información*, núm. 2—*Acción*, núm. 7—*Arraigo*, núm. 2—*Declaraciones*, núm. 10.

1. Jurisdicción comercial—Es incompetente para conocer en el juicio sobre cobro de arrendamientos de bienes raíces.—*Jur. Com.*, tom. 1, pág. 17, Ser. 2ª.

2. Jurisdicción comercial—Es la única competente para

1—Si bien los actos de los comerciantes son reputados comerciales, solo son tales salvo prueba en contrario.—Art. 500, Cód. Com. ant.—Aquí existe la prueba contraria, la que resulta de la naturaleza de la cosa sobre que versa el juicio, cual es el arrendamiento de un inmueble: falta la condición de cosa mueble para que el acto se considere mercantil. Es por esto, que los Tribs. de Com. se han negado siempre á declarar en estado de quiebra al comerciante que no paga los arrendamientos que adeuda.—Véase: verb. *Alquiler*, números 1 y 2.

2—Para dejar establecido si el Tribunal ante el cual se entabla una demanda es competente ó no para conocer en ella, debe atenderse no solo á la materia sobre que ella versa y á las personas que son partes, sino que asimismo hay que examinar los hechos que se alegan y las circunstancias que revisten, aceptándolos hipotéticamente como ciertos. La exactitud del sumario se desprende del hecho de la quiebra en que es declarada una persona, desde cuyo instante nace el juicio universal de concurso. El Juez de Comercio es competente para entender en la nulidad, porque el juicio es una emergencia del estado de quiebra, porque la validez ó nulidad del acto jurídico que entraña la enagenación debe juzgarse con arreglo á las leyes de comercio, siendo el Juez de esta jurisdicción

JUR

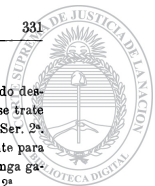
declarar la nulidad de la venta efectuada por el fallido después de la efectiva cesación de pagos, aun cuando se trate de bienes inmuebles.—Jur. Com., tom. 4, pág. 484, Ser. 2ª.

3. Jurisdicción comercial—Es la única competente para conocer en la ejecución de un pagaré, aun cuando tenga garantía hipotecaria.—Jur. Com., tom. 4, pág. 500, Ser. 2ª.

Jurisdicción comercial—Véase: *Sustracción*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 6—*Reivindicación*, núm. 8.

el único competente para aplicar la ley mercantil. El acto de la enagenación será válido ó nulo, según él resulte ó no comprendido entre los que deben anularse en virtud de los efectos retroactivos que el Cód. de Com. atribuye á la quiebra. Se dice que el acto por el cual se enagena una propiedad raíz es civil, siendo ésta la jurisdicción competente para entender en todo acto de naturaleza civil. Sin que se pueda desconocer la exactitud de este principio en su caracter general, ello no implica que en ciertos y determinados casos, no pueda quedar bajo la jurisdicción del Juez de Com., á quien corresponde juzgar de la validez ó nulidad de la enagenación. El conjunto del patrimonio de un fallido queda bajo la jurisdicción del Juez de Com., sea que se trate de bienes muebles ó inmuebles. Así, por ejemplo, si el Juez manda vender los bienes raíces del concurso y se dice de la nulidad de la venta, el Juez competente para resolver la cuestión lo será siempre el de Com. Y si alguien deduce tercería ¿quién resuelve el incidente? El art. 1536 del Cód. de Com. ant. atribuye al Juez de Com. una competencia general en la quiebra, y debe conocer, como se ha dicho, de todas las cuestiones emergentes: de donde surge la competencia de este Juez, pues la acción tiene por objeto anular uno de los actos del fallido, precisamente porque ese acto fué celebrado cuando á causa del estado de quiebra no pudo hacerlo. Así lo sostienen Alauzet, tom. 7, núms. 3012 y 3013; Bedarride, núms. 156 y 157; La «Curia», Comercio terrestre, Lib. II, cap. XV, núm. 16; Dalloz, Rep. de Jur., tom. 24, núm. 1314. Esta es la interpretación que corresponde dar al art. 1536, inc. 2ª del Cód. de Com. ant.

3—La hipoteca, como fianza, es meramente accesoria de la obligación cuya naturaleza sigue, ya sea aquella civil ó comercial, y sin que pueda influir en manera alguna en la jurisdicción del Juez á quien compete el conocimiento sobre lo principal. Si la obligación que se demanda es mercantil, la circunstancia de tener una hipoteca constituida como garantía, en manera alguna puede trabar la jurisdicción del Juez de la obligación principal.





JUR—JUZ

1a. Jurisdicción correccional—Es competente para conocer en los juicios por injurias.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 313, Ser. 2ª.

Jurisdicción criminal—Véase: *Insania*, núm. 1.

1b. Justa causa—Alegada para no comparecer a la hora señalada para absolver posiciones, el Juzgado debe abrir el incidente a prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 83, Ser. 2ª.

Justicia de Paz—Véase: *Jurisdicción*, núm. 6.

Justificación plena—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 18 y 19—*Juramento estimatorio*, núm. 1.

Juzgado—Véase: *Competencia*, núm. 1—*Juicio*, núm. 2—*transacción*, núm. 1—*Prueba*, núm. 2—*Excepciones*, núm. 3—*Cuestiones*, núm. 2.

1. Juzgados de Paz—Numerando los de la Capital después de la federalización de Flores y Belgrano, y fijando las Cámaras que deben resolver las apelaciones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 33, Ser. 2ª.

1a—La pena impuesta al reo de injuria grave es más benigna que la fijada en el art. 307, Cód. Pen. ant. El máximo de la pena corporal y pecunaria del art. 182, no excede del límite fijado a la jurisdicción correccional por el art. 66 de la Ley Org. de los Tribs. de la Capital.

1b—Es jurisprudencia constante aceptada por la Cámara,—art. 127, Cód. de Proc.—Véase: *Inst*, tom. 2º, verb. *Posiciones*, núm. 12, tom. 1º, mismo verb., núms. 2072 y 2074.

L



Ladrillos—Véase: *Acto de comercio*, núm. 1.

Latigazos—Véase: *Legítima defensa*, núm. 2.

1. Laudo—Arbitral, resuelto en él, que la responsabilidad de la parte debe tener por base el lucro cesante que haya resultado de su omisión culpable, tal declaración no comprende lo que haya dejado de lucrar por caso fortuito ó de fuerza mayor.—Jur. Com., tom. 1, pág. 393, Ser. 2ª.

2. Laudo—El dictado por los árbitros-arbitradores, es inapelable.—Jur. Com., tom. 3, pág. 141, Ser. 2ª.

3. Laudo—La acción de nulidad del laudo de árbitros

1—La omisión culpable es la única causal de los perjuicios, imputable á la parte. El caso fortuito ó de fuerza mayor, pueden tener por causal una omisión imputable á la parte, pero esa causal puede ser debida á una omisión culpable ó no culpable. Los casos de fuerza mayor como los fortuitos, se presumen que no tienen por causa la culpa del interesado. Para establecer esta responsabilidad es necesario comprobar que el caso fortuito ó de fuerza mayor ha sido ocasionado por una omisión culpable; la responsabilidad nace de la omisión culpable y en esta forma es correcto el sumario que analizamos.

2—Art. 808, Cód. de Proc.

3—El art. 808 del Cód. de Proc, solo autoriza la acción de NULIDAD contra estas sentencias. Esta acción debe sustanciarse como todas las demás por la vía ordinaria, porque no hay en el tit. XVIII ninguna disposición que autorice á la Cámara para conocer de ella originariamente; debiendo tenerse presente que el art. 795 del mismo

LAU—LEG

arbitradores, debe deducirse, sustanciarse y resolverse ante el Juez de Com., el superior solo puede conocer en grado de apelación.—Jur. Com., tom. 3, pág. 417, Ser. 2.^a

Laudo—Véase: *Recusación*, núm. 4—*Prejuzgamiento*, núm. 1.

1a. Legados—A instituciones meramente á beneficio de los pobres, no se encuentran sujetos al impuesto con que la ley grava los legados entre extraños—Jur. Civ., tom. 8, pág. 362, Ser. 2.^a.

2. Legados—Que en calidad determinada ó igual haga el testador á cada uno de sus herederos legítimos, se conceptúan aumento de la herencia y no donación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 583, Ser. 2.^a.

Legados—Véase: *Impuesto*, núm. 1—*Testamentaria*, núm. 4.

Legalización—Véase: *Titulos*, núm. 2—*Protesta*, núm. 1.

Legalizar—Véase: *Documentos*, núm. 16.

1b. Legítima defensa—Existe, siempre que lo tenaz y persistente del ataque, ponga en peligro la vida ó los derechos de una persona.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 260, Ser. 2.^a.

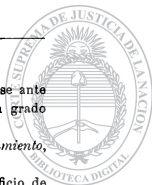
2. Legítima defensa—La agresión á latigazos no impor-

Cód., no es aplicable por cuanto él solo rige para los fallos de árbitros *juris*. En el mismo sentido se ha pronunciado la Cámara en el caso de Schwartz y hermanos con Pedro Echeto. Véase Inst., tom. 1.^o, verb. *Acción de nulidad*, núm. 2.

1a—Véase: verb. *Impuesto*, núm. 1.

1—El art. 81, inc. 1.^o Cód. Pen., declara que está exento de pena, el que obra en defensa propia ó de sus derechos, siempre que concurren las circunstancias siguientes: 1.^o Agresión ilegítima; 2.^o Necesidad racional del medio empleado para impedir la ó repelerla; y 3.^o Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. De manera que además de las condiciones establecidas en el sumario, la ley requiere la concurrencia de otros requisitos.

2—Sin embargo siempre constituiría una agresión que debiera considerarse como circunstancia atenuante. Para que la agresión pueda ser considerada como legítima defensa, es necesario que



LEG—LES

ta un peligro para la vida, y en consecuencia no importa el estado de legítima defensa en el agredido.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 560, Ser. 2ª.

3. Legítima defensa—El que provoca el lance no puede invocarla, si terminada la riña vuelve armado al lugar del suceso con el objeto de renovarla.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 348, Ser. 2ª.

Legítima defensa—Véase: *Amenaza*, núm. 1—*Ataque*, núm. 1—*Lesiones*, núm. 3—*Prueba*, núms. 19, 20 y 21—*Heridas*, núm. 2—*Excepción de legítima defensa*, núms. 1 y 2—*Provocación*, núm. 7—*Desafío irregular*, núm. 1.

1a. Lesión—Cualquiera que sea la causa que la produzca durante la riña, debe penarse como consecuencia de ella.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 95, Ser. 2ª.

Lesión—Véase: *Arma de fuego*, núm. 2—*Herida*, núm. 1—*Tentativa de asesinato*, núm. 1.

1b. Lesiones—Las inferidas entre varios, sin que puedan individualizarse, deben ser castigadas como graves, disminuyéndose en las dos terceras partes.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 20, Ser. 2ª.

2. Lesiones—Las que se producen durante la riña, aunque no fuesen directamente causadas por el reo, se conceptúan consecuencia de la agresión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 160, Ser. 2ª.

fuese capaz de poner en peligro inminente la vida del agredido. No concurriendo esta circunstancia solo se atenúa la pena y se aplica la que establece el art. 120, inc. 1ª del Cód. Pen. vig.

3—El que voluntariamente busca la ocasión y se constituye en peligro, como en el caso del que aceptando un desafío sale á pelear, mal puede alegar después ese peligro, como defensa ó atenuación de las heridas que infliera ó de la muerte que cause.

1a—De acuerdo con lo establecido en el art. 240 del Cód. Pen. ant.

1b—Art. 241, inc. 2ª, Cód. Pen. ant.

2—Art. 235, Cód. Pen. ant.





LES

3. Lesiones—Las causadas después de haber cesado el ataque, no pueden considerarse como causadas en legítima defensa.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 409, Ser. 2ª.

4. Lesiones—Inferidas con alevosía cuando consta por confesión del reo y demás circunstancias del hecho, plenamente justificada la intención homicida, deben ser penadas como tentativa de asesinato.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 66, Ser. 2ª.

5. Lesiones—Para admitir circunstancias atenuantes al delito de lesiones, basta que de autos no resulte prueba que las haga inverosímiles.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 217, Ser. 2ª.

6. Lesiones—Sin intención homicida, cuya curación dure más de un mes, causen deformación é inhabiliten para el trabajo por más de cuatro meses, deben ser penadas con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 266, Ser. 2ª.

7. Lesiones—Con mutilación, siempre que se justifique que no fué intencional, deben ser penadas con año y medio de prisión, si existe circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 524, Ser. 2ª.

8. Lesiones—Las causadas por un agente de la autoridad, sin causa justificada, deben ser castigadas con ocho meses de arresto.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 283, Ser. 2ª.

Lesiones— Véase : *Heridas*, núm. 1—*Proceso*, núm. 1.

1. Lesiones corporales—Que incapaciten menos de un mes, deben ser castigadas con tres meses de arresto, aunque

3—Art. 158, Cód. Pen. ant.

4—Aquí el reo ha ejecutado todo lo necesario para consumar su intento, si no lo consiguió es tan solo debido á una causa extraña á su voluntad.

6—Art. 120, inc. 1ª, Cód. Pen.

7—Véase nota precedente.

8—Art. 120, inc. 2ª; y 84, inc. 11 del Cód. Pen. vig.

1—Cuando no hubiere obrado el agente con intención homicida, art. 233, Cód. Pen. ant.

LES

sean producidas con bala—Jur. Crim., tom. 1, pág. 46, Ser. 2ª.

2. Lesiones corporales—Aunque manifestamente aparezca la voluntad de matar, solo deben calificarse de tentativa de homicidio y no de asesinato.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 409, Ser. 2ª.

3. Lesiones corporales—Para que pueda ser calificadas como tentativa de asesinato y castigadas como tal, se requiere que la premeditación y la alevosía resulten plenamente justificadas.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 409, Ser. 2ª.

4. Lesiones corporales—Las que ocasionalmente causasen la muerte, solo deben calificarse y penarse como heridas graves, si del proceso no resulta justificada la voluntad homicida.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 441, Ser. 2ª.

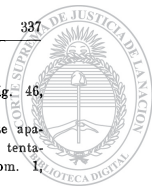
5. Lesiones corporales—El reo de ellas, sin circunstan-

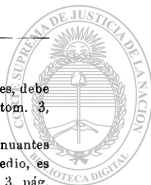
2—El delito de lesiones corporales requiere como condición indispensable la exclusión del *animus occidendi*, que es elemento del homicidio voluntario, sea que asuma la gravedad del asesinato ó del simple homicidio. Art. 230, Cód. Pen. ant. y nota del proyecto.

3—Corresponde que estas dos circunstancias sean plenamente comprobadas para justificar la imposición de la pena correspondiente. Según el nuevo Cód. Pen. tan solo la alevosía puede originar la calificación de asesinato, constituyendo la premeditación una circunstancia agravante. Art. 95, inc. 1ª; y 81, inc. 4ª, Cód. Pen. vig.

4—El art. 196 del Cód. Pen. ant., establecía en general, que quien ejecutase un acto capaz de poner en peligro la vida de cualquiera persona, si en efecto tuviere lugar la muerte, debería ser considerado como reo de homicidio simple; esta declaración al parecer demasiado lata, venía á quedar restringida por la del art. 205, que para reputar como mortal una lesión ó herida exigía de una manera positiva que ella hubiese sido la causa evidente de la muerte. Estos artículos han desaparecido en el Cód. vig., y esta circunstancia que deja librada absolutamente la resolución del caso á los principios generales de la jurisprudencia criminal, nos impone la necesidad de recurrir á la espresada distinción que viene á quedar de nuevo en todo su vigor.

5—Art. 120, inc. 1ª del Cód. Pen. vig.





LES

cias atenuantes y cuya curación dura más de un mes, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 343, Ser. 2ª.

6. Lesiones corporales—Sin circunstancias atenuantes ni agravantes, deben ser penadas con el término medio, es decir, con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 596, Ser. 2ª.

7. Lesiones corporales—Leves, causadas á un agente de la autoridad, deben castigarse como circunstancia agravante del desacato.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 520, Ser. 2ª.

8. Lesiones corporales—Con bala, llevadas á efecto por el reo bajo la presión de la ira provocada por injurias graves y continuadas, no deben calificarse como tentativa de homicidio, si ésta no resulta justificada por otras pruebas.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 185, Ser. 2ª.

9. Lesiones corporales—Las que causan la muerte, deben castigarse como homicidio simple, si de autos no resulta demostrada la premeditación.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 499, Ser. 2ª.

10. Lesiones corporales—Que no causan deformidad, deben castigarse con un año de arresto.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 488, Ser. 2ª.

Lesiones corporales—Véase: *Intención homicida*, núm. 1.

6—Art. 99, Cód. Pen. vig.

7—Art. 215, Cód. Pen. vig.

8—Cuando no resulta de las constancias del proceso que haya habido intención de matar, ó que se hubiese procedido con premeditación ó alevosía, debe el delito ser castigado tan solo como lesiones corporales.—Art. 230, Cód. Pen. ant.

9—Todo lo contrario, había mediado provocación de parte de la víctima, la que constituye circunstancia atenuante, siendo aplicable la disposición del art. 83, inc. 4º del Cód. Pen. vig., y la pena establecida en el art. 96, inc. 3º del mismo Código.

10—Art. 120, inc. 2º, Cód. Pen. vig.



LES—LEY

1a. Lesiones mutuas—Cuya curación no dure el mínimo de la ley, no puede fundar un procedimiento correccional.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 156, Ser. 2ª.

Letra—Véase: *Falsificación*, núm. 2.

1b. Letra de cambio—El tenedor de ella, que no protesta la falta de aceptación por el girado, pierde todos sus derechos contra el librador, siempre que éste justifique que hizo en la debida oportunidad la provisión de fondos para su pago.—Jur. Com., tom. 3, pág. 12, Ser. 2ª.

Letra de cambio—Véase: *Documentos*, núm. 17—*Falseedad*, núm. 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núms. 4, 5 y 7—*Agregación*, núm. 1—*Endoso en blanco*, núm. 1—*Error*, núm. 3—*Excepción de litispendencia*, núm. 7—*Prescripción*, núm. 12—*Daños y perjuicios*, núm. 6.

1c. Letrado—El que desempeña la tutela tiene derecho a cobrar comisión y honorarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 485, Ser. 2ª.

Letrado—Véase: *Término*, núm. 4.

Levantamiento—Véase: *Tercería*, núm. 1.

1d. Ley—Si durante la secuela del juicio, se dictase una más benigna, debe aplicarse posponiendo la antigua.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 77, Ser. 2ª.

2. Ley—Más benigna, si bien puede aplicarse al reo la pena de la más benigna, no pueden serle aplicadas las dis-

1a—Cuando las lesiones no duran más de 4 días, son consideradas como simples contravenciones de policía.—Arts. 2 y 233 del Cód. Pen. ant.

1b—Art. 798, Cód. de Com. ant.

1c—Es jurisprudencia sentada en nuestros tribunales.—Véase: Inst., tom. 1ª, verb. *Abogado*, núm. 3 y su nota.

1d—Es principio sentado en materia criminal.

2—Para castigar a un delincuente, no se deben tomar por separado las disposiciones de uno y otro Código que sean más favorables, porque este procedimiento importaría formar una nueva ley, sino comparar las penas que por cada una se impongan con su-

LEY—LIB

posiciones concordantes de ambas, pues ello importaría la aplicación de dos leyes.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 504, Ser. 2ª.

3. Ley—Nueva, siempre que por ella, las circunstancias concurrentes solo sean agravantes de un delito castigado con menor pena, debe aplicarse con preferencia á la antigua, en la cual esa concurrencia autorizaba distinta calificación y mayor pena.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 493, Ser. 2ª.

Ley—Véase: *Contrato*, núm. 1—*Aplicabilidad ó inaplicabilidad*, núm. 1.

Ley de inconversión—Véase: *Moneda estipulada*, núm. 1—*Obligaciones á oro sellado*, núm. 1—*Pagaré*, núm. 2.

Ley de sellos—Véase: *Trasferencias*, núm. 1—*Multa*, núm. 1.

1. Ley vigente—Cuando ésta, al cometerse un crimen, admita circunstancias atenuantes y fija una pena divisible, debe en la tentativa, aplicarse con preferencia á la posterior que señala una pena indivisible para el delito consumado sin fijar pena divisible corporal para la tentativa.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 118, Ser. 2ª.

Leyes—Véase: *Empedrados*, núms. 2, 3 y 4.

Leyes comunes—Véase: *Efecto retroactivo*, núm. 1.

Leyes de procedimientos—Véase: *Competencia*, núm. 8.

Leyes inglesas—Véase: *Exhorto*, núm. 2.

Libertad—Véase: *Insania*, núm. 3.

Librador—Véase: *Endoso en blanco*, núm. 1—*Letra de cambio*, núm. 1.

Libre albedrío—Véase: *Responsabilidad criminal*, núm. 1.

gación á todos sus preceptos, y fijar la que fuere más benigna como lo establece el art. 48 del Cód. Pen. vig.

3—Porque en este caso la aplicación de la nueva ley, es en beneficio del encausado, debiendo aplicarse la ley más benigna de acuerdo con lo preceptuado en el art. 48 del Cód. Pen. vig.

1—Porque es más benigna—art. 48, Cód. Pen. vig.



LIB

1a. Libros—Acompañados á un escrito, solo deben repone-
rse en la parte que haga referencia al litigio.—Jur. Civ.,
tom. 4, pág. 20, Ser. 2ª.

Libros—Véase: *Sociedad*, núm. 1—*Embargo preventivo*,
núm. 19—*Compulsa*, núms. 1 y 2.

1b. Libros de comercio—Solo es permitida la compulsa
cuando se designen las partidas al pedirla, sin que la parte
pueda exigir la presentación previa para fijar los que deben
ser materia de su prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 400,
Ser. 2ª.

2. Libros de comercio—No rubricados, carecen de fuerza
probatoria á favor del comerciante que los presenta.—Jur.
Civ., tom. 8, pág. 336, Ser. 2ª.

3. Libros de comercio—Los que no llenen los requisitos
exigidos por el Código, no forman prueba respecto á la ve-
racidad de sus asientos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 450,
Ser. 2ª.

4. Libros de comercio—La compulsa de los libros de

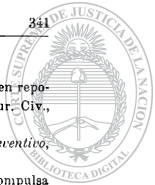
1a—Es lo equitativo, pues el caso viene á ser análogo á aquel en
que se traen expedientes *ad effectum citendi*, en el cual no se re-
ponen las fojas de que constan, porque propiamente hablando no
forman parte de los autos, como sucede también con los libros que
se presentan al solo efecto de que puedan verificarse ciertas refe-
rencias, lo que casi siempre se puede hacer aun sin traerlos al
Tribunal.

1b—Si el litigante tuviese que exhibir sus libros para que el intere-
sado pida la compulsa de la parte que le convenga, se le obligaría
á la parte contraria á producir pruebas, lo que no corresponde en
procedimiento. La presentación de los libros es contraria á lo pre-
ceptuado en los art. 71 y 72 del Cód. de Com. ant., iguales á los
arts. 58 y 59 del vigente.

2—Art. 55, Cód. de Com. vig.

3—En cuanto favorezcan los derechos del que los presenta, pero
prueban en su contra.—Art. 55, Cód. de Com. vig.

4—Esta diligencia de prueba se encuentra en las condiciones del
art. 118 del Cód. de Proc.





LIB—LIQ

comercio, sobre una cuenta presentada al entablar la acción, es procedente aun después de vencido el término de prueba, si durante él se hubiese solicitado.—Jur. Com., tom. 3, pág. 298, Ser. 2ª.

5. Libros de comercio—El pedido de la prueba de compulsa de los libros de comercio, se entiende que solo es en la parte que se refiere á la cuestión litigiosa.—Jur. Com., tom. 3, pág. 294, Ser. 2ª.

6. Libros de comercio—Debiendo la prueba de compulsa circunscribirse á la confrontación de las partidas determinadas, el actuario debe practicarla, sin que sea necesario el nombramiento de un contador público.—Jur. Com., tom. 3, pág. 145, Ser. 2ª.

7. Libros de comercio—Del fallido, que no llenan los requisitos de la ley, no forman prueba.—Jur. Com., tom. 3, pág. 441, Ser. 2ª.

Libros de comercio—Véase: *Fecha*, núm. 1—*Prueba*, núms. 18 y 26—*Recibo*, núm. 2—*Compulsa*, núm. 3.

Libros parroquiales—Véase: *Informe*, núm. 2.

Licitación—Véase: *Comprador*, núm. 1—*Condóminos*, núm. 1.

Límite determinado—Véase: *Ventas ad-corpus*, núm. 1.

Líndero—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 10.

1. Liquidación—No puede ser aprobada una liquidación mientras no se sujete á las bases fijadas en la sentencia que la ordenó.—Jur. Com., tom. 4, pág. 32, Ser. 2ª.

5—De las peticiones formuladas solicitando la compulsa resultaba que ella no era general sino limitada á la cuestión materia del litigio.

6—Así se concilia el interés de las partes con el sigilo preceptuado para los libros de comercio.

7—Los libros de los fallidos admiten siempre prueba en contrario.—Véase la nota 2ª de este verb.



LIQ—LIT

Liquidación—Véase: *Sentencia*, núm. 6.

1a. Liquidación de sociedad—La acción de liquidación de sociedad no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 166, Ser. 2ª.

2. Liquidación de sociedad—Adjudicado un inmueble á uno de los socios en la cuenta de liquidación de sociedad, los herederos de los que hubiesen fallecido se encuentran obligados á otorgar la correspondiente escritura pública, sin que puedan alegar su falta de intervención en la liquidación social, ni aun la falta de la escritura pública que la ley solo reputa necesaria en la transferencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

3. Liquidación de sociedad—Es indivisible la acción —Jur. Com., tom. 1, pág. 64, Ser. 2ª.

Liquidación de sociedad—Véase:—*Dependiente*, núm. 2—*Fallecimiento*, núm. 3—*Juez*, núm. 1—*Cesión de derecho*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 1.

1. Liquidaciones judiciales—Que tengan por base una sentencia, deben practicarse por un contador público.—Jur. Com., tom. 3, pág. 133, Ser. 2ª.

Lista—Véase: *Testigos*, núm. 3.

Litigante temerario—Véase: *Costas*, núms. 10, 13, 14 y 16.

1b. Litigio—Sobre administración de los bienes en condominio, faculta al Juzgado para nombrar á un tercero administrador de los bienes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 116, Ser. 2ª.

1a—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 9.

2—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 3.

3—Este punto no fué materia de resolución en la Cámara.

1b—Los antecedentes demostraban que ninguno de los condóminos se encontraban en condiciones de velar provechosamente por los derechos comunes: ninguna de las partes podía ejercer la administración, ni fácil ni ventajosamente: en este caso es aplicable la disposición del art. 643, inc. 2º del Cód. de Proc.



LIT

Litigio—Véase: *Acción*, núm. 4—*Escepciones dilatorias*, núm. 4.

Litigios—Véase: *Competencia*, núm. 2—*Escepción de litispendencia*, núm. 3—*Nulidad*, núms. 4, 5 y 16—*Protocolos*, núm. 1—*Confesión estrajudicial*, núm. 1—*Honorarios*, número 14.

Litiscontestación—Véase: *Tribunal*, núm. 1.

Litispensas—Véase: *Alimentos*, núm. 2.—*Juicios*, número 1.

1. **Litispendencia**—Existe siempre que en distintos juicios pueda recaer idéntica resolución aplicable á las mismas personas por ser éstas exclusivamente interesadas en ambos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 110, Ser. 2ª.

2. **Litispendencia**—Para que esta escepción sea procedente, se requiere que exista litigio entre las mismas personas, sobre la misma cosa y con idéntico objeto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 26, Ser. 2ª.

3. **Litispendencia**.—No existe entre la causa que se inicia para el castigo del delito, y la acusación del reo por

1—Véase: verb. *Escepción de litispendencia*, núms. 1 y 2.

2—Véase: verb. *Escepción de litispendencia*, núm. 4.

3—Si este principio no fuese el consagrado, todo criminal podría esquivar fácilmente la acusación por parte de la víctima del delito, con solo anticiparse á acusarla antes que ella se hubiese querrellado imputándole el mismo delito de que hubiese sido autor ú otro cualquiera, pues con esto solo, el agraviado mientras se hallase acusado quedaría inhabilitado para querellarse por su parte, lo que demuestra claramente la exactitud del sumario. Si bien es cierto que el que se encuentra acusado criminalmente, mientras subsista la acusación, no puede ser admitido en calidad de acusador á promover el castigo de otro delito que no sea mayor que el que se le imputa: este principio ó esta regla, no tiene aplicación alguna tratándose, por parte del reo, de agravio propio ó de los suyos, pues en este caso le es permitido reconvenir, recriminar, ó acusar criminalmente al mismo acusador por delito cualquiera que sea el que éste hubiese cometido contra el acusado —Leyes 2 y 4, tit. 1º, Part. 7º.

LIT—LOC

conceptuar calumniosa la espresada imputación.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 393, Ser. 2ª.

Litispendencia—Véase: *Excepción de litispendencia*, núms. 1, 4 y 5—*Consignación*, núm. 1.

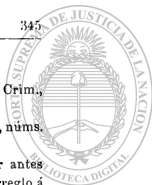
1a. Locación—Cuando la locación ha tenido lugar antes de la construcción, se supone haber sido hecha con arreglo á los planos preexistentes iguales á las diferentes partes del conjunto homogéneo del edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 66, Ser. 2ª.

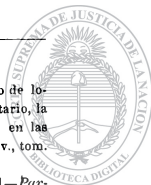
Locación—Véase: *Menores*, núm. 1—*Contrato de locación*, núms. 1b, 2 y 3—*Desalojo*, núm. 1.

1b. Locación de servicios—Al locador de servicios, demandado por la compensación, que afirma haber sido fijados previamente, corresponde la prueba de la existencia del convenio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 225, Ser. 2ª.

1a—Se trata de un contrato de locación celebrado antes de construido un edificio que constaba de numerosos almacenes, todos homogéneos, y de acuerdo con un plano que se tuvo en vista al celebrarse el contrato. Después de concluida la edificación el locatario se negó á recibirse de la cosa, alegando que se habían alterado las condiciones en la construcción. Se resolvió que el locatario estaba obligado á recibir la cosa locada, porque la construcción se llevó á efecto de acuerdo con los planos: hubo sin embargo una pequeña modificación en la edificación, siendo obligado el locador á poner la cosa locada en las condiciones establecidas en los planos.—Arts. 1193 y 1514 del Cód. Civ.

1b—El autor dijo que no se había fijado precio, correspondiendo en derecho que la fijación se hiciese por árbitros,—arts. 1623 y 1627, Cód. Civ.—A lo que se contestó alegando que el precio había sido fijado con anterioridad y pagado mensualmente á su familia: á esto se dijo por el actor que esa suma era tan solo entregada á cuenta. En este estado correspondía al demandado la prueba del ajuste previo de la locación: 1º Porque al que afirma un hecho nuevo en juicio le incumbe su prueba. 2º Porque es un principio de procedimiento que al que aduce defensas en su favor le incumbe la prueba: *reus in excipiendo fit actor*.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª y Ley 8, tit. 3, de la misma Part.; y 3º Porque no constando que se ajustó precio, es de estricta aplicación el art. 1627 del Cód. Civ.





LOC

2. Locación de servicios—Aun cuando el contrato de locación de servicios tenga por base un bien testamentario, la testamentaria carece de personería para intervenir en las cuestiones á que su cumplimiento da lugar.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 386, Ser. 2ª.

Locación de servicios—Véase: *Cuestiones*, núm. 1—*Participación*, núm. 1—*Convención*, núm. 1—*Precio*, núm. 1.

1a. Locador—Tiene obligación de entregar la cosa materia del contrato en estado de servir al uso para que hubiese sido destinada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 324, Ser. 2ª.

2. Locador—No puede cambiar la cosa arrendada, ni alterar sustancialmente su forma.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 66, Ser. 2ª.

Locador—Véase: *Acción*, núm. 2—*Mora*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 1—*Contrato de locación*, núms. 3 y 6—*Reconocimiento*, núm. 2.

1b. Locatario—Que no desaloja el predio arrendado en la

2—El contrato se había celebrado directamente con uno de los herederos en su carácter personal, sin invocar su condición de heredero. Es evidente que la testamentaria nada tiene que ver con el contrato, ni con los contratantes con quienes ningún vínculo de derecho emergente del contrato la liga: para ella es una *res inter alios acta*.

1a—Art. 1514 del Cód. Civ.

2—Arts. 1198, 1514, 1523 y 1524 del Cód. Civ.

1b—Se reconoció como convenida la base de que la cosa arrendada debía desocuparse antes de una fecha dada y en el caso de no cumplirse con esta estipulación se abonaría una indemnización. En cuanto á la facultad del Juzgado para fijar el monto del arriendo, debe tenerse presente que la misma parte sometió su fijación á la determinación del Juez. Aun dado el caso de que esto no se hubiese estipulado, siempre tendría el locador derecho á un aumento en el precio de la locación ó el que designen los peritos árbitros como lo tiene resuelto la Cámara en otro caso que corre publicado en el tom. 2º, pág. 5, Ser. 2º.—Véase: *Inst.*, tom. 2º, verb. *Arrendamiento*, núm. 1.

LOC—LUG

fecha convenida, es responsable por un mayor precio en la locación, que puede ser fijado equitativamente por el Juzgado, tomando un término medio entre el pedido por el locador y el fijado por el contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 160, Ser. 2ª.

Locatario—Véase: *Arrendamiento*, núms. 1 y 4—*Cláusula*, núm. 1—*Contrato de locación*, núms. 3 y 6—*Desalojo*, núm. 1—*Reconocimiento*, núm. 2.

Loterías extranjeras—Véase: *Jueces del crimen*, número 2.

Lotes adjudicados—Véase: *Medianería*, núm. 1.

Lucro cesante—Véase: *Lauda*, núm. 1—*Omisión culpable*, núm. 1.

Lugar—Véase: *Obligación*, núm. 6.

Lugar del contrato—Véase: *Obligación de hacer*, número 4.





1a. Madre—Reconocida como tal, solo pierde la patria potestad sobre sus hijos, previa demanda en forma y sentencia judicial.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 510, Ser. 2ª.

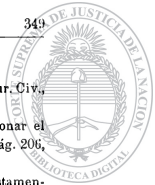
Madre—Véase: *Juicio*, núm. 1—*Menores*, núm. 2—*Muerte*, núm. 1—*Infanticidio*, núm. 1.

Madre legítima—Véase: *Insania*, núm. 2.

1b. Madre natural—Tiene la representación de sus hijos para gestionar su reconocimiento, aun cuando por él pueda

1—Es de suma importancia para la justicia, ese conjunto de derechos que bajo la designación de patria potestad, las leyes conceden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, durante su minoridad—art. 264, Cód. Civ.—Tratándose de despojar a una madre de estos derechos, que antes que en la ley, tienen su fundamento en la naturaleza, es evidente la necesidad de una demanda en forma para la pérdida de esos derechos, y en tanto que ellos subsistan, no se la puede privar de las prerogativas que la son inherentes.

1b—El art. 328 del Cód. Civ., confiere a los padres naturales los mismos derechos y autoridad que a los padres legítimos sobre sus hijos, con la única limitación del art. 336 que les niega la administración y usufructo de los bienes. Es evidente que la defensa que hacen los padres, respecto a la filiación y a los derechos de sus hijos, nada tiene que ver con la administración y usufructo de los bienes, pues la defensa de esos derechos no importa una administración, la que solo puede ejercerse con la posesión de esos bienes. Esta es la jurisprudencia sentada por la Cámara en otro caso. Véase: *Inst*, tom. 2, verb. *Madre*, núm. 1 y su nota.

**MAD—MAN**

corresponderle una parte de los bienes del padre.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 206, Ser. 2.^a.

2. Madre natural—Tiene personería para gestionar el reconocimiento de sus hijos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 206, Ser. 2.^a.

3. Madre natural—Es parte en el expediente testamento del padre natural, aun existiendo tutor, pero sin que esa intervención le permita actos de administración.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 319, Ser. 2.^a.

Madre natural—Véase: *Alimentos*, núm. 5—*Filiación natural*, núm. 3.

1. Maestros mayores—Inscriptos en la matrícula durante los meses de Marzo y Junio del año 1888.—Jur. Civ., tom. 4, págs. 243 y 489, Ser. 2.^a.

Maestros mayores—Véase: *Matrícula*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 11.

Mala fe—Véase: *Demanda*, núm. 1—*Prueba*, núm. 4—*Costas* núms. 10 y 15—*Mandante*, núm. 1—*Billetes falsos de banco*, núm. 1.

Malicia—Véase: *Costas*, núms. 10 y 20—*Juramento*, núm. 4—*Fianza*, núm. 3—*Juramento*, núms. 2 y 3.

Mandamiento—Véase:—*Excepción de pago*, núm. 2—*Entrega*, núm. 1—*Costas*, núms. 10 y 12—*Embargo*, núm. 2—*Documento*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 6—*Quiebra*, núm. 4.

1a. Mandante—Queda obligado por los actos ó contratos de su mandatario, aun después de la revocación del poder,

2—Véase nota precedente.

2—Porque como se ha dicho en el núm. 1, la defensa de los derechos de los hijos no es un acto de administración, siendo ésta la única facultad cuyo ejercicio no les es permitido por el art. 366 á los padres naturales. No estando prohibido el ejercicio de un derecho puede ser ejercitado con toda libertad y amplitud.

1—Arts. 1965 á 1969 del Cód. Civ. Véase verb. *Mandato*, núm. 4.



MAN

mientras no justifique que el tercero conocía la cesación del mandato y que en consecuencia obraba de mala fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 91, Ser. 2ª.

Mandante—Véase: *Poder*, núm. 1—*Inventario*, núm. 1—*Mandatario*, núms. 2, 3 y 4—*Mandato verbal*, núm. 1—*Actos privados*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 4—*Mandato*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 1.

Mandante—Véase: *Consignatario*, núm. 1—*Mandatario*, núms. 4 y 5—*Mandato verbal*, núm. 2—*Agente de bolsa*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 6.

1a. Mandatario—Justificada en juicio ordinario la existencia de trabajos estrajudiciales, el mandatario tiene derecho á que sean regulados conjuntamente con los judiciales y el mandante está obligado á su pago.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 2ª.

2. Mandatario—Los actos de éstos, estralimitando el mandato, no obligan al mandante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 376, Ser. 2ª.

3. Mandatario—Corresponde al tercero que contrató con el mandatario, la prueba de que el mandante ratificó los actos del mandatario por los cuales se estralimitó el mandato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 376, Ser. 2ª.

1a—Art. 1628, Cód. Civ.

2—Arts. 188 y 1906, Cód. Civ.

3—El acto cuya confirmación se alegaba como verificada constaba de un instrumento privado: siendo esto así, es evidente que para acreditar el efecto jurídico de esa confirmación, era esencial la exhibición del instrumento de confirmación en las condiciones y forma que prescriben los arts. 1061 y 1062 del Cód. Civ., ó bien justificar debidamente la ejecución voluntaria total ó parcial que se haya hecho, de acuerdo con lo establecido en el art. 1063. Es evidente que esta prueba incumbía al que la alegaba, de acuerdo con el conocido principio de procedimiento, que la prueba de un hecho nuevo aducido en juicio incumbe al que lo alega.

MAN

4. Mandatario—Para responsabilizarlo por actos que estralimitan el mandato, el mandante debe desaprobárselos inmediatamente que lleguen á su conocimiento.—Jur. Com., tom. 1º, pág. 328, Ser. 2º.

5. Mandatario—Los actos de éste, que no fuesen desaprobados espresamente, se suponen aprobados por el mandante, aun cuando se hubiese estralimitado el mandato.—Jur. Com., tom. 1, pág. 328, Ser. 2º.

6. Mandatario—El que falsamente obliga á su mandante después de la revocación, es el único responsable de esa obligación.—Jur. Com., tom. 4, pág. 243, Ser. 2º.

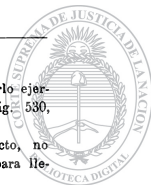
Mandatario—Véase: *Prescripción*, núm. 6—*Apoderado*, núm. 1—*Compra*, núms. 1 y 2—*Poseción*, núm. 6—*Nulidad*, núm. 22—*Gastos*, núm. 1—*Actos privados*, núm. 1—*Personería*, núm. 3—*Mandante*, núm. 1—*Síndico provisorio*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 4—*Inventario*, núm. 1—*Mandato verbal*, núm. 1—*Heredero*, núm. 5—*Mandato*, núm. 4—*Acusador*, núm. 2—*Consignatario*, núm. 1—*Mandato verbal*, núm. 2—*Acción de mandato*, núm. 1—*Fallido*, núm. 4—*Escrito*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 7.

1. Mandato—Para la compra de inmuebles, solo puede justificarse por instrumento público, la prueba testimonial

4—Aquí se resolvió que el mandato no había sido estralimitado y que á pesar de que este se hubiese estralimitado fué ratificado tácitamente, porque no se objetó después de ser comunicada la operación practicada—Arts. 308, 322 y 323 del Cód. de Com. ant.

6—Se habría procedido con dolo, siendo aplicables los arts. 935, 941, 942 y 943 del Cód. Civ.

1—Se trata de un terreno comprado, según el actor, para él pero á nombre de otra persona: ésta presenta los títulos extendidos á su favor y dice que lo adquirió para sí, no para el actor. La prueba testimonial no procede en presencia de lo que disponen los arts. 1884 y 1191 del Cód. Civ. La confesión estrajudicial no podía tomarse en consideración porque no llenaba los requisitos del art. 138 del Cód. de Proc., ni los de la ley 28, tit. 16, part. 3º.



MAN

para constatar la confesión estrajudicial de haberlo ejercitado, es improcedente. — Jur. Civ., tom. 4, pág. 530, Ser. 2ª.

2. Mandato—Justificada la ratificación del acto, no puede ponerse en duda la existencia del mandato para llevarlo á efecto.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 88, Ser. 2ª.

3. Mandato—Es irrevocable, siempre que sea el resultado de un contrato en que así se haya establecido espresamente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 2ª.

4. Mandato—El mandante no puede anular los actos del mandatario posteriores á la revocación mientras no justifique que aquél conocía la revocación cuando celebró el contrato.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 448, Ser. 2ª.

5. Mandato—Al que invoca haber ejercido el mandato como socio, corresponde justificar ese carácter.—Jur. Com., tom. 4, pág. 230, Ser. 2ª.

6. Mandato—No es necesario para la existencia del mandato, que el encargado de cumplirlo haga de ello una profesión, pues el contrato se considera existente aún cuando el comisionista lo acepte ocasionalmente.—Jur. Com., tom. 3, pág. 573, Ser. 2ª.

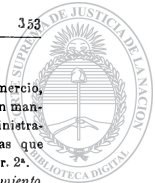
2—Arts. 1874, 1935 y 1936 Cód. Civ. Véase Jur. Civ., tom. 2, pág. 351, Ser. 1ª; Inst. tom. 1º, verb. *Ratificación tácita*, núm. 2271; Art. 1998 Cód. Civ. francés; Troplong, núm. 610, *Del mandato*.

3—Arts. 1197 y 1977, Cód. Civ.

4—Art. 1964, Cód. Civ.

5—Al invocar ese carácter aduce un hecho nuevo, y es principio recibido que al que lo alega incumbe la prueba.

6—El art. 336 del Cód. de Com. vig., establece que entre comitente comisionista hay la misma relación de derecho que entre mandante y mandatario. Pardessus, dice que no es necesario, para la existencia del contrato de comisión, que el encargado de cumplirlo haga profesión de ello, pues se puede obrar por procuración ó comisión, no solo habitualmente sino también por ocasión—tom. 1, núm. 40.



MAN

7. Mandato—Para administrar una casa de comercio, haciendo uso de la firma bajo la cual gira, importa un mandato general, y en consecuencia cualquier de los administradores tiene personería para entender en las demandas que contra ellos se inicien.—Jur. Com., tom. 2, pág. 74, Ser. 2ª.

Mandato—Véase: *Quiebra*, núms. 5 y 7—*Vencimiento*, núm. 1—*Revocación*, núm. 1—*Personería*, núm. 1—*Operaciones de bolsa*, núm. 1—*Mandatario*, núms. 2, 3, 4, 5 y 6—*Rendición de cuentas*, núms. 6 y 7—*Mandante*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 22—*Prescripción*, núm. 6—*Injurias*, núm. 2—*Sociedad*, núm. 5—*Comisionista*, núms. 1 y 3.

1. Mandato especial—Para demandar la reivindicación de un bien raíz, no es bastante para pedir la mensura del mismo antes de iniciar la acción para que fué conferido.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 112, Ser. 2ª.

2. Mandato especial—Para intervenir en la testamentaria no basta para ejercer acciones reivindicatorias contra terceros.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 385, Ser. 2ª.

7—Siempre que los asuntos se relacionen al giro del negocio. El mandato general en este caso comprende los negocios ordinarios con todas sus consecuencias—arts. 1694 y 1881, Cód. Civ.

1—Solamente después de entablada esa demanda, tiene el apoderado facultad para pedir la mensura. Mientras no se inicie la acción reivindicatoria, carece de personería para pedir la mensura, la que es muy posible se convierta en juicio ordinario, llegado el caso del art. 624 del Cód. de Proc. Las facultades conferidas en un poder especial, se extienden a los actos necesarios para el cumplimiento del mandato que le son accesorios. Así se puede iniciar una acción reivindicatoria y en el curso de ella, en la estación de prueba pedir la mensura; pero no se puede pedir ésta antes de iniciada aquélla, porque ello importaría empezar por lo accesorio. Sería promover una acción distinta de la del objeto del mandato, convirtiendo la consecuencia en causa. El juicio de mensura puede ser consecuencia de la acción reivindicatoria, cuando se ha conferido poder para reivindicar, siempre que aquella se solicite como prueba.

2—Art. 1884, Cód. Civ.



MAN—MAT

Mandato judicial—Véase: *Testigos*, núm. 8.

1a. Mandato verbal—Surte iguales efectos para determinar las relaciones jurídicas entre mandante y mandatario como si fuere escrito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 9, Ser. 2ª.

2. Mandato verbal—Puede existir comercialmente, y la prueba de su existencia para terceros puede resultar de simples presunciones ó de actos pasados entre mandante y mandatario que hagan evidente su existencia.—Jur. Com., tom. 1, pág. 281, Ser. 2ª.

Marido—Véase: *Nulidad*, núm. 3—*Escepción de falta de personería*, núm. 7—*Mujer casada*, núms. 1 y 2—*Nulidad ó validez*, núm. 1.

1b. Martillero—No es parte en las cuestiones que sobre nulidad del remate inicien los interesados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 457, Ser. 2ª.

1c. Martillero público—Para serlo, se requiere ejercer ó haber ejercido el comercio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 238, Ser. 2ª.

Martilleros—Véase: *Comisión y gastos*, núm. 1—*Corredor*, núm. 2—*Inscripción*, núm. 1—*Gastos de justicia*, núm. 1.

Masa—Véase: *Adjudicación*, núm. 2.

1d. Maternidad—En los litigios anteriores á la ley de

1—Art. 1873, Cód. Civ.

2—Se comprobó que el presunto mandatario obraba por comisión, pues el mandante se valía de conceptos propios del mandato. Se le indicaba las personas con quienes podía contratar; los precios que podía pagar; la forma en que debía girar; la época y remisión de mercaderías y las cantidades que podría adquirir. Es evidente que se trataba de un mandato verbal autorizado por el art. 301 del Cód. de Com., ant., por cuyos actos el art. 308 responsabiliza al mandante.

1b—No siendo parte, no tiene personería legal.

1c—Arts. 114 y 90, inc. 3, Cód. de Com.

1d—Véase: *Confesión estrajudicial*, núm. 1

MAT

enmiendas al Cód. Civ., la prueba de la confesión estra-judicial de la maternidad basta para justificar la posesión de estado, sin que sea necesario el reconocimiento espreso y continuado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 519, Ser. 2ª.

1a. Maternidad natural—La procedencia de la disposición de la ley que prohíbe la indagación de la maternidad natural, debe resolverse como prejudicial, aún cuando no se encuentre entre las escepciones designadas como dilatorias —Jur. Civ., tom. 7, pág. 326, Ser. 2ª.

Materia criminal—Véase: *Prueba plena*, núm. 2.

1. Matrícula—Inscripciones durante los meses de Agosto, Setiembre y Octubre de 1888.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 136, 323 y 472, Ser. 2ª. Durante el mes de Noviembre de 1887.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 489, Ser. 2ª. Durante el mes de Diciembre de 1888 y los meses de Enero y Febrero de 1889.—Jur. Civ., tom. 7, págs. 19, 52, 174 y 342, Ser. 2ª.

Matrícula—Véase: *Inscripción*, núm. 2—*Registro de comercio*, núm. 2—*Comerciante*, núm. 1.

1a—Esta resolución fué revocatoria de un auto de 1ª instancia en el cual se resolvió que esa escepción debía sustanciarse con lo principal como si se tratara de una escepción *sine actione agis*, fundándose en que la disposición del art. 366 del Cód. Civ., que prohíbe la investigación de la maternidad cuando se trata de atribuir la filiación natural á una mujer casada, no puede promoverse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, porque esa escepción no está comprendida entre ninguna de las enumeradas en los arts. 84 y 95 del Cód. de Proc. que son los únicos casos en que legalmente pueda someterse á la decisión del Juzgado cuestiones de especial pronunciamiento. A esto contestó la Cámara diciendo que el art. 366 del Cód. Civ. citado, al prohibir la investigación de la maternidad tiene por objeto impedir el pleito mismo que haya de suscitarse sobre dicha maternidad. En este caso la defensa que se haga invocando dicho artículo es prejudicial y no puede en manera alguna permitirse que se sustancie conjuntamente con el pleito, so pena de incurrir en la violación de la misma ley. Por consiguiente no se puede dejar el incidente para ser resuelto en definitiva como una escepción *sine actione agis*.





MAT

Matrícula de comercio—Véase: *Inscripción*, núm. 1.

1a. Matrícula de rematadores—Puede concederse a una sociedad, sin que individualmente cada uno de los socios deba solicitarla.—Jur. Com., tom. 2, pág. 221, Ser. 2ª.

1. Matrimonio—La exclusión de la segunda esposa, de la herencia, por ser nulo el matrimonio, no hace cosa juzgada ni basta por sí sola para anular el reconocimiento de la dote hecho en instrumento público.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 266, Ser. 2ª.

2. Matrimonio—La aprobación hecha en el extranjero, de una información para justificar el matrimonio, sin citar a la parte residente en la República, no hace cosa juzgada, ni tiene valor alguno ante los tribunales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 402, Ser. 2ª.

3. Matrimonio—En el juicio de alimentos, no puede darse audiencia al demandado, aún cuando éste desconozca la validez del matrimonio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 379, Ser. 2ª.

Matrimonio—Véase: *Casamiento*, núm. 1—*Información*, núm. 1—*Tutor*, núm. 2.

1b. Matrimonio civil—Los tribunales argentinos no pueden dar por válido un matrimonio civil celebrado ante un

1a—No hay disposición alguna que imponga a los asociados el deber de matricularse individualmente, y por el contrario, el art. 34, inc. 2º, Cód. de Com. ant., prevé el caso de inscripción de cualquiera sociedad comercial y establece los requisitos que deben llenarse, entre los cuales no se encuentra comprendida la exigencia de una inscripción individual.

2—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 5.

3—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 9.

1b—Se trata de un matrimonio celebrado ante un cónsul, el que es nulo, porque la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar en que se ha celebrado. Por nuestras leyes no tienen los cónsules facultad para autorizar matrimonios. Véase Llerena, tom. 1º, pág. 139; Vista del Proc. General Dr. Costa, publicado en *La Nación* del 7 de Abril de 1887. Trátándose de leyes de orden público, como

MAX-MED

cónsul extranjero, aun cuando en la época de su celebración no hubiese existido autoridad de la religión que profesaban los cónyuges.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 357, Ser. 2ª.

Máximum—Véase: *Término medio*, núm. 1.

1. Máximum de la pena—Corresponde siempre que no existan circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 409, Ser. 2ª.

Mayor cuantía—Véase: *Prueba testimonial*, núms. 1 y 2 —*Competencia*, núm. 11.

Mayor de edad—Véase: *Tutor*, núm. 3.

Mayordomos—Véase: *Sueldos*, núms. 1 y 2.

Mayor valor—Véase: *Robos sucesivos*, núm. 1—*Estafa*, núm. 1.

1. Medianería—El reconocimiento de la de un muro divisorio en el convenio de cesación de un condominio, hace improcedente toda acción ulterior, fundada en la diferencia de estensión de los lotes adjudicados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 137, Ser. 2ª.

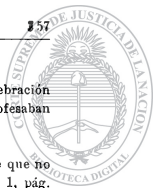
2. Medianería—Ann justificada la propiedad exclusiva de la pared divisoria y la del terreno sobre que esté construida, la ley la supone medianera si existía carga sobre ella consentida por el propietario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 546, Ser. 2ª.

Medicina—Véase: *Jurado de apelación*, núm. 1.

son las que rigen el matrimonio, no es posible prescindir de ellas sin viciar de nulidad el acto.—Arts. 18, 229, 1038 y nota á los arts. 1044 y 1047 del Cód. Civ.

1a—Se dijo que correspondía la aplicación del máximum de la pena establecida en el art. 196 del Cód. Pen. ant., combinado con el 20, inc. 3ª, por resultar mas benigna la que le correspondería por el nuevo Cód., art. 96, y por no existir á su favor ninguna circunstancia atenuante, siendo por el contrario todas agravantes bajo el punto de vista de la criminalidad de la intención, art. 185.

2—Art. 2718, Cód. Civ



**MED—MEN**

1. Médico—Las relaciones de derecho entre éste y su enfermo, no sufren alteración por el hecho de estar incluido el primero en el cuerpo médico de una sociedad de Socorros Mutuos de la cual sea miembro el segundo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 2ª.

Médicos—Véase: *Honorarios*, núm. 12.

Medidas administrativas—Véase: *Perjuicios*, núms. 3 y 4.

Mejoras—Véase: *Poseedor*, núm. 1.—*Tenedor*, núm. 1.—*Vendedor*, núm. 1.

1a. Menor—Natural, su tutor es el único que tiene personería en el expediente para asegurarle alimentos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 339, Ser. 2ª.

2. Menor—Que toma intervención en los autos por haber cesado su incapacidad, puede ejercer en derecho de recusación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 293, Ser. 2ª.

Menor—Véase: *Honorarios*, núm. 1.—*Alimentos*, núm. 4.

1b. Menor de edad—La del reo, y su presentación es—

1—La prueba rendida no fué considerada por la Cámara, como suficiente para acreditar que el médico asistió al enfermo en su carácter de médico de sociedad, ni que hubiese sido tal médico de ella cuando prestó sus servicios. La parte que aduce un hecho nuevo en juicio debe comprobarlo: de la aplicación de este principio surge la procedencia del sumario.

1a—El tutor es el que gobierna la persona y bienes del menor, administrando sus intereses; es el que tiene personería para asignárselos por la vía legal.

2—La facultad de recusar, acordada por el art. 366 del Cód. de Proc., debe interpretarse ampliamente. Además debe tenerse presente, que según se desprende de lo preceptuado en el art. 411 del Cód. Civ., la personalidad del menor mientras dura su minoridad, es enteramente negativa en todos los actos civiles, siendo el tutor quien gestiona y administra solo, sin el concurso del menor y aun prescindiendo de su voluntad.

1b—El delito fué cometido sin premeditación ni alevosía, correspondiéndole la calificación de homicidio simple,—art. 196, Cód. Pen. ant.—Debiendo tenerse en cuenta en la aplicación de la pena, lo dispuesto en el art. 189, incs. 3 y 4, *ibid*.

MEN

pontánea á la autoridad, importan circunstancias que permiten la aplicación del minimum de la pena.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 555, Ser. 2ª.

Menor de edad—Véase: *Homicidio simple*, núm. 7—*Prescripción*, núm. 10.

1. Menores—Cuando existen menores en un contrato de locación, el término para la mora solo puede contarse desde que éstos se encuentren legalmente representados por un tutor: la conformidad de un condómino mayor, no les obliga ante la ley.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 490, Ser. 2ª.

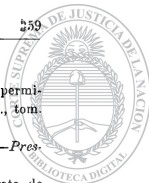
2. Menores—La madre, en ejercicio de la patria potestad, puede dar á los dineros de los menores la inversión que crea conveniente sin perjuicio de la intervención del Juez de la causa.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 424, Ser. 2ª.

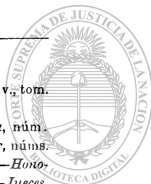
3. Menores—Los fondos de estos deben ser depositados á la orden del Juez de la testamentaria, el tutor solo puede

1—Se trata de la rescisión de un contrato de locación por falta de pago de dos mensualidades, con cuya rescisión el heredero mayor está conforme. Esa conformidad en manera alguna puede perjudicar á los menores que no tienen su representante legal nombrado, porque antes de tener tutor los menores están incapacitados para verificar pagos.—Art. 726 Cód. Civ.—Y porque el heredero mayor, en nada puede perjudicar los derechos de los menores, para quienes deben considerarse como una *res inter alios acta*, art. 399 *ibid*.

2—Se dijo que el dinero lo necesitaba la madre para invertir la mayor parte en la compra de una casa y con el resto poder hacer frente á algunas deudas que se habia visto obligada á contraer para subvenir á los gastos de alimentos y educación de sus hijos. La Cámara dijo que el dinero debía ser entregado, porque la facultad de colocar el dinero de los hijos menores es inherente á los derechos que la patria potestad confiere á los padres: pero debiendo el inferior adoptar las medidas conducentes á la fiel inversión de los dineros, y en cuanto á la suma solicitada para el pago de las deudas debería espresarse previamente cuál es su naturaleza y monto. Esta regla tiene su escepción en el art. 297. Véase Inst., tom. 2, verb. *Administradores*, núm. 1 y su nota.

3—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 423, Cód. Civ.





MEN - MER

disponer de la suma fijada con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 365, Ser. 2ª.

Menores—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 3—*Padre natural*, núm. 1—*Créditos*, núm. 1—*Tutor*, núms. 1, 2 y 3—*Declaratoria*, núm. 3—*Excusación*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 7—*Nulidad*, núm. 6—*Bienes*, núm. 3—*Jueces*, núm. 7—*Derechos posesorios*, núm. 1—*Padres*, núm. 1—*Resolución*, núm. 2—*Deuda*, núm. 1—*Venta*, núm. 2.

1. Mensura—Si la parte obligada á practicarla, no cumple con su obligación, el Juzgado debe nombrar el perito que sea necesario al efecto de su realización.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 16, Ser. 2ª.

2. Mensura—El juicio de mensura de predios urbanos, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 396, Ser. 2ª.

3. Mensura—Y división de predios urbanos, debe ser aprobada, siempre que se haya llevado á cabo de conformidad con el convenio en que se estipuló.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 515, Ser. 2ª.

4. Mensura—De predios urbanos, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 2ª.

Mensura—Véase: *Acción*, núm. 1—*Comprador*, núm. 1—*Mandato especial*, núm. 1.

Mercaderías—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 14—*Reivindicación*, núm. 7—*Sustracción*, núm. 1—*Transferencia*, núm. 1—*Contrato*, núm. 2—*Comisionista*, núm. 1—*Excepción de defecto legal*, núm. 3.

Mercado de frutos—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 7.

1—Se le intimó á la parte obligada, bajo apercibimiento, que cumpliera con la obligación contraída: no habiendo cumplido con lo ordenado se hizo efectivo el apercibimiento decretado—art. 630, Cód. Civ.

2—Última parte del art. 2748 del Cód. Civ.

4—Véase el núm. 2.



MIN—MON

1a. Mina—Cuando de su explotación resultan pérdidas, el acreedor por parte de las utilidades, no puede exigir la continuación de los trabajos, solo le es permitido hacerla por su cuenta y riesgo hasta extinguir la deuda.—Jur. Com., tom. 1, pág. 287, Ser. 2ª.

Minas—Véase: *Arrendamiento*, núm. 2.

Mínimum—Véase: *Homicidio*, núm. 3.

Ministerio de la ley—Véase: *Personas jurídicas*, núm. 1.

Ministerio de menores—Véase: *Juicio*, núm. 2—*Declaratoria*, núm. 3—*Nutidad*, núm. 6.

Ministerio fiscal—Véase: *Información*, núm. 4.

Ministro residente—Véase: *Sentencias*, núm. 1.

Ministerios públicos—Véase: *Inventario*, núm. 2.

Mitad—Véase: *Delitos*, núms. 3 y 5—*Derecho de acusar*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 11.

Modificaciones—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 3, —*Documento privado*, núm. 2—*Contrato*, núm. 3.

1b. Moneda estipulada—Un pagaré estipulado en mo-

1a.—En la venta de una mina se estipuló que el precio sería abonado con los productos líquidos que produjera su explotación. Por este pacto se quiso ligar al acreedor a la suerte del adquirente, porque el contrato de minas es por su naturaleza aleatorio. Si hay abandono de parte del dueño, las ordenanzas de minería enseñan el camino a seguirse, y es, que pueden explotarla por su cuenta hasta reembolsarse de lo que se les debe; lo mismo que se les acuerda a los acreedores hipotecarios y a los aviadores. Si hay pérdidas en la explotación es evidente que no puede exigirse que esa explotación continúe, por que eso importaría llevar a los mineros, de una manera fatal, a mayores sacrificios, sin resultado alguno positivo. Si es un principio de derecho, art. 209, Cód. de Com., que los contratos son ley para los contratantes, debe respetarse el contrato celebrado por el cual se ligan los intereses de las partes contratantes; y un reclamo en las condiciones apuntadas, no puede menos que ser aplazado por los tribunales.

1b.—El pagaré que servía de base a la ejecución fué otorgado en moneda nacional oro, en cuyo caso no se opera la novación de la ley, y el acreedor solamente conserva los derechos y



MON—MOR

neda nacional oro, después de la ley de inconvención, por obligaciones anteriores á esa ley, puede ser cancelado en billetes de curso legal por su valor escrito, pues no importa novación de la obligación primitiva en cuanto á la clase de moneda eu que debía solventarse la obligación.—Jur. Com., tom. 4, pág. 530, Ser. 2ª.

Moneda nacional—Véase: *Contrato*, núm. 9.

Moneda nacional oro—Véase: *Obligaciones á moneda nacional oro*, núm. 1.

1. **Mora**.—Para que exista en el pago de los alquileres, no habiéndose estipulado el lugar en que debía efectuarse, el locador debe justificar que ocurrió al domicilio del locatario exigiendo el pago.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 490, Ser. 2ª.

Mora—Véase: *Acción por daños y perjuicios*, núm. 3—Me-

privilegios que tenía por su crédito primitivo, unidos á las nuevas garantías que pudiese tener.—Art. 984, Cód. de Com. ant.—El nuevo documento es una *renovación* de la obligación, no es una *novación* en la acepción jurídica de la palabra.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Renovación*, núm. 2370.—Si es la misma obligación anterior renovada, y si esa obligación podía cancelarse en billetes por su valor escrito, lo propio tiene necesariamente que suceder con esta segunda obligación. Aun admitiendo que la fecha de la obligación de que se trata, no fuera la del contrato que le dió origen, no por esto podría resistirse la aplicabilidad de la ley de 15 de Octubre de 1885, pues las partes, contratando á moneda nacional oro, bajo el imperio de una ley de curso forzoso destinada á reglar la forma de pago de las obligaciones contraídas en la espresada moneda, cuando hubieran querido escapar al imperio de dicha ley, habrían designado la moneda especial, en su valor específico; pero cuando lejos de hacerlo así, no han empleado sino una denominación genérica, su intención se revela evidentemente como asimismo su propósito de contratar en la forma usual del comercio, cuando no se excluye la moneda legal, y entonces mal puede pretenderse el pago en una especie no estipulada espresamente.

1.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Alquiler*, núm. 158, donde se espone los fundamentos del caso.

MOR—MUE

nores, núm. 1—*Vendedor*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 16—*Vencimiento*, núm. 2—*Contrato*, núms. 2 y 7.

1a. Moratorias—Negadas por no estar inscripto como comerciante el que las solicita, su posterior inscripción, no puede modificar la cosa juzgada.—Jur. Com., tom. 2, pág. 405, Ser. 2ª.

2. Moratorias—Solo pueden concederse al comerciante inscripto en el Registro de Comercio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 407, Ser. 2ª.

1b. Muebles—Los que adornan una casa de familia, se suponen del jefe de ella, y en ningún caso, de los parientes que agregados vivan á sus espensas.—Jur. Com., tom. 1, pág. 352, Ser. 2ª.

Muebles—Véase: *Donación*, núm. 2—*Fallido*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 23.

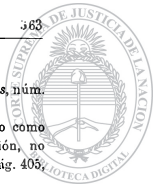
1c. Muerte—Justificada ésta en estado de soltura, la ma-

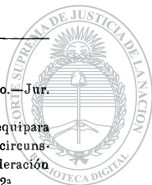
1a—Si se admitiera la moratoria en las condiciones espresadas, vendría á darse efecto retroactivo al acto de la inscripción hecha en una época en que la ley no los consideraba como comerciantes por no haber cumplido con las prescripciones por ella establecidas. Tampoco el Juzgado podría conceder una moratoria negada por el Superior sin atentar contra aquella resolución que reviste todos los caracteres de la cosa juzgada.

2—La moratoria es una protección de la ley mercantil al comerciante, y es sabido que para que esta protección proceda se requiere que el que se ampara á esa ley haya cumplido con los deberes que ella impone.—Art. 32, Cód. de Com. ant.

1b—La Cámara ni el Juez de 1ª Instancia dijeron tal cosa, solo se argumentó diciendo que de la prueba testimonial resultaba que el ejecutado no era poseedor de bien alguno, siendo su madre la que á sus espensas lo mantenía en la propia casa de ella. La tercerista comprobó plenamente su posesión en la que debía ser protegida por la justicia.—Art. 2412, Cód. Civ.

1c—Porque si hubiera hijos serían naturales, y éstos ningún derecho tendrían á la herencia de la abuela natural, los que además no forman parte de la familia.—Art. 3582, Cód. Civ.—Se trata de la herencia que les correspondería á los herederos del muerto en la herencia de sus abuelos naturales.





MUE—MUJ

dre no necesita hacerse declarar heredera del hijo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 430, Ser. 2ª.

2a. Muerte—Del cónyuge, aun cuando la ley equipara este delito al parricidio, admite para el primero circunstancias atenuantes que no permite tomar en consideración en el segundo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 118, Ser. 2ª.

3. Muerte—El que matase á su esposa, debe ser condenado á penitenciaría por tiempo indeterminado.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 291, Ser. 2ª.

Muerte—Véase: *Atentado á mano armada*, núm. 3—*Excepción de legítima defensa*, núm. 3—*Voluntad criminal*, núm. 1—*Informe médico*, núm. 1—*Heridas*, núm. 1—*Infanticidio*, núm. 1.

Muerte del donatario—Véase: *Donación*, núm. 3.

Mujer—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 7.

1. Mujer casada—El contrato de venta por instrumento privado, hecho por ésta, necesita para su validez la ratificación del esposo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

2b. Mujer casada—No puede comparecer en juicio, ni

2a—El art. 211 del Cód. Pen., no admite excusa alguna en el parricidio; pero el 212 que trata, entre otros casos, de la muerte dada al cónyuge, no excluye la admisión de circunstancias atenuantes según se deduce de su tenor.

3—Art. 212 del Cód. Pen. ant., y 94, inc. 2º del vig.

1—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 2.

2b—El art. 57 del Cód. Civ., en su inc. 4º, establece que el marido es el representante de la mujer, y el 188 que le es concordante, prescribe que esta última no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del primero, García Goyena, en su Proyecto de Cód., explica la razón de esta disposición, cuando dice que el marido, jefe y director de la familia, administrador de todos los bienes del matrimonio y responsable de ellos, es á quien compete demandarlos y defenderlos en juicio. Lo contrario sería una perturbación del orden doméstico en lo moral y en lo civil; un contra principio en buena legislación. Además de que la contestación de un pleito es un cuasi-contrato, siendo así que la mujer no pue-



MUJ—MUL

como demandante ni como demandada, sin autorización del marido. El hecho de haber firmado un contrato con su solo nombre no altera la regla.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 537, Ser. 2ª.

Mujer casada—Véase: *Esposa*, núms. 1 y 2.

1. **Multa**—El que pretende fundar su derecho en un documento en que se haya infringido la ley de sellos, debe oblar íntegro el importe de la multa.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 369, Ser. 2ª.

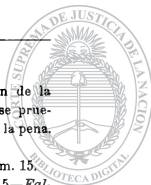
2. **Multa**—Contra la ejecución de la impuesta por infracción á la ley de papel sellado, solo es procedente la escepción de falsedad.—Jur. Com., tom. 1, pág. 32, Ser. 2ª.

3. **Multa**—Mientras no se abone la multa en que han incurrido todos los firmantes, por infracción á la ley de sellos, no puede darse curso á la ejecución.—Jur. Com., tom. 4, pág. 504, Ser. 2ª.

de obligarse civilmente por sí sola. Los términos «estar en juicio» implican necesariamente que la mujer casada, no solo es incapaz para accionar, sino también para defenderse en juicio sin la autorización ó asistencia de su esposo. Los casos de escepción están comprendidos en el art. 191; y si el art. 188 no fuese bien claro y terminante, el Art. 210 descartaría toda duda, pues dice, que la mujer en caso de divorcio, puede ejercer todos los actos de la vida civil, esceptuando el estar en juicio como actora ó demandada, sin licencia del marido ó del juez del domicilio. Igual doctrina se desprende de la Ley 11, tit. 1.ª, lib. 10, de la Nov. Rec. citada por el codificador, la que dice así: «Nin estar en juicio haciendo ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido.» El art. 215 del Cód. Napoleón, requiere para que sea válidamente demandada la mujer casada, que la citación se entienda con el marido: esta es la opinión de todos los comentadores franceses.

1—Los jueces no pueden dar curso á demandas fundadas en documentos en que se haya infringido la ley de sellos, sin que previamente se abone la totalidad, la que debe abonarse por el que los presenta, sin perjuicio de repetir de la otra parte el pago de lo que le corresponde.

3—Véase el núm. 1.



MUL—MUN

4. Multa.—Para que sea procedente la aplicación de la impuesta en un compromiso arbitral, deben recibirse pruebas sobre los hechos en que se funde la aplicación de la pena.—Jur. Com., tom. 2, pág. 101, Ser. 2°.

Multa.—Véase: *Contrato*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 15.

Multas.—Véase: *Delitos*, núm. 2—*Esposa*, núm. 5—*Falsificación*, núm. 6.

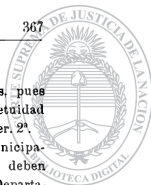
1. Multado.—Por infracción á la ley de papel sellado, que paga por todos los firmantes, subroga al Fisco en sus derechos contra ellos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 32, Ser. 2°.

1a. Municipalidad.—Su intervención ordenada de oficio, es improcedente, si existe un poseedor del inmueble que se trata de vender.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 419, Ser. 2°.

2. Municipalidad.—La de la Capital, al enajenar á perpetuidad un terreno de Cementerio, no puede prohibir que el adquirente lo arriende temporalmente á terceros, pero

1a—Porque si la Municipalidad se considera con derecho á cualquier inmueble, está obligada á deducir su acción en forma.

2—Se comprobó que el propietario alquilaba nichos. lo que implicaba un proceder contrario al espíritu del Reglamento de Cementerios de 1.º de Set. de 1868, cuyo art. 44 declara, que no se reconoce traspaso en el derecho sobre un sepulcro que no provenga de sucesión. Ahora bien, es principio adoptado por nuestra ley civil que el derecho de propiedad, es por su naturaleza, perpetuo, absoluto y exclusivo; los dueños de bóvedas pueden disponer de ellas como quieran, permitiendo entrar féretros de personas determinadas y prohibiéndoselo á otros; pero el resto del Cementerio, pertenece á la Municipalidad, y solo en ese resto ella ejerce los mismos derechos que los dueños de sepulcros sobre éstos, y aun mas lutos. En ese Cementerio, la Municipalidad no está obligada á dar sepultura sino á las personas de que nos habla el art. 45 del Regl. Siendo determinado el terreno vendido por la Municipalidad, no hay principio legal en que pueda apoyarse la pretensión de gozar de mayor área, que sería lo que en definitiva vendría á importar, tener la bóveda llena de cadáveres durante cinco ó mas años, para que una vez transcurrido ese término pasaran á ocupar otro terreno municipal al cual ningún derecho tiene el dueño de la bóveda.

**MUN—MUT**

puede prohibir la traslación de los restos existentes, pues se consideran depositados con la cláusula de perpetuidad que rige la enagenación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 38, Ser. 2ª.

3. Municipalidad—Para que las resoluciones municipales sean apelables ante la Exma. Cámara de lo Civil, deben proceder del Departamento Deliberante y no del Departamento Ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 316, Ser. 2ª.

Municipalidad—Véase: *Denunciantes*, núm. 1.—*Empeñados*, núms. 2, 3 y 4.—*Información supletoria*, núm. 3.—*Posesión*, núms. 5 y 10.—*Prueba*, núm. 6.—*Fuerza ejecutiva*, núm. 1.—*Información*, núms. 3 y 4.—*Reivindicación*, núm. 6.

Muro divisorio—Véase: *Medianería*, núm. 1.

Mutilación—Véase: *Lesiones*, núm. 7.

3—Art. 80, inc. 3º de la Ley Org. de los Trib. de la Cap.; y 52 de la Ley Org. de la Municipalidad.



Negativa—Véase : *Escrituración*, núm. 1 — *Herederos*, núms. 7, 9 y 10.

Negligencia—Véase: *Empresas de tranwavs*, núm. 1—*Deligencias de prueba*, núm. 1—*Ferrocarril*, núm. 2 - *Danos y perjuicios*, núm. 11—*Perjuicios*, núms. 1, 3 y 4—*Ferrocarriles*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 1.

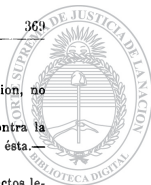
Nombramientos—Véase: *Honorarios*, núms. 1 y 3—*Administrador*, núm. 2—*Cosa juzgada*, núm. 6.

Nombre—Véase: *Escepciones*, núm. 2—*Título*, núm. 2—*Agregación*, núm. 1.

Nómina—Váase: *Testigos*, núms. 3, 4 y 12.

1. Notificación—La de haberse deducido acción contra

1—La misión del Poder Judicial es declarar el derecho que corresponde á las partes con arreglo á las leyes: de aqui resulta, que no hay razón para acudir á los jueces en todo aquello que no tenga por objeto la resolución de una contienda, ó la declaración de un derecho á favor de persona ó personas determinadas, siendo así que no pueden servir de órgano para cuestiones ó propósitos ulteriores que tengan en mira realizar más tarde, pero que no se formulan desde luego recabando una resolución al respecto. La petición expresada en el sumario no puede sustanciarse, porque por su medio no se pretende ni se pide declaración alguna de derecho ni se resuelve ninguna cuestión. Por otra parte, la Cámara tiene declarado en una resolución publicada en el tom. 8, pág. 408, Ser. 2.ª, Jur. Civ., que las notificaciones que se hacen por orden judicial son de las



NOT

un tercero al solo objeto de interrumpir la prescripción, no es procedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 477, Ser. 2ª.

2. Notificación—Al esposo, de una demanda contra la esposa, hace innecesaria la notificación personal de ésta.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 452, Ser. 2ª.

3. Notificación—De la demanda, produce sus efectos legales aun cuando haya sido verificado en un domicilio que no sea el de la parte, siempre que haya llegado á su conocimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 456, Ser. 2ª.

4. Notificación—Cualquiera que sea la forma en que esta

resoluciones, autos ó sentencias que se dicten en juicio, pero no de los actos estrajudiciales de los particulares, á cuya categoría queda reducido el acto espresado en el sumario, desde que no se deduce demanda alguna y que esa diligencia no se halla autorizada por ley como preparatoria del juicio ordinario, ni de ningún otro que tenga una tramitación especial. El art. 3986 del Cód. Civ., establece que la prescripción se interrumpe por demanda; una notificación que tenga por objeto hacer saber que la prescripción queda interrumpida, no puede efectuarse, porque esa petición no importa deducir acción en juicio, pues no puede sostenerse que se demande la interrupción de la prescripción.

2—Siendo casada una mujer, el marido es su representante legítimo. La notificación á la esposa sería un trámite inútil, pues ella no puede estar en juicio por sí ni por medio de apoderado constituido al efecto.

3—El notificado dijo que había recibido cédula de notificación. Conviene tener presente que esa notificación por cédula será válida siempre que se cumpla en un todo con lo prescrito en los arts. 77 y siguientes del Cód. de Proc.

4—El art. 40 del Cód. de Proc., establece que toda notificación será nula si se hiciera en contravención á la ley; pero siempre que resulte de autos haber tenido noticia de la providencia, la notificación surtirá desde entónces todos sus efectos como si estuviese legalmente hecha. El art. 210 dice que la nulidad por defectos de procedimiento, quedará subsanada, siempre que no se reclame en la misma instancia en que se hayan cometido. Según el sumario, la nulidad en este caso debe deducirse antes que quede consentido el auto ó la notificación nula, es decir, dentro del término que la ley acuerda para la apelación. Pero el art. 240 dice, que debe reclamarse en la mis-

NOT

se haga, produce sus efectos legales, siempre que la parte, manifestando haber conocido en tiempo la providencia, no pida la nulidad.—Jur. Civ., tom 8, pág. 315, Ser. 2º.

Notificación—Véase: *Judicialmente*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 4—*Juez exhortado*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 8—*Oblación*, núm. 1—*Embargo*, núm. 8.

1. Notificación personal—De una providencia, implica

ma *instancia*: se entiende por instancia, los diferentes grados en que está dividida la administración de justicia: de aquí resulta que según el texto de la ley, la nulidad puede deducirse en cualquier estado del juicio, siempre que sea en la misma instancia en que se produjo, aunque el auto, providencia ó diligencia esté consentido. Véase el número siguiente.

1—Esta resolución la funda la Cámara en el art. 40 del Cód. de Proc., diciendo que si alguna notificación se omite, las posteriores hacen conocer los procedimientos anteriores, surtiendo aquellos los efectos legales como si estuviesen legítimamente diligenciados. Esta aplicación que se hace del art. 40, es arbitraria á todas luces y debe necesariamente reformarse. El art. 240 también ha sido interpretado así. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Nulidad*, núm. 3; tom. 1.º, verb. *Notificación irregular*, núm. 1804; *Notificación personal*, núm. 1806. En otros casos la Cámara ha dicho que las nulidades por defectos de procedimientos quedan subsanadas si no se reclama de ellas en la misma *instancia*. Véase: verb. *Defectos de procedimiento*; é Inst., tom. 1, verb. *Nulidad*, núms. 1829 y 1836. No comprendo cómo puede la Cámara sentar esta doctrina, siendo tan contraria á la letra y al espíritu de la ley. El art. 40 no puede aplicarse á los casos en que á un litigante se le hubiese notificado una providencia posterior sin que se le hubiese hecho conocer la anterior. Es sumamente fácil, para un litigante el notificarse de una providencia posterior é ignorar por completo la anterior. Así en la prueba por ejemplo: se pueden pedir de contrario numerosas diligencias y hacerle saber á la parte contraria algunas de ella, y otras no, se dirá con esto que esa notificación de la providencia recaída en la última petición, tendrá el efecto de que se tenga por conocidos los precedentes? Evidentemente que no. Pues ello importaría hacer más difícil la situación de los litigantes, poniendo á cada momento en peligro el éxito del pleito. Es por esto que la ley ha dicho en su art. 240, que la nulidad por defectos de procedimiento quedaría subsanada siempre que no se reclame su reparación en la misma *instancia* en que se ha producido. Producida la nulidad por una pro-



NOT.-NUL

el conocimiento de todas las providencias de fecha anterior que existan en el expediente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 2ª.

Notificación personal—Véase: *Notificación*, núm. 2.

Notificaciones—Véase: *Domicilio*, núm. 6—*Término de prueba*, núm. 2.

Novación—Véase: *Privilegios*, núm. 1—*Título*, núm. 3—*Chancelación*, núm. 2—*Moneda estipulada*, núm. 1—*Paguré*, núm. 2.

Nula—Véase: *Sentencia*, núm. 3 y 14—*Nulidad*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 1.

1. Nulidad—Debe ser declarada de oficio, siempre que el Superior al pronunciarse deba hacerlo sobre puntos no resueltos por el Inferior.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 128, Ser. 2ª.

2. Nulidad—Deducida la de una escritura de venta, el embargo preventivo es procedente, pues equivale á la reivindicación del bien que fué objeto del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 2ª.

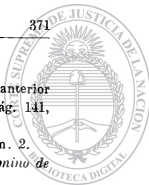
3. Nulidad—De las obligaciones contraídas por la esposa

videncia que no se notifica á la parte, puede reclamarse de esa nulidad mientras permanezcan los autos en la misma instancia, y la notificación de providencias posteriores no puede producir el efecto de subsanar esa nulidad, porque la ley no lo establece. La interpretación que quiere dar la Cámara á estos dos arts. 40 y 240, es arbitraria y debida á su deseo de innovar como si ella fuese el Poder Legislativo.

1—De otra manera el Superior no tendría base para un pronunciamiento en segunda instancia, pues su juicio no puede recenir sino sobre lo que ha sido materia de la sentencia recurrida que debe revocar ó confirmar en todo ó en parte. Cuando esto no es posible la nulidad, de la sentencia se impone de acuerdo con los arts. 216, 217 y 218 del Cód. de Proc., y las Leyes 12 y 16, tit. 22, Part. 3ª.

2—Art. 447, Cód. de Proc.

3—Art. 1042, Cód. Civ.—El Juez está facultado para tomar de las constancias de autos los elementos necesarios para dictar su fallo absolutorio ó condenatorio, según entienda que hay mérito para ello, aun cuando las partes no acierten á esponer las verdaderas





NUL

sin la venia judicial, estando separada del marido, puede ser declarada de oficio si el hecho resulta de las constancias de autos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 220, Ser. 2ª.

4. Nulidad—La sentencia que no contenga decisión expresa sobre el punto materia del litigio, adolece de nulidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 307, Ser. 2ª.

5. Nulidad—Es procedente el recurso siempre que lo sea el de apelación y cualquiera que sea la clase de juicio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 345, Ser. 2ª.

6. Nulidad—Todo acto que afecte intereses de menores, llevado á cabo sin intervención del Ministerio Pupilar, adolece de nulidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 327, Ser. 2ª.

7. Nulidad—El recurso no puede fundarse ante el Inferior.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 444, Ser. 2ª.

razones que justifiquen sus respectivas peticiones. La nulidad alegada por la mujer casada, fundada en su estado de tal, no lo fué al contestar la demanda, sino en el curso del juicio.

4—Art. 216, Cód. de Proc.

5—Se sostuvo en primera instancia por el Juez, que el recurso de nulidad no procede cuando se trata de un juicio sumario, porque el art. 227 del Cód. de Proc. solo lo autoriza cuando se trata de un juicio ordinario. Hay error en ello, pues la nulidad como recurso puede interponerse siempre que haya lugar al de apelación. Si se trata de un juicio ejecutivo, la ley limita, en su art. 505, el derecho á este recurso á los casos espresamente declarados apelables: la nulidad puede deducirse, en este juicio, en todos los casos en que la ley permite la apelación. El art. 489 del mismo Código autoriza el recurso de nulidad siempre que se hubiesen violado las formas del procedimiento. Esta es la doctrina sustentada por los prácticos. Esteves Sagui en la pág. 630 dice, que el litigante podrá acudir á este remedio (la nulidad) cuando se espidiese contra él alguna resolución de las apelables ó revocables: Hevia Bolaños, § 11, juicio ejecutivo, 21, es más explicito, enseña que las sentencias de remate han de cumplirse sin embargo de apelación y nulidad.

6—Art. 494, Cód. Civ.

7—En el sistema de nuestros procedimientos, las providencias de los jueces pueden ser materia de los recursos de reposición, ape-

NUL.

8. Nulidad.—La reproducción en general de los fundamentos del escrito de una de las partes, no es vicio de nulidad de la resolución.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 444, Ser. 2ª.

lación y nulidad. El primero puede ser fundado por las partes; el segundo debe tan solo ser limitado á su interposición, y en cuanto á la nulidad, la ley calla por completo. La razón por la cual se acuerda el derecho de fundar el recurso de reposición, es porque él se dá exclusivamente contra las providencias interlocutorias, y siendo el mismo Juez que las ha dictado, el que puede revocarlas, es evidente que ante él deben hacerse valer los motivos que fundan el recurso: esta razón no es aplicable á las apelaciones y nulidades que solo proceden contra sentencias definitivas ó interlocutorias que causan gravamen irreparable, y debiendo interponerse para ante el Superior inmediato, es evidente ante este mismo ante quien deben hacerse valer las razones que se hayan tenido en vista para provocar su enmienda ó reforma. Es cierto, como se ha hecho notar, que no hay ley expresa que prohíba fundar el recurso de nulidad, pero parece que debiera quedar comprendido en la disposición del art. 227, si se tiene por otra parte presente, que solo podrá deducirse contra los autos ó sentencias de que pueda interponerse apelación: pues si no hay lugar á éste tampoco procede la apelación, debiendo además interponerse juntamente y en el mismo término. Habiendo tenido en cuenta la ley las mismas razones para instaurar el recurso de nulidad que el de apelación, ambos recursos deben estar regidos por el art. 227, si se tiene presente que solo podrá deducirse contra los autos ó sentencias de que pueda interponerse apelación. No habiendo lugar á este recurso, tampoco procede aquél; debiendo interponerse ambos conjuntamente. De consiguiente, es de estricta aplicación el principio: *ubi eadem est ratio eadem est juris dispositio*. El inferior no puede resolver ni entender en el recurso de nulidad, como tampoco puede resolver ni entender en el de apelación: debe limitarse á admitir el recurso elevando los autos á la Cámara para que ella resuelva. Si se permitiera fundar el recurso á una de las partes habría que conferir traslado á la contraria para que la situación de los litigantes sea idéntica, pues así lo exige la igualdad de la defensa en juicio. La diligencia de traslado está tan solo prescripta para el recurso de reposición.

8—Esto es exacto tratándose de autos interlocutorios, pues el art. 227 del Cód. de Proc., solo se refiere á las sentencias definitivas.



NUL

9. Nulidad—Cuando la de la sentencia se funda en declaraciones del Juzgado que la hace justa ó injusta, este recurso es improcedente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 577, Ser. 2ª.

10. Nulidad—Como acción, solo es procedente en los casos y dentro de los términos que la ley permite este recurso.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 141, Ser. 2ª.

11. Nulidad—La validez ó nulidad por vicio en el procedimiento, de las diligencias de prueba tramitadas en país extranjero, se rige única y exclusivamente por las leyes del país en que han sido producidas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

12. Nulidad—No adolece de este vicio, la sentencia que ordena el pago de alimentos por estar justificados los requisitos exigidos por la ley.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 593, Ser. 2ª.

13. Nulidad—Adolece de ella, y debe declararse aun de

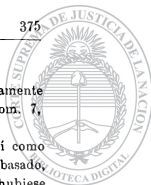
9—Las consideraciones que un Juez aduce como fundamento de su sentencia, podrán ser correctas ó incorrectas, pertinentes ó impertinentes, pero no afectan á su validez.

10—Se dijo de nulidad de una sentencia definitiva. La Ley 2, tit. 26, Part. 3ª, acordaba al litigante la facultad de deducir el recurso de nulidad acompañado del de apelación, ante el mismo Juez que dictó la sentencia. Este recurso podía interponerse durante veinte años desde el día en que la sentencia fuese pronunciada. La ley 2, tit. 17, lib. 4, Rec. Cast.—tit. 18, lib. 11, Nov. Rec.—limitó el término á 60 días, acordando además el recurso de apelación ó de súplica en los casos en que uno ú otro fuese pertinente. El art. 814 del Cód. de Proc., ha derogado todas las leyes y disposiciones anteriores, relativas al enjuiciamiento civil ó comercial, en todo lo que sean contrarias á ese Código. Desde la promulgación de ésta, la nulidad como acción, no puede deducirse sino en los casos y en los términos que él determine. La ley vigente solo la admite como recurso, y debe ser interpuesto juntamente con el de apelación.—Arts 237 y siguientes y 489.—Véase: Inst., tom. 1ª, verb. *Nulidad*, núm. 1818.

12—Se ajusta perfectamente á derecho, la sentencia.

13—El art. 217 dice, que el Juez hará mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión. El art. 237 declara la nulidad de la sentencia que no reuna estos requisitos.





MEN

oficio, toda sentencia en que no se resuelvan separadamente las cuestiones discutidas por las partes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280, Ser. 2ª.

14. Nulidad—La de una cuenta de partición, así como la validez del testamento ológrafo en que se haya basado, debe deducirse ante los tribunales del país en que hubiese fallecido el autor de la sucesión—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

15. Nulidad—La protocolación de un testamento ológrafo, no hace cosa juzgada ni enerva el derecho de todos los que perjudicados por su contenido ó existencia, pretendan se declare su nulidad ó falsedad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 2ª.

16. Nulidad—Los herederos que han intervenido en el litigio, no pueden deducir nulidad á nombre de los que no han sido parte.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 161, Ser. 2ª.

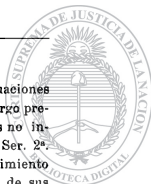
17. Nulidad—De una escritura pública, que la ley permite declarar de oficio, debe ser declarada por el Juez, aunque la parte solo haya aducido la simulación ó la falsedad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 57, Ser. 2ª

14—Art. 3284, Cód. Civ.

15—Siempre que la protocolación hubiese sido hecha en juicio sumario: el que tenga interés en anularlo puede discutir su validez provocando las cuestiones conducentes á este fin.—Bonnier, Tratado de las pruebas, tom. 2, pág. 402, núm. 832—El juicio informativo seguido para protocolar un documento, no perjudica sino á los que en él han intervenido.

16—Nada tiene que ver un heredero para con su coheredero: son personalidades disintas y separadas, cada una, con sus derechos, soportando proporcionalmente sus obligaciones. Ellos no se complementan entre sí. La no intervención de un coheredero, no puede perjudicar á otro. No causándole perjuicio y no teniendo su representación, no puede reclamar en ninguna forma derechos que no le incumben.

17—En este caso la nulidad debe ser declarada no solo en interés de la parte, sino asimismo en el interés de la moral y de la ley.—Art. 973, Cód. Civ.



NUL

18. Nulidad—Aun declarada, la de varias actuaciones por defectos de procedimiento, no se anula el embargo preventivo incluido en ellas, si fué el resultado de otras no incluidas en la nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 460, Ser. 2ª.

19. Nulidad—El Defensor nombrado por fallecimiento ó ausencia del firmante de un documento privado ó de sus herederos, tiene personería para pedir la nulidad del contrato que resultaría si se justificase su autenticidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

20. Nulidad—Adolece de este vicio, la sentencia que no decide las cuestiones sometidas al fallo del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 199, Ser. 2ª.

21. Nulidad—Es improcedente este recurso, cuando la sentencia contiene decisión espresa y precisa sobre el litigio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 342, Ser. 2ª.

22. Nulidad—La falta de conocimiento del mandatario por parte del funcionario que autoriza el mandato, no es causa de nulidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 456, Ser. 2ª.

23. Nulidad—Aun tratándose de un interdicto en que, oponiendo la excepción de falta de personería se haya entrado al fondo, la sentencia dictada debe declararse nula si la

18—Lo anulado se refería al procedimiento posterior al embargo. Debe tenerse presente que la nulidad fué pedida por falta de intervención del Ministerio de Menores, y éste estuvo conforme en que subsistiera el embargo.

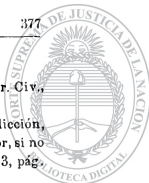
19—Véase: verb. *Instrumento privado*, núm. 3.

20—Art. 217, Cód. de Proc.—En este punto ha reinado la mayor incertidumbre; sin embargo parece que la jurisprudencia tiende á uniformarse en el sentido del sumario. Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 2 y su nota.

21—Arts. 217 y 237 del Cód. de Proc.

22—La ley sole exige del autorizante, que conozca al otorgante del instrumento.

23—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 1 y su nota, y *Excepción de falta de personería*, núm. 7.



NUL

acción fuese dirigida solamente contra la esposa.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 537, Ser. 2ª.

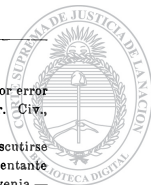
24. Nulidad—La de la sentencia por falta de jurisdicción, no puede ser tomada en consideración por el Superior, si no se hubiese interpuesto el recurso.—Jur. Com., tom. 3, pág. 511, Ser. 2ª.

Nulidad—Véase: *Acción de nulidad*, núm. 1—*Acreeedor*, núm. 1—*Compra*, núm. 1—*Demanda*, núm. 1—*Demandado*, núm. 1—*Error*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 2—*Instrumentos públicos*, núm. 1—*Testamento ológrafo*, núms. 1, 2, 5 y 6—*Jueces*, núm. 3—*Martillero*, núm. 1—*Petición*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 4—*Audiencia*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 4—*Edad*, núm. 1—*Escrituras*, núm. 4—*Cuenta participativa*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 2—*Resolución*, núm. 2—*Testamento*, núms. 2, 5 y 6—*Actos jurídicos*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núms. 3 y 4—*Dinero efectivo*, núm. 1—*Evicción*, núm. 2—*Firma del comprador*, núm. 1—*Matrimonio*, núm. 1—*Simulación*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 8—*Notificación*, núm. 1—*Pagaré*, núm. 1—*Sentencia*, núms. 11, 12, 13 y 14—*Jueces de comercio*, núm. 1—*Validez*, núm. 1—*Vicios*, núm. 2—*Defectos de procedimiento*, núm. 1—*Ratificación*, núm. 1—*Compromiso arbitral*, núm. 1—*Lauda*, núm. 3—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Recusación*, núm. 4—*Síndico*, núms. 2 y 3—*Jurisdicción comercial*, núm. 2.

1. Nulidad de procedimiento—Solo puede ser declara-

24—La nulidad no fué deducida como recurso en 1ª Instancia y los autos fueron elevados tan solo en grado de apelación. La parte no declinó de jurisdicción, y por el contrario consintió el auto en que el Juez se declaró competente.—Arts. 84, inc. 1ª; y 87, Cód. de Proc.

1—La demanda se entabla contra una sola persona, versando la acción sobre un inmueble. Tratado el cuasi-contrato de litiscon-



NUL - NUM

da por haberse violado la ley que lo rige, pero no por error del demandante sobre la persona demandada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 2ª.

1. Nulidad ó validez—De la fianza, solo puede discutirse cuando fuese otorgada por el marido como representante legal, pero no cuando la esposa ha firmado con su venia.—Jur. Com., tom. 2, pág. 175, Ser. 2ª.

Nulo—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2.

Numeración—Véase: *Domicilio*, núm. 2.

Número—Véase: *Error*, núm. 2.

testación, el actor dijo que habia incurrido en error al demandar á una sola persona, siendo así que el terreno materia del pleito pertenecía en condominio á otras dos personas más. Pidió el actor que se declarara nulo todo lo obrado, fundado en ese error sufrido, á lo que no se hizo lugar, porque la nulidad de procedimiento solo procede cuando se cometen irregularidades en la tramitación del juicio, violando las leyes de forma.

1—En este caso no es aplicable el art. 2011, inc. 1ª del Cód. Civ. Para establecer lo contrario seria menester convenir en que la mujer casada en ningún caso puede garantizar obligación alguna ni en favor de tercero.



Obediencia—Véase: *Concubina*, núm. 1.

Objeto determinado—Véase: *Venta*, núm. 2.

1a. Objetos embargados—El hecho de que no pertenecan al ejecutado, no puede ser alegado por éste como excepción.—Jur. Com., tom. 1, pág. 35, Ser. 2ª.

1b. Objetos robados—Cuando sobre la existencia de ellos solo existe la afirmación del damnificado, el delito solo puede calificarse como tentativa de hurto.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 90, Ser. 2ª.

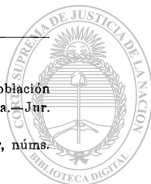
Objetos robados—Véase: *Robos sucesivos*, núm. 1—*Complicidad*, núm. 1—*Insignificancia*, núm. 1.

1. Oblación—El término para hacerla, solo empieza á correr desde la fecha de la notificación en 1ª Instancia de la sentencia de 2ª en que fué ordenada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 47, Ser. 2ª.

2. Oblación—No puede darse por desistido al comprador,

1a—Esta excepción no ha sido prevista ni por el Cód. de Com., ni por el de Proc., y por consiguiente debe rechazarse. La excepción consistía en la manifestación de que los muebles embargados eran los instrumentos de labranza de un tercero.

1b—Porque no concurren los requisitos del art. 190 del Cód. Pen. vig. Como la puerta donde se hallaba el objeto que se dijo haber sido robado, fué abierta con un forzón, correspondía aplicar la pena de ocho meses de arresto.—Arts. 193, inc. 1ª; é inc. 2ª del art. 12.



OBL

sin previa fijación de un término para que haga la oblación bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la compra.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 158, Ser. 2ª.

Oblación—Véase: *Intereses*, núm. 5—*Comprador*, núms. 4 y 9—*Incidentes*, núm. 1.

Oblar—Véase: *Hipoteca*, núm. 2.

1. Obligación—Si en ella no existe convenio expreso sobre intereses, corresponde su abono á estilo de banco, aun cuando el deudor con anterioridad á la demanda haya abonado un interés mayor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 501, Ser. 2ª.

2. Obligación—La prueba de que falta la causa de aquélla, corresponde al deudor; la ley supone siempre su existencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 531, Ser. 2ª.

3. Obligación—La de otorgar una escritura, justificada por cualquier de los medios que la ley permita para probar los hechos, importa una obligación de hacer, y la parte que se niegue á otorgarla debe resarcir las pérdidas é intereses—Jur. Civ., tom. 6, pág. 88, Ser. 2ª.

1—Se ejecutó una letra de cambio, adeudándose los intereses desde el día del protesto—Art. 913, Cód. de Com. ant.—En ausencia de una convención sobre el tipo del interés, corresponde á los jueces determinarlo—Art. 622, Cód. Civ.; 225, 532 y 717, Cód. de Com. ant.—La circunstancia de haber un deudor pagado á su acreedor un interés mayor que el legal, por obligaciones anteriores á las que se ejecutan, no implica que deba continuar abonando ese mismo interés, tanto más cuanto que la obligación ejecutada era, en el caso presente, de fecha posterior al pago de esos intereses, lo que demuestra que estos se abonaron como correspondientes á otra obligación, no á la ejecutada.

2—Arts. 1016, 1017, 1026 y 1028, Cód. Civ.

3—Aunque la ley dice—Art. 1012 del Cód. Civ.—que la firma de las partes es condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, debe tenerse presente que la ley se refiere tan solo á los contratantes, y no á los terceros, cuyos derechos podrían ser fácilmente burlados en el caso contrario, á manera de lo que ocurre respecto de la simulación. El sumario tiene su fundamento en los arts. 1185, 1187 y 1188 del Cód. Civ.

OBL

4. Obligación—La de rendir cuentas, se conceptúa remitida cuando el dueño del establecimiento despidе «ex-abrupto» al dependiente quedándose con todos los papeles y documentos que servirían á dicho objeto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Ser. 2ª.

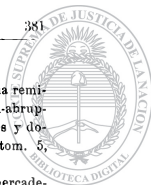
5. Obligación—Para que un simple recibo de mercaderías, pueda causar obligación, debe el acreedor justificar en qué carácter las ha recibido el deudor.—Jur. Com., tom. 4, pág. 450, Ser. 2ª.

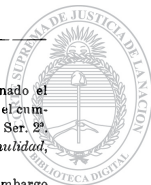
6. Obligación—No habiendo lugar designado para su cumplimiento, puede exigirse en el lugar en que ha sido contraída.—Jur. Com., tom. 4, pág. 11, Ser. 2ª.

Obligación— Véase: *Jurisdicción*, núm. 7—*Quiebra*, núm. 1—*Tribunales de la Capital*, núm. 2—*Chancelación*, núm. 2—*Documentos*, núm. 18—*Domicilio*, núm. 8—*Fiador*, núm. 2—*Hipoteca tácita*, núm. 1—*Autenticidad*, núm. 1—*Demandado*, núm. 1—*Entrega*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 1—*Firma*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 2—*Pago*, núm. 1—*Bienes*, núm. 1—*Recibo*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Nullidad*, núm. 3—*Poder especial*, núm. 1—*Documento privado*, núm. 3—*Contrato verbal*, núm. 3—*Compraventa*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 1—*Cláusula*, núm. 2—*Documento*, núm. 2—*Falsedad*, núm. 3.

4—Si bien es cierto que todo el que administra bienes de otro está obligado á rendir cuenta de su administración—Art. 1909, Cód. Civ.,—cuando se despide á un dependiente en la forma que espone el sumario, consiente por ese mismo acto en relevarlo de esa obligación impuesta por la ley, pues el que ejecuta tal acto hace imposible la rendición de cuentas, por acto propio, al quedarse con todos los antecedentes que pueden habilitar para rendir esas cuentas, quedando estinguida la obligación de hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 627 del Cód. Civ.

6—Art. 783, Cód. de Com. ant.





OBL

1a. Obligación condicional—No puede ser ordenado el pago, mientras el acreedor no justifique judicialmente el cumplimiento de la condición.—Jur. Com., tom. 4, pág. 50, Ser. 2ª.

Obligación condicional—Véase: *Excepción de nulidad*, núm. 1.

1b. Obligación de hacer—Tratándose de ella, el embargo preventivo no procede.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 49, Ser. 2ª.

2. Obligación de hacer—La falta de cumplimiento, no puede fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 115 y 289, Ser. 2ª.

3. Obligación de hacer—Aun cuando las partes hubiesen estipulado que esta obligación debe cumplirse por el Juez, debe darse audiencia al obligado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 44, Ser. 2ª.

4. Obligación de hacer—Cuando no existe lugar señalado para su cumplimiento, el actor puede exigirlo en el lugar del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 48, Ser. 2ª.

5. Obligación de hacer—No basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 396, Ser. 2ª.

Obligación de hacer—Véase: *Boleto*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, núm. 4, 5, 6 y 8.—*Inhibición general*, núm. 2.—*Cláusula*, núm. 2.

1a—Se trataba del cobro de una obligación contruida para cuando el deudor mejorara de fortuna; el cumplimiento de esta condición deberá ser establecido por el acreedor, á fin de que el prudente arbitrio judicial designe el plazo para el pago.—Arts. 620, Cód. Civ., y 706 Cód. de Com. ant.

1b—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núms. 3 y 4.

2—Véase nota precedente.

3—Tal petición importaría siempre una demanda de la que debe correrse traslado á fin de oír al demandado.

4—Porque se trata de una obligación personal. Puede exigirse en el lugar del contrato con tal que, el demandado se halle en él aunque sen accidentalmente.—Art. 4, inc. 4º del Cód. de Proc.

5—Véase el núm. 1.

OBL

Obligación ejecutiva—Véase: *Intereses*, núm. 3.

Obligación primitiva—Véase: *Moneda estipulada*, núm.

1.—*Pagaré*, núm. 2.

Obligaciones—Véase: *Nulidad*, núm. 3.—*Documento privado*, núm. 3.—*Disolución de sociedad*, núm. 1.—*Formas*, núm.

1.—*Embargo preventivo*, núm. 21.—*Contrato bilateral*, núm.

1.—*Mandatario*, núm. 6.

Obligaciones á moneda nacional oro—Las contraidas

1—Se trataba del cobro de una letra girada con anterioridad á la Ley de 1885, del mes de Oct., la cual en su art. 3.º establece que: «Las obligaciones anteriores á la fecha de los decretos mencionados en el art. 1.º (los decretos de inconvención de billetes bancarios) contraidas á moneda nacional oro, podrán ser canceladas en billetes de curso legal por su valor escrito en la forma que él determina. Quedan exceptuadas aquellas contraidas con designación de moneda especial, las cuales podrán ser canceladas en billetes de curso legal por su valor corriente en plaza el día de su vencimiento». Resulta con toda claridad, del precepto de esta ley, que las obligaciones contraidas á moneda especial, pueden solventarse en billetes de curso legal por su valor corriente en plaza; y que para aquellas obligaciones en que la moneda no ha sido convenida específicamente sino tomada genéricamente, se ha autorizado el pago en billetes por su valor escrito. En el caso presente, se dijo de inconstitucionalidad de la ley dictada por el Congreso, fundándose al efecto en que esa ley es violatoria de la propiedad privada, garantida por el art. 17 de la Const., y en que entre las facultades atribuidas por el art. 67 al Congreso, no está designada la de dictar leyes de curso legal. A esto se contesta diciendo, que no hay violación á la propiedad privada cuando no existe un derecho de propiedad atacado. Seria necesario comprobar ante todo que la obligación de pagar en *moneda nacional oro*, da derecho á cobrar en *moneda nacional oro sellado*, para que se diga que se ha violado el derecho de propiedad. Pero es evidente que aquella cláusula, no revela tal intención, pues la cláusula puesta en una obligación, de que ella será solventada en moneda nacional oro, implique que el deudor se obliga á pagar en oro acuñado, en especie metálica. No puede decirse que los contratantes hayan tenido racionalmente la intención de dar cumplimiento á la obligación pagando en oro sonante y contante, cuando ella ha sido contraida, con anterioridad á la ley. Varias razones militan para pensar así. Ante todo no debe olvidarse, que por una



OBL

antes de la Ley de Inconversión, pueden ser canceladas en billetes de curso legal por su valor escrito—Jur. Com., tom. 2, pág. 433, Ser. 2.^a

Obligaciones á moneda nacional oro—Véase: *Pagaré*, núm. 2.

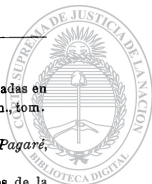
1. Obligaciones á oro sellado—Contraídas antes de la ley de inconversión, deben ser abonadas en moneda metálica ó en billetes de curso legal al cambio del día.—Jur. Com., tom. 4, pág. 458, Ser. 2.^a

Obligaciones personales—Véase: *Competencia*, núm. 5.

Obligado—Véase: *Excepciones*, núm. 6.—*Poder especial*, núm. 1.—*Condición resolutoria*, núm. 1.—*Obligación de hacer*, núm. 3.

ley del Congreso, las emisiones de los bancos, era moneda nacional oro, y que esta frase era empleada según el uso común en todas las obligaciones de comercio. Y decir que al contraer una obligación en esta forma, se entendía que ella debía solventarse en especie metálica bajo el imperio de la ley de curso legal, sería dar á la convención una interpretación violenta é imponer al deudor una obligación que jamás estuvo en su mente el contraer. Y si se tiene en cuenta que el deudor que contrae una obligación en esta forma recibe billetes, no metálico, sería contrario á la equidad, imponerle la obligación de devolver metálico acuñado por los billetes recibidos. El art. 296, inc. 7 del Cód. de Com. ant., es de estricta aplicación, pues en caso de duda la cuestión debe resolverse en favor del deudor. Así lo ha comprendido la ley al consignar el art. 3.^o Concurrén en este sentido las disposiciones del Art. 861 del Cód. de Com. ant. y 619 del Cód. Civ.; Leyes 12 y 13, tit. 3, lib. 1.^o del Digesto: Ley 18, tit. 1.^o, lib. 10, Nov. Rec. La S. C. de los Estados Unidos resolvió asimismo como constitucional la ley de 25 de Enero de 1862 en los casos de Nox contra Lee, y en el de Parker contra Davis, citados por Wallace, en su obra titulada Reports, tom. 11, pág. 682. La S. C. N. de nuestro país ha resuelto implícitamente esta cuestión. Véase: Causas XI y XII, tom. 20, Ser. 2.^a, págs. 298 y 304.

1—La jurisprudencia uniforme de los tribunales ha establecido que las obligaciones contraídas á oro sellado deben cumplirse en especie metálica siendo esta la moneda especial á que se refiere la ley de 13 de Oct. de 1885. Véase: verb. *Obligaciones á moneda nacional oro*.



**OBR—OMI**

Obra determinada—Véase: *Impuesto*, núm. 2.

Obra nueva—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 4.

1. Obras—Concluidas y entregadas con arreglo á un contrato, cesa toda responsabilidad por parte del contratista, que no sea por defectos de construcción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 66, Ser. 2ª.

Obras—Véase: *Regulación*, núm. 3.

1a. Ocultación de bienes—El Juzgado no puede negar la escarcelación del fallido bajo fianza, aun cuando existan indicios de culpabilidad por ocultación de bienes.—Jur. Com., tom. 4, pág. 19, Ser. 2ª.

Obras necesarias—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 10.

Odio—Véase: *Providencias*, núm. 1.

Ofensas—Véase: *Provocación*, núm. 1.

1. Ofensa grave—El hecho de poner la mano en el rostro, tiene este carácter y no constituye una simple provocación.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 178, Ser. 2ª.

1b. Ofensas graves—Estas y la embriaguez, aun voluntaria, como circunstancias atenuantes, permiten aplicar la pena de tres años de presidio.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 178, Ser. 2ª.

Oficina—Véase: *Testigos*, núms. 3 y 5.

Oficina pública—Véase: *Instrumentos públicos*, núm. 3.

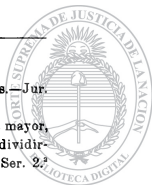
Omisión—Véase: *Arbitros-arbitradores*, núm. 1.

1c. Omisión—La cometida en la entrega de los sellos, solo

1a—Es un derecho acordado al fallido por el art. 1549 del Cód. de Com. ant. Para conceder la escarcelación no puede traerse á colación los antecedentes del concursado, pues ello importaría un pre-juzgamiento en el incidente de calificación de la quiebra.

1b—Art. 97, Cód. Pen. vig.

1c—El art. 118 del Cód. de Proc. establece, que á la parte que solicita la prueba incumbe urgir su diligenciamiento. Si no se suministra los sellos para la cédula de citación de los testigos, no se cumple el mandato de la ley



OMI—OPE

puede imputarse á la parte que pidió las diligencias.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 109, Ser. 2.^a

1a. Omisión culpable—Y caso fortuito ó de fuerza mayor, si concurren ambos extremos, el lucro cesante debe dividirse equitativamente.—Jur. Com., tom. 1, pág. 393, Ser. 2.^a

Omisión culpable—Véase: *Laudo*, núm. 1.

Omisión de palabras—Véase: *Testamento ológrafo*, núm. 5.

Omisiones—Véase: *Defectos de procedimiento*, núm. 2.

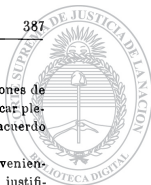
1b. Operaciones de bolsa—Las encomendadas á los agentes, se rigen única y exclusivamente por los reglamentos de aquel establecimiento y por las disposiciones del mandato.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 2.^a

2. Operaciones de bolsa—Para que las disposiciones

1a—Se trata del daño causado por la inexecución del contrato, siendo la causa de esa inexecución la omisión culpable y el caso fortuito ó de fuerza mayor. Se declaró que el demandado era tan solo responsable del daño proveniente de omisión culpable. Es evidente que debía descontarse el daño causado por otras causas, como ser las provenientes de caso fortuito ó fuerza mayor.

1b—Véase: verb. *Agente de Bolsa*, núm. 2

2—El progreso mercantil ha hecho que las operaciones de bolsa produzcan acciones exigibles en juicio. Si la parte aduce la excepción de juego, está en el deber de comprobarla acabadamente, porque produce un argumento de excepción al principio general establecido por la legislación que consagra la libertad económica de comprar y vender consagrada por el art. 14 de la Const. Nac. El art. 515 del Cód. de Com., declara mercantil la compraventa de una cosa mueble para revenderla ó alquilar su uso. La circunstancia de que una operación tenga el carácter de una especulación no le quita al acto su carácter de mercantil, por el contrario, es condición esencial de la comercialidad del acto, pues sin ese propósito dejaría de ser comercial—Massó, núm. 139; Alauzet, núm. 2912; Bedarride, De la jurisdicción comercial, núms. 201 y 202. La especulación á la alza ó baja de las especies metálicas, no es ilícita, porque el art. 1066 del Cód. Civ. establece que ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuese expresamente prohibido por la ley; y el art. 1071 dice que el ejercicio de un derecho



OPE—ORO

prohibitivas del juego sean aplicables á las operaciones de bolsa, el que opone la escepción de juego deje justificar plenamente que ese fué el contrato celebrado de común acuerdo de partes.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 2.^a

3. Operaciones de Bolsa—Para que las deudas provenientes de éstas se conceptúen juego, deben concurrir y justificarse todas las circunstancias que le dan ese carácter según la ley.—Jur. Com., tom. 4, pág. 342, Ser. 2.^a

Operaciones—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 1.—*Sociedad*, núm. 4.

Oposición—Véase: *Documentos*, núm. 3.—*Heredero*, núm. 4.

Orden—Véase: *Agregación*, núm. 1.

Orden público—Véase: *Efecto retroactivo*, núm. 1.

Ordenanza municipal—Véase: *Juicio ordinario*, núm. 1.

Oro—Véase: *Jurisdicción*, núm. 7.—*Deudor*, núm. 1.

Oro sellado—*Obligaciones á oro sellado*, núm. 1.

propio, no puede constituir como ilícito ningún acto. El juego, cuando es de azar, carece de acción eficaz en juicio, por razones de utilidad social, pero no por eso deja de producir efectos civiles, como lo demuestran los arts. 515, inc. 5.^o, 517, 518 y 2063 del Cód. Civ. Una escepción á la eficacia de los contratos, debe como toda escepción, ser interpretada restrictivamente, y en manera alguna debe ampliarse á otras convenciones que si bien tienen alguna conexidad con el contrato esceptuado, no participan de las condiciones que lo caracterizan específicamente. Es por esto que el art. 1.^o, tit. 2.^o del digesto dice: «Exceptio a regula firmat regulam in aliis.» Para que haya juego, es necesario, según los arts. 2052 y 2060, una convención directa y espresa de jugar. En la especulación no existe ese elemento. Véase: verb. *Especulación*, núm. 1.

3—Véase notas precedentes.



Padre—Véase: *Juicio*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 7—*Madre natural*, núm. 3.

Padre común—Véase: *Tutor*, núm. 2.

1. Padre natural—Está obligado á abonar los honora-

1—Este principio fluye lógicamente de la naturaleza íntima del juicio, porque de otra manera el derecho de los hijos podría depender de la voluntad del padre, pues éste tiene por la naturaleza y por la ley la obligación de alimentar y defender á sus hijos. Cuando un padre desconoce á sus hijos y un tercero con personería legal bastante hace triunfar el derecho de sus hijos, es como si éste se hubiese sustituido á aquél. La sentencia que declara los derechos del hijo, implica el deber del padre de sufragar los gastos que ese reconocimiento haya ocasionado. Si por la sentencia no se consagra la filiación, el presunto padre usó de su derecho al defenderse, no así en caso contrario, pues la declaración de la paternidad lleva consigo los deberes inherentes de defender á los hijos. Una sentencia, no crea la filiación, la declara. Los arts. 58, 62, 264, 265, 325, 328, 330 y 331 del Cód. Civ., consagran estos principios. Los servicios prestados por el representante de los menores, revisten el carácter de gastos necesarios y útiles, ya sea que tenga por objeto conseguir para ellos el estado civil ó ya sea que se trate de los alimentos que el padre les hubiese negado. Cuando un abogado patrocina á un menor, se hace su acreedor por el monto de sus honorarios, y siendo acreedor de los menores lo es del padre de éstos: es evidente que entran en la categoría de litisexpensas para los que los han recibido, y en este sentido el abogado tiene derecho á reclamar su pago directamente del padre que es el que está obligado en primer término á prestarlos.—Art. 367, Cód. Civ.

PAD—PAG

rios y gastos que los menores hayan causado para conseguir judicialmente su reconocimiento, aunque en la sentencia que declaró la filiación nada se haya resuelto sobre las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 544, Ser. 2ª.

1a. Padres—Mientras no sean privados de la patria potestad, son los únicos que tienen derecho para administrar los dineros de los menores.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 308, Ser. 2ª.

Padres—Véase: *Hijos*, núm. 1.

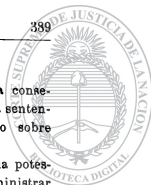
1b. Pagaré—Su cesión, después de vencido, solo puede hacerse por escritura pública, bajo pena de nulidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 130, Ser. 2ª.

2. Pagaré—Estipulado á moneda nacional oro, después de la ley de inconversión, por obligaciones anteriores á la ley, puede ser cancelada en billetes de curso legal por su

1a—De acuerdo con lo jurisprudencia sentada en el caso que corre publicado en el tom 6, pág. 363, Ser. 1ª de los fallos de la Cámara de lo Civ.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Patria potestad*, núms. 1 y 4.

1b—También puede hacerse por acta judicial cuando el documento ha sido presentado en juicio —Arts. 1454 y 1455, Cód. Civ.

2—La ley de 15 de Octubre de 1885, es terminante en su texto. Según ella, las obligaciones contraídas á moneda nacional oro con anterioridad al decreto del 9 de Enero, pueden solventarse en billetes de curso legal por su valor escrito. De que la fecha de la obligación debe retrotraerse á la del contrato que le dió origen es evidente: 1º Porque la intención de las partes debe ser tenida en cuenta como fundamento importante de juicio art. 296, Cód. de Com. ant.—2º Por que la ley es terminante cuando establece que el deudor que ha entregado billetes ó letras por su deuda, el derecho del acreedor no sufre modificación alguna, sino cuando resulta del nuevo acto una extensión de sus garantías—art. 948, *ibid.*— En el presente caso, no resultaba de los términos del pagaré un aumento de garantía para el acreedor. Por otra parte, cuando se contrata, bajo el imperio de una ley de curso forzoso y las partes quieren escapar á su imperio, designan la moneda en su valor específico: pero si así no lo hacen, y designan una denominación genérica, se revela de una manera evidente su intención y su propósito de con-



PAG

valor escrito, pues no importa novación de la moneda en la obligación primitiva.—Jur. Com., tom. 4, pág. 530, Ser. 2ª.

3. Pagaré—Cualesquiera que sean las cuestiones que se susciten al ejecutarlo, el deudor está obligado al pago de intereses desde la fecha del protesto.—Jur. Com., tom. 3, pág. 219, Ser. 2ª.

4. Pagaré—Es Juez competente, para la ejecución de un pagaré que no tiene lugar designado para su pago, el que tenga jurisdicción en el lugar donde ha sido firmado.—Jur. Com., tom. 3, pág. 568, Ser. 2ª.

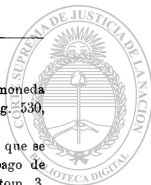
Pagaré—Véase: *Agregación*, núm. 1—*Chancelación*, núm. 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núms. 5 y 8—*Excepción de litispendencia*, núm. 7—*Jurisdicción comercial*, núm. 3.

Pagaré á la orden—Véase: *Protesto*, núm. 2—*Endoso en blanco*, núm. 2.

tratar en la forma usual del comercio sin escluir la moneda legal, y entonces mal puede pretenderse que el pago se haga en una especie no estipulada espresamente. Si hay duda respecto á la moneda en que debe verificarse el pago, la interpretación correcta y legal es aquella que consagra su liberación—art. 296, inc. 7º citado—la que debe consistir en el presente caso en la exoneración de la diferencia entre el valor escrito del billete y el del oro efectivo y sonante.

3—Art. 912 y 913, Cód. de Com. ant.

4—Art. 783, inc. 2º, Cód. de Com. ant. y 606 del vigente. Aunque el Cód. de Proc. establece en su art. 4º, que cuando se ejerciten acciones personales será Juez competente, siempre que no haya lugar designado para el cumplimiento de la obligación, á elección del demandante, el domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente; esta disposición, no tiene aplicación cuando se trata de aplicar el Cód. de Com., pues como lo dice el mismo Cód. de Proc. en el art. 813, sus disposiciones son aplicables mientras no se opongan á la ley mercantil. El Cód. de Com. establece terminantemente la jurisdicción competente para entender en esos juicios, y sus preceptos no pueden modificarse por el Cód. de Proc.





PAG

1a. Pagaré endosado—El protesto solo concede fuerza ejecutiva contra el deudor á quien se protestó, pero no contra los endosantes á quienes no se intimó el pago de la obligación.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 210, Ser. 2ª.

1b. Pago—Solo corresponde el de intereses desde la fecha en que el demandante exija judicialmente, aunque la obligación tenga fecha anterior.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 501, Ser. 2ª.

2. Pago—Para que el acreedor sea obligado á recibir en pago deudas de terceros, el deudor debe justificar que los préstamos fueron hechos por cuenta y orden de aquél.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 506, Ser. 2ª.

3. Pago—El comitente que se limita á oponer la escepción de pago á la demanda del corredor, sin desconocer su veracidad, debe abonar su importe, sin que aquél esté obligado á justificar en autos el pago hecho á terceros.—Jur. Com., tom. 4, pág. 342, Ser. 2ª.

Pago—Véase: *Consignatario del buque*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 2—*Escepción de pago*, núm. 1—*Tribunal*

1a—Para que las letras y pagarés á la orden revistan carácter ejecutivo, es necesario que hayan sido protestados á los aceptantes, girantes y endosantes. Si la obligación se protesta contra algunos de éstos dejándose de verificar contra los otros, se incurre en una omisión, siendo sus consecuencias solo imputables al acreedor.—arts. 841, 843, 895 y 901, Cód. de Com. ant.—Esos documentos solo traen aparejada ejecución contra aquellos á quienes han sido protestados.—Art. 465, inc. 6ª, Cód. de Proc.

1b—Se dijo en la sentencia que «el título con que se ha instruido la demanda no contiene estipulación sobre intereses, en cuyo caso se deberían desde la fecha del protesto—art 913, Cód. de Com. ant.—Pero como el demandante los reclama solo desde la fecha de la demanda, que es posterior, con mayor razón deben correr desde entonces.» Cuando no hay interés estipulado, corresponde á los jueces determinarlo—art. 622, Cód. Civ.

3—Véase: verb. *Escepción de juego*, núm. 1.



PAG

arbitral, núm. 1—*Entrega*, núm. 1—*Acción pauliana*, núm. 1—*Bienes hereditarios*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 3—*Costas*, núms. 11, 12 y 16—*Empedrados*, núms. 2 y 4—*Gasto causídico*, núm. 1—*Honorarios*, núms. 3, 9, 11 y 13—*Pagaré endosado*, núm. 1—*Deuda*, núm. 1—*Obligación condicional*, núm. 1—*Poseedor*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 6—*Contrato*, núm. 9—*Fiador*, núm. 1—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6—*Mora*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 1—*Letra de cambio*, núm. 1—*Indemnización*, núm. 4—*Fianza de escarcelación*, núm. 1—*Giro*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 16—*Chancelación*, núm. 2—*Quiebra*, núm. 8—*Pagaré*, núms. 3 y 4—*Alquiler*, núms. 1 y 2—*Estafa*, núm. 4—*Cesación de pagos*, núm. 3—*Intereses*, núm. 6.

1a. Pago parcial—No puede fundar la escepción que la ley reconoce como enervante de una ejecución.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 320, Ser. 2ª.

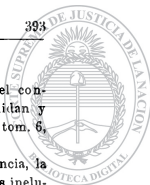
2. Pago parcial—Que no hubiese sido opuesto como escepción en el juicio ordinario, no puede serlo en el ejecutivo para el cumplimiento de la sentencia, ni puede fundar la exigencia de fianza.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 130, Ser. 2ª.

1b. Pago por consignación—Para declarar su validez, los

1a—Librado mandamiento el ejecutado dió á *embargo* la suma reclamada, no la dió en *pago*.

2—Porque siempre le queda á salvo á la parte el derecho para repetir en juicio ordinario lo pagado indebidamente. No puede fundar la exigencia del juicio ordinario de que nos hablan los arts. 501 á 504 y 523 á 541 del Cód. de Proc. porque ese juicio ordinario se ha realizado ya con anterioridad, pasando en autoridad de cosa juzgada sin que pueda por consiguiente volverse sobre él.

1b—La consignación fué hecha á efecto de que se declarara judicialmente la validez del pago hecho en esa forma. El pronunciamiento debe recaer únicamente sobre ese punto, sin que las demás cuestiones puedan ser materia de resolución, pues el art. 216 del Cód. de Proc. así lo prescribe—Ley 16, tit. 22, part. 3.—«Afincada

**PAG—PAP**

tribunales solo pueden conocer sobre la existencia del contrato independientemente de las razones que lo invalidan, y que deben ser materia de otra resolución.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 294, Ser. 2°.

2. Pago por consignación—Declarada su procedencia, la condenación en costas de la parte que le dió origen es ineludible.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 294, Ser. 2°.

Pagos—Véase: *Cesación de pagos*, núms. 1, 2, 3, y 4.

País extranjero—Véase: *Regulaciones*, núm. 1—*Exhortos*, núm. 1 y 2.

1a. Paliza—Su aplicación, importa no solo un ataque á la persona, que puede poner en peligro su vida, sino también un ataque á sus derechos de hombre, y hace procedente la escepción de legítima defensa—Jur. Crim., tom. 1, pág. 260, Ser. 2.ª

Papel moneda—Véase: *Contrato*, núm 9.

mente deue catar el judgador, que cosa es aquella sobre que contienden las partes ante el en juizio: e otrosi en que manera fazen a demanda, e sobre todo, que averiguamiento ó que prueua es fecha sobre ella: e entonce deue dar juyzio sobre aquella cosa». La parte contraria no negó la existencia del contrato en virtud del cual se hacia la consignación ni se negó tampoco á recibir las sumas que espresaba el contrato. La oblación procedía del precio de compra de un inmueble que resultó no pertenecer al vendedor y éste dijo que estaba dispuesto á resarcir los perjuicios que la rescisión del contrato podría traer al comprador, pero no podía recibir el precio de venta de una cosa que no le pertenecía. Esta es cuestion completamente agena al acto de la consignación: si el contrato de compraventa es nulo ó válido, es cuestion que debe discutirse en otro juicio, porque el contrato existe mientras su nulidad ó rescisión no sea declarada, las que no se puede discutir en la consignación.

2—Art. 760, Cód. Civ.

1a—El art. 81, en su inc. 8°, Cód. Pen. vigente, exime de toda pena al que procede en defensa de su persona ó de sus derechos. Es evidente el derecho que asiste á una persona de no dejarse apalar; aquel á quien se apala tiene derecho á resistir el ataque.



PAP—PAR

1. **Papel sellado**—Toda obligación que para su validez requiera aprobación judicial, no está sujeta al impuesto de papel sellado hasta que el Juez la preste.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 43, Ser. 2ª.

2. **Papel sellado**—El hecho de haberse otorgado la obligación en papel sellado de la Provincia, no impide exigir su cumplimiento en el lugar en que ha sido fechada, si no tiene lugar designado para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 2ª

Papel sellado—Véase: *Contrato*, núm. 1—*Libros*, núm. 1.—*Trasferencia*, núm. 1—*Multado*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 15.

Papeles de comercio—Véase: *Vales al portador*, núm. 1.

1a. **Pared divisoria**—Aun justificada su propiedad exclusiva y la del terreno sobre que esté construida, la ley la supone medianera "si existía carga sobre ella consentida por el propietario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 546, Ser. 2ª.

Pared medianera—Véase: *Acción de daños y perjuicios*, núm. 1.

Pariente—Véase: *Curador*, núm. 3.

1b. **Parientes**—Los del insano, solo tienen personería

1—Una vez aprobada la obligación se repone el sello correspondiente, según la escala de valores.

2—Se trataba de un pagaré. Cuando no se ha designado lugar para el pago se supone implícitamente estipulado el del contrato—Art. 783, Cód. de Com. ant. y 606 del vigente.—El hecho de que sea otorgado en papel sellado de la Provincia, no puede en manera alguna hacer variar esa presunción legal, mucho menos, si se tiene presente que esto sucedía cuando recién se federalizó la Capital, época en que reinaba una verdadera confusión.

1a—Véase: verb. *Medianería*, núm. 2.

1b—En el juicio de insania debe observarse estrictamente el procedimiento marcado en el tít. X del Cód. Civ.—Arts. 140 y siguientes—Debe decretarse un examen médico legal y nombrarse un curador provisorio al incapaz á fin de que lo defienda y represente en

PAR

para reclamar la curatela definitiva después de la declaración judicial.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 124, Ser. 2ª.

2. Parientes—Más cercanos en grado, excluyen á los más remotos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 77, Ser. 2ª.

3. Parientes—Del reo, carecen de personería para intervenir en el juicio seguido en rebeldía si no fuese para justificar el impedimento de aquel para comparecer.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 178, Ser. 2ª.

Parientes próximos—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 6—*In-sana*, núm. 2.

Parte indivisa—Véase: *Acreeedor*, núm. 2.

Partición—Véase: *Juez*, núm. 1.

Partición definitiva—Véase: *Herederos*, núm. 4.

1. Participación—La que se acuerda á un dependiente en las utilidades, no basta para transformar la locación de

juicio, siendo parte esencial el Ministerio de Menores é Incapaces—Arts. 142 y 147, *ibid*—Ese nombramiento de curador provisorio es única y exclusivamente para el juicio de demencia. El Cód. deja la elección al recto criterio judicial, fundándose en la necesidad de que el nombramiento recaiga en persona imparcial y estraña á la familia que denuncia como demente á uno de sus miembros. Provocada la declaración de demencia por uno de los autorizados en el art. 144, solo son parte el curador provisorio y el Ministerio de Menores, pues así se desprende de lo dispuesto en el tit. X citado.

2—Sin que se atienda al origen de los bienes que componen la herencia.—Arts. 3546 y 3547, Cód. Civ.

3—En el antiguo derecho, los parientes podían comparecer en juicio civil, los unos por los otros, sin poder en forma, mediante caución de *rato et grato*. Este procedimiento no era ni es aplicable á los juicios criminales en las que el reo citado por edictos está obligado á comparecer en persona. Solo están autorizados los parientes á presentarse, como lo dice el sumario, á fin de excusar la ausencia de los suyos cuando éstos son citados. Si se permitiera á los parientes inmiscuirse en los juicios de sus parientes, se trabaría la sécula regular del juicio. La calidad de pariente no obstaría á que esa confusión se produjese.

1—Véase verb. *Dependiente*, núm. 2. ✓



**PAR-PAT**

servicios en contrato de sociedad.—Jur. Com., tom. 1, pág. 315, Ser. 2ª.

Participes—Véase: *Delito*, núm. 2.

Partida—Véase: *Informe*, núm. 2.

Partida de matrimonio—Véase: *Filiación legítima*, número 1.

Partidas—Véase: *Libros de comercio*, núm. 1.

Partidas determinadas—Véase: *Libros de comercio*, número 6.

1a. Partidas parroquiales—Si bien justifican el estado civil y corresponde al que las impugna probar su falsedad, sin embargo, cuando son el resultado de una información carecen de valor para conceder derechos civiles y el que las impugna queda exonerado de producir prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 35, Ser. 2ª.

2. Partidas parroquiales—Asentadas en virtud de información posterior al acto, no producen efectos civiles, si se contradice la verdad del acto que pretende justificarse.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 402, Ser. 2ª.

Paricidio—Véase: *Muerte*, núm. 2.

Pasaje—Véase: *Servicio público*, núm. 1.

Pasajeros—Véase: *Empresas de tramways*, núm. 1—*Ferrocarril*, núms. 1 y 2—*Perjuicios*, núms. 2, 3 y 4—*Daño* núm. 1.

Patente—Véase: *Honorarios*, núm. 11.

Paternidad—Véase: *Confesión*, núm. 1.

Paternidad imputada—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

1b. Patria potestad—El incidente sobre pérdida de ella,

1a—Véase: verb. *Información*, núms. 1 y 2; Inst., tom. 2, verb. *Partidas parroquiales*.

2—Véase nota precedente.

1b—Se pedin la entrega de una suma de dinero perteneciente á los menores, á lo que no se hizo lugar porque se seguía un juicio sobre

PAT—PEN

permite al Juzgado suspenderla, mientras se resuelva definitivamente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 60, Ser. 2ª.

Patria potestad—Véase *Casamiento*, núm. 1—*Madre*, núm. 1—*Padres*, núm. 1—*Bienes*, núm. 4—*Menores*, núm. 2.

1a. Pena—Ante la coexistencia de circunstancias atenuantes y agravantes, debe aplicarse el término medio si la pena es divisible.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 210, Ser. 2ª.

2. Pena—La concurrencia de varias circunstancias atenuantes, permite la aplicación del *mínimum*.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 560, Ser. 2ª.

3. Pena—Cuando se aplican las disposiciones del anterior Cód. Penal, no debe computarse como pena la prisión preventiva.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 557, Ser. 2ª.

Pena—Véase: *Estafa*, núms. 3 y 4—*Cámara de Apelaciones*, núm. 1—*Circunstancias agravantes y atenuantes*, núm. 1—*Atentado á mano armada*, núm. 1—*Crímenes*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 13—*Robos sucesivos*, núm. 1—*Tentativa*, núm. 2—*Valor del robo*, núm. 2—*Ebriedad*, núm. 4—*Calumnia*, núm. 1—*Confesión*, núm. 6—*Delito*, núms. 5 y 6—*Fuigido*, núm. 3—*Injuria*, núm. 1—*Insignificancia*, núm. 1—*Ofensas graves*, núm. 1—*Provocación*, núm. 5—*Término medio*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núms. 2, 6 y 7—*Indemnización*, núm. 4.

Pena de muerte—Véase: *Acusador*, núm. 2—*Presunciones graves*, núm. 3—*Asesinato*, núm. 1—*Presunciones*, núm. 1.

Pena determinada—Véase: *Contrato de locación*, núm. 3—*Delito*, núm. 6.

pérdida de la patria potestad, lo que es perfectamente correcto, pues así lo aconsejaba el criterio legal, siendo el deber primordial de los jueces velar por los intereses de los menores como buen padre de familia.

1a—Véase: verb. *Circunstancias atenuantes y agravantes*, núm. 1.

3—Art. 171 del Cód. Penal ant. Solo se computa la prisión preventiva cuando ella excede de seis meses.



**PEN—PER**

Pena impuesta—Véase: *Fallido*, núm. 5.

Pena indivisible proporcional—Véase: *Ley vigente*, número 1.

1a. Penas—Cuando la acumulación de varias, sobrepasa al máximo que la ley fija para el delito mayor, debe aplicarse la que corresponde á esta con prescindencia de las demás.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 174, Ser. 2ª.

Penitenciaria—Véase: *Delitos*, núm. 2—*Muerte*, núm. 3.

Pérdidas—Véase: *Asegurado*, núm. 2—*Mina*, núm. 1—*Cesación de pagos*, núms. 1 y 2.

Pérdidas é intereses—Véase: *Obligación*, núm. 3.

Perentorias—Véase: *Excepciones dilatorias*, núm. 2—*Excepciones perentorias*, núm. 1.

Perentorio—Véase: *Excepciones*, núm. 1.

1b. Peritos—Son los únicos que deben valorar los daños y perjuicios por la mora en el cumplimiento de los contratos, cuando no existen en autos elementos suficientes para estimarlos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 437, Ser. 2ª.

Peritos—Véase: *Construcción*, núm. 1.—*Convención*, núm. 1—*Afirmaciones*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 10—*Dictamen*, núm. 1—*Convenio espreso*, núm. 1.

1c. Peritos calígrafos—El informe de éstos, cuando se trata de la autenticidad de una firma, forma prueba plena.—Jur. Com., tom. 3, pag. 152, Ser. 2ª.

Peritos calígrafos—Véase: *Informe*, núm. 1.

1d. Perjuicios—Las empresas de ferrocarriles son responsables civilmente de los perjuicios que sobrevengan á los

1a—Arts. 113 y 167, Cód. Pen.

1b—Art. 219, Cód. de Proc.

1c—Véase: verb. *Informe*, núm. 1.

1d—Es jurisprudencia uniforme en nuestros Tribunales. Véase: verb. *Ferrocarril*, núm. 2; *Ferrocarriles*, núm. 4; *Daños y perjuicios*, núm. 21; Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.



PER

viajeros por culpa ó negligencia de sus empleados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 301, Ser. 2ª.

2. Perjuicios—Sufridos por los pasajeros en virtud de hechos casuales que pudieron ser evitados por medidas administrativas de las empresas, no pueden en ningún caso calificarse de caso fortuito.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 2ª.

3. Perjuicios—Las empresas de ferrocarriles, son responsables civilmente por los perjuicios sufridos por los pasajeros en virtud de hechos casuales que pudieron ser evitados por medidas administrativas de dichas empresas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 2ª.

4. Perjuicios—Los sufridos por los pasajeros, en virtud de hechos casuales que pudieron ser evitados por medidas administrativas de las empresas, no pueden calificarse de caso fortuito.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 2ª.

Perjuicios—Véase: *Ferrocarril*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 1, 2 y 3—*Embargo*, núm. 6—*Falsificación*, núms. 4 y 5.

Perjuicios é intereses—Véase: *Título*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 1.

1. Perjurio—Para que pueda ser declarado, es necesario

2—Este caso es exactamente igual al que se registra en el tom. 2 de la Inst., verb. *Daños y perjuicios*, núm. 24, donde se funda esencialmente el principio resuelto.

3—Véase nota precedente

4—Caso fortuito es el que no ha podido preverse ó que previsto no ha podido evitarse—art. 514, Cód. Civ.—La ley 11, tit. 33, Part. 3ª dice: «Casus fortuitus tanto quiere decir en romance como ocasion que acaesce por aventura de que non se puede ante ver.» Los hechos de que uno puede precaverse con la diligencia de un buen padre de familia, no deben ser colocados en la clase de los casos fortuitos, como lo dice Troplong, núm. 204, *De louage des choses, Droit Civil Expliqué*. Véase Inst., tom. 2, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 24.

1—La ley Recopilada dice: «que después el respondiente sea con-

PER

que de autos resulte evidentemente justificado que faltó á sabiendas á la verdad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 216, Ser. 2ª.

Perpetuidad—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

Perpetuo silencio—Véase: *Cláusula*, núm. 3—*Cosa juzgada*, núm. 3.

Persona incierta—Véase: *Acción reivindicatoria*, número 4.

Persona demandada—Véase: *Nullidad del procedimiento*, núm. 1.

Persona jurídica—Véase: *Representantes*, núm. 2.

Personas—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

1. **Personas jurídicas**—O que solo tienen existencia por ministerio de la ley, se encuentran comprendidas en la disposición que ordena el arraigo del juicio en los casos que corresponda.—Jur. Com., tom. 3, pág. 537, Ser. 2ª.

1. **Personería**—De la esposa, la venia judicial concedida en el espediente, basta para justificar la personería de la esposa, sin que se requiera escritura especial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 386, Ser. 2ª.

2. **Personería**—El curador del insano es el único que la tiene para disponer la colocación de su persona.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 408, Ser. 2ª.

3. **Personería**—Del mandatario, subsiste mientras no ha-

vencido claramente por los autos del proceso que á sabiendas finió á la verdad.» Esta cuestión, no fué tratada por la Cámara, solo en primera Instancia se estudió el punto por el Juez.

1—El art. 85 del Cód de Proc., no hace distinción entre personas jurídicas y personas de existencia visible. La persona jurídica está obligada á arraigar el juicio si su contraparte lo pide, porque no es más que un litigante ordinario á la par de cualquier otro.

2—Porque es el único representante del incapaz: el gobierna su persona y sus bienes, salvo los casos determinados en que los parientes están facultados para solicitar las medidas que crean conducentes á resguardar la persona y bienes del insano.

3—Art. 1960, Cód. Civ.



PER-PET

ya terminado el negocio para que le fué conferido el mandado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 283, Ser. 2ª.

4. Personería.—Las cuestiones sobre personería del demandado que puedan afectar al fondo del asunto, deben ser resueltas en forma antes de entrar al juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 311, Ser. 2ª.

Personería.—Véase: *Poder especial*, núm. 3—*Curador*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núms. 1 y 2—*Madre natural*, núm. 1—*Heredero*, núm. 1—*Pariente*, núms. 1 y 3—*Endoso en blanco*, núm. 1—*Representante*, núm. 1—*Mandato*, núm. 7—*Boleto de compraventa*, núm. 2—*Denunciantes*, núm. 1—*Evicción*, núm. 2—*Víctima*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 4—*Contrato de locución*, núm. 4—*Menor*, núm. 1—*Instrumento privado*, núm. 3—*Locación de servicios*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 19—*Verificación de créditos*, núm. 2.

Peso desproporcionado—Véase: *Daños y perjuicios*, número 10.

1. Petición—La de nulidad de una venta, no puede fun-

1—Se dijo que el embargo preventivo no procedía en este caso porque «no está comprendido en el art. 447 del Cód. de Proc., desde que la acción instaurada no es la reivindicatoria á que ese artículo se refiere.» Esta resolución consagra un principio que está en abierta oposición con otro caso resuelto Véase. verb. *Nulidad*, núm. 2. Allí se dijo que «el embargo preventivo es procedente deducida que sea la nulidad de una escritura de venta, pues equivale á la reivindicación del bien que fué objeto del contrato.» Es una contradicción palmaria el contenido de estas dos resoluciones, y lo más edificante del caso es que ambas resoluciones fueron dictadas en el sentido contradictorio por el mismo Juez de 1ª Instancia que lo era entonces el actual camarista Dr. Gimenez, y fueron confirmadas por la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias, por los mismos Camaristas en los dos casos; y por añadidura las resoluciones fueron dictadas con dos meses de intervalo; la primera en el mes de Marzo de 1888 y la segunda en Mayo del mismo año. No puede darse un caso más típico, de lo que un célebre autor llamaria un *glorietur retours* de la jurisprudencia, y que nosotros calificaríamos de gloriosa palinodia de la jurisprudencia. Aquí, la contradicción entre



PET—POB

dar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 460, Ser. 2ª.

Petición—Véase: *Prórroga*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 9.

Petición de herencia—Véase: *Acción de petición de herencia*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5—*Embargo preventivo*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 1—*Vencimiento*, núm. 1.

Peticiones—Véase: *Término de prueba*, núm. 1.

Petitorias—Véase: *Juicio sucesorio*, núm. 1.

Planos preexistentes—Véase: *Locación*, núm. 1.

Plaza—Véase: *Calle*, núm. 1.

Plazo—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 1.

Plazo estipulado—Véase: *Vencimiento*, núm. 2.

Plazo venoido—Véase: *Dación en pago*, núm. 1.

Plazos—Véase: *Condición*, núm. 1—*Empedrados*, núm. 2.

Pleitos—Véase: *Prescripción de honorarios*, núms. 1 y 2.

Plenario—Véase: *Ratificación*, núm. 1.

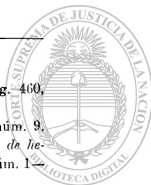
1. Plus petitio—La mayor suma en que el demandante por daños físicos, fije el monto de la indemnización, no importa plus petitio, y en consecuencia no es motivo para exonerar de las costas al demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 2ª.

Plus petitio—Véase: *Indemnización*, núm. 1.

Pobres—Véase: *Legados*, núm. 1.

los dos fallos procede de la falta de estudio de parte de nuestros magistrados. En los dos casos, se aduce como fundamento el art. 447 del Cód. de Proc. El mismo artículo sirve para fundar resoluciones contrarias: esto demuestra el criterio práctico de los encargados de aplicar la ley. Está bien que la jurisprudencia se reforme, cuando estudiando los casos prácticos a la luz de la ley y de los principios que los rigen, se vea que razones poderosas influyen en el sentido de su reforma, pero no está bien que se resuelvan las mismas cuestiones en sentido contrario, fundándose en el mismo artículo de la ley, sin ningún otro argumento.

1—Véase: verb. *Indemnización*, núm. 1 y su nota. Es jurisprudencia establecida en nuestros tribunales.



POD

1. **Poder**—El mandante que lo ha conferido en distintos caracteres, si cesa en cualquier de ellos, debe revocarlo expresamente en esa parte, en caso contrario está obligado al pago de honorarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 257, Ser. 2ª.

2. **Poder**—En forma, denunciado el representante del demandado y contestada por éste directamente la acción, es improcedente la presentación previa del poder en forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 452, Ser. 2ª.

3. **Poder**—El otorgado por cualquiera de los socios, es bastante para iniciar la acción de daños y perjuicios; la procedencia de ellos, solo puede resolverse con lo principal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 286, Ser. 2ª.

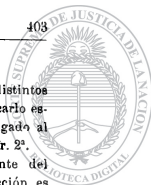
Poder—Véase: *Esposa*, núm. 1—*Mandante*, núm. 1—*Quiembra*, núms. 5 y 7.

Poder en forma—Véase: *Denunciantes*, núm. 1.

1. **Poder especial**—No se requiere para firmar con el

2.—Se trata de una demanda deducida contra una mujer casada, solicitándose se entendiera con el esposo: éste intervino y después se exigió que comprobara su carácter, lo que en manera alguna procede, porque por el hecho de pedir que se entienda la demanda con el esposo se le reconoce ese carácter, y no es posible volver sobre los hechos reconocidos en juicio. Una vez reconocida la personería no puede ésta ser objetada, como lo tiene resuelto la Cámara de lo Civil.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Personería*, núm. 2012.

1.—El art. 1012 del Cód. Civ. establece, que para ser válido un acto jurídico celebrado bajo forma privada, se requiere la firma de las partes: y no se admite, para comprobar su existencia, la prueba testimonial. Esta disposición rige exclusivamente para las partes contratantes y en manera alguna para terceros, cuyos derechos podrían ser fácilmente burlados en caso contrario, á manera de lo que ocurre en la simulación. La firma puesta á nombre de otro puede resultar de un mandato verbal ó escrito. El mandato puede ser también expreso ó tácito: este último resulta de hechos positivos del mandante, de su inacción ó silencio, ó no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando alguien está haciendo algo á su nombre—arts. 1873 y 1874, Cód. Civ.—De acuerdo con la resolución del sumario puede verse la Inst., tom. 1º, verb. *Firmar*, núm. 1214. La legislación





POD

nombre de otro, y el obligado en esta forma debe cumplir la obligación siempre que se justifique que el firmante lo hizo con su adquiescencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 88, Ser. 2ª.

2. Poder especial—Para un objeto determinado, no es bastante para los asuntos á que dé origen y que no puedan considerarse incidentes de aquél.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 33, Ser. 2ª.

3. Poder especial—Para un objeto determinado y *de más acciones*, concede personería para iniciar todas las que conduzcan al fin supuesto.—Jur. Com., tom. 3, pág. 460, Ser. 2ª.

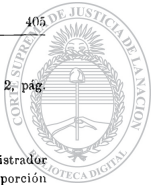
Poder especial—Véase: *Compra*, núm. 2.

1. Poder general—Con facultad para iniciar causas criminales y proseguir las iniciadas, es bastante, sin que se

española establecía que un instrumento privado constituye prueba plena contra el que lo hace ó mandó hacer; y si habiendo muerto ó negase ser suya la firma, lo aseguren de ciencia cierta dos testigos de competente edad, contestes y sin tacha, y declaren en juicio contradictorio bajo juramento, haberlo visto hacer por el mismo ó por otro de su orden, se tendrá por suficiente comprobación. Por otra parte, los documentos privados se comprueban por el dicho de testigos que declaren ser cierto su contenido. Véase notas á Bonnier, pág. 269, tom. 2º. En materia comercial sucede lo propio. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Firma á ruego*, núm. 1231. Se exceptúa el caso de los que firman por otro en las letras de cambio—art. 785, Cód. de Com. ant.—pero esta disposición no se refiere á los que firman *á ruego* sino á los que firman como *representantes* de otros. El art. 208, inc. 3º, Cód. de Com., admite la prueba de los contratos por documentos privados firmados á ruego.

2º—Arts. 1884, Cód. Civ. y 17 del Cód. de Proc.

1—El dictamen del Fiscal de las Cámaras, Dr. Cortés, que se tuvo como resolución por el Tribunal, decía lo siguiente: «Aunque es doctrina admitida y recibida por resoluciones de V. E. que no basta un poder general para entablar acusación criminal, esto se funda en que de otra suerte, el procurador promoviendo acusación que no hubiese previsto, ni había admitido el poderdante, podría imponer á éste, responsabilidades que no hubiese querido aceptar.» Y terminaba opinando que esa doctrina, no era aplicable al presente



POD—POS

requiera uno especial para cada caso.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 591, Ser. 2ª.

Poder público—Véase: *Suma*, núm. 1.

Póliza—Véase: *Asegurado*, núm. 1.

1a. Porción hereditaria—El esposo, como administrador legal de los bienes de su esposa, puede recibir la porción hereditaria que á ésta corresponda, otorgando válidamente los recaudos de la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 2ª.

1. Poseedor—De buena fe, no puede retener el bien, aun cuando haya hecho mejoras: debe gestionar su pago en expediente separado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 268, Ser. 2ª.

Poseedor—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 2—*Prescripción*, núms. 3 y 4—*Poseción*, núm. 11—*Denunciantes*, núm. 1—*Herencia vacante*, núm. 1—*Municipalidad*, núm. 1—*Títulos*, núm. 2—*Inmuebles*, núm. 1—*Prescripción treintenaria*, núm. 1.

1. Poseedor del robo—Probado que éste conocía el origen de los objetos, debe ser penado como coautor del delito.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 452, Ser. 2ª.

1b. Posesión—Cuando es dudosa, se juzga que la tiene el que justifica la más antigua.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 331, Ser. 2ª.

2. Posesión—Justificada ésta y su pérdida violenta ó clandestina, el interdicto de recobrar es procedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 325, Ser. 2ª.

caso, pues el poder fué otorgado después de entablada la acusación personalmente por el querellante y mucho más cuando en él se comprendían todas las causas pendientes ya fueran criminales ó correccionales.

1a—Art. 1276, Cód. Civ.

1b—Art. 2471, Cód. Civ.

2—Art. 581, Cód. de Proc.

POS

3. Posesión.—El comprador, aun cuando haya oblado el precio, no puede ser puesto en posesión de la finca si ha observado los títulos, y puede retirar el depósito mientras se resuelven las observaciones.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 485, Ser. 2ª.

4. Posesión.—El hecho de haberla pedido judicialmente, implica necesariamente que ella no existía con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 106, Ser. 2ª.

5. Posesión.—Justificada por más de cuarenta años, es procedente la adquisición por prescripción contra la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 171, Ser. 2ª.

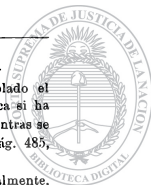
6. Posesión.—De derecho, por intermedio de un mandatario, equivale á la posesión de hecho, y obtenida la segunda es improcedente el pedido de la primera por intermedio de los jueces.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 9, Ser. 2ª.

7. Posesión.—La del sucesor universal, se juzga unida á

3—Con arreglo á lo dispuesto en el art. 521 del Cód. de Proc., aplicable á las ventas judiciales, según lo tiene declarado la Cámara en numerosos casos, el comprador puede, usando del derecho que le acuerda el art. 522, formular las observaciones que crea conducentes y que se relacionen con el título de propiedad, demostrando la oblación del precio hasta que se dicte resolución al respecto, y si resultara que los títulos son en realidad deficientes, puede optar entre el desistimiento de la compra sin responsabilidad alguna, ó la realización de ella con los vicios de que aquellos adoleciesen. Si el comprador obla el precio sin esperar el pronunciamiento á cerca de las observaciones, no hace otra cosa que renunciar espontáneamente á ese derecho que pudo haber ejercitado con arreglo á la ley. Pero como la testamentaria, no puede disponer del precio oblado siempre que se oponga el comprador, mientras no se resuelva la controversia por él promovida, no sería justo privar, al dueño, de la posesión lo que importaría privarle de la renta que puede producir, pues el propietario no tendría ningún beneficio que compensara esa pérdida.

5—Véase: verb. *Prescripción*, núm. 16 del tom. 2º de la Inst.

7—Art. 4004, Cód. Civ.



POS

la del autor de la sucesión.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 190, Ser. 2ª.

8. Posesión—Ante dos títulos que teniendo un mismo origen justifican la propiedad del inmueble, la ley ampara al que tiene la posesión.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 267, Ser. 2ª.

9. Posesión—Quieta y pacífica con título y buena fe, durante treinta años, bonifica cualquier defecto que pudiera existir en los títulos, y hace procedente el rechazo de las objeciones opuestas por el comprador.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 572, Ser. 2ª.

10. Posesión—Justificada la posesión cuarentenaria debe aprobarse la información supletoria del título, si la Municipalidad no comprueba haber adquirido la propiedad por un título posterior.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 561, Ser. 2ª.

11. Posesión—La misión en posesión, ordenada en juicio sumario, debe suspenderse siempre que exista un poseedor a título propio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 284, Ser. 2ª.

12. Posesión—Quieta y pacífica y continuada por espacio de cuarenta años, hace procedente la prescripción aun contra el Fisco y bonifica cualquier vicio de que adolecieron los títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 518, Ser. 2ª.

13. Posesión—No puede otorgarse la de los bienes here-

8—Art. 2792 del Cód. Civ.

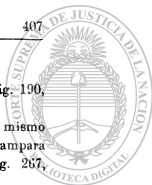
9—Art. 4015, Cód. Civ.

10—Porque la Municipalidad debe justificar el título que invoca sobre cualquier terreno poseído por particulares. Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Municipalidad*, núm. 3. En cuanto a la adquisición del dominio por la prescripción. Véase este tom. 3ª, verb. *Posesión*, núm. 5.

11—Y debe deducirse en forma la acción correspondiente establecida en el art. 2468 del Cód. Civ.

12—Véase los núms. 5 y 9.

13—Precisamente se contestaba el carácter en virtud del cual se pedía la posesión. Es evidente que no puede conferirse la pose-





POS

ditarios, si el título con que se pide fuere contestado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53, Ser. 2ª.

14. Posesión—Es procedente la tercería, justificada la propiedad y posesión de los bienes embargados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 352, Ser. 2ª.

Posesión—Véase: *Acción reivindicatoria*, núms. 1 y 3—*Auto judicial*, núm. 1—*Clandestinidad*, núm. 1—*Herederos*, núm. 1—*Interdicto de recobrar*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5—*Prueba*, núm. 4—*Terceros*, núm. 1—*Dominio*, núm. 1—*Herederos*, núms. 2 y 3—*Bienes hereditarios*, núm. 1—*Herencia indivisa*, núm. 1—*Interdicto de retener*, núms. 3 y 4—*Separación de bienes*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núms. 1, 2 y 3—*Reivindicación*, núm. 7—*Tercería de dominio*, núm. 1.

Posesión civil—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 2.

Posesión clandestina—Véase: *Interdicto de despojo*, número 1.

1a. Posesión cuarentenaria—Justificada ésta, la prescripción se opera aun contra el Estado, cualquiera que sea la ley que la rija, y la información debe ser aprobada en cuanto á la parte peseída y á la cual se refiere el título estraviado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 18, Ser. 2ª.

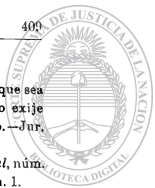
1b. Posesión de estado—La del hijo natural, no es más que el conjunto de hechos, que probados, llevan al ánimo

sión á una persona que carece de derecho á pedirla, ó á quien por lo menos se le contesta esos derechos sin resolverse previamente el incidente.

14—Solo es permitido el embargo de bienes que se hallen en poder del deudor: si éste no tiene la propiedad ni la posesión el embargo no puede trabarse, y en caso de hacerse contra derecho el dueño tiene facultad para deducir la correspondiente tercería. Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Tercería*, núm. 2 y *Dominio*, núm. 1.

1a—Véase: verb. *Posesión*, núms. 5, 9 y 12.

1b—Está de acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara Véase: verb. *Hijo natural*, núm. 1 y su nota.



POS

del Juez, la convicción de la verdad de la filiación, sin que sea necesario que ellos sean públicos y notorios, como lo exige la ley para la posesión de estado del hijo legítimo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 519, Ser. 2ª.

Posesión de estado—Véase: *Confesión extrajudicial*, núm.

1—*Filiación natural*, núms. 1 y 2—*Hijo natural*, núm. 1.

1a. Posesión judicial—No procede la acción de los acreedores contra los herederos instituidos, mientras no hayan tomado posesión judicial de la herencia.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 2ª.

Posesión judicial—Véase: *Herederos*, núm. 3.

Posesión violenta—Véase: *Interdicto de recobrar*, números 3 y 4.

Posesorios—Véase: *Competencia*, núm. 3.

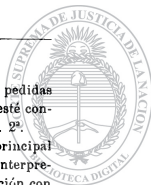
1b. Posiciones—Solo pueden absolverlas las partes que intervienen con un interés directo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 2ª.

2. Posiciones—El Juzgado no está obligado á llamar

1a—Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes y descendientes, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día del fallecimiento del causante, sin ninguna formalidad ó intervención de los jueces—art. 3410, Cód. Civ.—Los otros parientes no pueden tomar la posesión sin pedirla á los jueces—arts. 3411, 3412, 3413, *ibid.*—Y mientras esa posesión no esté dada no pueden ser demandados—art. 3414.—La posesión de la herencia se dá á petición de parte, y una vez pedida esa posesión ya no puede renunciarse—art. 3311, 3312 y 3413.—Si esa aceptación ó renuncia no se hubiese hecho, los terceros interesados pueden exigir que opten uno ú otro temperamento—art. 3314.—Es evidente que no puede demandarse al que no ha aceptado una herencia, porque esa no aceptación hace que ninguna relación de derecho pueda existir entre el acreedor de la herencia y el heredero de ella.

1b—Art. 125, Cód. de Proc.

2—Porque cada parte tiene derecho á pedir que la contraria absuelva posiciones: este derecho empieza desde la contestación á la demanda hasta la citación para sentencia,—art. 128, Cód. de Proc.



POS

autos, mientras no existan agregadas las posiciones pedidas y ordenadas en oportunidad, aun cuando la causa esté conclusa para sentencia.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 330, Ser. 2^a.

3. Posiciones—Las preguntas compuestas de principal y accesorios, contestadas afirmativamente deben interpretarse con relación á lo principal, si existe contradicción con el segundo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 2^a.

4. Posiciones—Cuando de autos resulta la ausencia del que debe resolverlas, es inútil la citación bajo apercibimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 39, Ser. 2^a.

5. Posiciones—Para su absolución en el extranjero debe

—siendo esto así, es evidente que no puede llamarse autos para definitiva mientras que las posiciones no sean absueltas: de lo contrario ellas no podrían agregarse, pues el art. 215 de Proc. lo prohíbe. Debe esperarse la agregación de las posiciones para llamar «autos»

3—La sana crítica así lo aconseja. Las posiciones y la confesión que de ellas resulta deben ser el resultado de una deliberada voluntad y no de artificios en el que la inteligencia de la frase y su sentido quede en emboscada dentro de un período hábilmente construido. Por otra parte, cuando las posiciones comprenden un doble concepto, ellas no se ajustan al precepto legal que exige como primera condición la claridad: si es oscura la pregunta, ó si envuelve varios conceptos, el absolvente contestará lo sustancial haciendo caso omiso de lo accesorio ó incidental.

4—El art. 127, Cód. de Proc., prescribe que el que haya de declarar sea citado por cédula, bajo apercibimiento, de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso. Si el litigante está ausente no puede ser citado por cédula, á no ser que se le conozca el lugar donde se encuentre y entonces la diligencia se hace por medio de exhorto. Si no es posible citar por cédula, no puede hacerse efectivo el apercibimiento, porque éste presupone esa forma de citación. Tampoco produciría ningún efecto la citación por edictos, porque la ausencia conocida ó constante en autos, sería una causal legítima para no darlas por absueltas, pues la ley requiere que el citado deje de comparecer sin justa causa.

5—Las posiciones habían sido solicitadas después de vencido el término ordinario de prueba. Se cita por la Cámara como fundamento de esta resolución la jurisprudencia establecida por ella en

POS

pedirse el término extraordinario de prueba.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 2.^a

6. Posiciones—Solo pueden darse por absueltas en rebeldía cuando la citación ha sido practicada en el domicilio del absolvente.—Jur. Com., tom. 4, pág. 46, Ser. 2.^a

7. Posiciones—En causas criminales, aun entre partes, no procede la absolución de posiciones.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 506, Ser. 2.^a

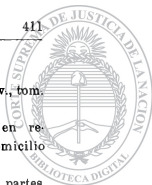
8. Posiciones—Cuando por inconvenientes insalvables

otro caso resuelto, donde se dijo que si bien el art. 125 del Cód. de Proc., autoriza á cada parte á pedir que la contraria absuelva posiciones hasta la citación para sentencia, tal disposición no autoriza la paralización indefinida del juicio. Nosotros preguntamos cómo se va á operar esa paralización indefinida del juicio? Si vencido el término ordinario, se solicita que se exhorté á fin de que un ausente absuelva posiciones en el lugar de su residencia, tal medida probatoria, no puede en manera alguna paralizar indefinidamente el pleito. Se ordena la diligencia, mandando que corran los autos según su estado: se alega y si se llaman autos para sentencia antes de que sean devueltas las posiciones, se falla sin ellas; pero el que las pidió ya tiene mucho camino adelantado, pues puede presentarlas en segunda instancia, sin poder exigir que se practiquen antes de los alegatos—arts. 136 y 247, inc. 2.^a, Cód. de Proc.—este último artículo es terminante, pues autoriza á recibir en 2.^a instancia las pruebas cuando *por motivos no imputables al solicitante, no se hubiese practicado*. Si la ley autoriza á pedir posiciones hasta el llamamiento de autos, el hecho de solicitarlas después de vencido el término de prueba, implica el ejercicio de un derecho y por consiguiente no puede ser imputado á desidia de la parte. En este orden de ideas está la resolución contenida en la Ins., tom. 1.^a, verb. *Posiciones*, núm. 2079.

6—Arts. 33 y 127 del Cód. de Proc.

7—Art. 18 de la Const. Nac.

8—Este es un caso especial, pues el auto mandando absolver las posiciones no pudo cumplirse porque el país donde residía el absolvente no lo permitía en virtud de prescripciones terminantes de sus leyes. Las posiciones debieron ser absueltas en Inglaterra, á cuyo efecto se libró la correspondiente carta rogatoria á las autoridades de aquella Nación, por intermedio del Consulado argentino, la que fué devuelta en razón de no existir tratado internacional, siendo así que ninguna autoridad de este país tiene el derecho de hacer



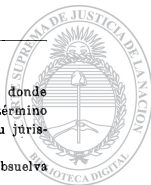
POS

es imposible la absolución de posiciones en el país donde reside una de las partes, el Juez debe fijarle un término prudencial para que comparezca á absolverlas en su jurisdicción.—Jur. Com., tom. 4, pág. 476, Ser. 2ª.

9. Posiciones—La petición de que el apelado absuelva

comparecer ante ella, á persona alguna á efecto de hacer absolver posiciones que se relacionen á juicios pendientes en el extranjero, siéndole devuelta la carta rogatoria al encargado del Consulado Argentino con las notas de la referencia. En presencia de estos antecedentes, surge evidentemente la obligación del absolvente de comparecer ante el Juez de la causa para que se verifique ante él el acto. 1º Porque el interesado hizo todas las diligencias á su alcance para que el acto se celebrase, y 2º Porque el absolvente que se acogió á la disposición del art. 136, inc. 2º del Cód. de Proc. no allanó los inconvenientes que obstaban á su cumplimiento como bien pudo hacerlo prestándose á la absolución de posiciones. El temperamento del sumario lo aconseja la igualdad que debe presidir el derecho de los litigantes en todo juicio. Si no puede llevarse á cumplido efecto lo preceptuado en el art. 136 citado, y si esa imposibilidad es debida tan solo al absolvente, es evidente que el Juez debe ejercitar su autoridad á fin de que la prueba autorizada por la ley se cumpla, impidiendo que ella sea burlada por la chicana y la mala fe de los litigantes, obligándolos á concurrir á su presencia.

9 - Esta cuestión fué resuelta por la Cámara por mayoría de votos: tres opiniones en el sentido del sumario y dos en contra. Los primeros decían que «atento lo dispuesto en el art. 242 del Cód. de Proc., y habiendo vencido el término dentro del cual el apelante debió espresar agravios, correspondía dar por desierto el recurso en virtud de la rebeldía acusada, y atento la jurisprudencia establecida por la S. C. N., causa 35, tom. 1º, Ser. 2º; y por la Cámara Comercial en el caso de Acamposa D. Rafael contra Enrico de Roma, de 11 de Octubre de 1886 » La minoría se fundaba en que «el art. 242 que autoriza á dar por desierto el recurso, se funda en el abandono de la instancia, el que no se presume cuando comparece el recurrente, pidiendo que la contraria absuelva posiciones, lo que está de acuerdo con lo resuelto por la Cámara de lo Civil, entre otros casos, en los autos seguidos por don Gabriel Rigaud contra don Casimiro Otero. Nos parece que la resolución de la mayoría es la que se ajusta al procedimiento marcado por el Código. No solo, según se desprende del contexto de los artículos que rigen el procedimiento de 2ª instancia, la petición formulada sobre absolución de posiciones no



POS

posiciones no suspende el término para espresar agravios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 159, Ser. 2ª.

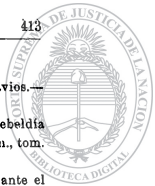
10. **Posiciones**—Las del ejecutado absueltas en rebeldía no forman prueba en el juicio de tercería.—Jur. Com., tom. 3, pág. 499, Ser. 2ª.

11. **Posiciones**—La absolución debe tener lugar ante el

suspende el término para espresar agravios, sino que no tiene derecho el litigante a solicitar esa medida hasta tanto se hubiese espresado agravios y contestado esa espresión. En primera instancia el derecho para pedir posiciones empieza desde que la demanda es contestada—art. 125 del Cód. de Proc.—En 2ª instancia ese derecho empieza desde que se contesta á la espresión de agravios. Con efecto el art. 241 dice: cuando el recurso se hubiese concedido libremente ...el apelante espresará agravios dentro de nueve días. De la espresión de agravios se dará traslado al apelado. El 245 dice *con dichos escritos* podrán las partes presentar documentos. El 246 dice, podrán también las partes hasta la citación para sentencia exigirse confesión judicial. Es decir que las posiciones pueden pedirse desde la contestación de la espresión de agravios hasta la citación para sentencia, lo mismo que en 1ª instancia, desde la contestación á la demanda. ¿A qué objeto puede responder la suspensión del término para espresar agravios mientras no se absuelvan las posiciones? Las posiciones son un medio de prueba. En la espresión de agravios no se hace mérito de la prueba de 2ª instancia, pues para hacer mérito de ellas está el alegato prescripto también en 2ª instancia por el art. 248. De aquí resulta, que según nuestra opinión la petición formulada solicitando que se absuelvan posiciones no solo no suspende el término para espresar agravios, sino que tal petición no procede hasta tanto no se haya evacuado el traslado de la espresión de agravios.

10—Porque en el juicio de tercería, casi siempre militan bajo el mismo interés el tercerista y el ejecutado, quienes tratan de burlar el pago al ejecutante; y bajo este concepto, las posiciones absueltas por el ejecutado favorablemente para el ejecutante y contra el tercerista, no pueden tener fuerza de prueba legal. La Cámara dijo que las posiciones, no eran de tomarse en consideración porque ellas estaban en oposición con otras y además porque estaban en contradicción con algunas explicaciones dadas por el mismo tercerista.

11—Art. 136, 2ª parte, Cód. de Proc. Este principio admite excepción. Véase el núm. 8.





POS—PRE

Juez del domicilio del absolvente en la época en que se pida, sin que se encuentre obligado á comparecer ante el Juez del litigio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 454, Ser. 2ª.

12. Posiciones—El pedido de absolución, no interrumpe el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 6, págs. 384 y 467, Ser. 2ª.

Posiciones—Véase: *Auto de prueba*, núm. 1—*Documentos*, núm. 3—*Esposa*, núms. 1 y 2—*Heredero*, núm. 2—*Justa causa*, núm. 1—*Confesión*, núm. 4—*Representante*, núm. 2—*Término*, núm. 11—*Acusado*, núm. 2—*Término ordinario*, núm. 2.

Potestativa—Véase: *Jurisdicción*, núm. 4.

1. Precio—Cuando no se ha determinado para la locación de servicios, debe establecerse por árbitros-arbitradores nombrados por las partes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 160, Ser. 2ª.

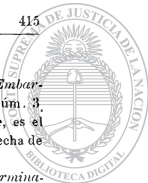
2. Precio—La falta de entrega del de la venta, es presunción vehemente de la simulación del acto.—Jur. Com., tom. 1, pág. 338, Ser. 2ª.

Precio—Véase: *Comprador*, núms. 2, 3, 4 y 9—*Convención*, núm. 1.—*Hipoteca*, núm. 2.—*Fosesión*, núm. 3.—*Juramento estimatorio*, núm. 1.—*Derechos eventuales*, núm. 1.—*Insano*, núm. 1.—*Cláusula*, núm. 2.—*Prestación de servicios*,

12—La Cámara ha resuelto siempre en este sentido los casos que se le han presentado. Nosotros consideramos que es necesario distinguir si las posiciones han sido pedidas dentro del término de prueba ó nó: en el primer caso, si ellas no se diligenciaron en tiempo por culpa de las autoridades encargadas de su diligenciamiento, debe suspenderse el término para alegar, en virtud de lo preceptuado en el art. 118 del Cód. de Proc.; en el segundo caso, nó.

1—Para ser determinado el precio por árbitros dice el art. 1627 del Cód. Civ., y así lo dice el fallo.

2.—Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Simulación*, núm. 5.



PRE

núm. 1.—*Remate público*, núm. 1.—*Título*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, núm. 14.—*Excepción de defecto legal*, núm. 3.

1a. Precio oficial—El de cualquier título cotizabile, es el que según la Bolsa de Comercio, haya tenido en la fecha de la venta.—Jur. Com., tom. 1, pág. 372, Ser. 2º.

Precio total—Véase: *Arbitros*, núm. 3.—*Area determinada*, núm. 1.—*Arrendamiento*, núm. 4.—*Locatario*, núm. 1.—*Remate judicial*, núm. 1.—*Prestación de servicios*, núm. 2.—*Venta*, núm. 4.

Predio arrendado—Véase: *Locatario*, núm. 1.—*Acreedor*, núm. 5.

Predios urbanos—Véase: *Mensura*, núms. 2, 3 y 4.

Preguntas—Véase: *Posiciones*, núm. 3.

Prejudicial—Véase: *Maternidad natural*, núm. 1.

1. Prejuzgamiento—El rechazo de la causal de recusación de un árbitro sin admitir prueba por ser improcedente, aun justificada, no importa un prejuzgamiento sobre el fondo, ni puede fundar una recusación del Juez al debatirse la nulidad del laudo.—Jur. Com., tom. 3, pág. 160, Ser. 2º.

Prejuzgamiento—Véase: *Procedimiento*, núm. 1.—*Prueba*, núm. 18.—*Sentencia*, núm. 15.

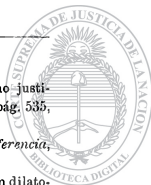
Premeditación—Véase: *Lesiones corporales*, núms. 2, 3 y 9.—*Alevosía*, núm. 3.—*Homicidio simple*, núm. 8.—*Asesinato*, núm. 1.

Premiosas necesidades—Véase: *Renta*, núm. 1.

1b. Prenda—Justificada la insuficiencia de los bienes da-

1a—Art. 207 Cód. de Com. ant.

1b—Esta cuestión fué materia de opiniones encontradas, fundándose la mayoría en que, es terminante la disposición del art. 474 del Cód. de Proc., que faculta para pedir inhibición general, cuando concurre por una parte la manifestación de que no se le conoce bienes al deudor, y por la otra la insuficiencia justificada de los bienes dados en prenda. La minoría sostuvo, que no es procedente la inhibición general cuando se presenten bienes a embargo ó se diese caución



PRE

dos en prenda, procede la inhibición del deudor, si no justificahaber reforzado la caución.—Jur. Com., tom. 3, pág. 535, Ser. 2ª.

Prenda—Véase: *Documentos*, núm. 17—*Transferencia*, núm. 1.—*Síndico*, núms. 2 y 3.

1. Prescripción—Es improcedente como escepción dilatoria si se opone á la acción de petición de herencia: ésta se dirige al conjunto de los bienes que la constituyen y no contra un bien determinado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 195, Ser. 2ª.

2. Prescripción—Opuesta al alegar de bien probado, debe sustanciarse debidamente oyendo sobre ella á la parte contra la cual se opone.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 71, Ser. 2ª.

3. Prescripción—La de diez años, es procedente siempre que exista título y buena fe de parte del poseedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 183, Ser. 2ª.

bastante—art. 474, Cód. de Proc.—y que el deudor habia manifestado que reforzó la garantía con otros bienes, sobre cuyo particular guardó silencio la contraparte.

1—La sucesión á título universal, que se hace valer por medio de una acción de petición de herencia, es la que tiene por objeto un todo ideal sin consideración á su contenido especial, ni á los objetos de esos derechos, como lo establece el art. 3423 del Cód. Civ. La prescripción, pues, que tiende á comprobar la posesión de ciertos y determinados bienes es ineficaz como medio de defensa en la acción de petición de herencia. Se habla en el sumario de *escepción dilatoria*: esto es un error, pues la escepción opuesta fué la de prescripción treintenaria, en forma de artículo de previo y pronunciamiento, especial que no puede ser opuesta sino como *pre-ventoria*. Fué opuesta en este carácter y no alcanzamos á comprender de donde se ha sacado el concepto del sumario.

2—Aunque el art. 3962 del Cód. Civ. establece, que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del juicio anterior al tiempo en que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada, esta disposición no excluye la audiencia que debe darse á aquél contra quien se opone, pues para poder fallar válidamente es necesario oír á la contraparte, siendo nula la sentencia que se dicte *contra inauditam parte*.—Ley 15, tit. 22; y leyes 3 y 8, tit. 10 part. 3ª.

3—Art. 3999, Cód. Civ. Ley 18, tit. 29. Part. 3ª.

PRE

4. Prescripción—Para que se interrumpa, es indispensable que la demanda sea contra el poseedor y ante Juez competente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 340, Ser. 2.^a

5. Prescripción—La posesión quieta y pacífica, continuada por espacio de cuarenta años, hace procedente la prescripción, aun contra el Fisco, y bonifica cualquier vicio de que adoleciesen los títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 518, Ser. 2.^a

6. Prescripción—La prescripción de los honorarios del procurador ó mandatario, en pleitos no terminados, solo empieza á correr desde la fecha en que conste la revocación ó renuncia del mandato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 74, Ser. 2.^a

7. Prescripción—Para la del delito, solo debe tenerse en cuenta la pena que en general debe aplicarse, mas no las circunstancias que puedan aumentarla ó disminuirla.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 178, Ser. 2.^a

8. Prescripción—El término para el de créditos condicionales, solo empieza á correr desde el día del cumplimiento de la condición.—Jur. Com., tom. 4, pág. 50, Ser. 2.^a

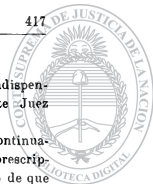
4—Art. 3986, Cód. Civ.: Ley 29, tit. 29, Part. 3.^a

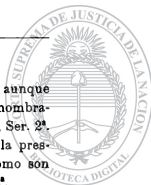
5— Véase: verb. *Poseción*, núm. 12.

6—Los dos años que deben transcurrir para que cese la obligación de pagar los honorarios de los procuradores, empiezan á correr desde que el pleito fenecce ó desde la cesación de los poderes.—Art. 4032, Cód. Civ.

7—Pues de lo contrario seria necesario calificar el delito, lo que no puede hacerse sino al dictar sentencia: proceder de otro modo importaria prejuzgar sobre un punto que recién debe resolverse al pronunciarse el juez sobre la culpabilidad ó inculpabilidad del acusado.

8—El obligdo se habia comprometido á pagar cuando mejorara de fortuna, lo que implica una condición impuesta á esa obligación. Esa condición constituye un hecho futuro é incierto que es lo que caracteriza la obligación condicional.—Arts. 528, 529 y 569, Cód. Civ.—Siendo esto así es de estricta aplicación el art. 3957, el que establece que la prescripción de estos créditos empieza desde que la condición se cumple.





PRE

9. Prescripción—Opuesta por uno de los socios, aunque es cuestión de derecho, debe ser sometida á árbitros nombrados de común acuerdo.—Jur. Com., tom. 4, pág. 300, Ser. 2ª.

10. Prescripción—La menor edad, no suspende la prescripción en los términos fatales é improrrogables como son los comerciales.—Jur. Com., tom. 4, pág. 514, Ser. 2ª.

11. Prescripción—El trascurso de la mitad del tiempo que la ley exige para la prescripción del derecho de acusar según el antiguo Cód., se considera circunstancia atenuante, aun cuando la acusación tenga lugar después de la vigencia del actual.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 278, Ser. 2ª.

12. Prescripción—La de cuatro años que la ley fija á las acciones provenientes de letras de cambio, no es aplicable entre girante y aceptante.—Jur. Com., tom. 2, pág. 372, Ser. 2ª.

13. Prescripción—Si bien la del derecho de acusar em-

9—El art. 511 del Cód. de Com. ant., al atribuir al tribunal de árbitros-arbitradores todas las cuestiones que se susciten entre socios durante la existencia de la sociedad, no hace distinción alguna entre las cuestiones de hecho y las de derecho, debiendo por consiguiente quedar unas y otras comprendidas en sus disposiciones.

10—Los términos establecidos por el Cód. de Com. para la prescripción son *fatales é improrrogables*, dice el art. 1001. Este artículo fué tomado del 580 del Cód. esp. ant. Sus comentadores entre otros Gonzales Huebra, dice en el núm. 157, que los términos comerciales son fatales, sin que tenga lugar en ellos el beneficio de restitución por ninguna causa, título ó privilegio. El nuevo Cód. esp. establece el mismo principio en su art. 942. Comentando Giron este artículo dice: «fatales son los términos que corren sin interrupción y no pueden suspenderse». No habiendo suspensión para la prescripción, ésta corre aun contra los menores de edad, como lo establece nuestro Cód. de Com. ant. en su art. 1001 citado.

11—Esa circunstancia atenuante debe tomarse en consideración en virtud de lo dispuesto en el art. 83, inc. 9 del Cód. Pen. vigente.

12—Véase: verb. *Aceptante*, núm. 1.

13—Tanto el Cód. ant. como el vigente establecen que la prescripción de la pena de prisión se opera después de haber transcurrido

PRE

pieza desde la comisión del delito, la de la pena solo empieza desde la fecha de la sentencia.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 342, Ser. 2º.

14. Prescripción—Adquisitiva, en el juicio informativo sobre protocolación de un documento privado, no pueden hacerse declaraciones sobre prescripción adquisitiva para suplir el título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2º.

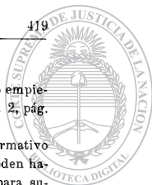
Prescripción—Véase: *Acción de nulidad*, núm. 1—*Acción de petición de herencia*, núm. 2—*Notificación*, núm. 1—*Sueldos*, núms. 1 y 2—*Honorarios*, núm. 8—*Interdicto de retener*, núm. 4—*Posesión*, núm. 5—*Información*, núm. 3—*Posesión cuarentenaria*, núm. 1—*Juez comisario*, núm. 1—*Embargo*, núm. 4—*Reincidencia*, núm. 2.

1. Prescripción de honorarios—En pleitos no terminados, solo empieza á correr desde que la parte aparece en autos patrocinada por otro abogado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 390, Ser. 2º.

un tiempo igual al de la condena, debiendo contarse ese tiempo desde que el condenado interrumpe la ejecución de la pena.—Art. 194, Cód. Pen. ant.—Esta prescripción según lo establece el art. 84, no puede operarse sino en virtud de sentencia ejecutoriada: antes que esta exista no puede interrumpirse su ejecución, ni consiguientemente empezar á correr la prescripción de esa pena.

14—La sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo á las acciones deducidas en juicio. Si se pide la protocolación de un documento, el Juez no puede resolver sobre la prescripción porque iría contra el texto expreso del Cód.—art. 216, Cód. de Proc.—El juez sentenciaría *ultra petitis*, y esa sentencia sería nula.

1—Art. 4032, inc. 1º, Cód. Civ.—Este caso está de acuerdo con lo resuelto en otro. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Prescripción de honorarios*, núm. 2138. No es práctica cobrar honorarios sino cuando termina el abogado en el ejercicio de su ministerio, y la cesación de este ejercicio, solo se presume desde la presentación del último asunto.





PRE

2a. Prescripción de honorarios—El término para los devengados en los incidentes, solo empieza á correr desde que cesa de patrocinar en los autos principales.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 390, Ser. 2ª.

1a. Prescripción liberatoria—Solo puede resolverse como previa, cuando es treintenaria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 469, Ser. 2ª.

1b. Prescripción treintenaria—La existencia de un título, justificada por instrumento público, importa para el poseedor, la posesión de buena fe, y hace procedente la prescripción treintenaria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 18, Ser. 2ª.

Prescripción treintenaria—Véase: *Excepción de prescripción treintenaria*, núm. 1.

Presentación espontánea—Véase: *Menor de edad*, núm. 1.

Presidio—Véase: *Delitos*, núm. 1.

Presos—Véase: *Retroactividad*, núm. 1.

1c. Prestación de servicios—Cuando ningún precio se hubiese estipulado por la prestación de servicios, corresponde sea fijado por árbitros.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 225, Ser. 2ª.

2b. Prestación de servicios—Justificada ésta, el beneficiado por ellos debe abonar el precio; el que si no se hubiese estipulado, deberá fijarse por árbitros-arbitradores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 568, Ser. 2ª.

Préstamos—Véase: *Pago*, núm. 2.

Presunción—Véase: *Testamento*, núm. 5—*Voluntad criminal*, núm. 1.

2a—Porque no podría separarse sin violencia la relación que existe entre el espediente principal y su incidente, pues éste con aquél forman un solo conjunto.

1a—Art. 95, inc. 3ª, Cód. de Proc.

1b—Art. 4016, Cód. Civ.

1c—Art. 1627, Cód. Civ.

2b—Véase nota precedente.

PRE

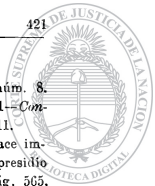
Presunción de derecho—Véase: *Declaraciones*, núm. 8.

Presunción vehemente—Véase: *Confesión*, núm. 1—*Con-
tradicciones*, núm. 1—*Precio*, núm. 2—*Testigos*, núm. 11.

1. Presunciones—La prueba de presunciones, hace im-
procedente la pena capital, pero permite la de presidio
por tiempo indeterminado.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 565,
Ser. 2ª.

Presunciones—Véase: *Filiación natural*, núm. 4—*Man-
dato verbal*, núm. 2—*Simulación*, núm. 4—*Provocación*, nú-
mero 4.

1—En la antigua jurisprudencia, se excluía de entre las pruebas
admisibles en materia criminal, la de presunciones. Se anteponía a
la prueba de presunciones las de evidencia, porque éstas no de-
jaban lugar a duda alguna, mientras que aquellas no escluyen en
absoluto el error. Mas tarde se cayó en cuenta que tal clasifica-
ción era inexacta, puesto que ni aún las aceptadas por legales y sufi-
cientes para fundar una condenación, como el dicho de dos testigos
por ejemplo, tampoco producían evidencia, sino simplemente una
certeza moral, la que a su vez podía provenir de presunciones. Vino
entonces la distinción entre indicios ó inferencias; y respecto de los
primeros se distinguió la clase de pena que se tratara de aplicar,
escluyéndolas para cuando se tratase de la pena capital por ser
irreparable, pero aceptándose como suficiente para una pena es-
traordinaria, desde que reuniese los caracteres de graves, precisas
y concordantes—Curia Filipica, Part. 3, prfo. 15, núm. 38; Gomez,
Varia Res., cap. 12, núms. 25 y 26—En la jurisprudencia moderna,
los indicios resultantes de las circunstancias que preceden, acom-
pañan ó subsiguen al hecho, se consideran como los testigos mu-
dos que ha colocado la providencia al rededor del crimen para
evitar su impunidad. Generalmente se estima como la menos sus-
ceptible de error, la que, resultando del conjunto de las circuns-
tancias, produce la certeza moral. Mittermayer «De la prueba en
Materia Criminal», pag. 123. Este sistema probatorio se encuentra
apoyado por nuestro Cód. Pen., que al prohibir únicamente la apli-
cación de la pena de muerte por presunciones—art. 55—permite
implícitamente el empleo de cualquier otro castigo fundado en esta
clase de prueba, ya se encuentren solas ó sean concordantes con
otras, formando una demostración artificial por el conjunto de
todas.





PRE—PRI

1. Presunciones graves—En caso de existir contra la madre legítima, los Jueces pueden depositar los hijos durante el juicio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 510, Ser. 2ª.

2. Presunciones graves—Precisas y concordantes, establecen prueba bastante para fundar una condenación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 530, Ser. 2ª.

3. Presunciones graves—Precisas y concordantes, forman plena prueba, siempre que el delito no deba ser castigado con la pena capital.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 298, Ser. 2ª.

Presunciones graves—Véase: *Incontinencia*, núm. 1—*Infanticidio*, núm. 1.

Primer grado—Véase: *Herederos*, núms. 5 y 6—*Sobrinos nietos*, núm. 1.

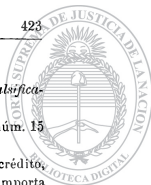
Primer matrimonio—Véase: *Tutor*, núm. 2.

Prisión—Véase: *Delitos*, núm. 2—*Arma de fuego*, núm. 2—*Atentado a mano armada*, núm. 2—*Lesiones corporales*, núms. 5 y 6.

1—Esas presunciones constituyen un peligro para los menores, y entonces los Tribunales ejercitando la alta tutela que la ley les confiere para que la patria potestad venga a ejercerse en beneficio y no en perjuicio de los menores, pueden tomar las medidas conducentes a estos fines.

2—Véase el núm. 3.

3—Cuando el criterio legal debe juzgar por presunciones, todo se reduce a saber si son tales que produzcan certeza moral, ó si por el contrario dejan entrever la posibilidad de que el reo sea inocente. El derecho moderno admite toda clase de pruebas, y reuniéndolas, deduce la que se llama *artificial*, que es la que resulta de un conjunto de circunstancias. Dice el Dr. Cortés, que esta prueba es la que se considera mejor que todas, y menos susceptible de inducir en error. Esta clase de prueba es recibida en la práctica, ha sido confirmada por la jurisprudencia, y parece estar apoyada en la ley expresa, cuando dice que la prueba de presunciones es bastante para fundar la aplicación de cualquiera pena que no sea la capital—art 91, Cód. Pen. ant.—Véase Inst., tom. 1, verb. *Presunción* *vehemente*, núm. 2153.



PRI—PRO

Prisión preventiva.—Véase: *Pena*, núm. 3—*Falsificación*, núm. 3.

Privilegio.—Véase: *Gastos*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 15—*Depositario*, núm. 1—*Tercería*, núm. 2.

1. Privilegios.—La reserva de los que garantían su crédito, hecha por el acreedor en el título de la novación, importa que éste puede oponerlos a terceros siempre que lo considere conveniente a sus derechos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 519, Ser. 2ª.

2a. Privilegios.—Aún dado caso de que no se consideren derogados espresamente los privilegios fiscales que se concedían al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el hecho de la federalización, el haberse ese establecimiento acogido a la Ley Nacional de bancos libres, importa una renuncia expresa de todo lo que le hubiese concedido la legislación de la Provincia de Buenos Aires.—Jur. Com., tom. 3, pág. 245, Ser. 2ª.

Privilegios.—Véase: *Acreedor*, núm. 5.

1. Privilegios fiscales.—De que goza el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no puede ser motivo de un pronunciamiento de oficio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 519, Ser. 2ª.

2b. Privilegios fiscales.—Los que concedían al Banco de la Provincia de Buenos Aires las leyes de su creación, han caducado en la capital desde la fecha de su federalización.—Jur. Com., tom. 3, pág. 245, Ser. 2ª.

Privilegios especiales.—Véase: *Cesionario*, núm. 2.

Procedencia.—Véase: *Embargo*, núm. 1—*Prueba escrita*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 2—*Prueba*, núm. 10.

1a. Procedimiento.—Aunque por una resolución se fije el

2a—Véase verb. *Hipoteca tácita*, núm. 1; *Efecto retroactivo*, núm. 1.

2b—Véase verb. *Privilegios*, núm. 2.

1—Si importase un prejuzgamiento, sería una causal de recusación y ésta se produciría a mera voluntad de los litigantes.



PRO

procedimiento á seguirse, no importa un prejuizgamiento.—
Jur. Com., tom. 1, pág. 560, Ser. 2^a.

Procedimiento—Véase: *Vicios*, núm. 2—*Defectos de procedimiento*, núm. 1—*Testigos*, núm. 12.

Procedimiento correccional—Véase: *Lesiones mutuas*, núm. 1.

Procedimiento ejecutivo—Véase: *Título inhábil*, núm. 1.

Procedimientos—Véase: *Jueces*, núms. 3 y 4.

Procesado—Véase: *Fuga*, núm. 1.

1. Proceso—No resultando del mismo, la forma y el medio con que fueron causadas las lesiones, ni pudiendo serlo científicamente, debe tenerse por verídico lo que afirma el reo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 19, Ser. 2^a.

Proceso—Véase: *Confesión*, núm. 6.

Procurador—Véase: *Cesionario*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 6.

Profesión—Véase: *Comisionista*, núm. 3—*Mandato*, núm. 6.

Prófugo—Véase: *Sentencia*, núm. 14.

Promulgación—Véase: *Competencia*, núm. 8.

Propiedad—Véase: *Interdicto de obra*, núm. 3—*Término*, núm. 8—*Títulos*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 4—*Denunciantes*, núm. 1—*Fosesión*, núms. 8 y 10—*Medianería*, núm. 2—*Pared divisoria*, núm 1—*Tercería de dominio*, núm. 1.

Propietario—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10 y 12—*Empedrados*, núms. 3 y 4—*Información*, núm. 2—*Títulos de propiedad*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 1—*Comprador en*

1—De acuerdo con lo que establecen las leyes penales, las que sientan el principio de que siempre debe admitirse lo que parezca mas favorable al reo. La jurisprudencia ha consagrado este principio en numerosos fallos. Véase: verb. *Confesión*, núm. 6; *Lesiones* núm. 5; *Inst.* tom. 2, verb. *Confesión*, núm. 1; *Inst.*, tom. 1, mismo verb. núms. 490, 494 y 495.



PRO

remate, núm. 2—*Regulación*, núm. 3—*Contrato de locación*, núm. 7.

1a. Prórroga—Solo puede concederse de un término judicial, si la petición se presenta antes de haberse vencido éste.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 438, Ser. 2.^a

Prostitución—Véase: *Corrupción de menores*, núm. 1.

1b. Protesto—Para que un documento firmado en otra jurisdicción tenga fuerza ejecutiva, el testimonio de protesto debe estar legalizado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 315, Ser. 2.^a

2. Protesto—El hecho de haber sido presentado al protesto un pagaré, por un tercero, no enerva los derechos del tenedor contra el firmante de uno concebido á la orden, debidamente endosado, sin que sea necesaria una cesión especial.—Jur. Com., tom. 3, pág. 105, Ser. 2.^a

Protesto—Véase: *Pagaré endosado*, núm. 1—*Error*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 6—*Letra de cambio*, núm. 1—*Pagaré*, núm. 3.

1. Protocolizados—Solo pueden serlo, los documentos que según nuestras leyes puedan elevarse á escritura pública.—Jur. Com., tom. 1, pág. 359, Ser. 2.^a

Protocolización—Véase: *Testamento ológrafo*, núms. 2, 3 y 4—*Nulidad*, núm. 15—*Instrumento privado*, núm. 2—*Juicio informativo*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 14—*Documentos públicos*, núm. 1.

1a—Art. 43, inc. 1.^o Cód. de Proc.

1b—El art. 851 del Cód. de Com. ant.—675 del vigente—establece que la ejecución se despachará con vista de la letra y protesto, sin más requisito que el reconocimiento judicial que haga de su firma el obligado: cuando el protesto es hecho en persona al deudor el reconocimiento judicial no es necesario. El testimonio de protesto es una escritura pública y para que ella haga fe en juicio ante otra jurisdicción, es necesario que la firma sea autenticada en legal forma.

2—El mero tenedor puede proceder por comisión, al cobro de la letra y á su protesto á falta de pago.—Art. 845, Cód. de Com. ant., igual al 668 del vigente.



PRO

Protocolos—Véase: *Vendedor*, núm. 2.

Provisión de fondos—Véase: *Aceptante*, núm. 1—*Letra de cambio*, núm. 1.

Providencia—Véase: *Cosa juzgada*, núms. 3 y 4—*Diligencias de prueba*, núm. 8—*Excepción de falta de personería*, núm. 5—*Notificación personal*, núm. 1.

1a. Providencias—Las de los jueces, de las cuales existe recurso, no puede fundar una recusación por enemistad, odio ó resentimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 483, Ser. 2ª.

Providencias—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 5—*Domicilio*, núm. 6—*Notificación*, núm. 4.

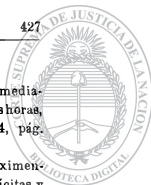
1b. Provocación—A la riña por parte de la víctima, si bien debe conceptuarse circunstancia atenuante, no tiene el valor de las injurias ú ofensas ilícitas—Jur. Crim., tom. 1, pág. 542, Ser. 2ª.

2. Provocación—Para que ésta ó el furor, pueda aceptarse

1a—Esta causal de recusación establecida en el art. 368, inc. 11 del Cód. de Proc., que habla de enemistad y odio, se refiere á hechos conocidos que no pueden constituirse por resoluciones judiciales de las que solo puede deducirse los recursos que las leyes autorizan.

1b—Art. 83, inc. 4º, Cód. Pen. vig.

2—Véase: Inst. tom. 2, verb. *Circunstancias atenuantes*, núm. 3. Para que la provocación ó la injuria disminuya la responsabilidad, ha de ser simultánea á la acción que determina el delito: lo propio debe decirse de cualquiera otra causa capaz de excitar el furor. Únicamente en ese caso debe establecerse la suposición de que habiéndose obrado irreflexiblemente, faltó la premeditación. Tal cosa no puede suceder cuando habiendo mediado días ú horas entre la provocación y el hecho criminoso, pues se considera que hay tiempo suficiente para reflexionar. Habría venganza, y la ley no disculpa la venganza, ni considera excusable el rencor. De acuerdo con estos principios, Chaveau et Helie, sostiene que para que el furor ó la provocación pueda excusar el delito ó aminorar la pena es necesario que la provocación y el delito hayan sido simultáneos, sin mediar mas que algunos instantes; la excusa sería inadmisiblesi hubiese transcurrido un día ó algunas horas: «La venganza», dicen, que se ejerce al día siguiente del ultraje, no es un acto impetuoso que la



PRO

como causa atenuante, el homicidio debe suceder inmediatamente ó á los pocos intervalos, el trascurso de algunas horas, hace improcedente la escepción.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 564, Ser. 2ª.

3. Provocación—Para que sea considerada causa eximente de pena, debe ser de las que la ley califica de ilícitas y graves.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 269, Ser. 2ª.

4. Provocación—Aun cuando ésta no se encuentre plenamente justificada, puede aceptarse por simples presunciones, por ser circunstancia que favorece al reo.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 49, Ser. 2ª.

5. Provocación—Por parte del herido, permite la aplicación del término medio de la pena.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 74, Ser. 2ª.

6. Provocación—La de la víctima, aunque beoda y sin armas es circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 318, Ser. 2ª.

7. Provocación—E injurias continuadas, si bien no bastan para fundar la legítima defensa que requiere la existen-

voluntad es impotente á resistir: la reflexión lo ha amortiguado y la impulsión ha cesado. Nosotros admitimos solamente que si algún intervalo puede separar los dos actos, no se prolongue más tiempo, que aquél en que la emoción permanece violenta, sin que la reflexión pueda hacerse escuchar, más tiempo que el que duren el calor de la cólera y el fuego de la pasión: es imposible precisar los grados de este intervalo; pero no creemos que en la mayor parte de los casos, pueda estenderse mas allá de algunos instantes.—Teoría del Cód. Pen., tom. 4, pág. 135, núm. 1283.

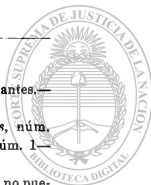
3—Art. 97, Cód. Pen. vig.

4—Véase: verb. *Proceso*, núm. 1.

5—Es una circunstancia atenuante,—Art. 83, inc. 4ª, Cód. Pen.

6—Art. 97, Cód. Pen.

7—La provocación y el ataque son cosas bien diversas: la primera solo atenúa la responsabilidad del reo; la segunda puede suprimirla por completo, y aun hacer que se prescinda del exceso en la defensa. La Ley de Part. establece, que cualquiera viendo venir



PRO-PRU

cia del ataque directo, importan circunstancias atenuantes.—
Jur. Crim., tom. 2, pág. 185, Ser. 2ª.

Provocación—Véase: *Discusión*, núm. 1—*Heridas*, núm. 2—*Homicidio*, núm. 6—*Circunstancia atenuante*, núm. 1—*Ofensas graves*, núm. 1—*Riña*, núm. 1.

1. Prueba—De las excepciones dilatorias, para ella no pue-

contra sí á un enemigo, en ademán hostil y armado de espada, lanza, garrote ó piedra, podía desde luego proceder contra él en su defensa sin esperar á que el otro le hiriera primero.

1—Este fué un auto confirmado «por sus fundamentos.» El Juez de 1ª Instancia decía: «que el Cód. de Proc., al fijar en su sección respectiva, los trámites porque deben sustentarse las excepciones dilatorias, no acuerda otro término probatorio que el prescripto en el art. 89.» En ninguna de las disposiciones de esa sección habla de términos extraordinarios. El término de esta naturaleza concedido en el art. 113 y siguientes, es para la prueba en juicio ordinario y cuando concurren las circunstancias que en los mismos artículos se espresan, y por consiguiente no puede aplicarse al caso en que se trata de la sustentación de una excepción dilatoria.» Es cierto que el art. 89 del Cód. de Proc., establece que el término de prueba no puede exceder de la mitad del art. 111, que serían veinte días. Pero esta limitación es para el término ordinario de prueba, no lo es para el extraordinario. El término extraordinario no está limitado en ninguna parte de nuestro Código, y por consiguiente no puede ser limitado arbitrariamente por los jueces. Es triste ver tratadas cuestiones tan interesantes, en la forma que lo hace la Cámara resolviendo las cuestiones más difíciles «por sus fundamentos». Es así cómo se introduce el caos en la jurisprudencia, produciendo la consiguiente confusión debida á la falta de estudio de que se resienten casi todas las cuestiones interlocutorias resueltas por la Cámara. Ese estribillo que tiene este Tribunal de «por sus fundamentos» es algo así como el principio de derecho internacional que establece que el pabellón cubre la carga; siendo así que muchas veces la carga es un verdadero contrabando de guerra. Así en el caso del «umario», se dá como fundamento la excepción establecida en el art. 89, olvidando que esta disposición como que es de excepción para el término ordinario, nada tiene que ver con el extraordinario. Además, en caso de duda, si es que ella existiese, tendría que interpretarse el caso en el sentido más favorable á la amplitud de la defensa. Volveremos sobre este particular.

PRU

de concederse el término extraordinario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 22, Ser. 2ª.

2. Prueba—La de que el demandante no tiene domicilio en la jurisdicción del Juzgado, corresponde al que opone la escepción de arraigo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 587, Ser. 2ª.

3. Prueba—Siempre que resulten hechos alegados, sobre los cuales no exista conformidad de partes, debe recibirse la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 434, Ser. 2ª.

4. Prueba—Corresponde al reivindicante, la prueba de la mala fe, para que no se unan dos posesiones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 183, Ser. 2ª.

5. Prueba—En segunda instancia, solo es procedente sobre hechos que, por ignorarlos la parte, no pudieron ser materia de ella en primera instancia—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 2ª.

6. Prueba—A la Municipalidad corresponde la de que el acrecentamiento de un terreno ribereño ha tenido por base el aluvión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 171, Ser. 2ª.

7. Prueba—El Juzgado no está obligado á resolver si la prueba solicitada es pertinente ó nó al derecho cuestionado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 394, Ser. 2ª.

8. Prueba—El término en las escepciones, no puede ex-

2—En virtud del principio *Reus in excipiendo fit actor*. Además debe tenerse presente, que al que aduce un hecho nuevo en juicio le incumbe la prueba.

3—Art. 104, Cód. de Proc.

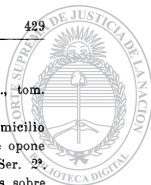
4—Porque la buena fe siempre se presume.

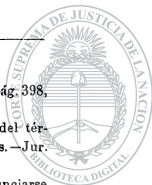
5—El art. 147 del Cód. de Proc. prevé otros casos más en los que procede la recepción de la causa ó prueba.

6—En virtud de lo dispuesto en la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

7—Solo le es permitido juzgar de su pertinencia ó impertinencia al dictar sentencia. La providencia que ordena la producción de una prueba no implica prejuzgar sobre su procedencia. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 14.

8—El término ordinario se entiende, y es del que se trata en el sumario.—Art. 89, Cód. de Proc. Véase el núm. 1.





PRU

ceder de la mitad del ordinario.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 398, Ser. 2ª.

9. Prueba—Debe agregarse la producida fuera del término, si la parte ha urgido las diligencias practicadas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 433, Ser. 2ª.

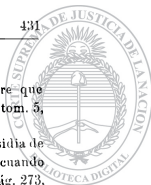
10. Prueba—Si bien el Juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia de la prueba, debe rechazar toda diligencia manifestamente inútil.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 2ª.

11. Prueba—Del caso fortuito ó fuerza mayor, corresponde al que lo invoca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 2ª.

9—De las constancias resultó que el interesado no fué el causante de la demora en la producción de la prueba y que por el contrario había urjido su producción—Art. 118, Cód. de Proc.

10—El sumario está en contra de la jurisprudencia sentada por nuestros tribunales. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 14. La prueba, en el caso del sumario, se reducía á pedir informe respecto de personas que no se encontraban en tela de juicio, por lo que no se hizo lugar á que ella se practicara. Esta resolución es contraria á la práctica, y sumamente peligrosa en manos de jueces que son capaces de no cumplir con su deber.

11—Es regla generalmente recibida, que al que tiene la presunción en su favor no le corresponde el *onus probandi*; y tiene la presunción en su favor el que se encuentra de parte de lo que regularmente sucede; y tiene la presunción en su contra el que invoca circunstancias especiales ó de excepción. Así al actor corresponde la prueba, porque es el que trata de innovar, bastando al demandado su negativa absoluta de los hechos invocados de contrario. Pero cuando no se niegan los hechos que dan origen á la obligación, sino que se alegan otros para neutralizarla ó extinguirla, cambia diametralmente aquel estado de cosas: el reo se convierte en actor, siendo éste el que trata de innovar. Es muy conocido el axioma de que el reo es actor en la excepción, y es de derecho espreso que en tal caso le corresponda la prueba.—Ley 8ª, tit. 3ª, Part. 3ª.—Si no hubiese que probar el caso fortuito, habria que suponerlo. El art. 1067 del Cód. Civ., dice que basta que á un agente se le pueda *imputar dolo, culpa ó negligencia*, no dice que se le deba *probar*: este artículo no hace sino consignar el principio elemental de que no hay responsabilidad sin imputabilidad ó sea sin voluntad, y ésta se



PRU

12. Prueba.—La recepción es procedente, siempre que no exista conformidad sobre los hechos—Jur. Civ., tom. 5, pág. 310, Ser. 2ª.

13. Prueba.—Presentada fuera de término por desidia de la parte que la solicitó, no debe ser agregada, aun cuando se hubiese producido durante él.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 273, Ser. 2ª.

14. Prueba.—La procedencia ó improcedencia de la pedida, solo puede ser declarada al dictar sentencia.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 2ª.

15. Prueba.—Si la demora en el diligenciamiento de la prueba, es imputable á la parte, no puede ser agregada fuera del término.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 2ª.

16. Prueba.—Su recepción en segunda instancia, solo es procedente al tratarse de hechos nuevos posteriores al término de prueba de 1ª Inst., y que no han podido ser materia de la rendida.—Jur. Com., tom. 1, pág. 227, Ser. 2ª.

17. Prueba.—Cuando no existe disconformidad de partes sobre los hechos alegados, es improcedente la recepción de la causa á prueba.—Jur. Com., tom. 1, pág. 173, Ser. 2ª.

18. Prueba.—Por medio de la compulsión de libros, si las

supone en las personas no exceptuadas espresamente, mientras no se pruebe una fuerza mayor, ó un caso fortuito que le haya impedido actuar.—Art. 100, Cód. Civ. y su nota.—A una persona se le imputa un hecho: esa persona se exceptuona con el caso fortuito, debe probarlo.

12—Art. 104, Cód. de Proc.

13—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 118 del Cód. de Proc.

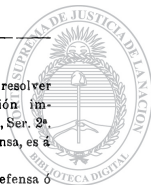
14—Véase el núm. 7.

15—Art. 118, Cód. de Proc.

16—Véase el núm. 5.

17—El trámite de prueba es innecesario, atento lo establecido en el art. 104 del Cód. de Proc.

18—El art. 72 del Cód. de Com. establece, que el reconocimiento de los libros de un comerciante debe contraerse exclusivamente á los



PRU

partes se oponen á su recepción, el Juzgado debe resolver previamente si es pertinente, sin que esta resolución importe un prejuizgamiento.—Jur. Com., tom. 1, pág. 362, Ser. 2^a.

19. Prueba—La de la escepción de legitima defensa, es á cargo del reo.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 160, Ser. 2^a.

20. Prueba—La de las escepciones de legitima defensa ó grave provocación, cuando no resultan evidenciadas en el sumario, es á cargo del reo.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 233, Ser. 2^a.

21. Prueba—La de que la legitima defensa era procedente, corresponde al reo, si no resulta justificada de las constancias de autos.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 267, Ser. 2^a.

22. Prueba—El acusador en causa criminal, está obligado á urgir el diligenciamiento de la prueba solicitada.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 463, Ser. 2^a.

23. Prueba—Cuando la demora en el diligenciamiento, es imputable á la autoridad á quien ha sido encomendada, el término señalado se conceptúa no transcurrido.—Jur. Com., tom. 2, pág. 401, Ser. 2^a.

24. Prueba—De haber votado acreedores privilegiados, para la aprobacion del concordato, corresponde al que afirma el hecho.—Jur. Com., tom. 2, pág. 451, Ser. 2^a.

articulos que tengan relación con la cuestión que se ventila, y en la casa del dueño de dichos libros —Art. 73 ibid.— Si las partes no están de acuerdo respecto á los puntos sobre que debe versar la compulsa, el Juez está en el deber de resolverlo previamente.

19—La legitima defensa, no es una presunción de derecho, siendo obligación del que la alega, establecerla con pruebas claras.—Art. 159, Cód. Pen. ant.

20—Véase nota precedente.

21—Véase el núm. 19.

22—Ley 1^a, tit. 6, lib. 4^o, Rec. Cast. Si la demora no es por su culpa, puede exigir que se suspenda la publicación de probanza hasta que sean cumplidas las diligencias solicitadas.

23—Art. 118, Cód. de Proc.

24—Corresponde la prueba de un hecho al que afirma su existencia.

PRU

25. Prueba.—Referente á la admisión ó rechazo de las excepciones, puede presentarse durante la secuela del incidente: la disposición de acompañar los documentos con la demanda, solo es aplicable á los que hagan el fondo del asunto.—Jur. Com., tom. 2, pág. 513, Ser. 2ª.

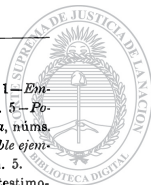
26. Prueba.—Resultante de los libros de un comerciante, llevados en debida forma, prevalece sobre los de aquellos que no reúnen los requisitos de la ley.—Jur. Com., tom. 2, pág. 257, Ser. 2ª.

Prueba.—Véase: *Declaraciones*, núms. 4, 7, 12 y 13—*Acción de petición de herencia*, núms. 1 y 3—*Contrato*, núm. 4—*Atestación*, núm. 1—*Construcción*, núm. 1—*Término*, núms. 2 y 3—*Testamento*, núm. 5—*Demanda*, núm. 1—*Firma*, núm. 2—*Demandado*, núm. 1—*Documentos*, núms. 1, 2 y 7—*Escritura pública*, núm. 2—*Hechos*, núms. 1, 2 y 3—*Instrumento público*, núms. 1 y 2—*Justa causa*, núm. 1—*Partidas parroquiales*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núms. 2 y 4—*Espediente terminado*, núm. 1—*Libros de comercio*, núms. 1, 3, 4, 5 y 6—*Obligación*, núms. 2 y 3—*Término extraordinario*, núms. 2, 3, 4, 5 y 6—*Título inhábil*, núm. 1—*Confesión*, núm. 2—*Sentencia extranjera*, núm. 1—*Actos privados*, núm. 1—*Contador*, núm. 3—*Cuestión de hecho*, núm. 1—*Mandatarios*, núm. 3—*Condición resolutoria*, núm. 1—*Cónyuge*, núm. 2—*Documento privado*, núm. 2—*Término ordinario*, núm. 1—*Testamento ológrafo*, núm. 6—*Acusado*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 9—*Documento*, núm. 2—*Mandato verbal*, núm. 2—*Presunciones graves*, núm. 2—*Testigo*, núm. 1—*Dolo*, núm. 2—*Presunciones*,

25—El art. 73, solo es aplicable á los documentos en que el actor funde su derecho; y su disposición no puede invocarse contra toda prueba escrita, pues de otra manera no tendria objeto el capitulo consagrado á la prueba instrumental en el Cód. de Proc.—Véase: verb. *Documentos*, núm. 13.

26—Art. 76, Cód. de Com. ant.





PRU

núm. 1—*Incontinencia*, núm. 1—*Complicidad*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 19—*Daños y perjuicios*, núm. 5—*Posiciones*, núm. 10—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Rebeldía*, núms. 9 y 10—*Recusación*, núm. 4—*Compulsa*, núm. 2—*Doble ejemplar*, núm. 1—*Falsedad*, núms. 4 y 5—*Lesiones*, núm. 5.

1a. Prueba escrita—Para hacer procedente la testimonial, debe proceder del deudor, la del acreedor, no llena los propósitos de la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 580, Ser. 2ª.

Prueba escrita—Véase: *Costas*, núm. 1—*Donación*, núm. 2—*Confesión*, núm. 4—*Prueba testimonial*, núm. 3.

1b. Prueba plena—Si el actor, no la produce, la doctrina permite al Juzgado absolver al demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 267, Ser. 2ª.

2. Prueba plena—Si bien su falta basta para el rechazo de la acción, para declarar la temeridad en materia criminal, se requiere que el demandante no haya producido prueba alguna.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 569, Ser. 2ª.

Prueba plena—Véase: *Informe*, núm. 1—*Afirmaciones*, núm. 1—*Dictamen*, núm. 1—*Informe médico*, núm. 1—*Presunciones graves*, núm. 3—*Declaraciones*, núm. 5—*Peritos calígrafos*, núm. 1.

Prueba privilegiada—Véase: *Simulación*, núm. 1.

10. Prueba testimonial—Para que ella proceda en un contrato de mayor cuantía, se requiere que exista un prin-

1a—Según disposición del art. 1192 del Cód. Civ. y 180 del Cód. de Proc., se considera principio de prueba por escrito, todo documento público ó privado que emane del *adversario*, de su *causante* ó de *parte interesada* en el asunto ó que tendría interés si viviera.

1b—Porque «los juzgadores siempre deben ser aparejados, más para quitar al demandado que para condenarlo, cuando fallaren derechos para hacerlo».—Ley 40, tit. 16, Part. 3ª.

2—Ley 8, tit. 22, part. 3ª; art. 8 del Reg. de admin. de Just. de 1813.

1c—Art. 1193, Cód. Civ. y 180 Cód. de Proc.

PRU—PUP

cipio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 540, Ser. 2ª.

2. Prueba testimonial—En asuntos de mayor cuantía, solo es procedente, cuando existe un principio de prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 580, Ser. 2ª.

3. Prueba testimonial—Es procedente para justificar las bases de un contrato verbal de compraventa en remate público, sin que pueda exigirse principio de prueba por escrito, aun cuando su valor exceda del límite que la ley fija.—Jur. Com., tom. 2, pág. 567, Ser. 2ª.

Prueba testimonial—Véase: *Documento privado*, núm. 1 —*Simulación*, núm. 1 —*Contrato de comercio*, núm. 1.

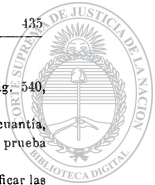
Publicación—Véase: *Injuria*, núm. 1.

Publicación acusada—Véase: *Editor*, núm. 1.

Pupilos—Véase: *Tutor*, núm. 3.

2 -Véase nota precedente.

3—Aquí no se trata de la justificación de un contrato, pues no lo constituye la oferta de venta bajo ciertas bases y condiciones. Tratándose de un contrato verbal es imposible obtener un principio de prueba escrita, siendo aplicable el art. 1192 del Cód. Civ.





1. Quiebra.—Todo aquel que haya ejercido actos de comercio, puede ser declarado en quiebra, siempre que la obligación sea consecuencia de aquellos actos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 509, Ser. 2ª.

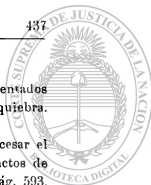
2. Quiebra.—Cuando ante dos jueces se inicia la quiebra, es competente para entender en el concurso, el primero que la declara.—Jur. Com., tom. 3, pág. 128, Ser. 2ª.

3. Quiebra.—Su calificación en lo mercantil, no hace cosa juzgada en el juicio criminal.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 382, Ser. 2ª.

1—Arts. 1511 y 1512, Cód. de Com. ant.

2—Esta resolución fué confirmatoria de la de 1ª Instancia, la que se fundaba en que el primero que declara la quiebra es el que previene en su conocimiento. El Fiscal Dr. Cortés, se oponía á esta resolución diciendo: que de dos jueces que ejercen jurisdicción *in solidum*, no previene el que llega á resolver antes un asunto, sino el primero que empezó á conocer en él. Una vez que cualquiera de ellos ha empezado á conocer en un negocio, por el mismo hecho y en lo que concierne á ese asunto, adquiere una jurisdicción preferente y esclusiva, la que no se pierde por que otro juez interviniendo más tarde en el mismo asunto, llegue á resolverlo primero. Es indudable que las razones del Dr. Cortés son concluyentes: sin embargo la Cámara no se tomó ni la molestia de refutar uno solo de los argumentos presentados, y resolvió la cuestión con un auto de su diario *cliché* «por sus fundamentos se confirma con costas» la resolución de 1ª Instancia.

3—Véase, verb. *Fallido*, núm. 3.



QUI

4. Quiebra—Diligenciado el mandamiento, y presentados bienes á embargo, es improcedente la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 3, pág. 459, Ser. 2ª.

5. Quiebra—La declaración de quiebra, no hace cesar el mandato conferido con anterioridad para todos los actos de carácter personal del fallido.—Jur. Com., tom. 2, pág. 593, Ser. 2ª.

6. Quiebra—Para que sea procedente la declaración de quiebra, debe justificarse el carácter de comerciante que reviste el deudor, no basta que haya ejercido accidentalmente actos de comercio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 526, Ser. 2ª.

7. Quiebra—Para presentarse en quiebra á nombre de otro se requiere poder que contenga determinadamente esa facultad.—Jur. Com., tom. 2, pág. 511, Ser. 2ª.

8. Quiebra—Solo puede ser levantado el auto de quiebra, justificándose el pago de todos sus acreedores, aun cuando el

4—Si da bienes á embargo, es por que tiene el deudor como pagar; si tiene como pagar no está en estado de insolvencia, siendo así que este requisito es el que caracteriza el estado de quiebra.

5—Se dijo que el apoderado de un fallido no puede representar á éste en virtud de un poder otorgado con anterioridad, fundándose para así resolver, en los arts. 1523, 1535, 326, inc. 4º del Cód. de Com. ant; 1963, inc. 4º, y 1934 del Cód. Civ. A lo que se contestó diciendo que estos artículos no tienen aplicación en el caso actual en que solo se trata del mandato para la representación en juicio, y sin que deba tenerse en cuenta para la cesación de aquella circunstancia, la de haber sido conferido antes de la quiebra, desde que pueden otorgarse hasta con el objeto de ser presentado en quiebra. Además la declaración de quiebra, no priva al fallido, del ejercicio de los derechos inherentes á su persona.—Art. 1534, Cód. de Com.—Entre estos derechos esencialmente personales, figura el de poder intervenir en el juicio de quiebra por sí ó por medio de apoderado, según se infiere del art. 1566.

6—Arts. 1511 y 1512, Cód. de Com. ant.

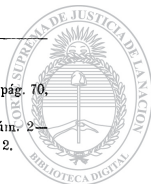
7—Art. 1523, inc. 3º, Cód. de Com. ant.

8—Art. 1551, Cód. de Com. ant.

QUI

fallido haya cumplido la pena.—Jur. Com., tom. 2, pág. 70, Ser. 2ª.

Quiebra—Véase: *Contrato*, núm. 10—*Fallido*, núm. 2—*Cesación de pagos*, núms. 1 y 3—*Alquiler*, núms. 1 y 2.





1a. Ratificación—La falta de ella en el plenario, de los testigos que han declarado en el sumario, no es causal de nulidad del procedimiento.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 298, Ser. 2^a.

Ratificación—Véase: *Declaraciones*, núms. 2 y 12—*Man dato*, núm. 2—*Firmas*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 2—*Mujer casada*, núm. 1.

1b. Ratificación tácita—La inacción del esposo, no importa la ratificación tácita de los actos de la mujer: debe justificarse que tenía conocimiento del acto y que lo admitía como válido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 150, Ser. 2^a.

Razón derecha—Véase: *Costas*, núm. 19.

1a—Es innecesaria esa ratificación siempre que hayan sido recibidas las declaraciones por el Juez de la causa.—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 5, del tom. 2^o de la Inst.; y tom. 1^o, verb. *Ratificación*, núm. 2269.

1b—No interviniendo el esposo en los actos celebrados por la esposa, ni prestando su venia, el acto es manifiestamente nulo en presencia de la prescripción terminante de la Ley 55 de Toro, igual á la Ley 2, tit. 3, lib. 5, Rec. Cast. Siendo la mujer relativamente incapaz y habiéndose dictado las leyes citadas en beneficio de ella, el pretender que no es necesaria la autorización expresa, no es serio. Pero aun dado el caso que la autorización tácita pudiese existir, ella tendría que resultar de hechos ó de actos del esposo, lo que sería necesario comprobar acabadamente.

REB

Rebelde— Véase: *Costas*, núm. 17— *Vicios*, núm. 2.

1. **Rebeldía**—No computándose por horas los intervalos del derecho, la rebeldía no procede cuando se ha presentado el escrito de traslado antes de decretarla.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 433, Ser. 2ª.

2. **Rebeldía**—Acusada al demandado, al evacuar el traslado de las excepciones, debe ser rechazada si con anterioridad ha sido contestada la demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 414, Ser. 2ª.

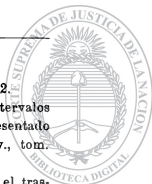
3. **Rebeldía**—Toda rebeldía acusada antes de vencer el término que la ley acuerda, debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 325, Ser. 2ª.

4. **Rebeldía**—La acusación de ésta, después del venci-

1—El sumario está equivocado: debió decir que no procede la rebeldía si se ha presentado el escrito antes de *acusada*, pero el sumario dice, antes de *decretada*. Según la resolución presente, resulta que un escrito evacuando el traslado, puede presentarse con una fecha muy posterior al vencimiento del término, y después de *acusada* la rebeldía siempre que no esté *decretada*. Es una doctrina ésta contraria á la ley y contraria á la jurisprudencia establecida en otros casos, en los que solo se ha exigido que la rebeldía sea *acusada*. La ley habla de acusación de rebeldía, no exige la declaración. El art. 45 dice: á la primera rebeldía se declaró sin mas sus tanciación perdido el derecho que hubiere dejado de usar. Más adelante agrega «la rebeldía podrá acusarse verbalmente», etc. Lo mejor del caso es que el Juez de 1ª Inst. decía: «No estando aun decretada, y de acuerdo con la práctica constante de nuestros Tribunales, no ha lugar á la rebeldía». La Cámara dice «Por sus fundamentos, etc. se confirma». El Juez aducía como fundamento una jurisprudencia que no existe, y la Cámara funda su fallo en el mismo precedente que no existe. Véase los núms. 4 y 5.

3—La acusación de rebeldía en este caso, como estemporánea, no puede surtir efecto alguno. No se puede acusar rebeldías futuras. El art. 45 del Cód. de Proc. dice: «*trascurridos los términos legales y sus prórrogas*».

4—Esta resolución fué revocatoria de una de 1ª Inst., donde se decía que la rebeldía acusada no procedía porque el escrito había sido presentado antes de *decretada* la rebeldía. La Cá-



REB

miento del término, causa irremisiblemente la pérdida del derecho que no se use en tiempo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 48, Ser. 2ª.

5. Rebeldía.—Todo escrito presentado después de la acusación de rebeldía, debe ser rechazado aun cuando no se hubiese proveído sobre aquélla.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 48, Ser. 2ª.

6. Rebeldía.—No pueden darse por absolutas las posiciones, si la parte concurre á la audiencia aunque sea después de la hora designada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 292, Ser. 2ª.

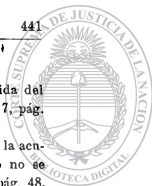
7. Rebeldía.—La contestación en esa forma del traslado

mara dijo que estando prescrito por el art. 45 del Cód. de Proc., que transcurridos los términos legales, á la primera rebeldía se declarará sin más sustanciación perdido el derecho que hubiere dejado de usar la parte interesada, y constando que la rebeldía fué acusada después de vencido el término para evacuar el traslado y con *anterioridad al escrito*, evacuándolo se revoca el auto recurrido. ¿No está esta resolución en abierta contradicción con el núm. 17 Contradicción tan palmaria entre dos providencias declaradas con tres meses de intervalo! La del núm. 1 fué dictada en octubre de 1888 y ésta en enero de 1889. Los Drs. Sauze y Molina Arrotéa firman ambas providencias; solo cambió uno de los Sres. Camaristas.

5—Véase la nota precedente. No se requiere que la rebeldía sea *decretada*, basta con que sea *acusada*. Esta es la doctrina correcta. Hemos conocido secretario que ha demorado veinte días un decreto sobre acusación de rebeldía dando tiempo á que la parte contraria evacuara el traslado de la demanda, para de esa manera aplicar la teoría consignada en el núm. 1, resolviendo no hacer lugar á la rebeldía porque ambos escritos fueron llevados á la misma audiencia y proveídos al mismo tiempo, y siendo así, no procedía la rebeldía porque ella no habia sido *decretada* cuando se proveyó al escrito que la acusaba. La Cámara viene á cortar este abuso sentando la jurisprudencia correcta.

6—Es jurisprudencia constante.—Véase: Inst. tom. 2, verb. *Posiciones*, núm. 8; tom. 1º, el mismo verb., núm. 2083.

7—El art. 437 del Cód. de Proc., se refiere al juicio ordinario en rebeldía: ésta puede ser parcial ó total. Es parcial cuando solo se da por evacuando el traslado en este carácter, y es total cuando se



REB

de la demanda, no puede fundar un embargo preventivo, el que requiere se declare rebelde al litigante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 288, Ser. 2ª.

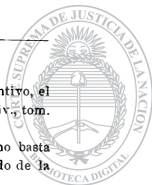
8. Rebeldía.—La simple acusación de rebeldía, no basta para dar por decaído el derecho á evacuar el traslado de la demanda.—Jur. Com., tom. 4, pág. 511, Ser. 2ª.

9. Rebeldía.—La contestación de la demanda en rebeldía,

declara rebelde á un litigante y se le sigue el juicio en rebeldía: solo en este último caso es procedente el embargo preventivo.—Véase Inst., tom. 2, verb. *Embargo preventivo*, núms. 17 y 21.

8.—Este caso es uno de aquellos que pueden considerarse como de verdadera complacencia. Una rebeldía acusada el 19 de Julio fué proveída el 7 de Agosto: es decir 19 días después de acusada, y no se hizo lugar á ella porque cuando se proveyó la parte contraria había presentado su escrito evacuando el traslado cuya rebeldía había sido *acusada* pero no *decretada*. Es este uno de los casos más elocuentes que demuestra la necesidad de interpretar el art. 45 del Cód. de Proc. en el sentido de que basta la sola acusación de la rebeldía. No hay que olvidar que este caso fué resuelto por la Cámara de lo Comercial y ella también invocó equivocadamente «la práctica constante de nuestros tribunales». Se aducía además como fundamento de esta resolución «que no siendo perentorio ó fatal el término acordado para evacuar el traslado de la demanda, la parte ha podido hacer uso de él, aún después de vencido el mismo, porque para que su derecho se considerase decaído, habría sido necesaria la declaración judicial que determina el art. 45, y como en la fecha de la presentación no se había aun dictado esa resolución, el Juzgado debía admitirla, porque lo aconseja la equidad, y es práctica constante: que las leyes referentes á la rebeldía deben interpretarse restrictivamente y que la equidad es el principio á que debe atenderse en las cuestiones de comercio.»

9.—Es principio general, que la prueba incumbe al actor—Ley 1ª, tit. 14, part. 3ª—Los efectos de la contestación tácita ó legal fueron en un tiempo materia de dudas y controversias entre los prácticos. Los términos en que está concebida la Ley 1ª, tit. 4, de la Rec. Cast. dieron nacimiento á esas dudas, pero ellas han desaparecido hoy día. La inteligencia de esa ley ha sido fijada de una manera definitiva por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Casi todos los autores están en establecer que los efectos de la contestación tácita, son el dejar trabada la litiscontestacion, cerrando





REB

no exime al demandante de rendir la prueba de su acción.—Jur. Com., tom. 3, pág. 499, Ser. 2ª.

10. Rebeldía.—El hecho de darse por contestada la demanda en rebeldía, no exime al actor, de justificar los estremos en que funda su derecho.—Jur. Com., tom. 3, pág. 185, Ser. 2ª.

11. Rebeldía.—Después de acusada, el Juzgado no puede de oficio, conceder un nuevo término para contestar la demanda.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 579, Ser. 2ª.

Rebeldía.—Véase: *Atestación*, núm. 1—*Traslado*, núm. 1—*Parientes*, núm. 3—*Posiciones*, núms. 6 y 10.

la puerta á las escepciones que hubiese podido oponer el demandado caso de haber comparecido.—Malaver, Curso de Proc., núms. 717 y 722; Febrero Reformado, por Vicente y Caravantes, tom. 4, pág. 322; Cañada, Juicios Civiles, Part. 1ª, cap. 4, núm. 22; Reus, Ley de Enj. Civ. de España, tom. 1, pág. 400, y tom. 2, pág. 224; Caravantes, Proc. Jud., tom. 4, pág. 274.—Esta uniformidad de opiniones de los autores, fluye del propio testo de la ley citada, la que después de prescribir «que el demandado sea habido por confeso si no respondiese por su rebeldía» agrega «aunque no sea dada la sentencia contra él sobre ello». Estas palabras significan que dicha rebeldía no es una confesión de la veracidad de las pretensiones contrarias, porque de ser tal confesión, no cabría la posibilidad de que pueda darse sentencia en su favor. La ley 1, tit. 5, lib. 11, de la Nov.-Rec., es más clara aun; ella dispone en su primera parte que por la contumacia del demandado vaya el Juez adelante en su rebeldía y á continuación agrega: «recibiendo testigos del demandado ú otras pruebas si hubiese, para probar su intención, así como si el pleito fuese contestado, y dar sentencia definitiva en él sin otro emplazamiento». Estas palabras demuestran que los efectos de la rebeldía no son en manera alguna pasar el *onus probandi* al rebelde. Los arts. 100, 433 y 437 corroboran esta doctrina. La jurisprudencia es uniforme en este sentido.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Contestación*, núm. 1; tom. 1, verb. *Rebeldía*, núm. 2273.

10.—Véase nota precedente.

11.—Art. 16 de la Ley Provincial de Setiembre de 1854, concordante con el art. 433 del Cód. de Proc. Civil, aplicable por analogía á los juicios criminales ordinarios en defecto de ley especial sobre la materia antes de dictarse el actual Cód. de Proc. en lo Criminal.

REC

1a. Recibo—De una suma, con objeto determinado, importa obligación y no descargo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 287, Ser. 2ª.

2a. Recibo—El de varios libros de comercio sin especificarlos, no obliga al firmante á la devolución de todos los que señala el Código.—Jur. Com., tom. 1, pág. 13, Ser. 2ª.

Recibo—Véase: *Conforme*, núm. 1—*Escribanos*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 4—*Rendición de cuentas*, núm. 1—*Cancellation*, núm. 1.

Recibo de mercaderías—Véase: *Obligación*, núm. 5.

1b. Recibos de descargo—La voluntad manifiesta en la demanda, de aceptarlos, obliga al Juzgado á tomar en consideración los presentados aun después de vencido el término de prueba y que el actor reconociéndolos auténticos, permita se agreguen.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 373, Ser. 2ª.

1. Reconocimiento—Por parte del ejecutado, de la veracidad de la escepción, hace procedente su condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 592, Ser. 2ª.

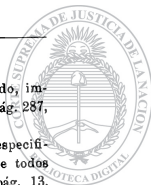
2b. Reconocimiento—Por el locatario, de una deuda á favor del locador, sin espresar categóricamente ser el producido del arreglo de la locación, no escluye ni enerva el derecho de exigir un salario por los servicios prestados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 225, Ser. 2ª.

1a—El recibo decía: «Recibi tantos pesos moneda nacional para colocarlos en cédulas hipotecarias cuando su precio haya bajado». La cuestión se suscitó con motivo del impuesto de sello en que debió extenderse; fué resuelto en el sentido del sumario.

2a—No es aplicable al caso el art. 11 del Cód. de Com. ant.

1b—La prohibición del art. 73 del Cód. de Proc., es establecida en favor de la parte, y si ella renuncia á ese beneficio que le acuerda la ley, no hay razón para no tomarlos en consideración.

2b—Ni en el orden legal, ni en el real, cabe contradicción entre la coexistencia de ambos hechos.



REC

3. Reconocimiento—De la firma del aceptante, hecha durante el juicio ejecutivo, lo inhabilita para oponer la escepción de falsedad.—Jur. Com., tom. 2, pág. 457, Ser. 2ª.

Reconocimiento—Véase: *Alimentos*, núm. 1—*Madre natural*, núm. 1—*Herencia vacante*, núm. 1—*Firma*, núm. 2—*Confesión estrajudicial*, núm. 1—*Deuda*, núm. 1—*Filiación natural*, núms. 1 y 3—*Heredero*, núm. 6—*Embargo preventivo*, núm. 20—*Escepciones*, núm. 7—*Instrumento privado*, núms. 5 y 6.

Reconocimiento médico—Véase: *Curador*, núm. 2.

Reconocimientos—Véase: *Comprador*, núm. 7—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Documento privado*, núm. 3—*Herederos*, núm. 9 y 11.

Reconstrucción—Véase: *Acción de daños y perjuicios*, núm. 1.

Recurso—Véase: *Adhesión*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 4—*Providencia*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 10 y 24.

Recurso de nulidad—Véase: *Nulidad*, núms. 5 y 21—*Sentencia*, núm. 11.

Recursos—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 9—*Nulidad*, núms. 5, 7 y 9.

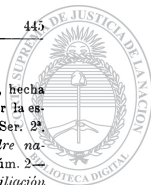
1. Recusación—La parte tiene derecho á recusar sin causa á un Secretario, y puede ejercitarlo en cualquier estado del juicio—Jur. Civ., tom. 4, págs. 85 y 86, Ser. 2ª.

2. Recusación—Las partes pueden recusar al Juez que entra á conocer en el espediente, aun cuando al iniciarlo hayan usado de ese derecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 390, Ser. 2ª.

3—Tal cosa no fué resuelta por la Cámara. La escepción de falsedad no fué opuesta, ni se trató de ella.

1—Art. 388, Cód. de Proc.

2—El Juez que entra á conocer se encuentra con respecto á los litigantes en el caso del art. 366 del Cód. de Proc.—Véase: *Inst.*, tom. 1ª, verb. *Jueces inferiores*, núm. 1527.



REC

3. Recusación—Los Camaristas que han resuelto la competencia por inhibitoria, se encuentran impedidas para resolverla si la cuestión se suscita por declinatoria, y en consecuencia su recusación es procedente.—Jur. Com., tom. 3, pág. 306, Ser. 2ª.

4. Recusación—El rechazo de la causa de la recusación de un árbitro, sin admitir prueba por ser improcedente aun justificada, no importa un prejuzgamiento sobre el fondo, ni puede fundar una recusación del Juez al debatirse la nulidad del laudo.—Jur. Com., tom. 3, pág. 160, Ser. 2ª.

5. Recusación—El demandado solo puede hacer uso de ese derecho sin causa, antes y no al tiempo de contestar la demanda.—Jur. Com., tom. 2, pág. 217, Ser. 2ª.

6. Recusación—El hecho de haber patrocinado á la contraparte, no es causal de recusación en otro juicio que no tenga conexión con aquél.—Jur. Com., tom. 2, pág. 408, Ser. 2ª.

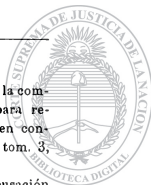
Recusación—Véase: *Providencias*, núm. 1—*Juez*, núm. 3—*Menor*, núm. 2—*Fallido*, núm. 2—*Sentencia*, núm. 15—*Prejuzgamiento*, núm. 1.

3—Siendo el punto á resolver el mismo ya resuelto, hay opinión emitida á cerca de la cuestión *sub-judice*, y están los que han entendido en él, comprendidos dentro de la disposición del art. 368, inc. 8º del Cód. de Proc.

4—Véase: verb. *Prejuzgamiento*, núm. 1.

5—El art. 366 dice, que el demandado podrá hacer uso del derecho de recusación *antes ó al tiempo* de contestar la demanda. Hará uso antes de contestarla si por cualquiera causa debe presentar escrito sin evacuar el traslado de la demanda, como cuando opone excepciones; y hará uso al tiempo de contestarla cuando no hubiese presentado otro escrito con anterioridad, pues la presentación de cualquier escrito produce el efecto de consentir el conocimiento del Juzgado. En el caso presente no se hizo lugar á la recusación porque el mismo había promovido articulaciones sin hacer uso del derecho de recusar. El sumario debe tomarse en este sentido.

6—No teniendo conexión un juicio con otro, no es el caso previsto por el art. 368, inc. 8º del Cód. de Proc.





REG

Registro—Véase: *Instrumentos públicos*, núm. 2.

Registro civil—Desde su creación, la única prueba del fallecimiento, es la presentación del testimonio de la respectiva partida de defunción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 590, Ser. 2ª.

Registro de comercio—No puede inscribirse en él, un contrato de sociedad, si ésta no está previamente matriculada como comerciante.—Jur. Com., tom. 2, pág. 413, Ser. 2ª

Registro de comercio—Véase: *Acto de comercio*, núm. 2—*Moratorias*, núm. 1.

Registro de la propiedad—Véase: *Contrato de locación*, núms. 1, 4 y 6^{ta}—*Embargo*, núm. 5.

Reglamento—Véase: *Tribunal arbitral*, núm. 1.

Reglamento de la Cámara de lo Civil—Véase: *Términos judiciales*, núm. 2.

Reglamentos—Véase: *Operaciones de bolsa*, núm. 1.

Reglas fijas—Véase: *Hechos*, núm. 4.

1a. Regulación—En las cuestiones entre el propietario y los constructores de una obra, la regulación es improcedente mientras no exista conformidad sobre las obras cuya construcción debe estimarse.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 324, Ser. 2ª.

Regulación—Véase: *Excepción de inhabilidad*, núm. 2—*Honorarios*, núm. 12.

1b. Regulación de honorarios—Que forma parte de

1a.—No habiendo conformidad de partes, ni sobre las obras ni sobre su valor, se carece de punto de partida para la estimación, y no es posible determinar su monto.

1b.—Se trata de una regulación de honorarios hecha en un juicio ejecutivo, en el que no se opuso excepción, sentenciándose de remate. Se declaró, que como en este caso dicha sentencia es inapelable—art. 505 Cód. de Proc.—también lo es, no solo con respecto a las costas, sino asimismo en cuanto a la estimación, porque son puntos comprendidos en dicha resolución. Es uniforme la jurisprudencia.

REG

una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 13, Ser. 2ª.

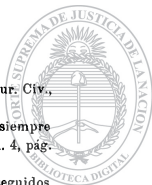
2. Regulación de honorarios—Es inapelable, siempre que el abogado renuncie á su cobro.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 14, Ser. 2ª.

1. Regulaciones—Las recaídas en expedientes seguidos en país extranjero, no tienen fuerza ejecutiva, mientras no

dencia de la Cámara de lo Civil, á este respecto; pero consideramos que no se ajusta á lo prescrito en el Cód. de Proc. Porque, si bien es cierto que de acuerdo con los arts. 501 y 505 del Cód. de Proc., la sentencia de remate no es apelable cuando no se hubiese opuesto excepciones, esa disposición no puede ir hasta modificar el procedimiento especial marcado por la ley para la regulación de honorarios, el que está legislado en el Apéndice del Cód. de Proc. por medio de prescripciones especiales que no pueden ser derogadas por disposiciones que tienen carácter general para el juicio ejecutivo. La Cámara de lo Com. ha sentado últimamente una jurisprudencia contraria á la de lo Civil, jurisprudencia que consulta mucho más la garantía de los litigantes la que debe ser y es el objeto primordial de todo juicio, ajustándose á los principios de equidad y de estricta justicia.—La jurisprudencia de la Cámara de lo Civil, en el sentido del sumario, ha sido constantemente uniforme.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Regulación*, núm. 2; *Regulaciones*, núm. 1.

2.—La renuncia á cobrar honorarios es un derecho que puede usar el que los ha devengado sin consultar á su beneficiado porque solo afecta los derechos del remunerante. Si éste se niega á cobrar no habría forma legal para obligarle á ello y por consiguiente no habría caso á resolverse por sentencia. Es principio aceptado que los jueces no pueden juzgar en abstracto. El desistimiento es un derecho acordado á las partes litigantes, pues no se les puede obligar á litigar contra su voluntad desde que renuncian á los derechos sobre que versa el litigio.

1.—La regulación de honorarios puede formar parte integrante de una sentencia ejecutoria, y en este caso es susceptible de ser ejecutada en país extranjero haya ó nó tratados si reviste los requisitos que prescriben las leyes locales; ó puede ser la apreciación de trabajos hechos en expedientes que no tienen carácter contencioso, ó de jurisdicción voluntaria, y en este caso no puede pedirse ni despachar ejecución porque propiamente no hay sentencia. El tit. 16 del Cód. de Proc. dá fuerza ejecutiva á las sen-





REH—REI

se justifique que ellas son el resultado de una sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 111, Ser. 2ª.

Rehabilitación—Véase: *Fallido*, núm. 5.

1a. Reincidencia—Debe conceptuarse circunstancia agravante, pero el hecho de ser el primer delito cometido, no puede ser tenido como circunstancia favorable al reo.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 183, Ser. 2ª.

2. Reincidencia—Esta no puede conceptuarse circunstancia agravante, cuando entre uno y otro delito ha transcurrido un término igual al que exigía el antiguo Código para la prescripción del derecho de castigar la reincidencia.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 223, Ser. 2ª.

3. Reincidencia—Ante otra jurisdicción, no puede ser tomada en consideración por los Tribunales de la Capital.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 293, Ser. 2ª.

Reincidente—Véase: *Robo*, núm. 1.

1b. Reivindicación—Es improcedente, mientras no se justifique haber poseído el bien que da objeto á la acción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 2ª.

tencias pronunciadas en país extranjero, cuando reúnen las condiciones que él requiere á efecto de dar cumplimiento á la ejecutoria en nuestros Tribunales. Son las sentencias las únicas que se hallan al amparo del Cód. de Proc., no son los autos que no revisten ese carácter.

1a—Las penas que el Cód. determina, son para la primera vez que se delinque, y no para el caso de reincidencia, en el que debe aumentarse de la manera que se establece.

1b—Aunque el caso caía bajo el imperio de la antigua legislación, según la cual el acto material de la posesión no era requerido para adquirir el dominio, pues bastaba la escritura de adquisición, no se comprobó que la escritura hubiese comprendido la parte que se trataba de reivindicar. Por otra parte, el sumario está de acuerdo con lo preceptuado en el art. 2758 del Cód. Civ., pues según este art. la acción reivindicatoria se da al propietario que ha *perdido* la posesión: para perderla es indispensable haberla tenido.



REI

2. Reivindicación—Importando esta acción, un medio amplio de recuperar la propiedad, la sentencia puede resolver, sin vicio de nulidad, todos aquellos puntos que incidentalmente conduzcan á ese objeto si ellos pueden de oficio ser materia de declaración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 54, Ser. 2ª.

3. Reivindicación—Para que sea procedente, debe justificarse el dominio que tiene el reivindicante sobre el bien que da origen á la acción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 14, Ser. 2ª.

4. Reivindicación—En este juicio tiene derecho á intervenir el citado de evicción conjuntamente con el demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 395, Ser. 2ª.

5. Reivindicación—El demandado por reivindicación, no está obligado á presentar sus títulos, ni aun á manifestar donde existe la matriz.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 332, Ser. 2ª.

6. Reivindicación—A la Municipalidad que pretende reivindicar, corresponde justificar que el bien era imprescriptible por ser de uso común.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 518, Ser. 2ª.

2—Los términos amplios del art. 2778 del Cód. Civ., autorizan este procedimiento.

3—Art. 2758, Cód. Civ.

4—Véase: verb. *Evicción*, núm. 3.

5—No hay ninguna ley que lo ordene. Nadie está obligado á producir prueba contra sí mismo, lo que sucedería si se le obligase al demandado á producir su título. El art. 2363 consagra este principio: el poseedor no está obligado á producir su título á la posesión. Él posee porque posee.

6—Las cosas inalienables son imprescriptibles —art. 2402, Cód. Civ. —Demolombe, tom. 9, pág. 460, párf. 2, considera, con todos los escritores franceses, que el carácter imprescriptible dura en tanto conserve la cosa su destino: pero ese destino puede no ser perpetuo: los mismos intereses de la comunidad pueden determinar el cambio en el destino de la cosa para responder mejor á otros ne-

REI—REM

7. Reivindicación—Es impropcedente, la de mercaderías cuya posesión tenía el concursado antes de la efectiva cesación de pagos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 305, Ser. 2°.

8. Reivindicación—Esta acción, es impropcedente tratándose de cosas muebles, y la jurisdicción mercantil es incompetente para entender en ella.—Jur. Com., tom. 3, pág. 164, Ser. 2°.

Reivindicación — Véase: *Acción reivindicatoria*, núms. 1 y 2—*Mandato especial*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 2—*Titulos*, núm. 2—*Documentos*, núm. 17—*Fallido*, núm. 1.

Relaciones de derecho — Véase: *Cesionario*, núm. 2 — *Médico*, núm. 1.

Religión—Véase: *Matrimonio Civil*, núm. 1.

1a. Religión autorizada—La propaganda de una, en el atrio de un templo de otra distinta, importa un ataque á la tolerancia que permite la Constitución—Jur. Crim., tom. 1, pág. 51, Ser. 2°.

Rematador—Véase: *Comprador en remate*, núm. 2.

Remate—Véase: *Condiciones*, núm. 1—*Martillero*, núm. 1.

1b. Remate judicial—Subsanadas las deficiencias del título, opuestas por el comprador en remate judicial, ó declarada judicialmente su inexistencia, debe oblar el precio, bajo apercibimiento de responsabilizárla por los perjuicios é intereses.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 204, Ser. 2°.

cesidades públicas, como la higiene, ornato ó seguridad. Ese carácter escepcional que se invoca para la cosa, es necesario comprobarlo en forma, porque no es de presunción legal, y la prueba incumbe al que alega un hecho nuevo en juicio.

7.—Arts. 1511 y 1669, Cód. de Com. ant.

8.—No procede la acción reivindicatoria porque el art. 2488 del Cód. Civ. así lo establece. No es la competencia comercial, porque el despojo en que necesariamente debe fundarse la acción reivindicatoria, no es, ni puede ser considerado como acto de comercio.

1a.—Véase: *Cura párroco*, núm. 1.

1b.—Art. 519, Cód. de Proc.





REM—REN

Remate judicial—Véase: *Bienes*, núm. 3—*Comprador*, núm. 3—*Títulos de propiedad*, núm. 2.

1a. Remate público—La autorización para vender una finca en remate público por un precio determinado, no importa concederla para hacerlo en venta particular ni aun por un precio mayor.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 376, Ser. 2ª.

Remate público—Véase: *Comprador en remate*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 3.

1b. Rendición de cuentas—El que la exige no está obligado a determinar las sumas que ha recibido del demandado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 594, Ser. 2ª.

2. Rendición de cuentas—Consentido el auto que la ordena, el que fija un término para la rendición, no causa agravio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 441, Ser. 2ª.

3. Rendición de cuentas—En el juicio sobre rendición de cuentas del curador de un insano, debe nombrarse curadorespecial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 377, Ser. 2ª.

4. Rendición de cuentas—El recibo otorgado por el

1a—Porque el mandatario no obra en el límite de sus poderes. La demanda fué rechazada asimismo por otras causas: se dijo que la adquisición fué hecha en remate público y así rezaba el boleto de compraventa, pero en el caso del juicio se demostró que esa aseveración era falsa y que la operación fué hecha particularmente. Fallaba por su base la demanda puesto que se comprobó la falsedad de los hechos aseverados en ella.

1b—La demanda llenaba todos los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc. Para llenar los requisitos de esta disposición, no es necesario, en la rendición de cuentas, determinar las sumas que haya recibido el actor, porque ellas resultarán de la misma rendición de cuentas, que es el objeto del litigio.

2—Resultaba de un expediente agregado que la parte había quedado obligada a rendir cuenta de su administración. Por otra parte, el término fijado para la rendición de cuentas no es sino una consecuencia de la resolución en que se le obliga a rendirlas.

3—Porque hay oposición de intereses entre el curador y el incapaz.

4—El recibo decía: «Recibi por la parte de dividendo que resulta de los fondos disponibles de las entradas de la Administración á

REN

mandante, de la cantidad disponible, importa para el depositario la aprobación de cuentas hasta la fecha que él espresa. La prueba en contra corresponde al que exige la rendición.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 2ª.

5. Rendición de cuentas—El depositario está obligado á rendir cuenta detallada de los fondos producidos por el depósito, y si no lo hiciere, los tribunales deben fijar equitativamente la suma dentro de la cual el que exige la rendición de cuentas debe prestar el juramento de ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 2ª.

6. Rendición de cuentas—El que acepta el mandato y reconoce haber ejercido actos que tienen ese origen, está obligado á rendir cuentas al mandante.—Jur. Com., tom. 4, pág. 230, Ser. 2ª.

7. Rendición de cuentas—Para que esta acción sea procedente, no basta justificar la institución del mandato, sino también el ejercicio de actos que importen la aceptación del mandato.—Jur. Com., tom. 3, pág. 489, Ser. 2ª.

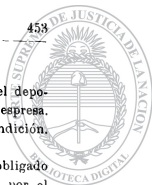
Rendición de cuentas—*Venta*, núm. 1—*Auto*, núm. 2—*Obligación*, núm. 4—*Término*, núm. 9—*Tutor*, núm. 4—*Ad-*

su cargo». Aquí no se espresa que la suma recibida fuese por saldo de cuentas, pero atendida la naturaleza de la cosa administrada, que solo era susceptible de producir alquileres, el otorgamiento de tal documento, no puede razonablemente tener otro alcance, que el haber recibido la suma espresada, como saldo de los alquileres hasta la fecha del recibo. Y si la locución contenida en el recibo cuando dice «fondos disponibles», hace presumir la existencia de otra clase de fondos, su comprobación es incumbencia del que otorga el recibo.

5—Véase: verb. *Depositario*, núm. 2.

6—Arts. 87 y 322 del Cód. de Com. ant.

7—Porque de otra suerte la rendición de cuentas carecería de base, desde que no tendría un objeto á que referirse. Así lo preceptúa la razón y el buen sentido como igualmente la ley.—Arts. 81, 83, 322 y 489 del Cód. de Com. ant.





REN-REO

ministración, núm. 1—*Inventario*, núm. 1—*Albacea*, núm. 1—*Consignación*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 2.

Renovaciones—Véase: *Cesación de pagos*, núm. 2.

1a. Renta—Cuando no resulta claramente justificada la renta del demandado, debe fijarse como alimentos la suma que baste para llenar las más premiosas necesidades del alimentado, sin perjuicio de lo que puede resolverse en el juicio ordinario.—*Jur. Civ.*, tom. 7, pág. 569, Ser. 2ª.

Renta—Véase: *Bienes*, núm. 4.

Renuncia—Véase: *Estado civil*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 6.

Renuncia expresa—Véase: *Privilegios*, núm. 2.

Renuncia tácita—Véase: *Contrato de locación*, núm. 3.

1b. Reo—Que alega la falsedad de la confesión del delito, hecha ante el comisario de Policía, corresponde acreditar que le fué arrancada con violencia ó intimidación.—*Jur. Crim.*, tom. 2, pág. 535, Ser. 2ª.

2. Reo—Puede ser acusador, siempre que fuese por agravio propio ó de los suyos.—*Jur. Crim.*, tom. 2, pág. 333, Ser. 2ª.

1a.—La misma naturaleza sumarisima del juicio y la circunstancia de que toda defensa es imposible para el alimentario, pues toda discusión debe reservarse para otra oportunidad, aconsejan la resolución del sumario.

1b.—Comprobar este extremo exigido por la Cámara, es poco ménos que imposible. Consideramos que bastaría un indicio ó presunción grave para comprobarlo. Debe también tenerse presente que es duro dudar de la aseveración hecha por un empleado público caracterizado como lo es un comisario de Policía.

2.—Si bien es cierto que el que se encuentra acusado criminalmente, mientras subsista la acusación, no puede ser admitido, en calidad de acusador, á promover el castigo de otro delito que no sea mayor que el que se le imputa; esta regla no tiene aplicación alguna tratándose, por parte del reo, de agravio propio ó de los suyos, pues en este caso le es permitido reconvenir, reexaminar ó acusar criminalmente al mismo acusador, por delito, cualquiera que sea, que éste hubiese cometido contra el acusado.—*Leyes 2 y*

REO—REP

Reo—Véase: *Parientes*, núm. 3—*Fianza de escarcelación*, núm. 1—*Arma de fuego*, núm. 3—*Delito*, núm. 1—*Tentativa*, núm. 1—*Ebriedad*, núms. 3, 4, 5 y 6—*Imputabilidad*, núm. 1—*Testigos*, núm. 14—*Término medio*, núm. 2—*Desafío irregular*, núm. 1.

Repetición—Véase: *Agente de Bolsa*, núm. 1.

Representación esterna—Véase: *Gerente*, núm. 1.

1. Representante—El del Consejo Nacional de Educación, es parte en toda testamentaria, que tenga que abonar el impuesto.—Jur. Civ., tom. 4, págs. 99 y 105, Ser. 2ª.

2. Representante—Legal, de una persona jurídica, no

4, tit. 1º, Part. 7ª.—Si así no fuere, todo malhechor podría esquivar fácilmente la acusación por parte de la víctima del delito, con solo anticiparse á acusarla antes que ella se hubiese querrellado, imputándole el mismo delito de que hubiese sido autor, ú otro cualquiera, pues esta medida bastaría para que el agraviado quedara inhabilitado para querrellarse por su parte, lo que basta para comprobar la exactitud del sumario.

1—Cuando se trata del impuesto con el cual una testamentaria debe contribuir para las escuelas, y aun cuando no se trate todavía del cobro del impuesto, debe tenérsele por parte al representante, pues no puede negársele este derecho *in limine* sin incurrir en prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión que despues debe suscitarse á cerca de la legitimidad del impuesto.

2—Se aduce como argumento de esta resolución, que las personas jurídicas no existen sino en el concepto, careciendo de conciencia y de forma visible, lo que implica imposibilidad de ejecutar acto alguno que requiera estas condiciones. Que si bien el art. 125 del Cód. de Proc., autoriza á pedir que la contraria absuelva posiciones, esta autorización se limita al caso en que los litigantes son personas capaces de ejecutar el acto, circunstancia que no concurre con respecto á las personas jurídicas, pues ellas son incapaces por razón de imposibilidad en que se hallan para el efecto; que los representantes de personas jurídicas, no pueden practicar más actos respecto de ellas que los determinados en sus Estatutos—art. 36, Cód. Civ.—y que la facultad de absolver posiciones no la tiene por sus Estatutos ningún representante legal, y aunque la tuviera, valdria tanto como la de obligarla sin mas formalidad que su palabra, siendo así que el representante tiene generalmente facultades





REP—RES

está obligado á absolver posiciones.—Jur. Com., tom. 1, pág. 29, Ser. 2ª.

Representante legal—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 3.—*Nulidad y validez*, núm. 1.

Requisitos—Véase: *Demanda*, núm. 6.

Requisitos esenciales—Véase: *Testamento*, núm. 2.—*Testamento ológrafo*, núm. 1.

1a. Rescisión—El sócio que no aporta el capital, que se hubiese comprometido á introducir según el contrato social, hace procedente la rescisión á petición de los demás.—Jur. Com., tom. 4, pág. 428, Ser. 2ª.

Rescisión—Véase: *Contrato de locación*, núms. 1 y 3.—*Contrato*, núm. 2.

Resentimiento—Véase: *Providencia*, núm. 1.

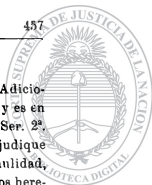
Residencia—Véase: *Tribunales de la Capital*, núm. 1.

1b. Resolución—La de la Intendencia, que ordena la

limitadas: que siendo las posiciones un medio de prueba, es requisito esencial que sea *dueño del pleito* ó un apoderado espresamente facultado al efecto: que para que la confesión cause el perjuicio á que se refieren la leyes de procedimientos, debe ser contra sí mismo.—Ley 4, tit. 13, Part. 3ª; Ley 2, tit. 7, lib. 4, Rec.; arts. 125 y siguientes, Cód. de Proc.—Sin embargo, la S. C. N. ha dicho que el gerente de una casa de comercio está obligado á absolver posiciones.

1a—Art. 866, Cód. de Com. ant.

1b—El art. 1º del Reg. mencionado, dictado en Agosto de 1873, dispone que desde esa fecha todas las empresas de tramways depositarán á la orden del Presidente de la Municipalidad la suma de cuatro mil pesos fuertes para con ella atender la asistencia médica de toda persona que sea herida ó maltratada por los coches de esas empresas. Para resolver toda cuestión que tenga relación con este art. se nombra una comisión compuesta: 1º Un Municipal designado por el Concejo; 2º Un representante de los tramways nombrado por las empresas, y 3º el Presidente de la Municipalidad. Esta Comisión es un verdadero Tribunal arbitral, según lo tiene declarado la Cámara de lo Civil, tom. 3, pág. 409, Ser. 1º: es un Tribunal especial que procede como amigable componedor en las causas que le sean sometidas. Obligada la Intendencia á constituir



RES

formación del Tribunal arbitral creado por el Reg. Adicional de Tramways, no causa gravamen á las empresas, y es en consecuencia inapelable.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 403, Ser. 2ª.

2. Resolución—En que el Juzgado ordena se adjudique un bien determinado á los menores, no adolece de nulidad, aun cuando no haya sido materia de cuestión entre los herederos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 230, Ser. 2ª.

3. Resolución—La de la Cámara, que ordena al Juez sostener su competencia, no resuelve sobre el fondo de la cuestión.—Jur. Com., tom. 2, pág. 515, Ser. 2ª.

Resolución—Véase: *Nulidad*, núm. 8—*Jueces*, núm. 8.

1. Resoluciones municipales—Para que sean apelables ante la Exma. Cámara de lo Civil, deben proceder del Departamento Deliberante y no del Ejecutivo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 316, Ser. 2ª.

Responsabilidad—Véase: *Fianza en efectivo*, núm. 1.

este Tribunal, á solicitud de parte interesada, y limitándose tan solo á ello su intervención, no puede jamás causar agravios á los derechos de las empresas, pues la Intendencia no hace sino cumplir con lo que la ley especial la ordena, constituyendo el Tribunal. No puede haber agravio causado cuando no hay resolución que perjudique á algunos de los interesados. Cuando la Intendencia procede á la formación del Tribunal, no lo hace de su propia autoridad, sino por ministerio de la ordenanza, y por la aceptación que importa para la empresa, el hecho de haberse acogido á la adición del Reg. de Tramways. De manera que, aun dado el caso de que las pretensiones de un damnificado por la empresa fuesen rechazadas ante los Trib. ordinarios, si luego viene á solicitar la formación del Trib., la Intendencia está en el deber de constituirlo, pues ella no juzga del fondo de la cuestión: su rol se limita á constituirlo.

2—No es nula porque solo implica determinar la forma de división del caudal testamentario, consultando los intereses de los menores. Aquí se ordenó la adjudicación de un bien determinado á favor de los menores, á fin de evitar el condominio con otras personas.—Art. 436, Cód. Civ.

1—Véase: *Municipalidad*, núm. 3.



RES—RIÑ

1. Responsabilidad criminal—La base fundamental de ella, es el libre albedrío, debiendo los jueces prescindir en sus fallos, de las teorías y doctrinas que no se funden en la ley.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 66, Ser. 2ª.

Responsabilidades—Véase: *Actos jurídicos*, núm. 1—*Comprador*, núm. 7.

Restos existentes—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

Resultado casual—Véase: *Homicidio*, núm. 3.

1. Retroactividad—Del Cód. Pen. es aplicable a los presos que aun no han cumplido su condena.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 136, Ser. 2ª.

Retroventa—Véase: *Término*, núm. 8.

Reversión—Véase: *Donación*, núm. 3.

1a. Revocación—De un mandato comercial, es un acto lícito que no puede fundar una acción por indemnización de daños y perjuicios.—Jur. Com., tom. 2, pág. 257, Ser. 2ª.

Revocación—Véase: *Mandante*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 3—*Mandatario*, núm. 6.

Revocación tácita—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 4.

Revocatoria—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 9—*Embargo preventivo*, núm. 17.

1b. Riña—La provocación a la riña, debe conceptuarse circunstancia atenuante del homicidio, pero no exime de culpa.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 583, Ser. 2ª.

Riña—Véase: *Discusión*, núm. 1—*Lesiones*, núm. 2—*Provocación*, núm. 1—*Legítima defensa*, núm. 3—*Lesión*, núm. 1—*Vindicta pública*, núm. 1—*Herida*, núm. 1—*Tentativa de asesinato*, núm. 1.

1a—Art. 327, Cód. de Com. ant.

1b—Y corresponde la pena de tres años de prisión.—Art. 97, Cód. Pen. ant.

ROB

1a. Robo—Con violencia en la persona, debe ser castigado con ocho años de penitenciaría si el reo es reincidente.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 125, Ser. 2ª.

2. Robo—Aun cuando la tentativa de robo no se encuentre debidamente justificada, el reo debe ser penado por la violación de domicilio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 290, Ser. 2ª.

3. Robo—Cuando no existe base segura para fijar el monto á que hubiera ascendido, es procedente la escarcelación del acusado por tentativa.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 218, Ser. 2ª.

4. Robo—Aun justificada la intención de cometerlo, se requiere plena prueba de que los que tramaron la confabulación son los autores del robo verificado.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 13, Ser. 2ª.

Robo—Véase: *Declaración*, núm. 1—*Hurto*, núm. 3.

1b. Robos sucesivos—Solo debe aplicarse la pena con arreglo al de mayor valor, y no al que resulte del conjunto de todos los objetos robados.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 92, Ser. 2ª.

1a—Arts. 185 y 316, inc. 1ª, Cód. Pen. ant. y 188, inc. 3ª, Cód. Pen. vig.

2—Comprobado el delito de violación de domicilio, corresponde la aplicación de la pena.—Art. 165, Cód. Pen. vig.

3—Si el delito en caso de haberse consumado, no diese el resultado de haberse robado 500 pesos, no podría castigarse con más de dos años de prisión, en cuyo caso es escarcelable bajo fianza.

4—Esta prueba plena requerida puede resultar de presunciones precisas, concordantes y graves.

1b—El robo se había practicado sucesivamente y contra la misma persona, en cuyo caso debe castigarse el más importante, considerando los otros como circunstancias agravantes.





1a. Saldo—Un recibo otorgado en esta forma, importa la cancelación de toda cuenta de fecha anterior cualquier que sea su origen.—Jur. Com., tom. 4, pág. 465, Ser. 2º.

Saldo—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 19.

Salario—Véase: *Reconocimiento*, núm. 2.

Secretario—Véase: *Atestación*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 5—*Recusación*, núm. 1.

Segunda instancia—Véase: *Prueba*, núms. 5 y 16—*Cámara de apelaciones*, núm. 2.

Segundo grado—Véase: *Herederos*, núms. 5 y 6—*Sobriños-nietos*, núm. 1.

Sello—Véase: *Inscripción*, núm. 2—*Sociedades anónimas*, núm. 1.

1b. Sellos—Mientras no se abone la multa en que han

1a—El recibo decía: «por saldo y cancelación de cuentas hasta la fecha». El art. 934 del Cód. de Com. ant., establece que un recibo en estos ó análogos términos, se presume que comprende toda deuda de fecha anterior.

1b—El abono debe ser hecho por la totalidad de la multa y por el que presenta el documento, sin perjuicio de repetir, después que las firmas han sido autenticadas, la parte que corresponde á cada uno de los firmantes. Si el que presenta el documento no abona la multa, la parte contraria puede exigir que se le fije un término prudencial para que lo verifique bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se desglosará el documento perdiendo su

SEL—SEN

incurrido todos los firmantes por infracción á la ley de sellos, no puede darse curso á la ejecución.—Jur. Com., tom. 4, pág. 504, Ser. 2ª.

Sellos—Véase: *Libros*, núm. 1—*Omisión*, núm. 1—*Trasferencias*, núm. 1—*Declaratoria*, núm. 1.

1. Sentencia—Si después de dictada á favor del actor, éste confiesa su temeridad al haber deducido la acción, procede su condenación en todas las costas del juicio.—Jur. Civ., pag. 524, Ser. 2ª.

2. Sentencia—Cuando concede facultades representativas, el secretario puede expedir tantas copias cuantas pida el tom. 4, interesado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 118, Ser. 2ª.

fuerza probatoria y sin perjuicio de seguirsele la ejecución por el Fisco hasta hacerse pago de la multa correspondiente. Este es el temperamento que se ha seguido en estos últimos tiempos por la Cámara.

1—Ganado un pleito, por el actor, en 1ª Inst., sobre rendición de cuentas, el demandado apela y presenta en 2ª Inst. un documento público, de fecha posterior á la demanda, por el que confiesa que el apoderado había rendido cuentas con entrega del saldo reclamado, declarándose que debía cesar la tramitación del juicio seguido, siendo las costas á cargo de la parte actora. El documento público hace fé en juicio y debe cumplirse.—Art. 993, Cód. Civ.

2—Es de ley que las partes que intervienen en un juicio tienen derecho á tener una copia de la sentencia en él recaída, sin necesidad de autorización judicial. Asimismo es de precepto legal que el oficial público que autorice un documento debe dar copia á los interesados anotando la fecha de su expedición. Hay escrituras de las que no se puede expedir copia sin autorización judicial, como son aquellas en que puede exigirse por virtud de ellas el cobro de una cantidad de dinero ó el pago de algun crédito tantas veces cuantas aparezca la escritura. Ahora bien, las sentencias que confieren facultades representativas, no se encuentran en el caso de escepción y por el contrario están comprendidas en las disposiciones generales que rigen la expedición de copias, pues no existe el más remoto peligro de que el interesado pueda hacer mal uso de esa segunda ó tercera copia, siendo este peligro la base de la prohibición establecida por la ley para determinados casos.





SEN

3. Sentencia—Que no resuelve las cuestiones propuestas y discutidas por las partes, debe declararse de oficio, nula.—Jur. Civ., pág. 128, Ser. 3ª.

4. Sentencia—Que resuelve el litigio sin la debida sustanciación, adolece de nulidad; la Cámara debe declararla, aunque interpuesto el recurso, el apelante no la fonde al espresar agravios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 71, Ser. 2ª.

5. Sentencia—Judicial, el Secretario está obligado á expedir una copia de toda la sentencia para la parte que la solicite, sin previo mandato del Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 118, Ser. 2ª.

6. Sentencia—Si guarda silencio sobre el pago de intereses, no pueden incluirse en la liquidación.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 461, Ser. 2ª.

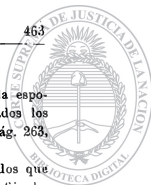
7. Sentencia—El consentimiento de la de divorcio, hace innecesario el pronunciamiento de los Tribunales civiles sobre el derecho del esposo inocente á exigir la separación de bienes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 445, Ser. 2ª.

3—Arts. 216, 217 y 218 del Cód. de Proc.; Leyes 12 y 16, tit. 22, Part. 3ª.

4—Se declaró nula una sentencia que consideraba procedente la excepción de prescripción opuesta al alegar de bien probado, siendo así que opuesta esta excepción en cualquier estado del juicio—art. 3962. Cód. Civ.—debe oírse á la parte contraria para poder fallar válidamente, pues la omisión de este tramite vicia de una manera insanable la sentencia dictada *contra inauditam partem*.—Ley 15, tit. 22; y Leyes 3 y 8, tit. 10, Part. 3ª.

5—Véase el núm. 2.

6—La sentencia habrá pasado en autoridad de cosa juzgada, y tampoco se habrá solicitado el pago de intereses en la demanda: siendo esto así, es evidente que la sentencia no pudo contener condenación en costas, porque no puede ir más allá de lo pedido en la litiscontestación; tampoco podrá alterar la cosa juzgada, ampliando ó restringiendo la sentencia. Deben las partes someterse á su texto espreso y categórico.



SEN

8. Sentencia—Que fija alimentos provisorios á la esposa, no causa agravios, si de autos resultan justificados los extremos que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 263, Ser. 2ª.

9. Sentencia—Que una vez justificados los recaudos que exige la ley, obliga al esposo á pasar alimento y fija la suma proporcionada al caudal, no causa agravio.—Jur. Civ. tom. 5, pág. 66, Ser. 2ª.

10. Sentencia—La recaída, no haciendo lugar á la evicción y saneamiento de una finca en condominio, hace cosa juzgada para todos los condóminos cuyos derechos tengan el mismo origen.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 28, Ser. 2ª.

11. Sentencia—Es improcedente el recurso de nulidad, cuando ella contiene decisión espresa y precisa sobre el litigio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 342, Ser. 2ª.

12. Sentencia—La que no contiene decisión espresa sobre lo alegado y probado, debe ser declarada nula.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 79, Ser. 2ª.

13. Sentencia—La que no decide las cuestiones some-

8—En este caso la sentencia se ajusta al derecho, y no hay agravio causado cuando la sentencia interpreta la ley con rectitud.

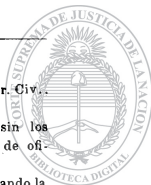
9—Véase nota precedente.

10—Del estudio que hemos hecho del fallo á que se refiere este sumario, no resulta que se trate de condóminos: todo lo contrario, se relaciona con una sola parte que es el vendedor. El comprador cita de evicción al vendedor, no se le hace lugar á la citación porque consintió un auto anterior y dejó pasar la oportunidad legal para verificar la citación—art. 2111, Cód. Civ.—Hay, pues, cosa juzgada en virtud de esa sentencia anterior que no hizo lugar á la citación, no pudiendo admitirse otra petición en el mismo sentido, porque de admitir esa petición importaría retrotraer al juicio derechos declarados cesantes.

11—El recurso solo se da contra las sentencias que no se ajusten á las acciones deducidas en juicio.—Arts. 216, 217 y 218, Cód. de Proc.

12—Véase el núm. 3.

13—Véase nota precedente.



SEN

tidas al fallo del Juzgado, adolece de nulidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 199, Ser. 2ª.

14. Sentencia—La dictada contra el prófugo, sin los trámites que la ley exige, debe ser declarada nula de oficio.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 562, Ser. 2ª.

15. Sentencia—La dictada en el incidente ejecutando la multa por infracción á la ley de papel sellado, no puede fundar una recusación por prejuizgamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 63, Ser. 2ª.

16. Sentencia—Cuando la que condena al pago, en juicio ordinario, no menciona intereses, el acreedor carece de derecho para exigirlos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 237, Ser. 2ª.

Sentencia—Véase: *Alimentos*, núms. 2, 6, 7 y 8—*Autenticidad*, núm. 1—*Juicio*, núm. 3—*Padre natural*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núm. 2—*Condominio*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 2—*Pago parcial*, núm. 2—*Juris-*

14—Del procedimiento resultaron defectos graves. Sin acusación y sin deducirse cargo alguno, se confirió traslado al reo prófugo. Notándose este error posteriormente, y á fin de subsanarlo, se ordenó que la causa volviera al Fiscal á fin de que dedujera acusación en forma: así se hizo, pero en vez de conferir traslado de ella para que el reo la contestara, el Juez llamó autos para sentencia, y en seguida la dictó efectivamente. De aquí resultó que el reo quedó indefenso, sin haber tenido ocasión oportuna para contestar, porque cuando se le confirió traslado no conocía la acusación puesto que no existía, y cuando hubo acusación no fué comunicada al reo para que la contestase. Todo esto prueba, fuera de duda, que la sentencia es nula por defectos sustanciales del procedimiento, y que siendo absoluta esa nulidad debe ser declarada de oficio.

15—Tal punto resuelto, en manera alguna afecta al fondo de la cuestión, pues el incidente sobre pago de multa, se refiere solamente á una diligencia necesaria para la tramitación del juicio en que el interesado se presenta ejerciendo sus derechos. No puede, por consiguiente, dar lugar á la aplicación del art. 368, inc. 8º del Cód. de Proc.

16—Véase el num. 6.



SEN

dicción, núm. 3—*Nulidad*, núms. 4, 8, 9, 12, 13, 20, 21 y 23—*Término*, núms. 6 y 7—*Término extraordinario*, núms. 2 y 3—*Cosa juzgada*, núms. 2 y 4—*Diligencias de prueba*, núms. 7 y 14—*Excepción de falta de personería*, núm. 5—*Oblación*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 4—*Excepción de falsedad*, núm. 1—*Interdicto*, núm. 1—*Prueba*, núm. 14—*Costas*, núm. 8—*Instrumento privado*, núm. 4—*Excepción de compensación*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 13—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 8—*Liquidación*, núm. 1.

Sentencia definitiva—Véase: *Regulaciones*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 20—*Excepciones*, núm. 7—*Liquidaciones parciales*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 24.

Sentencia ejecutoriada—Véase: *Condición*, núm. 1—*Comprador*, núm. 6.

1a. Sentencia extranjera—Que declara la filiación natural, hace cosa juzgada en la República, aun cuando los procedimientos de la prueba no sean iguales á los que se exigen por nuestras leyes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 427, Ser. 2a.

Sentencia inapelable—Véase: *Regulación de honorarios*, núm. 1.

Sentencia judicial—Véase: *Madre*, núm. 1.

1b. Sentencias—Dictadas contra un Ministro residente

1a- Es inprocedente é inadmisibile pretender que nuestros Tribunales entren á examinar el procedimiento observado en el país extranjero donde la sentencia fué dictada, como asimismo improcedente que se pretenda que bajen á examinar la justicia intrínseca de la resolución que se ha de cumplir, pues esta práctica que solo existe en Francia, es reputada por la generalidad de los publicistas, como atentatoria á la independencia de las demás naciones. Cuando nuestro Cód. de Proc. establece, como requisito para la ejecución de la sentencia que se trate de una obligación válida—art. 559, inc. 3o, Cód. de Proc.—solo significa que las leyes de que deriva la obligación no sean ofensivas á la moral ó se opongan al espíritu de nuestra legislación, es decir, á sus principios fundamentales.

1b—Se le supone exento de la jurisdicción de nuestro país, en virtud de la flicción de exterritorialidad consagrada por el dere-



SEN-SEP

de la Nación que representa, son válidas y hacen cosa juzgada ante los de la República, pues se le considera á dicho funcionario domiciliado fuera del territorio nacional.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 427, Ser. 2º.

Sentencias ejecutoriadas—Véase: *Actos jurídicos*, número 1.

Sentido general—Véase: *Testamento ológrafo*, núm. 5.

1. Separación de bienes—De los esposos, no altera los derechos que terceros contratantes de buena fe tengan á los bienes conyugales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 436, Ser. 2º.

2. Separación de bienes—En este juicio, no puede la esposa ser puesta en posesión de los bienes que el esposo tenga en sociedad con terceros.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 484, Ser. 2º.

cho de gentes á los Embajadores y demás Ministros Diplomáticos, desde que se supone, como dice Fiore, que aunque el Ministro reside efectivamente en país extranjero, continúa domiciliado en el suyo propio, y por consiguiente sometido á las leyes de su patria, destinadas á reglar su capacidad civil, sus derechos de propiedad y todo lo que se relaciona con los contratos, sucesiones y otros puntos semejantes.—Véase: Fiore, *Derecho Internacional Público*, tom. 2, pág. 566; Laurent, *Derecho Civil Internacional*, tom. 3, págs. 770-74 y siguientes; Dalloz, verb. *Agent Diplomatique*.—La S. C. N. ha dicho, que los Ministros pueden ser sometidos á la jurisdicción local, *solo cuando renuncien, con autorización de su gobierno, los privilegios que les son propios*.—Véanse: F. de la S. C. N., tom. 10, pág. 108, Ser. 2º.

1—Los antecedentes que obran en el fallo anotado, no dan suficientes datos para juzgar si el sumario corresponde ó nó á lo resuelto: de esos antecedentes no resulta nada que justifique lo que el sumario establece. La Cámara debiera ordenar al compilador de sus fallos que suministre en sus publicaciones todos los antecedentes de cada resolución, de lo contrario no se conseguirá el objeto que esa publicación se propone, cual es hacer conocer las resoluciones de la Excma. Cámara.

2—Sin perjuicio de iniciar y proseguir ante quien corresponda, las acciones conducentes para liquidar la sociedad con el tercero

SEP—SIM

Separación de bienes—Véase: *Terceros*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 7—*Divorcio*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 2.

1a. Servicio público—Existe responsabilidad civil para las empresas de ferrocarriles, por los perjuicios que se ocasionen á los viajeros por culpa ó negligencia de los empleados, aunque la vía no se encuentre librada al servicio público, á favor de los viajeros que no le hayan pagado el pasaje.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 301, Ser. 2ª.

Servicios—Véase: *Contrato de locación*, núm. 6—*Contrato de sociedad*, núm. 4.

Servicios prestados—Véase: *Reconocimiento*, núm. 2.

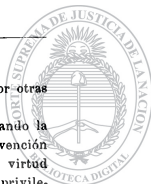
Silencio—Véase: *Concubina*, núm. 1—*Confabulación*, número 1.

1b. Simulación—La acción de simulación de una escritura pública, es improcedente, siempre que reconociéndose la

1a—En cuanto á la primera parte, véase verb. *Ferrocarril*, núm. 2. En cuanto a la segunda debe decirse que el art. 1111 del Cód. Civ., establece claramente que no hay responsabilidad cuando la persona que sufre el daño se encuentra en esa situación por una falta imputable á sí misma, la que no es aplicable al caso presente. Para comprobar esto bastaría consultar á Aubry y Rau, citado por el Cód. en su nota: «Si alguno, arrojando alguna cosa sobre un terreno que le pertenece y que no está sometido á una servidumbre, de paso hiriese por casualidad á un extraño que se encontraba allí sin permiso, no comete un cuasi-delito». Pero en el caso presente el damnificado subió al tren con permiso, y por consiguiente la responsabilidad de la empresa es evidente y debe indemnizar el perjuicio causado.—Arts. 1074, 1108, 1111 y 1113, Cód. Civ.

1b—Se dijo de una nulidad de una escritura argüida de simulación, fundándose en que el precio no fué de contado: más adelante, siguiendo el juicio su curso, se dijo al espresar agravios, que el precio no había existido. Esta causal de la simulación, no puede tomarse en consideración porque ella es estemporánea, y solo deben tomarse en cuenta los hechos alegados al entablar la acción, porque de lo contrario se quebrantaría el principio que rigen las contiendas judiciales, que exige que éstas se libren en terreno neutral provistos los litigantes de armas iguales, lo que no podría





SIM

existencia del acto, se haya pedido su nulidad por otras causas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 160, Ser. 2ª.

2. Simulación—La de una escritura pública, cuando la acción se deduce por las partes que han tenido intervención directa en su formación, solo puede declararse en virtud de un contradocumento: la prueba testimonial ó privilegiada, es procedente únicamente respecto de terceros.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 197, Ser. 2ª.

3. Simulación—La simple demanda, para que se declare la de un instrumento público, no basta para fundar un embargo preventivo del mueble á que se refiere.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 2ª.

suceder si se permitiera que se atacase de simulación un acto fundado en una causal y más adelante se alegaran otros. No podría la parte defenderse y demostrar la inconsistencia de tales causas.

2—Véase: Inst. tom. 2, verb. *Simulación*, núms. 1, 7 y 11.

3—Esta resolución fué confirmada «por sus fundamentos», sin tener en cuenta la jurisprudencia contradictoria sentada por la misma Cámara en dos casos análogos al presente. Los fundamentos del auto de 1ª Inst. eran los siguientes: Que si bien las antiguas leyes señalaban los casos en que los embargos preventivos debían ser decretados—Ley 1ª, tit. 9, Part. 3ª,—vino más tarde en la práctica á quedar esta medida librada al arbitrio judicial: que los arts. 443, 445, 446, 447 y 448 del Cód. de Proc., vinieron á limitar la facultad discrecional del Juez á los casos allí establecidos taxativamente, fijando bases ciertas que pueden servir de norma á los jueces. Que no tratándose en el caso del sumario, de una acción reivindicatoria, no es aplicable la disposición del art. 447 del Cód. de Proc.: Que por los mismos motivos no se ha concedido jamás el embargo preventivo de los bienes cuya escrituración se solicita, aunque se haya pedido como medida de seguridad y fundado en instrumento público—art. 443, inc. 2ª.—Resulta que van tres resoluciones contradictorias confirmadas «por sus fundamentos», sin estudio de ninguna clase por la Cámara. Por lo visto, más conviene tener una resolución favorable de un Juez de 1ª Inst., aunque esa resolución sea contraria á la ley, que tener una resolución en contra, aunque no se ajuste á la ley, pues en cualquier de los dos casos la sentencia será confirmada «por

SIM—SÍN



4. Simulación—De un acto jurídico en perjuicio de los acreedores, debe ser declarada aun en virtud de simples presunciones.—Jur. Com., tom. 1, pág. 338, Ser. 2ª.

Simulación—Véase: *Nulidad*, núm. 17—*Protocolos*, núm. 1—*Precio*, núm. 2—*Árbitros-arbitradores*, núm. 1.

1. Síndico—Puede oponerse, ó negar eficacia al contrato, en el juicio sobre ejecución de una prenda.—Jur. Com., tom. 3, pág. 469, Ser. 2ª.

2. Síndico—Al síndico que demanda la nulidad de la prenda por ser posterior á la efectiva cesación de pagos, y para garantizar una deuda anterior, corresponde probar sus asertos.—Jur. Com., tom. 3, pág. 441, Ser. 2ª.

sus fundamentos». Por cierto que son bien elocuentes estos hechos. Parece que el poder judicial fuese el encargado de administrar injusticias. Es necesario reaccionar contra esta resolución que tiene por base «los fundamentos» de 1ª Inst. En el Poder Judicial de la Capital tenemos hombres rectos ó ilustrados que no deben permitir se cometan errores como éstos. Los casos contradictorios resueltos se registran en el verb. *Nulidad*, núm. 2; y *Petición*, núm. 1.

4—Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Simulación*, núms. 2, 5 y 6.

1—El art. 1704 del Cód. de Com. ant., establece que el síndico debe ser oído en la acción que deduzca el acreedor prendario para la venta de la prenda; esa facultad que tiene de intervenir no la ha establecido la ley para asumir un rol pasivo en el juicio, sino por el contrario á fin de someter á discusión toda cuestión que crea legítima, como la de pedir la ineficacia del contrato.

2—La nulidad de la prenda por las razones que se invoquen debe ser comprobada por el que la alega en virtud del principio que rige la prueba de las acciones en juicio.—Ley 1, tit. 14, Part. 3ª.—No puede aplicarse el art. 1540, inc. 4ª del Cód. de Com. ant., pues este artículo supone justificado el hecho de la constitución de la prenda por obligaciones de fecha anterior á la cesación de pagos que no tuviera esta garantía.—Véase la obra del Dr. Moreno sobre quiebras, pág. 42.—Tampoco en el caso presente, podía argumentarse con los arts. 742 y 744, á fin de justificar la nulidad alegada por el síndico respecto de la constitución de la prenda, porque la única sanción de éstos, consiste en la obligación, por parte del acreedor prendario, de justificar por escrito el contrato, pues el mismo síndico en vez de negar su existencia lo

SÍN

3. Síndico—El que pide la nulidad del contrato de prenda, no puede desconocer su existencia.—Jur. Com., tom. 3, pág. 441, Ser. 2ª.

Síndico—Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Títulos de propiedad*, núm. 3—*Verificación de créditos*, núm. 2.

1. Síndico provisorio—De un concurso, no puede ser

reconocido espresamente. Por otra parte, la prenda había sido vendida de acuerdo con el deudor, para abonar el crédito, lo que implica que medió entrega de ella y hace innecesaria la prueba escrita de su constitución.—Art. 742, Cód. de Com. ant.

3—La petición de nulidad de un acto jurídico implica su existencia pues es fundado en el hecho de la existencia, que se pide su nulidad. No se puede declarar nulo lo inexistente. Aun después de declarada la nulidad ella existe, solo deja de tener valor legal.

1—Las prescripciones legales sobre el mandato, rigen las relaciones jurídicas del síndico provisorio para con el concurso, y aun las de éste para con los terceros—art. 1870, Cód. Civ.—Por otra parte, el art. 1946 establece, que los actos ejecutados por el mandatario en los límites del mandato, son considerados como hechos por el mandatario en persona. El síndico provisorio, no procede por sí en su nombre personal, sino como representante del concurso en los hechos que han ocasionado los perjuicios que se reclaman. De aquí resulta que para responsabilizar al mandatario por los actos realizados, se debe tan solo averiguar si ha obrado en los límites del mandato. A este respecto, basta leer los arts. 1571, 1574 y 1579 del Cód. de Com. ant., los que con toda claridad obligan á los síndicos provisorios á ejercitar las acciones necesarias á fin de garantizar los derechos de los acreedores, uno de los cuales se dirige á impedir que el fallido oculte sus bienes. Así como los representantes de las personas jurídicas instituidas para el bien común, como la Municipalidad y otras comparaciones del mismo carácter, son penadas con una condenación en costas que ellas pagan; así como se vé todos los días la imposición de costas á la parte vencida las que nunca son á cargo del procurador; así tampoco hay razón para que se varíe la doctrina con relación á los síndicos, á menos que se demuestre que la pena es personal para éstos en los mismos casos que lo es para aquéllos, es decir, que circunstancias especiales induzcan una responsabilidad personal que importan respecto al acto ejecutado una estricta limitación en el mandato ejercido, ó sen el resultado de un hecho propio. El síndico no obra en un hecho propio ni en un carácter personal, obra por cuenta y



SOB—SOC

responsabilizado personalmente por los daños y perjuicios que resulten á terceros por actos llevados á cabo en su carácter de mandatario del concurso.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 497, Ser. 2ª.

1a. Sobrinos nietos—Los herederos del tercer grado—sobrinos nietos—carecen de derecho para concurrir á la herencia con los del segundo—sobrinos—ni aun por derecho de representación por no existir los de primer grado—hermanos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 93, Ser. 2ª.

1b. Sociedad—Siempre que se litigan intereses sociales, el socio que tenga los libros está obligado á presentarlos á solicitud de la contraparte.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 118, Ser. 2ª.

2. Sociedad—De Socorros Mutuos, las relaciones de derecho entre médico y enfermo, no sufren alteración por el hecho de estar incluido el primero en el cuerpo médico de la Sociedad de la cual sea médico el segundo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 2ª.

3. Sociedad—No puede desconocer la existencia de una Sociedad por falta de presentación del contrato, aquel que ha contratado con ella.—Jur. Com., tom. 4, pág. 39, Ser. 2ª.

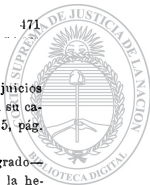
orden del concurso. La solución contraria al sumario, llevaría á los concursos á una situación bien precaria por cierto. Todo acto de ocultación de bienes se presenta siempre rodeado de misterios y dudas: si el síndico pudiese ser responsabilizado personalmente, jamás se descubrirían los bienes ocultos, porque la duda y la responsabilidad que esos actos entrañarían, serían suficientes para contenerlos y preferirían quedar en la inacción antes de incurrir en tan serias responsabilidades. Una resolución contraria llegaría hasta el absurdo de pretender que todos los mandatarios deben salir triunfantes en los mandatos que le son conferidos.

1a—Véase: verb. *Herederos*, núm. 5.

1b—Siempre que sean de propiedad de la sociedad, carece un socio de derecho para negarse á su presentación.

2—Véase: verb. *Médico*, núm. 1.

3—Véase: *Contrato de Sociedad*, núm. 568, Inst., tom. 1, y *Nulidad*, núm. 1855 del mismo tomo, art. 296 Cód. de Com. vigente.



SOC

4. Sociedad—Las operaciones llevadas á efecto individualmente con uno de los socios, no obligan á la sociedad.—Jur. Com., tom. 4, pág. 450, Ser. 2ª.

5. Sociedad—Un proyecto de contrato privado de sociedad, no basta para probar la existencia definitiva de ésta, si el que se dice socio invocaba un mandato al ejercer actos que pretende regidos por el contrato de sociedad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 230, Ser. 2ª.

6. Sociedad—Su disolución, no enerva el derecho de los acreedores para dirigir sus acciones contra cualquiera de los socios solidarios que la formaban.—Jur. Com., tom. 2, pág. 582, Ser. 2ª.

7. Socios—Reconocida judicialmente su existencia, la resolución de las cuestiones suscitadas entre los socios, corresponde á la jurisdicción arbitral.—Jur. Com., tom. 2, pág. 211, Ser. 2ª.

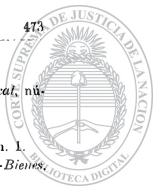
Sociedad—Véase: *Fallecimiento*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 3—*Separación de bienes*, núm. 2—*Contrato*, núm. 12—*Disolución*, núms. 1 y 2—*Embargo preventivo*, núm. 22—*Inscripción*, núm. 2—*Matricula de rematador*, núm. 1—*Socio co-*

4—Art. 302, Cód. de Com. vigente.

6—Se pretendió eludir la responsabilidad de uno de los socios presentando una escritura pública de disolución de sociedad según la cual el socio que había sido demandado quedaba exonerado de toda obligación, y á cargo del otro socio todo el activo y pasivo de la sociedad. Esa escritura no tiene valor alguno para el acreedor, porque ese acto celebrado exclusivamente entre los socios no altera los derechos de terceros acreedores creados por obligaciones anteriores á la disolución social. Según el art. 496 del Cód. de Com. ant., la convención por la cual un socio toma á su cargo el activo y pasivo, no obliga ni perjudica á los acreedores, pues para su exoneración sería necesario que el acreedor consintiese en ello. Estando un documento suscrito con fecha anterior á la disolución de la sociedad, ésta queda obligada para con el tercero.—Arts. 449, 454 y 456, Cód. de Com. ant.

7—Art. 511, Cód. de Com. ant.





SOC

mandatario, núm. 2—*Falsedad*, núm. 5—*Fuero local*, número 1.

Sociedad anónima—Véase: *Gerente*, núm. 1.

Sociedad colectiva—Véase: *Socios solidarios*, núm. 1.

Sociedad conyugal—Véase: *Terceros*, núm. 1—*Bienes*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 2.

Sociedad de Socorros Mutuos—Véase: *Honorarios médicos*, núm. 1—*Médicos*, núm. 1.

Sociedad en comandita—Véase: *Declaración*, núm. 2.

Sociedad extranjera—Véase: *Inscripción*, núm. 1.

Sociedades—Véase: *Civil*, núm. 1.

Sociedades civiles—Véase: *Juez*, núm. 1.

Sociedades mercantiles—Véase: *Esposa*, núm. 6.

Socio—Véase: *Mandato*, núm. 5—*Rescisión*, núm. 1.

1a. Socio comanditario—Adenda al concurso, las sumas no integradas del capital que se hubiese obligado á aportar.—Jur. Com., tom. 2, pág. 224, Ser. 2ª.

2. Socio comanditario—Debe hacerse cesar en la administración de la Sociedad al socio comanditario desde que se inicie por el capitalista la disolución.—Jur. Com., tom. 2, pág. 101, Ser. 2ª.

Socio industrial—Véase: *Dependiente*, núm. 2.

1b. Socios—Las cuestiones entre ellos, deben ser resueltas por árbitros-arbitradores.—Jur. Com., tom. 3, pág. 146, Ser. 2ª.

Socios—Véase: *Sociedad*, núms. 6 y 7—*Poder*, núm. 3—*Fallecimiento*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 3—*Liquidación de Sociedad*, núm. 2—*Contrato*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 9—*Dependientes habilitados*, núms. 1 y 2—*Contrato de*

1a—Art. 469, Cód. de Com. ant.

2—De los términos del contrato resultaba lo espuesto en el sumario.

1b—Art. 511, Cód. de Com.

SOC—SUB

sociedad, núms. 1, 2 y 3—*Disolución de sociedad*, núms. 1 y 2—*Embargo preventivo*, núm. 22—*Matricula de rematadores*, núm. 1.

1a. Socios solidarios—Si bien los de una sociedad colectiva, solo son personalmente responsables de los créditos por ella contraídos, después de ejecutado el capital, la ejecución es innecesaria cuando la sociedad ha sido disuelta y los socios declaran que carecían de bienes con que hacer frente á sus compromisos.—Jur. Com., tom. 3, pág. 62, Ser. 2ª.

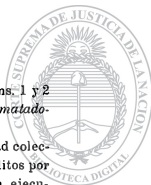
Socios solidarios—Véase: *Declaración*, núm. 2.

Soltura—Véase: *Muerto*, núm. 1.

1b. Subrogación—Nó puede conceptuarse tal, el contrato

1a—No se puede cobrar del miembro de una sociedad colectiva un crédito pasivo de ella sin antes haberse demandado á la sociedad, y recién después de agotado su capital social, el acreedor puede exigir solidariamente, el saldo, contra cualquiera de los socios—arts. 454, 500 y 506 del Cód. de Com. ant.—Alauzet, tom. 1º, núm. 287; Delamarre et Lepoitvin, enseñan la misma doctrina.—Pero si la sociedad está disuelta ¿qué objeto práctico habria en obligar al acreedor á que la demande y la ejecute previamente? No seria equitativo obligar á un acreedor á seguir un juicio estéril que no dará resultado alguno. No debe olvidarse que en cuestiones de comercio debe procederse á verdad sabida y buena fe guardada.

1b—La subrogación legal ó convencional, supone el acto de pagar uno lo que otro adeuda, trasmitiéndose en ese caso á su favor todos los derechos del acreedor: la cesión no exige la concurrencia de pago, aún cuando pueda haber entrega de precio ó cualquier otro acto; pero siempre produce el efecto de trasferir á favor del cesionario los derechos del cesante—arts. 767 y 1434, Cód. Civ.—Y esa transferencia, no confiere al cesionario, sino los derechos que corresponden al cedente, y siempre que no se trate de la entrega del título de crédito contra el deudor cedido, en los términos del artículo 1434, resulta que la cesión se rige por las estipulaciones que contenga la convención á las cuales quedan subornados los derechos que forman su objeto desde que con arreglo al art. 1497, las convenciones forman la regla á la que las partes deben someterse como á la ley misma.



SUB-SÚM

en que se cedia derechos en expectativa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 91, Ser. 2º.

Subsanación—Véase: *Diferencia*, núm. 1—*Vicios*, número 1.

Sucesión—Véase: *Universalidad*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 14—*Esposa*, núm. 3—*Herederos*, núms. 9 y 10—*Herencia del espuso*, núm. 1—*Honorarios médicos*, núm. 1.

Sucesor legal—Véase: *Título*, núm. 3.

Sucesor universal—Véase: *Posesión*, núm. 7.

Sueldo—Véase: *Contador*, núm. 3—*Contrato de sociedad*, núm. 4.

1a. Sueldos—De los mayordomos ó personas que dirigen y cuidan un establecimiento á nombre del propietario, no se encuentran comprendidos en el inc. 5º del art. 4035 del Cód. Civ. sobre prescripción de sueldos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 60, Ser. 2º.

2. Sueldos—De los mayordomos ó personas que cuidan ó dirigen un establecimiento á nombre del propietario, solo se prescriben á los diez años.—Jur. Civ., tom. 5, págs. 5 y 160, Ser. 2º.

Suelo—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 10.

1b. Suma—La del poder público, conferido á Rosas, importa la reunión, en el Ejecutivo, de las facultades inherentes á los demás Poderes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 183, Ser. 2º.

Suma—Véase: *Heredero*, núm. 4—*Renta*, núm. 1.

Suma determinada—Véase: *Arbitros*, núm. 1.

Suma menor—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.

1a—Los sueldos de los administradores de un establecimiento de campo no están sujetos á esta prescripción sino á la del art. 4023. En igual sentido se ha expedido la Cámara en otro caso.—Véase: *Ins.*, tom. 2º, verb. *Prescripción de sueldos*, núm. 1.

1b—Véase: verb. *Actos judiciales*, núm. 1.





SUM—SUS

Sumas—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 1.

1a. Sumario—Si durante él, considera el Juez procedente la escarcelación, puede decretarla.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 85, Ser. 2ª.

Sumario—Véase: *Alimentos*, núm. 3—*Declaraciones*, núm. 7—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 4—*Ratificación*, núm. 1.

Superior—Véase: *Adhesión*, núm. 1.

1b. Sustitución de personas—El interesado, que recono-

1a—Según lo establecido en el art. 12 de la Ley de fianzas, el auto que denegase la escarcelación antes de terminado el sumario, no causa instancia, y el reo puede gestionarla nuevamente y el Juez decretarla cuando aparezca que el caso entra en los términos de la ley.

1b—Se dijo de simulación de una escritura pública de adquisición de acciones y derechos: la que consistía en que una persona aseguraba que esa adquisición había sido hecha aparentemente a favor del que figuraba en el contrato, pero que en el fondo la adquisición fué para el actor, y que eso se hizo por motivos particulares que le determinaron a no hacer figurar su nombre como comprador. El demandado negó lo aseverado en la demanda, y desde luego su prueba correspondía al actor—Ley 14, tit. 1º, Part. 3º.—La simulación debió probarse: su prueba es muy amplia cuando se trata de relaciones jurídicas de tercero, cuando éste perjudicado por enagenaciones practicadas por su deudor se ve privado de las garantías que le ofrecían los bienes de aquél; pero cuando, como en el presente caso, no se trata de la acción de un tercero dirigida contra los autores de una simulación, sino de una demanda, de uno de los autores contra el otro de los mismos autores del acto simulado, la ley ha exigido la prueba escrita de la simulación para que ésta pueda ser declarada. No puede decirse que la prueba escrita exigida por la ley para comprobar la simulación, sea solo aplicable al caso en que digan de simulación los mismos otorgantes de la escritura que se quiere dejar sin efecto, pues si se requiere prueba escrita para ese caso, *a fortiori*, ha de ser necesario un documento cuando no oponiéndose simulación total sino parcial, podría quitarse toda fuerza a una escritura pública, por medio de dos testigos, que declaren que aquel en cuyo favor se estipuló y se extendió el contrato, no es el que el instrumento público designa, sino otro que se pretende parte en el acto. Por el hecho mismo de esa pretensión, no es un tercero que pueda prevalecerse de la prueba privilegiada.

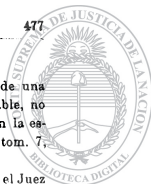
SUS

ciendo la verdad del acto, solo pretende la existencia de una sustitución de personas de la cual se reconoce culpable, no puede conceptuarse tercero, aún cuando no exista en la escritura constancia de su intervención.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 197; Ser. 2ª.

1. Sustracción.—De mercaderías depositadas por el Juez de Comercio, mientras no se deduzca acción criminal, el conocimiento y resolución del incidente corresponde a la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 1, pág. 366, Ser. 2ª.

Ese que alega la pretendida simulación podría perfectamente munirse del contradocumento en las mismas condiciones que el que resguarda los derechos del de una escritura pública simulada. El Dr. Bazán decía en otro caso igual al presente: «Los derechos que confiere una escritura pública, no pueden estar subordinados ni depender del simple dicho de testigos, que declaran que la cosa objeto del contrato pertenece ó se adquiere para un tercero y no para el titular de ella.»—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Escritura pública*, núm. 1125; tom. 2º, verb. *Simulación*, núm. 11.

1—Aunque se trate efectivamente de una sustracción de efectos que podría motivar un procedimiento criminal, es sin embargo evidente que se trata de la violación de un depósito constituido por orden de un Juez de Comercio, que por consiguiente es de atribución del Tribunal que ordenó el depósito el ordenar las medidas puramente civiles y conservatorias a fin de obtener la restitución del depósito.





Tacha legal—Véase: *Acreedor*, núm. 4.

Tachas—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1—*Testigos*, número 4.

Tasación—Véase: *Derechos posesorios*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 13.

Temeridad—Véase: *Sentencia*, núm. 1—*Costas*, núms. 10, 13, 15 y 16.

Templo—Véase: *Religión autorizada*, núm. 1.

1a. Tenedor—Que para conservar la cosa, ha hecho gastos ó mejoras necesarias, tiene el derecho de retención, hasta ser indemnizado por el propietario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 234, Ser. 2ª.

Tenedor—Véase: *Letra de cambio*, núm. 1—*Billete falso de banco*, núm. 1.

Tenencia—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 2—*Hijos*, núm. 2—*Apelable*, núm. 2—*Endoso en blanco*, núm. 2.

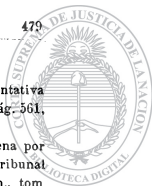
1b. Tenencia de los hijos—El Juez de lo Civil, es el único competente para conocer en las cuestiones sobre tenencia de los hijos después de iniciada la acción de divorcio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 491, Ser. 2ª.

1c. Tentativa—Cuando el arma no da fuego no obstante

1a—Art. 2466 del Cód. Civ.

1b—Véase verb. *Juez de lo Civil*, núm. 1.

1c—Art. 99, Cód. Pen. vig.



TEN

los esfuerzos del reo, debe ser castigado como tentativa y no como delito frustrado.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 561, Ser. 2^a.

2. Tentativa—La de un delito castigado con pena por tiempo indeterminado, debe serlo con la que el Tribunal juzgue según las circunstancias del caso.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 195, Ser. 2^a.

Tentativa—Véase: *Abandono*, núm. 1—*Delito*, núm. 1—*Ley vigente*, núm. 1—*Robo*, núms. 2 y 3—*Objetos robados*, núm. 1—*Tentativa de estafa*, núm. 2—*Violación*, núm. 2.

1a. Tentativa de asesinato—La herida inferida después de la riña, tomando á la víctima desprevenida, por haber aquélla terminado, debe castigarse como lesión y no como tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 339, Serie 2^a.

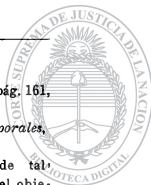
Tentativa de asesinato—Véase: *Lesiones corporales*, números 2 y 3—*Lesiones*, núm. 4.

1. Tentativa de estafa—Tratándose de ella, la declaración del culpable de falsificación de documentos privados, no basta para demostrar que los demás obrasen de mala fe, por conocer la falsificación verificada para efectuar el delito.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 79, Ser. 2^a.

2. Tentativa de estafa—Aun cuando por regla general, este delito no es punible, debe ser castigado como toda tentativa de delito, siempre que resulten elementos suficientes para juzgar la intención del autor.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 550, Ser. 2^a.

1. Tentativa de homicidio—Para declarar su existencia, debe atenderse especialmente á los antecedentes del delito, la clase del arma empleada y la repetición de los actos con

1a—El herido curó dentro de un mes, en cuyo caso es aplicable el art. 120, inc. 2^a del Cód. Pen.



TEN—TER

que pretendía llevarse á cabo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 161, Ser. 2ª.

Tentativa de homicidio—Véase: *Lesiones corporales*, núms. 1 y 8—*Intención homicida*, núm. 1.

1a. Tentativa de hurto—No puede calificarse de tal cuando el reo se ha apropiado, moviendo de su lugar el objeto, y por causas ajenas á su voluntad, se le obliga á la devolución.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 384, Ser. 2ª.

1b. Tentativa próxima—Debe ser castigada con la misma pena que corresponde al delito consumado, disminuida en una cuarta parte ó en la mitad, según las circunstancias del proceso.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 183, Ser. 2ª.

Tentativa próxima—Véase: *Tiro*, núm. 1.

Tercer contratante—Véase: *Documento privado*, número 1.

Tercer grado—Véase: *Herederos*, núm. 5—*Sobrinos-nietos*, núm. 1.

1c. Tercería—La presentación, denunciando el embargo de bienes que se conceptúan propios, y pidiendo su levantamiento, importa la deducción de una tercería que debe sustanciarse sin más trámite.—Jur. Com., tom. 4, pág. 18, Ser. 2ª.

2. Tercería—Declarada procedente, el depositario debe

1a—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Robo* y su nota.

1b—Arts. 320 y 20, inc. 3º, Cód. Pen. anterior.

1c—Cuando el desembargo que se solicita se funda en el dominio sobre los bienes embargados, es bastante para la sustanciación del incidente. Así lo tiene resuelto la Cámara en casos análogos.—Véase: Sarraean con Chapon.

2—Es principio recibido que el depositario no puede apreciar por sí mismo sus honorarios por el depósito, sino que el juzgado que conoce en la causa es quien debe determinarlos, siendo deber del depositario entregar á la orden del Juzgado las cantidades que hubiese recibido por razón del depósito. Si se declara procedente la

TER

hacer entrega inmediata del depósito, sin que pueda alegar privilegio de retención por sus honorarios, que no son á cargo del tercerista.—Jur. Com., tom. 2, pág. 89, Ser. 2ª.

Tercería—Véase: *Poseción*, núm. 14—*Fosiciones*, números 9 y 10.

1a. Tercería de dominio—Justificada la propiedad por escritura pública y la posesión por voluntad del vendedor, la tercería de dominio es procedente.—Jur. Com., tom. 4, pág. 322, Ser. 2ª.

1b. Tercerista—Cuando éste, no justifica la propiedad de los bienes embargados, debe ser condenado en todas las costas del juicio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 499, Ser. 2ª.

Tercerista—Véase: *Tutor*, núm. 2—*Terceria*, núm. 2.

1. Tercero—Comprador de buena fe, de efectos robados, es el único que tiene derecho á ellos si antes los hubiese poseído.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 399, Ser. 2ª.

Tercero - Véase: *Simulación*, núm. 2—*Litigio*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 5—*Notificación*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 3—*Vencimiento*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 1—*Mandante*, núm. 1—*Sustitución de personas*, núm. 1—*Cestionario*, núm. 2—*Protesto*, núm. 2—*Fianza de escarcelación*, núm. 1.

1c. Terceros—Mientras no se diluciden los derechos alegados por terceros, sobre bienes de la sociedad conyugal, no debe darse la posesión á la esposa, de los bienes que le co-

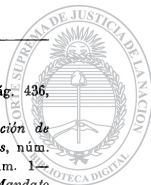
terceria, no hay razón para que se le obligue al tercerista á responder por los salarios que correspondan al depositario, y que como costas del juicio deben ser satisfechas por el ejecutado.

1a—Es la prueba acabada del dominio—arts. 577, 3265 y 2609, Cód. Civil.

1b—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

1c—De los que la correspondan por la separación, pero tan solo los que sean materia de las cuestiones con terceros.





TER

rresponde por la separación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 436, Ser. 2ª.

Terceros—Véase: *Privilegios*, núm. 1—*Separación de bienes*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1—*Gastos*, núm. 1—*Municipalidad*, núm. 2—*Sindico provisorio*, núm. 1—*Herencia vacante*, núm. 1—*Información*, núm. 2—*Mandato verbal*, núm. 2—*Mandato especial*, núm. 2—*Separación de bienes*, núm. 2—*Títulos de propiedad*, núm. 1—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Disolución de sociedad*, núm. 1—*Endoso en blanco*, núm. 1—*Escepción de juego*, núm. 1—*Pago*, número 3.

1. Término—El que la ley establece para espresar agravios, solo puede computarse desde la fecha en que terminada la tramitación y los autos se encuentren en secretaría á la disposición de las partes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 484, Ser. 2ª.

2. Término—Vencido el de prueba, no puede producirse, ni aun sobre hechos que la parte jure no haber conocido con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 213, Ser. 2ª.

3. Término—El de prueba de las escepciones dilatorias,

2—Vencido el término de prueba, no puede solicitarse ninguna medida probatoria que no se haya pedido antes de su vencimiento, pues el art. 118 del Cód. de Proc. establece que solo puede producirse aquella prueba que solicitada dentro del término, no se hubiese producido por culpa de las autoridades encargadas de diligenciarlas. Debe tenerse presente el caso de escepción establecido en el art. 245, que se refiere á la prueba instrumental.

3—Se funda esta resolución en que el art. 89 del Cód. de Proc., no acuerda otro término probatorio que la mitad del señalado en el art. 111. Este artículo dice, que el término *ordinario* de prueba no excederá de 40 días, con el aumento debido á la distancia: Que en ninguna de las disposiciones de esa Sección—IV.—se habla de término *extraordinario*: Que el concedido por el 113 y siguientes es para la prueba en el juicio ordinario, y para cuando concurren las circunstancias que en el mismo se espresan, y que por consiguiente, no puede aplicarse al presente caso en el que se trata de la sustanciación de una escepción dilatoria. Dictada esta sentencia por un Juz.

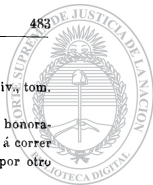
TER

no puede exceder de la mitad del ordinario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 22, Ser. 2ª.

4. Término—El fijado para la prescripción de honorarios de abogados, en pleitos no terminados, empieza á correr desde que la parte aparece en autos patrocinada por otro letrado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 561, Ser. 2ª.

gado de 1ª Inst. se elevó en apelación y la Cámara la confirmó «por sus fundamentos». Consideramos que esta resolución no resuelve el punto, en la forma que corresponde, atendiendo á las leyes que rigen el caso. Si para la prueba de las excepciones dilatorias se fija la mitad del término ordinario, y nada se dice del extraordinario, es evidente que las disposiciones establecidas para este término quedan en pie. El art. 89, es una disposición de excepción, y como tal debe interpretarse restrictivamente: en manera alguna su disposición puede ampliarse á otros casos que no estén espresamente comprendidos en la excepción. Hay argumentos que prueban demasiado y que por consiguiente no prueban nada. Si el término de prueba en las excepciones dilatorias, no puede exceder de 20 días, es evidente que toda la prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término. Y así, si por culpa de las autoridades encargadas de recibir la prueba, no puede ella producirse dentro del término, no podrá producirse fuera de él, porque el art. 89 lo prohíbe. El término no puede exceder de la mitad del ordinario, lo que sería abiertamente una injusticia. El término de prueba es para pedir, ordenar y producir la prueba dentro de él. Si el término no puede pasar del fijado en el art. 89 ¿cómo podría producirse la prueba después de vencido el término? Si la ley calla al respecto, es porque ella ha querido eliminar la disposición del art. 118, según la doctrina sentada por la Cámara. Consideramos que si la Cámara no se aferrase á confirmar las resoluciones de 1ª Ins. «por sus fundamentos» y adujese argumentos propios, no se resolverían cuestiones tan importantes con esas tres palabras que ha tomado como cliché. Es cierto que se ve obligada á ello, á causa del cúmulo de asuntos que tiene que despachar. De aquí resulta una de dos cosas ó despacha poco y bien, ó mucho y mal. A fin de evitar los ataques que le hace la prensa diaria, opta por este último temperamento, que seguramente no es el que más convenga á la jurisprudencia ni á los intereses de los que tienen razón en sus pleitos.

4—De conformidad con lo resuelto en otros casos.—Véase: Inst., tom. 1ª, verb. *Prescripción de honorarios*, núm. 2138; Art. 4002, Cód. Civ. Véase: verb. *Prescripción de honorarios*, núm. 1, de este tomo.



TER

5. Término—Para contestar la demanda, no es perentorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 466, Ser. 2ª.

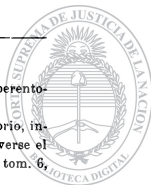
6. Término—La interrupción del término probatorio, interrumpe toda diligencia pendiente, y solo al resolverse el incidente empieza á correr nuevamente.—Jur. Civ., tom. 6, pag. 462, Ser. 2ª.

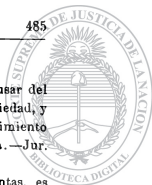
7. Término—El que la ley prescribe para la prueba de las excepciones en el juicio ejecutivo, no es esencial ni necesario cuando éstas no se fundan en hechos, y su supresión no anula la sentencia dictada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 345, Ser. 2ª.

5—No se encuentra comprendido en ninguno de los casos enumerados en el art. 45 del Cód. de Proc.

6—Esta interrupción se opera cuando se apela en cualquier incidente de prueba, pues con el otorgamiento del recurso se desprende el juez del conocimiento de la causa y no recupera su imperio sino después de devueltos los autos por el Superior. Cuando los autos se devuelven después de una apelación de esta clase, la providencia, haciendo saber á las partes su devolución, debe ser notificada personalmente á fin de que el término de prueba continúe corriendo, pues de lo contrario no corre el término. Así lo tiene resuelto la Cámara con perfecta razón.

7—El trámite de la prueba en el juicio ejecutivo, está prescripto por el art. 490 del Cód. de Proc. en su última parte. Del espíritu de esta disposición no se deduce que este trámite sea esencial é ineludible en todos los casos. La Cámara dice, que es de la naturaleza y alcance jurídico de los medios autorizados por la ley para desvirtuar la fuerza ejecutiva de un título lo que en cada caso debe determinar la procedencia del trámite cuya ausencia se hace notar. Cuando no hay hechos controvertidos, no hay hechos que probar, y entonces mal se aviene al espíritu del procedimiento el establecer trámites completamente inútiles, pues el progreso ó el rechazo de las excepciones que se fundan en antecedentes puramente legales, depende de la apreciación y pertinencia jurídica librada exclusivamente al criterio del magistrado. En la disposición del art. 490 citado en la parte que se relaciona con la prueba, está implícitamente contenida la del 103, que requiere para que una causa se abra á prueba, que la cuestión sea de hecho ó mista: que hayan hechos controvertidos.





TER

8. Término—El vencimiento del acordado para usar del derecho de retroventa, transfiere plenamente la propiedad, y la prueba de que queda sin efecto, por el consentimiento del comprador, debe resultar de escritura pública.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 14, Ser. 2°.

9. Término—Fijado para la rendición de cuentas, es prorrogable.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 441, Ser. 2°.

10. Término—Para el que es notificado por cédula, corre

8—Transfiere plenamente la propiedad—art. 1382, Cód. Civ.—En el caso presente el vendedor con pacto de retroventa se presentó deduciendo acción reivindicatoria fundándose en la existencia de un convenio que se decía celebrado entre vendedor y comprador con el fin de anular el contrato de compraventa. Verificada la venta con la condición que el vendedor podría retrotraerla devolviendo el precio en una época determinada, no se efectuó esa devolución; y debiendo fundarse la acción reivindicatoria en el dominio sobre la cosa,—art. 2758—es evidente, que para que esa acción prosperase era necesario que la propiedad hubiese vuelto al dominio del vendedor. Con este fin se dijo que el contrato había quedado sin efecto por medio de otro convenio. ¿Cómo debe establecerse y comprobarse la existencia de ese convenio? El art. 1184 establece con toda claridad que «deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad, los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad ó usufructo, ó alguna obligación ó gravamen sobre ellos». En presencia de esta disposición, aun dado el caso que fuese exacto que tal compromiso existió, siendo necesario que ese convenio se celebrara por escritura pública, no habiéndose hecho en esa forma, no habría existido la traslación del dominio, ni le habría conferido la calidad de propietario, pues tal documento solo importaría una obligación de hacer, que se resolvería en daños y perjuicios si no se cumpliera lo pactado. Por consiguiente, no procedía la acción reivindicatoria por carecer el actor del dominio que la ley requiere como esencial para el ejercicio de esta acción.

9—No solo se declaró prorrogable el término, sino que la Cámara revocó un auto en el que denegaba la prórroga el Juez, sin atender á las causales invocadas, que la Cámara consideró atendibles y bastantes.

10—Si hay error en las fechas de las cédulas —la que se agrega al espediente y la que se deja á la parte—ese error no es imputable al litigante sino á la oficina.



TER

desde la fecha de la que queda en su poder, y no de la que se agrega al expediente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 310, Ser. 2^a.

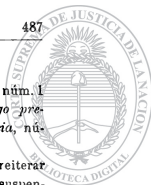
11. Término—Para presentar posiciones, no es perentorio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 239, Ser. 2^a.

12. Término—La presentación de escrito oponiendo excepciones, suspende el término para contestar la demanda, pues no es fatal según la ley.—Jur. Com., tom. 4, pág. 511, Ser. 2^a.

Término—Véase: *Diligencias de prueba*, núms. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 y 15—*Instrumento público*, núm. 1—*Juicios*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 1—*Vencimiento*, núm. 1—*Oblación*, núm. 1—*Auto*, núm. 2—*Rebeldía*, núms. 3 y 4—*Prórroga*, núm. 1—*Prueba*, núms. 9, 13, 15 y 23—*Testigos*, núms. 2, 5, 9 y 11—*Recibos de descargo*, núm. 1—*Declaraciones*, núms. 6, 10, 11 y 12—*Desalojo*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 8—*Posiciones*, núms. 8, 9 y 12—*Rendición de cuentas*, núm. 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 5—*Apelación*, número 1—*Comprador*, núms. 4 y 9—*Documentos*, núm. 13—

11—Así como el citado para absolver posiciones, puede alegar justa causa para haber dejado de comparecer, del propio modo el que no debe presentar las posiciones, puede alegar justa causa para presentar su pliego de posiciones el día de la audiencia. Alegada justa causal al efecto, debe abrirse á prueba el incidente.

12—Este sumario no espresa lo resuelto por la Cámara. Entablada una demanda, se confiere traslado, se opone excepción por un apoderado que no era el del demandado, y que se consideró con poder bastante al efecto. No habiéndose contestado la demanda por quien correspondía, se acusó la correspondiente rebeldía. Se ordenó que certificara el actuario, pasaron muchos días y en el interin se presentó el demandado reproduciendo el escrito de su apoderado oficioso. No se hizo lugar á la rebeldía porque según el errado criterio de la Cámara, la excepción propuesta por ese apoderado oficioso había interrumpido el término para evacuar el traslado de la demanda, lo que es un verdadero absurdo, y un contrasentido en procedimiento. Hay cosas tan elocuentes que conviene exhibirlas desnudas de toda argumentación.



TER

Excepciones, núm. 5—*Incidentes*, núm. 5—*Locatario*, núm. 1—*Valor del robo*, núm. 2—*Fianza*, núm. 4—*Embargo preventivo*, núm. 17—*Prescripción*, núm. 8—*Reincidencia*, número 2—*Menores*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 10 y 13.

1a. Término de prueba—Reabierto, la parte debe reiterar las peticiones que hubiese presentado durante la suspensión, si no hubiesen sido proveídas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 216, Ser. 2ª.

2. Término de prueba—Si la demanda fuese ampliada en tiempo, el término de prueba solo correrá desde la última notificación del incidente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 54, Ser. 2ª.

Término de prueba—Véase: *Documentos*, núms. 1, 2, 8, 10 y 11—*Prueba*, núm. 8—*Embargo preventivo*, núm. 19—*Libros de comercio*, núm. 4.

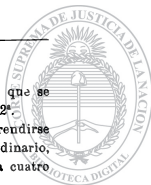
1b. Término extraordinario—De prueba, es común, aun cuando una sola de las partes lo haya solicitado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 2ª.

2b. Término extraordinario—Para la concesión de este

1a—La suspensión del término de prueba, produce el efecto de dejar pendiente toda diligencia, teniendo la parte que pedir su cumplimiento cuando se reabre el término. El alcance de la providencia que se dicta cuando un expediente es devuelto por el Superior, se considera que es con el objeto de que se haga saber a las partes que ha bajado el expediente y se encuentra en estado de formularse las peticiones que se consideran pertinentes y entonces es llegada la oportunidad de reproducir las peticiones.

1b—Así se desprende de lo dispuesto en los arts. 114, 115 y 117 del Cód. de Proc.—Escriche, verb. *Término probatorio*, ocupándose del término *ultramarino* y sin distinguirlo del ordinario, dice: «el término probatorio es común a las partes, de suerte que el concedido a la una aprovecha también a la otra, aunque ésta no lo hubiere pedido. Esta interpretación coloca a los litigantes en pie de la más perfecta igualdad para el ejercicio de sus derechos respectivos.

2b—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 114 del Cód. de Proc. Además, de los arts. 113 y 117 resulta que la exigencia del



TER

término, debe espresarse la clase y calidad de la que se pretende producir.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 389, Ser. 2^a.

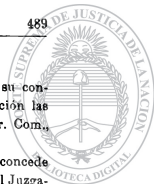
3. Término extraordinario—Para la prueba á rendirse en el extranjero debe solicitarse el término extraordinario, no puede aumentarse el ordinario en un día por cada cuatro leguas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 435, Ser. 2^a.

4. Término extraordinario—No es aplicable á la prueba de las escepciones dilatorias.—Jur. Com., tom. 1, pág. 18, Ser. 2^a.

art. 14 responde: 1° A habilitar al Juez para que con conocimiento de la clase de prueba que se trata de producir, atendiendo á la distancia y á la mayor ó menor facilidad de las comunicaciones, fije el término prudencial que estime conveniente: 2° A facilitar á la contraparte á tomar sus medidas á fin de hacerse representar en el lugar designado. La petición que no llene estos requisitos no cumple con el principio legal.

3—El aumento de un día por cada cuatro leguas, de que habla el art. 111 del Cód. de Proc., está sometido á lo dispuesto por el art. 113, que legisla para el caso especial en que la prueba deba producirse «fuera de la capital» debiendo señalarse el término extraordinario, si la parte llenara los requisitos del art. 114.

4—El Juez de 1° Inst. dijo: que el art. 39 del Cód. de Proc. acuerda como máximo del término de prueba veinte días, y si á pesar de esto las partes piden diligencias que deben evacuarse en el extranjero, es á cargo de ellas el cumplirlas salvando las dificultades inherentes á la distancia y á las dificultades, no obstante consiguientemente, esa clase de prueba para que el procedimiento siga su curso regular. Que la parte es la encargada de cumplir con lo preceptuado en el art. 118. La Cámara confirmó la resolución fundándose en que la diligencia de prueba no se evacuó por culpa imputable á la parte «en cuyo caso no puede solicitar un nuevo término amparado en la escepción establecida en el art. 118 del Cód. de Proc.» De aquí resulta que el sumario no expresa lo que el fallo resuelve, pues el término extraordinario no se solicitó sino que tan solo se pidió el libramiento de nuevo exhorto después de vencido el término ordinario de 20 días acordado por el art. 39. Aun en el juicio ordinario no procedería acordar el término extraordinario en el caso presente, pues no sería posible dar cumplimiento á lo preceptuado en el art. 114.



TER

5. Término extraordinario—De prueba, para su concesión, es indispensable expresar en la misma petición las diligencias para cuyo cumplimiento se solicita.—Jur. Com., tom. 1, pág. 242, Ser. 2ª.

6. Término extraordinario—De prueba, solo se concede para la que debe producirse en el extranjero, ante el Juzgado solo procede en término ordinario.—Jur. Com., tom. 3, pág. 291, Ser. 2ª.

Término extraordinario—Véase: *Prueba*, núm. 1.

Término fatal—Véase: *Prueba*, núm. 10.

1. Término medio—El de la pena, no puede conceptuarse la mitad del máximun, sino el intermedio entre ambos extremos.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 590, Ser. 2ª.

2. Término medio—No existiendo pruebas de las circunstancias atenuantes que invoca el reo, ni de las agravantes de la víctima, debe el Juzgado adoptar el término medio.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 596, Ser. 2ª.

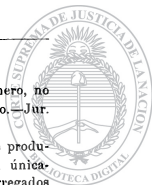
Término medio—Véase: *Delitos*, núm. 5—*Insignificancia*, núm. 1—*Lesiones corporales*, núm. 6—*Provocación*, núm. 5—*Pena*, núm. 1.

1a. Término ordinario—El de prueba y el extraordinario

5—Véase el núm. 2.

6—El art. 113 del Cód. de Proc. es terminante. Cuando haya de producirse prueba fuera de la capital, el Juez señalará el término *extraordinario* que considere suficiente.

1a—Solicitado el término extraordinario en las condiciones establecidas por el art. 114 del Cód. de Proc. y estando conforme en su otorgamiento la parte contraria, transcurrió todo el término ordinario sin concederse el extraordinario, en este estado se solicita la concesión del término extraordinario a lo que no se hizo lugar porque el art. 116 espresamente establece que ambos términos correrán conjuntamente. A fin de que el término extraordinario se otorgue, la parte debe recabar las providencias necesarias para que se llenen los propósitos de la ley. Si esta petición se formulara después de vencido el término ordinario, resultaría que los dos términos correrían separadamente, lo que es contrario al art. 116 ci-



TER

rio, deben correr conjuntamente; vencido el primero, no debe concederse el segundo aun pedido en tiempo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 388, Ser. 2ª.

2a. Término ordinario—Vencido éste, no puede producirse la prueba de posiciones, si éstas se refieren únicamente a los documentos que no hubiesen sido agregados dentro del término.—Jur. Com., tom. 3, pág. 291, Ser. 2ª.

Término perentorio—Véase: *Excepciones*, núm. 1—*Documentos*, núm. 15.

1a. Términos—Solo pueden declararse fatales, en juicio ordinario, aquellos que por la ley tienen carácter improrrogable.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 2ª.

1. Términos judiciales—Se suspenden por ocho días en virtud de la traslación de los Tribunales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 50, Ser. 2ª.

2b. Términos judiciales—No se cuentan en ellos, los

tado. Esta fué la opinión de la mayoría de la Cámara. La minoría sostuvo, que la petición requerida por la ley había sido presentada en tiempo—art. 114—dependiendo del Juez la resolución al efecto, y que es doctrina corriente que todo artículo sobre prueba suspende su término.

2a—Las posiciones tenían por objeto único y exclusivo hacer reconocer las firmas de algunos documentos: esa prueba es abiertamente improcedente: su absolución era imposible, pues no podían tenerse presente los documentos, siendo así que la prueba instrumental debe producirse dentro del término.

1a—Se trataba del examen de unos títulos de propiedad, en juicio ordinario de testamentaria. La Cámara ha declarado que en ausencia de un procedimiento espreso de la ley para los casos en que se trata de la compra de bienes raíces de una testamentaria y en remate público, debe aplicarse por analogía las disposiciones de los artículos 521 y siguientes del Cód. de Proc.: pero ésta no implica que el término acordado para la exhibición y examen de los títulos sea fatal en un juicio testamentario como lo es en el ejecutivo, de naturaleza bien distinta y en el que el legislador se ha preocupado de abreviar los términos buscando el pronto pago del acreedor.

2—Art. 2º del reglamento.



TER-TES

días que por el reglamento de la Cámara Civil se declaran feriados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 35, Ser. 2ª.

Terreno—Véase: *Pared divisoria*, núm. 1—*Medianería*, núm. 2.

Terreno fraccionado—Véase: *Títulos*, núm. 2.

Terreno ribereño—Véase: *Prueba*, núm. 6.

Terreno vendido—Véase: *Comprador*, núm. 6.

Territorio nacional—Véase: *Sentencias*, núm. 1.

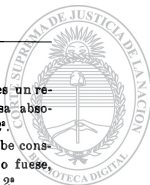
1a. Testamentaria—Las demandas contra ella, solo pueden ser contestadas por el heredero, y mientras éste no haya acreditado su carácter de tal, debe en ellas intervenir también el Agente Fiscal en representación del Fisco, presunto heredero á falta de otro que lo escluya.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 450, Ser. 2ª.

Testamentaria—Véase: *Acreeedor*, núms. 1, 2 y 3—*Jueces*, núm. 1—*Juez*, núm. 1—*Representante*, núm. 1—*Transacción con terceros*, núm. 2—*Fallecimiento*, núm. 3—*Tutor*, núm. 2—*Heredero*, núm. 8—*Juicio sucesorio*, núm. 1—*Costas*, núm. 10—*Honorarios*, núms. 4 y 5—*Iguuala*, núm. 1—*Mandato especial*, núm. 2—*Menores*, núm. 3—*Albacea*, núm. 1—*Derechos posesorios*, núm. 1—*Madre natural*, núm. 3—*Créditos*, núm. 1—*Juramento*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 2—*Inmuebles*, núm. 1.

1b. Testamento—Siempre que de éste resulten herederos ausentes, debe darse intervención al defensor de ausentes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 590, Ser. 2ª.

1a—Y si el heredero no ha comprobado su carácter, no se puede nombrar un curador á la herencia para que entienda en las demandas que se deduzcan contra la testamentaria, porque este nombramiento solo procede cuando ocurre alguno de los casos previstos en el art. 688 del Cód. de Proc. según se desprende de lo dispuesto en el art. 689.

1b—Art. 140, Ley orgánica de los Tribunales de la Capital; y 631, Cód. de Proc.



TES

2a. Testamento—La lectura de él, al otorgarse, es un requisito esencial para su validez: su omisión es causa absoluta de nulidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 577, Ser. 2ª.

2b. Testamento—Su lectura, ante los testigos debe constar en el mismo cuerpo del instrumento, si así no fuese, adolece de nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 47, Ser. 2ª.

3. Testamento—Cuando existe, no es procedente la publicación de edictos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 127, Ser. 2ª.

4. Testamento—El heredero por testamento que acepta incondicionalmente la herencia, pierde todo derecho que por otro título pudiera tener sobre los bienes que formaban los legados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 209, Ser. 2ª.

5. Testamento—Al que alega su nulidad, corresponde

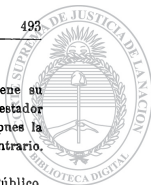
2a—Arts. 3627 y 3658, Cód. Civ.

2b—La lectura de un testamento en presencia del otorgante y testigos es un requisito esencial establecido por el artículo 3658 del Cód. Civ. Las formalidades testamentarias, no son prescritas como pruebas, sino como una forma esencial, y la falta de una sola forma anula el testamento.—Nota al art. 3622.

3—Véase, verb. *Edictos*, núm. 2.

4—El heredero que ha entrado en posesión de la herencia, ó que ha sido puesto por juez competente, continúa la persona del difunto y es propietario, acreedor ó deudor de todo lo que el fallecido era propietario, acreedor ó deudor—art. 3417, Cód. Civ.—El heredero que ha aceptado la herencia queda obligado, tanto respecto á sus coherederos como respecto á los acreedores y legatarios —Art. 3343.—Esta doctrina es más estricta cuando se acepta la herencia pura y simplemente, sin beneficio de inventario. El testador y el heredero se reputan como una misma persona —Ley 3, tit. 19, Part. 3ª.—Este principio es absoluto y rige igualmente en los contratos, con excepción de las obligaciones que por nacer de ellas sean inherentes á las personas—art. 1195, Cód. Civ.—El heredero continúa la persona del difunto, se identifica con él en los actos jurídicos que hubiera celebrado. La personalidad del heredero desaparece y es absorbida por la personalidad del causante: por consiguiente el heredero instituido que acepta la herencia pura y simplemente, pierde todo derecho que por otro título pueda tener sobre los bienes que formaban el legado.

5—Art. 3654, Cód. Civ.



TES

la prueba del hecho en que la funda. El que sostiene su validez está amparado por la presunción de que el testador se encontraba en pleno goce de facultades mentales, pues la ley supone este estado mientras no se justifica lo contrario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 102, Ser. 2º.

6. Testamento—Debe ser hecho por Escribano Público, pero su validez no depende de que éste lo haya escrito de su puño y letra, puede serlo por amanuenses, como los demás instrumentos públicos de Registro.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 102, Ser. 2º.

Testamento—Véase: *Formalidades*, núm. 1—*Herederos*, núm. 1—*Edad*, núm. 1—*Edictos*, núm. 2.

1. Testamento ológrafo—El hecho de espresarse en él,

6—Véase, verb. *Instrumentos públicos*, núm. 4.

1—De la redacción y disposición de los arts. 3639, 3640 y 3642, se deduce que la exigencia de que la escritura sea hecha en caracteres alfabéticos solo tiene por objeto evitar que en el testamento ológrafo se use de otros signos que no sean los de la escritura ordinaria. Desde que puede escribirse en cualquier idioma, de lo que se trata es simplemente de admitir la escritura común, según el alfabeto del idioma, excluyendo los diversos sistemas de escritura que no se emplean por la generalidad. Que la fecha puede escribirse en cifras, aunque sería mejor escribirlo en letras, lo enseñan los autores franceses—Pothier, tom. 8, pág. 229; Troplong, tom. 3, núm. 1481.—La razón es clara, pues que no hay ley que lo prohiba en Francia, como no la hay entre nosotros. La nota puesta por el Codificador al art. 3642, demuestra que no está prohibido escribir la fecha en números, cuando dice: «Como si un testador escribiese, *firmado el Viernes Santo de 1869.*» En la nota al art. 3639 dice así: «La firma no es la simple escritura que una persona hace de su nombre y apellido; es el nombre escrito de una manera particular, según el *modo habitual* seguido por la persona en diversos actos sometidos a esta formalidad. Regularmente la firma lleva el apellido de la familia; pero esto no es de rigor, si el hábito constante de la persona no era firmar de esa manera. Los escritores franceses citan el testamento de un obispo, que se declaró válido, aunque la firma consistía únicamente en una cruz seguida de seis iniciales y de la enunciación de su dignidad.» Debe advertirse también que



TES

la fecha y las cantidades en guarismos, no es causa de nulidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 307, Ser. 2ª.

2. Testamento ológrafo—Su protocolización, no enerva el derecho de pedir su nulidad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 468, Ser. 2ª.

3. Testamento ológrafo—La protocolización de un testamento ológrafo, no hace cosa juzgada, ni enerva el derecho de todos los que, perjudicados por su contenido ó existencia, pretendan se declare su nulidad ó falsedad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 2ª.

4. Testamento ológrafo—Agregado á un expediente archivado, puede desglosarse para su protocolización.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 337, Ser. 2ª.

5. Testamento ológrafo—Las faltas de ortografía y aún la omisión de palabras que no alteren el sentido general de un testamento ológrafo, no bastan para justificar la insanía del autor ni por consiguiente para declarar su nulidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 2ª.

6. Testamento ológrafo—Al que pretende la nulidad de

una fecha errada ó incompleta puede ser considerada suficiente, si por medio de pruebas se pudiese establecer su certeza, pruebas que pueden surgir del testamento mismo—art. 3613.—En la nota de este artículo se lee lo siguiente: «Merlin cita dos testamentos de fechas incompletas tenidos por válidos en los Tribunales de Francia.»

2—El objeto de la protocolización es conferir al testamento fecha cierta: esa diligencia no impide el ejercicio de acciones de cualquier género que terceros interesados en contestar su validez puedan tener.

3—Véase: Nota precedente, y verb. *Nulidad*, núm. 15.

5—La ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario. Al que pide la nulidad del testamento, le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones. Pero si el testador se hallaba notoriamente en estado habitual de demencia el que sostiene su validez debe probar que el testador lo ordenó en un intervalo lúcido—art. 3616, Cód. Civ.

6—Véase nota precedente.



TES

un testamento ológrafo por insania del autor, corresponde la prueba de que existían hechos que permitían declarar la insania en la fecha en que fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 280, Ser. 2ª.

Testamento ológrafo—Véase: *Donación*, núm. 1.—*Nulidad*, núm. 15.

1a. Testigo—El menor de edad, si bien no forma prueba, debe ser considerado como presunción grave.—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 77, Ser. 2ª.

Testigo—Véase: *Apoderado*, núm. 1.—*Declaraciones*, núm. 8.—*Exposiciones escritas*, núm. 1.—*Ratificación*, núm. 1.

Testigo presencial—Véase: *Declaración*, núm. 1.

1b. Testigos—Los mismos pueden ser presentados por ambas partes y en distintas épocas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 449, Ser. 2ª.

2. Testigos—Los presentados antes de vencerse el término, deben ser admitidos, aun cuando declaren después de vencido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 392, Ser. 2ª.

3. Testigos—No debe acompañarse para su exhibición en

1a—Tiene la fuerza de gran presunción.—Ley 9, lit. 16, Part. 3ª.

1b—No hay disposición legal que impida á uno de los litigantes el presentar los testigos del otro. El derecho consagrado en el sumario surge de los arts. 131 y 192 del Cód. de Proc. Los testigos presentados por ambas partes, no pueden ser tachados. Véase: *Inst.*, tom. 1ª, verb. *Testigos*, núm. 2605.

2—Los testigos deben ser presentados por lo menos cuatro días antes de vencerse el término: tres para estar de manifiesto la lista en Secretaría—art. 134, Cód. de Proc.—y el cuarto día para la recepción de la declaración, porque la ley ordena que la prueba sea pedida, ordenada y practicada dentro del término. Pero si por atenciones del Juzgado se fija para la recepción de la prueba una fecha fuera del término, eso no perjudica á la parte, porque no le es imputable, y en este caso la prueba entra en el espíritu del art. 118. Esta es jurisprudencia constante en nuestros Tribunales.

3—No es de aplicarse la disposición del art. 181 del Cód. de Proc., porque éste tiene por objeto que las personas que se indican como

TES

Secretaría, la lista de los testigos que ya han declarado a solicitud de la contraparte.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 2ª.

4. Testigos—Las diligencias de prueba sobre la honorabilidad de los testigos contra los cuales no se deduce tacha legal, deben ser desechadas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 164, Ser. 2ª.

5. Testigos—Los presentados, pero cuya nómina no puede permanecer tres días en la oficina, no pueden ser admitidos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 316, Ser. 2ª.

6. Testigos—La falta del nombre en el cuerpo de la escritura de venta, no es defecto del título, siempre que exista la firma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 2ª

7. Testigos—De conocimiento, pueden ser al mismo tiempo los de la escritura.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 300, Ser. 2ª.

8. Testigos—Las formas establecidas por la ley, sobre presentación de testigos, no son aplicables á las declara-

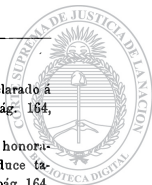
testigos sean conocidas con exactitud, á fin de oponerse á su examen ó tacharlos: luego, pues, la razón de la disposición desaparece, porque debido á su presentación anterior, ya son perfectamente conocidos de ambas partes.

4—Un testigo sin tacha es mayor de toda escepción, y su honorabilidad queda implícitamente producida, circunstancia que hace innecesaria su comprobación.

5—La disposición que ordena que la lista de testigos permanezca tres días en la oficina antes de prestar declaración, es terminante —art. 183, Cód. de Proc. —Si esto no es posible, la prueba no debe admitirse porque no llena los requisitos del art. 118, según el cual, debe no solo ofrecerse y ordenarse, sino que también debe *producirse* dentro del término probatorio.

7—No hay disposición legal que lo prohíba, ni el art. 1002 del Cód. Civ. que establece la necesidad de los testigos de conocimiento, cuando el otorgante no sea conocido del Escribano.

8—Se solicitaban diligencias de prueba concernientes á las funciones que un rematador había desempeñado por mandato judicial: en este caso, no es propiamente un testigo el que se presenta, pues el



TES

ciones de funcionarios que han desempeñado un mandato judicial, en cuanto á él se refieren.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 328, Ser. 2ª.

9. Testigos—La designación equivocada del domicilio de uno de ellos, hace improcedente su declaración si el error se subsana después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 323, Sr. 2ª.

10. Testigos—Ante sus declaraciones contradictorias, el Juzgado debe siempre atenerse á las de aquellos que por su honorabilidad y circunstancias especiales del hecho sobre que deponen, puedan conceptuarse más verídicos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 267, Ser. 2ª.

11. Testigos—Los presentados en los tres últimos días del término, no deben ser admitidos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 2ª.

12. Testigos—Con arreglo al procedimiento de las leyes

rematador no reviste este carácter á quien haya de aplicársele el rigor de las formas que prescribe la ley para la prueba testimonial, pues más bien debe considerársele como oficial público que desempeñó una comisión judicial.

9—Para que la declaración de testigos sea admitida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 181 del Cód. de Proc., y mientras esos requisitos no se cumplan no puede recibirse la declaración, ni tampoco puede considerarse ofrecida legalmente. El art. 118 no se puede cumplir en la parte que exige que la prueba sea ofrecida, ordenada y practicada dentro del término.

10—Resolviéndose en favor de los más contestes, más razonables y concordantes.

11—Porque los tres días debe permanecer la lista en la Oficina—artículo 184 del Cód. de Proc.—recién al cuarto día podrían ser examinados, ya fuera del término, lo que sería contrario á lo prescripto en el art. 118, que exige que la prueba sea *producida* dentro del término. Esta ha sido jurisprudencia constante. Véase: El núm. 5, Inst., tom. 2, verb. *Testigos*, núm. 1; *Diligencias de prueba*, núm. 1; *Diligencias testimoniales*, núm. 1; F. S. C. P., tom. 4, pág. 122, Ser. 1ª.

12—Antes de dictarse el Cód. de Proc. en lo Criminal, que nos ri-





TES

de Partida, en materia criminal, la parte no estaba obligada á presentar la nómina de testigos.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 22, Ser. 2^a.

13. Testigos—Tratándose de testigos necesarios por ser los únicos que frecuentan el lugar del suceso, sus declaraciones forman prueba, no obstante su falta de honorabilidad.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 236, Ser. 2^a.

14. Testigos—Si bien cuando no existen, la confesión del reo debe aceptarse en cuanto á los hechos, no puede serlo igualmente en cuanto al derecho que de ellos surja.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 357, Ser. 2^a.

ge, nuestro procedimiento estaba regido por las antiguas leyes de Partida, salvo algunas disposiciones sueltas y especiales. Así lo ha establecido la Cámara—tom. 3, pág. 183, Ser. 1^a, Jur. Crim.—La prueba era secreta, de manera que la misma parte que la proponía ignoraba su resultado hasta la publicación de probanzas. Teniendo en cuenta que era obligación de las partes presentar ellas mismas sus testigos, era inútil la presentación de la lista con los nombres y domicilios. Las leyes de Partida no la prescribían, y solo exigían la presentación del interrogatorio, el señalamiento de día para las declaraciones, y la citación de la parte contraria, al solo afecto esta última diligencia de presenciarse el juramento—Leyes 11, tit. 4, Part. 3^a; 7, tit. 14; y 23, tit. 14, Part. 3^a.

13—Es jurisprudencia constante. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Declaraciones*, núm. 2. La S. C. de Just. de la Prov., ha dicho: «La ley 10, tit. 19, Part. 3^a, que establece la inadmisibilidad de los testimonios de los penados, mientras sufran su pena, rige para los casos generales, pero no para los que salen de lo común, por razón del lugar, actores y testigos que únicamente podrían presenciarnos»; tom. 4, pág. 356, Ser. 2^a.

14—Se trata de la confesión de un delito que se dijo cometido en legítima defensa. Cuando la confesión del acusado es el único elemento de prueba, debe aceptarse en todas sus partes. Cuando se dice que debe estarse á la confesión del reo, esto se refiere á los hechos, los que se suponen efectivamente pasados como él lo refiere, pero en manera alguna á la aplicación errónea que pretenda hacer del derecho, ni á sus apreciaciones equivocadas. De manera que, cuando el reo sostiene haber hecho uso del derecho de legítima defensa y si de esa misma relación se deduce que esa es



TES—TÍT

Testigos—Véase: *Declaraciones*, núms. 3, 4, 7, 9 y 10—*Edad*, núm. 1—*Juicios sumarios*, núm. 1—*Dependientes*, núm. 3—*Protocolos*, núm. 1.

Testimonial—Véase: *Costas*, núm. 1.

Testimonio—Véase: *Defensores de ausentes*, núm. 1—*Acreeedor*, núm. 4—*Vendedor*, núm. 2—*Protesto*, núm. 1.

Testimonios—Véase: *Títulos*, núms. 1 y 2.

Tiempo indeterminado—Véase: *Muerte*, núm. 3—*Tentativa*, núm. 2—*Presunciones*, núm. 1.

1a. Tiro—Importa tentativa próxima de herida grave, el hecho de descerrajarlo á determinada persona con objeto de intimidarla.—Jur. Crim., tom. 1º, pág. 165, Ser. 2ª.

Titulares—Véase: *Conjueces*, núm. 1.

1b. Título—Subsanadas las deficiencias del título, opuestas por el comprador en remate judicial, ó declarada judicialmente su inexistencia, debe oblar el precio bajo apercibimiento de responsabilizársele por los perjuicios é intereses.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 204, Ser. 2ª.

2. Título—Las pequeñas diferencias del nombre, no pue-

cepción es inadmisibile, y aun tomada la confesión en todas sus partes, no resultase la escepción que él pretende, es evidente que su confesión en nada influye respecto al derecho, y el delito debe ser castigado con prescindencia de la escepción aducida por el reo en su defensa.

1a En este carácter son regularmente consideradas las heridas de bala. Aunque toda acción criminal se presume legalmente cometida con voluntad criminal, salvo prueba en contrario, este principio se refiere á los actos ú omisiones que la ley ha calificado de crimen ó delito. El acto de descerrajar tiros con armas de fuego, no está sugeto á penalidad, porque no está previsto por el Cód. Pen. ant, siendo considerado más bien como una contravención de policía. Lo que el autor del hecho quiso hacer fué intimidar por medio de amenazas, siéndole aplicable la disposición del art. 299 del Cód. Pen.

1b—Arts. 519 y 522, Cód. de Proc.

2—A pesar de la diferencia en el nombre, es de tenerse presente



TIT

den conceptuarse defectos del título, si éste tiene el mismo de la declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 393, Ser. 2ª.

3. Título—La aceptación por el acreedor, de uno nuevo, importa una novación, siempre que el dendor no sea el mismo aun cuando resulte ser sucesor legal del anterior y el crédito sea originario de éste.—Jur. Com., tom. 1, pág. 519, Ser. 2ª.

4. Título—Cuando en las bases del remate se previene que no existe título, el comprador está obligado á escriturar sin él ó á suplirlo por su exclusiva cuenta.—Jur. Com., tom. 4, pág. 7, Ser. 2ª.

Título—Véase: *Prescripción*, núm. 3—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 1—*Callo*, núm. 1—*Comprador*, núm. 3—*Derechos*, núm. 1—*Error*, núm. 2—*Testigos*, núms. 6 y 7—*Concurso*, núm. 2.

Título cotizable—Véase: *Precio oficial*, núm. 1.

Título de propiedad—Véase: *Adjudicación*, núm. 1—*Derechos*, núm. 1—*Declaratoria*, núm. 1.

Título hereditario—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 1.

1. Título inhábil—Corresponde al que ejecuta con un

que los documentos acompañados contenían enunciaciones que revelaban de una manera inequívoca la identidad de la persona.

3—Arts. 801, Cód. Civ., y 980, Cód. de Com.

1—Se trataba del cobro ejecutivo de créditos provenientes de empedrados. Se inició ejecución con las cuentas visadas por la Municipalidad de acuerdo con lo establecido en el art. 4º de la Ley de 26 de Octubre de 1881, y en el art. 3º de la de 29 de Setiembre de 1882. Citado de remate el deudor opuso la excepción de inhabilidad de título, la que se declaró procedente, fundándose en que: el art. 4º de la ley del 81 y el 3º de la del 82 disponen, que la Municipalidad contratará, previa licitación, la construcción de las obras y estipulará las condiciones de pago, señalando cuotas y plazos equitativos para el pago que deben verificar los propietarios, bajo la base de que el cobro de las cuotas se hará por las empresas constructoras, á cuyo efecto tendrán carácter ejecutivo las cuentas visa-



TIT

título inhábil, la prueba de haberse llenado las condiciones que la ley, que le dió origen imponía, para reconocerle fuerza ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 245, Ser. 2ª.

1. Títulos—Los presentados al solo objeto de tomar razón, y que no forman parte del litigio, no se encuentran comprendidos en la acordada de 6 de Diciembre de 1887 sobre testimonios á desglosar.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 202, Ser. 2ª.

2. Títulos—Los originales de un terreno fraccionado, no deben entregarse á ninguno de los interesados, basta copia legalizada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 451, Ser. 2ª.

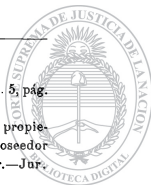
3. Títulos—Cuando los vicios son de difícil subsanación, el comprador puede desistir sin responsabilidad ó aceptar-

das por la Municipalidad. Es evidente que para que un documento de éstos revista carácter ejecutivo, es necesario que se encuentre cumplidas todas las condiciones establecidas por las citadas leyes. Esas leyes establecen, que la Municipalidad fijará cuotas para los pagos, de cuyo beneficio, ni ésta ni los empresarios pueden privar al deudor. La base de la exigibilidad de la obligación es la fijación de cuotas hechas por la Municipalidad, las que tendrán á este efecto carácter ejecutivo una vez visadas por ella. De donde resulta que no son las cuentas integrales las que tienen derecho á cobrar los empresarios, sino las cuotas. El que ejecuta, debe comprobar este requisito, es decir, que las cuentas que cobran proceden de cuotas vencidas: si no lo hace, el título en sí mismo es inhábil, porque no reúne las condiciones de exigibilidad establecidas por la ley. Puede suceder que la cuenta integral sea exigible ejecutivamente, pero para ello se requiere que todas las cuotas estén vencidas, siendo exigible cada una de ellas. Véase: verb. *Empedrados*, núms. 1, 2, 3 y 4.

1—Se trataba de títulos presentados al solo objeto de que se tomara razón en la oficina respectiva, de una garantía hipotecaria ofrecida, y una vez chancelada ésta se pidió su desglose y entrega. El Juez proveyó de conformidad, debiendo dejarse testimonio en autos de todos los documentos acompañados. La Cámara revocó la última parte de esta resolución ordenando la entrega sin dejar testimonio en autos, pues consideró que la acordada del 87 no debía aplicarse al presente caso.

2—Los títulos originales garanten los derechos de todos.

3—Art. 522 del Cód. de Proc.



TIT

los con los defectos de que adolezcan.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 316, Ser. 2ª.

3b. Títulos—Ante dos que se refieran á la misma propiedad y provenientes de la misma persona, los del poseedor priman sobre los de aquel que pretenda reivindicar.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 143, Ser. 2ª.

4. Títulos—El comprador del inmueble, no es parte en el juicio testamentario que se inicie para regularizar los títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 370, Ser. 2ª.

5. Títulos—El auto que no hace lugar al desglose de unos títulos, antes de terminar el litigio, no causa gravamen y es en consecuencia inapelable.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 498, Ser. 2ª.

6. Títulos—El demandado por escrituración, no está obligado á la presentación de los títulos, si hubiese transferido la propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 373, Ser. 2ª.

7. Títulos—Cuando los defectos de los títulos son de fácil subsanación, el vendedor está obligado á llenar las exigencias del comprador que no quiere desistir del contrato.—Jur. Civ. tom. 8, pág. 124, Ser. 2ª.

8. Títulos—No está obligado á presentarlos el demandado por reivindicación, ni aun á manifestar donde existe la matriz.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 332, Ser. 2ª.

Títulos—Véase: *Diferencia*, núm. 1—*Contrato de compra-venta*, núm. 3—*Información supletoria*, núm. 3—*Interdicto de obra nueva*, núm. 1—*Poseción*, núms. 3, 8, 9, 10, 12 y 13

3b—Art. 2792, Cód. Civ.

4—No siendo parte, no puede intervenir en el juicio.

5—No puede causar perjuicio alguno al propietario el hecho de permanecer los títulos agregados al expediente, especialmente cuando el litigio versa sobre escrituración del inmueble á que se refieren.

7—Se desprende de lo dispuesto en el art. 522.

8—Véase: verb. *Reivindicación*, núm. 5.

**TIT—TRA**

—*Acción reivindicatoria*, núm. 3—*Comprador*, núms. 5 y 6—*Derechos hereditarios*, núm. 2—*Herederos*, núm. 7—*Información*, núms. 3 y 4—*Inmuebles*, núm. 1—*Juicio informativo*, núm. 1—*Poseción cuarentenaria*, núm. 1—*Prescripción*, números 5 y 14—*Prescripción treintenaria*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 4—*Testamento*, núm. 4.

Títulos de crédito—Véase: *Especulación*, núm. 1.

1a. Títulos de propiedad—Si bien deben encontrarse en poder del propietario, solo puede ordenarse judicialmente la entrega por un tercero que los posee, mediante acción en forma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 402, Ser. 2ª.

2. Títulos de propiedad—Cuando sus defectos son de difícil subsanación, el comprador puede optar por el procedimiento fijado en el juicio ejecutivo para las ventas en remate judicial, aun cuando el acto haya tenido lugar estra-judicialmente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 520, Ser. 2ª.

3. Títulos de propiedad—Que no estén á nombre del fallido, no pueden ser exigidos por el Síndico.—Jur. Com., tom. 2, pág. 306, Ser. 2ª.

Tolerancia—Véase: *Religión autorizada*, núm. 1.

Tomador de una letra—Véase: *Transferencia*, núm. 1.

1b. Tradición—Para la del inmueble, no es requi-

1a—El título estaba en poder de un tercero, es decir, lo que es propiedad de una persona lo posee otra: ésta no puede ser privada de su posesión sino en virtud de acción en forma. El propietario no lo posee, no tiene sino un derecho á la posesión: este derecho debe hacerlo valer en legal forma. El poseedor posee porque posee, y la autoridad no está autorizada á despojarlo de esa posesión sino en virtud de un juicio seguido como corresponde.

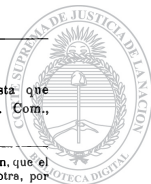
2—La Cámara ha declarado, que el procedimiento marcado en el juicio ejecutivo es aplicable por analogía al juicio ordinario, y el temperamento del sumario está marcado en el art. 522 del Cód. de Proc.

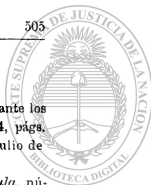
1b—El dominio, en los inmuebles, se adquiere por la tradición, pues el Cód. Civ., parte de la base que el contrato de compraventa

TRA

sito esencial la entrega material al comprador: basta que éste pueda disponer de la cosa á voluntad.—Jur. Com., tom. 4, pág. 322, Ser. 2º.

solo dá acciones personales. Los arts. 577 y 3265 establecen, que el derecho de propiedad que se trasfiere de una persona á otra, por contrato, solo pasa al adquirente por el hecho de la tradición. Además, el art. 2609 establece, que el dominio de las cosas se pierde por la escritura pública de enagenación seguida de la tradición. Nuestro codificador en una de sus notas, citando á Freita, dice: «El derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos, que no sean los del derecho personal, y esos signos deben ser tan visibles y tan públicos como sea posible» y por último agrega: «esta es la razón filosófica del gran principio de la tradición». Es indudable que nuestro Cód. hace de la tradición una condición *sine qua non* para la transferencia del dominio á título singular. ¿Cuáles son estos hechos constitutivos de la tradición? Ella consiste en que el vendedor entregue voluntariamente la cosa y en que el comprador voluntariamente la reciba, como lo establece el art. 2377. Savigni, en su fundamental obra sobre la posesión, demuestra que el principio establecido en el derecho romano es la posibilidad física de disponer de la cosa sin necesidad de que intervenga *contacto material*. Esa adquisición reposa sobre el hecho material, *corpus factum*, y la voluntad *animus rem sibi habendi*.—Ley 3, tit. 2, lib. 41, Digesto.—Nuestro Cód., ha seguido en esta materia á la legislación romana expuesta por Savigni, y es por esto que dice en su art. 2374: «La aprehensión debe consistir en un acto que aun cuando no sea un *contacto material*, ponga á la persona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla». El Código ha querido hacer, y ha hecho efectivamente, de la tradición, el eje sobre que gira todo el sistema en la materia, y se ha cuidado muy bien, de definir sus formas, á fin de evitar las graves dificultades prácticas que podían acarrear. Y es así que el art. 2378 dice, que la tradición se juzgará hecha si se hiciese según las formas autorizadas por el Código. Esa forma la establecen los arts. 2380, 2374, 2386 y 2287. De esta doctrina, y de la espuesta por Molitor, citado en la nota al art. 2287, se deduce que el hecho que se requiere, y en que consiste sustancialmente la tradición, es la posibilidad física de disponer de la cosa. Hay casos, en los que, por efecto solo del acto jurídico, existen los elementos constitutivos de la tradición,—la intención y el hecho,—pues este hecho consiste en la posibilidad física de disponer de la cosa; las formas materiales solo son necesarias á este solo objeto, es decir, á fin





TRA

Tradición—Véase: *Inhibición*, núm. 4.

1. Traductores—Inscriptos en la matrícula, durante los meses de Mayo y Junio de 1888.—Jur. Civ., tom. 4, págs. 468 y 489, Ser. 2^o; durante los meses de Junio y Julio de 1889.—Jur. Civ., tom. 8, págs. 398 y 505, Ser. 2^o.

Traductores—Véase: *Inscripciones en la matrícula*, número 1.

Trámites—Véase: *Exhortos*, núms. 1 y 2—*Demanda*, número 6.

Tramway—Véase: *Empresas de tramways*, núm. 1—*Resolución*, núm. 1—*Tribunal arbitral*, núm. 1—*Contrato de cesión*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 21.

1. Transacción—La presentada al Juzgado, implica reconocer cumplidas todas las cláusulas que resulten de la misma, y que debían cumplirse con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 392, Ser. 2^a.

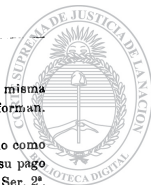
2. Transacción—Terminado el litigio por una transacción debidamente aprobada, el juicio que sobre cumplimiento de ella se promueva con posterioridad, corresponde al juez en turno.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 269, Ser. 2^a.

3. Transacción—Entre herederos, en la que se reconocen mutuamente derechos á una parte ideal de la herencia,

de que el adquirente pueda disponer de la cosa. Debe establecerse pues, que si bien conforme á las disposiciones del derecho romano y del Cód. Civ., el dominio se adquiere con el *animus* y con el *factum*, la forma de manifestación de este hecho no es exclusivamente la entrega material de la cosa, sino todos los demás que el Código señala.

2—Aprobada una transacción, el juicio á que se refiere queda definitivamente terminado, y en este caso cualquiera petición posterior, aunque tenga su origen en la misma transacción, siempre tiene por base nuevos hechos que deben discutirse en el nuevo juicio que es distinto del primero.

3—Art. 3417 Cód. Civ.; y puede vender su parte indivisa—artículo 2667 *ibid*.



TRA

importa un reconocimiento de condominio de esa misma parte, sobre todos y cada uno de los bienes que la forman.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 137, Ser. 2º.

4. Transacción—Cuando por ella se ha estipulado como máximun á recibir, una cantidad determinada, con su pago se exime de la obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 367, Ser. 2º.

5. Transacción—Las partes no pueden desistir de ella después de presentada al juez del litigio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 35, Ser. 2º.

Transacción—Véase: *Hijos*, núm. 1—*Venta onerosa*, número 1—*Ejecutado*, núm. 1.

1a. Transacción con terceros—Fijado en ella el valor de una finca, aquéllos no pueden sufrir quebranto por el mayor ó menor valor en que se haya realizado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 78, Ser. 2º.

2. Transacción con terceros—Fijada por ella la parte que corresponde á un heredero, se sobreentiende que puede ser modificada por las bajas generales que tenga la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 78, Ser. 2º.

Transacción judicial—Véase: *Intereses*, núm. 2.

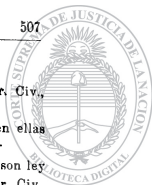
1b. Transacciones—Forman para las partes una regla á

5—De los términos del art. 838 del Cód. Civ., no se desprende que para la validez de una transacción, cuando ella versa sobre derechos litigiosos, deban determinarse sus bases de tal suerte que su omisión dé mérito á un desistimiento. Por el contrario el único requisito exigido, es, que ella sea presentada al Juez de la causa firmada por las partes.

1a—Si la finca tiene efectivamente mayor valor que el señalado, nada tiene que ver el tercero con ésto, pues para él es una *res inter alios acta*.

2—Si así no fuese, sería establecer un beneficio á favor de uno de los herederos en perjuicio de los otros, sin que de parte de los perjudicados hubiese habido renuncia alguna que los sometiera á tal condición.

1b—La transacción en su carácter de contrato queda sujeta á lo dispuesto en el art. 1197 del Cód. Civ.



TRA

la cual deben someterse como á la ley misma.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 462, Ser. 2ª.

2. Transacciones—Son ley para las partes que en ellas han intervenido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 31, Ser. 2ª.

3. Transacciones—Las debidamente aprobadas, son ley para las partes que en ellas han intervenido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 367, Ser. 2ª.

1a. Transferencia—La del conocimiento de mercaderías, importa la constitución de prenda á favor del tomador de una letra á quien se entrega en garantía de los fondos recibidos.—Jur. Com., tom. 1, pág. 471, Ser. 2ª.

Transferencia—Véase: *Acción pauliana*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 2—*Evicción*, núm. 2—*Acción*, núm. 2—*Escritura pública*, núm. 3—*Liquidación de sociedad*, número 2—*Impuesto*, núm. 2.

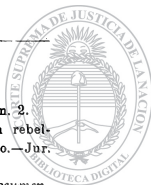
1b. Transferencias—De un boleto de compraventa de inmuebles, no deben abonar el sello que la ley exige para la transferencia por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 25, Ser. 2ª.

2—Véase nota precedente.

3—Véase el núm. 1.

1a—El conocimiento en poder del acreedor representa una tradición simbólica de las mercaderías á que aquél se refiere, y por consiguiente constituyen una prenda.—Arts. 527 y 752 del Cód. de Com. ant.

1b—El boleto de compraventa que se determina, entraña una obligación de hacer escritura pública y no está sujeto al impuesto de sellos, desde que éste debe pagarse al estenderse la escritura pública. Lo que se grava por la ley es la transferencia de la propiedad de los inmuebles: el art. 9 de la ley núm. 1904, de 25 de Nov. de 1886 establece con toda claridad, el impuesto sobre *los boletos de compraventa de bienes muebles y semovientes*. Si los boletos de esta clase de bienes están gravados, y no se mencionan los que versan sobre bienes raíces, es porque la ley no ha considerado equitativo gravar dos veces la transferencia de la misma cosa, puesto que ella paga su impuesto al constituir la escritura pública de ella.



TRA—TRI

Transgresión—Véase: *Delito*, núm. 3.

Transcripción—Véase: *Instrumentos públicos*, núm. 2.

1a. Traslado—La contestación de un traslado en rebeldía, no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 404, Ser. 2ª.

Traslado—Véase: *Rebeldía*, núms. 1, 2, 7 y 8—*Documentos*, núm. 10—*Atestación*, núm. 1—*Escepciones*, núm. 4.

1b. Trasmisión judicial—Siempre que intervienen intereses, no es viciosa la de dominio, hecha por ellos con anuencia del Juzgado, aunque éste no firme la escritura.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 364, Ser. 2ª.

1c. Tribunal—No puede resolver cuestiones que no hubiesen establecido las partes en el contrato resultante de la litis-contestación, aun cuando el inferior de oficio las haya planteado y resuelto.—Jur. Com., tom. 1, pág. 519, Ser. 2ª.

Tribunal—Véase: *Conjueces*, núm. 1.

generación. Es sabido que la interpretación que debe hacerse de la ley de impuestos es restrictiva, y por consiguiente no debe ampliarse sus prescripciones a casos que no están seguramente sujetos al impuesto. Esta resolución se dictó por mayoría de votos, habiendo aducido la minoría razones de verdadero peso.

1a—Véase: verb. *Traslado*, núm. 7; Inst. tom. 2, verb. *Embargo preventivo*, núms. 17 y 21.

1b—La venta fué hecha por un heredero, previa autorización en forma legal, conferida por el juzgado sin decir en el auto en que se autorizaba la venta, que el heredero firmaría la escritura, lo que no era necesario desde que el Juez había autorizado la enagenación. El art. 520 del Cód. de Proc. puede aplicarse por analogía, en él se establece que se extenderá la competente escritura por el ejecutado, y en su defecto por el juez. Aunque se trate de un juicio testamentario se ha resuelto por la Cámara que en las ventas testamentarias deben aplicarse por analogía las disposiciones que rijan para el juicio ejecutivo.

1c—Véase: verb. *Jueces*, núm. 8; Inst., tom. 2, verb. *Cuestiones*, núm. 1; *Jueces*, núms. 3, 4, 5 y 6; *Juzgado*, núm. 1; Inst. tom. 1ª, verb. *Jueces*, núms. 1500, 1508 y 1510.



TRI

1a. Tribunal arbitral—A que se refiere el reglamento adicional de Tranways, es el único que puede resolver las excepciones que las empresas opongan al hacerse efectivo, lo que en el mismo se estipula sobre pago de asistencia á los damnificados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 403, Ser. 1^a.

Tribunal arbitral—Véase: *Resolución*, núm. 1.

Tribunales—Véase: *Inhibición*, núm. 2—*Sentencias*, número 1—*Honorarios*, núm. 12—*Términos judiciales*, núm. 1—*Daño*, núm. 2.

Tribunales argentinos—Véase: *Matrimonio civil*, número 1.

1b. Tribunales de la capital—Son competentes para conocer en los juicios sobre acciones personales, siempre que el obligado tenga su residencia en la capital.—Jur. Com., tom. 2, pág. 71, Ser. 2^a.

2. Tribunales de la capital—Son competentes para entender en la ejecución de una obligación cuyo pago se haya estipulado en esta ciudad, aun cuando el deudor se encuentre domiciliado en otra jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 35, Ser. 2^a.

Tribunales de la capital—Véase: *Reincidencia*, núm. 1—*Acción*, núm. 7.

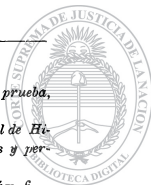
Tribunales de la Provincia—Véase: *Fallecimiento*, número 2.

Tribunales del crimen—Véase: *Daños y perjuicios*, número 4.

1a Sería contrario á los principios generales del derecho el hacer valer un litigante sus defensas ante una jurisdicción que no es la competente. Si una ley especial crea un tribunal para atender cierta clase de juicios, solo ese tribunal es el que tiene jurisdicción y el que puede entender en las defensas que se aleguen. Véase: verb. *Resolución*, núm. 1.

1b—Art. 4, inc. 3^a, del Cód. de Proc.

2—Se trataba de la ejecución de una letra de cambio, siendo aplicable el art. 931 del Cód. de Com. ant.



TRI—TUT

Tribunales exhortados—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 8.

Tribunales ordinarios—Véase: *Consejo Nacional de Higiene*, núm. 1—*Contrato de sociedad*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 7—*Dependientes habilitados*, núm. 2.

Tribunales superiores—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 6.

Turbación—Véase: *Interdicto de obra nueva*, núm. 2.

Turno—Véase: *Demanda*, núm. 2—*Transacción*, núm. 2—*Incompetencia*, núm. 1.

Tutela—Véase: *Letrado*, núm. 1.

1. **Tutor**—Solo debe nombrarse á los hijos naturales, para administrar bienes, no para gestionar derechos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 475, Ser. 2°.

2. **Tutor**—El de menores de un primer matrimonio, puede asumir durante la testamentaria del padre común, el doble carácter de demandado y tercerista.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 449, Ser. 3°.

1—Según el art. 328 del Cód. Civ., el padre y la madre tienen sobre sus hijos naturales los mismos derechos que los padres legítimos, y la única limitación es la establecida por el art. 336 respecto á la administración y usufructo de dichos bienes: la defensa que los padres pueden hacer de sus hijos respecto á su filiación y de sus demás derechos, nada tiene que ver con la administración ó usufructo de bienes. Es evidente que la defensa de los derechos no implica administración de bienes la que solo puede verificarse con la posesión de éstos. Mientras el padre esté en pleno ejercicio de la patria potestad, no puede nombrárseles tutor especial á los hijos sino en alguno de los casos previstos en el art. 397. Los jueces pretenden ampliar las atribuciones que les confiere la ley para el nombramiento de tutores especiales y la Cámara hace muy bien en contenerlos dentro del límite de sus atribuciones. Véase: Inst., tom. 2°, verb. *Tutor especial*, núm. 4.

2—Puede suceder que los menores sean herederos y acreedores: como herederos intervienen en las demandas contra la sucesión, pero esta intervención no impide que como acreedores puedan deducir tercerías en los juicios en que han asumido el rol de demandados, circunstancias que dan á los menores el doble carácter de ejecutados y terceristas.

TUT

3. Tutor—El Juez que primero provee de tutor á los menores, es el único que tiene jurisdicción para nombrar los que sucesivamente se requieran hasta llegar á la mayor edad de los pupilos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 175, Ser. 2ª.

4. Tutor—No debe rendir cuentas parcialmente, solo está obligado á rendirlas totalmente, cuando termina la tutela.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 460, Ser. 2ª.

Tutor—Véase: *Excusación*, núm. 1—*Menores*, núms. 1 y 3—*Casamiento*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 1—*Jueces de la Capital*, núm. 1—*Alimentos*, núms. 4 y 5—*Madre natural*, núm. 3—*Menor*, núm. 1.

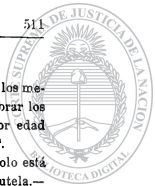
1. Tutor especial—Solo deben nombrarse á los hijos naturales, cuando existen bienes que administrar.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 206, Ser. 2ª.

Tutor especial—Véase: *Juicio*, núm. 1.

3—La jurisdicción de que se halla investido el Juez de la tutela le viene de la ley, la que se acuerda en términos amplios y absolutos —arts. 404 y siguientes, Cód. Civ.—No se puede argumentar diciendo, que acabada la tutela por la muerte, remoción ó excusación del tutor; y produciéndose, una vez ocurrido cualquiera de estos hechos, una verdadera solución de continuidad en aquélla, es lógico que cese también la jurisdicción del Juez del discernimiento. No se puede argumentar con este razonamiento, porque el art. 455 que le puede servir de apoyo, no tiene ese alcance, porque la tutela ha sido establecida en beneficio esclusivo de los menores de edad que no tienen la protección de sus padres, siendo el tutor el que tiene el gobierno de la persona y bienes de sus pupilos, según lo establece el art. 377: siendo así que la necesidad de ese gobierno subsiste mientras subsista la incapacidad, independientemente de todo hecho que pueda afectar la persona del tutor, pues de lo contrario la protección acordada al incapaz perdería su carácter de permanencia. La muerte ó remoción del tutor suspende el ejercicio de la tutela, produciendo su vacancia, pero en manera alguna altera la competencia del Juez, que es el único á quien corresponde la dirección de ella hasta que cese por parte del pupilo—art. 405.

4—Art. 460, Cód. Civ.—Salvo el caso de escepción establecido en el art. 459.

1—Véase: verb. *Tutor*, núm. 1. O en los demás casos espresamente establecidos por la ley—art. 397, Cód. Civ.



U



Unico culpable—Véase: *Embargo*, núm. 6.

Universal—Véase: *Juicio sucesorio*, núm. 1.

1. Universalidad—La del juicio testamentario, da al Juez competencia para conocer en todos los incidentes que se inicien contra la sucesión, pero nó en los que ésta sea parte actora.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 89, Ser. 2º.

Uso—Véase: *Locador*, núm. 1.

Uso común—Véase: *Reivindicación*, núm. 6.

Usufructuario—Véase: *Heredero*, núm. 7.

Utilidad—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.

Utilidades—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 15—*Dependientes habilitados*, núm. 2—*Cláusula*, núm. 2—*Dependiente*, núm. 2—*Mina*, núm. 1—*Participación*, núm. 1.

1—Para entender en las demandas que se promuevan contra la sucesión, dicen los arts. 3284, Cód. Civ., y 631, Cód. de Proc.



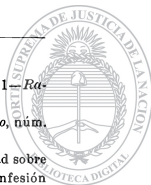
1a. Vales al portador—Se conceptúan papeles de comercio, y corresponden á esta jurisdicción, las gestiones necesarias para verificar su cobro.—Jur. Com., tom. 1º, pág. 376, Ser. 2º.

1b. Validez—Ó nulidad, de un instrumento público otorgado en el extranjero, debe juzgarse con arreglo á las formas que prescriben las leyes del país en que fué otorgado.—Jur. Com., tom. 1, pág. 240, Ser. 2º.

Validez—Véase: *Pago por consignación*, núms. 1 y 2—*Actos judiciales*, núm. 1—*Autenticidad*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 2—*Honorarios*, núm. 3—*Desaparición*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 15—*Testamento*, núms. 5 y 6—*Alimentos*, núm. 9—*Contrato de compraventa*, núm. 2—*Curador*, núm. 2—*Escrito*, núm. 1—*Inmuebles*, núm. 1—*Instrumentos públicos*, núm. 4—*Matrimonio*, núm. 3—*Matrimonio Civil*,

1a—El art. 916 del Cód. de Com. anterior, no determinaba de una manera expresa el carácter de las obligaciones al portador, y á pesar de ello, se resolvió que eran papeles de comercio, fundándose en el hecho de que el Código legisla sobre ellos. Así lo ha resuelto la S. C. de la Nación en el tom. 3, pág. 190, Ser. 1º; y tom. 8, pág. 389, Ser. 2º; S. C. de la Provincia, tom. 2, pág. 146, Ser. 1º. Esta cuestión ha dejado de tener importancia porque el Cód. de Com. vigente, coloca estos papeles entre los que son considerados como mercantiles.—Véase art 742.

1b—Regla 8 del Cód. de Com. anterior, y art. 12 del Cód. Civ.



VAL-VEN

núm. 1—*Mujer casada*, núm. 2—*Papel sellado*, núm. 1—*Ratificación tácita*, núm. 1.

Valor—Véase: *Competencia*, núm. 2—*Conocimiento*, núm. 1—*Transacción*, núm. 1.

1. Valor del robo—Cuando resulta disconformidad sobre el valor del robo entre el reo y el damnificado, la confesión del primero prevalece, si de autos no resultan justificadas las afirmaciones del segundo.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 506, Ser. 2ª.

2a. Valor del robo—La insignificancia del valor robado, no permite disminuir la pena del robo sino al término medio y en consecuencia debe ser penado el delito con dos años de prisión—Jur. Crim., tom. 1, pág. 334, Ser. 2ª.

Valor determinado—Véase: *Documento*, núm. 1.

Valor jurídico—Véase: *Cláusula*, núm. 3—*Cosa juzgada*, núm. 3.

Valor legal—Véase: *Declaraciones*, núms. 1 y 2—*Contrato de locación*, núm. 5.

Vehículo—Véase: *Homicidio*, núm. 1.

Vencido—Véase: *Costas*, núm. 3.

1. Vencimiento—El del término, dentro del cual debía cumplirse el mandato de petición de herencia, no puede ser alegado por el tercero como causa de resolución del contrato: la acción únicamente compete al mandante.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 340, Ser. 2ª.

2b. Vencimiento—El del plazo estipulado para la entrega, no basta para justificar que el comprador ha incurrido de

2a—Art. 191, Cód. Pen. vigente.

2b.—La cuestión tan debatida en derecho romano para saber si el solo vencimiento del término de la obligación constituye en mora al deudor, ha dejado de tener su importancia en nuestra legislación. En las obligaciones á término, ya no tiene aplicación el principio *dies interpellat pro homine*, pues es principio recibido que el plazo es estipulado en favor del deudor y del acreedor—art. 249, Cód.

VEN

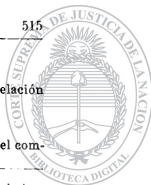
mora, solo debe declararse cuando ha habido interpelación judicial.

Vencimiento—Véase: *Pagaré*, núm. 1.

1. Vendedor—Si bien la ley le faculta para exigir del com-

Com. y 570, Cód. Civ.—Cuando no hay interpelación judicial ni resultando la interpelación de la naturaleza del contrato ni de los términos de la convención las partes contratantes no incurrir en mora.

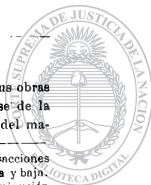
1—Esta sentencia fué dictada por mayoría de votos y revocatoria de la sentencia de 1ª Instancia en la que se resolvió lo contrario. Tres Camaristas votaron en el sentido del sumario y dos en contra. El asunto es el siguiente: Una testamentaria vende 16 leguas de campo á un precio determinado la legua. Iniciado juicio por el vendedor, sobre escrituración, el Juez de 1ª Instancia la ordena con arreglo á los boletos. Pendientes algunas dificultades que impidieron dar cumplimiento al contrato, se presenta un tercero diciendo: que mientras la sucesión vendedora seguía este juicio con el comprador, él había adquirido de dicha sucesión 49 leguas, en las que estaban comprendidas las 16 materia del pleito, habiéndose convenido de que en caso que el comprador de éstas las reclamase, pagando el precio estipulado, se obligaba á pasarle los derechos á las 16 leguas mencionadas. La venta primera fué de 16 leguas, á ubicar, habiéndose producido un cambio en la ubicación de esas tierras en virtud de leyes del Congreso, cambio que dió por resultado asignarles un alto precio. Dijo el vendedor que si el comprador quería escriturar, estaba obligado á pagar un aumento en razón del mayor valor adquirido por la cosa, y que en caso de no cumplir con ésto debía declararse disuelta la obligación de otorgar la escritura. El comprador se opuso á estas pretensiones. El principal fundamento del voto de la mayoría consistió en el art. 582 del Cód. Civ., á lo que la minoría contestó diciendo, que la pretensión del vendedor no puede apoyarse en el art. 582 del Cód. Civ., pues este artículo al referirse al mayor valor, solo tiene en cuenta los aumentos ó mejoras materiales de la cosa vendida, como se puede comprobar con la interpretación que resulta de los dos artículos que le preceden, que solo puede ocurrir sobre la materialidad de la cosa misma, y nunca á la disminución de su valor, conservándose la integridad del objeto materia del contrato. En apoyo de esta tesis pudo citarse el art. 1323 del Cód. Civ., por el cual, el precio cierto, es uno de los elementos constitutivos del contrato de compraventa, certeza que desaparecería si tuviese que determinarse al tiempo de



VEN

prador el aumento por mejores materiales que de sus obras resulte al inmueble materia del contrato, tratándose de la venta de derechos á ubicar, es procedente el pago del ma-

otorgarse la escritura, pues es bien sabido que en las transacciones comunes, el valor de las cosas tiene sus alteraciones de alza y baja. Si hubiese de tomarse en consideración el aumento ó disminución del valor de una cosa sin que ésta haya aumentado ó disminuido materialmente, hasta el momento de otorgarse la escritura, y de cuyo aumento ó disminución de valor debieran surgir derechos á favor de los contratantes, importaría autorizar la rescisión de los contratos por razón de lesión enorme ó enormísima; lo que sería contrario á la prescripción terminante del Cód. Civ. que hace inadmisibles la rescisión de los contratos por esa causal. En el caso presente, la obligación contraída por el vendedor pasó al comprador de las cuarenta y nueve leguas como una obligación de hacer—art. 625, Cód. Civ.—debiendo éste escriturar las 19 leguas, en caso de exigirle el comprador y en tal virtud debe tenerse presente que las convenciones forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma. La mayoría de la Cámara, cuyo voto sirvió de fundamento al sumario, argüía diciendo: Que sin entrar á estudiar si el contrato importó en su origen un verdadero contrato de compraventa ó solo una cesión de derecho, es lo cierto que apremiado el comprador para la escrituración y habiéndosele señalado al efecto el término de diez días, se presentó al Juzgado manifestando sus temores respecto á la evicción de la cosa vendida: Que durante esta cuestión se resolvió ubicar las tierras en otro lugar, cambio que resultó enteramente favorable para el precio de la cosa vendida. Para fijar los derechos y obligaciones reciprocas, es necesario averiguar ante todo qué es lo que se ha vendido. Lo que reclama el comprador no es la tierra misma con la presunta ubicación primitiva, sino los derechos á ella, es decir, el derecho á ubicar las 16 leguas: Que en virtud de la nueva ubicación, se ha establecido un nuevo derecho á favor del vendedor, una mejora bien material, como que por ella en su calidad de poseedor de un título de tierras situadas en una parte, adquiere otra con distinta ubicación en carácter de *indemnización*, demostrándose así que se trata de una mejora material. Ese nuevo derecho, esa verdadera mejora, esa indemnización, ese aumento de la cosa vendida, corresponde al vendedor, que no ha escriturado, en razón del precepto de que antes de la tradición de la cosa vendida, no adquiere el comprador derechos reales sobre ella—art. 577 del Cód. Civ.—y de la terminante prescripción de los arts. 582 y 1416, que adoptando el



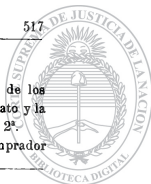
VEN

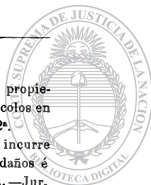
por valor que hayan adquirido los derechos por actos de los poderes públicos producidos entre la fecha del contrato y la de su escrituración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 473, Ser. 2°.

2. **Vendedor**—No está obligado á entregar al comprador

principio romano *res perit domino* en toda su amplitud, y separándose de las leyes de Partida—nota al art. 578—declara que si la cosa se hubiese mejorado ó aumentado, aunque no fuese por gastos que en ella hubiese hecho el deudor, podrá éste exigir del acreedor un mayor valor, y si el acreedor no se conformase, la obligación quedará disuelta: Que por estas consideraciones debe resolverse, haciéndole saber al comprador que debe declarar si acepta la compra en las condiciones en que se encuentran las tierras y los títulos ó si desiste de ella; y caso afirmativo, si está dispuesto á pagar el mayor precio de la cosa, fijado en cinco mil pesos por legua, bajo apercibimiento de declararse disuelta la obligación. Tales son los fundamentos de una de las sentencias más injustas que registra la jurisprudencia de los Tribunales. No hay un solo argumento de peso y sus consideraciones no resisten el más ligero análisis. Con efecto, cuando se dice que *ese nuevo derecho, esa verdadera mejora, esa indemnización*, ese aumento de la cosa vendida, corresponde al vendedor que no ha escriturado, en razón del precepto de que antes de la tradición de la cosa vendida, el comprador no adquiere sobre ella derechos reales, es argumentar con un verdadero absurdo. Esta afirmación no merece demostrarse: baste decir que los contratos que versan sobre bienes raíces, cuando son hechos bajo forma privada son considerados como obligación de hacer, y si el obligado no cumple, debe indemnizar los daños y perjuicios: en esta indemnización se incluye el mayor valor que la cosa hubiese adquirido, la que debe ser abonada por el vendedor al comprador: esto es elemental en derecho, y sin embargo la Cámara invierte el orden. En vez de consagrar la obligación de indemnizar al comprador, se establece que esa indemnización es debida al vendedor. La Cámara no ha encontrado argumentos en que fundar su injusto fallo, y ha apelado á sofismas. No encontrando ley en que fundarlo se ha basado en la equidad, que en este caso se convierte en una verdadera injusticia.

2—Basta indicar el protocolo en que se encuentran para que allí puedan verse por los interesados. El vendedor debe exhibir el título que justifique su dominio, y si los interesados desean tener los anteriores pueden sacarlos á su costa con las formalidades de ley.





VEN

testimonio de todas las escrituras de transmisión de la propiedad, siempre que existan las referencias á los protocolos en que hayan pasado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 302, Ser. 2ª.

3. Vendedor—Que no entrega la cosa vendida, incurre en mora, y es en consecuencia responsable de los daños é intereses, pero solo desde la fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 437, Ser. 2ª.

Vendedor—Véase: *Contrato*, núm. 2—*Evicción*, núm. 2—*Citación*, núms. 1 y 2—*Demanda*, núm. 1—*Bienes*, núm. 3—*Comprador*, núms. 5, 6 y 8—*Contrato de locación*, núm. 5—*Contrato de compraventa*, núm. 1—*Area determinada*, número 1—*Títulos*, núm. 7—*Venta*, núm. 4.

Venia judicial—Véase: *Nulidad*, núm. 3—*Personería*, núm. 1.

1a. Venia marital—Para hipotecar un bien determinado, importa facultad para proceder á su venta.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 137, Ser. 2ª.

Venia marital—Véase: *Esposa*, núms. 1 y 2—*Nulidad ó validez*, núm. 1.

1. Venta—Y cesión de acción indeterminada, importa también la de las personales inherentes al dominio, y en consecuencia, el cesionario puede pedir la rendición de cuentas al administrador, discutiendo conjuntamente las cuestiones sobre propiedad que surjan de la acción instaurada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 254, Ser. 2ª.

2. Venta—Permitida la de un bien perteneciente á meno-

3—Arts. 508, 509, 576 y 1423, Cód. Civ.

1a—Está en contra de lo preceptuado en el art. 1883 del Cód. Civ., el que establece que el poder para hipotecar, no comprende el poder para vender. Pero así es la Cámara, no respeta la ley: su voluntad es ley para los litigantes. Si la ley no confiere esa facultad, la Cámara se la dá, y ningún recurso queda, pues no hay apelación.

2—La Cámara dijo que no se había demostrado que circunstancias posteriores hubiesen hecho ver la utilidad que reportaría al



VEN

res, con un objeto determinado, no puede darse á su producido distinta inversión que la propuesta.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 332, Ser. 2ª.

3. Venta—La facultad de vender todos los bienes de una herencia, ó las acciones ó derechos hereditarios sin limitación alguna de tiempo, antes ó después de haberla recibido, implica la facultad de cederlos á título oneroso.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 456, Ser. 2ª.

4. Venta—Por un precio total, de una área determinada, compuesta de distintas fracciones cuya extensión se fija en las primeras. obliga al vendedor á integrar en la última la cantidad total vendida si le fuere materialmente imposible la entrega de alguna de las fracciones de extensión determinada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 437, Ser. 2ª.

Venta—Véase: *Remate público*, núm. 1—*Jurisdicción comercial*, núm. 2—*Comprador*, núm. 2—*Demanda*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 1—*Heredero*, núm. 3—*Pelición*, número 1—*Citación*, núm. 2—*Contrato*, núm. 6—*Condómino*, núm. 1—*Derechos posesorios*, núm. 1—*Bienes de menores*, número 1—*Comprador en remate*, núm. 2—*Condominio*, núm. 1—*Inmueble*, núm. 1—*Precio*, núm. 2.

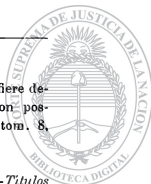
1. Venta de cosa aiena—No puede calificarse de tal,

menor, destinando los fondos para un objeto distinto del proyectado.

3—El poder contenia, entre otras, la siguiente cláusula: «lo autoriza igualmente para vender los intereses, derechos y acciones que á la otorgante le correspondan en dicha sucesión.» La venta de bienes, derechos y acciones hereditarios, no viene á ser otra cosa que una cesión á título oneroso—art. 1435, Cód. Civ.—Lo preceptuado en el art. 1887, no es de tenerse en cuenta aquí. La autorización para vender implica en este caso la de ceder á título oneroso.

4.—Véase: verb. *Área determinada*, núm. 1.

1—La nulidad de la venta de cosa aiena, queda cubierta cuando el vendedor ulteriormente hubiese venido á ser sucesor del propie-



VEN—VER

aquella que perfectamente determinada, no se transfiere definitivamente por no tener las escrituras, pero que con posterioridad se adquieran por el vendedor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 437, Ser. 2ª.

Venta en pago—Véase: *Entrega*, núm. 2.

Ventas—Véase: *Firma del comprador*, núm. 1.—*Titulos de propiedad*, núm. 2.

1. Ventas ad corpus—Cuando éstas se estipulan hasta un límite perfectamente determinado, se entiende que el límite no se encuentra comprendido en la venta.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 2ª.

Veracidad—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1.—*Testigos*, núm. 10.

1a. Verificación de créditos—El acreedor prendario, no está obligado á concurrir á la verificación de créditos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 469, Ser. 2ª.

2. Verificación de créditos—En los incidentes que por esta causa ocurran, no tienen personería para intervenir los acreedores: solo es parte el Síndico.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 2ª.

3. Verificación de créditos—Los acreedores solo pueden

tario de la cosa vendida—art. 1330, Cód. Civ.—Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Comprador*, núm. 9.

1a—La disposición del art. 1599 del Cód. de Com. anterior, prescribe que el Juez Comisario convoque á todos los acreedores personales ó privilegiados, pero de su contenido no resulta que los que tienen sus créditos garantidos con hipoteca ó prenda, tengan obligación de concurrir á la verificación. El hecho de ser convocados á junta se explica, si es que desean reclamar de la masa cuando la prenda ó la hipoteca no alcance á cubrir sus créditos. Es facultativo de estos acreedores concurrir ó no á la verificación segun convenga á sus intereses.

2—Art. 1612, Cód. de Com. anterior. Con citación y audiencia de Síndicos, dice este artículo.

3—Un acreedor pretendió que se suspendieran los efectos de una sentencia recaída en el incidente sobre verificación. Se resolvió

VER—VID

objetar los créditos, en el acto de la verificación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 2ª.

Verificación de créditos—Véase: *Incidente*, núm. 3.

Vía—Véase: *Servicio público*, núm. 1.

Viajeros—Véase: *Perjuicios*, núm. 1—*Servicio público*, núm. 1.

1a. Vicios—Tratándose de los de fácil subsanación, no procede el desistimiento del comprador.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 435, Ser. 2ª.

2. Vicios—En el procedimiento contra el rebelde, no bastan para declarar de oficio la nulidad.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 20, Ser. 2ª.

Vicios de procedimiento—Véase: *Nulidad*, núm. 11.

1. Víctima—Carece de personería, cuando no se muestra parte en el juicio criminal, para intervenir en el incidente sobre escarcelación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 163, Ser. 2ª.

Víctima—Véase: *Alevosía*, núms. 1 y 3—*Carácter público*, núm. 1—*Delito*, núm. 3—*Circunstancia agravante*, número 1—*Tentativa de asesinato*, núm. 1—*Término medio*, núm. 2—*Indemnización*, núm. 3—*Discusión*, núm. 1—*Homicidio*, núms. 1 y 6—*Provocación*, núm. 1ª.

Vida civil—Véase: *Inhabilitación*, núm. 1.

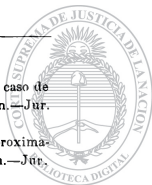
que esa suspensión no era procedente, pues nadie puede pretender tomar parte en un juicio ya sentenciado. En el incidente sobre verificación, el Juez y el Síndico hacen las veces de los acreedores: y así como los acreedores que no hayan asistido á la primera reunión no tienen derecho á objetar la legitimidad de los créditos ya inscriptos en la lista—arts. 1606 y 1609, Cód. de Com. ant.—tampoco pueden ser admitidos los acreedores que se presenten á objetarlos después de la sentencia que los declara verificados.

1a—Cuando los títulos tienen defectos fáciles de subsanar, no es de aplicarse el art. 522 del Cód. de Proc. De acuerdo con lo resuelto en otros casos.—Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Títulos de propiedad*, núm. 8.

2—La Cámara no sentó como absoluto este principio: solo dijo que la circunstancia apuntada no implicaba un vicio de nulidad.



VIN—VOL



1. Vindicta pública—Siendo ella la ofendida en caso de heridas inferidas en riña, no procede la compensación.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª.

1a. Violación—Para que exista, basta la simple aproximación sexual, aunque no se consuma la disfloración.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 120, Ser. 2ª.

2. Violación—De domicilio, el reo debe ser penado por este delito, aun cuando la tentativa de robo no se encuentre debidamente justificada.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 290, Ser. 2ª.

3. Violación—Si bien el reo puede justificar que no tuvo intención de apropiarse del dinero de que se apoderó, debe ser castigado por la violación de domicilio, que independientemente también constituye otro delito.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 392, Ser. 2ª.

Violencia—Véase: *Interdicto de despojo*, núm. 1—*Interdicto de recuperar*, núms. 3 y 4—*Hurto*, núm. 2—*Reo*, núm. 1.

1. Virginitad—Su falta, en una menor, solo debe tenerse en cuenta cuando se juzga el estupro.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 157, Ser. 2ª.

Viuda—Véase: *Casamiento*, núm. 1—*Comprador*, núm. 7.

Viudo—Véase: *Inventario*, núm. 2.

1b. Voluntad criminal—Es presunción de derecho, y por lo tanto corresponde al autor de las heridas que ocasionaron la muerte, probar que fueron inferidas sin intención de matar.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 364, Ser. 2ª.

Voluntad de matar—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 2.

Voluntad del vendedor—Véase: *Tercería de dominio*, nº 1.

Voluntad homicida—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 4.

1a—Art. 252 del Cód. Pen. anterior. El 253 establece que la violación se presume en una menor de doce años.

2—Véase: verb. *Robo*, núm. 2.

1b—Véase: Inst., verb. *Voluntad criminal*, núms. 2718, 2719 y 2720.

